IRENE RODRIGUEZ GALLAD
FRANCISCO YANEZ

CRONOLOGIA IDEOLOGICA DE LA NACIONALIZACION PETROLERA EN VENEZUELA



A la memoria de Salvador de la Plaza, pionero de la Nacionalización de las Industrias Básicas en Venezuela.

Este libro forma parte de la investigación que acerca de la problemática del petróleo en Venezuela se realiza, bajo la coordinación del doctor Héctor Malavé Mata, en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

IRENE RODRÍGUEZ GALLAD
FRANCISCO YÁNEZ

Cronología Ideológica de la Nacionalización Petrolera en Venezuela

Caracas / 1977

PREAMBULO

Desde la discusión del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos (1971) hasta la sanción de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (1975), el debate en torno a la alternativa de la reposeción petrolera en Venezuela quedó registrado en los *Diarios de Debate* de las dos Cámaras del Congreso de la República y en las páginas de los principales periódicos capitalinos. Ambas fuentes son de consulta imprescindible para la elaboración de la secuencia de opiniones e informaciones expresadas acerca de los diversos y controvertidos aspectos del proceso nacionalizador. La primera de las fuentes mencionadas, por atesorar únicamente las intervenciones parlamentarias a propósito de la controversia en torno a ambos proyectos de leyes, es más prolija en cuanto al desarrollo y el contenido de las exposiciones efectuadas sobre la materia, pero más limitada o parcelaria en tanto no registra, como lógicamente lo impone su naturaleza, los juicios e ideas que sobre el mismo asunto fueron también expresados a la opinión pública por instituciones, organizaciones, gremios y personalidades no vinculados formalmente a la actividad legislativa. La segunda de las fuentes citadas, por presentar regularmente una síntesis de las diferentes intervenciones en el Parlamento y a la vez suministrar otras tantas emanadas fuera del ámbito congresional, sirvió como casi elemento exclusivo de consulta para la laboriosa confección del censo de opiniones consignado, con criterio cronológico, en esta obra de relevante interés documental. El acopio hemerográfico, que es prenda invalorable en la reconstrucción del pulso cotidiano de los hechos, se empleó aquí para eslabonar acontecimientos y opiniones al paso de los días, los meses y los años en el curso de un proceso que, como el antes aludido, mal puede discernirse sin recurrir al mensaje de la palabra impresa.

Esta obra, *Cronología Ideológica de la Nacionalización Petrolera en Venezuela,* es, tal como ha sido concebida, más de carácter testimonial que interpretativo. Su título, sin ser tal vez demasiado riguroso, sugiere la inteligencia de un empeño que ha querido inscribir en el período de cinco años (1971-1975) el resumen de las opiniones emitidas —con motivo de la polémica librada durante el mismo lapso sobre la reversión y la nacionalización petroleras— por voceros de los gobiernos, partidos políticos, compañías concesionarias extranjeras, confederaciones de trabajadores, federaciones patronales, gremios profesionistas, movimiento estudiantil, organismos de presión, y por personalidades con juicios propios o encomendados, además de algunas opiniones e informaciones internacionales que reflejan en una u otra forma la posición que al respecto mantenían las corporaciones transnacionales involucradas en tales acontecimientos. De allí el amplio espectro de argumentos y criterios compilados en el libro.

En cada página suya hay una fracción de tiempo, un acento sobre determinado interés o compromiso, una o varias opiniones en ratificación o negación de otras expresadas a tenor respectivo. No pocas negaciones o afirmaciones, aún así, quedan sin demostración cuando son enunciadas. En algunos casos, es fácil advertir pronósticos no fundados; en otros, redibujos con insistencia. Los autores han omitido el comentario o la glosa porque sólo han querido presentar el significado de las opiniones por sí mismas. En esto consiste la importancia que a la propia obra le confiere la interpretación valorativa de su contenido. No extrañe al lector los juicios redundantes o reiterativos, ni tampoco las apreciaciones originales. Menos extrañe todavía que aquéllos, en mayor número que éstas, recorran un buen trecho del libro, pues la ideología del petróleo parecía extenuarse mientras más fuerza adquirían las expectativas por los hechos. Se advertirá una copiosidad de predicamentos y razones, muchos expresados en tono controversial o coincidente, y a veces en sucesión de críticas y réplicas, según fuese la concepción o militancia de sus emisores, aunque, por responsabilidad sólo imputable a la conveniencia editorial de los medios comunicacionales, las opiniones acerca de esos acontecimientos lucen siempre repartidas sin equidad entre los planteamientos gubernamentales y los argumentos de la oposición. De tal suerte, la obra, que ha sido elaborada con la única intención de rescatar hemerográficamente aquellos enfoques que más definen las fronteras ideológicas en torno a la opción petrolera, constituye también una evidencia del tratamiento parcializado y discriminatorio que confieren los principales ór-

ganos de la "gran prensa" a toda disidencia de la razón proclamada por los poderes establecidos.

En este libro, donde abundan más las datas que los datos, el vasto texto de la cronología está precedido del ensayo titulado "Proceso de la Nacionalización Petrolera en Venezuela", escrito por la profesora Irene Rodríguez Gallad en una perspectiva que armoniza el discernimiento de los aspectos esenciales del tema con las exigencias del resumen crítico, abordando, desde los efectos de la industria concesionaria de hidrocarburos en la estructura socioeconómica del país hasta las distintas modalidades propuestas como alternativas de ese tipo de explotación, el examen del pettróleo cual fuente generadora de los desequilibrios, enajenaciones y conflictos que han afectado no pocos órdenes de la vida nacional. En atención al curso cronológico de la compilación, la autora realiza una interpretación a grandes rasgos de la Ley de Reversión Petrolera, intentando precisar de esa manera el antecedente más inmediato de la nacionalización de tal industria, para luego referirse, según su propia conclusión del debate sobre esta materia, al polémico aspecto relacionado con la posible participación del capital privado en las operaciones de la industria nacionalizada. En tal sentido destaca las razones en que fundábanse las dos tesis contrapuestas: la de quienes, por una parte, exponían la necesidad de una nacionalización integral favorecida por una serie de factores internos y externos, y la de quienes, por otra, aducían que el capital privado debía participar en las actividades de la explotación nacionalizada, subestimando así la competencia del Estado venezolano para operar a título directo y exclusivo la principal industria del país. El libro, tenido por registro de esas y otras opiniones en sucesión del tiempo, requería un estudio introductorio que, como este a que aludimos, presentara una síntesis inteligible del citado proceso.

Esta *Cronología,* única en su tipo publicada hasta ahora en el país, constituye un valioso aporte bibliográfico para el análisis de las ideas esgrimidas en el curso del debate nacional ya mencionado. Ha sido elaborada como tarea del proyecto "El Petróleo en Venezuela Contemporánea", adscrito al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Sus autores, Irene Rodríguez Gallad, historiadora dedicada especialmente a la historiografía venezolana del petróleo, y Francisco Yánez, técnico de investigación al servicio del mismo Instituto, han requerido varios meses de cuidadosas lecturas y colaciones de *El Nacional, El Universal, Punto,*

El Mundo, Al Cierre y *Tribuna Popular,* órganos de diferentes tendencias del periodismo impreso venezolano que fueron sistemáticamente consultados como fuente principal del acervo informativo sobre la materia. Con esta y muchas otras obras queda ratificado una vez más que la Universidad es la institución que mayores esfuerzos realiza por la interpretación de Venezuela.

HÉCTOR MALAVÉ MATA

Caracas, Ciudad Universitaria, noviembre 1977.

PROCESO DE LA NACIONALIZACION PETROLERA EN VENEZUELA

No existe a escala mundial un país donde el petróleo, si es explotado bajo el control exclusivo o predominante del capital monopolista internacional, no opere como fuente generadora de contradicciones y conflictos. La historia universal contemporánea ofrece interpretaciones y testimonios elocuentes que no sólo confirman la exactitud de esta aserción, sino que ilustran además cómo tales conflictos y contradicciones, dimanantes del carácter capitalista de la propia explotación, han perturbado todas las instancias económicas y sociales de los países que producen esa materia prima bajo el régimen neocolonial de concesiones.

Venezuela, importante productor y exportador de ese recurso, no constituye en tal sentido la excepción. Después que, en el contexto de la llamada economía de enclave, se inició en el país la explotación del petróleo por capitales angloamericanos, comenzaron a producirse en su estructura económica algunos cambios que luego acentuaron el curso de sus contradicciones sociales y políticas. El petróleo, ya erigida su industrialización en factor de crecimiento y modernización aparente, se fue tornando en fuente de deformación y mayor dependencia. Así, la Venezuela del presente siglo, signada por el desarrollo y las características extractivas de aquella actividad, no podía escapar entonces a los trastornos y las relaciones de subordinación estructural generados por la dinámica de una explotación que más acataba a la estrategia de transnacionalización del enclave petrolero que a las exigencias de desenvolvimiento de la economía interna.

En el orden de los contrastes se hacía ostensible en el país el acelerado crecimiento urbano frente al retraso de vastas áreas rurales. En algunas de éstas —las más fértiles y mejor localizadas— evolucionaba el llamado capitalismo del campo, que ampliaba más los límites de concentración de la propiedad territorial agraria, con absorción de fuerza

de trabajo limitada por la técnica de producción empleada, y con desplazamiento de una mano de obra subcalificada que emigraba a las ciudades en busca de mejores condiciones vitales. La Reforma Agraria, que fue más tarde sancionada e implementada conforme al estatuto de dominación social vigente, resultó frustrada porque prácticas de colonización y débil reformismo, en su lugar, desvirtuaron su esencia, y grandes masas de campesinos devinieron desvalidas y marginadas por el sistema de tenencia legitimado de tal suerte.

Los rasgos y relaciones dependientes, así forjados, han caracterizado a Venezuela como un país de economía interiormente desequilibrada, básicamente monoexportador y de elevado comercio importador. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, iniciado sin protección a los intereses auténticamente nacionales en la década de los años cincuenta, ha sido absorbido y usufructuado casi en su totalidad por capitales de gigantescas corporaciones multinacionales, hasta el punto que desde entonces hasta la actualidad no se haya conocido sector de la economía venezolana —agricultura, industria, comercio, banca, servicios...— donde no se destaque la presencia de esos capitales, cuya gestión, las más de las veces, no ha tenido por objeto fecundar la base productiva del país, sino transferir al exterior el excedente de explotación obtenido localmente.

Durante muchos años la industria petrolera ha constituido la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. La renta del subsuelo, para decirlo en términos no estrictamente fiscales, ha representado el recurso tributario más importante que la nación, por razones vinculadas con el comportamiento del poder gubernamental, ha aplicado no siempre con criterio económicamente reproductivo. Tales ingresos, que han conformado el mayor componente del presupuesto público, han sido administrados generalmente conforme a una tendencia más próxima al dispendio que a la capitalización, más cercana al consumo improductivo que a la reproducción del capital.

La orientación tradicionalmente clasista del gasto público ha determinado en cierto modo crecientes desniveles de participación entre la burguesía beneficiaria del capital que ha absorbido la mayor parte de esas rentas, y una mayoría nacional que ordinariamente ha percibido una estrecha remuneración por su fuerza de trabajo. Por tal razón puede luego afirmarse, en breve consideración de la estructura social venezolana, que la administración de los proventos petroleros fiscales, dada la

inequitativa distribución del ingreso y la riqueza existente en el país, ha contribuido a ensanchar cada vez más las brechas de diferenciación de clases. En la cúspide de la pirámide social se ha alojado una burguesía multiforme (industrial, comercial, financiera) que detenta un poder económico, político y social acrecentado sin pausas ni interrupciones. Asimismo se advierte la presencia de una clase terrateniente que es dueña de grandes extensiones productivas e improductivas. En la base se ubica la clase obrera que no es tan numerosa si se la compara con las grandes capas marginales desalojadas o no absorbidas por las funciones de producción y consumo de la sociedad formalizada. En un nivel inferior a la clase obrera se localiza el campesinado empobrecido, con muy pocas oportunidades de empleo y un precario nivel de subsistencia. Existe además un importante sector que constituye la mayor parte de la población consumista: se trata de la llamada clase media, que no es orgánicamente propietaria de medios de producción ni es fuerza de trabajo explotada en sentido estricto, pero es surtidora de la demanda de empleos de la burocracia estatal, consume en escala considerable tanto la producción de bienes nacionales como las mercancías de importación masiva, dedicándose, entre otras actividades, a las denominadas profesiones liberales.

La importancia de la actividad petrolera se ha reflejado también en el ordenamiento político de la sociedad venezolana. De esta manera la explotación de ese recurso ha influido considerablemente en la conducta de los distintos regímenes políticos que han actuado en el curso del siglo veinte venezolano. La misma actividad ha sido factor —en cierto modo determinante— de instauración y desplazamiento de gobiernos, alienando, casi sin excepción, el comportamiento de los poderes públicos a los requerimientos de los inversionistas e ideólogos de esa industria con la connivencia de la burguesía gestora de la misma. Como derivación de ese orden político, los gobiernos, no siempre con distintas posturas, pocas veces han actuado para reducir efectivamente las desigualdades que más han separado cada vez a las masas desposeídas de la clase usufructuaria de la riqueza petrolera.

Venezuela no es por cierto un país sin grandes paradojas. Los ingresos generados por la industria del petróleo han sido un factor de crecimiento económico que en cierta forma ha hecho nugatorio el curso de su desarrollo. Por eso, en nuestro caso, algunos autores han hablado de un país en "crecimiento sin desarrollo". La poca democratización del gasto público ha convertido la renta petrolera en fuente de enri-

quecimiento de la clase que detenta el poder económico. Comparativamente ha sido poca, como hemos dicho, la participación de la población mayoritaria en el reparto nacional de esa renta. Entre ambos polos de la comunidad venezolana ha mediado una brecha cada vez mayor ocasionada por la indivisión social de los frutos del crecimiento.

No ha sido el petróleo en sí, como a veces ha querido interpretarse, la causa de los desajustes y perturbación de la sociedad venezolana contemporánea, sino el estatuto económico de su explotación y el comportamiento de los factores que han detentado su control y administración. Esa materia prima, de cuya explotación han derivado cuantiosos beneficios las empresas concesionarias extranjeras y el Fisco Nacional, ha podido constituir un elemento mejor aprovechado para el desarrollo económico y social del país. Como riqueza bien orientada y justamente distribuida se hubiese convertido en el factor más eficaz para alcanzar un desarrollo menos desigual y dependiente. Es innegable entonces que las formas y relaciones de explotación del petróleo han sido generadoras de la mayor parte de los desequilibrios y conflictos en la sociedad venezolana, los cuales se han acentuado y diversificado en la misma medida que esa industria ha aumentado sus niveles de repercusión económica, política y social en la vida contemporánea del país.

A fines de la segunda década del presente siglo comenzó a adquirir importancia la actividad petrolera en la economía venezolana. Esa industria, establecida bajo régimen de concesiones, era manejada y controlada exclusivamente por compañías foráneas en todas sus fases y operaciones. Su evolución muestra el carácter casi pasivo del Estado venezolano con respecto al dominio ejercido por aquellas empresas transnacionales, limitándose la nación a percibir los ingresos que éstas pagaban como impuestos y otras obligaciones tributarias. La intervención del Estado consistía principalmente en regimentar la vía de mayor eficacia para establecer la carga impositiva de esa explotación. Los ingresos percibidos de la industria petrolera, como hemos señalado, no se orientaban, al menos en la medida necesaria, hacia la ampliación y el fortalecimiento de la base económica, sino en gran parte hacia sectores poco productivos mediante la erogación de cuantiosas masas de gastos corrientes, manteniéndose así casi invariable la sujeción de los sectores dinámicos de la economía respecto de aquella actividad extractiva. La ejecución presupuestaria de la renta petrolera, no orientada precisamene a la forjación de una economía sucedánea del petróleo, apenas creaba en el país algunas franjas de crecimiento que respondían a

los intereses específicos de grupos o estratos que usufructuaban los privilegios del poder económico establecido.

La práctica de algunas leyes aprobadas con cierta orientación nacionalista no logró convertirse en acción eficaz para restar dominio al capital monopolista extranjero que crecía en el país con la explotación de los hidrocarburos. La Reforma Petrolera de 1943, la participación fiscal según la fórmula del fifty-fifty, *la política de "no más concesiones", el decreto Sanabria de diciembre de 1958, la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), las leyes que reservan al Estado la industrialización del gas natural y el control del mercado interno de los hidrocarburos, y la fijación unilateral de los precios del petróleo, constituyeron hechos importantes que en su mayoría permitieron un aumento de la participación del Estado en los beneficios petroleros, pero en ningún momento pueden considerarse como medidas que redujeron efectivamente el control y poder de decisión de las corporaciones foráneas sobre la actividad de los hidrocarburos.*

Los distintos gobiernos de Venezuela contemporánea han dedicado, no siempre con igual esmero, atención a la materia petrolera, pero inspirados no en una concepción de su auténtico rescate. Durante ninguno de esos gobiernos, por el contrario, dejaron las empresas concesionarias de usufructuar derechos y prerrogativas que les garantizaban el dominio casi absoluto del principal producto de exportación del país. En éste no pocas veces se han planteado discusiones a nivel nacional donde representantes de partidos políticos de diferentes tendencias han querido atribuirse la paternidad de decisiones vinculadas, según los principios e intereses respectivos, con acciones de verdadero rescate del recurso. Casi siempre el balance de esas discusiones ha arrojado supuestas atribuciones o autorías que teóricamente superaban el alcance de las realizaciones efectivas.

Una cosa parece sin embargo indiscutible. A pesar de las leyes y reglamentos que han regido la actividad petrolera, el país ha soportado por efecto de los factores exógenos de esa misma industria, relaciones acrecentadas de dependencia respecto de los centros capitalistas mundiales. Venezuela es —comparativamente con el resto de los países latinoamericanos— uno de los mayores receptores de inversiones foráneas. Por esta razón, con todas las medidas tomadas por los distintos gobiernos en materia de hidrocarburos, las empresas concesionarias jamás dejaron de transferir crecientes beneficios a sus países de origen, ago-

tando simultáneamente el recurso subyacente por el ritmo excesivo y el carácter irracional de la explotación a que era sometido permanentemente.

En torno a la cuestión petrolera no se dejaron de formular proposiciones diversas que definían la forma de ejercer las operaciones y el control de la industria: bien en manos de compañías privadas, a través de empresas mixtas o por medio de la acción directa del Estado. Así puede apreciarse que a raíz de la aprobación hecha por el Congreso Nacional en 1948 de la política de "no más concesiones", ratificada después por el gobierno de Rómulo Betancourt en 1959, comenzaron a buscarse fórmulas sustitutivas del régimen concesionario no sin el pedimento y la presión del sector privado de la economía. Se habló, en ese sentido, de los contratos de servicio, que fue al término la modalidad escogida para sustituir el régimen legal de concesiones hasta entonces vigente, así como de la venezolanización de la industria, de las empresas mixtas y de la nacionalización integral de la actividad petrolera. Es necesario explicar, aun cuando sucintamente, el fundamento de cada una de esas modalidades para captar luego sus diferencias o establecer sus aproximaciones.

Con el sistema de concesiones las compañías adquirían un derecho real inmueble sobre las áreas otorgadas por un período de cuarenta años. De esta forma los concesionarios podían explotarlas directamente o traspasarlas a otras empresas. Dentro de los cánones de ese sistema, las compañías eran propietarias del 66,33 por ciento del petróleo extraído del subsuelo, mientras que el 16,66 por ciento restante correspondía a la nación. Esta última participación ha sido denominada regalía *o impuesto de explotación, el cual ha constituido más exactamente una modalidad de ingreso fiscal proveniente de la venta de un activo nacional, antes que un gravamen impositivo de las compañías petroleras, como han querido considerarla algunos autores y el propio Estado venezolano.*

Se han determinado algunas diferencias entre el régimen concesionario y los contratos de servicio. En éstos se establecía la duración de la explotación hasta 25 años, y los derechos adquiridos por las empresas contratistas no podían ser traspasados a terceros sin la autorización del gobierno nacional, representado por la Corporación Venezolana del Petróleo. Quedaba consagrada, conforme a esta nueva modalidad, la llamada participación operativa, en virtud de la cual la empresa estatal (CVP) estaba en facultad de intervenir en operación conjunta con la contratista. Mas, a pesar de las variantes entre un régimen y otro, la

esencia de ambos consistía en la incorporación de capitales y factores extranjeros en la explotación de los hidrocarburos. Entre uno y otro existían más diferencias de forma que diferencias esenciales. Por eso, bien los ha calificado Salvador de la Plaza al expresar que los contratos de servicio no eran más que "concesiones disfrazadas". Tales contratos implicaban, en cierto modo como la concesión, la renuncia del Estado a controlar directamente la industria petrolera, reafirmando la presencia de consorcios internacionales en la explotación y comercialización del recurso.

Otra de las modalidades propuestas en torno al manejo de la industria petrolera era la llamada venezolanización, interpretada como la entrega a los grupos económicos dominantes del país el control de esa actividad. Esto evidentemente no podía convenir al interés nacional por cuanto sólo hubiera beneficiado a la burguesía industrial comprometida de modo subsidiario con el capitalismo monopolista internacional. La fórmula de las empresas mixtas, que ha estado planteada a raíz de la celebración de los contratos de servicio con las compañías concesionarias, ha previsto la participación del capital privado conjuntamente con el capital público en la explotación y comercialización del petróleo. Esta alternativa ha sido propuesta principalmente por quienes aducen la incapacidad del Estado para asumir totalmente el control de la actividad de los hidrocarburos. Manuel R. Egaña, entre quienes han postulado esa fórmula, reiteraba en varias oportunidades que la intervención del Estado en el negocio petrolero a través de compañías mixtas constituía la alternativa más conveniente para la nación, reservándose aquél el poder de decisión sobre la industria. Egaña fundaba sus razones en los obstáculos y rémoras del "monstruo burocrático" alimentado en nuestro país por el crecimiento desordenado de la maquinaria administrativa de la gestión pública.

La alternativa más avanzada en relación con las mencionadas anteriormente era, pues, la de la nacionalización integral de la industria petrolera. El planteamiento de que debía ser abolido el régimen de concesiones y que, en consecuencia, el Estado debía controlar directamente ese sector de la economía no era sin embargo reciente. Desde la década de los años treinta tal alternativa fue expuesta ante el país por venezolanos y partidos políticos de oposición con ideología antiimperialista. Ello respondía fundamentalmente a la tesis de que el Estado venezolano debía participar de manera activa y directa en la dirección de la economía, desplazando así al capital privado extranjero que controlaba sectores estratégicos de la producción nacional, derivando de ello cuan-

tiosas ganancias sin aportar beneficios equivalentes al país. Quienes han deplorado la pérdida de la soberanía nacional a través del sistema neocolonial de concesiones, han invocado en cambio el rescate de esa soberanía con la nacionalización integral de la industria de los hidrocarburos.

En Venezuela, desde que comenzó la explotación del petróleo hasta la década de los años setenta, la situación de la industria permaneció casi invariable. Fue a partir de 1971 cuando el debate sobre la cuestión petrolera adquirió mayor importancia y audiencia, en tanto comenzaron a plantearse con carácter definitivo modalidades de explotación distintas al régimen concesionario. En 1971, año de gran significación en la historia petrolera nacional, fue presentado por un grupo de parlamentarios de izquierda un proyecto de ley que, aprobado luego por las cámaras legislativas, reglaba la reversión de la industria de hidrocarburos al vencimiento en 1983 de las concesiones otorgadas en 1943 y 1946 por el Estado venezolano a las empresas extranjeras. La motivación esencial de la denominada Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos se fundaba en el hecho de que, conforme al artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos vigente, la mayor parte de las áreas otorgadas a las compañías concesionarias debía revertir a la nación sin pago de indemnización. Era necesario entonces implementar un estatuto legal que garantizara la reversión en buenas condiciones de los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, con el objetivo básico de que el Estado pudiera continuar con eficiencia las operaciones de la actividad petrolera.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Reversión se advertía claramente que el fin de la misma no era el de establecer ese derecho por cuanto ya había sido consagrado en la legislación venezolana sobre la materia. Los defensores del proyecto explicaron con insistencia y amplitud que por constituir la industria petrolera una actividad económicamente integrada, todos los bienes requeridos para su total y eficaz funcionamiento debían revertir junto con el derecho real inmueble otorgado en concesión, sólo que esto no había sido reglado antes y conducía a que las empresas concesionarias asumieran actitudes y ejecutaran actos que no convenían a los derechos que tenía la nación sobre el recurso explotado. Se necesitaba consagrar en tal caso un régimen de control, vigilancia y mantenimiento de los bienes incorporados a las concesiones de hidrocarburos, para asegurar que en el momento de su reintegración al Estado estuvieran en adecuadas condiciones de funcionamiento y operatividad. El propósito del proyecto de Ley era claro y

preciso en la letra de la exposición de motivos que expresamente establecía:

> *. . .reglar el tratamiento que debe darse a los bienes adquiridos por los concesionarios de hidrocarburos o que se encuentren afectos a las concesiones de las cuales son titulares, con la finalidad de asegurar la continuidad y eficiencia de las actividades otorgadas y de que se garantice el derecho de la nación a reasumir esas actividades.*[1]

El proyecto de ley sobre bienes afectos a reversión fue ampliamente discutido a nivel nacional. Diversos sectores económicos y sociales del país manifestaron su adhesión al mismo o simplemente su rechazo. Sin embargo, es significativo que en la gran mayoría de las declaraciones dadas por los distintos sectores de opinión se recalcaba que el derecho de reversión estaba consagrado tanto en la Constitución Nacional (Art. 103) como en la Ley de Hidrocarburos. Con la Ley propuesta se pretendía entonces fijar con amplitud y precisión los alcances del derecho del Estado, en asegurar la eficiencia y la continuidad de la industria al vencimiento de las concesiones, y determinar, asimismo, la forma y los procedimientos de ejecutar las disposiciones legales sobre la materia.

Quienes objetaban el contenido de la Ley de Reversión aducían, entre otras cosas, que su vigencia y ejecución podría ocasionar una posible paralización o reducción de las inversiones de capital extranjero tanto en la actividad petrolera como en otras ramas de la economía nacional. Enrique Pérez Dupuy, entre otros, ferviente defensor de la inversión foránea en nuestro país y consecuente opositor a la intervención del Estado en los asuntos económicos, afirmó categóricamente que tal como había sido propuesta, la Ley de Reversión constituía un "despojo o expropiación gratuita".[2] *Afirmaba que nadie correría el riesgo de invertir en un país donde la confiscación fuera el objetivo del Estado al vencerse un contrato. En su opinión —tesis frecuentemente esgrimida por el sector privado de la economía— Venezuela contaba con muy escasos capitales propios, siendo por tanto conveniente atraer los capitales extranjeros para que contribuyeran al desarrollo de su economía. En tal caso se trataba menos de una razón que de un pretexto para una vez más justificar la inversión foránea en el país. Era ésta, asimismo, una de las preocupaciones fundamentales del sector empre-*

1. "Exposición de Motivos del Proyecto de Ley", *Reversión Petrolera en Venezuela*, Selección y Prólogo de Francisco J. Faraco, José Agustín Catalá, Editor, Ediciones Centauro, Caracas, 1975, p. 5.
2. *El Universal*, Caracas, 22 de junio de 1971, p. 2-1.

sarial representado por Fedecámaras, organismo que ha objetado la intervención del Estado no sólo en la actividad petrolera sino en todos los sectores dinámicos de la economía, exaltando, con su manera peculiar de oponerse al gobierno como factor de gestión productiva, las virtudes de la inversión privada en la forjación del desarrollo económico del país. Planteamientos como el anterior respondían, por supuesto, a las exigencias de las propias compañías multinacionales que operaban en Venezuela contando con procuradores locales de sus intereses que interpretaban y traducían el empeño de aquéllas en impedir por todos los medios posibles que se vulnerara su control sobre los sectores estratégicos de la economía nacional.

Insistentemente los voceros de las compañías petroleras —las que introdujeron incluso demandas de nulidad de la citada Ley ante la Corte Suprema de Justicia— tildaron el estatuto legal de reversión de atentatorio contra la Constitución y confiscatorio de la propiedad. Sus afirmaciones en tal sentido constituían juicios de severa impugnación. Sin embargo, no podía tratarse de confiscación el ejercicio que el Estado hacía de un derecho consagrado en la Ley de Hidrocarburos al establecer la reversión de los bienes afectos a las concesiones una vez extinguido el término de la duración de éstas. No era aquella una ley confiscatoria porque la legislación venezolana, como se ha manifestado, instituía la reversión del derecho real inmueble con las obras y los bienes incorporados a todas las instancias y fases de la industria. Al respecto el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar las demandas de nulidad de la Ley incoadas por las compañías concesionarias.

El debate parlamentario sobre la reversión petrolera fue intenso y prolongado. Sin embargo, no fueron muchos los congresantes que se opusieron a la aprobación de la Ley. La presión contra ésta fue ejercida principalmente fuera del Parlamento por las propias empresas explotadoras del recurso y los ideólogos y partidarios de la inversión extranjera en el país. Quizás imaginaron estos grupos, en base a resultados de acciones anteriores, que una campaña bien diseñada, promovida con el objeto de producir incertidumbre en la opinión pública y el gobierno, surtiría desestímulos en quienes podían asumir actitudes favorables a la sanción de aquel instrumento legal. La campaña tuvo lugar pero no efectos, porque el gobierno y la oposición, con diferencias no esenciales en torno al proyecto de Ley, actuaron con la convicción de que era imprescindible la aprobación de un código normativo que garantizara los intereses y derechos del Estado en aquella actividad amenazada por el comportamiento irracional de las compañías explotadoras.

Con todo, a pesar de la costosa campaña en contra de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, este instrumento legal, después de sancionado en el Congreso de la República, fue promulgado el 30 de julio de 1971. En este caso la razón de quienes actuaban en función de los intereses nacionales pudo más que los planteamientos del poder económico vinculado a lo extranacional. Este último, confiado en la experiencia de sus organismos y medios de presión, creía que su oposición al proyecto de Ley se traduciría en una victoria más para sus fines de control y dominio. Pero todos sus argumentos de impugnación, que no excluían la posibilidad de desafíos legales contra la nación venezolana, fueron rebatidos con razonamientos que rechazaban el fatalismo y el celo convencional de los gestores de las compañías concesionarias. Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional aprobaron entonces por unanimidad la mencionada ley.

La gran mayoría política del país, en cuyo seno había siempre lugar para la controversia, no dudaba esa vez de la necesidad de sancionar la Ley de Reversión Petrolera. Algunas personalidades con una visión más clara y precisa de lo que entrañaba aquella alternativa, expresaban, sin embargo, que no debía esperarse el año 1983 para emprender una nacionalización integral de los hidrocarburos, argumentando que no sólo habían condiciones y factores internos que la justificaban de inmediato, sino además una coyuntura internacional que favorecía su realización a corto plazo. Entre quienes así pensaban se destacan Salvador de la Plaza, D. F. Maza Zavala, Rubén Sáder Pérez, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova y Pedro E. Mejía Alarcón.

En 1971, simultáneamente con el planteamiento que se hacía sobre la necesidad de anticipar la reversión petrolera y no esperar el vencimiento de las concesiones en 1983, fue expuesta la tesis que postulaba la trascendencia de la alternativa petrolera hacia toda la economía del país, como forma de conferirle a tal opción la energía y extensión que hicieran posible quebrar los mecanismos de dependencia externa. D. F. Maza Zavala señalaba que no era suficiente la sola nacionalización de la actividad de los hidrocarburos, sino que para que ésta resultara verdaderamente eficaz se requería al mismo tiempo la nacionalización integral de la economía venezolana.[3] *Este criterio, que planteaba la necesidad de un proyecto más envolvente o amplio, sintetizaba*

3. Cfr. D. F. Maza Zavala, "La Nacionalización de la Actividad Petrolera antes de 1983", *Nacionalización Petrolera en Venezuela* (Varios autores), Monte Avila Editores, Caracas, 1971, pp. 25-26.

ideológicamente las definiciones programáticas de la izquierda venezolana sobre el cambio que debía introducirse en el aparato productivo del país para liberar su estructura y desenvolvimiento de los efectos negativos que les ocasionaba la intrusión de factores foráneos. Sin embargo, el mismo criterio, ubicado en el contexto social de un país que entonces carecía de una vanguardia política organizada y coherente, era entendido por muchos como una opinión que adquiría más realismo o tal vez más pragmatismo si colocaba en lo inmediato la nacionalización de la industria petrolera y extrapolaba "la nacionalización integral de la economía venezolana" hacia el largo plazo.

La opinión de Maza Zavala debía interpretarse desde una perspectiva doctrinaria, pues con ella parecía plantearse implícitamente las limitaciones o posibles frustraciones del proceso nacionalizador de aquella industria si en la realidad venezolana no se establecían al mismo tiempo las condiciones y providencias que habilitaran la nacionalización petrolera como realización que coadyuvaba al desarrollo sin dependencia. En este sentido, Héctor Malavé Mata, con un criterio aproximado al de Maza Zavala, expresaba sus dudas o reservas en torno a una nacionalización petrolera que no iba acompañada de la socialización del aparato productivo del país, ni secundada por una política fiscal de desarrollo que permitiera una más justa participación social en los beneficios de la actividad nacionalizada.

> *La nacionalización de la industria petrolera no podrá efectivamente alcanzarse sin cambiar la estructura de la dependencia que afecta sensiblemente a la economía venezolana. Sin un proceso afirmativo de socialización de las fuerzas productivas en el campo de las industrias básicas ni la aplicación de los ingresos fiscales petroleros en la activación estructural del desarrollo económico del país, los beneficios de la explotación del petróleo —en la hipótesis de un modelo nacionalizado— se desplazarán, hacia el sector privado de la economía. Habrá una traslación del excedente económico petrolero hacia los sectores de la población con elevados ingresos en detrimento de las grandes masas proletarizadas y empobrecidas.*[4]

La nacionalización de la actividad petrolera, según este juicio, no se traduciría en un proceso de resultados eficaces si no se eliminaban las relaciones de subordinación que afectaban a la economía del país. Tales relaciones, como puede entenderse, incidirían en aquel proceso mediatizando su contenido y sus alcances. Malavé Mata observaba, desde esta perspectiva, las dificultades que había que superar para mantener la

4. Héctor Malavé Mata, "Contra el Fatalismo de la Enajenación Petrolera", *Punto Negro*, Caracas, Año I, N° 3, 15 de octubre de 1971, p. 11.

industria nacionalizada al margen de incidencias perturbadoras. Sin embargo, el carácter y la profundidad de aquella nacionalización, aún en el contexto de la dependencia, eran elementos determinantes del grado de eficacia que podía lograrse en el desarrollo de la misma actividad. La realización del proyecto debía emprenderse con inminencia, sin dar lugar a nuevas enajenaciones, con criterio que validara su autenticidad en la lucha contra la relación de dependencia. La nacionalización debía concebirse y realizarse como alternativa inscrita en una "estrategia de contradependencia". Pero esta posibilidad remitía a un diagnóstico de la ideología dominante en el país. La alta burguesía podía aceptar una nacionalización que no comprometiera sus intereses de clase, que no quebrantara sus vínculos con el capital monopolista internacional, ni rebajara su participación en los proventos del petróleo. Si esa clase admitía la opción nacionalizadora era con la condición de que ésta no contraviniera su situación de clase usufructuaria. La izquierda venezolana, por otra parte, podía proponer una fórmula de rescate integral de aquel recurso, pero no estaba entonces en capacidad política de imponer esa orientación en el estatuto legal de la materia.

Independientemente del debate sobre el proyecto de Ley de Reversión Petrolera y de las distintas razones expuestas en torno a la necesidad de nacionalizar la industria de los hidrocarburos, ya en 1971 había comenzado la discusión sobre la búsqueda de una fórmula sustitutiva de los contratos de servicio que entonces empezaban a firmarse. El gobierno presidido por Rafael Caldera presentó la modalidad de empresas mixtas como posible alternativa de explotación del petróleo. El propio presidente señaló que la política de su gobierno en materia petrolera consistía en no mantener una "actitud dogmática", estimando importante la combinación de alternativas que significaran mayor eficacia en el sentido de que el Estado venezolano percibiera más beneficios por su recurso.[5] *El ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, luego de citar ejemplos de las varias posibilidades abiertas en el territorio nacional para explotaciones de carácter mixto, vale decir, mediante la participación de capitales público y privado, afirmó que en Venezuela no existía renuencia a que las inversiones foráneas participaran en tal fórmula de asociación, por cuanto*

> *...tradicionalmente ha sido un país abierto a las inversiones extranjeras, siempre que ellas se enmarquen completamente dentro del ordenamiento*

5. Cfr. *El Universal*, Caracas, 30 de julio de 1971, p. 1-10.

legal de Venezuela y siempre que vengan a contribuir al desarrollo económico y que no vengan en desplazamiento de capitales netamente venezolanos y preferiblemente en empresas mixtas.[6]

Las razones del ministro de Minas omitían en esa ocasión las críticas y los reparos que innumerables veces los sectores progresistas habían expresado acerca de las violaciones fiscales, laborales y cambiarias cometidas en el país por compañías extranjeras tanto en la explotación de los hidrocarburos como en otras actividades industriales. Venezuela, por lo que quería significar el mismo funcionario, había sido y seguía siendo un país receptor de inversiones de procedencia externa en condiciones que privilegiaban grandes transferencias de excedente económico generado localmente. El ministro, sin embargo, parecía contradecirse al anunciar meses más tarde que el gobierno nacional estaba dispuesto a conversar con empresas e instituciones venezolanas para constituir corporaciones mixtas dentro de las diversas fases de la industria petrolera, pero no permitir que detrás de tales "transacciones se escondiera el capital extranjero".[7] *Su última opinión fue objeto de varias críticas y declaraciones por parte de partidos políticos y sectores económicos del país.*

Desde la oposición, Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, afirmó que éste apoyaba la incorporación del capital privado en las empresas donde el Estado tuviese una participación mayoritaria, señalando que la alternativa de las empresas mixtas "siempre ha estado dentro de la orientación política" de esa organización.[8] *La idea, así expuesta, presentaba como propio o conforme con la doctrina de Acción Democrática la fórmula de asociación entre inversiones públicas y privadas donde el Estado poseyera la mayor parte del capital accionario.*

Fedecámaras, con motivo del planteamiento del ministro de Minas e Hidrocarburos sobre la posibilidad de que el capital privado nacional interviniera a través de empresas mixtas en la explotación de la riqueza básica del país, fijó su posición en tal sentido. Ciro Añez Fonseca, Director Ejecutivo de aquel organismo patronal, indicó entonces que "la participación del capital privado venezolano en la futura evolución de la industria petrolera revela una legítima aspiración nacional",[9] *criterio inobjetable, en su opinión, por estar enmarcado dentro del más "estricto*

---

6. *El Nacional,* Caracas, 22 de julio de 1971, p. D-2.
7. Cfr. *El Nacional,* Caracas, 12 de octubre de 1971, p. A-1.
8. Cfr. *El Nacional,* Caracas, 14 de octubre de 1971, p. D-15.
9. *El Universal,* Caracas, 16 de octubre de 1971, p. 1-22.

nacionalismo". Amplió asimismo sus declaraciones señalando que con esa tesis era solidaria Acción Democrática, una de las organizaciones políticas de más arraigo en Venezuela, cuyo Secretario General, Carlos Andrés Pérez, había afirmado que en la política petrolera de ese partido había estado siempre presente la idea de la concurrencia del capital privado nacional en las operaciones de los hidrocarburos.

Esa afirmación que hiciera Carlos Andrés Pérez parecía fundamentada en las opiniones que sobre el problema petrolero expusiera Rómulo Betancourt en 1972. En un artículo publicado en una revista de difusión internacional Betancourt hizo un análisis de la situación de los países productores de petróleo y los manejos de las compañías explotadoras para impedir que aquéllos obtuvieran un mayor control sobre su riqueza, subrayando en ese respecto la importancia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al abordar el problema petrolero en Venezuela destacó lo que denominara la "política nacionalista" que en materia de hidrocarburos se desarrollara durante el período 1945-1948, en el cual se decidió eliminar el régimen concesionario y aumentar la participación fiscal a través de la fórmula del fifty-fifty. *Aquella decisión sin embargo fue violada durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez que otorgó nuevas concesiones a las empresas transnacionales del ramo. Betancourt, en su análisis continuaba su recorrido histórico para destacar que después de 1959, y dentro de aquella orientación nacionalista fue creada la Corporación Venezolana del Petróleo con el propósito de que el Estado tuviera una injerencia mayor en el control de su principal industria.*

El examen elaborado por Rómulo Betancourt lo condujo a considerar las alternativas que se presentarían al país en 1983, año en que revertirían las concesiones petroleras. Fue claro al precisar que aquellas opciones podían ser dos: una, el control total de la industria de los hidrocarburos por parte del Estado; y otra, que la nación produjera el petróleo con sus propios medios y suscribiera contratos para el transporte y la comercialización con empresas extranjeras. En cuanto a esto último, se refería a las fases de menos riesgos y de las cuales derivaban siempre los consorcios internacionales grandes beneficios. Las fases justamente que han hecho posible la realización de considerables masas de plusvalía en esa industria. En torno a esas alternativas, Betancourt señaló:

> *Revertidas las concesiones a los países dueños de los yacimientos, se presentarán para éstos dos alternativas: o asumir el control total del ne-*

gocio, en todas sus fases; o —lo que parece más realista— producir el petróleo con sus propios recursos técnicos y materiales, y suscribir contratos de transporte y mercalización, en condiciones ventajosas para los países productores, con empresas internacionales. En otras palabras: no distraer fondos necesitados con urgencia en el empeño de desarrollar las economías nacionales y de abolir la pobreza, en el financiamiento de muy costosas líneas navieras de transporte; y dejar el marketing *del combustible, llave maestra en ése y en los demás aspectos de comercio internacional en quienes tienen una red mundial de distribución.*[10]

Prever doce años antes de la reversión petrolera la posibilidad de contratar con las compañías transnacionales el transporte y la comercialización de los hidrocarburos, lo que a Rómulo Betancourt le parecía la forma más realista y conveniente, constituye una muestra de la conciencia dependiente que se ha arraigado en muchos conductores políticos venezolanos en torno a la problemática del petróleo, conciencia esa que ha sido no pocas veces denunciada y refutada por dirigentes de los sectores progresistas del país cuando se han pronunciado por una nacionalización que involucre todas las instancias integradas de la industria extractiva. El criterio que en tal sentido sustentaba el máximo líder de Acción Democrática pretendía justificarse con el argumento de que el país no estaba en condiciones de distraer fondos en algunos sectores que los requerían con urgencia para su desarrollo. La misma posición lucía pesimista en relación con el futuro petrolero de Venezuela, por cuanto Betancourt, no confiado tal vez en la posibilidad de un rescate integral del recurso, imaginaba con excesiva antelación que el Estado venezolano, frente al compromiso que significaba la reversión de las concesiones, no estaría preparado para asumir en 1983 la administración directa y el control total de los hidrocarburos. La tesis de Betancourt revelaba además una subestimación de la capacidad del Estado con respecto al papel que debía desempeñar en torno a su principal industria. Las razones que aducía para considerar como más indicada la segunda alternativa, basada, como antes se expresara, en que no era conveniente distraer recursos financieros requeridos apremiantemente en la tarea de "desarrollar las economías nacionales y de abolir la pobreza", no podían admitirse por no ser suficientemente valederas, pues la distracción de esos recursos, siempre que fuese efectuada con criterio de racionalización de su inversión, significaba incorporar al proceso nacionalizador aquellas dos áreas de la industria petrolera caracterizada por su elevada rentabilidad. El desarrollo de la economía y la abolición de

10. Rómulo Betancourt, "El problema del control del petróleo", Revista *Visión*, Vol. 40, Nº 3, 12 de febrero de 1972, pp. 31-32. (Subrayado del autor citado).

la pobreza requerían, por otra parte, una política de inversión pública que eliminara el despilfarro y el gasto improductivo, como también redujera hasta límites estrictamente necesarios el crecimiento incontenido de los gastos corrientes del Estado, como forma de ahorrar recursos aplicables al financiamiento del desarrollo de la economía.

La discusión sobre la cuestión petrolera no se suspendió en el año en que iba a decidirse la transición gubernamental. Así 1973, año de la contienda electoral, se caracterizó por las variadas e innumerables proposiciones programáticas de los distintos partidos beligerantes. Todos los candidatos a la presidencia de la república expusieron inevitablemente sus apreciaciones sobre el problema del petróleo tan determinante para el país. Algunos de esos candidatos fueron precisos al pronunciarse por una nacionalización que abarcara desde la fase exploratoria hasta la de comercialización internacional del recurso, vale decir, una nacionalización integral de la actividad de los hidrocarburos que, al decir de uno de aquellos aspirantes, era estimada como factor decisivo de la "liberación nacional". Otros, sin embargo, no definieron con suficiente claridad cuál sería el destino de la industria bajo sus respectivos gobiernos. En torno al petróleo dijeron unos, en términos muy vagos y quizás por la simple conveniencia política de no pronunciarse sobre el problema, que se trataba de una materia de considerable significación como para ser debatida en un proceso electoral; que el tema debía en todo caso ser sometido a una amplia consulta nacional; que de tomarse una decisión al respecto, ésta tenía que reflejar lo que más conviniera a los intereses de la nación; que la campaña electoral en curso no debía "petrolizarse"; que esa materia no podía ser sometida a una "consulta popular", sino que requería ser discutida por los sectores de opinión más representativos del país. Asimismo fue propuesta una nueva modalidad por un partido político de izquierda que en relación a la cuestión petrolera pronunciábase por la socialización de esa industria y no por su nacionalización, argumentando que esta última había sido planteada incluso por los partidos del status, *desnaturalizada por los sectores reformistas y las clases dominantes hasta el extremo de presentarla como una opción desprovista de contenido revolucionario.*

El propio partido de gobierno (COPEI), que antes había planteado la posibilidad de constituir empresas mixtas como fórmula subrogante de explotación, había dejado entonces de referirse a ellas para hablar —precisamente al término de la campaña electoral— de la inevitable nacionalización petrolera, no sin presentar la participación del capital privado nacional o extranjero en esa industria como alternativa indesea-

ble o no conveniente a los intereses de la nación. Quizás ese planteamiento, formulado en un clima electoral de grandes exaltaciones y promesas, convenía al partido gubernamental desde un punto de vista político, sobre todo por aducir con razón que en el país ya estaban cristalizadas las condiciones indispensables para iniciar el proceso nacionalizador. Sin embargo, las declaraciones de ese partido, en tal sentido, apenas se quedaban en la superficie de una eventualidad electoral que no podía retener el compromiso de la nacionalización porque la correlación de fuerzas políticas resultante de las mismas elecciones no era prevista como favorable a aquel partido que había propuesto, más como consigna que como objetivo pragmático, el proyecto de reposesión petrolera.

Culminado el proceso electoral en diciembre de 1973, resultó presidente electo Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática, partido que al mismo tiempo obtuvo absoluta mayoría en el Congreso de la República. Comenzó a partir de entonces un período de expectativas sobre todos los órdenes de la realidad nacional. Continuó la discusión sobre la materia petrolera, pero esa vez con mayor dinamismo y la activa participación de los partidos políticos y organizaciones sindicales y patronales. Antes de la trasmisión del poder presidencial, el gobierno de Rafael Caldera manifestó, a través del ministro de Minas e Hidrocarburos, que había previsto todo lo concerniente a la realización del proyecto nacionalizador, conforme a lo cual dejaba todo en condiciones de iniciar inmediatamente ese proceso. Señaló esa vez Hugo Pérez La Salvia, el citado ministro, que existían condiciones favorables tanto a nivel nacional como internacional para emprender prontamente y sin dificultades la nacionalización de la industria de hidrocarburos. Reiteró también en varias ocasiones que el país estaba capacitado económica y técnicamente para operar y controlar directamente todas las actividades integradas de esa industria, en condiciones más favorables todavía porque la crisis energética que afectaba a los países altamente industrializados eliminaba el riesgo de una contracción de la demanda del petróleo venezolano ya nacionalizado. El presidente electo, por su parte, llegó a considerar que no era necesario esperar el año 1983 para que la nación decidiera asumir el control de la explotación petrolera. En su opinión, sin embargo, resultaba inconveniente adoptar al respecto medidas y decisiones apresuradas.

El análisis de los factores internacionales que estimulaban la nacionalización petrolera destacaba la presencia de una coyuntura favorable a los países productores y exportadores derivada de la crisis mun-

dial de energía y del progresivo robustecimiento de la OPEP. Algunos analistas de la situación coyuntural llegaron a expresar que las compañías operadoras de petróleo preferían mantener el vigente sistema de explotación, pero el panorama energético internacional las colocaba en la necesidad de aceptar la decisión de nacionalizar la industria siempre que se les garantizara el suministro regular y permanente de esa materia prima.[11] *Así hay razón para interpretar que la iniciativa de nacionalización de aquella actividad no fue sólo resultante de una situación aislada y circunscrita a condiciones internas del país, sino también de la confluencia de algunos factores internacionales que determinaron una coyuntura favorable a los países exportadores netos de petróleo.*

A comienzos de 1974, una vez instaladas las cámaras legislativas con los parlamentarios electos en 1973, fueron introducidos en el Congreso Nacional dos proyectos de Ley de Nacionalización Petrolera para su consiguiente discusión: uno, elaborado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y presentado ante la Cámara de Diputados, y otro redactado por el partido socialcristiano COPEI e introducido en la Cámara del Senado. La discusión de tales proyectos fue iniciada en el Parlamento, pero luego interrumpida cuando el gobierno, restando en cierto modo importancia a aquel debate, impuso el criterio de la necesidad de un estudio previo sobre la nacionalización por una Comisión designada a tal efecto por el presidente de la república. De esta manera el 22 de marzo de 1974 el jefe de Estado, en Consejo de Ministros, dictó el decreto número 10 cuyo artículo 1º contemplaba la creación de una Comisión ad honorem *que se encargaría de estudiar las alter-*

11. Antes de que en Venezuela se planteara la nacionalización de la industria petrolera, otros países miembros de la OPEP habían emprendido ese proceso, estimulados por una serie de factores internacionales entre los cuales es necesario mencionar la llamada crisis energética. Los estudiosos de ésta han ubicado sus causas en el consumo desmedido de energía por los países capitalistas desarrollados, en los bajos precios de realización del recurso y en el monopolio ejercido sobre éste por los consorcios multinacionales. Las características de estos dos últimos elementos han variado desde los primeros años de la década del 70, ya que por decisión de la OPEP los precios del petróleo han subido periódicamente y ha tenido lugar igualmente una mayor injerencia de los Estados productores en el dominio de la industria. Asimismo la OPEP ha acordado una reducción de la producción con fines de conservación del recurso. Héctor Malavé Mata ha señalado que "La nacionalización venezolana de la industria del petróleo se inició en medio de una coyuntura mundial que ha favorecido transitoriamente a los países exportadores de esa materia prima, por efecto de una crisis que, ocasionada por la irracionalidad en el consumo capitalista de energía, ha revelado la emergencia de una parte del «Tercer Mundo» —el bloque de países de la OPEP— frente a las relaciones económicas impuestas por los centros del poder imperial". ("El Contexto Internacional de la Nacionalización Petrolera en Venezuela", *Problemas del Desarrollo*, Revista Latinoamericana de Economía, Año VII, Nº 27, agosto-octubre de 1976, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, p. 19).

nativas posibles con el objeto de que el Estado asumiera el control de la exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y mercadeo de los hidrocarburos. Para nacionalizar la industria se requería, en opinión del gobierno, un consenso a nivel de todos los sectores del país —partidos políticos, grupos empresariales, organismos sindicales...— con el interés de que fuera elaborado un proyecto de ley ajustado a la realidad nacional.

El 16 de mayo de 1974 fue instalada la llamada Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la probabilidad y operatividad del rescate inmediato de las concesiones de hidrocarburos. La necesidad de lograr un consenso, en vez de tomar una decisión más pronta sobre la materia, pudo responder, como en varias oportunidades se expresó, a una táctica bien concebida con el propósito de evadir así una definición aislada y contradictoria en torno al proyecto nacionalizador, como pretender demorar la toma de esa decisión o evitar el gobierno asumir solo y por propia cuenta la responsabilidad sobre aquella materia. El Ejecutivo Nacional pudo haber previsto la imposibilidad de alcanzar el tan esgrimido consenso nacional en una Comisión integrada por grupos o sectores con posiciones políticas e ideológicas disímiles y en muchos casos francamente contradictorias. D. F. Maza Zavala en su intervención del 1º de abril de 1974 en la Cámara de Diputados ya preveía que el consenso auspiciado por el gobierno no sería alcanzado, aduciendo en tal sentido que la representación de Fedecámaras y de las compañías petroleras en el seno de la mencionada Comisión no tendría otro resultado que el de una "nacionalización concertada", y no era ésta, según afirmaba el citado parlamentario, el tipo de nacionalización que el país requería. Fue suficientemente precisa y convincente la argumentación del diputado independiente al respecto:

> *...Un consenso que incorpore a las compañías petroleras, un consenso que incorpore a los grandes intereses centrales de las compañías petroleras, un consenso que incorpore a los intereses dominantes del país, representados en Fedecâmaras, no puede ser sino un consenso que tenga por resultado una* nacionalización concertada, una nacionalización acordada, *y lo que está planteado como necesidad en el país es una* nacionalización militante... *que responda realmente a las verdaderas causas y consecuencias de este proceso, una nacionalización en la cual participen efectiva y directamente las grandes fuerzas de transformación nacional, las fuerzas del desarrollo económico independiente del país.*[12]

12. D. F. Maza Zavala, *Hacia el Dominio Nacional de la Actividad Petrolera,* División de Publicaciones, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1974, pp. 12-13. (Subrayado del autor citado).

La Comisión cumplió su cometido elaborando un proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera en el plazo establecido de seis meses. Pero como el mencionado proyecto consagraba el control estatal de todas las fases de la industria, el presidente de Fedecámaras, representante del sector empresarial en la Comisión, protestó e hizo público su voto salvado por considerar que en tales términos el proyecto de ley eliminaba toda posibilidad a la iniciativa privada de participar en las actividades del proceso nacionalizador. El Ejecutivo Nacional, presionado por la campaña librada al respecto por los organismos patronales, presentó otro proyecto modificando el artículo 5º del elaborado por la Comisión de Reversión, incorporando en el nuevo texto la factibilidad de constituir empresas mixtas mediante la asociación de capitales público y privado. Las empresas mixtas no constituían una modalidad planteada entonces originalmente, pues ya con anterioridad las compañías concesionarias extranjeras las habían propuesto al gobierno nacional como fórmula de explotación sustitutiva. Dirigentes de la oposición intervinieron para denunciar la mediatización de que era objeto el proyecto legal de la materia con la modificación introducida en el artículo ya mencionado. Entre ellos, Pompeyo Márquez, senador y secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció, antes de que el Ejecutivo introdujera el proyecto de ley de nacionalización en el Congreso, que la inminente nacionalización se concertaba y negociaba mediante la consagración de una norma que dejaba siempre abierta la posibilidad de constituir tal tipo de empresas,[13] *aduciendo el mismo parlamentario que no existían razones para justificar verdaderamente esa forma de asociación. No eran válidas, según afirmaba Pompeyo Márquez, la supuesta carencia de mercados, ni la insuficiencia de recursos financieros estatales, ni las dificultades en materia de transporte internacional, como argumentos esgrimidos tendenciosamente para imponer tal modalidad de explotación en el desarrollo de la industria petrolera nacionalizada.*

La posibilidad de participación del capital privado en la industria nacionalizada fue el ingrediente esencial de la controversia que tuvo lugar entre todos los sectores de la sociedad que intervinieron en la discusión del proyecto de ley. En la polémica suscitada la opinión se dividió en dos posiciones totalmente opuestas. Por una parte, la tesis de quienes sostenían que las empresas mixtas desvirtuaban el proceso de reposesión petrolera por cuanto la intervención de ellas comportaba un conjunto de operaciones que negaban la esencia de la nacionaliza-

13. Cfr. *Punto*, Caracas, 18 de enero de 1974, p. 8.

ción integral; y, por la otra, la de quienes, aferrados a la idea de justificar la conveniencia de tales empresas, afirmaban que el Estado venezolano no estaba en capacidad de administrar y controlar por sus propios medios el complejo negocio de los hidrocarburos, inclinándose por la participación de capitales y factores extranjeros en esa actividad. La primera tesis constituía evidentemente la reivindicación soberana de esa riqueza y su consiguiente colocación bajo potestad de la nación venezolana. La segunda, contrariamente, reflejaba la concepción de quienes preferían que el petróleo, aún después de nacionalizado, continuara como actividad abierta a las injerencias del capital monopolista internacional que lo había usufructuado con grandes beneficios y ventajas durante largo tiempo.

El debate parlamentario en torno al artículo 5º del proyecto de ley fue intenso y prolongado. En esa discusión se esgrimieron muchas argumentaciones ya para justificarlo o bien para negar su conveniencia. Los partidos políticos de oposición —COPEI, MAS, MEP, MIR, PCV y en cierta forma URD—, la Asociación Pro Venezuela, Fedepetrol, Fetrahidrocarburos, el movimiento estudiantil universitario representado por el FREUCV, diversas personalidades y algunos independientes incorporados al trabajo parlamentario, presentaron no pocas razones para demostrar que las empresas mixtas no eran procedentes ni indispensables en las operaciones de la industria nacionalizada. Con tales empresas, como afirmaban, sólo se perseguía la permanencia de los consorcios transnacionales en las fases de menos riesgos y más lucrativas del negocio petrolero. No se justificaban, pues, para la comercialización internacional del producto ni para la obtención de la tecnología requerida por aquella industria. La opinión adversa a la constitución de empresas mixtas fue precisa al afirmar que esa tecnología podía ser perfectamente contratada por el Estado mediante la celebración de convenios similares a los establecidos entre las compañías concesionarias extranjeras que, por no ser propietarias de la tecnología que empleaban, debían recurrir a la contratación tecnológica con empresas proveedoras. Se señalaba, en tal sentido, que tanto los mercados como las fuentes de suministro de tecnologías debían y podían ser diversificados conforme a programas y diseños que garantizaran la continuidad de las operaciones con la mayor eficiencia posible. Venezuela, en tal forma, colocaría su petróleo en diversos mercados internacionales, incluyendo aquellos vinculados con las propias concesionarias, y adquiriría la tecnología no necesariamente en los países donde la obtenían las corporaciones que explotaban el crudo venezolano.

Los defensores del artículo 5º no presentaron argumentos distintos de los que siempre habían expuesto para apoyar la participación del capital extranjero en la economía del país. La siembra de temores e incertidumbres fue el recurso a que apelaron con el propósito de acreditar el provecho que representaba para el país la fórmula de asociación que proponían. Cuando hablaban de que la nación venezolana carecía de experiencia para la colocación y distribución internacional de su petróleo, y de que al Estado debía dotársele de la mayor flexibilidad posible para evitar de esa manera riesgos innecesarios, no hacían sino esgrimir lo que los partidos de oposición consideraban falacias tendientes a desviar la nacionalización de su verdadero contexto. Los riesgos que correría el Estado eran posibles porque, conforme al espíritu de la fórmula de mediatización propuesta, la nación asumiría el control de las áreas más aleatorias y conflictivas de la industria petrolera, mientras que las compañías transnacionales se reservarían el monopolio de las fases menos riesgosas y más remunerativas. Se hablaba entonces de una nacionalización de los riesgos y de una transnacionalización de las áreas más lucrativas de la actividad de los hidrocarburos.

Acción Democrática, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) —controlada por el partido oficialista— y la llamada Agrupación de Orientación Petrolera (AGROPET), grupo de presión con tendencia tecnocrática integrado por profesionales y expertos de las compañías concesionarias foráneas, y diputados independientes afiliados a la burguesía industrial y financiera como Pedro Tinoco y Rafael Tudela, fueron las voces que más frecuentemente se oyeron en la defensa y apología de la nacionalización con empresas mixtas. Todos, con notables coincidencias y aproximaciones en sus planteamientos, reiteraron, en una u otra forma, argumentos y razones nada novedosos y poco convincentes para justificar una nacionalización que confiriera a las inversiones foráneas seguras oportunidades de inserción en el proceso.

Luego de aquel largo debate fue aprobado por la mayoría gubernamental en el Congreso de la República el proyecto de ley de nacionalización propuesto por el Ejecutivo Nacional. Los partidos de oposición salvaron su voto con respecto al artículo 5º, como también dejaron constancia de su voto salvado en relación con el monto de la indemnización que decidió pagar el Estado a las ex concesionarias, a pesar de los reparos y críticas que los sectores progresistas fuera y dentro del Parlamento formularon sobre ese aspecto a tales compañías. Así el 20 de agosto de 1975 fue promulgada por el presidente de la República,

Carlos Andrés Pérez, la Ley Orgánica que Reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, quedando aún un lapso de cuatro meses para la nacionalización efectiva, la cual se realizaría, con grandes despliegues de promoción oficial, el 1º de enero de 1976 en el campo petrolero de Cabimas, Estado Zulia. Durante el período comprendido entre ambas fechas se procedió a la creación de Petróleos de Venezuela, *empresa matriz que asumió las operaciones, la dirección y el control de la actividad petrolera en la esfera propiamente productiva. Durante el mismo lapso esa matriz celebró con las corporaciones ex concesionarias contratos de asistencia técnica y de comercialización que más tarde, por resultar inconstitucionales y excesivamente onerosos para la nación, fueron impugnados públicamente por venezolanos que antes habían denunciado la figura de asociación incorporada por el Ejecutivo Nacional en el texto del artículo 5º.*

Por efecto de algunas alteraciones temporales ocurridas en el sistema capitalista mundial, estrechamente relacionadas con la emergencia de los países proveedores de petróleo y las perturbaciones ocasionadas por la crisis de energía en escala internacional, los consorcios explotadores de ese recurso aceptaron la decisión de algunos de aquellos países que adoptaron medidas tendientes a la nacionalización de sus hidrocarburos. Pero, si bien aceptaron esa determinación sin resistencias mayores, ello estaba condicionado a que se les permitiera a esos consorcios continuar controlando las fases más estratégicas y rentables de la actividad petrolera. Fue así como a nivel nacional se sancionó un estatuto de reposesión del petróleo que, modificado negativamente por el gobierno en su artículo tal vez más importante, no podía sino nacer mediatizado y trunco, y como tal restar a la nacionalización sus originales atributos. En ese proceso surgirían seguramente rémoras y enajenaciones que menoscabarían su proyección y verdadero contenido. Mentores del gobierno y la burguesía subalterna lograron legitimar la desnaturalización de ese proceso porque, desde el poder y fuera de él, habían pensado siempre en la imposibilidad o ineficacia de una empresa de tal envergadura sin la intervención de factores foráneos. De allí la acertada afirmación de un alto dirigente del Movimiento Electoral del Pueblo al señalar que en el país se daba el caso excepcional de una "nacionalización con la cual han quedado satisfechos tanto el gobierno como las compañías transnacionales".[14]

---

14. Jesús A. Paz Galarraga, "Los Festejos de la Nacionalización Petrolera", *El Nacional*, Caracas, 18 de diciembre de 1975, p. A-4.

Sin sobrestimar la importancia y el alcance de la nacionalización de los hidrocarburos al extremo de vaticinar, como lo han hecho algunos ideólogos gubernamentales, que con ella se logrará tanto el rescate integral de ese recurso como la independencia económica de la nación, y sin negar, además, los efectos del propio acontecimiento en la evolución de la economía venezolana, es cierto que, dentro del esquema productivo vigente en el país, resulta exagerado imaginar que tal nacionalización fue concebida e implementada tomando exclusivamente en consideración la conveniencia nacional. Esa nacionalización, no exactamente como ha sido presentada, fue prevista y llevada a cabo conforme a un modelo contradictorio que enmarcaba su realización entre objetivos que al mismo tiempo respondían al interés público del gobierno nacional y a los requerimientos de las compañías transnacionales del ramo. No es otra la razón para que al cabo se la haya denominado nacionalización transnacionalizada.

Irene Rodríguez Gallad

Ciudad Universitaria, Caracas, octubre de 1977.

1971

Febrero 16

El embajador de Venezuela en México, general Carlos Soto Tamayo, declara que Venezuela está buscando la nacionalización de la industria petrolera de acuerdo con sus propios métodos. Se pone en práctica, dice el funcionario, la fórmula de los contratos de servicio que conducen a la participación directa del Estado en la explotación de hidrocarburos.

Marzo 4

Las compañías petroleras Shell y Mene Grande declaran a la opinión pública que son falsas las acusaciones que se les hacen, atribuidas a Jesús Bernardoni, diputado de Copei, según las cuales esas empresas están desmantelando y sacando del país sus equipos de perforación, exploración y estudios.

Marzo 12

El presidente de Fedepetrol, Carlos A. Piñerúa, denuncia en Maturín que las empresas petroleras cometen fraude contra la nación, por cuanto sacan del país sus bienes y equipos. Señala, por ejemplo, que a Indonesia se trasladaron bienes por valor de 600 millones de dólares. Los embarques, según Piñerúa, se hacen por los puertos de Guanta, Tucacas, Puerto Cabello y Maracaibo.

Marzo 18

El diputado de Acción Democrática, Arturo Hernández Grisanti, declara en Maracaibo que los hechos que se suceden en la industria petrolera mundial revelan que nos estamos dirigiendo hacia la nacionalización de esa industria. Expresa asimismo que Venezuela tendrá problemas con las compañías operadoras si éstas insisten en que la reversión no cubra todas las instalaciones de la industria.

Siuberto Martínez, jefe de la fracción parlamentaria del MEP, durante una intervención en la Cámara de Diputados anuncia que ese partido, URD y

algunos independientes presentarán un proyecto de ley sobre reversión de las concesiones petroleras.

Marzo 26

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, señala que si las empresas petroleras han incurrido en violación de la ley les serán aplicadas sanciones. Declara esto a raíz de las denuncias formuladas por Fedepetrol en relación al desmantelamiento y la exportación de equipos que realizan las empresas explotadoras. Dijo el ministro que la investigación sobre la materia de esa denuncia es efectuada por la Policía Técnica Judicial.

Abril 28

El panel realizado durante las jornadas del XI Seminario de Periodistas Norteamericanos, afirma la Cámara de la Industria del Petróleo que la aprobación del proyecto de Ley de Reversión Petrolera, introducido ante el Congreso Nacional, creará serios problemas a la industria del ramo, pudiendo interferir las actividades normales de la misma.

Mayo 8

En foro realizado en el Ateneo de Caracas, el doctor Manuel Egaña plantea la necesidad de establecer compañías mixtas para la explotación de la cuantiosa cantidad de petróleo que Venezuela estaría produciendo en 1983. Asimismo manifiesta su oposición a la explotación directa por el Estado, y argumenta que si la industria petrolera actualmente opera con 23.000 obreros y empleados, al cabo de 5 años, estaría operando con 100.000 "electores".

Por su parte, el doctor Rubén Sáder Pérez afirma, en torno a la nacionalización, que es perfectamente lógico que un país como Venezuela vaya perdiéndole el respeto al mito de peligrosidad cultivado por "mentes pacatas y políticos oportunistas". Agrega que *nacionalización* no es lo que han dado en llamar *venezolanización* aquellos profesionales entrenados en los departamentos de relaciones públicas de las compañías concesionarias extranjeras. Dice que se impone reintegrar a la nación sus riquezas de hidrocarburos, donde la distribución del ingreso nacional sea distinta a la que favorece las irritantes diferencias entre contados venezolanos sobrerricos y una mayoría de subpagados y hambrientos.

Mayo 21

La Subcomisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, que preside Siuberto Martínez, modifica tres artículos del Proyecto de Ley de Reversión Petrolera y aprueba uno en su forma original.

Mayo 20

El doctor Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation, expresa en el foro realizado en el Ateneo de Caracas sobre nacionalización petrolera, que el programa de desarrollo de las actividades de hidrocarburos que puede adoptar el país en el futuro no debe descartar la participación privada.

Mayo 25

En conferencia del ciclo sobre la nacionalización petrolera en Venezuela, realizada en el Ateneo de Caracas, el doctor Rubén Sáder Pérez afirma que el descenso de la actividad exploratoria de las compañías concesionarias, y su aparente rechazo a una reversión total y efectiva de las concesiones petroleras a partir de 1983, podría aconsejar la conveniencia de una nacionalización de la industria antes de ese año.

Mayo 27

El presidente de la Subcomisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, señor Siuberto Martínez, informa que había concluido el estudio del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, presentado al Congreso Nacional por los partidos de la Nueva Fuerza (MEP, URD y PCV).

Junio 3

La Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados inicia la discusión en torno al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que fuera presentado por las fracciones parlamentarias del MEP y URD a la consideración del Congreso Nacional.

Junio 4

Esferas de la industria petrolera privada y otros sectores empresariales reciben con reservas el proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Voceros de las empresas del ramo, particularmente de la Compañía Shell de Venezuela, solicitan un amplio diálogo sobre la materia que califican como muy compleja. En círculos directivos de Fedecámaras se registran las mismas reservas expresadas por los voceros de las compañías petroleras. Se informa que el mencionado proyecto de Ley será estudiado por la Comisión de Petróleo de aquella federación patronal.

La Compañía Shell de Venezuela manifiesta que ve con grave preocupación el texto del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Conce-

siones de Hidrocarburos, sometido a consideración del Congreso Nacional, ya que ese proyecto no cubre el requisito básico de considerar la cuestión en todos sus aspectos, y colide con los derechos de los concesionarios por ser una medida contraria a la garantía de la propiedad consagrada por la propia Ley Fundamental.

Junio 6

El doctor Angel Sánchez Bernal, del partido socialcristiano Copei, en su intervención en la Cámara de Diputados señala, entre otras cosas, que la reversión es una institución ya consagrada en el artículo 103 de la Constitución Nacional y en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos. Considera asimismo como una arrogancia de las compañías petroleras el que éstas estimen que tienen la propiedad y que el país sólo tiene una simple expectativa de derecho, de tal manera que el Estado reciba sólo al término de la concesión lo que se encuentra en las parcelas. Añade que es un desafío de las empresas petroleras al pueblo venezolano el querer interpretar nuestras normas a su manera.

Junio 7

El doctor Arturo Hernández Grisanti, representante del partido Acción Democrática en la Subcomisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados que estudia el Proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, declara que se enfrentan dos tesis jurídicas: la de los legisladores, conforme a la cual la reversión es un derecho de los que la doctrina denomina *perfectos;* y la de las compañías petroleras, que interpreta la reversión como una *expectativa de derecho,* en virtud de lo cual la nación no tendría facultad de vigilar lo que las compañías hagan con los bienes que van a revertir. Agrega el declarante que un ejecutivo empresarial apareció en la pantalla atacando la ley y alertando a las direcciones políticas de los partidos para que no se dejaran llevar por un falso nacionalismo. Dijo también Hernández Grisanti que AD le daba su apoyo a la Ley en discusión.

En declaraciones dadas en Maturín, el doctor Gonzalo Barrios manifiesta que no descartaba la posibilidad de que surgieran represalias o peligros para el sistema democrático una vez que el Congreso aprobara la Ley de Reversión, y agrega que existe la posibilidad de que intereses foráneos arremetan contra los propósitos del Congreso Nacional de sancionar la mencionada ley. Sobre la posibilidad de conspiraciones el doctor Barrios expresa que no tiene base para lanzar sospechas contra las inversiones extranjeras en el petróleo, pero existen viejas experiencias mundiales según las cuales ese producto no rehúsa las aventuras.

La Cámara de Diputados comienza la discusión del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, con la intervención del doctor Francisco Faraco, Presidente de la Comisión Permanente de Minas e Hidrocarburos, quien inicia el debate con una exposición general sobre el proyecto en discusión. Expresa en tal sentido que la ley que se discute consagra el derecho pleno que el Estado tiene a la reversión de las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, los accesorios y equipos que forman parte integral de ellas, así como de los bienes corporales e incorporales adquiridos con destino o efectos de los trabajos de exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte en las concesiones de hidrocarburos o en el cumplimiento de las obligaciones que de ellas se derivan. Afirma el doctor Faraco que entre esas obligaciones, aun dentro de un concepto jusprivatista, está la de devolver los bienes al propietario en perfecto estado, para asegurar la continuidad y eficiencia de las actividades otorgadas, y la de que se garantice el derecho de la nación a reasumir esas actividades.

Junio 8

El doctor Jesús Bernardoni, parlamentario del Partido Social Cristiano Copei y miembro de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, señala que en 1983, al vencer las concesiones petroleras otorgadas por el Estado venezolano a las empresas extractivas de crudo, se plantea legalmente la nacionalización de esa industria, y agrega que "la nacionalización constituye la etapa final de la economía dirigida y forma uno de los principales medios para producir cambios profundos en las estructuras y cuyas consecuencias son el traspaso de empresas o industrias de propiedad particular a la propiedad colectiva o del Estado, por tratarse de sectores económicos fundamentales para la vida del país y la liquidación de situaciones de privilegio". Asimismo advierte el doctor Bernardoni que los adversarios de la nacionalización de la industria petrolera hacen una interpretación unilateral y absurda del artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos de 1943, pues por principio constitucional no puede establecerse un criterio legislativo menos avanzado que el consagrado en una ley anterior, y de ello suceder se incurriría en un procedimiento írrito, de nulidad virtual.

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, manifiesta a la prensa que la Ley de Reversión Petrolera es una necesidad evidente, pues el Despacho correspondiente necesita un instrumento adecuado para poder ejercer su fiscalización y control de manera responsable. Indica el ministro que se tiene la responsabilidad ante la nación de responder por todos los bienes.

El Consejo Nacional de Fedecámaras propone al Congreso Nacional que efectúe la más amplia consulta acerca del proyecto de Ley sobre Reversión Petrolera. En la reunión del Consejo Nacional de ese organismo se observa un ambiente de "grave preocupación" por el proyecto en discusión y otros problemas que pueden afectar seriamente el curso del proceso económico del país. Considera Fedecámaras que no es necesario declarar de urgencia la materia.

Al iniciarse en la Cámara de Diputados la primera discusión del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, con la ratificación de apoyo de las principales fracciones parlamentarias, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Faraco, de URD; Alvaro Silva Calderón, del MEP; y Arturo Hernández Grisanti, de AD.

El presidente de la Comisión Permanente de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, doctor Francisco Faraco, se refiere en su intervención al apoyo y a la aprobación por unanimidad que en la mencionada Comisión le dieron todas las fracciones al proyecto. Expresa el parlamentario de URD que la trascendencia política y económica del proyecto es de primer orden porque el pueblo podía iniciar, desde ese momento, la marcha hacia la nacionalización de la industria del petróleo. Señala también que la Ley pondrá a prueba la seriedad y el patriotismo del gobierno, en cuyas manos se colocan algunos dispositivos importantes para la realización de esa empresa.

El doctor Alvaro Silva Calderón, uno de los autores del proyecto de Ley, comienza su intervención recordando que la nación respalda la política de "no más concesiones", siendo el camino a seguir el de la explotación directa por el Estado venezolano. Advierte razonablemente el parlamentario del MEP que los contratos de servicio constituyen un retroceso en el proceso de explotación directa de los hidrocarburos.

Interviene luego el doctor Arturo Hernández Grisanti, diputado de AD, quien expresa que el derecho a la reversión petrolera no es una expectativa sino un derecho perfecto y pleno. El diputado de AD hace algunas consideraciones legales en torno al proyecto que se debate y en relación con la posible demanda de nulidad de la ley por parte de las empresas concesionarias.

La industria petrolera privada expresa de manera oficiosa que el proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos constituye, como forma de "nacionalización de hecho", una total intervención de las compañías concesionarias por el Estado.

El presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo, doctor Pedro Mantellini, al expresar grave preocupación por el proyecto de Ley de Reversión Petrolera, manifiesta que la posición oficial del organismo que preside no sería revelada hasta tanto no sea conocida por el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Antonio Léidenz, a quien entregarían un documento elaborado al respecto por el organismo empresarial de la industria del ramo. Se conoció, sin embargo, un documento de esta industria en el cual se formulan observaciones al proyecto de Ley de Reversión Petrolera y se establecen conclusiones que abundan en justificaciones para oponerse a la aprobación del mencionado proyecto.

Junio 9

Después de una reunión del Comité Nacional de Copei con el presidente Rafael Caldera, el doctor Arístides Beaujon, secretario general del partido de gobierno, propone el nombramiento de una comisión de juristas notables que estudien las reformas que estimen convenientes al proyecto de Ley de Bienes Afectos a la Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, y presenten, en tiempo perentorio un informe con las observaciones correspondientes. También señala el dirigente socialcristiano que no comparte las opiniones del doctor Gonzalo Barrios referidas a aspectos peligrosos del mencionado proyecto de ley.

Por su parte el partido Acción Democrática, por opinión del doctor Arturo Hernández Grisanti, expresa que mantendrá su posición de aprobar el proyecto, independientemente de las sugerencias de Fedecámaras de realizar una consulta entre los sectores interesados, y de las objeciones hechas por la Cámara del Petróleo al proyecto mencionado.

Fedecámaras inicia a través de su Directorio una serie de gestiones con los partidos políticos para lograr un aplazamiento o revisión de la Ley de Reversión Petrolera, a la vez que manifiesta el "clima de profunda preocupación que existe por el proyecto". Informa igualmente ese organismo que se entrevistará con el doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, para conocer la opinión de ese Despacho sobre el mismo proyecto.

El gobernador del Estado Zulia, doctor Hilarión Cardozo, advierte en un programa de televisión la necesidad de definir con criterio nacional el significado de la reversión, y precisar si la industria petrolera pasaría a ser manejada directamente por el país o si surgirán fórmulas de participación de las empresas concesionarias en las fases del proceso petrolero. Dice el gobernador del Zulia que existe una mutua desconfianza entre el sector nacional y la industria petro-

lera que puede afectar al país, a la vez que advierte sobre el riesgo de convertir la reversión en un hecho punitivo. Asimismo manifiesta su duda de que Venezuela esté preparada para asumir el manejo de la industria petrolera, señalando por tanto el peligro de precipitar una crisis en la industria de hidrocarburos que puede crear coyunturas difíciles. También habla de la necesidad de no caer en una carrera demagógica en torno al tema petrolero.

Sectores empresariales manifiestan que el Congreso Nacional se está precipitando en la discusión del proyecto de Ley de Reversión Petrolera sin prever las posibles consecuencias que ello puede acarrear en el futuro económico del país. Afirman los citados sectores que por tratarse de la industria peerolera nacional se impone una consulta en esta materia a todos los sectores organizados de la sociedad venezolana, para aprobar al final una ley que sea el resultado de un consenso nacional y no de la opinión unilateral de los partidos políticos que constituyen mayoría en el Congreso. Señalan asimismo que si esa ley se aprueba apresuradamente en la forma como está contenida en dicho proyecto, ello conduciría a *una virtual nacionalización de la industria del petróleo,* posibilidad que estaría en franca colisión con principios constitucionales y con el espíritu de la Ley de Hidrocarburos vigente.

Parlamentarios de oposición, miembros de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, dicen que más de dos mil millones de bolívares pasarían a propiedad de la nación en bienes provenientes de la primera etapa de reversión petrolera referida a las concesiones convenidas durante el régimen del general Juan Vicente Gómez, sin incluir por consiguiente las concesiones otorgadas durante los gobiernos posteriores y cuya fecha de vencimiento es después de 1983.

Con respecto a la proposición de Copei de nombrar una comisión de juristas encargada de analizar el Proyecto de Ley de Reversión, estiman los mismos parlamentarios que tal proposición debe ser analizada antes de dar cualquier opinión, mientras que otros líderes entrevistados consideran como una maniobra copeyana la mencionada moción y declaran que eso es para "echarle agua" al proyecto de ley en referencia.

Junio 10

En declaraciones dadas a la prensa, el doctor Oscar Guruceaga plantea que Fedecámaras no ha formulado un rechazo total a la Ley de Bienes Afectos a Reversión Petrolera —pues aún no ha tenido tiempo de analizarla— sino que sólo exige que dicha ley sea objeto de una amplia consulta entre los diversos

sectores de la vida nacional. Al respecto afirma el doctor Guruceaga que se vienen realizando reuniones con diversas tendencias políticas para lograr que, a nivel del Congreso Nacional, se abra el más amplio diálogo sobre ese proyecto, pues un estudio bien estructurado del mismo puede ser útil para dar confianza y seguridad a las futuras inversiones dentro de un marco jurídico que el Estado venezolano respetará y hará respetar. Insiste el presidente de Fedecámaras que no existe ninguna premura en la aprobación de esa ley, y que no es procedente, además, en un sistema democrático que los únicos con pleno derecho a opinar en materia tan compleja sean los congresantes.

El doctor Gonzalo Barrios, presidente del partido Acción Democrática, declara a la prensa que esa organización política está dispuesta a escuchar "las opiniones de todos los interesados y de quienes tengan alguna opinión importante que dar a conocer", antes de aprobarse la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Agrega el doctor Barrios que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, al analizar el tema ya referido, aprobó dos recomendaciones: una, que se oigan las opiniones de todos los interesados y de quienes tengan alguna opinión importante que dar a conocer; y otra, que se deseche toda idea de llevar la discusión a un ritmo fuera de lo normal, pues no hay interés alguno en precipitarse en la materia que se debate.

En consulta realizada a los doctores Alfredo Ramírez Torres, Eloy Lares Martínez y Ramón Escovar Salom sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que se discute en el Congreso Nacional, éstos opinan lo siguiente:

El doctor Alfredo Ramírez Torres dice que el proyecto de Ley de Reversión es posiblemente el instrumento de mayor importancia en relación con el desenvolvimiento de la industria petrolera en Venezuela durante los próximos diez o quince años y las consecuencias de su sanción serán, en uno u otro sentido, determinantes directas en el desarrollo económico y social del país en el futuro previsible. Señala el doctor Ramírez Torres que tal como está concebido el proyecto de Ley, podrían paralizarse o quedar reducidas a una mínima expresión las nuevas inversiones de las concesionarias, con lo que al mismo tiempo podrían disminuir la eficiencia de la producción y debilitarse a la larga la posición de nuestro petróleo frente al producto logrado a base de grandes inversiones de justificación estratégica; de ser así correríamos el riesgo de que, al asumir la producción en el plazo previsto, hayamos perdido las ventajas de aprovisionar los mercados sin interrupciones ni fluctuaciones aleatorias.

Finaliza el doctor Ramírez diciendo que "todos creemos en el nacionalismo de nuestros parlamentarios, queremos confiar también en su sabiduría".

El doctor Eloy Lares Martínez, ex Procurador General de la República, advierte que aún no conoce el texto del proyecto de Ley de Reversión. No obstante dice que, de acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley de Hidrocarburos, al extinguirse las concesiones, pasan a propiedad de la nación las tierras y obras permanentes destinadas a la explotación de dichas concesiones, conforme a un principio jurídico indiscutible consagrado en el Código Civil. Agrega que para él no existe la menor duda de que las empresas concesionarias, obligadas como están a transferir la propiedad de los bienes expresados al término de la concesión, tienen también el compromiso de conservar los mismos sin poder disponer de ellos ni desmantelar instalaciones.

El diputado Ramón Escovar Salom expresa que el Congreso Nacional debe legislar con mucho cuidado en la materia petrolera por la importancia futura de las leyes que se aprueben para el destino económico del país. Dice también el diputado Escovar Salom que no conoce el texto del proyecto de Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos y que no ha estudiado suficientemente la materia, no pudiendo, por tanto, opinar en profundidad sobre el tema. Advierte sin embargo que ha oído observaciones jurídicas al proyecto, y que aun siendo soberano el Congreso, considera recomendable que sean oídos y discutidos ampliamente todos los aspectos de tan delicada materia.

El doctor Pedro Segnini La Cruz, secretario general del Frente Nacional Democrático (FND), señala en su intervención en la Cámara de Diputados el 9 de junio que es necesario, no sólo en defensa de los intereses nacionales sino en función de los mismos concesionarios, que existan normas claras y precisas que determinen los alcances de la Ley de Reversión Petrolera. Expresa que se requiere hacerle observaciones al proyecto por cuanto de aprobarse la ley con "debilidades" podría ser declarada nula por inconstitucional.

El presidente de Promozulia, doctor César Casas Rincón, declara que tiene el temor de que el planteamiento polémico sobre la reversión petrolera dé lugar a una paralización del proceso de firma de los contratos de servicio. Señala que cuando se anunció el otorgamiento de contratos de servicio la economía zuliana reaccionó positivamente y se puso en marcha una etapa de recuperación. La demora en la firma de tales contratos, señala, puede repercutir desfavorablemente sobre la región zuliana.

Los partidos AD, MEP, URD, FDP y PCV rechazan la proposición de Copei en el sentido de crear un comité de juristas que se encargue de estudiar el proyecto de Ley de Reversión, ya que, según tales organizaciones políticas, ello demoraría la aprobación del estatuto legal de la materia.

La Ley de Reversión se torna en materia de discrepancia entre las opiniones emitidas al respecto. Unos, como Alvaro Silva Calderón y Juan José Navarrete Senior, consideran que la reversión comprende las concesiones y los bienes adquiridos por el concesionario para explotarlas donde quiera que se encuentren estos bienes. Otros, como Arístides Rangel y Luis Guillermo Arcay, afirman que la reversión se refiere sólo a la parcela de la concesión y las obras que en ella se encuentren en el momento de la extinción.

El doctor Rubén Sáder Pérez declara que todo intento de modificación parcial del régimen jurídico aplicable a las compañías concesionarias de hidrocarburos, debe estar dirigido a evitar cualquier posibilidad de debilitamiento en el derecho del Estado a continuar la operación en las áreas cuyo vencimiento ocurrirá en 1983.

El doctor Alvaro Silva Calderón, redactor del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, declara que J. P. Pérez Alfonzo intervino de manera activa en la última fase de la elaboración de ese proyecto. Asimismo señala el doctor Silva Calderón que se extraña con las declaraciones del doctor Manuel R. Egaña sobre la reversión petrolera por cuanto éste ha respaldado en oportunidades anteriores sus propias ideas expuestas sobre la materia.

Junio 11

El ministro encargado de Hacienda, doctor Carlos Enmanuelli Llamozas, declara que el gobierno nacional mantiene una firme y celosa preocupación para que todo lo que se haga en relación con los derechos de reversión de las concesiones petroleras no se traduzca en mengua del desarrollo autónomo de la economía. Agrega que se adelantan los análisis correspondientes para garantizar el éxito de las medidas que en tal sentido sean tomadas.

El señor Mario Auvert, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, expresa que el Congreso Nacional debe estudiar con mucho cuidado el Proyecto de Ley de Reversión Petrolera, ya que éste puede determinar en un futuro

inmediato el comportamiento de toda la actividad petrolera, además de influir en el desarrollo de las exportaciones del país. El señor Auvert recuerda con preocupación lo ocurrido cuando fue cancelado el régimen de concesiones "de manera apresurada", sin tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad normal de esa industria.

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, expresa que considera indiscutible la conveniencia de un instrumento legal que precise los derechos de la nación derivados de las normas constitucionales y legales sobre reversión, y que asegure los intereses de Venezuela. Piensa el doctor Caldera que la aspiración de los venezolanos debe orientarse en el sentido de lograr un instrumento jurídico que sea operante y justo.

El doctor Enrique Sánchez, dirigente empresarial, considera como no absolutamente necesaria la Ley de Reversión Petrolera por cuanto, según él, en la legislación vigente del país existen medidas apropiadas para asegurar la titularidad de un derecho inalienable para el Estado y garantizar la devolución de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos.

Según directivos de la empresa Mito Juan, si se mantiene el texto actual de la Ley de Reversión Petrolera, ésta sería confiscatoria e inconstitucional. En carta dirigida al doctor Antonio Leidenz, Presidente de la Cámara de Diputados, sugieren los mencionados directivos, la reforma de los artículos 3 y 6, y la supresión de los artículos 12 y 13, por considerarlos violatorios de la garantía constitucional y de derechos adquiridos.

Juan Pablo Pérez Alfonzo advierte que hay que distinguir entre las empresas privadas propiamente como tales y las que administran bienes nacionales como son las concesiones petroleras. Con ello alude a los sectores que adversan al proyecto de Ley de Reversión Petrolera, y que tratan de atemorizar a la opinión pública. Se trata de empresas a las que se ha entregado la riqueza de todos, riqueza que no se puede enajenar.

Representantes de los partidos URD y MEP, Luis Beltrán Prieto F., Jesús Angel Paz Galarraga, Jóvito Villalba, Adelso González, Omar Rumbos, Demetrio Boesner, entre otros, se reúnen en la casa de Luis Beltrán Prieto Figueroa para coordinar las actuaciones de la Nueva Fuerza en el Parlamento y en la calle, en defensa del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, doctor Luis Alberto Rincón, denuncia que el proyecto de Ley de Reversión Petrolera podría interpretarse como la nacionalización de esa industria. Señala que si el proyecto es aprobado, Venezuela quedará bajo un clima económico desfavorable en el campo internacional.

Fedecámaras realiza gestiones y consultas con los partidos políticos para que se abra a nivel del Congreso Nacional el más amplio diálogo sobre el proyecto de Ley de Reversión Petrolera. En Fedecámaras se expresa confianza sobre el clima de receptividad encontrado en los partidos políticos.

Jefes de las fracciones políticas de Copei, AD, URD, FND, FDP, MEP y PCV estudiarán con el procurador general de la República, doctor José Guillermo Andueza, y el asesor jurídico del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, posibles modificaciones al proyecto de Ley de Reversión Petrolera, a fin de evitar el que posteriormente se demande la nulidad de algunos artículos ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de mejorar el proyecto para que no ofrezca nada vulnerable. Particularmente se discuten los artículos 1 y 9 relacionados con los bienes afectos a reversión. El Procurador presenta modificaciones importantes al proyecto de Ley.

El Comité Ejecutivo de la CTV se pronuncia porque el Estado adopte todas las medidas legales necesarias para garantizar la continuidad de la industria petrolera hasta el vencimiento de las concesiones en 1983. Considera la CTV que debe impedirse que las compañías explotadoras de ese recurso dispongan a su antojo de tierras, equipos y sigan desmantelando las instalaciones.

Hugo Briceño Salas declara que Copei no tiene ninguna oposición de fondo al proyecto de Ley de Reversión Petrolera. La iniciativa de crear la comisión de juristas es del gobierno y del partido ya que la eficacia de la Ley se garantiza con un instrumento en el cual no existan vicios de ninguna naturaleza. Señala Briceño Salas que no han recibido presiones ni las aceptarán de ningún organismo económico o de empresas extranjeras con respecto al proyecto de ley referido.

Junio 12

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, considera que es necesaria una ley sobre Reversión Petrolera, pero deben tomarse

todas las previsiones legales para que la misma quede resguardada de cualquier solicitud de nulidad ante la Corte Suprema. Agrega que el gobierno no tiene ni ha presentado ningún proyecto referido a la reversión.

El Procurador General de la República, doctor José Guillermo Andueza, declara que la Ley de Reversión Petrolera viene a "llenar un vacío" en la legislación venezolana. Se muestra así de acuerdo con el espíritu, el propósito y la razón de la Ley. Señala que lo entregado por él a los representantes de los partidos políticos fue un papel de trabajo que contiene un estudio sobre cuestiones jurídicas, no políticas ni económicas, a fin de que el proyecto salga lo mejor posible desde el punto de vista del derecho, es decir, que sea invulnerable en lo jurídico.

En la revista *Petróleo Venezolano,* que dirige Luis Vallenilla, se señala que para 1983, fecha en que comienza la reversión de las concesiones petroleras, todas las inversiones hechas en éstas por la industria privada pueden estar amortizadas. Agrega, como muy peligroso, el que en un momento dado, probablemente antes del vencimiento de las concesiones, la industria pueda no tener la capacidad necesaria para continuar la expansión de su producción y se vea obligada a reducirla. La solución debe buscarse, según afirma esa publicación, en una política encaminada por diversos medios a "estimular de inmediato y en forma intensa", nuevas inversiones y actividades de carácter exploratorio.

El doctor Ramón Escovar Salom declara en Maiquetía que la Ley de Reversión Petrolera que surja debe ser el producto de una elaboración cuidadosa y de la reflexión nacional por cuanto influirá en el futuro del país. Debe discutirse en el Congreso Nacional y para ello es conveniente tomar el tiempo necesario ya que es materia de gran importancia.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, anuncia que ese Ministerio analiza actualmente el proyecto de Ley de Reversión para presentar al Congreso Nacional el criterio del gobierno sobre aquél. Considera que esa ley constituye un instrumento legal cuyos objetivos son plausibles, ya que se trata de lograr un mecanismo específico para la conservación y vigilancia de los cuantiosos bienes que deberán revertir a la nación a partir de 1983. Señala Pérez La Salvia que el gobierno tiene interés en que no se rompa el ritmo de actividades integrales de las petroleras, y niega que haya presentado proyecto alguno de Ley de Reversión.

Declara el doctor Jóvito Villalba que los partidos de la Nueva Fuerza, proponentes de la Ley de Reversión Petrolera, aceptarán todo aquello que mejore la juridicidad de la misma. Pero, agrega, nos opondremos a todo hecho que tienda a quebrantar su eficacia como instrumento jurídico orientado a garantizar el derecho de Venezuela a recibir en buenas condiciones todos los bienes de las concesiones que vencen en 1983. Las reformas propuestas por el Procurador, según le han informado, no son contrarias al propósito nacionalista de la ley. Todo el escándalo que se he formado en medios publicitarios ligados a las empresas petroleras se vendrá abajo cuando quede demostrada su impotencia para alcanzar lo que pretenden: intimidar al gobierno y detener a las cámaras legislativas. Deben convencerse que Venezuela está firmemente decidida a liquidar de su vida económica al colonialismo y la dependencia.

El Movimiento al Socialismo (MAS) apoya el proyecto de Ley de Reversión Petrolera que se discute en el Congreso Nacional. Denuncia que las empresas petroleras y sectores económicos vinculados a ellas promueven una campaña en contra de un instrumento jurídico dirigido a garantizar la propiedad de la nación, a partir de 1983, sobre las concesiones hoy en manos de la industria privada extranjera. Denuncia asimismo que el gobierno de Caldera acelera la firma de los Contratos de Servicio para "aplacar" a las compañías petroleras.

En rueda de prensa el doctor J. P. Pérez Alfonzo afirma que el proyecto de Ley de Reversión Petrolera no choca en ninguna de sus partes con la Constitución Nacional tal como algunos han asegurado. Señala asimismo que los bienes afectos a reversión suman la cantidad de 46.000 millones de bolívares.

La Federación de Centros Universitarios aprueba dar todo su apoyo y respaldo a la Ley de Reversión Petrolera que se discute en el Congreso Nacional. En comunicado emitido por esa Federación se denuncia que sectores ligados al capital foráneo y representantes del pensamiento más antinacional tratan de obstaculizar la aprobación de ese proyecto de Ley que impedirá el desmantelamiento de las instalaciones petroleras.

La Ley de Reversión Petrolera, tal como ha sido introducida al Congreso Nacional, según Carlos Lander Márquez, presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos y directivo de la Creole Petroleum Corporation, es atenta toria contra el derecho y confiscatoria de la propiedad. Agrega que en la le-

gislación vigente el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, en el Código Civil y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, existen disposiciones taxativas aplicables a la reversión de bienes en las concesiones petroleras. Además la Ley en cuestión es tan "totalizante" que su aplicación entrabaría el proceso de administración y operación de las compañías, en tanto que éstas deben tener un permiso del Ministerio de Minas e Hidrocarburos para poder movilizar cualquier equipo de un sitio a otro.

Según declaraciones del doctor Alvaro Silva Calderón, el proyecto de Ley de Reversión Petrolera puede ser objeto de mejoras y perfeccionamientos. Agrega que el MEP no considera necesaria la creación de un cuerpo de notables tal como ha sido propuesto para que estudie el mencionado proyecto, y agrega que en Copei hay personeros que se oponen al texto que se discute en el Congreso. Al referirse a las modificaciones propuestas por el Procurador General de la República ante representantes de todos los partidos políticos, señala Silva Calderón que aquéllas no son de fondo sino que tienden más bien a robustecer jurídicamente el proyecto. Considera que el país político y nacional apoya esa ley pero que a través de una campaña publicitaria deformante se ha hablado de expropiaciones y confiscaciones que no aparecen en el proyecto de Ley que se discute. A las compañías, dice, sólo les queda acatarla cuando la misma sea promulgada.

El diputado independiente Rubén Charlita Muñoz estima que es temprano para legislar sobre Reversión Petrolera. Considera que no debe comprometerse el futuro del país con una medida sobre la industria petrolera tomada 12 años antes de la fecha de vencimiento de las concesiones. Tiempo suficiente para que el país tome conciencia de la solución que deba adoptarse, y para las necesarias consultas a sectores tanto empresariales como laborales que originen el camino más indicado y seguro.

El señor Ernesto Sugar, vocero de la Creole Petroleum Corporation y de la industria petrolera en general, declara que la Ley de Reversión parece tener aspecto de ilegalidad e inconstitucionalidad y es inmensamente impráctica. Agrega que nadie podrá vivir con la burocracia que la misma generaría. Con respecto al proyecto presentado por el Procurador en reunión con las fracciones de los partidos políticos, afirma el señor Sugar, que aquél es decepcionante por cuanto si bien cambia el articulado y las palabras, el contenido es exacto al del proyecto original.

Junio 13

El ex presidente de Venezuela, doctor Raúl Leoni, declara que la reversión es una condición inherente a la naturaleza misma de la concesión. Para él resulta entonces inexplicable e injustificable el que la aplicación práctica de esa condición pueda ser materia de controversia o polémica. La reversión no es ni siquiera una expropiación, por cuanto el ordenamiento legal dispone que las obras, las tierras, las construcciones e instalaciones permanentes, adquiridas o ejecutadas con destino a la exploración o explotación, deben revertir al Estado sin indemnización alguna al extinguirse tales concesiones. Expresa el doctor Leoni que es conveniente la sanción de una Ley que regule la materia, para evitar así dudas cuando llegue el término de las concesiones.

El diputado del MEP, Siuberto Martínez, señala que la Cámara de Diputados acordará trabajar en sesión permanente hasta concluir la primera discusión del proyecto de Ley de Reversión Petrolera. Aprobado éste volverá al seno de la Comisión de Minas y comenzará a correr el plazo de cinco días que fija la Ley para que las personas que así lo deseen concurran a dar su opinión al respecto. Agrega que en la actualidad los expertos que trabajaron en la elaboración del proyecto correspondiente trabajan en el estudio de los elementos nuevos que voluntariamente presentó el Procurador General de la República.

El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo manifiesta que el 80 por ciento de las concesiones petroleras revertirán al Estado apenas entre en vigencia la Ley de Reversión, ya que se trata de áreas ociosas que las compañías no tienen interés en explorar ni explotar. Esto determinará la reversión inmediata, antes de 1983, de grandes áreas de las concesiones petroleras. Asimismo advierte que en el Congreso Nacional se ha hablado de la reforma de la Constitución en caso extremo, pero no porque se piense que la actual Constitución impida sancionar legalmente el proyecto en cuestión.

El doctor Carlos Lander Márquez, directivo de la Creole Petroleum Corporation y el señor J. J. De Liefde, Presidente de la Shell, viajan a Nueva York y a Londres, respectivamente. Ambos declaran que el motivo del viaje es informar a directivos de la Standard y la Royal Dutch Shell, sobre el proyecto de Ley de Reversión Petrolera que se discute en el Congreso Nacional. El doctor Lander Márquez expresa que la industria petrolera no se oponía a la Ley siempre y cuando ésta se ajuste a los preceptos constitucionales respecto a los derechos adquiridos y no obstaculice la administración de las empresas.

El presidente de AD, doctor Gonzalo Barrios, señala que la Ley de Reversión Petrolera ha causado bastante revuelo. Sin embargo, es probable que todo pase pronto ya que nadie se atreve a negar el derecho a la reversión que asiste a Venezuela. Expresa el doctor Barrios que los venezolanos debiéramos estar acostumbrados a estas campañas que se promueven cada vez que algunos actos afectan intereses vinculados con la industria petrolera.

El diputado de AD, doctor Armando Sánchez Bueno, declara que el gobierno con la Ley de Reversión "mata el tigre y le tiene miedo al cuero". Así se expresa luego de declarar el doctor Pérez La Salvia, ministro de Minas, que el gobierno no ha presentado ningún proyecto de Ley de Reversión. Señala el doctor Sánchez Bueno que AD le da todo el apoyo a esa Ley porque es una tesis que han sostenido desde hace años por boca del ex ministro J. P. Pérez Alfonzo. La Cámara de Diputados, dice, está abierta al diálogo para acelerar las opiniones de todos los sectores del país, incluyendo la de "organismos afectados", como son las compañías petroleras.

El doctor Arístides Beaujon, secretario general de Copei, declara en Maturín que la Ley de Reversión Petrolera será aprobada ya que no cederán ante las presiones que puedan hacer las compañías concesionarias. Declara también que esa Ley no representa peligro para el sistema democrático ya que toda ley que sea aprobada en "ejercicio de soberanía" no debe significar amenaza para la nación. Asimismo destaca que la ley no vulnera el derecho de propiedad sino lo reafirma.

Junio 14

La Cámara de Diputados se declara en sesión permanente hasta aprobar en primera discusión el proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. La información la suministra el jefe de la fracción parlamentaria de URD, doctor Omar Rumbos, quien expresa que ese proyecto cuenta con el apoyo casi unánime en el Congreso Nacional como se demostró al ser aprobado por todos los partidos el informe preparado por la subcomisión especial que tuvo a su cargo el estudio del mismo.

El doctor Luis Herrera Campíns asegura que Copei tiene el mismo criterio sobre la reversión que sobre cualquier otro punto de la política petrolera. Es decir, que ese partido considera que a ese problema debe dársele un tratamiento nacional y no sectario. Señala el doctor Herrera Campíns que en Copei

aspiran a una Ley de Reversión inobjetable desde el punto de vista jurídico. Por esta razón es que proponen que el proyecto sea considerado por una comisión de juristas de probado sentido nacionalista.

El doctor Juan José Navarrete Senior, consultor jurídico del Ministerio de Minas y de la CVP, señala que el concesionario no tiene propiedad sobre bienes concedidos para la explotación de los hidrocarburos. Además dice que el derecho de reversión está perfectamente determinado en la Ley de Hidrocarburos y en la Constitución Nacional. Es necesario, según el doctor Navarrete, que los instrumentos con que se han venido explotando las concesiones pasen al Estado porque la explotación del petróleo es de utilidad pública.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, informa que a pesar de que ese Ministerio no tiene ningún proyecto específico sobre Ley de Reversión Petrolera, mantiene contacto con el grupo político que trabaja en ese proyecto en el Congreso. El ministro no da su opinión ni sobre las declaraciones de Pérez Alfonzo referidas a que con la aprobación de la ley el 80 por ciento de las concesiones pasarán a la nación, ni si la CVP está preparada para asumir la explotación de las áreas devueltas.

El diario *Pravda* de Moscú señala que en América Latina se están tomando medidas tendientes a la defensa de los intereses de la región que permiten la consolidación de su independencia. Al comentar algunas de las leyes aprobadas expresa que en Venezuela, por ejemplo, y a pesar de que las compañías deben entregar los bienes e instalaciones de las áreas otorgadas en concesión, la Creole Petroleum Corporation procede a desmantelar los campos y transportar los bienes al extranjero.

Junio 15

El presidente de Fedecámaras, doctor Oscar Guruceaga, señala que no existe venezolano que esté totalmente opuesto a la reversión petrolera. Se debe tomar en cuenta de que la misma está prevista en la Ley de Hidrocarburos de 1943. Lo que se aspira, según el doctor Guruceaga, es que la Ley a aprobarse sea eficaz y esté enmarcada estrictamente en el orden jurídico y constitucional de la nación. Una ley que dé confianza al sistema democrático. Agrega que en base a gestiones realizadas y a consultas entre los propios partidos puede lograrse una Ley "como lo pide la colectividad venezolana". También revela que quizás no habrá tiempo de que Fedecámaras haga un pronunciamiento en estos momentos, cuando hay un amplio consenso político.

En la continuación del debate que se adelanta en la Cámara de Diputados, Copei anuncia su apoyo irrestricto a la Ley de Reversión Petrolera. Así lo señala el diputado Angel Sánchez Bernal, quien dice además que la reversión es algo consagrado en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos. El diputado Douglas Dáger, del FDP, en intervención parlamentaria reitera su respaldo al proyecto en cuestión, expresando, entre otras cosas, que no se necesita ser técnico petrolero para entender que en la legislación venezolana existe un vacío en relación con la aplicación práctica del principio de la reversión.

El doctor Francisco Carrillo Batalla, diputado independiente, considera que los ataques al proyecto de Ley de Reversión Petrolera son contrarios al interés nacional y carecen de fundamentos serios, y asegura que no se trata de despojar a las compañías petroleras, sino de legislar sobre normas pautadas en la Constitución Nacional y en la Ley de Hidrocarburos. Refiere el doctor Carrillo la función esencial que cumplirá la Ley al fijar puntos concretos que determinen la obligación de mantener en perfecto estado las instalaciones por parte de las empresas petroleras.

Alfredo Machado Gómez, presidente del Banco Mercantil y Agrícola y ex presidente del Banco Central de Venezuela, se muestra en desacuerdo con algunos aspectos del proyecto de Ley de Reversión Petrolera. Señala que en lo político se observa una divergencia entre la estrategia desarrollada por el Ejecutivo Nacional de obtener un mejor trato para el petróleo venezolano en Estados Unidos, y una actividad legislativa a la que califica de precipitada y quizás temeraria. En lo jurídico afirma que han sido expuestos numerosos reparos de forma y fondo al proyecto. Advierte que hay un consenso sobre la necesidad de una reglamentación de esa materia, pero ella debe "conciliar el *status* existente con respecto a los derechos adquiridos por parte de las empresas petroleras" y los reglamentos que complementen el *modus operandi* para la reversión en 1983.

El secretario general de AD, señor Carlos Andrés Pérez, informa que ese partido está dispuesto a estudiar y hacer las modificaciones que se juzguen convenientes y necesarias al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Expresa el citado dirigente que históricamente Acción Democrática es el partido que ha expuesto la tesis nacionalista que plantea el auténtico concepto jurídico de la reversión de las concesiones petroleras.

Dagoberto González, diputado de Copei, declara que de manera privada ese partido informó a las fracciones parlamentarias del Congreso sobre fallas jurídicas que contiene el proyecto de Ley de Reversión para evitar que intereses internacionales puedan esgrimirlas y entrabar así su aprobación. Con esto se evitará el desmantelamiento de los campos petroleros para que al vencimiento de las concesiones reviertan a la nación en condiciones favorables todos los equipos e instalaciones.

Las fracciones políticas del Congreso Nacional acuerdan iniciar el día 16 un período de consultas a todos los sectores interesados sobre el proyecto de Ley de Reversión. El acuerdo es adoptado por Pedro Pablo Aguilar (Copei), Arturo Hernández Grisanti (AD), Omar Rumbos y Francisco Faraco (URD), Siuberto Martínez y Alvaro Silva Calderón (MEP), Douglas Dáger y Angel Zambrano (FDP), y Radamés Larrazábal (PCV). Pedro Pablo Aguilar declara que el objetivo es que el proyecto sea sometido a estudio, pero sin retardar el proceso legislativo del mismo.

El diputado de la fracción independiente FIP, Enrique Azpúrua Ayala, señala en la continuación del debate sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, en la Cámara de Diputados, que el sistema de democracia en Venezuela no está amenazado por la discusión de la mencionada Ley, y que una actitud complaciente del Congreso Nacional en la materia sí conllevaría a la amenaza del sistema.

Advierte el diputado Azpúrua Ayala que, sin calificarse de jurista, viene a recordarle a los juristas que han manifestado su criterio en torno al proyecto de Ley en discusión y a quienes lo hagan en el futuro, que no se puede ser muy legalista sobre el mismo; pues no es la seguridad jurídica el único objetivo y finalidad del derecho, ya que existen otras dos finalidades como son la justicia y el bien común. Dice el parlamentario del FIP que el proyecto de Ley en discusión viene a llenar una laguna legislativa y garantizar al Estado el derecho de que reviertan a la nación lo que se considera una universalidad de bienes, que son indivisibles e inseparables.

El directorio de Fedecámaras considera un informe sobre la situación del sector petrolero presentado por la Comisión de Petróleo de ese directorio. El presidente de Fedecámaras, doctor Oscar Guruceaga, declara que estima correcta una reglamentación de la reversión petrolera que resguarde los intereses nacionales dentro de la Constitución y las leyes.

En torno a declaraciones suministradas a la prensa por el doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, referidas a la Ley de Reversión, opinan los siguientes parlamentarios:

El doctor Alvaro Silva Calderón, diputado por el MEP, dice que las áreas otorgadas en concesiones a las empresas de hidrocarburos deben ser exploradas por las mismas y no mantenerlas ociosas y estériles, pero si las concesionarias impiden esto, que es la esencia de la concesión, deben reintegrar al Estado las áreas que les han sido concedidas por mantenerlas en situación de ociosidad.

El diputado de Acción Democrática, doctor Arturo Hernández Grisanti, dice que las declaraciones de J. P. Pérez Alfonzo son de gran trascendencia, demostrando con cifras que, aparte de la fundamentación jurídica de la Ley de Reversión, es absolutamente justa desde el punto de vista económico. El presidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, doctor Francisco Faraco, parlamentario de URD, manifiesta que las declaraciones del ex ministro Pérez Alfonzo contribuyeron a esclarecer una serie de aspectos de la Ley de Reversión, y a darle mayor solidez a las fundamentaciones jurídicas expresadas por quienes han apoyado el proyecto de Ley con el criterio de que ella es fundamental para la continuidad de la actividad petrolera después de 1983.

Said Moanack, parlamentario independiente, advierte que un artículo del proyecto relativo a la reversión de las áreas no exploradas asegura, antes del vencimiento de las concesiones de 1983, la restitución a la nación de grandes áreas petrolíferas no explotadas por los concesionarios, y agrega que las declaraciones de Pérez Alfonzo pueden considerarse como una ampliación de la exposición de motivos del proyecto de Ley de Reversión que jusifican plenamente su aprobación.

Ramón Imery, presidente del Consejo Nacional del Comercio, informa a la prensa que esa organización ha designado una comisión de juristas para elaborar un estudio y asesorar al organismo en la materia referida al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que se discute en el Congreso Nacional. La Comisión la integran los doctores Félix Blasini, Gilberto Carrasquero, Rafael Alvarez Peñaloza, Ciro Añez y César Casas Rincón. Añade el señor Ramón Imery que una Ley de esta naturaleza corresponde al interés de todo el país, pero debe estar enmarcada dentro del sistema legal vigente.

El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, en rueda de prensa celebrada con directivos y miembros de la Asociación Venezolana de Periodistas, manifiesta su

apoyo al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, y sostiene que las concesionarias se han llevado del país, desde 1917, más de 100.000 millones de bolívares y que su activo actual no pasa de los 7.500 millones. En relación con la pregunta que le formula el periodista del *Daily Journal* sobre la capacidad de Venezuela para poner en funcionamiento una industria petrolera nacional, el doctor Pérez Alfonzo afirma que nuestro país sí está en capacidad de continuar la actividad de la industria nacionalizada. Casi al finalizar sus declaraciones el ex ministro de Minas e Hidrocarburos denuncia que el ministro de Hacienda, doctor Pedro Tinoco, con su política de gasto público, está estrangulando al gobierno para mantenerlo siempre en un estado de dependencia con respecto a los intereses extranjeros.

El Movimiento al Socialismo (MAS) expresa su respaldo al proyecto de Ley de Reversión Petrolera que se discute en el Congreso Nacional, y alerta contra las presiones tendientes a modificar negativamente el proyecto. Esa organización política señala como una concepción equivocada de las fuerzas autoras del proyecto el no haber aprovechado el lapso entre su presentación al Congreso Nacional, marzo del presente año, y su discusión en los días que transcurren, para movilizar la opinión pública y garantizar una eficaz resistencia a las presiones gubernamentales, empresariales y extranjeras que inevitablemente actuarán contra la Ley. Agrega la declaración que para el MAS la Ley de Reversión Petrolera es un instrumento fundamental de la nacionalización. Advierte esa misma organización política que en los organismos de control y vigilancia deben participar también representantes de los poderes regionales y municipales, representantes de los obreros y empleados petroleros, de otros sectores de la economía, y en general de los sectores populares del país, escogidos por las masas y no designados por arriba. Expresan finalmente que la Ley de Reversión Petrolera debería establecer un plazo breve para que las empresas concesionarias comiencen la explotación de las áreas inexplotadas que aún mantienen en su poder o, en caso contrario, que las restituyan de inmediato al patrimonio nacional.

El doctor Rubén Sáder Pérez advierte que mientras se discute la reversión se están dando los pasos finales para entregarle a las compañías internacionales nuevas áreas en el Lago de Maracaibo. Propone en consecuencia que para reforzar el planteamiento de la reversión se proceda con urgencia a detener la acción del Ejecutivo y que se confíe a la CVP la exploración del sur del Lago de Maracaibo. Considera también el doctor Sáder Pérez que el debate

sobre la reversión ha demostrado la conveniencia de que Venezuela adelante medidas para la nacionalización de la industria petrolera.

Junio 16

Luego de realizarse en La Casona una reunión del presidente de la República, doctor Rafael Caldera, con los miembros de la Dirección Nacional de Copei, y en la cual se analiza la situación que se ha presentado con motivo de la discusión en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión, el Secretario General de Copei, doctor Arístides Beaujon, declara a los periodistas que su partido es del criterio de que al proyecto de Ley se le debe dar la mayor juridicidad posible, y agrega que en la mencionada reunión con el señor Presidente se habían analizado las reacciones de los sectores económicos de la nación ante el proyecto de Ley en discusión. Por su parte, el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, dice que lo importante de la Ley de Reversión es que no colida con la Constitución Nacional.

El secretario general de URD, doctor Jóvito Villalba, expresa que el Congreso Nacional está creando "una nueva legalidad" dentro de un proceso que califica de irreversible y que conducirá a la nacionalización del petróleo, del hierro y de la banca. Se muestra, sin embargo, preocupado por la manera en que abogados y periodistas vienen denunciando la Ley de Reversión como confiscatoria y de desconocimiento de los derechos adquiridos por las compañías. Niega abiertamente tales imputaciones y señala que el pueblo venezolano tiene la razón cuando aspira a "nacionalizar su riqueza petrolera".

El doctor Luis Vallenilla, en debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados, expresa que se lesiona el concepto de seguridad de las inversiones, especialmente las extranjeras, con las nuevas causales de la reversión contempladas en el proyecto de Ley correspondiente, y habla de la manera irregular como se ha venido desarrollando la consideración de esta materia tan importante para el futuro del país. En relación con el proyecto que se discute, el doctor Vallenilla señala que el mismo quebranta el concepto de seguridad de las inversiones al cambiar las reglas del juego, las normas legales aplicables, y expresa además que ese mismo proyecto de Ley es, desde un punto de vista jurídico, improcedente porque incide sobre igual objeto que trata la Ley de Hidrocarburos vigente, y es inconstitucional porque viola el principio de irretroactividad de las leyes. Luego de las consideraciones legales en torno al proyecto de Ley de Reversión, el parlamentario Luis Vallenilla aborda el pro-

blema político, señalando que una ola de "terrorismo ideológico" con motivo del tratamiento de la materia de reversión, donde se quiere presentar a las compañías petroleras como enemigas de la nación. En esa misma intervención formula críticas a los doctores Pérez Alfonzo y Hernández Grisanti, a quienes pregunta que por qué cuando ejercieron el gobierno no fue ampliado el alcance de lo restringido de la ley por vía reglamentaria. El doctor Vallenilla establece después una comparación entre la década del 50, de expansión petrolera, cuando se vendían las concesiones a los precios más altos que se hayan pagado en la historia, y la década del 60, como lapso de decadencia donde se inscribe la política de los doctores aludidos.

Las Asambleas Legislativas de los Estados Miranda y Aragua aprueban, por separado, acuerdos de apoyo irrestricto al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que se discute en el Congreso Nacional. El acuerdo de la Cámara Legislativa de Miranda condena en la forma más enérgica a aquellos sectores que se han colocado al servicio de los monopolios extranjeros en contra de los intereses de Venezuela, a la vez que solicita similares acuerdos del resto de las legislaturas y Concejos Municipales.

En su intervención en la Cámara de Diputados, el doctor Francisco Carrillo Batalla expresa su respaldo al proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, pero manifiesta la necesidad de acoger las sugerencias que impliquen su mejora en el aspecto jurídico, y agrega que ni la Constitución Nacional ni las leyes pueden obligar a la nación a permitir el deterioro de su patrimonio minero o petrolero por descuido del mantenimiento y desarrollo de las concesiones y de sus respectivas instalaciones.

Después de consultar con varios abogados los aspectos jurídicos del proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, las empresas concesionarias elaboran sus correspondientes informes. Por su parte la Creole Petroleum Corporation produce el suyo, y uno de sus más destacados ejecutivos lo consigna personalmente en manos de los secretarios generales de algunos partidos políticos, entre ellos el doctor Jóvito Villalba y el señor Carlos Andrés Pérez, quienes por lo demás mantienen reserva acerca de las visitas de los representantes de las compañías petroleras.

El presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo, doctor Pedro J. Mantellini, manifiesta, en un programa de televisión, que el aspecto más

grave del proyecto de Ley de Reversión Petrolera es que la misma debe cumplirse al vencimiento de las concesiones a partir de 1983.

Junio 17

Dice el diputado copeyano Angel Sánchez Bernal que su partido logró que las diferentes fracciones políticas hayan acogido las mejoras de carácter técnico-jurídico que el gobierno, a través del Procurador General de la República, le hizo al proyecto original de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

El diputado Jorge Olavarría, al darle apoyo al proyecto de Ley de Reversión Petrolera, advierte la necesidad de hacerle modificaciones al mencionado proyecto y dice que se suma a la tesis del diputado Bernardoni, quien expresa reservas de que el proyecto una vez convertido en ley pudiera presentar vacíos legales en cuanto a posibles interpretaciones de retroactividad para su aplicación.

El diputado Arturo Hernández Grisanti señala que el proyecto cuenta con el apoyo de todas las fracciones y no es confiscatorio. Dice que para 1983 las concesionarias habrán recuperado el capital invertido en instalaciones y equipos, y además habrán obtenido extraordinarias ganancias. Después, al citar ocho casos de poder de decisión de empresas extranjeras que pretendían violar la soberanía nacional haciendo caso omiso de la Ley de Minas, señala concretamente a la Shell y la Orinoco Mining Co. Al referirse al diputado Vallenilla lo califica de vocero y agente de la Shell en Venezuea a través de su subsidiaria de CAVENDES.

La Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados inicia hoy sus audiencias públicas recibiendo a las 10 a.m. al presidente de la Cámara del Petróleo, doctor Pedro Mantellini, y a las 11 a.m. al presidente de la Creole, señor Robert Dolph, para conocer las opiniones de las organizaciones privadas ya señaladas en torno al proyecto de Ley de Reversión Petrolera que se discute en el Congreso Nacional. Estas audiencias se prolongarán hasta el próximo miércoles con distintas instituciones para que manifiesten sus opiniones al respecto.

El 16 de junio de 1971, en la sesión de la Cámara de Diputados, después de las intervenciones de los parlamentarios Jesús Bernardoni, Siuberto Martínez, Jorge Olavarría y Arturo Hernández Grisanti, se aprueba el artículo 1º

del proyecto de Ley de Reversión Petrolera, luego de una modificación presentada por el diputado Siuberto Martínez, previamente sancionado por los jefes de todas las fraccciones políticas representadas en el Congreso.

El diputado copeyano, Jesús Bernardoni, denuncia en su intervención que un equipo de perforación valorado en cuatro millones de dólares de la empresa Mene Grande fue sacado clandestinamente del país y hundido en las costas de Nigeria. También hace consideraciones de carácter legal, económicas y políticas en torno al proyecto de Ley.

El diputado Siuberto Martínez, quien propone una redacción sustitutiva del artículo 1º, afirma que voceros de las compañías petroleras han expresado opiniones deleznables sobre el proyecto de Ley en discusión, y menciona de manera expresa a la empresa Mito Juan como vocero de las concesionarias.

El doctor J. P. Pérez Alfonzo expresa su absoluta confianza de que el proyecto de Ley de Reversión sea aprobado con el más amplio consenso político. Señala que en el país existen, incluso en el orden político, circunstancias favorables para sancionar un proyecto como aquél. Asimismo observa que el aspecto esencial del proyecto es el de la reversión que afecta las áreas ociosas, no explotables económicamente, que controlan las compañías petroleras. Por esta razón, al afectar la reversión esas áreas, la nación sabe con lo que va a contar en el vencimiento de las concesiones.

La Cámara de Diputados acuerda modificar el texto del artículo 1º del proyecto de Ley de Reversión, acogiendo de esta manera las sugerencias hechas por el Procurador General de la República. El nuevo texto es presentado por el diputado del MEP, Siuberto Martínez, a nombre de la casi totalidad de las fracciones políticas representadas en el Parlamento y que expone su apoyo al proyecto. Ellas son: AD, MEP, URD, COPEI, FDP y PCV más el voto de diputados independientes.

La Cámara de Diputados aprueba en primera discusión el proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos con una mayoría abrumadora de votos. El anuncio de la aprobación es hecho por el presidente de la Cámara, doctor Antonio Leidenz. El proyecto pasa de nuevo a la Comisión de Minas e Hidrocarburos de donde es devuelto a la Cámara de Diputados para su segunda discusión. Se acogen la mayoría de las proposiciones hechas por el Procurador General de la República modificándose así el proyecto original.

Junio 18

Se inician las audiencias en la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados con la intervención de la Cámara de la Industria del Petróleo y directivos de la Creole Petroleum Corporation, quienes exponen observaciones de fondo al proyecto de Ley de Reversión. Los doctores Pedro J. Mantellini, Manuel Azpúrua y Domingo Noriega, en representación de la Cámara del Petróleo, señalan que se ha extendido tanto el proyecto que va más allá de lo que para la misma reversión pauta la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. Manifiestan los representantes de las empresas privadas su preocupación por el llamado "fondo de garantía" al que consideran innecesario. En representación de la Creole exponen ante la Comisión de Minas los señores R. N. Dolph, Guillermo Rodríguez Eraso y Wolf Petzall. Señalan que el proyecto de Ley de Reversión, de ponerse en vigencia, permitirá una intervención total del Ejecutivo a través del requisito de la autorización previa. El señor Dolph señala que tal como está redactado el proyecto tendría efectos muy negativos para las operaciones de las empresas, y la reversión, en ciertos casos, puede producirse con bastante anticipación a 1983.

Declara el diputado José Herrera Oropeza que la industria petrolera y la Cámara del Petróleo llevan a cabo una ofensiva con el objetivo de lograr que sea modificada sustancialmente la Ley de Reversión.

Junio 19

El diputado Germán Borregales, secretario general del MAN, declara que la Ley de Reversión se aprueba en primera discusión en el Congreso sin su voto. Considera que ese proyecto, una vez sancionado, se convertirá en un "suicidio" para la economía nacional y hasta en el "suicidio de la democracia venezolana". Señala que los únicos diputados que hicieron objeciones al proyecto de Ley fueron Luis Vallenilla, Nerio Neri y Jorge Olavarría. Advierte que la ley es el comienzo del fin del bienestar económico y social que disfruta el país.

Los doctores Alvaro Silva Calderón y Juan José Navarrete Senior presentan un análisis jurídico de la Ley de Reversión Petrolera, y califican de simplista la posición de quienes sostienen la tesis de la "reversión simple" referida a la parcela y lo que ésta contenga en su superficie. Afirman los doctores Silva Calderón y Navarrete que quienes sustentan esa tesis no toman en cuenta las concesiones de refinación autónomas, y excluyen asimismo de las de transporte y refinación anexas lo ubicado fuera de las parcelas. Según los abogados men-

cionados, la reversión implica devolver al Estado todos los activos de las empresas.

El Instituto Venezolano del Consumidor acepta la invitación formulada por el Congreso Nacional para que instituciones del país envíen sus opiniones acerca del proyecto de Ley de Reversión Petrolera. Considera el Instituto, en carta enviada al presidente del Congreso, doctor J. A. Pérez Díaz, que ese proyecto no debe constituir factor de desaliento para las compañías petroleras, ya que sólo aspira a clarificar y reafirmar la soberanía del Estado, pero que no debe constituirse en obstáculo para la evolución de la industria petrolera durante los doce años que faltan para el vencimiento de las concesiones.

El señor James Akins, asesor petrolero del presidente Nixon y jefe de la División de Energía del Departamento de Estado, se entrevista con el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia. Rehúsa declarar a los periodistas sobre la reversión, y señala sólo que espera que la legislación sobre la materia tome en cuenta todos los intereses vinculados a la misma. Akins declara además que se excusa de opinar por cuanto es una materia de exclusiva competencia de Venezuela.

La Comisión de Minas de la Cámara de Diputados solicita de la Creole Petroleum Corporation y de otras compañías petroleras que presenten por escrito sus recomendaciones sobre los artículos de la Ley de Reversión que afecten de manera directa el desenvolvimiento de la industria. Promete la Comisión estudiar tales sugerencias siempre que no colidan con el espíritu del proyecto de Ley.

El presidente internacional del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), señor John P. Phelps, declara que el proceso de discusión del proyecto de Ley de Reversión Petrolera está despertando gran interés en los medios de la empresa privada a nivel continental. Agrega que la Ley de Reversión, que incide sobre el elemento más dinámico de la economía venezolana, debe ser estudiado a la luz de la situación petrolera internacional. Expresa que las relaciones jurídicas establecidas entre las empresas privadas y el Estado, no deben ser lesionadas de manera tal que afecten la estabilidad de la industria privada.

La Cámara de Comercio e Industria del Estado Aragua se pronuncia en contra de la aprobación apresurada del proyecto de Ley de Reversión Petrolera.

Declara su presidente, el señor Juan A. Villegas, que cualquier decisión del Congreso Nacional debe ser producto de una consulta amplia con los sectores interesados para evitar una paralización o reducción de nuevas inversiones de capital extranjero. Sugiere esa Cámara que se apruebe una ley que alcanzando los objetivos deseados sea asimismo factor favorable a las inversiones foráneas.

El Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Hidrocarburos (Fetrahidrocarburos), en documento entregado a la prensa por su presidente, señor Antonio Machado, apoya el proyecto de Ley de Reversión Petrolera, considerándolo como un "paso de soberanía y dignidad nacionalista". Agrega, entre otras cosas, que el derecho de reversión está consagrado de manera expresa en la legislación venezolana, y que esa ley dará al Estado el instrumento indispensable para que pueda establecer un régimen de vigilancia, control y conservación sobre los bienes afectos a reversión.

Junio 20

En artículo aparecido en *The New York Times,* y titulado "Petroleros evalúan proyecto de Ley venezolano", se advierte que hay inquietud en medios petroleros norteamericanos con respecto al proyecto de Ley de Reversión Petrolera. Registra el artículo que Robert N. Dolph, presidente de la Creole Petroleum Corporation, señala que la empresa no se opone a la finalidad esencial de la reversión, pero que ésta, tal como está el proyecto, va mucho más allá de su objetivo. Agrega el diario que al parecer las compañías invertirán lo menos posible en áreas que a la larga deberán abandonar. Sin embargo, ocurra lo que ocurra, es probable que Venezuela continúe como el mayor proveedor de petróleo a los Estados Unidos. Temen las petroleras norteamericanas que el ejemplo venezolano sea seguido por otros países donde pervive el régimen concesionario.

El doctor Guillermo Muñoz, asesor del Congreso en materia fiscal y financiera, declara que la modificación hecha al artículo primero del proyecto de Ley de Reversión, tal como lo aprobó el Congreso Nacional por recomendación del Procurador General, es un "camino abierto a nueva frustración nacional". Formula críticas a los diputados por cuanto en éstos privó más el ánimo de la transacción política y convinieron en incluir sólo en la primera parte del artículo 1º los bienes materiales.

Junio 21

El doctor Arturo Hernández Grisanti, diputado de AD, señala que le extrañan las declaraciones del procurador José Guillermo Andueza cuando cali-

fica de vulnerable la Ley de Reversión aprobada por la Cámara de Diputados. Agrega Hernández Grisanti que, al margen de los comentarios políticos que puedan surgir en el futuro sobre las sugerencias hechas por el propio procurador, las fuerzas políticas representadas en el Congreso acogieron parte de esas sugerencias con respecto al artículo primero, sin que tales fuerzas estén obligadas a seguir totalmente su criterio. Además, según el diputado, las observaciones hechas por el procurador no fueron de fondo ni tampoco tornan constitucional y hacen invulnerable lo que antes era inconstitucional.

Un análisis técnico del cual se desconocen sus autores, revela que la simple existencia de la Ley de Reversión Petrolera, aun cuando no se aplique hasta 1983, puede ocasionar daños irreparables al proceso de inversión y desarrollo de la economía del país. Basan tal afirmación en el hecho de que ese solo precedente es suficiente para desalentar a los inversionistas potenciales, bien extranjeros o nacionales, con lo cual le quedaría al Estado la responsabilidad mayor en el proceso de inversiones.

Junio 22

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, se reúne en el Palacio de Miraflores con el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, el canciller Arístides Calvani y el embajador de Venezuela en Washington, doctor Julio Sosa Rodríguez. La reunión se realiza con el objetivo de analizar la posición del petróleo venezolano en el mercado estadounidense y las incidencias del proyecto de Ley de Reversión que se discute en el Congreso Nacional. Con respecto a la Ley el doctor Sosa Rodríguez señala que en Estados Unidos se nota comprensión hacia la misma. Agrega el embajador que ha manifestado en ese país que de aprobarse la Ley en el Congreso Nacional ello se hará de acuerdo con el ordenamiento jurídico y constitucional venezolano, y que de no estar de acuerdo alguien con el proyecto puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Nacional de Economía, presidido por el doctor J. J. González Gorrondona, estima oportuno el proyecto de Ley de Reversión Petrolera, y considera que tendrá efectos positivos, aun cuando propone modificaciones sustanciales en el mismo. Observa González Gorrondona que en algunos aspectos ese organismo coincide con la posición del doctor Manuel R. Egaña. El Consejo de Economía hace especial observación al Fondo de Garantía que se proponen crear con la Ley en cuestión. Agrega que la legislación más conveniente al desarrollo del país será aquella que especifique con claridad los bienes sujetos a reversión, para que así se garantice la continuidad del proceso productivo.

Declara el doctor Guillermo Rodríguez Eraso, directivo de la Creole, que la industria petrolera privada confía en que el proyecto de Ley de Reversión pueda ser modificado en los aspectos técnicos que han sido señalados por la Comisión que analiza el proyecto. Pero en todo caso la industria se someterá plenamente a la nueva legislación. Señala asimismo que en la industria petrolera hay un clima preocupante sobre el proyecto y que están en espera de las decisiones finales de la Comisión del Congreso.

El señor Enrique Pérez Dupuy declara en torno a la Ley de Reversión Petrolera que de ser aprobada ésta de acuerdo al proyecto original no será más que un despojo o expropiación gratuita. Además nadie —dice Pérez Dupuy— se arriesgará a invertir en un país donde la confiscación sea la meta del Estado al vencimiento del contrato. Agrega que Venezuela tiene escasos capitales propios. Por tanto es conveniente atraer capitales extranjeros para que el país pueda prosperar económicamente. Refiere que tiene conocimiento de que 530 empresas norteamericanas advierten sobre los riesgos de la Ley de Reversión y estima conveniente por ello que los partidarios de la intervención del Estado tomen en cuenta tal advertencia.

Señala Fedecámaras que el proyecto de Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, que se discute en el Congreso, debe fundamentarse en un criterio de sano y constructivo nacionalismo, y enmarcarse dentro de nuestro sistema jurídico. Estima necesario aprobar una ley que regule la reversión y proteja los mejores intereses del país, pero deben evitarse los elementos "imprácticos y onerosos" para el desarrollo continuo de la industria petrolera que están presentes en el proyecto original. Hace un llamado al Poder Legislativo para que haga prevalecer un espíritu de ponderación que permita acoger las mejores sugerencias para instrumentar una ley "realista, justa y operante". De lo contrario se abona el terreno para una estatización de la economía y "el afloramiento de un socialismo destructivo", contrario a los principios democráticos tradicionales del país.

Arturo Hernández Grisanti, diputado de AD, informa que el proyecto de Ley de Reversión puede ser sancionado en los próximos días y no descarta la posibilidad de que el Presidente de la República ponga el ejecútese el 5 de julio. Sobre las opiniones de la Cámara de la Industria del Petróleo y de la Creole Petroleum Corporation señala que son totalmente discrepantes con los objetivos del proyecto de Ley. Tanto la Cámara como la Creole opinan que la

nacionalización tiene una "expectativa de derecho" en materia de reversión, y por ello las empresas pueden hacer acto de disposición sobre los bienes afectos a reversión hasta la víspera del vencimiento de las concesiones. Dice Hernández Grisanti que esto es contrario a los objetivos del proyecto. Afirma, además, que no puede haber posibilidad alguna de conciliación entre las petroleras y los partidos políticos porque ambas partes tienen criterios diametralmente opuestos.

El Instituto Venezolano del Consumidor consigna un documento ante la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aceptando así la invitación que hace el Congreso Nacional para que las instituciones del país envíen sus opiniones con respecto al proyecto de Ley de Reversión. Refiere el documento que la Ley no debe constituir factor de desaliento para las compañías petroleras ya que con la misma se pretende reafirmar la soberanía del Estado sobre unos derechos previstos en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos vigente. Señala asimismo que no es un acto inconstitucional ni de intención confiscatoria ya que el Congreso lo ha presentado a consulta pública que permite hacerle las observaciones necesarias.

Junio 23

Los medios financieros y bursátiles hacen graves observaciones al proyecto de Ley de Reversión Petrolera, según afirma el servicio técnico de tales medios a través de los doctores Marino Recio y Max Suárez. Señalan que la Ley como está concebida impide la posibilidad de constituir empresas con el aporte del capital venezolano porque introduce normas contrarias a la más elemental técnica administrativa. Sin embargo, estiman necesario legislar sobre la materia y defender los intereses de la nación en la explotación petrolera. Sugieren la aprobación de una sana Ley de Mercado de Capitales para resolver algunos problemas como el que se plantea con respecto a la vigilancia de los bienes del Estado con la participación de inversionistas venezolanos mediante empresas tripartitas. Para esto es necesario que se aprueben normas que induzcan a las empresas petroleras a vender sus acciones en el mercado de capitales venezolano.

El señor Kenneth Wetherell, primer vicepresidente de la Shell, declara ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que la Ley de Reversión, tal como está concebida, perjudica de manera especial a esa empresa, ya que ésta tiene grandes inversiones fuera de la actividad extractiva. Señala que al revertir bienes corporales e incorporales se le quitan a la Shell bienes que están fuera de las concesiones. De sus planteamientos destaca el que la Ley colide tanto con la Constitución como con la Ley de Hidrocarburos. Por otra parte, expresa que

aquélla desalienta a los inversionistas en una etapa en que más bien se requiere estimular las inversiones petroleras para mantener la producción en virtud del agotamiento de los yacimientos. Hace críticas al fondo de garantía que establece la Ley, ya que ello implica congelar grandes cantidades de dinero que pudieran ser invertidas.

El senador de Acción Democrática, Luis Tovar, declara que las empresas petroleras han desmantelado los campos y han sacado equipos del país desde 1958 por un valor superior a los 200 millones de dólares. Señala el senador que ha solicitado del Ministerio de Minas e Hidrocarburos la adopción de medidas para evitar el drenaje de riquezas.

Directivos de la Compañía Mito Juan plantean ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que el proyecto de Ley de Reversión que se discute en el Congreso colide con la Constitución Nacional en sus disposiciones de que todos los bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, se transferirán al Estado de manera automática, sin indemnización, al vencer las concesiones. Señalan que el proyecto en discusión se caracteriza por un despliegue de medidas interventoras y "severamente punitivas". Agregan además que el monto de las multas con que se sancionarán las infracciones contempladas en la Ley es muy alto y en el caso de empresas pequeñas como Mito Juan no podrían hacer frente a tales obligaciones.

El procurador general de la República, doctor José Guillermo Andueza, declara, a raíz de la crítica que le hiciera el diputado Arturo Hernández Grisanti, que no quiere polemizar públicamente sobre la reversión petrolera porque no desea dar argumento jurídico que pueda favorecer a quienes adversan al proyecto. Afirma que comparte el espíritu de éste y manifiesta que su deseo es el de que el mismo se ajuste a las normas de la Constitución y al ordenamiento jurídico venezolano. El procurador había declarado días antes que el artículo primero del proyecto aprobado podía ser vulnerable si no se modificaba. De esto deriva la observación hecha por Arturo Hernández Grisanti.

La Unión Patronal Venezolana de Comercio fija su posición ante la Ley de Reversión, sobre la cual considera necesario el reglar el mencionado derecho pero bajo un criterio de "sana previsión nacional". Advierte que deben definirse con precisión los alcances de esa Ley tanto para fijar los intereses de la nación como para evitar lesiones arbitrarias a los derechos de los concesionarios. La UPVC formula críticas al Fondo de Garantía por creer que éste ocasionaría

serios inconvenientes de orden cambiario y fiscal. Estima necesaria la creación de algún dispositivo que permita la realización de nuevas inversiones en el sector petrolero por parte de los concesionarios.

El jefe de la fracción parlamentaria del MEP, profesor Siuberto Martínez, declara que no hay conciliación posible entre los intereses de las empresas petroleras y los derechos del pueblo venezolano. Se refiere a las declaraciones dadas por Fedecámaras y expresa que los temores de ésta no le sorprenden. Además dice que no asusta el llamado "socialismo destructivo" del que habla el organismo empresarial. Considera el diputado Martínez como razonable pensar en la necesidad de un gran acto de masas en apoyo a la Ley de Reversión, aunque existe un amplio consenso para la aprobación de la misma.

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo plantea ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados la necesidad de que se incorpore al proyecto de Ley de Reversión un artículo que consagre la creación de un fondo especial destinado a financiar el adiestramiento de técnicos que requerirá el país para operar la industria petrolera. Así consta en un informe presentado ante esa Comisión por los doctores Arévalo Guzmán Reyes, presidente de la Sociedad, y Romer Boscán, directivo de la misma. Igualmente proponen modificar el artículo 3º en lo que respecta a la restricción del 10 por ciento para la contratación de bienes y servicios, en tanto debe ser diferente cuando se trate de compañías venezolanas con capitales nacionales.

Junio 24

El secretario general del MEP, doctor Jesús A. Paz Galarraga, declara que las compañías petroleras han iniciado una campaña contra la Ley de Reversión, y la oligarquía nacional, aliada de aquéllas, colabora en tal acción. Advierte que hay conciencia del poder que ambas tienen, pero los partidos que apoyan la Ley no podrán dar un paso atrás por cuanto se evidenciaría una gran debilidad ante el capital monopolista internacional. Señala Paz Galarraga que el MEP está decidido a utilizar todos los medios lícitos para que sea aprobado ese instrumento jurídico de gran trascendencia nacional.

El doctor Miguel Angel Burelli Rivas considera que la Ley de Reversión que se discute en el Congreso Nacional constituye un paso preliminar para la nacionalización de la industria petrolera. Estima que aquélla es una aspiración legítima del país, pero se pregunta si el Estado estará en capacidad de asumir con eficacia todo el complejo petrolero. El temor con respecto a esto último,

dice Burelli, crece cuando se advierte lo deficiente que es la administración estatal en la mayoría de las empresas que están bajo su control. No considera inoportuno el proyecto de Ley de Reversión, pero cree que lo propuesto en el mismo podría hacerse reformando la Ley de Hidrocarburos vigente.

Junio 26

El senador por URD, Leonardo Montiel Ortega, a su regreso de Estados Unidos declara que ha comenzado en ese país una campaña que cree subsidiada por las compañías petroleras internacionales, con el objeto de presentar la Ley de Reversión como perjudicial a los intereses del consumidor norteamericano. La campaña tiende a hacer aparecer el llamado Fondo de Garantía como un nuevo gravamen para las petroleras. Estima que ante hechos como éste los representantes diplomáticos deben explicar y aclarar lo que en esencia significan las medidas adoptadas por Venezuela.

Junio 27

El presidente de la Compañía Shell de Venezuela, señor J. J. de Liefde, plantea una nueva situación con respecto al proyecto de Ley de Reversión cuando sugiere puntos concretos para considerar un acuerdo bilateral. La empresa propone "garantías mutuamente aceptables" para asegurar el mantenimiento de bienes afectos a reversión y que pueden extenderse fuera de las concesiones necesarias para la transportación del crudo hasta los puertos desde donde se exporta. Si los derechos concedidos se alteran unilateralmente ello puede alterar otros contratos que se han firmado bajo la seguridad de no variaciones a plazo fijo. Esto, afirma de Liefde, puede crear un innecesario clima de incertidumbre tanto para la Shell como para cualquier inversionista local o extranjero.

Junio 28

El doctor Jorge Garriga, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros, dice ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que el proyecto de Ley de Reversión tiene fallas de carácter práctico que harán complicada y costosa su instrumentación. Señala que no hay correlación entre la Exposición de Motivos y la redacción del articulado del proyecto, lo que manifiesta una peligrosa ambigüedad tanto para la nación como para el concesionario. Dice, por otra parte, que existen contradicciones evidentes con la Ley de Hidrocarburos vigente.

El secretario general del Frente Nacional Democrático (FND), doctor Pedro Segnini La Cruz, declara que es necesario consultar a todos los sectores autorizados con fines de redacción de una Ley como la de Reversión, y "nadie

tenga la sensación de haber sido atropellado" en los derechos que les corresponden. Estima que la Ley puede tener efectos paralizantes ya que las concesionarias se cuidarán de no mejorar los activos y no efectuar inversiones que tiendan luego a aumentar el volumen de bienes que revertirán. La Ley, según el doctor Segnini, trata de establecer un concepto preciso de los bienes tangibles e intangibles sujetos a reversión. Considera también que esto último es bastante polémico ya que hay quienes piensan que revertirán sólo los bienes tangibles ubicados en las tierras de las concesiones.

En la *Revista Económica Venezolana,* publicación semanal para ejecutivos y vocero de inversionistas extranjeros, se hacen consideraciones sobre el proyecto de Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Se expresa que resulta admisible que el Estado venezolano pretenda garantizar la transferencia ordenada de los terrenos e instalaciones. Sin embargo, se estima que la Ley va mucho más allá de ese objetivo, viola incluso acuerdos existentes sobre concesiones, y entra en conflicto con la Ley de Hidrocarburos y la propia Constitución. Se considera que la Ley va a traducirse en una total intervención del Estado en la industria petrolera. Si bien —se dice en la revista— una ley de reversión es necesaria, la misma debe redactarse de manera que sea aceptable tanto para el gobierno como para las empresas concesionarias.

El diputado Arturo Hernández Grisanti declara que el derecho de la nación a la reversión en 1983 es indudable y ninguno de los poderes públicos podrá negociarlo con ninguna empresa. Agrega que la Ley de Reversión está concebida sólo para concesionarios que explotan a plazo fijo un bien que es propiedad pública. Por esta razón al propietario privado no se le aplicará la Ley como se ha pretendido dejar ver. Dice asimismo que las empresas han mantenido una actitud contraria a la reversión sin aportar nada concreto para mejorarla. Por esto es irreconciliable la posición de Venezuela y de las fuerzas políticas con la de las compañías petroleras. Con respecto a las declaraciones dadas el día anterior por el presidente de la Shell, referidas al clima de incertidumbre que creará la Ley, señala Hernández Grisanti que son las mismas compañías las que tratan de alarmar a los inversionistas foráneos confundiendo la situación del concesionario con la del inversionista privado.

El doctor Alvaro Silva Calderón, uno de los autores del proyecto de Ley de Reversión, considera las declaraciones del Presidente de la Shell como inadmisibles e irrespetuosas para el Congreso Nacional, por cuanto éste ejerce su facultad de legislar, y al parecer la Shell considera que la reversión es algo

susceptible de ser regateado por las concesionarias. Asimismo la Shell, dice Silva Calderón, pareciera pensar que Venezuela vive aún en la época en que los grandes consorcios podían imponerle condiciones al gobierno.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Minas y dirigente de URD, doctor Francisco Faraco, señala que las declaraciones del presidente de la Shell confirman el pleno derecho que tiene el país de lograr una legislación adecuada para mantener la continuidad de la actividad petrolera cuando comiencen a revertir las concesiones.

Junio 29

La Cámara de la Industria del Petróleo y las compañías petroleras en general reciben con cautela las declaraciones del Presidente de la Shell en torno a la Ley de Reversión. En Fedecámaras se las califica como un paso importante para abrir conversaciones y se considera que las mismas han tenido gran repercusión en la economía privada no petrolera. El doctor Pedro J. Mantellini, presidente de la Cámara del Petróleo, declara que ese organismo aún no tiene una opinión acerca de las declaraciones del presidente de la Shell. Por otra parte, directivos de varias compañías que fueron consultados revelan igual cautela con respecto a la posición expresada por el señor de Liefde. Afirman, sin embargo, que éste no hizo consultas precisas a la Cámara del Petróleo ni a las otras empresas petroleras.

El doctor Pedro Tinoco, ministro de Hacienda, considera el proyecto de Ley de Reversión como un instrumento legal de gran importancia. Sin embargo, ésta obliga a tener cuidado al legislar. Afirma que los intereses de la nación y de los concesionarios son conciliables tanto por vía de la Ley como por posteriores arreglos contractuales a que pueda haber lugar. Por un lado, la nación interesada en mejores inversiones para mantener la continuidad de la explotación y, por otro, el concesionario interesado en "invertir lo indispensable".

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, señor Ramón Imery, declara que lo más grave de la Ley de Reversión sería el estimular el temor de los inversionistas, ya que todavía éstos tienen "mucho que aportar al país". No descarta que el proyecto en cuestión esté enmarcado dentro de las reivindicaciones nacionalistas, pero advierte que no se debe correr el riesgo de que sea considerado anticonstitucional. Estima que lo más importante en los actuales momentos es "negociar" con las compañías petroleras para lograr un proyecto que cubra las intenciones nacionalistas, pero que no se transforme en un instrumento

contra el propio país al ignorar los criterios de quienes manejando el negocio petrolero "han contribuido a crear riqueza".

Termina el período de audiencias otorgadas por la Comisión Permanente de Minas e Hidrocarburos para conocer la opinión de las compañías sobre el proyecto de Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Arturo Hernández Grisanti estima que la segunda discusión del proyecto en la Cámara de Diputados pueda iniciarse en pocos días. Asimismo el presidente de la Comisión de Minas, doctor Francisco Faraco, informa que no se ha contemplado ninguna modificación de fondo al proyecto.

Junio 30

El doctor Jesús Bernardoni, diputado por Copei, declara que si las compañías petroleras no actúan con sensatez y prudencia con respecto a la Ley de Reversión tendrán que "salir del país". Estima que las empresas desconocen la realidad política del país y se oponen de manera injustificada a una Ley con la cual se fiscalizará todo el proceso generado por el otorgamiento de concesiones. Añade que para 1983 Venezuela no necesitará la tutela de los consorcios extranjeros, ya que estará preparada para manejar todas las operaciones que integran la actividad petrolera.

El doctor Manuel R. Egaña declara con respecto a la Reversión Petrolera que el Estado pudo haber ejercido ese derecho esclareciendo el artículo 103 de la Constitución y el 80 de la Ley de Hidrocarburos mediante una reforma parcial de la Ley citada. Señala que debe ser un proyecto de ley elaborado de común acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo con la participación de las concesionarias, ya que se pretende establecer las normas legales que regirán el paso del régimen de concesiones a la administración directa o indirecta del Estado. Agrega que esta última es la forma preferible para 1983 a través de compañías mixtas con lo cual el Estado se reservaría el poder de decisión.

La Comisión Permanente de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aprueba un informe para la segunda discusión de la Ley de Reversión, la cual se efectuará el día 1º de julio. El diputado Francisco Faraco señala que el informe sólo comprende modificaciones de forma a las ya hechas al proyecto en su primera discusión como por ejemplo las del artículo 1º. Considera el doctor Faraco que el proyecto, después de las modificaciones que ha sufrido, es jurídicamente perfecto.

Julio 1

Trasciende que en las últimas cuarenta y ocho horas ha habido gran expectativa en Fedecámaras en relación al proyecto de Ley de Reversión Petrolera. Ello se debe, según se conoce en el organismo, a la premura con que la Cámara de Diputados puede aprobar la mencionada Ley. Asimismo se advierte que los planteamientos básicos formulados por direfentes sectores —especialmente los vinculados con la industria petrolera— para las posibles modificaciones del proyecto, no han sido tomados en cuenta. La acción de consultas y gestiones ha sido intensa, pero la ceremonia, según Fedecámaras, se ha encontrado con lo que denomina una "casi total unidad política" en la oposición y entre ésta y el partido de gobierno.

La Cámara de Diputados aprueba en segunda discusión el proyecto de Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. La aprobación es por la mayoría de los diputados con la excepción de algunos que salvan su voto, como Luis Vallenilla, Germán Borregales y Magdalena Picón de Rodríguez, quien en su nombre y en el de Carlos Manuel Bello y Héctor Frías Calderón deja constancia de las observaciones que habían formulado en el sentido de que no se tomaron en cuenta las opiniones de destacadas personalidades que habían fijado su posición ante el proyecto de Ley. Para su aprobación se le hicieron pocas modificaciones, la mayoría de carácter formal. Muestran acuerdo sin embargo con el espíritu de la reversión tal como está expuesto en la Constitución Nacional. Así la Ley pasa al Senado para su aprobación en esta Cámara.

El doctor Juan Jones Parra plantea que deben ser eliminados por el momento los artículos diseñados para bloquear posibles maniobras de las compañías con el objetivo de evadir el propósito esencial de la Ley de Reversión, ya que se cuenta con suficiente tiempo para ir aplicando correctivos y lograr el fin deseado. Señala que la Ley es muy perfecta, "innecesariamente perfecta", dando la impresión de que hay un conflicto entre las empresas y el Ejecutivo, conflicto que en realidad no existe. Entre otras cosas dice que la manera más fácil de evadir la reversión de bienes consiste en alquilarlos en vez de comprarlos, y ello crearía problemas operacionales. Expresa la necesidad de una Ley que establezca que, al término de las concesiones, los bienes y equipos pasarán a propiedad de la nación sin adelantarse los acontecimientos.

Julio 3

Según fuentes del Departamento de Estado, la industria petrolera norteamericana teme que la Ley de Reversión venezolana pueda encontrar adeptos

en los países árabes, especialmente en Irán. Señalan esas fuentes que el gobierno de Estados Unidos aún no tiene una opinión oficial sobre la Ley aprobada en la Cámara de Diputados. Por su parte, fuentes diplomáticas venezolanas señalan que el país no trata de "vender la idea" a otros miembros de la OPEP que se reúnen actualmente en Viena.

Julio 8

El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo en rueda de prensa hace consideraciones sobre varios aspectos vinculados con el tema petrolero. Entre otras cosas señala que la mejor inversión para el país en los actuales momentos es reducir la producción petrolera. Agrega que en Venezuela lo que hay que tener es la voluntad de actuar, por cuanto se deja ganar de más a las compañías. Considera que en la actualidad la nacionalización inmediata es posible si se presentara una situación de emergencia, pero si se puede ir a una transición es mucho más aceptable. Dice Pérez Alfonzo que en caso de que las empresas se opongan a la reversión la industria debe ser nacionalizada.

Julio 9

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, declara en un foro sobre "Realidad y Perspectivas del Petróleo Venezolano", realizado en Valencia, que no son fundados los temores excesivos frente a la Ley de Reversión. Agrega de que no se pone en duda la "buena fe" de las compañías petroleras cuando se pretende aprobar una ley como aquélla, pero se quiere asegurar la reversión intacta de los bienes que le corresponden a la nación utilizados hoy por las compañías. Se espera que el Legislativo apruebe una Ley que encuadre dentro de las necesidades reales del país. Señala asimismo que dentro del proceso nacionalista desarrollado en la cuestión petrolera, el capital privado venezolano debe participar activamente. Se lamenta incluso de que ello no haya ocurrido anteriormente.

Comienza en el Senado la discusión del proyecto de Ley de Reversión Petrolera. El debate es abierto por el senador de AD, doctor Pedro Batistini. Antes, el doctor Jesús A. Paz Galarraga, del MEP, pide a los senadores que se declarase materia de urgencia tal discusión. El doctor Batistini plantea la necesidad de que la Ley sea aprobada ya que en la legislación vigente hay ambigüedades que si no son bien interpretadas pueden ocasionar el riesgo de que el país vaya a la ruina. Denuncia que en los últimos años las empresas han descapitalizado al país en más de 1.000 millones de bolívares en equipos e instalaciones que han sacado legal o clandestinamente.

El senador Arturo Uslar Pietri también interviene y señala que no está contra la reversión, pero considera que la prisa en la discusión es el error principal que dañaría el propósito. Manifiesta que con respecto a los elementos jurídicos existen serias reservas sobre la forma en que la Ley establece el derecho de la nación. Le preocupan las consecuencias económicas y políticas que puedan derivarse de esa Ley. Agrega que a todos nos duele que el petróleo no esté totalmente en manos venezolanas, que "todos deseamos ir hacia la venezolanización" del mismo y nadie tiene derecho a oponerse a ello.

Julio 11

El doctor Oscar Machado Zuloaga, quien asiste a la XXVII Asamblea Anual de Fedecámaras que se celebra en Valencia, declara que piensa que nadie está contra de la Ley de Reversión. Estima que es algo necesario y conveniente para la economía venezolana. Le preocupa sin embargo que la Ley abarca aspectos cuyos alcances no contempla la Ley de Minas, y ello merece un estudio detenido en virtud de la importancia de la materia. Confía en que la Cámara del Senado pueda canalizar las discusiones orientándolas dentro de un marco legal para que esa ley no quebrante la Constitución y demás leyes.

El doctor Eloy Lares Martínez afirma que el proyecto de Ley de Reversión que se discute en la Cámara del Senado es oportuno y servirá para "llenar las lagunas" que sobre materia petrolera se observan en la Constitución y en la propia Ley de Hidrocarburos. Propone sin embargo algunas modificaciones como, por ejemplo, la eliminación o corrección de los artículos referidos al Fondo de Garantía que ha provocado tanta alarma entre los concesionarios, y sustituirlo por fianzas otorgadas por institutos bancarios de primera clase. Con la Ley se pretende —dice— fijar los alcances del derecho del Estado, asegurar su efectividad y determinar la manera de ejercerlo. Lares Martínez considera como algo indudable el que al término de las concesiones todos los bienes incorporados a ellas pasen a ser propiedad del Estado.

Julio 12

Leonardo Montiel Ortega, senador de URD, declara que no deben haber ni piensa que se hagan modificaciones de fondo a la Ley de Reversión. Señala que los puntos objetados son los artículos 10 y 15 del proyecto, pero lo que se trata es crear el clima propicio para mutilar a aquél, presentándolo incluso como un instrumento punitivo, sin faltar quienes opinan que es "demasiado perfecto". Aclara que con el artículo 10 se impide el sistema de contratación que por mucho tiempo ha servido para burlar el impuesto sobre la renta y aún

se emplea para limitar las prestaciones de un grupo de trabajadores de la industria. El artículo 15 es más importante —dice Montiel Ortega— porque señala que tanto los equipos como los yacimientos deben revertir a la nación en buen estado.

Julio 13

Continúa en el Senado la discusión del proyecto de Ley de Reversión. Interviene Edecio La Riva, de Copei, y señala que esa Ley es una necesidad nacional. Nadie duda del derecho que tiene Venezuela con respecto a la reversión y advierte que para el concesionario es una obligación mantener en buen estado todos los activos. Agrega que debemos aceptar que se invierta en el país capital foráneo, pero no dentro del juego tradicional de la explotación, sino respetando todos los principios establecidos.

Interviene asimismo J. A. Paz Galarraga para expresar que quienes apoyan el proyecto de Ley no son personas demagogas sino personas que piensan en la "proyección histórica del país".

El príncipe Salem Al Sabah, embajador de Kuwait en Venezuela, representación que también ejerce en Washington, al comentar el proyecto de Ley de Reversión, señala que si Venezuela está preparada para asumir la dirección total de la industria en 1983, cuando vencen las concesiones, sería una gran cosa. A ello también aspira su país pero cuando cuente con los conocimientos y capacidad suficiente para hacerlo.

Julio 15

El señor Hermógenes López, senador independiente, declara que si la Ley de Reversión es aprobada sin modificaciones será negativa para el país, pues alejará a los inversionistas extranjeros "necesarios para el desarrollo nacional". Agrega que la Ley no está exenta de demagogia, pues los partidos políticos quieren expresarles a la opinión pública que son más nacionalistas que otros. Dice estar de acuerdo con el espíritu de la reversión, pero no con su actual contenido. Advierte que como senador se abstendrá de votar para la aprobación de ese instrumento.

Julio 19

El doctor Ramón Illaramendy, consejero de la embajada de Venezuela en Washington, expresa que los grandes intereses petroleros de Estados Unidos, a pesar de haber hecho algunas observaciones al proyecto de Ley de Reversión, han tenido que reconocer que ésta es un principio sano, y están conscientes de

que la nación venezolana la pondrá en práctica con gran determinación. Ha surgido confusión, dice Illaramendy, por cuanto muchos piensan que es un principio nuevo, cuando lo cierto es que ya está contemplado en la legislación.

Julio 20

El Senado aprueba en segunda discusión y de manera definitiva la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Es aprobada por la mayoría de los senadores y es enviada al Presidente de la República para su promulgación. En esa última discusión interviene, entre otros, Arturo Uslar Pietri, quien manifiesta que pese a sus reservas con respecto a la Ley no votará en contra de ella ya que está dispuesto a "correr cualquier riesgo con el país". Sin embargo, señala que el país debe prepararse, y advierte que desde esta fecha a 1983 la industria petrolera tendrá que hacer una inversión del orden de los 30.000 millones de bolívares, para luego preguntarse si alguien se ha puesto a pensar de dónde saldrá ese dinero. Dice que Venezuela puede correr riesgos graves, y además necesitará de la solidaridad de todo el país.

El doctor Blas Lamberti, senador independiente por Copei, señala que apoya la reversión como un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos, pero expresa algunas reservas en tanto ciertas disposiciones pueden hacer que aquélla colida con las segundas. Teme a que la Ley de Reversión pueda tener efectos negativos en la economía del país.

Julio 22

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, al explicar los alcances de la Ley de Reversión, señala que se trata de una regulación, o sea, de estipulaciones legales que ya existen en el país. En esencia se trata de que, una vez que cesen las concesiones, el Estado pueda contar con todos los bienes que constituyen la unidad económica de los concesionarios y puedan permitir el mantenimiento de una explotación petrolera adecuada al desarrollo del país. Dice que la Ley de Reversión no es una ley expropiatoria, ya que sólo se pretende que el Estado cuente con un instrumento legal necesario para asegurar el mantenimiento de los bienes y equipos incorporados a la industria. Manifiesta que le parece absurdo que las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos puedan deteriorarse por el hecho de que el primero quiera ejercer su soberanía dentro del marco constitucional del país. Con respecto a la supuesta disminución de la producción vinculada con las expectativas ante la mencionada Ley, advierte el ministro que no guarda ninguna relación la una con la otra. Las disminuciones que han habido son normales, en tanto hay épocas del año en que la demanda del producto es menor. Al referirse a las inversiones foráneas dice que Venezuela es un país abierto tradicionalmente a ellas

mientras actúen dentro del ordenamiento legal y no desplacen al capital nacional. Se muestra partidario de la fórmula de empresas mixtas para la explotación de los recursos del país.

Julio 24

En entrevista que en los Estados Unidos le hace el periodista argentino Juan Lefcovich al doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, éste declara que la política petrolera venezolana no está dirigida contra los intereses económicos de ese país y que la Ley de Reversión no constituye, contrariamente a lo que se ha informado, en ningún momento una expropiación. Descarta la posibilidad de que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela puedan deteriorarse por el hecho de que pretendamos "ejercer nuestra soberanía" dentro del marco constitucional. Expresa el doctor Pérez La Salvia que con la Ley de Reversión se persigue que el Estado cuente con instrumentos legales para asegurar el mantenimiento de los bienes en buenas condiciones hasta que reviertan a la nación, y rechaza de manera categórica que Venezuela incite a otros países latinoamericanos en la aprobación de medidas económicas que afecten intereses estadounidenses.

Julio 26

El máximo líder del partido URD, doctor Jóvito Villalba, declara que el triunfo obtenido con la sanción de la Ley de Reversión es un paso importante en el camino de nacionalizar nuestras grandes riquezas. Señala que para evitar que ese proceso se detenga por las maniobras de quienes lo adversan, es necesario que el Ejecutivo aplique sin vacilaciones la Ley, y se instrumente una firme política conservacionista para evitar que en 1983, cuando reviertan las concesiones, los yacimientos se encuentren agotados; pide que se fortalezca la CVP y, por último, advierte que se requiere la formación de un gran frente nacional para la defensa de la Ley.

Julio 29

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, anuncia en Miraflores que pondrá el ejecútese a la Ley de Reversión el 30 de julio. Señala que tiene conciencia de que se trata de un instrumento de fundamental importancia para el país, aunque es posible que algunos aspectos técnicos han podido ser mejorados. Dice que ello sin embargo no priva esa norma legal. Luego de hacer consideraciones sobre los contratos de servicio y su probable sustitución por empresas mixtas, advierte que la creación de estas últimas es una alternativa que se estudia con seriedad y a la cual se le asigna gran importancia. Dice el Presidente que en materia petrolera, la línea del gobierno es no

mantener una actitud dogmática. Considera que existen varias posibilidades siendo lo sensato combinar las que demuestren ser más útiles a fin de que el Estado alcance mayores beneficios.

Julio 30

En acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, estampa el *ejecútese* a la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

El doctor Héctor Malavé Mata declara que no existe la menor duda con respecto a la constitucionalidad de la Ley de Reversión Petrolera. La reversión es un derecho consagrado en la Ley de Hidrocarburos vigente según el cual deben reintegrarse a la nación, sin ninguna indemnización a las compañías operadoras, todas las áreas otorgadas en concesiones junto con las obras permanentes, los equipos y los bienes destinados a la explotación integral del recurso. Opina que cuando se habla de reversión carece de sentido referirse sólo a bienes ubicados en la parcela de explotación. Las compañías concesionarias, de ser así, podrían desmantelar el activo operacional situado fuera del área de la concesión sin que exista prescripción legal que lo impida. Expresa Malavé Mata que en tal forma la reversión se tornaría nugatoria por afectar a activos desmantelados que no tienen correspondencia con una industria caracterizada, desde un punto de vista económico, como unitaria e indivisible.

El doctor Manuel R. Egaña señala en rueda de prensa que no debe extrañar el que se hable de empresas mixtas para la explotación del petróleo en los actuales momentos cuando se procede a la firma de los contratos de servicio, por cuanto éstos constituyen una fórmula de transición entre las concesiones y aquel tipo de empresas. Estas son una modalidad transitoria para llegar finalmente al control directo de la industria petrolera. Señala además que a Venezuela le quedan 50 años de economía petrolera, de la cual sólo podrá salir mediante un uso acertado de los recursos generados por la actividad de hidrocarburos.

Agosto 1

El embajador de Venezuela en Washington, doctor Julio Sosa Rodríguez, emite una declaración para contraatacar la campaña de sectores empresariales y políticos estadounidenses que se oponen a la Ley de Reversión promulgada el 30 de julio. Sosa Rodríguez señala que la Ley reafirmará la determinación de Venezuela de seguir siendo una fuente de suministro de petróleo para Estados Unidos. Agrega que los contratos de servicio ya firmados son muestra de la

confianza que tienen las empresas en la estabilidad de la industria en el país. Considera asimismo que la exposición de una política petrolera por parte de Estados Unidos será beneficiosa para el desarrollo de Venezuela y para la seguridad del continente.

Agosto 3

El doctor Carlos Lander Márquez, Director Ejecutivo de la Creole Petroleum Corporation, anuncia que abogados al servicio de la empresa solicitarán la anulación de la Ley de Reversión ante la Corte Suprema de Justicia. Declara que la consideran inconstitucional porque interfiere las operaciones normales de las empresas.

Agosto 6

Aparece publicada en la *Gaceta Oficial* la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

Agosto 13

Las empresas Shell, Creole, Texas y Mene Grande introducen en la Corte Suprema de Justicia demandas de nulidad de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. Las demandas son recibidas por el secretario de la Corte, doctor Carlos Alcalá Ermini. La Mene Grande, Shell y Texas piden la nulidad total de la Ley. La Creole, por su parte, pide la nulidad de las disposiciones contenidas en los artículos 1 al 6, 8 al 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, por cuanto coliden con los artículos 44, 69, 99, 101 y 102 de la Constitución. La Mene Grande señala que de considerar la Corte improcedente la petición de nulidad total, piden la de los artículos 1, 2, 5 al 10, 15 al 17. Señalan las empresas que el artículo 103 de la Constitución contempla que las tierras dadas en concesión pasarán a la nación, al vencimiento de aquélla, sin pago de indemnización. Por esta razón las empresas discuten sobre la reversión de los bienes localizados en esas tierras.

Agosto 14

El consultor jurídico del Congreso Nacional, doctor Juan José Rachadel, declara sobre las demandas de nulidad introducidas por cuatro de las compañías que operan en el país, y dice que el Congreso no teme a que la Ley pueda ser anulada en la Corte. Agrega que cuando el Congreso legisló sobre la reversión tomó en cuenta la posible demanda de nulidad ya que ésta había sido anunciada con anterioridad. Advierte el doctor Rachadel que la Ley es completamente constitucional.

Agosto 15

El doctor Alvaro Silva Calderón anuncia que la fracción de abogados del MEP hará parte en el juicio de nulidad de la Ley de Reversión pedido por algunas compañías petroleras. Advierte que cuando la nación ha querido defender sus derechos relacionados con la industria, las empresas se han opuesto, incluso con respecto a medidas que hasta el propio sentido común aconsejaba. Sostienen las compañías —dice el doctor Silva Calderón— que gozan de una situación jurídica tan completa que ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden modificar sin que medie el consentimiento de los concesionarios. Agrega que la Ley de Reversión no tiene carácter confiscatorio, por cuanto ese derecho está establecido en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos, siendo la reversión compensada por las grandes ventajas que la nación ha otorgado a los concesionarios.

Agosto 17

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, señala que la posición de Venezuela en la OPEP, organización donde se planteará la participación mayor de los países productores en las empresas a través de la compra de acciones, se orientará a defender lo que sea más conveniente. En este sentido lo más conveniente —dice Pérez La Salvia— es esperar la reversión antes que participar como accionistas en el negocio petrolero.

Agosto 23

El procurador general de la República, doctor José Guillermo Andueza, declara que si la Corte Suprema de Justicia anula la Ley de Reversión, no habrá ningún medio posible de reponerla ni siquiera modificando la Constitución. La Ley quedaría completamente anulada. Con respecto a las demandas introducidas por algunas empresas petroleras, anuncia el doctor Andueza que la Procuraduría está haciendo los estudios necesarios para presentar su informe ante la Corte Suprema. Esta también puede anular cualquier artículo de la Ley sin hacerle ningún tipo de modificación, ya que ella sólo tiene facultades para anular.

Septiembre 7

El ministro de Minas e Hidrocarburos cursa instrucción a las Notarías, Registro Público y Juzgados de la República, para evitar el traspaso de bienes de las empresas concesionarias afectadas por la Ley de Reversión. Señala que se estudia una denuncia hecha sobre la Sinclair, de la que se dice haber vendido un lote de terreno en Puerto La Cruz un día antes de entrar en vigencia la Ley de Reversión. Esto —afirma el ministro— puede hacerse sólo con la autorización del Ministerio de Minas.

Septiembre 8

El subsecretario de Estado norteamericano, señor Charles A. Meyer, expresa su preocupación por las consecuencias legales que desde un punto de vista internacional pueda tener la Ley de Reversión. Señala que si ésta se tradujera en restricciones sobre el control de las operaciones y en discrepancias con los términos de acuerdo de concesiones, pueden surgir cuestiones de violación del Derecho Internacional. Presenta observaciones con respecto al Fondo de Garantía (pago del 10 por ciento de las cuotas de depreciación pasadas y futuras) y a la reversión sin compensación al vencer las concesiones.

Septiembre 10

Informa el fiscal general de la República doctor César Naranjo Osty, que desde que fue recibida la denuncia de posible desmantelamiento de equipos e instalaciones sujetos a reversión, y su traslado a Colombia, el Fiscal Primero del Ministerio Público del Estado Zulia y funcionarios de la Policía Técnica Judicial investigan el caso. Si la denuncia resulta cierta se estará violando la Ley de Reversión y puede ser multada la compañía desde Bs. 50.000,00 hasta un millón, aparte de hacerla acreedora a otras sanciones estipuladas en las leyes. Sobre el caso —dice el doctor Naranjo Osty— hay detenidos dos ingenieros petroleros norteamericanos, señores Erskin Paul Fillingin y Malta Been.

El diputado José Vicente Rangel declara en torno a la denuncia del presumible desmantelamiento que algunas empresas petroleras hacen de bienes y equipos para enviarlos a Colombia. Señala que ese hecho constituye una violación de la Ley de Reversión y corresponde a una política de esas empresas destinada a burlar la mencionada Ley. Tal política —dice el doctor Rangel— no se expresará sólo en actos como éste, sino que se manifestará en otros aspectos como son los contratos paralelos que se vienen manipulando para el manejo del Fondo de Garantía, y una política de despidos que se ha intensificado últimamente. La salida del país de bienes afectados por la Ley aludida —dice además— debe servir para que el Estado demuestre que la va a aplicar con toda la severidad.

El gobernador del Estado Zulia, doctor Hilarión Cardozo, informa que ya están en manos del Presidente de la República todos los recaudos sobre el traslado clandestino de equipos petroleros a Colombia. Dice que ejecutivos de una empresa extranjera venían sacando desde 1967 importante material confidencial sobre la industria petrolera venezolana. Agrega que es la primera vez que se aplica la Ley de Reversión para salvaguardar el patrimonio de la indus-

tria localizada en este país. Se estima —expresa igualmente— que los equipos y materiales trasladados tienen un valor aproximado de 90.000 dólares, o sea, unos 405.000 bolívares.

Septiembre 11

Los dirigentes obreros petroleros Antonio Machado y Ramón Petit, presidente y secretario general respectivamente de Fetrahidrocarburos, declaran que ha sido denunciado ante los Ministerios de Minas e Hidrocarburos y del Trabajo el desmantelamiento de algunos campamentos y el traslado de equipos al exterior por parte de las empresas Texas y Phillips Petroleum Company. Esta compañía ha licitado gran lote de vehículos y equipos petroleros en el Campo Temblador del Estado Zulia, violando de este modo la ley. Dice Petit que la Texas ha ido más lejos pues está negociando las acciones de una de sus compañías filiales a consorcios extranjeros.

La Gobernación del Estado Zulia anuncia que la investigación preventiva sobre el caso del ingeniero Erskin Paul Filligin ha concluido en lo que respecta a la competencia del Ejecutivo Nacional. Pasa ahora a manos del Poder Judicial. Se solicitará entonces que la Fiscalía General de la República envíe un Fiscal del Ministerio Público a objeto de adelantar junto con el Poder Judicial la instrumentación correspondiente.

Septiembre 12

El Departamento de Estado afirma que la posición de Venezuela como uno de los principales abastecedores mundiales de petróleo dependerá de cómo sea reglamentada la Ley de Reversión. Un funcionario del Departamento de Estado declara que los Estados Unidos están interesados en saber cómo será reglamentada esa Ley ya que los accionistas norteamericanos tienen dos mil millones de dólares invertidos en la explotación del petróleo venezolano. Algunos senadores del Congreso estadounidense consideran la posibilidad de suspender las cuotas de importación de azúcar venezolana por lo que califican de "nacionalización del petróleo". Se estima por esto que el Congreso de Estados Unidos reaccione contra Venezuela por la aprobación de la Ley de Reversión.

Dirigentes empresariales del país opinan sobre la presunta violación de la Ley de Reversión y advierten que deben evitarse los juicios anticipados sobre la magnitud del hecho, por cuanto esto puede conducir a la condenación inútil de un ente económico (la empresa) y expone al país a la exhibición de una actividad precipitada. Señalan que es positivo el celo con que se debe defender

la aplicación de la Ley de Reversión, pero debe tomarse en cuenta que pueden cometerse excesos y presentarse casos de violación de la libertad económica.

Septiembre 14

El secretario general de Acción Democrática, señor Carlos Andrés Pérez, acusa al gobierno nacional de propiciar un clima dañino para los intereses petroleros de Venezuela, cuando se refiere al supuesto desmantelamiento de equipos afectos a reversión. Advierte que AD no tiene ninguna información cierta de que se esté violando la Ley de Reversión. Es al Poder Ejecutivo —dice Carlos Andrés Pérez— a quien compete la obligación de hacer cumplir las leyes del país.

El ministro de Minas e Hidrocarburos informa que se trabaja en la elaboración del Primer Reglamento sobre la Ley de Reversión, el cual normará los artículos 3, 4, 8 y 9 de la referida Ley. El artículo 3 prohíbe a los concesionarios la utilización de bienes de terceros salvo en casos especiales autorizados por el propio Ministerio. De ocurrir esto último sólo se hará en una proporción no mayor al 10 por ciento de los activos fijos de esos bienes. El artículo 4 se refiere a la obligación que tienen los concesionarios de conservar y mantener los bienes. Los artículos 8 y 9 prohíben enajenar, gravar, desmantelar o modificar los bienes afectos a reversión sin autorización previa del Despacho.

Septiembre 16

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, declara que no se está efectuando una reglamentación de conjunto de la Ley de Reversión, sino que se estudian los puntos de mayor urgencia, como es el caso de la utilización de bienes de terceros. En tal sentido informa que se reciben constantemente los recaudos sobre los bienes que tienen las empresas arrendados a terceros. Con respecto al caso Fillingin señala que se trata principalmente de violaciones a la Ley de Aduanas y de Extranjería. En cuanto a si hay violación de la Ley de Reversión, es cosa que se estudia a través de innumerables averiguaciones.

El doctor Reinaldo Cervini presidente de la Asociación Pro Venezuela, declara que es inaceptable para el país admitir que se condicione el trato que recibe nuestro petróleo en Estados Unidos al contenido y proyecciones de la Ley de Reversión. Cuando el señor Meyer o los Estados Unidos —dice Cervini—, hablan de compensaciones al término de las concesiones parecen "desconocer cínicamente" una realidad contractual en la cual Venezuela no debe pagar nada a las empresas. Agrega que, por el contrario, jamás se ha dado trato hemisférico al

petróleo venezolano, lo que es una injusticia con respecto al precio de ese petróleo para el ingreso al mercado norteamericano.

Septiembre 17

Una Comisión Delegada del Congreso Nacional, integrada por los diputados Omar Rumbos, Gonzalo Ramírez Cubillán, Julio Urbina, Héctor Mujica y Armando Sánchez Bueno, aprueba una proposición recomendando al Ejecutivo una reorganización administrativa del Ministerio de Minas e Hidrocarburos a fin de adecuarlo a los requerimientos de la Ley de Reversión. Asimismo aprueba la recomendación al Procurador General de la nación de hacer una investigación exhaustiva en todos los Registros Subalternos del país de los bienes inmuebles de las empresas, e investigar asimismo la enajenación o traslado que esas compañías pudieran haber efectuado de equipos y otros bienes afectos a la reversión. Los diputados hacen denuncias de venta de terrenos y traslado de equipos por parte de algunas empresas. Por esta razón piden se procesen tales denuncias.

Charles Meyer, subsecretario de Estado para asuntos Interamericanos, declara para "Latin" que la Ley de Reversión Petrolera puede ser exitosa y positiva para Venezuela, pero todo depende de la aplicación de la misma. Señala que está consciente de la preocupación de algunas empresas que sienten temor por las repercusiones administrativas en el proceso gradual de "venezolanización" de los bienes tangibles e intangibles de aquéllas. Advierte que el interés del gobierno norteamericano no se refiere tanto al aspecto legal de la reversión, sino a la defensa de las inversiones petroleras estimadas en unos tres mil millones de dólares.

Septiembre 18

El doctor Pedro J. Mantellini, gerente de relaciones públicas de la Creole, declara que la empresa está dispuesta a adaptarse a las condiciones que en definitiva rijan con la aplicación de la Ley de Reversión. Señala que la Creole siempre ha sido respetuosa de las leyes del país, independientemente de que haya pedido a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la Ley de Reversión por considerarla inconstitucional. Con respecto al caso de la Core advierte que es un laboratorio que presta sus servicios a las empresas petroleras, no es concesionaria de hidrocarburos, razón por la cual no entiende cómo puede estar implicada en violación a la Ley de Reversión.

Septiembre 19

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, expresa que los trabajadores se han declarado en estado de alerta ante maniobras de las empresas

contra la Ley de Reversión y con respecto al traslado de bienes afectos a ella. Indica que en los últimos meses se han sacado del país maquinarias petroleras por el orden de los 600 millones de bolívares. Agrega que en varias oportunidades ha denunciado la exportación ilegal de equipos hacia Libia, Nigeria e Indonesia, desde los puertos de Guanta, Maracaibo y Tucacas, y no ha habido control alguno sobre tal anormalidad.

Septiembre 21

El embajador venezolano en Washington, doctor Julio Sosa Rodríguez, rechaza la tesis de que las nuevas leyes petroleras venezolanas debilitan la posición del país como abastecedor seguro del mercado norteamericano. Así se expresa a raíz de opiniones emitidas ante el Congreso norteamericano por Handrick S. Houtha Kker, ex miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Nixon, criticando la Ley de Reversión. Agrega el doctor Sosa Rodríguez que mientras el precio del petróleo venezolano se ha debilitado, el valor de las compras que Venezuela hace en Estados Unidos ha ascendido por las presiones inflacionarias. La Secretaría de Comercio norteamericana señala, en cambio, que la preocupación que existe es que la nueva legislación no se limita sólo a las empresas petroleras sino que se extiende a otras inversiones.

Septiembre 23

El parlamentario norteamericano William R. Anderson, aspirante a la Presidencia, señala que los países latinoamericanos están siendo forzados por Estados Unidos a volver su mirada hacia Europa, Japón y la Unión Soviética. Considera que el recargo del 10 por ciento en los impuestos sobre las importaciones de América Latina es un grave error. Señala que la Ley de Reversión aprobada en Venezuela es razonable aun cuando estima que la contribución de 500 millones de dólares que deben aportar las empresas para el Fondo de Garantía es un tanto excesiva.

Septiembre 28

Las empresas Venezuelan Atlantic Refinning Company y Sinclair Venezuelan Oil Company introducen ante la Corte Suprema de Justicia dos nuevas demandas de nulidad de la Ley de Reversión Petrolera. Introducidas por los abogados Julio Betancourt Vásquez, Luis Ludovich Durand y Gonzalo Parra Aranguren, esas demandas insisten en el carácter inconstitucional de la mencionada Ley.

Octubre 7

El doctor Carlos Acedo Toro, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, es designado Pleno Juez de Sustanciación en el juicio que por demanda de nulidad siguen seis empresas petroleras contra la Ley de Reversión.

Octubre 12

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara que el Estado venezolano está dispuesto a dar participación al capital privado en el negocio petrolero de la CVP, pero las acciones que esta empresa adquiera pasarían automáticamente a propiedad estatal, en caso de que sean vendidas o traspasadas a consorcios extranjeros. El gobierno —dice Pérez La Salvia— puede conversar con personas e instituciones venezolanas para constituir empresas mixtas dentro del complejo de las distintas fases de la industria, pero no estaría dispuesto a permitir que tras esas transacciones se oculte el capital extranjero.

Octubre 14

El señor Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, declara que este partido apoyaría la incorporación de capital privado venezolano en las empresas donde el Estado tenga una mayoría. Dice que la idea de la empresa mixta siempre ha estado dentro de la orientación política de AD.

Octubre 15

El doctor Arturo Hernández Grisanti, del Partido Acción Democrática, señala, advirtiendo que es una opinión personal, que no hay ninguna razón que justifique la participación de la empresa privada en la industria petrolera ya que ésta entonces no sería nacional y tras de ella seguirían operando intereses extranjeros. Advierte que cuando se planteó la necesidad de contratos de servicios y empresas mixtas en 1959, quienes elaboraron esa política como sustitutiva del régimen de concesiones, no pensaron en la participación del capital privado nacional en la explotación petrolera, razón por la cual la persona que recoge la declaración de Carlos Andrés Pérez no la refleja con exactitud. Agrega que éste se refiere a empresas mixtas para industrias no básicas, pero no específicamente a la explotación del petróleo. Dice, con respecto a lo señalado por el ministro de Minas e Hidrocarburos, que esa es una forma bastante ligera de abordar una materia tan delicada.

Octubre 16

El director ejecutivo de Fedecámaras, doctor Ciro Añez Fonseca, revela que la participación del capital privado en la industria petrolera constituye una legítima aspiración nacional, que ello asimismo es una tesis inobjetable dentro del más estricto nacionalismo. Dice Añez Fonseca que este criterio es compartido por partidos políticos con arraigo en el país como Acción Democrática, tal como lo señaló Carlos Andrés Pérez.

El doctor Humberto Peñaloza expresa que, así como la promulgación de la Ley de Reversión es un acto constitucional, las demandas de nulidad introducidas por las compañías petroleras constituyen una acción dentro de esas mismas normas. Agrega que ello no debe tomarse como una posición negativa o "revanchista" por parte de las empresas concesionarias.

El doctor Rafael Sandrea, secretario técnico de la Comisión sobre Petróleo y Petroquímica, declara en Maracaibo durante el desarrollo de las III Jornadas Petroleras, que la dependencia tecnológica en la rama de hidrocarburos es alarmante, más si se toman en cuenta los años venideros de 1983. Agrega que en la medida en que la industria de capital extranjero ha ido creciendo, la compra de tecnología foránea ha adquirido dimensiones asombrosas, reflejándose en la transferencia al exterior de cuantiosas sumas por concepto de utilidades, regalías, pagos por licencia, importaciones de materiales, entre otros.

El doctor Aníbal Martínez, del Conicit, señala que éste recomienda algunos puntos básicos en materia de tecnología, entre los cuales se destaca la creación de un instituto venezolano de investigaciones de petróleo y petroquímica (Invepet) que se dedique a fomentar la investigación científica y tecnológica en esas dos ramas.

Octubre 19

El titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, afirma que ese Despacho cuenta con los instrumentos legales para ejercer una fiscalización y control de los bienes petroleros. Al referirse a la presunta violación de la Ley de Reversión por parte del Laboratorio Core de Maracaibo, señala que es un caso con implicaciones distintas a las contempladas en aquella Ley. Expresa asimismo que el Ministerio de Hacienda mantiene un permanente control sobre producción e impuesto sobre la renta.

Noviembre 6

La Standard Oil Company de New Jersey, según declara el presidente M. M. Brisco, está seriamente preocupada por la Ley de Reversión que entrará en vigencia al expirar las concesiones de 1983, y por los nuevos recargos financieros sobre la operación de las compañías hasta que se inicie el proceso de reversión. La Standard es propietaria en un 95 por ciento de la Creole Petroleum Corporation, la compañía extranjera más importante que opera en Venezuela.

Noviembre 11

Declara el doctor Arturo Hernández Grisanti, miembro del CEN de Acción Democrática, que se ha iniciado una campaña de opinión y de presión para tratar que el país tome una decisión apresurada con respecto a lo que ocurrirá en el momento de la reversión. La experiencia que se tiene sobre hechos como el expuesto, en opinión de Hernández Grisanti, nos induce a pensar que las compañías no están ausentes de la elaboración de la estrategia de la campaña aludida. Insiste en que no debe tomarse una decisión apresurada sobre tan importante materia.

Noviembre 14

En la Primera Jornada Socialista de la Ciencia y la Cultura, el doctor D. F. Maza Zavala presenta una ponencia donde afirma que sí es posible nacionalizar la industria petrolera antes de 1983, no cree que deba esperarse esa fecha para controlar directamente la explotación del petróleo. Dice, entre otras cosas, que sólo existe un problema de conciencia dependiente, subordinada y sometida que produce el temor de dar ese importante paso histórico.

Noviembre 27

El embajador venezolano en Washington, doctor Julio Sosa Rodríguez, declara que en Venezuela tanto la Ley petrolera como la bancaria responden a saludables principios de progreso social y político. Afirma que en su país no están interesados en arruinar a las compañías petroleras, pero tampoco tienen interés en recobrar yacimientos vacíos cuando reviertan las concesiones. En su opinión sólo se pretende que cuando la nación obtenga los bienes petroleros, éstos continúen siendo productivos, aun cuando los inversionistas iniciales hayan obtenido de ellos considerables provechos.

Diciembre 2

Unión Republicana Democrática introduce ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para crear la Dirección de Bienes Afectos a Reversión como una dependencia del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. La Dirección tendrá a su cargo el levantamiento de un inventario de bienes, control de éstos, verificación del Fondo de Garantía, es decir, una vigilancia rigurosa por parte del Estado venezolano de todos los bienes afectos a reversión.

Diciembre 11

El *Wall Street Journal* de Nueva York comenta la política petrolera venezolana, señalando con respecto a la misma que en Venezuela se ha afianzado el nacionalismo que se propaga por América Latina. Para fundamentar tal

apreciación aduce la publicación neoyorquina que a partir de ahora el precio del petróleo será fijado sólo por el gobierno, y se ha nacionalizado el gas natural producido en las concesiones. Añade asimismo que en la actualidad los petroleros poco bueno tienen que decir sobre las leyes de Venezuela en materia de hidrocarburos, especialmente sobre la que contempla la reversión de las concesiones a partir de 1983.

1972

Enero 17

El dirigente sindical Rodulfo Avila, jefe de reclamos de la Organización de Marinos de Venezuela, revela en Lagunillas que las empresas Creole, Shell y Mene Grande han cerrado varios pozos petroleros en las principales zonas de producción como Cabimas, Lagunillas y Bachaquero. Estima que el total de pozos cerrados sobrepasa un número de 700. También en Lagunillas los dirigentes Miguel Martínez y Pastor León, del Sindicato de Trabajadores Petroleros, manifiestan la preocupación del sector laboral por lo que consideran una paralización progresiva de la industria, lo que constituye una represalia de las compañías por la aprobación de la Ley de Reversión Petrolera. Denuncian asimismo que las empresas violan la Ley en tanto traspasan sus bienes a las contratistas. Por su parte, Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, anuncia que esa organización iniciará una investigación de los hechos denunciados y que ello será planteado ante el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Enero 19

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, advierte que de la promulgación de la Ley de Reversión surge la necesidad de crear una nueva administración —la Dirección de Reversión— para cuyo funcionamiento se requieren 5 millones de bolívares. Sin embargo, esta cantidad no se previó en el presupuesto vigente. Pero es posible que el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias apruebe un crédito adicional para crearla. Las funciones de esa Dirección están muy vinculados a la vigilancia, inspección y control de los bienes afectos a reversión. Anuncia además que es necesario elaborar dos Reglamentos de la Ley. Uno, sobre el Uso de los Bienes Afectos de Terceros, y el otro sobre el Fondo de Garantía. El ministro informa que como aspecto vinculado a la Ley mencionada, ese despacho ha enviado a las distintas compañías petroleras comunicaciones instándolas a explorar aquellas áreas no suficientemente exploradas hasta ahora, exigiéndoseles además los programas de trabajo para el presente año.

Enero 25

El titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, señala en el Congreso Nacional que el Ministerio adelanta una investigación minuciosa sobre los campos que han sido cerrados. Analiza uno a uno los alegatos presentados por las compañías donde esgrimen que esos campos son económicamente improductivos. Reconoce el ministro que se cuenta con el instrumento legal para hacer cumplir tareas, pero se requiere de elementos de acción para la aplicación efectiva de la Ley. El presidente de la Subcomisión Especial de Minas, doctor Arturo Hernández Grisanti, denuncia que se ha suscitado un inconveniente entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto a la creación de la Dirección de Reversión, por cuanto el gobierno sostiene que debe ser creada por Decreto mientras que en el Congreso priva el criterio de que debe crearse mediante una ley ya que se trata de un nuevo servicio.

Ante la Subcomisión Delegada del Congreso Nacional, el doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, anuncia que están terminados los dos proyectos de reglamento que requiere la Ley de Reversión, y que los mismos serán llevados a la consideración del Gabinete Ejecutivo. Uno de los proyectos se refiere a los bienes de las empresas petroleras en manos de terceros (contratistas), y el otro al Fondo de Garantía que, por un 10 por ciento del valor total de los bienes afectos a reversión, debe ser constituido por las compañías petroleras en favor del Estado venezolano. Informa además que su despacho está cumpliendo con la Ley de Reversión, trabajando con los recursos de que se dispone, pero sin haber podido crear la Dirección de Reversión por diferencias de criterio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Enero 26

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en Consejo de Ministros, dicta el Reglamento Nº 1 de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que se refiere al uso de bienes afectos de terceros.

Febrero 5

El doctor Jóvito Villalba, secretario general de URD, expresa su respaldo a la denuncia del presidente Caldera en torno a las "amenazas y presiones" que se ejercen contra la política petrolera venezolana, orientada hacia la nacionalización de la industria. Exige el doctor Villalba que se designe una comisión que estudie y planifique la nacionalización petrolera, y la marcha rápida hacia ésta en caso de que las petroleras maniobren contra la reversión. Estima

que la política nacionalista es seria y que ni el Congreso, ni el gobierno y el pueblo venezolano están jugando con la reversión petrolera. Esta viene y a plazo fijo será la nacionalización de la actividad de los hidrocarburos.

Febrero 12

En el artículo titulado "El problema del control del petróleo" aparecido en la revista *Visión,* el ex presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, afirma que cuando reviertan las concesiones petroleras en los países dueños de los yacimientos se presentarán a éstos dos alternativas: una, asumir el control total de la industria de los hidrocarburos; y la otra, más realista en su opinión, que esos países produzcan petróleo con sus propios recursos técnicos y materiales, y suscriban contratos de transporte y comercialización con empresas internacionales, contratos que deben hacerse en condiciones ventajosas para los países productores. Considera así que no es conveniente que éstos distraigan "fondos necesitados con urgencia en el empeño de desarrollar las economías nacionales y de abolir la pobreza en el financiamiento de muy costosas líneas navieras de transporte; y dejar el marketing del combustible, llave maestra en ése y en los demás aspectos de comercio internacional, en quienes tienen una red mundial de distribución".

Febrero 24

El partido URD propone la formación de un grupo de notables que visite los principales países productores para negociar la venta de petróleo con los gobiernos respectivos y con las compañías petroleras autónomas. La declaración la suministra el doctor Leonardo Montiel Ortega, quien además señala que la baja actual de la producción petrolera constituye una presión de las compañías. Desconocer las presiones que éstas ejercen puede significar, según Montiel, una derrota sin precedentes en la política petrolera que tiene como objetivo la nacionalización de la industria a corto plazo y si es posible antes de 1983. Exige que el gobierno aplique el artículo 15 de la Ley de Reversión a fin de que las petroleras devuelvan a la nación los yacimientos donde hayan dejado de operar en los últimos meses.

Febrero 25

En un informe del corresponsal del *Washington Post,* señor Lewis H. Diuguid, éste señala que Venezuela parece dirigirse con rapidez a la nacionalización de más de 5.000 millones de dólares de inversiones foráneas en la actividad petrolera. Agrega que aun cuando las concesiones no vencen sino a partir de 1983, el presidente Rafael Caldera puede adelantar la reversión. Advierte que éste se refirió días antes a la perspectiva de una nacionalización y precisó "vagamente" la continuación de la actual política petrolera, pero, según el corresponsal,

las medidas tomadas por el gobierno han dejado pocas opciones a las empresas explotadoras de hidrocarburos. Agrega la información la seria preocupación del gobierno norteamericano, no sólo por el valor de las inversiones sino por la creciente dependencia de Estados Unidos frente al suministro venezolano de energía. Indica asimismo que por lo grave de la situación la Embajada Norteamericana en Caracas ha considerado conveniente que la materia sea tratada entre los dos gobiernos y no dejarla en manos de las concesionarias. Se piensa que las motivaciones pueden ser políticas aun cuando los dirigentes de Copei alegan que sólo son morales y económicas. Lo que sí es cierto —añade— es que las acciones gubernamentales hacia una mayor participación en las ganancias petroleras cuentan con el apoyo de la mayoría de la población.

Febrero 26

En torno a la publicación aparecida en el *Washington Post* donde se anuncia que el presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera, se prepara para ordenar la nacionalización petrolera antes del término de su mandato, el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, niega en forma rotunda tal apreciación. Advierte, sin embargo, que Venezuela es un país soberano y en el momento en que sus intereses sean vulnerados, puede diseñar los instrumentos necesarios para impedir el ser atropellado.

El embajador de Venezuela en Estados Unidos, doctor Julio Sosa Rodríguez, considera que las afirmaciones de Lewis Diuguid publicadas en el *Washington Post* acerca de la posible nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, sólo corresponden a especulaciones políticas de orden teórico. El diplomático afirma de manera categórica que en Venezuela no está planteada la nacionalización, sino la venezolanización progresiva de la industria como consecuencia de la cercanía del vencimiento de las concesiones en 1983. Agrega el embajador que el presidente Caldera, al referirse al tema petrolero, manifiesta que de acuerdo con el sistema legal, el país ha dado sus pasos dentro del ordenamiento jurídico y de ello ha obtenido resultados satisfactorios.

Marzo 2

El Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en Consejo de Ministros, dicta el Reglamento Nº 2 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, referido al Fondo de Garantía relativo a bienes afectos a reversión.

Marzo 3

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en su rueda de prensa número 135, opina sobre el reglamento parcial de la Ley de Reversión aprobado

por el Gabinete, y dice del mismo que está dictado con "sujeción al espíritu, propósito y razón de la ley". El reglamento establece las normas para el funcionamiento del Fondo de Garantía, el cual contempla el depósito equivalente al 10 por ciento de las cuotas de depreciación que deben consignar las empresas en el Banco Central de Venezuela. El dinero del fondo, señala el presidente, será empleado en "inversiones provechosas" y constituye una garantía para cubrir la seguridad del cumplimiento de las obligaciones que según el principio de reversión tienen las compañías petroleras.

En el Boletín de la Embajada Venezolana en Estados Unidos, el doctor Julio Sosa Rodríguez, quien desempeña el cargo de Embajador, afirma que es falso que Venezuela contemple la incautación dentro de los próximos veinticuatro meses de las concesiones petroleras. Agrega el funcionario diplomático que, no obstante "el alboroto de algunos sectores de la industria" por la política de reversión, las grandes compañías han firmado contratos de servicio que representarán la inversión de cientos de millones de dólares. Esto lo califica como la mejor evidencia de la continua fe y confianza en Venezuela. Se pregunta el diplomático cómo alguien con sentido común puede estar preocupado sobre la seguridad de una inversión nacional o extranjera en un país en donde las ganancias se transfirieron sin restricciones, donde las actividades privadas se respetan y se manejan con un mínimo de controles, donde las compañías petroleras, no obstante el clamor sobre los nuevos controles, compiten ávidamente por los contratos de servicio que auspicia el gobierno. Señala además el doctor Sosa Rodríguez que una de las formas de asegurar desde ahora una ordenada relación petrolera es mediante la adopción de una política hemisférica que garantice la estabilidad del abastecimiento venezolano beneficiando simultáneamente a los consumidores norteamericanos.

Marzo 7

El profesor Marcias Martínez, de la Escuela de Petróleo de la Universidad del Zulia, dicta una conferencia en la Asociación Venezolana de Periodistas, auspiciada por el Círculo de Reporteros Científicos, sobre la contaminación del Lago de Maracaibo. En su exposición denuncia que las compañías petroleras no han renovado los once mil kilómetros de tuberías que hay en el Lago, las cuales tienen ya cincuenta años. Las tuberías se encuentran bastante deterioradas y las concesionarias utilizan el sistema de grapas para remendar las roturas. Después que los helicópteros vigilan los sitios por donde fluye el petróleo como consecuencia de las averías se trasmite el aviso, trasladándose un equipo de buzos para engrapar. De esto se deduce que el Gobierno Nacional recibirá unos coladores en vez de tuberías.

Marzo 9

En la sesión especial del Concejo Municipal de Caracas, celebrada el 8 de marzo de 1972, Día Internacional de la Mujer, la doctora Olga Luzardo, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, pronuncia el discurso de orden en donde hace un llamado a las mujeres venezolanas a sumarse a la defensa de la Ley de Reversión para que no prospere la demanda de nulidad solicitada por las empresas petroleras ante la Corte Suprema de Justicia, y solicita que se tomen medidas de seguridad que impidan a las concesionarias el desmantelamiento de instalaciones, destrucción de instrumentos de trabajo y otros implementos para cuya conservación está obligado el gobierno venezolano a ejercer vigilancia y control.

El procurador general de la República, doctor José Guillermo Andueza, solicita el 8 de marzo de 1972 a la Corte Suprema de Justicia que declare sin lugar las demandas de nulidad a la Ley de Reversión intentadas por las empresas petroleras que operan en el país. Las concesionarias Creole, Shell, Mobil, Mene Grande y Sinclair sostienen que la Ley de Reversión aprobada por el Congreso Nacional es anticonstitucional, mientras que el Procurador en su escrito enviado a la Corte sostiene que la Ley impugnada no modifica el artículo 103 de la Constitución Nacional ni el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, sino que la mencionada Ley reglamenta los bienes sujetos a reversión en materia petrolera.

En foro realizado el 8 de marzo de 1972 en la Universidad Simón Bolívar, el dirigente de URD Leonardo Montiel Ortega plantea la factibilidad de la nacionalización petrolera por el aumento de la demanda de petróleo que se duplica cada 10 años, por la nueva unidad de los países de la OPEP y finalmente porque la tecnología del petróleo ha dejado de ser un secreto para los países exportadores y productores, todo lo cual hace plausible la idea de que ellos mismos operen su industria sin interferencia de terceros.

El rector de la USB, doctor Ernesto Mayz Vallenilla, señala que Venezuela tiene el reto de asumir el manejo de sus propias riquezas, pero advierte que el proceso nos ha tomado por sorpresa. Asegura que no disponemos de los recursos humanos suficientes para acometer la tarea a corto plazo y plantea la necesidad de formación de técnicos y científicos capaces de asumir el control de la cuestión petrolera y crear conciencia de la importancia de la nacionalización petrolera.

Aníbal Martínez se muestra plenamente de acuerdo con la nacionalización petrolera pero indica que no se trata de un problema emocional y que en estos momentos no se cuenta con los recursos humanos suficientes para emprender de inmediato ese proceso.

Por su parte, el senador Godofredo González hace una interpretación del Decreto Ejecutivo 832 del 17 de diciembre que establece la regulación y conservación del petróleo y analiza el contenido de la resolución de Minas y Hacienda de fecha 21 de diciembre, que fija los precios de exportación.

Marzo 10

El dirigente del partido Acción Democrática, doctor Arturo Hernández Grisanti, declara en un programa de televisión que "Venezuela no está abocada en estos momentos a la nacionalización de su petróleo". Considera que no debe hacerse demagogia con el petróleo a pesar de que constituya un ingrediente para el problema político. Dice que no hay ninguna hostilización a las compañías petroleras, que se han tomado medidas legales y administrativas por cuanto se estima que con ello se atiende a un interés público.

Marzo 11

Al terminar la Tercera Asamblea Nacional de Fedecámaras, su presidente, doctor Carlos Guillermo Rangel, manifiesta el hecho significativo de la nueva legislación en materia de hidrocarburos, pero advierte que los empresarios venezolanos a la vez que afirman lo justo y legítimo del derecho y la acción destinados a que la nación obtenga el mejor provecho posible de los bienes de su subsuelo, dicen que esta relación ha de ser mantenida dentro de los límites racionales que reclama un negocio de tan extraordinaria magnitud. El presidente de Fedecámaras señala finalmente que es necesario de debate abierto sobre nacionalismo a nivel de la política petrolera.

Marzo 13

La Cámara de Diputados aprueba en primera discusión el proyecto de ley que crea la Dirección de Coordinación, Inspección y Control de Bienes Afectos a Reversión en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. La Presidencia de la Cámara convoca para el 15 de marzo de 1972 la segunda discusión del proyecto de ley por el cual se establece un fondo destinado a la investigación en materia de hidrocarburos y formación de personal técnico para esa industria. En la primera discusión el diputado Abdelkáder Márquez se muestra en desacuerdo con la aprobación de esta Ley, pues las Direcciones se crean por decreto ejecutivo dictado por el Presidente de la República y no por autorización del Congreso Nacional. Por su parte, el diputado Arturo Hernández Grisanti, al referirse al artículo 4º, dice que, de acuerdo con la Ley vigente, cuando opere la reversión, los bienes deben revertir siendo innecesario se señale en el proyecto en discusión la adscripción de los bienes al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Marzo 14

Venezuela debe comenzar a adquirir bienes de las compañías petroleras que operan en el país, con miras al proceso de reversión que se iniciará a partir de 1983. Así lo declara por televisión el diputado Arturo Hernández Grisanti al comentar el anuncio hecho en Beirut por el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, de que Venezuela se prepara para entrar en un proceso de participación selectiva en el negocio petrolero.

En fuentes vinculadas a Fedecámaras se califica de "justa y correcta" la posición adoptada por los miembros de la OPEP en el sentido de acordar una participación del 20 por ciento en la actividad petrolera.

Marzo 17

Los sindicatos petroleros de Anaco denuncian en un comunicado público que la concesionaria Mobil Oil Company está desmantelando los departamentos de pintura, plomería, carpintería y electricidad, con el pretexto de traspasar los edificios e instituciones de la localidad. Ante posibles despidos de los trabajadores de los mencionados servicios, los sindicatos llaman a sus afiliados a permanecer alerta ante la violación del contrato de trabajo y de la Ley de Reversión.

Marzo 20

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara, al regresar de la última conferencia de la OPEP en Beirut, que de acuerdo a la Ley de Reversión las instalaciones petroleras existentes en el país no pueden ser sacadas del territorio nacional sino que deben ser conservadas en buen estado para cuando Venezuela las requiera.

Marzo 23

El titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, en su Memoria Anual al Congreso, dice que ha enviado a los concesionarios las comunicaciones respectivas con los programas de labores de exploración que deberán emprender en cien zonas identificadas a los fines de dar cumplimiento a lo que en esta materia se contrae la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión.

Marzo 27

El doctor Guillermo Morón dice que el Movimiento Desarrollista se pronuncia por reestudiar toda la situación petrolera nacional y que al respecto una comisión de especialistas del desarrollismo presidida por el doctor José Toro Hardy prepara una tesis sobre la materia. Señala igualmente que han apoyado la

política actual del Estado venezolano, a través del Ministerio de Hacienda y de los parlamentarios desarrollistas, pero que estiman importante en estos momentos el estudio de la materia petrolera donde se plantea la conveniencia de llegar a acuerdos con las grandes empresas explotadoras de petróleo de tal manera que puedan crearse quizás, empresas mixtas, no sólo con capital venezolano y extranjero, sino dentro de la composición del capital venezolano: capital del Estado y capital privado.

Marzo 28

En su Memoria Anual al Congreso Nacional, el titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, señala que Venezuela requerirá durante los próximos cinco años no menos de unos 500 técnicos en diversas ramas en petróleo. Explica el ministro en su informe que durante el año 1971 se avanzó en los programas de formación de técnicos, refiriendo a que el 1º de enero se mantenían 31 becarios en el exterior y 63 en Venezuela, pero el Congreso Nacional aprobó un crédito adicional de Bs. 1.000.000 con el cual su despacho otorgó 86 para estudios en el exterior y se llegó hasta 106 el número de becarios en universidades de Venezuela. Informa el ministro que igualmente ha sido sometido a una reestructuración el despacho a su cargo para poder cumplir con las nuevas obligaciones que le impone la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos y la que reserva al Estado la industria del gas natural, donde se ha previsto elevar a Dirección General de Hidrocarburos la Oficina Técnica de Hidrocarburos, también, elevar a Direcciones las Divisiones de Exploración y Reservas, Fiscalización, Control y Conservación y crear una nueva dependencia denominada Dirección de Coordinación, Inspección y Control de Bienes Afectos a Reversión.

Marzo 29

Al comentar las opiniones en materia petrolera expresadas por Rómulo Betancourt en la revista *Visión,* el dirigente de URD, señador Leonardo Montiel Ortega, dice que la posición fijada por el ex presidente Betancourt en relación a lo que acontecerá después de 1983 tiene índice de alta peligrosidad, pues en la misma plantea como primera alternativa la posibilidad de nuevos acuerdos con las compañías petroleras para continuar la explotación conjunta de los yacimientos venezolanos, y como segunda alternativa presenta la nacionalización de la producción manteniendo a las compañías en un papel de intermediarias del mercado.

Abril 12

En conferencia dictada en la Asociación de Tasadores de Venezuela, el doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, dice que según la

Constitución Nacional y las leyes de minas e hidrocarburos, el Estado venezolano al asumir las concesiones de hidrocarburos en 1983 no tendrán que pagar indemnización alguna a las concesionarias, incluyendo las parcelas concedidas y todas las obras permanentes que se hayan construido.

Abril 17

En conferencia dictada en el Centro de Profesionales de Anzoátegui, en Lecherías, donde es invitado por el Colegio de Médicos, el doctor Domingo Alberto Rangel expresa su opinión con respecto a la materia petrolera y advierte que la nacionalización de la industria petrolera no está planteada en Venezuela, y que la misma sólo es necesaria en caso de presentarse un "conflicto serio". Antes de pensar en la nacionalización debemos prepararnos —dice— para la reversión, pues aparte de la importancia de ésta, es probable que no se alcance debido a que antes se llegará a un acuerdo con las empresas petroleras, ya que no estamos en condiciones de administrar nosotros mismos el petróleo. Las concesionarias han venido trabajando y hacen lo posible para lograr ese acuerdo. Este puede generar graves consecuencias de orden político que pueden traducirse incluso en un cambio del sistema de gobierno. Agrega que existen obstáculos en el país como la falta de personal técnico y de una flota petrolera, los cuales inciden negativamente en el proceso de reversión. Asegura que la "élite política de Venezuela no va a resolver ninguno de los problemas planteados acerca de la reversión", hecho que producirá el acuerdo con las empresas extranjeras.

Abril 21

En medios de la Bolsa de Caracas se considera la posibilidad de que el Banco Central de Venezuela utilice los recursos financieros del Fondo de Garantía que deben constituir las empresas petroleras de acuerdo con la Ley de Reversión, para colocar bonos del Estado. Añade que es igualmente perjudicial que el Banco Central no deje operar al mercado y se reserve el derecho de vender directamente dichos fondos, pues con la escasez que existe, no habrá más emisiones para el mercado. Agregan que es de esperar que en esta materia se deje a los fondos operar abiertamente en el mercado como se hace con los fondos de ahorros de los trabajadores.

Abril 29

Al vencer el 28 de abril el plazo dado a las compañías petroleras extranjeras para que depositen en el Banco Central de Venezuela el primer aporte del Fondo de Garantía previsto en la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, las empresas concesionarias abren dicho fondo con un depósito de ciento sesenta millones de bolívares.

Mayo 7

En un seminario realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y donde participan el subsecretario, señor John Irwin, el secretario adjunto, señor Sidney Weintranb, y representantes de las industrias petrolera, siderúrgica y minera, así como expertos económicos, estiman inevitable la nacionalización de intereses petroleros y mineros extranjeros en los países en desarrollo. Pero, pese a tal perspectiva, consideran que no es conveniente que el gobierno norteamericano adopte una línea dura. Sin embargo, advierten que el problema planteado consiste en saber en qué condiciones se daría el proceso de nacionalización.

Mayo 12

Durante la rueda de prensa número 143 ofrecida por el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, éste anuncia que el Consejo de Ministros autoriza al titular de Minas e Hidrocarburos para que comunique a las concesionarias que de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento número 2 de la Ley de Reversión, el Ejecutivo permite la inversión de parte de la suma depositada por las empresas en el llamado Fondo de Garantía, constituida en depósitos a plazos fijos en el Banco Agrícola y Pecuario y en el Banco de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de que tales sumas las utilicen las mencionadas instituciones en el financiamiento del sector agrícola que es considerado como prioritario en el IV Plan de la Nación.

Mayo 16

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, dice a los periodistas que las empresas petroleras se muestran complacidas de que el Fondo de Garantía que establece la Ley de Reversión se destine al incremento agropecuario. Agrega el ministro que se iniciaron los trámites correspondientes para el traslado del dinero del Banco Central de Venezuela al Banco Agrícola y Pecuario y al Banco de Desarrollo Agropecuario, dinero que se destinará a la primera etapa de inversiones en esa área de la economía nacional.

Mayo 30

Un llamado para que todos los venezolanos y sus sectores representativos formen un frente nacional en defensa de la Ley de Reversión hace el doctor Alvaro Silva Calderón. Asimismo advierte que el primer depósito hecho por las empresas petroleras en el Banco Central de Venezuela debía ser de 300 millones y no de 160 como ocurrió, pues el mismo equivale al 10 por ciento del valor total de los bienes que alcanzan a unos 9.500 millones de bolívares.

El doctor Silva Calderón señala también que la Ley de Reversión tiene fundamento constitucional y legal pero, que es atacada desde el punto de vista ju-

rídico y se cursan demandas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia a la vez que se le pretende vulnerar con una reglamentación suavizada. Agrega que si se presentan coyunturas favorables se debe acelerar el proceso de nacionalización de la industria.

Mayo 31

Declara en Maturín el doctor Alvaro Silva Calderón que la Ley de Reversión Petrolera no se está cumpliendo y el gobierno no manifiesta ánimos de aplicarla, y agrega que es opuesto a lo que denomina "tesis intermediarias". Destaca que la Ley de Reversión debe ser defendida no sólo en el frente jurídico, sino que debe hacerse ante el pueblo, poniéndola en manos de los sindicatos, profesionales, estudiantes, etc. Para finalizar dice el doctor Silva Calderón que el Congreso Nacional debe intervenir directamente en el asunto si el Ejecutivo se manifiesta sumiso y complaciente frente a los consorcios.

Junio 1

El presidente de la compañía Creole Petroleum Corporation, señor R. N. Dolph, en el informe anual correspondiente a 1971, analiza las perspectivas petroleras de la empresa en Venezuela, afirmando que el reto más importante que a corto plazo confronta la Creole es el de mantener sus operaciones a niveles satisfactorios. Señala que la mayoría de las concesiones vencen en 1983, y a menos que se lleguen a negociar acuerdos que permitan la continuidad de las operaciones más allá de esa fecha, a largo plazo la compañía tendrá crecientes dificultades en la planificación de sus tareas. Afirma que la acelerada intervención del gobierno venezolano, virtualmente en todas las fases del negocio petrolero, es obviamente motivo de seria preocupación para la industria. Tal intervención se manifiesta, entre otras cosas, en el aumento de la carga impositiva. Además hay proyectos que afectarán más aún los intereses de la empresa y así mencionan la nacionalización del mercado interno, la obligación de utilizar una flota petrolera del Estado y la fijación de un nivel de empleo fijo para la fuerza laboral. Según Dolph el capital privado ha significado una contribución importante en la industria petrolera venezolana, y cree que aún puede jugar un papel en el futuro de la misma. Por ello están interesados en continuar participando en el desarrollo de nuevas áreas petroleras.

Junio 6

El candidato presidencial de Copei, doctor Lorenzo Fernández, declara en Maturín que no le temblaría la mano para firmar una nacionalización, después de una amplia consulta nacional y si ello fuere conveniente a los intereses del país. Pero, dice asimismo que no le tiembla la voz para asegurar que una nacio-

nalización del petróleo, en estos momentos, lejos de convenir a los intereses nacionales, los perjudica. Agrega que con el petróleo no se puede andar jugando a la política, que es necesario estudiar todas las posibilidades de negociar con las compañías exportadoras y con los países consumidores, pero negociar con un criterio muy claro sobre la defensa de los intereses nacionales.

Junio 30

En un documento sobre "Nacionalismo y Estatización" presentado a la consideración de la XXVIII Asamblea Anual de Fedecámaras, se expresa que aún el país espera la formulación de una política petrolera coherente y adaptada a las exigencias del desarrollo económico y social, y no que se oriente a la exhibición de posiciones circunstanciales, matizadas del oportunismo electoral. La ausencia de esa política, se dice en el documento, es quizás lo que explica las actitudes "temperamentales y superficiales" que se han tomado con respecto al sector petrolero. Asimismo se considera que en base a las grandes inversiones que requiere la industria y a la escasez de recursos del Estado para dar solución a necesidades de tipo social, aquél no está en capacidad de asumir por sí solo el negocio petrolero.

Julio 17

La Cámara de Diputados aprueba en segunda discusión la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos. Según esta ley el Estado se reserva el 100 por ciento del almacenamiento, distribución y venta de los hidrocarburos. La misma establece un plazo de tres años para que la Corporación Venezolana del Petróleo ejerza directamente o mediante convenios que realice con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, esas actividades.

Agosto 24

La Policía Técnica Judicial investiga un cuantioso robo de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos. El robo es denunciado por las empresas Mene Grande y Mobil en sus instalaciones de Anaco y El Tigre, y se calcula que el mismo pasa de un millón de bolívares. De este hecho tienen conocimiento el Procurador y el Fiscal General de la República, quienes piden al Juez de Instrucción agilice las investigaciones pertinentes.

Agosto 26

El ministro de Hacienda, doctor Luis Enrique Oberto, informa que se ha realizado un estudio sobre el monto de los bienes afectos a reversión de las empresas petroleras. Anuncia igualmente que en pocos días se tendrá una cifra de esos bienes y su inventario completo.

Septiembre 1

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, anuncia en su rueda de prensa número 159 que el Consejo de Ministros aprobó una medida por medio de la cual se autoriza al Ministerio de Minas e Hidrocarburos para que reglamente la posibilidad de que el Fondo de Garantía se deposite a plazos fijos, en cantidades hasta de 25 millones de bolívares, en los Bancos Obrero e Industrial. El dinero depositado en el primero de los bancos mencionados será destinado a completar las cuotas iniciales a plazos que pueden llegar hasta 10 años, para la adquisición de viviendas de interés social. La suma depositada en el Banco Industrial se destinará a financiar actividades de la pequeña y mediana industria, preferentemente en zonas de actividad petrolera y minera. Así el Fondo de Garantía, afirma el jefe del Estado, puede emplearse en una forma socialmente útil para atender necesidades muy fundamentales del país.

Septiembre 4

El doctor Pedro Segnini La Cruz, del FND, expone las alternativas planteadas por ese partido con respecto a los órdenes social y económico del país. Al referirse a este último, y concretamente a la cuestión petrolera, señala que se proponen resolver dentro de los próximos cinco años el problema vinculado a esa industria, por cuanto no se puede esperar el año 1983 para "tomar una decisión tardía". Considera, sin embargo, que la mejor forma es que el Estado venezolano se asocie, disponiendo de una mayoría del capital, en los factores nacionales e internacionales que actualmente participan en la industria de los hidrocarburos.

Septiembre 18

El doctor Pedro Miguel Pareles, en rueda de prensa, se refiere a la cuestión petrolera. De los contratos de servicio dice que si sus conclusiones han sido acertadas puede fortalecerse nuestra posición como país independiente, de lo contrario, se habrá comprometido la posibilidad de recuperar el dominio de nuestra riqueza petrolera. Indica que dos aspectos le preocupan: el primero se vincula con la CVP, pues al tener las compañías el derecho de manejar un mayor volumen de crudo como consecuencia de los contratos de servicio, se las coloca en condiciones ventajosas para influir en el mercado internacional, controlar los precios e imponer las reglas del juego a las empresas estatales; y en segundo lugar, el tiempo por el cual son aprobados esos compromisos, pues es absurdo atar las posibilidades de decisión de un país por más de una década. Al considerar el tema de la reversión y la nacionalización dice que las compañías pueden preferir esta última. Agrega que con los contratos de servicio queda garantizada la participación de las concesionarias en el negocio. Dice asimismo que no hay que dejarse ganar por la emoción de una idea nacionalizadora sin tener en cuenta el costo de la misma.

No tiene nada de raro que las empresas se inclinen por esa idea antes de esperar la reversión, pues en el primer caso obtienen una compensación. Añade que la nacionalización no espanta al capital extranjero, en tanto a éste sólo le interesa que sea compensado y mantener el control de las fuentes de producción. Con respecto a Venezuela el asunto debe ser enfocado en cuanto a nuestra seguridad y no exclusivamente en relación a los ingresos.

Septiembre 21

En la publicación noticiosa *Carta de Visión* de Nueva York se comenta la situación venezolana, señalándose que se presentan tres elementos que indican cambios en ella. Tales elementos son el inicio de la campaña electoral, la lucha prolongada con las empresas extranjeras del petróleo en la discusión por una "revelación", y el interés de que Venezuela se integre al grupo andino. Al referirse a la cuestión petrolera indica que, dado el movimiento regional hacia la propiedad estatal de las industrias extractivas, el futuro de las compañías extranjeras de petróleo es fuente de constante debate en Venezuela.

Septiembre 22

El candidato presidencial del partido socialcristiano Copei, doctor Lorenzo Fernández, al intervenir en un foro realizado en Caracas ante ingenieros metalúrgicos e industriales, afirma que la nacionalización de la actividad petrolera es una política que tiene que hacerse a base de realidades, en función de lo que más convenga a los intereses del pueblo. Para abordar la cuestión petrolera, debido a su condición de elemento básico en el desarrollo de la economía, se requiere tener, según el doctor Fernández, conciencia de su importancia y de la obligación de defender los intereses nacionales.

Octubre 5

El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, señor Pompeyo Márquez, responde a las declaraciones del señor Jorge Dáger cuando califica de negativa la posición del MAS al no aceptar su participación en la Nueva Fuerza mediante la fórmula de renuncia de los candidatos, señalando Márquez que la candidatura del doctor José Vicente Rangel no está en subasta, ni es para negociarla. Asimismo explica algunos de los aspectos que contempla el programa de gobierno del doctor Rangel. Al referirse a la cuestión petrolera indica que el proceso de nacionalización del petróleo, del gas y el hierro incluye varias etapas que se cumplirán con la mayor rapidez que permitan las circunstancias.

Octubre 6

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, se opone a la ley que crea un fondo para la formación de personal técnico en materia petrolera. Alega

que es atribución del Ejecutivo la formulación de presupuestos y, por tanto, el Legislativo no tiene facultades para crear fondo presupuestario como el de la mencionada ley. Las observaciones las hace el presidente en sesión conjunta de ambas cámaras. Señala el Jefe del Estado que la ley aprobada en el Congreso menoscaba al Ejecutivo su facultad de administrar la Hacienda Pública, y solicita la reconsideración del artículo 4º que crea el fondo, a fin de que se levante la sanción por ser contrario al ordenamiento jurídico.

Octubre 8

El doctor J. A. Paz Galarraga, candidato presidencial de la Nueva Fuerza, preside el foro político-económico organizado por la Asamblea Legislativa del Estado Cojedes. En el mismo hace hincapié en la necesidad de independizar a Venezuela del capital extranjero, afirmando categóricamente que nuestra riqueza no puede ser soberana si el petróleo no está en manos nuestras.

Octubre 19

En torno a la demanda de nulidad contra la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos intentada por las compañías petroleras, la Fiscalía General de la República dice en su dictamen a la Corte Suprema de Justicia que la misma debe ser declarada sin lugar, pues de conformidad con lo dispuesto por el legislador las disposiciones de esa ley tienen carácter de orden público y se aplicarán de manera inmediata en las actuales concesionarias de hidrocarburos por no colidir con la Constitución.

Octubre 22

El doctor Andrés Monterola, secretario general ejecutivo de la fracción de profesionales y técnicos del partido socialcristiano Copei, anuncia que éste presentará en su programa de gobierno nuevas fórmulas para la explotación del petróleo, las cuales superan la modalidad de contratos de servicio. Señala que en materia petrolera hay nuevas fórmulas para la participación escalonada en la industria, y las mismas son objeto de un minucioso estudio por parte de una comisión especial designada por el Comité Nacional de Copei para la elaboración del programa de gobierno.

Octubre 24

El titular de Minas, doctor Hugo Pérez La Salvia, sostiene que no volverán a firmarse contratos de servicio y que, por tanto, el Estado debe propender a la formación de empresas mixtas, subsidiarias de la CVP, con participación mayoritaria de la nación directa e indirectamente. Esta tesis la llevarán técnicos de Copei como esquema de un programa de gobierno. Se estima, en opinión del Mi-

nistro, que esa modalidad está más acorde inclusive con los principios que se están definiendo en los últimos dos años dentro de la OPEP.

Octubre 26

El señor J. J. de Liefde, presidente de la Compañía Shell de Venezuela, luego de analizar por qué el país está en desventaja frente a otros países productores al no poder garantizar un suministro estable a largo plazo, refiere el futuro de la Shell en Venezuela. Considera así que es de importancia relativa el que la mayoría de las concesiones que tiene la empresa vence en 1983, afirmando que ésta tiene mucho que ofrecerle al país no sólo en el aspecto tecnológico, sino además en cuesiones gerenciales necesarias para continuar grandes programas a escala mundial. La empresa cuenta con la tecnología más moderna para la producción en aguas profundas y en la de petróleos pesados. Por esas razones el señor de Liefde se muestra optimista en cuanto al futuro de la empresa en Venezuela.

Octubre 27

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, al responder una pregunta que le hiciera un periodista sobre la sugerencia de Copei para sustituir el régimen de contratos de servicio por el de empresas mixtas, señala que esos contratos han sido muy afortunados en lo que al gobierno respecta. El único tropiezo que ha surgido es que no se ha encontrado petróleo en las perforaciones, pero el gobierno y la CVP no sólo no gastaron nada, sino que han recibido los bonos oportunos, las inversiones correspondientes y se ha cumplido en interés nacional una labor de exploración, de búsqueda de nuevos yacimientos, de gran importancia para todos los efectos generales de la economía. Agrega que en cuanto a los contratos de servicio y a las empresas mixtas son diversos caminos que pueden emprenderse, y que tanto en el programa que presentara en su campaña electoral como en la actitud posterior del gobierno "siempre se ha mantenido abierta la posibilidad de las empresas mixtas" como una de las vías que se abren dentro del futuro petrolero de Venezuela. Pero ese proceso estará guiado por la idea de asegurar y aumentar la soberanía nacional, la participación del país y la eficacia en la explotación del recurso. Considera entonces que los contratos de servicio, las empresas mixtas y la explotación directa por la CVP son fórmulas de importancia y vigencia en el asunto petrolero.

Octubre 30

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara al regresar de Ryad (Arabia Saudita) donde se realizara una reunión de los países de la OPEP, que Venezuela se abstuvo de opinar con respecto a un

informe presentado sobre participación de los países del Golfo Pérsico en el negocio de las empresas petroleras que comienza con un 25 por ciento y asciende escalonadamente hasta un 50 por ciento en un lapso de 10 años, por cuanto Venezuela, de acuerdo a la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, tendrá una participación del 100 por ciento en un período similar. Con respecto a la posibilidad de crear empresas mixtas, el ministro señala que la Ley de Reversión establece en su artículo 3º aquellas empresas como una de las alternativas para explotar el petróleo.

Noviembre 2

El doctor Lorenzo Fernández, candidato presidencial del partido Copei, quien se encuentra en gira por el extranjero, se reúne en Gran Bretaña con los más altos ejecutivos de la empresa petrolera Shell Petroleum, el mayor concesionario inglés. Dice el doctor Fernández en declaraciones a los corresponsales que él no cree en "lemas, mitos o teorías prefabricadas". Afirma que no vacilará en nacionalizar la industria petrolera si es por el interés del país. Pero si en este mundo cambiante eso no fuere del interés de su país, no vacilará en considerar alternativas. Esas alternativas pueden ir desde empresas conjuntas hasta nuevas concesiones petroleras.

Noviembre 14

El doctor Godofredo González, de Copei, da una rueda de prensa para responder a las críticas que sobre política petrolera del actual gobierno hiciera el ex ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor J. P. Pérez Alfonzo. El doctor González concluye con afirmar que en el país se estudian fórmulas sustitutivas de la actual modalidad de los contratos de servicio. Tales formas pueden llamarse "contratos de asociación", donde participarán el sector privado nacional, el sector privado internacional y el Estado venezolano. Esa alternativa de explotación —señala el dirigente socialcristiano— ya ha sido asomada por el doctor Manuel R. Egaña, es sometida a estudio y puede ser presentada en el programa de gobierno del partido Copei para el año 1973.

Noviembre 28

El señor Carlos A. Piñerúa, presidente de Fedepetrol, señala que aún no ha sido designado el titular de la Dirección de Reversión, despacho que debe estructurarse para proteger los intereses del país, ya que, según denuncias formuladas en el Parlamento, muchas son las formas de que se valen las empresas para burlar y evadir responsabilidades ante la nación. Por otra parte declara que nada se ha hecho para preparar los trabajadores y técnicos con miras al año 1983. Si no se toman las previsiones necesarias tanto para cualquier eventualidad como

para 1983, Venezuela acusará un déficit que obligará a continuar dependiendo en un alto porcentaje de la técnica extranjera.

Noviembre 29

Se informa que en las reuniones que celebrará la OPEP en Lagos, se planteará el establecimiento de un fondo de garantía para la protección de los países contra acciones punitivas de las compañías petroleras. El ministro venezolano, doctor Hugo Pérez La Salvia, señala que la creación de ese fondo será en definitiva un importante tema de discusión y se tratarán los medios legales para su establecimiento. Agrega que el gobierno venezolano estudia cuidadosamente la llamada "fórmula Yamani" presentada por los Estados del Golfo Pérsico, cuyo objetivo es alcanzar una participación del 51 por ciento en los intereses de las concesionarias hasta 1983. Finalmente dice el ministro Pérez La Salvia que en Venezuela se redactan leyes para regular el sistema de apropiación por parte del gobierno, señalando además que no se pagará indemnización porque las cláusulas de las concesiones no la contemplan.

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara al llegar al aeropuerto de Lagos, donde asiste a una reunión de ministros de la OPEP, que dentro de diez años Venezuela asumirá el control de sus recursos petroleros, así como de las instalaciones de las concesionarias. Señala que el gobierno está elaborando importantes leyes tendientes a asumir dicho control, y que asimismo se está estableciendo un fondo de garantía entre las medidas que se adelantan para implementar la reversión petrolera.

Diciembre 1

La Procuradoría General de la República demanda ante la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, a la Compañía Shell Venezuela Limited, por dar en venta a la Sociedad Mercantil de Inversiones Shell de Venezuela, el edificio donde funciona aquélla con todos sus accesorios, pertenencias, dependencias, el área de terreno donde está construido en San Bernardino. Dicha demanda alcanza la cantidad de 11.709.033 bolívares. Esa acción se basa en el artículo 103 de la Constitución Nacional y, en el mismo sentido, se citan artículos de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

Diciembre 3

En un informe titulado "Política Petrolera", el Comité Ejecutivo de Fedepetrol, reunido en el V Congreso de Trabajadores Petroleros de Venezuela, demanda del Congreso Nacional la aplicación del decreto que reserva a la nación

el mercado de los hidrocarburos. El señor Carlos Piñerúa, presidente del organismo, señala que Venezuela está en capacidad tanto técnica como financiera para operar la industria petrolera. Esto lo induce a afirmar que la actividad puede ser nacionalizada en los próximos diez años. Con respecto a la capacidad financiera anota que el país ha acumulado grandes cantidades de dinero para operar la industria, y en lo técnico cuenta con equipos humanos que han adquirido la necesaria preparación para conducir las operaciones. Además hay la posibilidad de colocar el petróleo en mercados abiertos a nivel internacional. Denuncia asimismo que después de promulgada la Ley de Reversión Petrolera han sido despedidos 1.700 trabajadores en el Zulia y 300 en Oriente, por lo cual de 7.020 trabajadores contratados sólo quedan 5 mil.

Diciembre 5

El director general de la CVP, doctor Maurice Valery, afirma en el V Congreso de Trabajadores Petroleros que la CVP jugará un papel fundamental en el momento que se opere la reversión petrolera, siendo por consiguiente necesario la formación del personal a todos los niveles en el manejo de esta empresa. Agrega que se realiza un diagnóstico para tener una visión clara de los recursos humanos que laboran en la industria petrolera, que luego se hará una proyección de las necesidades futuras y se definirán las estrategias y medios para el cumplimiento de un programa a largo plazo en la formación de recursos humanos.

Diciembre 10

La subcomisión de petróleo del IV Congreso de los técnicos socialcristianos aprueba, por proposición de los señores Eduardo Acosta Hermoso, Abdón Vivas Terán, Germán Blanco, Carlos Julio González, Julio Porras y Alfredo Rincón, un documento en el cual se contempla, entre otras cosas, que el próximo gobierno de Copei tenga como objetivo mínimo alcanzar el manejo de la industria petrolera por parte del Estado en todas las áreas que reviertan a la nación en 1983. Se añade en el documento que lo anterior no excluye la posibilidad de que el Estado "en uso legítimo de su poder soberano, proceda a la nacionalización de la industria" antes de la fecha de reversión de las concesiones, luego de comprobar que las condiciones técnico-económico-políticas, especialmente de mercado así lo determinen.

Diciembre 18

El doctor Humberto Peñaloza, directivo de la empresa Mito Juan, en su intervención en el seminario sobre "Problemática de los Hidrocarburos", se muestra partidario de la venezolanización progresiva de la industria petrolera, como una alternativa que considera más justa, realista y pragmática que la nacionaliza-

ción o estatización. La venezolanización progresiva es un proceso que propicia una participación directa y creciente de los sectores nacionales, tanto el público como el privado, en las actividades vinculadas con la industria. Considera la incidencia de la venezolanización en la economía del país. Esto puede manifestarse, entre otras cosas, en "acelerar la integración orgánica de la industria petrolera a las estructuras económicas nacionales". Entre los efectos positivos de la venezolanización destaca Peñaloza la retención en el territorio de parte de las ganancias derivadas de la actividad industrial realizada por sectores venezolanos públicos y privados.

Diciembre 28

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, niega en Miraflores que el gobierno haya pensado nacionalizar la industria petrolera. Indica que las informaciones sobre ello son completamente falsas. En Venezuela —dice— ya está trazada la política petrolera y la misma se basa en la Ley de Hidrocarburos y en la de Reversión.

1973

Enero 6

El candidato presidencial de la Nueva Fuerza, doctor Jesús Angel Paz Galarraga, propone la formación de un frente con todos los sectores progresistas del país que estén de acuerdo con la nacionalización de la industria petrolera antes de 1983. Esto —indica el doctor Paz— es necesario por cuanto Venezuela no puede alcanzar su independencia económica mientras esa industria continúe en manos de compañías extranjeras. Por eso es que en el próximo período constitucional, agrega, el gobierno tendrá que adoptar una medida definitiva sobre la materia. Señala que voceros de AD plantean la posibilidad de compañías mixtas, mientras que el candidato presidencial de Copei afirma que "no le temblará la mano" para nacionalizar el petróleo, si así lo exigen los intereses del país, todo lo cual, en opinión del doctor Paz Galarraga, se queda en la declamación retórica.

Se juramenta ante el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, el director de Bienes Afectos a Reversión, doctor Humberto Calderón Berti. El ministro refiere la importancia de esa dirección y muestra su satisfacción de que comiencen las labores de la misma, ya que los alcances del pricipio de reversión han sido precisados en la ley aprobada. Señala el ministro que se cuenta con un instrumento legal por medio del cual se sabe cuáles bienes deben revertir a la nación al término de las concesiones, y agrega que estos diez próximos años constituyen un importante período de transición.

Enero 18

El doctor Joaquín Gabaldón Márquez, en carta que dirige al director del diario *El Nacional,* se refiere a unas declaraciones publicadas en el mismo diario y que según él pueden prestarse a confusiones. Desmiente así el que haya afirmado sobre la incapacidad en que estaría la CVP para explotar la faja petrolífera del Orinoco, y señala que, por el contrario, cree en la capacidad de la empresa

estatal como clave para llegarse a la entera nacionalización del petróleo en nuestro país.

Enero 19

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, califica como una maniobra de las compañías petroleras la afirmación de la Creole Petroleum Corporation de que 1972 fue un mal año para las ventas de crudo a nivel internacional y para las ganancias derivadas de esas operaciones. Afirma Piñerúa que tanto la baja de la producción como otras medidas tomadas por las concesionarias a nivel nacional e internacional constituyen una represalia ante las últimas decisiones del Ejecutivo y el Congreso Nacional. Entre éstas menciona la fijación unilateral de los precios de exportación y la aprobación de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.

Enero 23

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara que entre 1983 y 1984 revertirán a la nación alrededor del 75 por ciento de los bienes de las concesiones. Señala asimismo que se hacen esfuerzos exploratorios para conocer la existencia de petróleo con el objetivo de contar con reservas que sirvan de garantía y base firme para una negociación.

El servicio de prensa de la CVP informa que ésta estudia con varias empresas una nueva fórmula de asociación que supera a los contratos de servicio y a las empresas mixtas, y que puede alcanzar la participación de la empresa estatal en los mercados internacionales. El director general de la CVP, doctor Maurice Valery, anuncia que se instrumenta una forma de negociación para el desarrollo de nuevas áreas, y se conversa con algunas empresas una fórmula conforme a la cual aquéllas aportarían el financiamiento para el desarrollo de un área determinada que será explotada directa y exclusivamente por la empresa estatal. Expresa que se elaborarían las bases de un contrato para la venta de un volumen de la eventual producción de esa y otras áreas que la CVP tenga bajo su control. Ese volumen de crudo se vendería a la empresa que aporta el financiamiento. Sin embargo, no se excluye, en su opinión, la posibilidad de constituir una empresa mixta para la venta de la producción en la cual serían socios la CVP y la compañía interesada que nada tendría que ver con las actividades realizadas en el país.

Enero 28

Jesús Angel Paz Galarraga, candidato presidencial de la Nueva Fuerza, afirma que Acción Democrática y Copei tienen planes concretos en materia petrolera

para el período 1974-1979, pero no los revelan porque están orientados a llegar a un "entendimiento" con las compañías extranjeras. Este puede estar entre la fórmula de empresas mixtas, de contratos de servicio y hasta de nuevas concesiones, a fin de que las empresas continúen invirtiendo en el país. Ello, en la opinión del doctor Paz, impide que Venezuela disponga soberanamente de ese recurso fundamental.

Enero 29

El secretario general de Acción Democrática, doctor Octavio Lepage, considera conveniente sustraer al petróleo del debate electoral, ya que la política petrolera debe contar con un gran consenso para lograr un frente sólido ante los adversarios. Comenta las declaraciones de Paz Galarraga, candidato presidencial de la Nueva Fuerza, al expresar que éste cree que la nacionalización es una "panacea", que sólo basta con nacionalizar la industria para que un "milagro" supere la situación de dependencia del país. Agrega que en política petrolera AD será abanderada de la nacionalización de la industria si un serio estudio llegara a determinar que ello es lo más conveniente.

El secretario general del Movimiento al Socialismo, MAS, señor Pompeyo Márquez, afirma que la palabra nacionalización "ha perdido su carga revolucionaria", y es desnaturalizada por los reformistas y por las propias clases dominantes. Estima que una nacionalización en la actualidad puede ser asimilada y absorbida por la burguesía. Propone la explotación petrolera por el Estado aun dentro del actual ordenamiento constitucional del país y dice que así se debe alcanzar la socialización de la industria como objetivo del gobierno socialista. La fórmula jurídica de la socialización podría ser, según Pompeyo Márquez, una ley que obligue a las empresas a la restitución de las concesiones aún vigentes. Señala además que es necesario estudiar las posibilidades de lograr asistencia técnica con las compañías que quieran hacerlo. De ser posible obtener esa asistencia y colaboración en transporte y mercadeo no deberá excluirse a las empresas que operan actualmente en el país.

Enero 30

El candidato presidencial de la Nueva Fuerza, Jesús Angel Paz Galarraga, califica de "hipócritas y antivenezolanistas" las posiciones adoptadas sobre nacionalización de la industria petrolera por AD, Copei y el MAS. Se refiere a lo expresado por el candidato de AD, señor Carlos Andrés Pérez, y por el secretario general de ese partido, Octavio Lepage, de que debe sustraerse el tema petrolero de la campaña electoral, señalando que es una actitud "hipócrita" porque persiguen encubrir posiciones ya tomadas por AD de "contenido antivenezolano" con

respecto al tema petrolero. Lo expresado por Lorenzo Fernández de que "no le temblará el pulso" para firmar una ley de nacionalización si ello conviene al interés nacional es, según el doctor Paz, una actitud igual a la de AD. Comenta asimismo lo afirmado por Pompeyo Márquez, del MAS, en cuanto a que la "nacionalización ha perdido su carga revolucionaria", y expresa que es un problema de semántica política; considera que la posición de ese movimiento es la "más tímida y mediatizada" de cuantas han adoptado los partidos políticos, incluidos los de corte liberal.

Febrero 9

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, declara en Buenos Aires que Venezuela "no tiene la intención de nacionalizar la industria petrolera" por cuanto dentro del ordenamiento jurídico ha podido realizar cambios que estima fundamentales. Agrega que Estados Unidos considera en materia petrolera "primer deber" defender las necesidades de sus consumidores por encima de los "intereses de sus inversionistas". Señala que, dada la necesidad de petróleo en Estados Unidos, que será mayor cada día, considera que se debe negociar de gobierno a gobierno (Venezuela y Estados Unidos) para que "se nos fije seguridad de suministro".

Febrero 11

El senador de URD, Leonardo Montiel Ortega, declara que ese partido ya no considera algo inalcanzable el que Venezuela pueda manejar, sin intervención de terceros, la producción, refinación y venta del petróleo. La necesidad de energía de los países consumidores es un elemento que ayuda a imponer la nacionalización de la industria que opera en el país. Asimismo afirma que la "importancia de los grandes trusts internacionales ha pasado a un tercer plano y que lo que está tomando forma es la necesidad de que los países productores-exportadores de petróleo se entiendan directamente en negociaciones de gobierno a gobierno con los países consumidores". Este factor abre la posibilidad de una nacionalización petrolera en los países productores, por lo que en Venezuela ya aquélla no constituye un hecho inalcanzable. Le resulta curioso a Montiel Ortega que cuando otros países logran un control mayor sobre su riqueza, como Argelia y Libia, que han nacionalizado su industria, algunos políticos y candidatos presidenciales hablen de esperar el año 1983, fecha en que revierten las concesiones a la nación venezolana.

En análisis hecho por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos se revela que entre 1975 y el año 2000 revertirán a la nación concesiones petroleras por una extensión global de 2.241.422 hectáreas. La reversión de concesión más inminente

es la de la Mito Juan en 1975, y la siguiente en 1977, es de la misma empresa. Luego en 1983 revertirán 176.312 hectáreas que pertenecen a la Shell, Creole, Mito Juan, International Petroleum y otras. En 1984 revertirá otro lote importante.

Febrero 13

En la revista norteameriacna *U. S. News & World Report* se analiza la llamada crisis energética que confronta ese país. En la misma se advierte la "profunda preocupación" de las corporaciones petroleras de Estados Unidos por el futuro de sus actividades en Venezuela, estimando que las concesionarias tendrán que entregar sus acciones antes de la reversión prevista en 1983. Luego de hacer algunas consideraciones sobre la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela anota que las necesidades de Japón, Europa y Norteamérica "serán tan grandes que tendrán que aceptar las condiciones que impongan los venezolanos". Asimismo se atribuye el descenso de las reservas venezolanas de petróleo a la renuencia de los tres últimos gobiernos a otorgar nuevas concesiones, a que las reservas de gas se han declarado patrimonio nacional, y a que se exige a las compañías efectuar depósitos bancarios que exceden los 500 millones de dólares para asegurar el buen estado de las instalaciones y los equipos cuando se inicie el proceso de reversión en 1983.

Marzo 10

La posible violación de la Ley de Reversión por parte de una empresa contratista, la Off Shore, al desmantelar una gabarra de perforación para trasladarla al Golfo de México, obliga a las autoridades a abrir una averiguación. La gabarra está en el sector Punta de Palma del Distrito Urdaneta, Estado Zulia. Se estima que el equipo está valorado en unos 25 millones de bolívares. El gerente de la Off Shore, señor H. Mirs, informa que no hay ninguna declaración sobre el caso. Por su parte, el gobernador del Estado Zulia, doctor Hilarión Cardozo, anuncia que ha notificado al Ministerio de Minas para que abra la averiguación correspondiente.

El candidato socialcristiano a la Presidencia de la República, doctor Lorenzo Fernández, anuncia los cinco puntos que serán desarrollados en los primeros 100 días de su gobierno. El punto cuarto se refiere a la cuestión petrolera y contempla el propósito de adelantar la reversión petrolera mediante una consulta nacional que decida lo que más conviene hacer con nuestra principal riqueza.

Marzo 14

El doctor Luis Ferreira, inspector de trabajo en el Zulia, denuncia presunta violación de la Ley de Reversión Petrolera por parte de las principales empresas concesionarias que operan en ese Estado. Señala Ferreira que las compañías Shell, Creole, Mene Grande y Texaco violan el artículo 3º de esa ley que prohíbe a las concesionarias utilizar en las concesiones bienes de terceros, cualquiera sea el título por el cual posean o usen los bienes. Advierte el doctor Ferreira que el problema es más grave porque el uso ilegal de las compañías contratistas ha comprobado que varias de éstas violan los acuerdos internacionales de trabajo, la Constitución Nacional, la Ley de Reversión y el Contrato Petrolero vigente. Anuncia finalmente que se iniciará una investigación sobre 270 contratistas que operan en el Zulia.

Marzo 16

Con tres conjueces se constituye en pleno la Corte Suprema de Justicia para comenzar a conocer las demandas de nulidad de la Ley de Reversión. Las demandas introducidas por las empresas Creole, Shell, Mene Grande, Mobil y Venezuelan Atlantic objetan la mayoría de los artículos de la ley por cuanto, según señalan, coliden con los artículos 44, 69, 99, 101 y 102 de la Constitución Nacional. En esa reunión los magistrados de la Corte conocen oficialmente los dictámenes sobre las demandas emitidos por el Procurador y el Fiscal General de la República.

Marzo 17

Anuncia el ministro de Hacienda, doctor Luis Enrique Oberto, que el Fondo de Garantía establecido en la Ley de Reversión alcanzará en abril a casi 300 millones de bolívares, de los cuales 60 millones serán colocados a plazo fijo en organismos oficiales para financiar planes de desarrollo agropecuario. Indica que, a proposición del Ministerio de Hacienda, en la reunión de Consejo de Ministros se autoriza al Titular de Minas e Hidrocarburos para que comunique a las concesionarias, de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento Nº 2 de la Ley de Reversión, la decisión del Ejecutivo Nacional de depositar hasta 60 millones de bolívares en los Bancos Agrícola y Pecuario y de Desarrollo Agropecuario para su inversión en planes que tengan prioridad en el sector agropecuario nacional.

Marzo 21

El doctor Godofredo González, dirigente nacional del partido Copei, al comentar las posibles consecuencias de la nacionalización petrolera irania sobre Venezuela, señala que no cree que pueda ocasionar ningún desajuste, siendo además

una acción tomada en pleno ejercicio de sus derechos. Sobre la posibilidad de una nacionalización petrolera en Venezuela antes del 83, dice que la ley es bastante clara al señalar que la caducidad de las concesiones se produce a los 40 años de otorgadas. En 1983 habrá una nacionalización automática, pero, sin embargo, anuncia que en caso de asumir la presidencia el doctor Lorenzo Fernández, éste hará una consulta nacional para que se conozca el destino del petróleo en el país. Si esa consulta, dice el dirigente, decide que es favorable el adelanto de la reversión, él no tendrá inconvenientes en decretarla.

Marzo 23

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, al comentar la nacionalización petrolera de Irán y responder a la pregunta de un periodista de si esa medida será tomada también por Venezuela, señala que en lo que le queda de período constitucional no contemplará ninguna modificación del sistema legal, sino antes bien un fortalecimiento de las medidas que se han aprobado. El país, anota el Presidente, cada día toma más conciencia de sus derechos e intereses en materia petrolera, conciencia que se ve más precisa en cuanto a la conducta a seguir hasta 1983 cuando se iniciará la reversión de las concesiones.

Marzo 24

El doctor Luis Enrique Oberto, ministro de Hacienda, declara en Washington que Venezuela confía en atraer el capital extranjero necesario para mantener una saludable actividad en el sector petrolero. Asimismo señala que las inversiones foráneas están garantizadas dentro del ordenamiento legal venezolano, si aquéllas se orientan a asegurar al país una participación mayor en las decisiones que se adopten como en las operaciones que se ejecuten. Agrega que el monto del capital extranjero invertido en Venezuela en el sector no petrolero alcanza la suma de 7 mil millones de bolívares.

Abril 2

El doctor Humberto Calderón Berti, Director de la Oficina de Reversión del Ministerio de Minas, informa que en el transcurso de este mes las empresas petroleras deberán depositar la cantidad de 160 millones de bolívares correspondientes al Fondo de Garantía del año 1972, establecido en la Ley de Reversión. Ya las empresas han depositado 159 millones correspondientes al año 1971. Asimismo señala que se recibió el inventario de bienes afectos a reversión, los cuales ascienden a 19 mil millones de bolívares hasta 1970. El inventario realizado es a nivel general y en pocos meses se tendrá en nivel por unidades. También informa que las concesionarias deberán presentar los programas de mantenimiento de los bienes los cuales serán revisados por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Abril 27

El director de la Oficina de Reversión, doctor Humberto Calderón Berti, declara que el gobierno estudia la reversión de varios campos petroleros antes de 1983. Advierte que se han recibido campos como Jusepín y Oricual, pero se espera recibir otros considerados como marginales, o sea, aquellos en los cuales la producción no es negocio para algunas grandes empresas. Se necesita trazar, según el doctor Calderón Berti, un plan para recibir esos campos. Sin embargo, mientras el gobierno no decida recibirlos, la concesionaria debe mantenerlos y conservarlos.

Mayo 7

En conferencia dada por Pompeyo Márquez, Secretario General Nacional del MAS, en la ciudad de Maracaibo, ese dirigente señala que los socialistas rechazan hablar de nacionalización petrolera, por cuanto lo que está planteado es una reorganización de la economía, orientada a despojar a un grupo de personas que controlan las posiciones claves para explotar al resto de los venezolanos. Agrega que la palabra nacionalización ha perdido su carga revolucionaria y que ha sido tomada por demagogos para confundir lo que significa una "actitud revolucionaria en materia petrolera". Señala que una nacionalización de la industria que mantenga igual el resto de la economía se colocaría al servicio del tipo de dominación vigente.

Mayo 19

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, doctor D. F. Maza Zavala, señala que una de las necesidades más apremiantes que tiene el país en relación con el proceso de reversión petrolera a nivel directivo, ejecutivo y técnico, es precisamente la preparación del personal de este tipo que opere la industria. Advierte el doctor Maza Zavala que es necesario considerar el aspecto por cuanto es posible que la reversión ocurra antes de 1983. Por esta razón —dice— es que la UCV proyecta con cuidado los cursos de postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos.

Mayo 30

El doctor Octavio Lepage, Secretario General de AD, denuncia que el gobierno gasta el dinero del Fondo de Garantía establecido según la Ley de Reversión, dinero que sólo puede ser utilizado en inversiones reproductivas con la autorización previa del Congreso Nacional. Señala que el CEN de AD estudia el problema con preocupación y acuerda designar una comisión especial para que obtengan todas las informaciones necesarias con el objeto de fijar una posición al respecto.

Junio 2

El doctor Jesús Angel Paz Galarraga, candidato presidencial de la Nueva Fuerza, promete en mitin en Cabimas nacionalizar la industria petrolera en el próximo período constitucional en caso de ser elegido Presidente. Señala que el petróleo venezolano ha servido sólo a los grandes intereses monopolistas y no al pueblo venezolano. Después de 50 años —dice— "vamos a sembrar el petróleo en beneficio de las clases desposeídas. Vamos a nacionalizar todas las empresas petroleras".

Junio 13

El ingeniero César Piere, Jefe del Grupo Técnico del Instituto de Petróleo de la Universidad Simón Bolívar y director de la investigación científica sobre recuperación de crudos pesados en reservas que se realiza para el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, dice a los periodistas que el déficit científico amenaza el futuro de Venezuela, pues en cinco años el país requiere de 5.000 técnicos en petróleo y que al ritmo actual y con el promedio de egresados en esas carreras sólo se tendrán 250. Agrega que, ante esta situación que amenaza el futuro de Venezuela, el Instituto de Petróleo de la Universidad Simón Bolívar estudia un proyecto para convertir profesionales afines en investigadores y técnicos petroleros. Luego añade que Venezuela está atrasada en tecnología de exploraciones de costa afuera, donde tendrá que buscar su petróleo futuro y no se está haciendo nada para salvar esa brecha científica y tecnológica ni aún existe un inventario real de las necesidades científicas y tecnológicas para la futura industria petrolera nacional.

Junio 15

El candidato presidencial del FND, doctor Pedro Segnini La Cruz, en conferencia dictada en la Cámara Venezolana de Víveres, analiza la economía nacional y el papel que en ésta juega la explotación de los recursos petroleros. Advierte que debe tenerse cuidado con lo que desde un punto de vista político se haga con nuestra principal riqueza, y afirma asimismo que el petróleo debe excluirse de lo que denomina el "torneo nacionalista" en que están comprometidos algunos partidos políticos.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, instala el Fondo de Investigación en Materia de Hidrocarburos y Formación de Personal Técnico, juramenta a los doctores José Martorano y Miguel Layrisse como presidente y vicepresidente respectivamente de dicho Fondo. Señala el ministro que uno de los objetivos del mismo es eliminar la dependencia de la tecnología importada e ir desarrollando una en el país necesaria para el desarrollo económico y social.

Junio 24

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, en conferencia sobre "La crisis energética mundial y la posición petrolera", celebrada en la VII cena de la prensa, afirma que no se puede dejar en manos de las empresas internacionales un asunto de tanta trascendencia como lo es la cuestión petrolera, pues las empresas por ser organizaciones comerciales tratan de obtener el logro más inmediato que puedan del movimiento petrolero mundial.

Julio 2

El Titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, declara que nuevas decisiones debe tomar el Estado entre esta fecha y 1983 para que el proceso de nacionalización que se iniciará ese año se enmarque dentro de una estructura apropiada para el manejo y administración del complejo todo de la industria. Rechaza ciertas afirmaciones que pretenden vincular sus declaraciones con el proceso electoral que se avecina. Dice que no entiende por qué la gente se alarma cuando se habla de nacionalización si ello está consagrado en la Constitución Nacional. Aclara que cuando él se refiere a la nacionalización no lo hace como medida inminente y coactiva de incautación por el Estado de la industria, sino de la posibilidad de que aquél, según las circunstancias imperantes, pueda adelantar la reversión.

Julio 12

El presidente de la Subcomisión de Legislación de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, doctor Jesús Bernardoni, anuncia que las compañías petroleras le deben a Venezuela más de 40 mil millones de bolívares por concepto de las cuotas de amortización que se han llevado al exterior, y han repartido como dividendos a sus accionistas. Además, propone una nueva reforma a la Ley de Reversión para que se incluya la figura de las amortizaciones dentro de ese proceso, con el objetivo de que por esta vía pueda recuperar la nación venezolana las cuotas que han transferido las empresas petroleras. Luego denuncia que las concesionarias están maniobrando para reclasificar sus activos y burlar de esta manera la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión.

Julio 21

Con el título de "Alternativas de acción ante la Reversión Petrolera en 1983", los economistas Hernán Soriano, Abdón Vivas Terán, Germán Blanco y Pedro Gutiérrez, presentan un trabajo ante el I Congreso de Economistas. En el mismo exponen, entre otras cosas, que el proceso de reversión a partir de 1983 plantea al Estado diversas opciones de política económica, las cuales deben tener

como objetivo fundamental el mantenimiento de la estructura dinámica de la industria de los hidrocarburos.

Julio 25

Al foro organizado por el Colegio de Economistas en Barcelona asiste el candidato presidencial Miguel Angel Burelli Rivas. Al referirse a la cuestión petrolera afirma que se muestra partidario de nacionalizar la industria pero sólo después de 1983 cuando se cumpla el proceso de reversión. En su opinión los 9 años que faltan para llegar a ese proceso deben tomarse para la formación de los grupos humanos y la conciencia gerencial a fin de que la nacionalización no resulte un fracaso.

Julio 28

El doctor Pedro Segnini La Cruz, candidato presidencial del Frente Nacional Democrático, FND, asiste al foro organizado por el Colegio de Economistas de Barcelona. En éste condena y rechaza categóricamente la tesis que propugna la nacionalización de la industria petrolera antes de la reversión de las concesiones. Señala que no se opone al control de la actividad por parte del Estado, pero que para lograr esto deben aprovecharse los 9 años que faltan para la reversión con el objetivo de preparar al país para asumir ese control.

Julio 30

El doctor José Vicente Rangel, candidato presidencial del socialismo, declara en Punto Fijo, Estado Falcón, que la cuestión petrolera no puede ser tratada como lo quiere la derecha que pretende colocarla al margen de los grandes debates políticos considerando que no tiene nada que ver con el resto del país. Expresa que tampoco debe verse como lo ha hecho tradicionalmente la izquierda que imagina posible una reivindicación de la industria petrolera con significación revolucionaria al margen del cambio radical del poder político y del conjunto de la sociedad.

Julio 31

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, en Foro sobre reversión petrolera celebrado en el Centro de Ingenieros del Estado Zulia, señala, entre otras cosas, que el gobierno debe tomar medidas drásticas en caso de comprobarse descuido o reincidencia voluntaria en el mantenimiento de las instalaciones y equipos en los campos petroleros. Afirma que el país posee en la actualidad una política petrolera "clara y bien definida" hacia la utilización integral de los hidrocarburos, política que se basa en el sentimiento del pueblo de lograr día a día mayor participación en el manejo de la industria.

Agosto 4

El señor Carlos Andrés Pérez, candidato presidencial de Acción Democrática, declara que la nacionalización petrolera antes de 1983 es una de las alternativas que tiene el país. Advierte que en oportunidades ha planteado que en 1974, de llegar a la presidencia, se abocará a tomar una decisión sobre esa materia. Agrega que la Ley de Reversión es el desenvolvimiento de un principio que está contemplado en la Constitución Nacional y que no se podrá esperar el 83 para decidir sobre ese problema. Considera que no quiere que se "petrolicen" las elecciones, que es la tendencia del gobierno, por cuanto es un problema de gran trascendencia y debe ser estudiado sin la influencia electoral.

El doctor Luis Enrique Oberto, ministro de Hacienda, al comentar las declaraciones del titular de Minas sobre la posibile nacionalización antes de 1983, señala que la decisión sobre la nacionalización del petróleo no puede obedecer a "razones caprichosas", sino a circunstancias dentro de las cuales pueda desenvolverse la industria en ese momento.

Agosto 7

El presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo y miembro del Directorio de Fedecámaras, doctor Frank Alcock, declara que las relaciones entre las empresas petroleras y el gobierno son excelentes. Agrega que no hay razón para sentir temor de que las empresas estén descuidando la conservación de los equipos e instalaciones de la industria toda vez que no tienen interés en un deterioro de las relaciones con el gobierno. Asimismo afirma que en Venezuela "nacionalizar por nacionalizar quizás no sea un buen negocio". No obstante las compañías se rigen —dice— por la legislación venezolana; así esperan el año de 1983 cuando se iniciará el proceso de reversión que representa un acto de "nacionalización efectiva".

Agosto 8

Por la nacionalización petrolera progresiva se pronuncia el senador José González Navarro, quien respalda la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Señala que ese es un hecho fatal que se producirá en 1983 de acuerdo a la Ley de Reversión vigente.

Agosto 9

Reitera el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, que el gobierno tiene en estudio la alternativa para adelantar la reversión. Explica que la nacionalización se producirá a partir de 1983, pero en el período

de transición 1973-1983 se deben analizar las distintas alternativas y una de ellas es la reversión anticipada. El país está capacitado para ello. Cuenta con los técnicos y existe un mercado amplio y sólido para colocar su petróleo. Afirma finalmente que todo país tiene el derecho soberano de que el Estado opere directamente sus industrias básicas.

El Movimiento al Socialismo (MAS) señala que el ministro de Minas, doctor Hugo Pérez La Salvia, anuncia la nacionalización petrolera antes de 1983, lo cual, según aquel partido confirma plenamente la política del gobierno dirigida a buscar votos. Advierte el MAS que con ese anuncio cobra más fuerza para los sectores revolucionarios la consigna de socialización del petróleo antes que nacionalización del mismo, por cuanto con esta última los beneficios generados por esa medida serán disfrutados por los 20 supermillonarios que controlan la economía venezolana. En cambio, con la socialización, expresa el MAS, sería el Estado quien gozaría de manera exclusiva de tales beneficios.

Agosto 15

En programa de televisión, el señor Carlos Andrés Pérez, candidato presidencial de AD, afirma que el proceso electoral no debe "petrolizarse". Agrega que no puede adelantar nada sobre lo que hará su gobierno, en caso de ganar las elecciones, en materia petrolera, ya que la nacionalización de la industria debe ser fruto de un estudio detenido confrontando las opiniones del gobierno con la de los sectores fundamentales del país que determinan la opinión nacional. Considera absurdo someter la discusión de esa materia a consulta popular.

Agosto 16

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de la Asociación Pro Venezuela, señala que la nacionalización del petróleo o cualquier otra medida similar debe tomarse de manera objetiva y pragmática, enmarcada siempre dentro del bienestar del país. Agrega que la Ley de Reversión impone para su aplicación el determinar un conjunto de acciones tendientes a la conservación de la industria, que pueden ir desde el acuerdo de negociación hasta la propia nacionalización.

Agosto 19

Los círculos petroleros del país reaccionan con cautela ante las declaraciones del ministro Pérez La Salvia en el sentido de que puede producirse la nacionalización antes de 1983. Tanto en la Creole como en la Shell y en la Mobil altos funcionarios de esas empresas declaran que no tienen ningún comentario oficial que hacer al respecto. El doctor Frank Alcock, presidente de la Cámara del Petróleo, señala que no tiene nada que agregar a lo que en otras oportunidades ha

señalado. Al parecer hay sectores que estiman el momento como inoportuno para abordar el tema, y en especial el que por razones políticas se precipite cualquier acción.

Agosto 22

El director de Economía Petrolera del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, doctor Ramsey Michelena, declara que una nacionalización del petróleo sería negativa si no se lleva a cabo un saneamiento previo y a fondo de esa misma industria. Indica además que no cuenta el país con suficiente personal como para operar la industria petrolera. Analiza las posibilidades de los contratos de servicio y empresas mixtas, contratos de obra y control mayor en los distintos campos de la actividad petrolera. No descarta totalmente la posibilidad de las concesiones señalando que "la concesión de hoy no es igual a la de 1943" por cuanto lleva implícita la ley de nacionalización del gas, la de reversión, una participación del Estado sobre los beneficios no igualada por países industrializados y un control mayor sobre las operaciones internas y las exportaciones.

Agosto 26

El titular del despacho de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, en conferencia dictada en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, dice que es tarea fundamental la formación del personal necesario para manejar la industria de los hidrocarburos, que no sólo abarca la fase de extraer petróleo para luego exportarlo. El ministro se refiere además a la política petrolera del gobierno y señala que la misma está orientada fundamentalmente a obtener los mayores beneficios de la explotación y exportación de los hidrocarburos. Pero tales beneficios —dice— no deben limitarse sólo al ámbito económico, sino que deben también orientarse a lograr cada vez una participación mayor de los venezolanos en la industria petrolera.

Agosto 29

El doctor Héctor Malavé Mata declara que no está en capacidad de opinar si se puede adelantar la reversión petrolera mientras esté en vigencia la ley que rige la materia. El ministro de Minas —dice— se ha declarado partidario de la "reversión anticipada" pero en términos imprecisos que muestran sólo la incertidumbre y la precaria definición del actual régimen en materia petrolera. Agrega Malavé Mata, que considera conveniente anticipar o precipitar la reversión, no por las razones eventuales que presentan los expertos oficiales, sino por razones de preservación del interés nacional frente a la agresiva estrategia diseñada por las concesionarias. Considera que la ley ha estimulado, por las expectativas que ha creado, una nueva estrategia de las operaciones que mantendrán las empresas

en el lapso 1973-1983. Estima asimismo que mal puede hablarse de nacionalización petrolera inmediata sin antes definir su orientación y fundamento. Opina que el actual gobierno ha hecho suya la consigna de impulsar una política petrolera dentro de la tesis del "nacionalismo democrático", pero que en petróleo la ideología oficial "promete mientras no se compromete". Así, la nacionalización es objeto de varias falsificaciones. Se muestra en desacuerdo cuando se dice que la palabra nacionalización a perdido su carga revolucionaria, tomando para esto el que partidos de derecha esgrimen también esa consigna.

Septiembre 8

El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, Pompeyo Márquez, denuncia en Punto Fijo que las empresas extranjeras del petróleo han comenzado a trasladar las instalaciones hacia concesiones que vencen en 1997. Así en el año 1983 devolverán chatarra a la nación venezolana. Asimismo señala que tales compañías propician un acuerdo con el gobierno a través de una nacionalización falsa, con el cual aspiran que les sean indemnizadas sus instalaciones, hecho que no está previsto en la Ley de Reversión. Por ello considera Pompeyo Márquez que se trata de una nacionalización burguesa. Denuncia además que a espaldas del Congreso y del pueblo se negocia la faja petrolífera del Orinoco para solucionar, en parte, la crisis energética que vive Estados Unidos.

Septiembre 14

Señala el doctor Pedro Márquez, ingeniero petrolero, en conferencia dictada en la Universidad de Carobobo, que la industria petrolera debe ser nacionalizada ahora, por cuanto después todo estará agotado. Afirma que el país cuenta con los elementos necesarios para nacionalizar la industria. Dice que el miedo que se ha manifestado en torno a esa alternativa no tiene razón de ser ya que sobran mercados y se cuenta con tecnología suficiente para manejar la actividad petrolera.

El presidente de la compañía Shell, señor Kenneth Wetherell, afirma que el 98 por ciento del personal que labora en la empresa es venezolano. Dice que para lograr esto la compañía se ha esforzado en formar ese personal calificado. Señala asimismo que la Shell tiene interés de mantenerse en el país, por cuanto se considera capacitada para colaborar con la industria en su vía hacia nuevos y mejores logros.

El doctor Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, anuncia, después de terminada la reunión ordinaria de Gabinete, que el gobierno nacional adelanta el estudio sobre la posibilidad de anticipar la reversión petrolera. Afir-

ma que el país se encuentra suficientemente capacitado para enfrentar la nacionalización del petróleo, y ello no debe verse con temor toda vez que significa un acto de plena soberanía contemplado por el sistema jurídico internacional.

Septiembre 22

El señor Robert N. Dolph, presidente de la Creole, considera que hay buenas perspectivas de que las empresas petroleras puedan jugar un papel importante en el futuro del país. Agrega que es al pueblo y al gobierno venezolanos a quienes corresponde decidir, en ejercicio de su soberanía, el papel que desempeñarán las compañías en Venezuela. A la luz de lo que ocurre en el mundo —dice— es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983. La aplicación de modernas técnicas, la capacidad organizativa y gerencial, el financiamiento de grandes inversiones y el acceso a los mercados internacionales, son apenas algunas de las áreas en las cuales las empresas pueden servir a los intereses del país. Espera R. N. Dolph que tales servicios puedan ser prestados por esas compañías durante muchos años.

Septiembre 23

La Asamblea Nacional de Contadores y Administradores Comerciales acuerda pedir la modificación de los sistemas contables de todas las empresas petroleras que operan en el país y un aumento de un 10 por ciento del Fondo de Garantía que establece la Ley de Reversión. El Lic. Luis Lizardi, secretario de la Directiva de la Federación, informa que con la primera medida se busca tener un conocimiento cabal de todas las inversiones realizadas hasta el momento. Con respecto a lo segundo señala que los activos se han incrementado en un 100 por ciento por la inflación, y que ese aumento garantiza cualquier negligencia en el adecuado mantenimiento de los activos afectos a reversión.

El doctor Alberto Quirós Corradi, vicepresidente de la Compañía Shell de Venezuela, declara que la empresa está totalmente de acuerdo con el mantenimiento no sólo de equipos e instalaciones, sino también del personal que trabaja en la industria. Señala que colaborará con ello para que ésta se encuentre en óptimas condiciones cuando el Estado asuma el control de la actividad petrolera.

Octubre 1

El ministro de Agricultura y Cría, doctor Miguel Rodríguez Viso, anuncia que la primera cantidad de dinero que ingresa al Fondo de Reversión será utilizada en la actividad agropecuaria en los Estados Lara, Falcón y Zulia. Para ello

se han depositado en el Banco de Desarrollo Agropecuario 30 millones de bolívares de dicho Fondo.

Octubre 10

El foro realizado en Maracaibo plantea nuevamente el ministro Hugo Pérez La Salvia la posibilidad de adelantar la reversión. Afirma que el gobierno no puede cruzarse de brazos a esperar el año 1983, sino que es deber suyo analizar la problemática y las alternativas válidas. Señala que se vive un período de "transición" y que este es un plazo breve dentro de la industria petrolera. Es necesario mantener un adecuado nivel de inversiones tanto en exploración, explotación como en transporte a fin de reemplazar equipos anticuados. Recalca que los países petroleros han tomado conciencia de que la industria de su principal riqueza debe estar en manos propias.

Octubre 16

El doctor Humberto Calderón Berti, director de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, señala que ya comienza a realizarse la verificación física de los bienes afectos a reversión en la región norte del oriente de Venezuela. Agrega que por lo menos unas 300 empresas han sido contratadas para efectuar los trabajos de evaluación que requiere la reversión petrolera y estima que dentro de seis meses pueden estar concluidos los trabajos en todo el país.

Octubre 23

El doctor Jóvito Villalba, candidato presidencial del partido Unión Republicana Democrática, en gira por el Estado Táchira, manifiesta, entre otras cosas, la necesidad de nacionalizar la industria de los hidrocarburos. En esa oportunidad asume la defensa del régimen de Marcos Pérez Jiménez, considerando que éste fue quien inició en el país el "verdadero nacionalismo".

Octubre 26

El doctor Jesús Angel Paz Galarraga, candidato presidencial de la Nueva Fuerza, en exposición de su programa de gobierno en la Asociación Pro Venezuela, señala que bajo su gobierno habrá sectores económicos que serán afectados; entre éstos menciona los que dominan las industrias y actividades económicas básicas (petróleo, hierro, electricidad, etc.) porque sin esos sectores en poder de los venezolanos no será "posible la liberación nacional". Agrega que están dadas las condiciones para nacionalizar la industria petrolera. Dice asimismo que su gobierno irá a la expropiación y no a la confiscación de la industria.

Octubre 30

Un primer análisis de la Asociación Pro Venezuela sobre los Foros que organizara con los candidatos presidenciales, revela que hubo coincidencias en los aspectos básicos vinculados con el desarrollo económico. Con respecto a la cuestión petrolera las coincidencias, según la mencionada Asociación, se reflejan en dos aspectos centrales: a) control por parte del Estado de las industrias básicas con una tendencia hacia la diversificación de las mismas; b) con ligeras variantes estuvieron de acuerdo los candidatos en el adelanto de la reversión petrolera. Aun cuando no presenta plazos fijos para la realización de aquélla, coinciden en que el país está preparado para anticipar la reversión de su principal industria.

Noviembre 2

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en su rueda de prensa número 212 en el Palacio de Miraflores, se refiere a la preocupación que se manifiesta entre los empleados petroleros en cuanto a la reversión. Declara enfáticamente que no dictará ninguna medida en relación a aquélla, y que el gobierno continuará la política petrolera que ha emprendido. Anota el presidente que hay planteamientos del ministro de Minas e Hidrocarburos y otros altos funcionarios de que Venezuela tiene que estudiar el adelanto de la reversión, lo cual puede ser necesario para asegurar la marcha económica de estos asuntos, todo dentro del ordenamiento jurídico del país. En tal sentido reitera el doctor Caldera que no habrá en 1973 ningún anuncio ni decreto sobre ello.

Noviembre 11

Aparecen publicados en la prensa algunos de los aspectos básicos del programa de gobierno del doctor Lorenzo Fernández, candidato de Copei. Anuncia que adelantará la reversión petrolera prevista para 1983, por lo que el país requiere prepararse para asumir esa responsabilidad. Agrega que esa decisión no será la resultante de "impulsos emocionales", sino producto de cuidadosos estudios. Por ello se propondrá la terminación de los estudios ya emprendidos por el actual gobierno, y realizará una amplia consulta nacional con la participación de todos los sectores interesados.

Noviembre 12

La Asociación Pro Venezuela fija posición ante la cuestión petrolera enmarcada en lo que denomina una tesis nacionalista. Respalda, entre otras cosas, toda acción que tienda a otorgar al Estado mayor participación y poder de decisión frente a la industria de los hidrocarburos. Así apoya la Ley de Reversión, la de nacionalización del gas natural, como también exige que la Faja Petrolífera del Orinoco sea explotada por venezolanos. Pro Venezuela declara además la necesi-

dad de fomentar un esquema a través del cual se aleje al país de su condición de monoproductor y que tienda a la diversificación de la economía nacional.

Noviembre 17

En mitin realizado en Valera, Estado Trujillo, el señor Carlos Andrés Pérez, candidato presidencial de Acción Democrática, señala que es su deseo que el petróleo sea manejado por Venezuela y por los venezolanos. Asimismo expresa que la definición de nacionalismo petrolero él la completa, no como reclamo electoral sino por una profunda convicción y una decisión de cumplir lo prometido: "el petróleo de Venezuela y manejado por venezolanos". Señala además que el petróleo bajo su gobierno servirá para organizar una estructura financiera poderosa, para el desarrollo de la agricultura y de la pequeña y mediana industria.

Noviembre 25

Pedro Tinoco, candidato presidencial del Movimiento Desarrollista y de algunos grupos perezjimenistas, declara en Puerto Ordaz que la aspiración del país en materia de reversión no es recibir en 1983 una actividad industrial con equipos obsoletos, sino que es mejorar cada vez más la industria para sacarle todo el beneficio que se deba extraer. Se debe industrializar más el petróleo —agrega— para vender un producto que tenga una cantidad mayor de valor agregado. Señala que él y quienes lo acompañan ofrecen una posibilidad diferente de gobierno, de "nacionalismo auténtico".

Noviembre 29

El doctor Jóvito Villalba, del partido URD, presenta en televisión su programa de gobierno, y en el mismo señala que no es partidario de nacionalizar la industria petrolera y la del hierro sin antes consolidar un "gobierno fuerte y amplio que garantice el cumplimiento de esa medida". Asimismo anuncia, entre otras cosas, la nacionalización inmediata del petróleo y el hierro y la realización de una auténtica reforma agraria.

Diciembre 5

El candidato presidencial de Copei, doctor Lorenzo Fernández, expresa en mitin celebrado en Maracaibo que no le temblará la mano para nacionalizar la industria petrolera, si es ello necesario para el país. Dice tener conciencia de adónde y cómo va con el nacionalismo democrático, tras el objetivo de transformar nuestros recursos y alcanzar una transformación propia.

El ingeniero Pedro Márquez declara que el venezolano tiene que acabar por completo con el complejo de que no podemos controlar nuestras industrias bási-

cas y tomar en nuestras manos el negocio petrolero. Así lo señala por cuanto advierte que en la campaña electoral que vive el país algunas instituciones, candidatos de partidos y personalidades se oponen de manera rotunda a la nacionalización del petróleo. Indica además que sobre el país existe una presión internacional de parte de las empresas multinacionales para que continúe siendo la colonia tradicional proveedora de materia prima barata.

Diciembre 13

El señor Carlos Andrés Pérez, Presidente electo de Venezuela, afirma en rueda de prensa que el petróleo se convertirá en arma para lograr "nuestro puesto en el mundo", que servirá igualmente para alcanzar una participación más justa en el mercado internacional, y para decirle a los países desarrollados que controlan la tecnología: "déннos la tecnología de manera justa y nosotros le daremos nuestro petróleo".

Diciembre 15

El doctor Rodolfo Quintero, al comentar el resultado del proceso electoral, señala que con el triunfo de Carlos Andrés Pérez el país ha manifestado su satisfacción con la condición de república dependiente en lo económico-social y cultural. Dice que Venezuela ha mostrado así su voluntad de retroceder la historia, y ha votado contra el rescate de nuestra riqueza petrolera. Considera que para las fuerzas progresistas es la hora de la autocrítica constructiva y honesta. Las organizaciones interesadas en un cambio cualitativo deben buscar, según el doctor Quintero, una explicación racional y precisar conclusiones objetivas sobre el hecho.

Diciembre 17

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, al inaugurar la primera fase de la Petroquímica del Zulia, afirma que no es posible que aún se considere que la industria petrolera debe estar manejada sólo por los extranjeros, aprovechada por éstos, y que Venezuela obtenga de esa explotación solamente un royalty. El petróleo —dice— es una riqueza venezolana y, por tanto, el país tiene el derecho de participar cada vez más en su manejo, distribución y aprovechamiento.

Diciembre 21

El diario norteamericano *The Washington Post,* al comentar el triunfo electoral del candidato de AD, señor Carlos Andrés Pérez, señala que éste tendrá que comenzar pronto a buscar los términos de la proyectada reversión al Estado de las propiedades de las compañías petroleras que se valúan en 2.500 millones de dólares, "la más grande inversión" estadounidense en América Latina. Agrega que igualmente está en juego la posibilidad de participación norteamericana en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Asimismo el diario insta al Presi-

dente Nixon a adoptar una posición más constructiva en sus relaciones con Venezuela.

Por otro lado, la *Carta de Visión* afirma que en las dos cuestiones que afectan las relaciones de Estados Unidos con Venezuela (política petrolera y Cuba), Washington no tiene nada que temer del nuevo presidente, señor Carlos Andrés Pérez. Se cree que en casi todos los aspectos la política venezolana seguirá el curso centrista del gobierno de Rafael Caldera. Considera que en materia petrolera tanto AD como Copei tienen políticas semejantes. El alza de los precios del principal recurso aportará 1.800 millones de dólares a la economía venezolana, y esto "ayudará a ablandar las acusaciones de que el país está siendo ordeñado por compañías norteamericanas".

Diciembre 28

Durante el acto de celebración del XV Aniversario de Cordiplán, el doctor Enrique Tejera París afirma que es necesario que ese organismo estudie la nacionalización de las empresas petroleras que operan en el país. Por su parte, el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, señala que la idea no puede "quedar en el aire". En la materia Cordiplán tiene una responsabilidad aun cuando la mayor parte recae en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Considera el presidente que hasta el momento a nadie se le había ocurrido formular ese planteamiento, que hasta entonces sólo se ha hablado de "nacionalizar la industria a base de la empresa nacional CVP". No se había expuesto la posibilidad de nacionalizar la Creole o la Shell, pero la autoridad de quien expresa el concepto hace imperativo presentarlo como elemento de obligado análisis. Agrega el presidente que es consenso unánime de los venezolanos el que respalda toda medida de reafirmación de la soberanía y que hay consenso con respecto a la idea de hacer "definitivamente venezolana la industria petrolera".

Diciembre 29

El doctor Arturo Hernández Grisanti, de Acción Democrática, y el doctor Pedro Pablo Aguilar, de Copei, opinan sobre las declaraciones del doctor Enrique Tejera París. El primero señala que mientras no se realice un detenido análisis por medio del cual se determine si conviene o no adelantar la reversión, es prematuro hablar de nacionalización de la industria petrolera. Agrega que AD en su programa de gobierno plantea ese hecho como una posibilidad con el objetivo de mantener la industria en condiciones satisfactorias. Por su parte Pedro Pablo Aguilar, secretario general de Copei, considera importantes las declaraciones de Tejera París, señalando que el país tiene derecho a saber si la opinión de éste refleja la de su partido Acción Democrática y la del propio presidente electo, señor Carlos Andrés Pérez.

El doctor Aníbal Martínez, consultado acerca de la opinión del doctor Enrique Tejera París sobre la necesidad de nacionalizar la industria petrolera, considera que ello no es nada nuevo por cuanto desde hace años se viene planteando ante el país esa posibilidad. Estima, no obstante, que debe definirse primero el término "nacionalización", con el objeto de precisar si se refiere a una nacionalización "coercitiva e inmediata", o si se habla de reversión petrolera, la cual incluye la posibilidad de anticipar algunos de los pasos previstos en la Ley sobre la materia. Cree, sin embargo, que el país eligió una vía acertada para operar directamente la industria de los hidrocarburos a partir de 1983.

El doctor Enrique Tejera París aclara que, sólo a título de ejemplo de las tareas que pueden corresponder a Cordiplán, y no como una proposición concreta, habló de nacionalizar las empresas petroleras en el acto del XV aniversario de ese organismo. Asimismo comenta el programa de gobierno del partido Acción Democrática y dice que en éste siempre ha habido un número importante de expertos petroleros que se han ocupado de los problemas institucionales de la reversión, y ratifica que ese partido sobre materia petrolera ha evolucionado en el tiempo y es bastante conocida su posición a través de Juan Pablo Pérez Alfonzo y Arturo Hernández Grisanti.

Ante el planteamiento del doctor Enrique Tejera París sobre nacionalización de la industria petrolera, opinan voceros de distintos partidos políticos y diversas personalidades. Arturo Hernández Grisanti, de AD, considera prematuro hablar de petróleo mientras no se posesione el nuevo gobierno. Alvaro Silva Calderón, del MEP, señala que deben dedicarse los ingresos extraordinarios del petróleo para la reversión anticipada. Francisco Faraco, de URD, advierte que las empresas petroleras pueden ser nacionalizadas antes del 83, agregando que el 98 por ciento del personal es venezolano. Aníbal Martínez y Eduardo Acosta Hermoso coinciden en señalar que es necesario un detenido estudio sobre la materia.

El señor Kenneth Wetherell, presidente de la Compañía Shell de Venezuela, señala que la empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras a fin de "cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana". Acepta la compañía la necesidad de que se produzcan cambios al término de las concesiones, que permitan mantener esquemas apropiados de inversión.

Empresarios y expertos vinculados al sector petrolero y al financiero e industrial del país, consideran que no hay necesidad ni ambiente ni condiciones para asumir una tarea precipitada de nacionalización petrolera, por cuanto la política sobre esta materia contiene los mecanismos jurídicos (Ley de Reversión) para desarrollar con el tiempo el proceso de nacionalización. Estiman que desde ahora debe comenzarse a estudiar la futura transferencia de la industria a manos del Estado, pero no deben hacerse tales estudios de manera ligera y precipitada.

El presidente de la Creole, señor Robert N. Dolph, declara en Miraflores que las relaciones entre las compañías y los gobiernos están cambiando en muchos países del mundo y que es posible que cambien en Venezuela. Con respecto a la nacionalización expresa que puede tener muchas posibles interpretaciones. Dice que es cuestión de hablar con el gobierno y buscar una relación que sea satisfactoria a ambas partes.

Diciembre 30

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, en mensaje navideño y de año nuevo que dirige a todo el personal del Ministerio afirma que hoy puede decirse que "lo nuestro es más nuestro", y que no se permitirá el regreso a un pasado donde el país se encontraba sometido a un dominio económico ejercido por potencias externas, con grandes derivaciones sociales y políticas.

En telegrama dirigido al presidente de la República, doctor Rafael Caldera, el ex candidato de Copei, doctor Lorenzo Fernández, pide la nacionalización de las empresas petroleras durante el presente ejercicio constitucional. Expresa asimismo que esa medida sería el mayor y más valioso logro a alcanzar en la política del nacionalismo democrático.

1974

Enero 4

Declara el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, que la Creole Petroleum Corporation tiene 30 días de plazo para devolver a la nación los campos petroleros de Jusepín y Mulata, en el Estado Monagas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Reversión.

Se informa que la Creole Petroleum Corporation demandará ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos conforme a la cual esa empresa ha sido obligada a devolver a la nación, sin recibir indemnización alguna, los campos de Jusepín y Mulata en el Estado Monagas, alegando al respecto que en 1971 esos campos no eran explotables, pero que ahora sí lo son por motivo de la revaluación de yacimientos impuesta por la escasez mundial de energía.

Enero 5

Robert Dolph, presidente de la Creole, declara a los periodistas al salir de una conferencia con el presidente electo Carlos Andrés Pérez que la Creole intentará ante la Corte Suprema de Justicia demanda de nulidad del decreto que obliga a esa empresa a devolver a la nación los campos de Jusepín y Mulata en el Estado Monagas.

Enero 7

La CUTV se pronuncia por la nacionalización integral de la industria petrolera y hace un llamado a los distintos sectores del país a estructurar un frente nacional para lograr dicha nacionalización, y agrega la central obrera que entiende el rescate total de las instalaciones y concesiones por parte del Estado venezolano a través de CVP en forma integral y no como simple paso a sociedades privadas o mixtas, o que se utilice la modalidad de los contratos de servicios ni otras formas de asociación que puedan encubrir la participa-

ción de capitales extranjeros, pues no se garantizaría el beneficio económico, social y político, ni el control soberano que aspira ejercer la nación sobre su recurso fundamental.

Enero 13

Se pronuncia Juan Pablo Pérez Alfonzo por la inmediata reversión sin indemnización alguna para campos virtualmente abandonados y con pagos justos para áreas realmente productivas.

Ante la proposición hecha por el doctor J. P. Pérez Alfonzo de nacionalizar la industria venezolana, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos manifiesta que no han tenido aviso oficial de la propuesta. Ello, en opinión de aquella fuente, se plantea cuando el público norteamericano comienza a creer que las grandes compañías serían el villano de la actual escasez energética, mientras en Washington se señala que la nacionalización de las compañías será negativa.

Enero 15

Una publicación francesa, *Le Monde Diplomatique*, dice que la coyuntura energética actual abre grandes posibilidades de independencia y desarrollo para la industria petrolera de América Latina. Elena de la Souchere, quien escribe en la citada publicación, considera que la nacionalización de los yacimientos venezolanos será en Latinoamérica la consecuencia más importante de la crisis petrolera mundial.

Enero 16

Estudios jurídicos, financieros, económicos y técnicos para efectuar la nacionalización de la industria petrolera deja listos el Ministerio de Minas e Hidrocarburos al concluir la gestión del presidente Rafael Caldera. Así lo manifiesta el ministro Hugo Pérez La Salvia. Señala éste que están dadas todas las condiciones para adelantar la reversión. El ministro hace un recuento de las gestiones hechas por el ministerio en función de tomar una medida como aquélla. Entre otras cosas advierte que la Dirección de Bienes Afectos a Reversión ha realizado un inventario de bienes de las compañías que arroja la cantidad de 20.065 millones de bolívares. Se hizo también un estudio exhaustivo de las empresas de servicio que operan con las petroleras para adoptar con ellas una política eficiente. Se constituirá una federación de empresas estatales en la cual la CVP jugaría papel central. Agrega que los estudios realizados determinan necesariamente una ley para realizar la nacionalización que ha venido examinando el ministerio.

Enero 17

El doctor Ramón Tenorio Sifontes, secretario general de URD, informa que en el último directorio del partido se estudió la proposición de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional para decidir sobre la nacionalización inmediata de la industria petrolera. Quiere saber URD, dice el doctor Tenorio Sifontes, si se pretende una nacionalización verdadera o si se pagará a las empresas una suma alta de acuerdo al inventario que se estima en 20 mil millones de bolívares.

Enero 18

El secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), señor Pompeyo Márquez, afirma que el adelanto de la reversión es inminente. Considera que esto es un acuerdo a nivel político entre los distintos factores que concurren en el negocio petrolero. Señala que nadie ha desmentido el que las compañías petroleras, el Departamento de Estado, Fedecámaras y los partidos políticos AD y COPEI han tenido entrevistas para estudiar las nuevas relaciones entre las petroleras y el Estado. Afirma que a través de informaciones confidenciales se sabe que, entre los modelos sustitutivos al régimen de contratos de servicio, el que se maneja en forma prioritaria es el de las empresas mixtas. La opinión del MAS, según declara Márquez, es que no hay razones que justifiquen la creación de empresas mixtas.

Enero 23

Según investigación realizada por la Dirección de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, se determina que el Ejecutivo dicte una medida de control sobre los beneficios de las empresas, y al mismo tiempo el desanclaje de una política para el uso de 95 campos marginales existentes en el país. Agrega que en la medida en que esté más próximo el año 1983 las empresas disminuirán sus inversiones. Durante los últimos 12 años la inversión promedio ha sido de 750 millones de bolívares. Las cuotas de amortización y depreciación han sumado en el mismo lapso unos 12.000 millones de bolívares, mientras que la descapitalización se calcula en unos 3.000 millones de bolívares.

Siro Vásquez, vicepresidente de la Exxon y el ex presidente de la Creole, antes de partir para EE. UU. y después de permanecer algunos días en Venezuela, donde se entrevistó con el presidente Rafael Caldera, con el presidente electo Carlos Andrés Pérez y visitó los campos petroleros de la Creole en el Occidente del país, declara que le reiteró al presidente electo que la Exxon y él personalmente dan su respaldo a las declaraciones del presidente de la Creole, Robert

Dolph, en el sentido de que la Creole tendrá una actitud positiva y flexible ante los problemas de la reversión anticipada.

El señor Carlos Andrés Pérez, presidente electo, afirma en Maracaibo que no debe esperarse el año 1983 para que se cumpla la reversión petrolera. Sólo que en tal materia no deben tomarse medidas apresuradas. Reitera que en su gobierno el petróleo será utilizado como instrumento de transformación del país.

El partido Copei anuncia que propondrá en las próximas reuniones del Congreso Nacional la necesidad de que ese cuerpo decida el adelanto de la reversión petrolera. El Congreso debe proceder entonces, según declaraciones del doctor Pedro Pablo Aguilar, a elaborar los instrumentos legales que conduzcan a la nacionalización de esa industria.

Enero 24

Autoridades del Ministerio de Minas e Hidrocarburos ratifican la declaración del ministro Pérez La Salvia de que ninguna decisión sobre el adelanto de la reversión será tomada en esta administración. El ministerio, informan, continuará los estudios para dejarlos a la disposición del nuevo presidente.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, comenta los temores expresados por Fedecámaras ante el adelanto de la reversión petrolera y dice que siempre habrá personas que defiendan los grandes intereses internacionales. Esto acontece, según el ministro, porque hay grupos que se sienten afectados si el país decide tomar una decisión definitiva sobre el manejo directo de la industria petrolera. Señala asimismo que está cada día más convencido de que la industria debe ser nacionalizada para poder usar el petróleo como instrumento de desarrollo.

Enero 25

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, declara en rueda de prensa que una decisión como la de adelantar la reversión supone la participación del Congreso Nacional. Agrega que los intereses que el país vaya a asumir y que aún corresponden a las compañías petroleras, deben ser indemnizados, estableciéndose criterios correctos de justicia. Venezuela, en su opinión, no ha tenido ni siquiera la necesidad de pensar en una confiscación sin indemnización.

Enero 27

El doctor Humberto Calderón Berti, Director de Reversión, señala que Ve-

nezuela deberá invertir anualmente mil millones de bolívares para sostener las áreas actuales de producción con una extracción diaria de 2.400.000 barriles para el año 1983. Al referirse al valor total de los inventarios petroleros, dice que podía terminarse su verificación en tres años. Agrega que en caso de que se decida el adelanto de la reversión, la nación debe pagar a las concesionarias la suma de 5.560 millones de bolívares.

Leonardo Montiel Ortega, de URD, declara que la nacionalización petrolera puede hacerse en términos inmediatos sin necesidad de establecer una nueva ley ni esperar que se reúna el próximo congreso. Agrega que basta sólo con aplicar las leyes vigentes de hidrocarburos y de reversión. Señala que más de las dos terceras partes de las actuales concesiones están ociosas y el Estado puede recibirlas sin que ello involucre pago de ninguna naturaleza. Se muestra así en desacuerdo con la indemnización a las concesionarias.

Enero 30

En declaraciones ofrecidas por el vicepresidente de la Creole, Guillermo Rodríguez Eraso, y el presidente de la Shell de Venezuela, señor Kenneth Wetherell, se indica que esas concesionarias, ante el carácter irreversible del proceso de nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, manifiestan su voluntad de esperar confiadas en la seriedad del gobierno saliente y del entrante para la implementación definitiva de las decisiones que sobre el asunto de la nacionalización deban tomarse, a la vez que confían en que, dentro del nuevo esquema que el gobierno resuelva aplicar, muchas de las concesionarias podrán prestar sus servicios al país en la nueva situación.

Febrero 3

Afirma el doctor Rafael Sandrea, secretario técnico de la Comisión de Investigaciones de Petróleo y Petroquímica, que en el país la industria privada no hace ningún tipo de investigación en materia tecnológica petrolera, sino que ésta es solicitada por las grandes empresas del ramo a sus casas matrices del exterior. Señala también que el 80 por ciento de los ingresos percibidos por Venezuela en materia petrolera es regresado a los países industrializados por concepto de compra de tecnología. En su opinión, debe aprobarse cuanto antes el crédito para el INVEPET para evitar uso de patentes extranjeras en petróleo.

El ingeniero petrolero Pedro Márquez exhorta al presidente Caldera y al ministro de Minas Hugo Pérez La Salvia a que convoquen al Congreso a una sesión extraordinaria con objeto de discutir y aprobar la nacionalización de la

industria petrolera. Señala que ese hecho es el único camino para alcanzar la liberación económica y el desarrollo del país. Se pronuncia Pedro Márquez por la creación inmediata de un frente pro nacionalización.

Febrero 6

En acto presidido por el doctor Humberto Calderón Berti, la nación recibe los campos de Jusepín y Mulata sin pago de compensación. Constituye esto la primera medida de aplicación de la Ley de Reversión. Los dos campos son recibidos con todas sus instalaciones y equipos y 5.790 hectáreas de concesiones. El campo de Mulata no está en producción y las principales instalaciones "están en la ruina". El de Jusepín produce 550 barriles diarios en unos 38 pozos.

Febrero 8

El doctor Federico Baptista, ex vicepresidente de la Creole, señala que uno de los elementos más importantes para la reversión petrolera es mantener un ritmo de inversiones que mantenga a la industria en óptimas condiciones para suplir sus mercados tradicionales. Cree que para la reversión debe procederse con cautela para no entorpecer el desarrollo de la industria. Anuncia la celebración del III Congreso de Ingenieros del Petróleo donde, según informa, se sentarán las bases para lograr con éxito la transición de la industria petrolera.

Febrero 10

El senador Luis Tovar indica que existe un consenso general con respecto al adelanto de la reversión petrolera. Señala que, sin embargo, para ello debe hacerse un profundo estudio del problema, de sus ventajas y desventajas, para que la reversión contemple a cabalidad los "beneficios nacionalistas que con ella se persiguen". Para nacionalizar, señala, no tiene porque fijarse una determinada fecha, es necesario un exhaustivo análisis del problema.

Febrero 11

El Directorio Nacional de Copei aprueba un acuerdo por el cual expresa su más decidido apoyo a la política nacionalista del presidente Caldera a la vez que declara que la nacionalización de la industria petrolera debe hacerse en forma inmediata. Luego de ocho considerando, acuerda que la nacionalización es imprescindible y necesaria, que la Faja Petrolífera del Orinoco debe ser explotada por el Estado venezolano, y que se cuenta con el apoyo humano y técnico para operar eficientemente la industria nacionalizada.

Febrero 12

La revista *Time,* al hacer referencia a la empresa Exxon, señala que el presidente electo de Venezuela "ha prometido tomar todas las concesiones pe-

troleras extranjeras, incluyendo plantas y equipos, mucho antes que los acuerdos actuales expiren en 1983", pero que la empresa —añade la información— continuará siendo una fuerza poderosa en la escena petrolera internacional.

El señor R. N. Dolph, presidente de la Creole Petroleum Corporation, afirma que la empresa tiene algo útil que ofrecer a Venezuela, por lo que espera que el país sabrá utilizar su "voluntad de cooperación". Esto lo argumenta señalando que el optimismo que tiene queda avalado con los amplios planes de inversión que tiene la empresa para el presente año. Se muestra, por supuesto, partidario de mantener el actual sistema de explotación ante la posibilidad de nacionalizar la industria. Acepta sin embargo que en el futuro se producirán cambios, para lo cual se presentan varias alternativas que en su opinión pueden resultar importantes al Estado venezolano. Afirma en tal sentido que la fórmula de empresas mixtas o acuerdos racionales de cooperación dentro del esquema de nacionalización beneficiarían ampliamente al país.

Febrero 13

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, asegura que el Estado venezolano está en plena capacidad financiera para explotar por sí solo la Faja Petrolífera del Orinoco.

En entrevista concedida a la Agencia Tass y al corresponsal de *Izvestia,* Carlos Andrés Pérez, presidente electo, declara que le tocará establecer una nueva política petrolera que rescate para el país el manejo soberano y directo de su riqueza. Agrega que el manejo soberano y directo implica todas las fases de la industria desde la producción hasta la comercialización. Esa política petrolera, según advierte, será adoptada dentro de un amplio consenso nacional.

Declaraciones dadas por Robert Dolph y Guillermo Rodríguez Eraso, presidente y vicepresidente respectivamente de la Creole, indican que las empresas petroleras más importantes del país se preparan para grandes cambios en Venezuela en los próximos años, en cuanto al régimen existente en la explotación petrolera, y su preparación es para diversas alternativas, incluyendo la reversión a muy corto plazo.

Febrero 15

Informaciones procedentes de Nueva York indican que la Creole Petroleum Corporation, pese al anunciado propósito del presidente electo de Vene-

zuela en efectuar "una temprana reversión", se siente optimista porque nuevas relaciones a largo plazo podrían producirse entre Venezuela y la corporación, lo que le permitiría continuar aportando servicios importantes a la nación venezolana sobre bases mutuamente satisfactorias y beneficiosas.

Febrero 16

El vicepresidente de la Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, declara que esa empresa está dispuesta a participar en la exploración y desarrollo de las áreas petrolíferas del Golfo de Venezuela y de la Faja del Orinoco, mediante un acuerdo con el Estado venezolano sobre esas áreas de reserva estatal. Opina el doctor Quirós que la Shell fue pionera en los estudios para el desarrollo de la Faja del Orinoco.

Febrero 17

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a través de dos de sus dirigentes, Rómulo Henríquez y Simón Sáez Mérida, reclaman la nacionalización inmediata de la industria petrolera. Consideran ellos que la nacionalización debe ser integral, ya que las compañías tratan de desvirtuarla para convertirla en un negocio mixto o de participación. Agregan que no debe pagárseles compensación alguna ya que, de tomar en cuenta innumerables irregularidades cometidas por las concesionarias, éstas más bien quedarían en deuda con Venezuela.

Febrero 20

El doctor Pedro Pablo Aguilar anuncia que Copei ha terminado el anteproyecto de ley que reserva al Estado la industria de los hidrocarburos, el cual será introducido al Congreso Nacional en sus próximas sesiones. Explica que en el mismo se prevé que las empresas recibirán una indemnización igual al valor de sus activos fijos.

En foro realizado en el Sindicato de Trabajadores Organizados Petroleros y Petroquímicos del Estado Falcón, el Ministro de Minas, doctor Hugo Pérez La Salvia, declara que hay razones de orden técnico y económico que impulsan a la reversión anticipada. Entre ellas menciona la indemnización y racionalización de la industria, la intensificación de las inversiones, la necesidad de cambiar los actuales patrones de refinación para lograr la producción de combustibles más caros. Al referirse al pago de indemnización indica que ésta no debe estar por encima del valor neto que aparece en los libros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, doctor Arístides Calvani, declara en México que la reacción de su país ante las amenazas económicas hechas por Estados Unidos, será la de nacionalizar la industria petrolera "para hacer esas amenazas menos amenazables". Agrega que en Venezuela se considera el adelanto de la reversión por cuanto se corre el peligro de que no se realicen las inversiones necesarias en la industria y que el equipo que se mantiene sea sólo chatarra en 1983. Asimismo solicita la unidad latinoamericana porque considera que el poder de negociación será más fuerte en la medida en que los débiles se unan.

Febrero 22

El partido Copei revela que la nación venezolana deberá pagar en indemnización a las concesionarias de hidrocarburos la cantidad de 5.559 millones de bolívares en caso de adelantar la reversión. La cifra fue dada a conocer por el doctor Godofredo González, quien opina que la indemnización es necesaria por cuanto así lo contempla la Constitución Nacional. Informa también que el análisis del proyecto de ley que presenta Copei contempla las fases de exploración, explotación, refinación, como también las prestaciones de los trabajadores y la prórroga automática de los contratos colectivos vigentes.

Febrero 24

El presidente electo, señor Carlos Andrés Pérez, declara en Ciudad Bolívar que Venezuela comenzará a usar su petróleo de manera tal que le permita alcanzar su independencia económica. Con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco afirma que la CVP "será su propietaria", aunque tendremos que negociar servicios tecnológicos que sólo los países desarrollados pueden facilitar. Expresa que el adelanto de la reversión aparece como algo necesario y aconsejable tanto para las compañías multinacionales como para el propio Estado venezolano.

Febrero 28

El Movimiento Electoral del Pueblo anuncia que introducirá al Congreso Nacional para su discusión en las próximas sesiones, un proyecto de Ley Orgánica de Nacionalización de la Industria Petrolera que reserva al Estado todas las fases de la industria incluida la de comercialización. Consta el proyecto de 22 artículos y prevé la creación de un Consejo Superior de Hidrocarburos, dependiente de la presidencia de la República, que actuará como planificador, organizador, director y coordinador de las actividades petroleras nacionalizadas. También considera el pago de indemnización y las prestaciones de los trabajadores y empleados petroleros.

Marzo 6

El presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en su último mensaje al Congreso Nacional se refiere, entre otras cosas, a la cuestión petrolera. Afirma que Venezuela "está madura para manejar directamente su actividad petrolera", y que existe una disposición creciente en el país para asumir el manejo de las áreas actualmente bajo concesiones. El ordenamiento jurídico, según el Presidente, ofrece elementos para el anticipo de la reversión, bien por fórmulas tradicionales o bien mediante una ley que reserve al Estado la industria de los hidrocarburos.

Marzo 14

Informaciones de Nueva York señalan que las empresas petroleras recibieron con calma la declaración del presidente Pérez de nacionalizar la industria petrolera durante su mandato. Dicen esas fuentes que "ya sabíamos que vendría a la larga, y bajo Pérez estimamos que se hará de una manera justa para nosotros y para Venezuela", y añaden que "este no es el caso chileno y nadie nos ha dicho que no se nos indemnizará por nuestra inversión".

Marzo 16

El doctor D. F. Maza Zavala observa en el proyecto de Copei una extraña omisión en el artículo 1º que parece confirmar los temores de la posibilidad de negociación con las compañías directamente o con el gobierno de Estados Unidos. El artículo —señala Maza Zavala— establece que se reserva al Estado la exploración, explotación, manufactura, refinación, pero no se expresa nada sobre comercialización. Todo, en su opinión, hace pensar que AD y Copei pueden ponerse de acuerdo para aprobar una ley con esas limitaciones.

Marzo 18

Señala el doctor D. F. Maza Zavala que tanto en el mensaje al Congreso como en su primera conferencia de prensa, el presidente Carlos Andrés Pérez asegura que la reversión se anticipará, pero no ha señalado que será inmediata, sino después de un consenso nacional. Interpreta que será implementada, y que quizás incluya un proceso de negociaciones con las compañías petroleras cuyas concesiones revertirán, así como con países que suministran tecnología. Según las afirmaciones del Presidente y la interpretación mía, dice Maza Zavala, se puede concluir con que transcurrirá algún tiempo antes de que la reversión petrolera y su implementación a nivel gubernamental sean definidas. Agrega que el anuncio de crear una comisión asesora en esa materia tomará tiempo para estudiar y definir el anticipo de la reversión.

El secretario general del MAS, señor Pompeyo Márquez, expone la posición de ese partido sobre el adelanto de la reversión. Considera que ésta es una necesidad que está planteada por la situación que confronta la industria de casi parálisis en sus inversiones y exploraciones. Agrega que están dadas todas las condiciones para nacionalizar la industria. Los argumentos que antes se esgrimían contra ese hecho hoy no tienen razón de ser. Advierte que están conscientes de que un adelanto de la reversión en manos de un Estado ineficiente, incapaz, derrochador, con tendencia a la burocratización, corre peligros serios; pero no se debe rechazar por ello la nacionalización. Las empresas petroleras presionan, dice Márquez, para lograr ventajas. Según él, las fórmulas que barajan son: empresas mixtas, mantenimiento del monopolio tecnológico y dominio de la comercialización.

Humberto Calderón Berti, Director de Reversión del Ministerio de Minas, expresa que la nacionalización sale de la etapa del mito y pasa a ser una alternativa irrenunciable en nuestro país. Advierte que de no hacerlo ahora nos exponemos a recibir en un futuro una industria sometida a un grave proceso de desinversión. Con respecto a la indemnización considera que no debe pagarse una cantidad superior al valor neto de los activos. Ese valor está por el orden de los 6 mil millones de bolívares sujeto desde luego a un avalúo. Si éste determina que es menos, debe entonces pagarse menos. El Estado, según Calderón Berti, debe asumir la penetración del mercado internacional, sin intervención del capital privado.

Se inicia hoy en el Congreso el debate sobre la nacionalización de la industria petrolera con dos proyectos de ley, uno elaborado por el MEP y otro por Copei. Se informa desde ya los posibles antagonismos, dada la diversidad de corrientes políticas en el Parlamento. Es posible que se presente no sólo la nacionalización integral de la industria, sino también la creación de empresas mixtas. El dirigente del MEP, Jesús Angel Paz Galarraga, advierte diferencias entre los dos proyectos a no ser que, según Paz, el de Copei haya sido modificado, por cuanto éste reserva al Estado todas las fases de la industria menos el mercadeo del crudo. Hay, sin embargo, elementos similares por ejemplo en lo referido al pago de indemnización. El senador Pompeyo Márquez, del MAS, expresa que en líneas generales el proyecto presentado por el MEP merece la consideración de ese partido. Hay aspectos que comparten como la indemnización a pagar en caso de una reversión inmediata.

Se presentan dificultades de procedimiento en la Cámara del Senado para la discusión de la nacionalización petrolera, por cuanto hay introducidos dos proyectos sobre la misma materia en ambas Cámaras. Finalmente se acuerda que el estudio lo haga la Comisión de Mesa del Congreso Nacional. Sin embargo, en la primera sesión del Senado interviene Godofredo González, de Copei, quien hace una larga exposición del contenido del proyecto introducido por ese partido. Con el mismo se pretende reservar al Estado varias de las fases de la industria.

En la Cámara del Senado se decide que los dos proyectos de nacionalización puestos en consideración en los dos Cámaras sean estudiados conjuntamente por las Comisiones de Minas e Hidrocarburos del Congreso. Tal decisión pone término al debate sobre la posibilidad de que se introdujeran y debatieran al mismo tiempo dos proyectos sobre una materia. La incongruencia es denunciada por el senador Luis B. Prieto Figueroa (MEP). Interviene además Godofredo González, quien en nombre de su partido señala que ha llegado el momento de nacionalizar la industria, porque esperar a 1983 es encontrarla en proceso de liquidación. Califica la compensación como "justa y equitativa" ya que se toma sobre la base de los mismos libros de contabilidad de las concesionarias.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados continúa igualmente la discución e interviene Abdón Vivas Terán, quien señala que la nacionalización petrolera debe realizarse por varias razones, unas conyunturales y otras accidentales, tanto de carácter político como económico. Advierte que tiene conocimiento de que habrá sectores que se opondrán al consenso nacional, por ello el concepto de unanimidad no se refiere a todos los venezolanos, sino al poder popular del consenso. Califica de peligrosa la posesión de las riquezas en manos de empresas extranjeras. Interviene además el diputado Siuberto Martínez, del MEP y destaca que tanto el proyecto presentado por ese partido como el de Copei garantizan las prestaciones sociales de los trabajadores y empleados petroleros. Explica que el proyecto del MEP contempla la creación de un fondo para los trabajadores que será depositado en el Banco Central.

Marzo 19

El doctor Gonzalo Barrios, presidente del Congreso Nacional, señala que Acción Democrática comparte con los demás sectores del país la idea principista en cuanto a la necesidad de adelantar la reversión. Recuerda que tanto AD como el actual presidente de la República se pronunciaron sobre ello y mani-

festaron su coincidencia a la cuestión de principio sobre la materia. No opina el doctor Barrios sobre los proyectos presentados por Copei y el MEP por cuanto advierte no conocer los textos en su totalidad.

En consulta efectuada en el Congreso Nacional a varios representantes de fracciones parlamentarias sobre la nacionalización de la industria petrolera, se observa un virtual consenso de opiniones favorables sobre tan importante materia, aunque no así en lo relacionado con la instrumentación legislativa que debe adoptarse ni la oportunidad en que debe hacerse efectiva la misma. En este último sentido se aduce la circunstancia de que aún a nivel de los partidos políticos no se conocen en sus detalles los proyectos de ley consignados por el MEP y Copei.

Marzo 21

Acción Democrática, según declara el diputado A. Hernández Grisanti, no permitirá que se le quite la iniciativa en materia petrolera. Así expresa al referirse a la posición que mantendrá su partido en el debate legislativo sobre los proyectos presentados por Copei y el MEP. Agrega que AD nunca ha tenido dudas sobre la necesidad de adelantar la reversión y en esta materia "hemos dado pruebas, a través de muchos años". Señala asimismo que en lo que respecta a la indemnización es materia que corresponde estudiar a los dos poderes, pero añade que en el orden jurídico venezolano no se contemplan medidas confiscatorias, por tanto, se debe indemnizar, y la cuestión a decidir es el monto justo y cuándo debe hacerse.

Marzo 22

El doctor Octavio Lepage, secretario general de Acción Democrática, considera que la reversión anticipada o nacionalización del petróleo no es un problema de doctrina. Entiende que el país está de acuerdo con ello y hasta las mismas compañías "parecen resignadas a lo inevitable". Interpreta que el problema es exclusivamente de tipo administrativo y consiste en prepararse para ello, sin correr el riesgo de que se vea afectado el funcionamiento de la industria. Agrega que en la campaña electoral el candidato de AD fue categórico en señalar que la nacionalización del petróleo exige un amplio consenso nacional y por esto planteó la conveniencia de que ningún partido pudiera atribuirse el mérito de esa iniciativa. Pero lamentablemente se ha establecido una competencia entre los partidos para atribuirse la paternidad de la nacionalización. Muestra confianza en que con respecto a ésta no se actuará con precipitación ni bajo presiones.

Marzo 26

Continúa el debate en la Cámara de Diputados sobre nacionalización petrolera. El diputado independiente Raúl Torrealba Alvarez en breve exposición apoya el proyecto presentado por Copei ante el Congreso. Freddy Muñoz, del MAS, señala que cuando Copei estuvo en el gobierno no hizo ningún pronunciamiento categórico sobre la nacionalización petrolera y que el actual partido de gobierno tampoco lo hizo durante su campaña electoral. Pregunta sobre el destino de los ingresos que en la nacionalización obtendrá el Estado, y agrega que hay países donde se han nacionalizado industrias y el dinero lo monopolizan los "monarcas o jeques" dejando a un lado las necesidades del pueblo. Asimismo manifiesta que no le parece sensato el que se negocie con las grandes compañías la comercialización, ya que hay que impedir que los beneficios de la industria nacionalizada vayan a manos de los que siempre los han detentado.

El dirigente nacional del MIR, Héctor Pérez Marcano, declara en Barquisimeto que ese partido rechaza los proyectos presentados por el MEP y Copei, pues en ambos se contempla indemnizar a las compañías. Advierte que éstas tienen años engañando al país. Engañan al Fisco en la amortización de sus activos fijos, produciendo evasión de impuestos. Alerta que no se está ante ninguna decisión revolucionaria. Existe sólo una convergencia entre intereses de sectores decisivos de la clase dominante, las compañías y el gobierno norteamericano. Las petroleras, en su opinión, aceptan la nacionalización y maniobran para garantizar sus privilegios y altas ganancias luego de nacionalizada la industria.

Marzo 27

El Partido Comunista destaca que entre los dos proyectos de nacionalización presentados al Congreso Nacional, el de Copei y el del MEP, existen más coincidencias que diferencias. El planteamiento lo expone Radamés Larrazábal, quien además fija la posición de su partido en desacuerdo con que la nacionalización se realice indemnizando a las empresas, lo cual equivale a una nueva tributación nacional. Pregunta, ante la tesis del MAS, cómo puede conciliarse la socialización si se vota favorablemente por la compensación a las concesionarias. Pregunta Larrazábal que quién indemnizará al país por el medio millón de pozos cerrados, por la quema de gas y por la supraganancia extraída durante 60 años.

Se reanuda en la Cámara de Diputados el debate petrolero. El diputado A. Hernández Grisanti, de AD, fija la posición favorable de su partido para

la nacionalización inmediata sobre la base de un amplio consenso nacional. Agrega que hay convencimiento en las concesionarias de que Venezuela va a tomar con seriedad una decisión para anticipar la reversión total de las concesiones. Dice que el país garantizará el suministro del recurso a los clientes tradicionales. Afirma que estamos en capacidad de operar la industria. Interviene el diputado Américo Martín del MIR y discrepa de la posición que favorece el pago de indemnizaciones, haciendo mención a la tesis sustentada por Héctor Malavé Mata sobre evasión tributaria de las petroleras y las maniobras contables provenientes de la Ley de Reversión, exponiendo en tal sentido varios argumentos para demostrar que no debe pagarse indemnización. Asimismo considera la poca estabilidad laboral que hay en la industria y destaca el aumento de la productividad de los trabajadores petroleros. Por el partido FDP, interviene el diputado Lorenzo Salazar Zamora, y señala que la nacionalización es oportuna y debe aprobarse lo más pronto posible.

Se adhiere a lo propuesto por Américo Martín sobre no pagar indemnización, el diputado del Partido Comunista, Alcides Rodríguez, destaca que la bandera de la nacionalización es una vieja consigna del Partido Comunista de Venezuela, y afirma que del debate hay algo importante que señalar, y es el consenso en torno a la independencia y liberación nacional.

Marzo 28

En su visita anual a Venezuela, el señor Gerrit A. Wagner, Presidente del Consejo de Directores del grupo Royal Dutch Shell, expresa que la empresa Shell de Venezuela ha venido estudiando nuevas fórmulas de asociación con el Estado venezolano para adaptarse a una posible reversión anticipada y que desde hace varios años viene analizando esta situación, manteniendo absoluta confianza en las perspectivas petroleras venezolanas.

El canciller francés, Michel Jobert, expresa que su país está interesado en ayudar económica y técnicamente a Venezuela para la explotación y procesamiento del petróleo existente en la Faja del Orinoco.

Abril 2

El secretario de la Presidencia de México, Hugo Cervantes del Río, anuncia que su país está dispuesto a proporcionar asesoría técnica en los primeros pasos que dé Venezuela después de nacionalizar su petróleo. Cervantes del Río regresa a su país luego de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Señala aquel alto funcionario que el presidente de Venezuela le había manifestado su deseo de adelantar la reversión petrolera.

Abril 4

El diputado Oscar Carvallo Georg, del MEP, declara que el Movimiento Electoral del Pueblo se incorporará a la Comisión Presidencial de Reversión, pero advierte que seguirá impulsando la más rápida aprobación de la Ley de Nacionalización Petrolera. Considera el MEP la posibilidad de que el funcionamiento de esa Comisión retarde innecesariamente la aprobación de la Ley, o, lo que es más grave, que en el seno de la misma se produzcan recomendaciones que desvirtúen los alcances de una nacionalización que satisfaga el interés nacional. Esto lo afirma Carvallo Georg en virtud de la heterogénea composición de la Comisión mencionada.

Termina en la Cámara de Diputados el debate iniciado en torno a la presentación de dos proyectos sobre Ley de Nacionalización. El diputado Arturo Hernández Grisanti hace una proposición en el sentido de que la Comisión de Minas de la Cámara estudie lo relacionado con el adelanto de la reversión, para que informe a la Cámara sobre la manera más conveniente de que el Estado asuma el control pleno de la industria. Así lo plantea porque la Comisión tiene la facultad de elaborar proyectos de ley sobre la materia. En la misma sesión el diputado Ramón Tenorio Sifontes, de URD, señala que el incremento de las ganancias de las empresas es tan excesivo que se podía aplicar un impuesto para gravar esas ganancias mientras no se sancione la Ley de Nacionalización Menciona varias citas de beneficios y transferencias de las compañías entre 1968 y 1970. El diputado Arturo Hernández Grisanti señala que el Ejecutivo no se quedará "mudo" ante situaciones como esas y agrega que la coyuntura actual es favorable para la nacionalización petrolera. Dice asimismo que lo fundamental es el consenso nacional para alcanzar aquélla. Interviene también Eduardo Fernández, de Copei, que alaba las revelaciones de consenso sobre la materia, señala que ese partido concurrirá a la Comisión de Reversión y agrega que él mismo dejó proyectos muy avanzados sobre el proceso de reversión. Esto último lo critica en su intervención posterior el diputado Jaime Lusinchi.

El Partido Unión Republicana Democrática (URD) acepta participar en la Comisión Presidencial de Reversión. El representante de ese partido será el doctor Leonardo Montiel Ortega, quien declara que irá a la Comisión a plantear la necesidad de nacionalizar la industria en términos perentorios y sin necesidad de indemnizar a las concesionarias que operan en el país. Agrega que sería insólito que se efectuara una nacionalización para permitir que las empresas multinacionales continúen controlando el mercado internacional del petróleo. Dice

que URD estima que no es necesario indemnizar si se aplica la Ley de Hidrocarburos vigente, la cual señala normas conservacionistas que no se han cumplido. La tesis de ese partido, en su opinión, es que se tomen en cuenta las ganancias y la recuperación de capitales que en "términos anormales" tienen las compañías antes de considerar si deben ser indemnizadas.

Abril 10

Informaciones procedentes de Nueva York, señalan que el presidente de la Creole, señor Robert Dolph, declaró que esa empresa está sinceramente interesada en continuar operando en Venezuela, y está dedicando toda clase de esfuerzo a lograr este objetivo.

Abril 14

El MEP señala que propondrá que el período de audiencias que concede la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados para estudiar el Proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera no exceda de 60 días. Siuberto Martínez expresa que además de ese plazo el MEP sugerirá que en las primeras audiencias para recabar información, se incluya a personas como Hugo Pérez La Salvia, J. P. Pérez Alfonzo, Alvaro Silva Calderón y directivos de Fedepetrol y Pro Venezuela. Comenta la discusión en la Cámara de Diputados sobre el proyecto y señala que lo importante es que existe un consenso unánime a favor de la nacionalización de la industria. En base al consenso político, según el diputado Martínez, Venezuela puede ser dueña en breve lapso de su riqueza petrolera, pues no hay razones económicas y técnicas que lo impidan.

Abril 16

El senador Pompeyo Márquez, del Movimiento al Socialismo (MAS), ratifica la tesis de ese partido de pagar indemnización a las empresas petroleras en caso de que se proceda a la nacionalización de la industria. Coinciden así con la posición del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), y con Juan Pablo Pérez Alfonzo. Señala Márquez que están de acuerdo con un pago "plenamente justificado" para prevenir al país de trastornos innecesarios. Agrega que hay quienes se oponen a ese pago, pero piden se les garantice el suministro por tiempo determinado, y esto sería perjudicial al país. Se pretende desconocer, en su opinión, la propia dinámica del imperialismo, pensando que éste va a permitir una nacionalización sin compensación. Denuncia asimismo que la nacionalización está siendo negociada por los gobiernos norteamericano y venezolano y que las petroleras están convencidas de que es necesario encontrar nuevas formas de relaciones con el Estado venezolano.

Abril 20

El Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández Acosta, declara que la exploración y explotación de la Faja del Orinoco será "disfrutada" por los venezolanos.

Abril 21

Américo Martín, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formula críticas al MAS, por cuanto éste apoya el pago de indemnización a las petroleras. Señala que el pago o no a las empresas no responde a consideraciones de principios. En cambio, lo que sí pertenece al dominio de los principios es la obligación que tiene el Estado de no utilizar el dinero de la nación para "donarlo" o "regalarlo". Agrega que si bien el MIR está de acuerdo con lo establecido en la Constitución respecto a la indemnización, debe hacerse sin embargo, sobre la base de deducciones a las evasiones de impuestos, por apropiaciones por indemnización a favor de los trabajadores, etc. Pompeyo Márquez, en opinión de Martín, tiene una posición errada pero respetable. Cree Américo Martín que la coyuntura internacional favorece la tesis de no pagar indemnización a las concesionarias.

Abril 22

Considera Hugo Pérez La Salvia, que la nacionalización de la industria petrolera debe realizarse antes de que finalice el año 74. Estima que el proceso va muy lento, y que la designación de una Comisión si bien significa una consulta general, puede sin embargo retardar el desarrollo del problema. Entiende que no existe una voluntad definida por parte de AD de llevar con celeridad lo relativo a la reversión. Asimismo considera que dadas las circunstancias que se han presentado en el mercado internacional de los hidrocarburos, por lo demás bastante favorable, debemos proceder a liberarnos de una vez por todas de la presencia dentro de la economía del país de las empresas internacionales. La permanencia de éstas distorsiona la economía así como también el proceso político y social venezolano. Estima que la industria petrolera constituye un Estado dentro del Estado, cuya influencia es muy grande, por ello se debe proceder a nacionalizar la industria. Señala además que de realizarse ésto, no se producirá ninguna alternación en la continuidad de la industria porque, entre otras cosas, el país cuenta con suficiente personal técnico.

Abril 25

Fetrahidrocarburos, al concurrir ante la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, entrega un amplio documento donde expresa su opinión sobre la materia al mostrarse partidario de una nacionalización integral

de la industria petrolera a la vez que advierte la necesidad de plantear sus aspiraciones gremiales para que sean tomadas en cuenta en el proceso de elaboración y discusión de la Ley.

El doctor Reinaldo Cervini, Presidente de Pro Venezuela, manifiesta que es necesario un consenso de opiniones para la aprobación del Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera. Esta manifestación es hecha por el doctor Cervini al comentar el discurso de incorporación del doctor Rafael Caldera al Congreso Nacional como Senador Vitalicio, donde planteó la necesidad de la reversión anticipada de carácter inmediato.

Abril 26

En la audiencia de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, donde acudiera la CTV y Fedepetrol, el parlamentario del MAS, Freddy Muñoz, después que Carlos Piñerúa, Presidente de Fedepetrol, respondiera al diputado de Copei Vivas Terán que "una vez nacionalizada la industria petrolera los trabajadores tendremos participación en ella", le pregunta al dirigente obrero qué idea tiene Fedepetrol sobre el llamado consenso nacional, y éste responde que la nacionalización petrolera afecta a poderosos sectores externos e internos, pero que sobre el particular no había confusión y que la nacionalización debe ser inmediata, pensando en el desarrollo del país sin sujeción a ningún interés capitalista. Luego le pregunta el diputado Muñoz a Carlos Piñerúa si considera que hay algún impedimento para que se tome una decisión inmediata, y el interrogado responde que ello no depende de Fedepetrol, pero que si fuese necesario una huelga petrolera para adelantar la reversión, así lo harían. Finalmente dice el diputado Muñoz que es necesario un gran debate público sobre la nacionalización petrolera.

Francisco Olivo, presidente de la CTV, dice estar de acuerdo con decidir la nacionalización sin atender a las presiones egoístas y codiciosas de los explotadores, ni a la de los demagogos que piden celeridad, y agrega que "nosotros coincidimos con un sector capitalista que está interesado en la nacionalización y que considera que podría invertir sus capitales en la industria petrolera, por lo que no habría que contrariar a ese sector capitalista, siempre y cuando las decisiones queden en manos del Estado venezolano, y en tanto el otro sector no sea tomado en cuenta para la decisión de nacionalizar la industria petrolera".

El presidente de Fedecámaras, Alfredo Paúl Delfino, se presenta ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, y señala que ese organismo

está de acuerdo con adelantar la reversión petrolera si se mantienen los actuales niveles tecnológicos y la calidad técnica y profesional de la industria. Se pronuncia por una reversión que atienda a los aspectos esenciales del mantenimiento de eficiencia operacional y de los flujos de inversión, a la incorporación de nuevas tecnologías y a las necesidades de comercialización internacional provechosa para el país.

El doctor Arturo Hernández Grisanti, en respuesta a los temores que expresara el señor Francisco Olivo, Presidente de la CTV, de cómo Venezuela comercializaría su petróleo una vez que éste sea nacionalizado, señala que una vez que se produzca la nacionalización, si el país no es capaz de vender 100.000 barriles derivados del royalty al precio de 14,08 dólares el barril de petróleo, podrá reducirse en tres o cuatro dólares el precio y de esta manera puede ayudarse a los países en vías de desarrollo, cuyas economías se resienten ante el alza del precio del producto. Con respecto a los 100.000 barriles del royalty, Venezuela, ya con la industria nacionalizada, estará en posibilidad de vender tres millones de barriles diarios. Si bien se puede bloquear la venta de 100.000 barriles, no en cambio la venta de tres millones producidos cuando es por todos conocida la demanda del producto a nivel internacional.

Abril 27

La Asociación Pro Venezuela, en documento contentivo de once puntos, da a conocer su posición sobre la reversión anticipada. Hace al respecto una proposición considerada como novedosa. Se refiere a la conveniencia de que el Estado venezolano precise los daños y perjuicios que se hayan ocasionado al país como consecuencia de la explotación petrolera, especialmente en lo relativo a contaminación de mares. Expresa Pro Venezuela que en general deben determinarse todas las reclamaciones posibles tanto de carácter público como privado que puedan existir contra los consorcios petroleros, a objeto de precisar el costo para hacer los ajustes correspondientes en el momento de proceder al pago de indemnizaciones. Además propone, entre otras cosas, la creación de una flota petrolera, la estabilidad del personal técnico y administrativo, y la política conservacionista del recurso.

Abril 29

El doctor Denzil Romero, propone fórmulas de mejoramiento a los proyectos de Ley de Nacionalización Petrolera introducidos en las Cámaras y que permiten reducir al mínimo el pago de indemnización a las compañías petroleras. Señala que debe estudiarse lo siguiente: a) la creación de un impuesto so-

bre el exceso de rentabilidad ya propuesto por el doctor D. F. Maza Zavala; b) el establecimiento de un mecanismo de compensación entre la indemnización y el monto de la lesión causada al Estado por las compañías por evasión de impuestos sobre la renta, y por la disminución de las regalías pagadas a causa de lo que denomina el doctor Héctor Malavé Mata el "envilecimiento de los precios" del barril de petróleo; c) la ampliación del lapso de 10 años previsto por Copei para no reconocer las revalorizaciones de activos afectados por las compañías; d) que la indemnización no se calcule en base al valor en libro de los activos fijos netos sino más bien en base al interés legal que el valor de esos activos devengaría hasta el momento de la reversión.

Abril 30

El señor William Eberle, enviado especial del presidente norteamericano, Richard Nixon, expresa que Estados Unidos tiene una política general sobre la nacionalización de empresas norteamericanas, y es la de que los países tienen "derecho a dictar sus propios destinos y leyes".

Mayo 3

Los abogados de la Compañía Shell de Venezuela, doctores Esteban Palacios Blanco, Arminio Borjas y Alejandro Graterol Marín, plantean ante la Corte Suprema de Justicia, en una de sus conclusiones, que la Ley de Reversión es confiscatoria porque exhorbita previsiones de la Constitución y la Ley de Hidrocarburos, alegato que esgrimen en el juicio de nulidad de la Ley de Reversión. Los abogados Armando Travieso Paúl y Arístides Rangel Romberg, lo hicieron por la Mobil. Luis Ignacio Mendoza, Santos Michelena y Mario Pelzi Feltri, presentaron un escrito por la Texas; Eduardo Montinos Monró lo hizo por la Mene Grande; Julio Betancourt Vásquez, Luis Ludovich Durán y Gonzalo Parra Aranguren lo hicieron en representación de la Sinclair y Venezuelan Atlantic, y Armando Subero Sosa, presentó un alegato en representación de la Creole.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, doctor Rafael Sandrea, declara ante la subcomisión de minas del Congreso que en los últimos 10 años las compañías han amortizado tres veces sus inversiones en Venezuela, además de ser las explotaciones subsidiadas por el Estado, de lo que se deduce que los beneficios de aquéllas son excesivos. Señala que la ganancia petrolera en Venezuela ha oscilado entre el 30 y el 40 por ciento sobre el capital invertido, rendimiento que sobrepasa los límites socialmente aceptables hasta en los países altamente industrializados. Estima el doctor Sandrea que los beneficios en esa actividad son de mil millones de bolívares anuales.

Mayo 5

El doctor Carlos E. Key N. expresa ante la Comisión de Minas que cualquiera que sea la fórmula que se adopte (nacionalización, empresas mixtas, compañías tripartitas...), los venezolanos deben prever elementos para no desligarse de los avances foráneos en esta rama. Considera que el país ha alcanzado una etapa de madurez en el negocio petrolero. En esta materia advierte que debe procederse con un criterio técnico-económico y evitarse las improvisaciones.

Mayo 14

El ex ministro de Minas, doctor Hugo Pérez La Salvia, reitera que al salir de ese despacho quedaron elaborados los estudios para anticipar la reversión y nacionalizar la industria. Agrega que el país está en condiciones favorables para realizar esa nacionalización, siendo ya un imperativo proceder en tal sentido por cuanto la industria no debe permanecer en manos de intereses foráneos. Por su parte el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, señala enfáticamente que en ese despacho no existe ningún estudio o proyecto específico que permita tomar decisiones para el adelanto de la reversión o nacionalización. Agrega que la Dirección de Reversión ha elaborado un modelo estocástico dinámico de la industria que está en proceso de ajuste para simular la estructura técnico-económica de la industria. Dice que se han recibido inventarios de los activos por parte de las concesionarias, y que adicionalmente la Dirección de Reversión propone la contratación de un estudio sobre la situación y expectativas del personal de la industria. Por todo ello, en su opinión, carece de fundamento el afirmar que hay estudios listos en el Ministerio para la nacionalización petrolera.

El doctor Valentín Hernández, Ministro de Minas e Hidrocarburos, informa que el próximo 16 de este mes será instalada la comisión de alto nivel que asesorará al gobierno para adelantar la reversión petrolera.

Mayo 15

Afirma el doctor J. A. Paz Galarraga que no entiende las contradicciones que existen entre los partidos AD y Copei cuando éste afirma que dejó todo listo en materia de reversión, mientras AD manifiesta lo contrario. Piensa que es por parte de éstos una táctica dilatoria para retrasar y mediatizar la nacionalización. Señala asimismo que es alarmante que el gobierno haya designado una comisión para estudiar el adelanto de la reversión cuando en el Congreso Nacional existen dos proyectos, uno del MEP y otro de Copei, sobre la materia, mientras en el seno de aquella comisión hay representantes de organismos eco-

nómicos que conciben la nacionalización de manera mediatizada. Destaca además las contradicciones entre Arturo Hernández Grisanti, quien estima que el país está en condiciones de controlar su industria, y Humberto Calderón Berti, quien señala que la nacionalización debe hacerse por lo menos dentro de dos años porque Venezuela carece de técnicos, siendo éstos quienes asumen la posibilidad de considerar si se puede manejar el negocio o si se debe recurrir a empresas de servicio. Dice el doctor Paz Galarraga en sus declaraciones que se debe estar alerta ante la permanencia de empresas privadas bajo la forma de empresas mixtas.

El periódico *Christian Science Monitor,* de Boston, afirma que el gobierno venezolano debe tener cuidado con el anunciado proceso de nacionalizaciones, por cuanto otros países de América Latina pueden asumir igualmente esa política. Ante tal advertencia opinan distintas personalidades del país. Reinaldo Cervini, presidente de la Asociación Pro Venezuela, la considera como parte de una "comparsa internacional de intimidación". Por su parte, Marcelino Barquín, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Mineros y segundo vicepresidente de Pro Venezuela, advierte a Estados Unidos que debe tener cuidado con ese tipo de amenazas porque las mismas no contribuyen a facilitar futuras negociaciones. Carlos Canache Mata, de AD, declara que está demás la recomendación que hace el periódico de que Venezuela debe proceder con cuidado al decidir la nacionalización, por cuanto la propia ONU ha manifestado en varias oportunidades que las decisiones que tome cada país sobre sus recursos naturales es cuestión de soberanía.

Mayo 17

El presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en el acto de juramentación de la Comisión de Reversión, anuncia el rescate inmediato de las concesiones petroleras. Señala que una nueva coyuntura histórica se ha abierto para Venezuela, América Latina y todos los países "víctimas del totalitarismo económico de las grandes naciones desarrolladas". Agrega que en Venezuela se han conformado las condiciones internas y externas para la toma de esa decisión. Dice que todas las previsiones serán adoptadas para no comprometer con apresuramiento y actitudes demagógicas el destino nacional. Expresa que la Comisión tendrá libertad de criterio, implementará los aspectos jurídicos y administrativos para efectuar la reversión, y estará constituida por representantes de los partidos PCV, MAS, URD, AD, COPEI, CCN, MEP, FDP, de la Confederación de Trabajadores, Fedepetrol, Fedecámaras, Pro Venezuela, Consejo Bancario Nacional, Consejo Nacional de Universidades, Colegio de Ingenieros, Federación de Colegios de Economistas, Federación de Colegios de Abogados, CONI-

CIT, además de los ministros de Minas e Hidrocarburos, Hacienda, Fomento, Defensa, Cordiplán, CVP, presidente de la Comisión de Minas y representantes de la Presidencia de la República.

En solemne acto en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, juramenta a los miembros de la Comisión Presidencial de Reversión, la cual queda integrada de la siguiente manera: Valentín Hernández Acosta, ministro de Minas e Hidrocarburos; Héctor Hurtado, ministro de Hacienda; Carmelo Lauría, ministro de Fomento; Gumersindo Rodríguez, ministro de Estado y jefe de Cordiplán; general Carlos Carnevalli Rangel, Corporación Venezolana del Petróleo; Godofredo González, Comisión de Minas e Hidrocarburos del Senado; Arturo Hernández Grisanti, Comisión de Minas e Hidrocarburos de Diputados; general Valentín Montaña Madrid, Ministerio de la Defensa; Radamés Larrazábal, Partido Comunista de Venezuela; Freddy Muñoz, Movimiento Al Socialismo; Leonardo Montiel Ortega, Unión Republicana Democrática; Celestino Armas, Acción Democrática; Luis Enrique Oberto, Copei; Armando Azpúrua, Cruzada Cívica Nacionalista; Alvaro Silva Calderón, Movimiento Electoral del Pueblo; Rafael Tudela, Fuerza Democrática Popular; Augusto Malavé Villalba y Luis Tovar, Confederación de Trabajadores de Venezuela; Carlos Alberto Piñerúa, Fedepetrol; Alfredo Paúl Delfino, Fedecámaras; Félix Miralles, Consejo Bancario Nacional; Reinaldo Cervini, Asociación Pro Venezuela; Enrique Tejera París, Alejandro Zahlout Gómez, Pedro Gómez Narváez, Gastón Parra Luzardo, D. F. Maza Zavala, Consejo Nacional de Universidades; Hugo Pérez La Salvia, Colegio de Ingenieros de Venezuela; Julio César Arreaza, Federación de Colegios de Abogados; Haydée Castillo de López, Federación de Colegios de Economistas; Miguel Layrisse, CONICIT; Aníbal Martínez, Humberto Peñaloza, Carlos Rafael Silva, Alirio Para y Ezequiel Monsalve Casado, Presidencia de la República.

Mayo 18

El anuncio de la nacionalización de la industria petrolera, hecho por el presidente Carlos Andrés Pérez, es materia comentada en círculos políticos. El secretario general del MEP, doctor J. A. Paz Galarraga, señala al respecto que el MEP está de acuerdo con que se creen varias entidades y no una sola empresa, que estén coordinadas por un organismo superior. Sin embargo, estima conveniente que se integren los procesos en una sola unidad. Es decir, una de exploración, otra de explotación y otra de comercialización. Denuncia que las empresas multinacionales no están interesadas en que se altere el diseño actual de la actividad petrolera y piensan en una asociación con el Estado para los efectos del mercadeo internacional. Pompeyo Márquez y Freddy Muñoz, del

MAS, declaran que es importante el anuncio sobre la decisión de nacionalizar expresada por el presidente. No obstante, según éllos, hay un elemento importante que debe ser considerado y es el que se refiere al contenido que va a tener el manejo por el Estado de la industria nacionalizada. Estiman y coinciden con el MEP en que todas las fases de la industria, incluída la de comercialización, deben ser controladas por el Estado. Son partidarios de ir reduciendo la producción para promover una política conservacionista. En opinión de Leonardo Montiel Ortega, es preferible considerar otras fórmulas distintas a la expropiación porque ésta involucra el pago de indemnizaciones y ello sería absurdo. Señala Montiel que, de acuerdo con la contabilidad de las compañías, las inversiones han sido recuperadas más de 3 veces en los últimos 25 años. En su opinión, para 1973 y lo que falta de 1974, la sola ganancia de las empresas cubre lo que falta por amortizar o depreciar.

Ante el anuncio de reversión inmediata hecha por el presidente Carlos Andrés Pérez la economía privada reacciona de manera favorable. Fedecámaras considera que la decisión es "natural y esperada". Estima esta federación empresarial que los esfuerzos del gobierno deben dirigirse hacia el logro de la eficiencia de las compañías que surjan de la reversión anticipada para así mantener el acceso a los mercados internacionales y los flujos normales de tecnología. La Asociación Pro Venezuela se muestra satisfecha y considera que la decisión del presidente es "necesaria y oportuna". Señala el doctor Reinaldo Cervini, presidente de esta organización, que hay condiciones especiales para hacerlo. Por su parte, las compañías petroleras no manifiestan reacción de sorpresa aún cuando su tesis es la de estudiar una reversión programada mediante la creación de empresas mistas. Consideran tales empresas que Venezuela puede necesitar tecnología, mercados y otras experiencias que tiene la industria en escala internacional.

Las empresas petroleras Creole, Shell, Mobil y Gulf, ante el anuncio presidencial de anticipar la reversión, expresaron su confianza en poder seguir colaborando con el futuro de la nación venezolana en la industria revertida.

Informaciones procedentes de los Estados Unidos señalan que, en forma extraoficial, algunos voceros de las empresas concesionarias que operan en Venezuela, han manifestado, ante el anuncio del presidente Pérez de rescatar la industria petrolera, que este país se mueve más rápido de lo que había indicado en el pasado en esa materia.

Mayo 19

El señor Lewis A. Ramsey, presidente de la Mene Grande Oil Company, declara que la empresa tiene 250 millones de dólares aproximadamente en propiedades sujetas a medidas de reversión petrolera. Los señores Ramsey, James Lee, presidente de la Gulf Oil Corporation, y Thomas Lumpkin, presidente de la Gulf Oil Company para América Latina, expresan su optimismo sobre la posibilidad de una futura colaboración con Venezuela después del proceso de nacionalización de la industria.

Radames Larrazábal, del Partido Comunista de Venezuela, plantea la necesidad de planificar la diversificación de la obtención de tecnología y formar cuadros de técnicos a fin de garantizar resultados positivos de la reversión petrolera. Considera que en las áreas donde las empresas más presionan —tecnología, transporte y mercadeo internacional— es necesario establecer una estrategia firme que garantice la verdadera nacionalización. Advierte Larrazábal que cuando las concesionarias ofrecen servicios mediante alguna forma de contratación o empresa mista en las áreas mencionadas, lo que aspiran es mantener el viejo dominio con mecanismos nuevos y el suministro a largo plazo.

Mayo 20

En su discurso inaugural del IX Congreso Venezolano de Ingeniería que se celebra en Maracaibo, el presidente Carlos Andrés Pérez se refiere a la nacionalización petrolera y señala que su gobierno tiene conciencia de las dificultades que surjen cuando se toman decisiones como esas. Según el presidente, no se trata de apresuramiento, sino de que al país le ha llegado el momento en que no puede seguir conduciéndose con improvisaciones.

Mayo 21

El director general de la CVP, general Carlos Carvenalli Rangel, considera que el país está preparado para la nacionalización de la industria petrolera. Añade que la empresa estatal debe ser la destinada a conducir el negocio de los hidrocarburos, pero dice que el Presidente de la República ni siquiera la mencionó en su discurso de juramentación de la Comisión de Reversión.

El ex ministro Hugo Pérez La Salvia formula críticas al Presidente de la República, considerando que el discurso pronunciado por éste días antes persigue "objetivos políticos muy claros", como por ejemplo, sacar del Congreso Nacional el problema de la nacionalización. El doctor Pérez La Salvia dice que así el presidente solicita un proyecto de ley a la comisión en plazo de 6 meses

para luego presentar al Congreso un proyecto preparado por el Ejecutivo. Advierte contradicciones entre el anuncio de "rescate de las concesiones" y el nombramiento de una comisión de reversión que estudie el problema en 6 meses cuando en el Congreso cursan dos proyectos de Ley de Nacionalización. Estima que, si realmente hay voluntad de nacionalizar, el proceso debe consistir en que el Congreso sancione una ley que sea luego instrumentada por el Ejecutivo, pues de lo contrario se corre el peligro de que el proceso se alargue. Expresa finalmente sus temores de que se trate de efectuar una nacionalización negociada con las empresas petroleras.

El diputado de Copei, Abdón Vivas Terán, denuncia en la Cámara que las compañías petroleras realizan traspasos indebidos de partidas desde las de depreciación hasta las de amortización y agotamiento, a fin de disminuir las cantidades que deben constituir el Fondo de Garantía. Considera que esa situación es intolerable a los intereses de la nación y constituyen "hechos de naturaleza dolosa. Propone que se modifique la Ley de Reversión para que el Fondo de Garantía no contemple sólo la partida de depreciación, sino también las de amortización y agotamiento. Propone asimismo que se establezca como límite máximo de ganancias a las compañías el 20 por ciento de sus activos fijos netos. En su opinión, todo enriquecimiento neto sobre esa cantidad debe ser entregado al Estado en concepto de participación fiscal en la industria.

Mayo 22

Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, declara que este organismo está procesando denuncias de sindicatos afiliados sobre transferencias de activos de unas compañías petroleras a otras, y agrega que es de opinión de que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos debe responder inmediatamente a las denuncias formuladas por el doctor Vivas Terán en la Cámara de Diputados.

El doctor Arturo Hernández Grisanti, presidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, informa que esa Comisión citó a AGROPET para dar inicio a la segunda sesión de audiencias que se celebran con fines de adelantar la reversión petrolera.

Según estadísticas oficiales presentadas ante el IX Congreso Venezolano de Ingeniería en un trabajo titulado "Nacionalización de la Industria Petrolera y su posible implementación", elaborado por J. A. Lachman y Enrique Vásquez, se establece que en más de 14 mil millones de bolívares han bajado los costos

de adquisición de las propiedades, plantas y equipos de las 22 compañías extranjeras que operan en el país. Según inventario presentado por las empresas, las instalaciones fueron adquiridas por 20.265 millones 604.135 bolívares, y que el saldo por depreciar y amortizar es de Bs. 5.558.783.489, lo que significa que actualmente esas propiedades tienen un costo de un 27,4 por ciento en relación con el costo inicial.

Mayo 23

El diario *Pravda* de Moscú dice que "la nacionalización planeada será un paso importante... en el camino hacia la independencia económica; una medida que cumple con los intereses cardinales de su pueblo", y agrega que en Venezuela, tercer exportador de petróleo en el mundo, el 95 por ciento de las operaciones extractivas son controladas por firmas extranjeras que durante décadas han saqueado los recursos petroleros del país.

Según declara el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, el diputado de Copei Abdón Vivas Terán informa ante la Dirección de Reversión de ese ministerio que su planteamiento en el Congreso Nacional ha sido mal interpretado y que las irregularidades que mencionó en cuanto al Fondo de Garantía se refieren a hechos comprobados hace algún tiempo que ya están resueltos. Por su parte, Vivas Terán cataloga de "abuso incalificable" que el ministerio de Minas haya utilizado su nombre sin autorización para desvirtuar opiniones que ha emitido en la Cámara de Diputados, sobre los actos que efectúan las empresas con respecto al Fondo de Garantía. En la denuncia se refiere, entre otras cosas, a que las compañías realizan traspasos indebidos de partidas, para disminuir así las cantidades que deben declarar con el objetivo de constituir el mencionado Fondo. El vicepresidente de la compañía Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, pide a Vivas Terán se retracte o concrete sus afirmaciones de que las empresas cometen hechos dolosos con el Fondo de Garantía, y realizan maniobras de traspaso. Señala que el Fondo se administra localmente y no a nivel de las casas matrices. Exige que sus declaraciones sean tomadas como técnico venezolano y no en nombre de la Shell.

Mtyo 24

Ante la denuncia del diputado Abdón Vivas Terán en la Cámara de Diputados por supuestas maniobras con el Fondo de Garantía, voceros de la Creole y de la Mobil piden al parlamentario denunciante que precise sus planteamientos, y añaden que el gobierno mantiene los más estrictos controles sobre toda operación contable de las empresas.

El diputado de Copei, Abdón Vivas Terán, en respuesta al vicepresidente de la Shell, dice que la denuncia que formuló ante la Cámara Baja no tiene nada que ver con la calificación humana y profesional del personal de empleados, técnicos y trabajadores venezolanos que operan en la industria petrolera.

El núcleo de ingenieros petroleros en el IX Congreso Venezolano de Ingeniería acuerda rechazar la nacionalización inmediata por cuanto es necesario conocer todos los mecanismos de la industria petrolera para lograr el éxito que se espera. El geólogo Francisco Gutiérrez señala que una nacionalización apresurada puede representar un sacrificio económico para el país, y agrega que es necesario conocer cabalmente los bienes, equipos e instalaciones que van a pasar a manos del Estado.

Mayo 25

El IX Congreso Venezolano de Ingeniería acuerda que la nación debe asumir el poder de dirección de todas las fases de la industria. Señala que las inversiones que se hagan para vigorizar esa actividad deben basarse en criterios económicos sin influencia política partidista. Acuerda asimismo la necesidad de crear un centro de investigación aplicada a los hidrocarburos para reducir la dependencia tecnológica.

El doctor Gustavo Coronel, quien participa en el IX Congreso Venezolano de Ingeniería declara que el rechazo a la nacionalización inmediata es un "triunfo del sentido de responsabilidad" del sector profesional sobre el emocional. Dice, hablando en nombre de la Comisión de Hidrocarburos de ese congreso, que debe fijarse un período de transición durante el cual se pase de un esquema viejo a otro nuevo con perfecta armonía.

En respuesta al planteamiento hecho por la Comisión de Hidrocarburos del IX Congreso Venezolano de Ingeniería en la oportunidad de pronunciarse por el rechazo a la nacionalización inmediata de la industria petrolera, el doctor Juan Manuel Sucre Trías, miembro de la dirección de AD y presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, declara que no existe ningún argumento que racionalmente pueda justificar un retardo en el objetivo de que el Estado venezolano controle la explotación de sus recursos básicos. Asimismo indica que ya el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, anunció la iniciación de los trámites para la definitiva nacionalización de la industria petrolera.

Mayo 26

El doctor Humberto Calderón Berti, director de la Oficina de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, ante una pregunta que formulara el parlamentario Freddy Muñoz (MAS) en la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, declara que la totalidad de petróleo *in situ* de los 60 campos inactivos que mantienen las compañías petroleras alcanza a 5 mil millones de barriles. Por otro lado, el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, afirma que la CVP no será la casa matriz sino una empresa más del *holding* empresarial.

Señala el doctor Aníbal Martínez en el IX Congreso Venezolano de Ingeniería que Venezuela debe establecer urgentemente, para la reversión petrolera inmediata, el aprovechamiento racional de todos los recursos que en materia de energía existen en el país.

Mayo 27

Con la audiencia al ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, y a los directores de reversión y de planificación y política económica del despacho, reanuda la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados el segundo ciclo de audiencias para el adelanto de la reversión petrolera.

El doctor Alvaro Silva Calderón considera que la primera cuestión de la que debe ocuparse la comisión presidencial de reversión es el estudio de la vía más segura y rápida que permita el rescate de las concesiones de hidrocarburos y el control de la industria por parte del Estado. Debe la comisión, según opina Silva Calderón, recomendar las medidas preventivas o transitorias que deban ser tomadas en resguardo de los intereses nacionales. Además debe analizarse la aplicación de un impuesto que reduzca las ganancias de las empresas petroleras a la rentabilidad ordinaria de sus activos fijos netos mientras sea dictada definitivamente la medida de nacionalización. Propone en tal sentido que la rentabilidad no debe exceder del 10 por ciento de dichos activos.

Mayo 28

El doctor Alfredo Paúl Delfino, presidente de Fedecámaras, declara que con el anuncio del presidente de la República de la nacionalización petrolera hecho en el acto de instalación de la comisión asesora en materia de reversión, se inicia una nueva etapa en el examen de la cuestión petrolera. Dice el doctor Paúl Delfino que es aspiración de ese organismo que la transición anunciada se realice asegurando la continuidad de las actividades petroleras a fin de

evitar que el país sufra retrasos en su desarrollo. Para lograr una transición bien planificada —indica igualmente— bien pudiera tener participación la actividad privada en las áreas para las cuales están especialmente preparada.

En aclaratoria de su posición sobre la nacionalización petrolera, el secretario de la Comisión de Hidrocarburos del IX Congreso Venezolano de Ingeniería, geólogo Aureo Elías Zambrano, señala que la moción presentada por Alberto Méndez Arocha, en la cual pedía al IX Congreso que se pronunciara por la nacionalización inmediata fue rechazada mayoritariamente por unos 300 delegados al evento. Se desprende de las intervenciones —dice Zambrano— que dicha moción se rechaza por llevar implícita la estatización de la industria y los ingenieros y geólogos condenan esa fórmula por cuanto hasta ahora ha fracasado. Para llevarla adelante es necesario eliminar el factor político-partidista, lograr eficiencia operativa y administrativa, utilizar racionalmente los recursos, entre otros argumentos esgrimidos. Señala textualmente que lo aprobado por geólogos e ingenieros fue "un viva a la nacionalización y un muera a la estatización".

Mayo 29

A 21.000 millones de bolívares alcanzan los bienes que las compañías petroleras tienen en el país, según los inventarios que tales empresas han presentado ante la Dirección de Bienes Afectos a la Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Así lo estima el Ministerio de Minas e Hidrocarburos en una solicitud de crédito adicional que por 32.600.000 bolívares hizo este despacho ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, para verificar la realidad de dichos inventarios, revisar los aspectos contables y administrativos y determinar si el concesionario es realmente propietario de los mismos.

Los profesionales de la ingeniería de la CVP en remitido público ("Carta abierta al Presidente de la República y a los miembros de la Comisión de Reversión") formulan críticas a los planteamientos de un núcleo de ingenieros petroleros que rechazan la nacionalización petrolera. Critican la actitud de sectores interesados en retrasarla o impedirla esgrimiendo el "fantasma de la comercialización". Argumentan además que la falta de tecnología puede ser perfectamente superada, y consideran que la experiencia acumulada de la CVP les permite tomar una decisión nacionalista en la materia petrolera.

El secretario general del MEP, doctor Jesús Angel Paz Galarraga, manifiesta la necesidad de que sean congelados los convenios de suministro esta-

blecidos con las empresas explotadoras. Denuncia que se hacen maniobras que tienen como finalidad permitir a las compañías transnacionales mantener en sus manos el mercado internacional. Dice el doctor Paz Galarraga que quienes apoyan la tesis de que el petróleo venezolano puede ser bloqueado en el mercado ignoran que la situación ha cambiado a raíz de la crisis energética mundial. Venezuela, en su opinión, puede realizar convenios de gobierno a gobierno, y es necesario que el país diversifique su clientela, que el Estado no esté obligado a cumplir convenios de ventas a largo plazo suscritos con el cártel petrolero internacional.

Mayo 30

Explica el ministro de Minas e Hidrocarburos que una de las tareas principales del despacho es dotar a la Comisión Presidencial de Reversión de todos los recursos técnicos y administrativos para que pueda operar eficientemente y cubrir todas las áreas que le han sido asignadas. El comité coordinador de la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera, que preside el general (r) Carlos Carnevalli y lo integran Arturo Hernández Grisanti, Ezequiel Monsalve Casado, Alvaro Silva Calderón y Augusto Malavé Villalva, presentará su primer informe sobre programas de trabajo y una reestructuración de las subcomisiones para acelerar y agilizar las tareas que le han sido encomendadas.

Mayo 31

El presidente de la Exxon, señor Clifton C. Garvin, los vicepresidentes de esa empresa, señores Siro Vásquez y Donald M. Cox, y los directivos de su filial en Venezuela, la Creole Petroleum Corporation, señores Robert N. Dolph y Guillermo Rodríguez Eraso, son recibidos en Miraflores por el presidente Pérez. El presidente de la Exxon, señor Clifton C. Garvin, entregó a los periodistas sus declaraciones escritas en las cuales dice que Venezuela ha sido y es abastecedor importante y seguro de petróleo a muchos países donde la Exxon tiene facilidades de mercadeo. Al referirse a la reversión anticipada, señala que la Exxon acata la decisión del Estado venezolano en la seguridad de que la implementación de tal decisión será llevada a cabo en forma justa y equitativa, y agrega el alto ejecutivo petrolero que está seguro de que habrá maneras en las cuales podrán colaborar dentro del sector petrolero en una forma mutuamente beneficiosa en el futuro, para lo cual la Creole estará lista y dispuesta a seguir siendo útil a Venezuela como lo ha sido por más de medio siglo.

Junio 2

Leonardo Montiel Ortega plantea, en nombre de Fetrahidrocarburos y del partido Unión Republicana Democrática (URD), la tesis de que la reversión

de las concesiones debe efectuarse sin pago de indemnización o pagando por ello lo menos posible. Señala que en poder de las concesionarias hay muchos yacimientos inactivos o con producción deficiente y que, por tanto, pueden revertir a la nación. Además expresa que la verdadera nacionalización debe incluir el control del Estado en el mercado internacional de su petróleo.

Junio 4

En su análisis de la política energética que deberá formularse como prioridad dentro del esquema de reversión inmediata, el ministro de Minas e Hidrocarburos mantiene el criterio de que Venezuela debe llegar al control del transporte de petróleo a los mercados internacionales.

Junio 9

El discurso inaugural del III Congreso Venezolano de Petróleo está a cargo del presidente del evento, ingeniero Rafael Sandrea, quien señala que la trascendencia que tiene el que la explotación petrolera pase al control del Estado impone la necesidad de definir el marco socioeconómico dentro del cual se va a manejar la industria. Garantizando la eficiencia de la misma presenta un breve análisis de los elementos de la nacionalización de esa actividad, entre los cuales destaca el problema tecnológico. Advierte que hay quienes señalan, como alternativa para el cambio del actual esquema, la creación de empresas mixtas, pero éstas, en su opinión, generarían el problema del costo de la tecnología importada que requiere mayor participación en las regalías por la prestación de conocimientos y patentes.

En exposición hecha ante la Comisión de Reversión, el doctor Alberto Flores Ortega, gobernador de Venezuela en la OPEP, señala que la nacionalización petrolera en Venezuela es diferente de la de los demás países de esa organización, razón por la cual deben adoptarse decisiones dentro de otros esquemas. Agrega que esos países no han eliminado en su totalidad la dependencia de las empresas extranjeras para la prestación de servicio y el desarrollo de nuevas áreas, y les era fácil asegurar el suministro de gobierno a gobierno en tanto contaban con empresas estatales. Reitera que en Venezuela se presentan obvias diferencias respecto del resto de países que integran la OPEP, considerando que, por ser la situación en el país más compleja, se requiere tomar medidas ajustadas a nuestra realidad.

Junio 11

En la ponencia "Alternativas del Negocio de los Hidrocarburos", de Félix Morreo, Oscar Molina, José Balaguer, Gustavo Coronel y otros, presentada

en el III Congreso Venezolano de Petróleo, se consideran cuatro alternativas: a) la administración directa por parte del Estado; b) el contrato de operación; c) la empresa mixta; y d) la administración privada bajo control estatal. Entre las conclusiones se señala que independientemente del futuro esquema de organización petrolera, el país debe seleccionar el que le proporcione iguales o mayores beneficios que los recibidos bajo el esquema actual. Expresan los ponentes que es sensato efectuar el paso de un modelo a otro de la manera más gradual a fin de evitarle al país trastornos de orden fiscal, operacional y laboral.

El ingeniero Guillermo J. Salas, director de coordinación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, señala ante el III Congreso Venezolano de Petróleo, que se requiere de 900 ingenieros petroleros, se cuenta con sólo 450 y en las universidades se gradúan apenas 25 cada año. Plantea la necesidad de emprender investigaciones sobre el ramo de hidrocarburos, y considera que no debe dejarse a un lado la importancia que representa la tecnología y que debemos valernos de ella hasta que el país pueda desarrollar la suya. De acuerdo con sus planteamientos se desprende que Venezuela estaría en condiciones de nacionalizar su industria dentro de unos 3 ó 5 años.

La Federación de Colegios de Contadores de Venezuela hace pública la llamada "Declaración de Maracaibo sobre la Reversión Petrolera". En ésta se considera, entre otras cosas, que nuestro país es dependiente y mediatizado por el capital monopolista internacional del petróleo, que es aspiración del pueblo venezolano que ese recurso sea explotado directamente por el Estado, que las empresas petroleras han transferido en los últimos 36 años alrededor de 50 mil millones de bolívares hacia las casas matrices como beneficios libres de impuesto, que están dadas todas las condiciones para proceder al rescate de la soberanía. Ante ello acuerdan pronunciarse por la reversión inmediata de las concesiones petroleras, ofrecen al Ejecutivo Nacional su colaboración para realizar una detallada auditoría de los bienes sujetos a reversión, determinar la procedencia de cualquier indemnización, y elaborar normas que garanticen y aseguren contra todo riesgo las prestaciones sociales de los trabajadores petroleros.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pompeyo Márquez, plantea la necesidad de congelar los contratos de venta en materia de petróleo y hierro. Considera que el Estado venezolano no puede permitir que las empresas comprometan la producción de unas industrias cuyos "días están con-

tados". Cree que al proceder a la estatización el Estado podría desconocer esos compromisos, pero ello lo colocaría en situación de pugna con clientes que potencialmente "deben ser conservados por una industria nacionalizada". Indica que para nadie es secreto que el problema más complejo a resolver es el del mercadeo. Denuncia así cómo las compañías han obstaculizado los intentos de la CVP para penetrar los canales de comercialización internacional. El Ejecutivo, en su opinión, está en capacidad de resolver por vía administrativa la cuestión de los contratos de suministro, impidiendo que las empresas lo realicen a largo plazo.

Junio 12

La Comisión Técnica del III Congreso Venezolano de Petróleo acoge para la definición de "campos marginales" el siguiente concepto: "Petróleo marginal o diferido es aquel cerrado por razones económicas al no encuadrar dentro de los patrones de rentabilidad y normas económicas por las cuales se rige cada empresa, con los parámetros aplicables para un momento determinado". En su informe, esa comisión estima que en Venezuela, por razones diversas, existen aproximadamente unos ocho tipos de campos marginales, y que según estudio realizado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, hay en el país 5.364 yacimientos inactivos considerados marginales, distribuidos en 95 áreas geográficas, las cuales representan el 10 por ciento del total de petróleo descubierto. Agrega la comisión técnica que un número considerables de pozos se encuentra en condiciones de marginalidad por la orientación de las inversiones en las concesionarias hacia los proyectos de mayor rentabilidad y por la ausencia de correctivos necesarios para impedir su ocurrencia, señalando finalmente en su informe que el petróleo marginal puede alcanzar un potencial del orden de los 200.000 a 300.000 barriles diarios, y producirse económicamente con el adecuado tratamiento fiscal, operacional, administrativo y laboral, razón por la que se plantea la urgencia de emprender el rescate de ese potencial.

Abierto el debate sobre la materia se suscitan diversas opiniones al respecto, Cruz Rafael Aguilera, presidente de la Sociedad Venezolana de Economistas Petroleros, dice que los llamados "campos marginales" surgen como consecuencia de la irracional explotación a que han sido sometidos por las empresas explotadoras, ya que éstas sólo atienden al principio de lograr la máxima lucratividad posible en el régimen concesionario, y agrega que en la explotación de los hidrocarburos, por parte del Estado venezolano, el objetivo fundamental será el de producir hasta la última gota de petróleo que técnicamente sea factible, teniendo en cuenta el beneficio colectivo nacional y no el simple beneficio financiero que persigue la empresa privada. El ingeniero Alberto Santiago, gerente de reversión de la CVP, recomienda que para la recuperación de

los campos marginales, éstos deben ser operados directamente por las empresas que cree la nación una vez estatizada la industria. El presidente de Mito Juan, Humberto Peñaloza, señala que el objetivo de la nación es extraer y convertir en riqueza útil hasta el último barril de petróleo recuperable.

Junio 13

En el III Congreso Venezolano de Petróleo se presentan dos tesis contrapuestas: una, de la ponencia coordinada por Gustavo Coronel, en la cual se propone la creación de empresas mixtas. Otra, apoyada por los ingenieros Pedro Márquez y Oscar Boccalandro, y los diputados Arturo Hernández Grisanti, Alvaro Silva Calderón y Freddy Muñoz, quienes proponen estatización, como alternativa que implica que toda la industria, desde la explotación hasta el mercadeo, sea operada por el Estado.

Junio 14

En el III Congreso Venezolano de Petróleo se respalda la decisión del Ejecutivo de nacionalizar la industria petrolera. Voceros de los consorcios extranjeros apelan a la táctica dilatoria a fin de lograr sus objetivos. Se informa que al no lograr lo que se proponía, el doctor Gustavo Coronel se retira del evento renunciando a su condición de secretario de organización del congreso. El doctor José Giacopini Zárraga expone lo que en esencia constituye una defensa a las compañías petroleras. El doctor Alvaro Silva Calderón interviene para defender la nacionalización de la industria.

El Consejo Universitario de la UCV acuerda emitir un documento de apoyo a las medidas de nacionalización del petróleo y el hierro anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez. Cree ese consejo que es un deber de la institución participar activamente en todo cuanto tienda al desarrollo económico y social del país. La decisión es aprobada por mayoría y no por unanimidad debido a que los delegados estudiantiles salvan su voto por considerar que dentro del estudiantado existen reservas en cuanto al carácter de esas anunciadas nacionalizaciones, especialmente porque se habla de la realización de negociaciones con las empresas operadoras extranjeras.

Junio 15

Según estudios realizados por el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal, Venezuela pierde 100 millones de bolívares diarios (30 mil millones de bolívares anuales), ante los beneficios exorbitantes percibidos por las empresas petroleras que operan en el país. El gremio se pronuncia por la recuperación inmediata de los recursos mineros y de hidrocarburos que hoy son

explotados por compañías extranjeras. Plantea ese colegio la necesidad de un decreto que fije los impuestos selectivos adecuando los porcentajes respectivos a las inversiones que actualmente hacen las empresas en la actividad petrolera, ya que, de no hacerse así, en un año Venezuela habría pagado el valor de los bienes que recibirá en reversión.

En el III Congreso Venezolano de Petróleo, el doctor Arturo Hernández Grisanti, presidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, señala que no se puede nacionalizar la industria petrolera para hacer contratos de operación con las empresas multinacionales que operan actualmente la industria. Se pronuncia por una nacionalización integral donde todas las fases de la actividad petrolera estén en manos del Estado. El doctor Alvaro Silva Calderón expresa que si Venezuela asume todas las fases de la industria menos la del mercado no podrá decirse que ha nacionalizado su petróleo. Es esto último, en su opinión, lo que las empresas intentan.

El ex ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, en conferencia dictada en el III Congreso Venezolano de Petróleo propone acelerar el proceso de estatización de la industria petrolera, pues el retraso juega en contra de los intereses de Venezuela y favorece a quienes serían afectados. Se le da así oportunidad a éstos de emplear sus mecanismos poderosos para dificultar el proceso. Considera la necesidad de nacionalizar la industria de inmediato porque, entre otras razones, hay urgencia de avanzar sin interferencias en una política energética integral. Considera que la presencia de intereses económicos internacionales no sólo interfiere en el sector energético, sino en todo el acontecer nacional. Es necesario, en su opinión, que el país sea liberado de poderosos intereses que constituyen algo así como un Estado dentro del Estado, para ejercer nuestra soberanía sobre los recursos naturales e industrias básicas.

Junio 16

El doctor Fernando Báez Duarte, ministro encargado de Minas e Hidrocarburos, dice en el acto de clausura del III Congreso Venezolano de Petróleo que sin el concurso de los ingenieros petroleros venezolanos no se podrá hacer realidad la aspiración colectiva de manejar soberanamente la industria petrolera. Señala asimismo que todos como venezolanos se sienten comprometidos con el futuro petrolero de Venezuela y que en el despacho a su cargo siguen la línea de amplia receptividad que ha trazado el presidente de la República al crear e impulsar la Comisión de Reversión. Por ello recogen con el mayor

interés la recomendación de acelerar los estudios para definir una política energética coherente e integral, aprovechando más racional y ordenadamente todas las fuentes de energía de que se dispone, evitando el despilfarro de la energía en los usos menos nobles y rentables para el país. Agrega el doctor Báez Duarte en su intervención que la trascendental decisión nacional de estatizar la industria petrolera marca el inicio de una etapa de soberanía que no podríamos delegar en otras manos y continúa su exposición anunciando el estudio acelerado para la instalación de dos nuevas refinerías: una en el Zulia orientada hacia la industria petroquímica, y otra en el Estado Bolívar para procesar crudos similares a los que se obtengan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Junio 17

La tendencia general observada en el III Congreso Venezolano de Petróleo es la de que dada la inexistencia de imperativos fiscales, el país debe definir el desarrollo industrial del gas y acentuar, por el contrario, una vigorosa y permanente política de control, aparte del reconocimiento sobre la importancia que para el desarrollo de la economía venezolana en función de exportaciones tiene el gas natural licuado. Según opinión de ingenieros asistentes a ese Congreso, opuestos a la construcción de la planta de gas licuado, no se debe iniciar exportaciones de materia prima sin un plan energético que determine usos y prioridades.

El ingeniero Rafael Tudela plantea en el III Congreso Venezolano de Petróleo que una vez nacionalizada la industria petrolera, Venezuela debe tener la mente abierta y vender al mejor postor su crudo. Agrega que en los procesos de estabilización petrolera hay que mantener el espíritu de colaboración porque en el campo del mercadeo, realmente las grandes empresas internacionales pueden prestar una efectiva colaboración.

Junio 18

El diario *Wall Street Journal* considera que la nacionalización de la industria petrolera venezolana puede resultar menos violenta que en otros países. Agrega ese diario que Venezuela parece estar moviéndose con cautela sobre la reversión de las concesiones que estima no ocurrirá hasta mayo de 1975. Indica que es posible que las compañías manifiesten sus reservas a las cantidades que estimen como compensación que posiblemente se basen en el valor estimado en el libro de las propiedades. Pero lo más importante, observa la misma publicación, es que las empresas esperan seguir controlando la tecnología y el mercadeo después de la nacionalización.

Junio 19

Se inaugura formalmente el primer curso de Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela. En el acto participan el rector, doctor Rafael José Neri; el decano de la Facultad de Economía, doctor D. F. Maza Zavala, y el director de los Cursos de Especialización y Ampliación de Postgrado, profesor Ramón Losada Aldana.

Junio 20

El doctor Ciro Añez Fonseca, director ejecutivo de Fedecámaras, señala que la economía privada no tendrá dificultades en analizar la tesis de la reversión anticipada en su asamblea anual. Informa además que será estudiada la situación energética con todas sus implicaciones a escala nacional e internacional.

El doctor Rafael Tudela afirma que junto con la tecnología, la preparación para vender el petróleo será la tarea más difícil que plantea al país la nacionalización petrolera. Considera que el Estado debe aprender a comercializar el petróleo y que deben crear mecanismos ágiles que le permitan y que impidan la intervención de política en esas decisiones. Estima el doctor Tudela que la experiencia demuestra que la empresa privada ha obtenido mejor precio por el petróleo que los entes gubernamentales.

Junio 23

De acuerdo con informaciones dadas por el Ministro de Minas e Hidrocarburos y según un estudio de ese despacho, Venezuela necesitará formar en los próximos cinco años unos 24.000 técnicos y profesionales en la rama de los hidrocarburos. Según información de FONINVES existen 28.000 personas empleadas directamente en la industria de los hidrocarburos y 3.000 en la Petroquímica, más 5.000 empleados que prestan servicios técnicos en calidad de contratados.

Junio 27

En su XXX Asamblea Anual celebrada en San Cristóbal, Fedecámaras se pronuncia abiertamente, de pie y con aplausos, por el anticipo de la reversión petrolera. La única observación hecha es que en el control del Estado sobre la industria nacionalizada se evite la injerencia de factores políticos.

Fedecámaras fija posición ante la reversión anticipada y es el doctor José Giacopini Zárraga quien hace la exposición central. Aceptando la nacionaliza-

ción como un hecho ineluctable considera el doctor Giacopini que debe llegarse a esa situación de una manera que no sea lesiva a los intereses nacionales. Estima que el momento es favorable para ello en virtud de que el petróleo tiene mercado firme y buenos precios. Hace un llamado a todas las organizaciones políticas para que no traten de penetrar las estructuras de la industria. Agrega que es necesario agrupar los técnicos petroleros dispersos entre la CVP, el Ministerio de Minas y el sector privado. En su opinión es necesario que los dirigentes entiendan que la industria petrolera no es una actividad creadora de empleos.

Junio 28

El viceministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Fernando Báez Duarte, señala en la XXX Asamblea Anual de Fedecámaras que la reversión anticipada o la nacionalización total de la industria no descarta que las empresas estatales que surjan establezcan con las empresas privadas de las que operan en el país u otras que vengan del exterior, acuerdos de operación para colocar el producto en los mercados internacionales. Afirma que el control del Estado en la actividad petrolera será completo, por lo que debe entenderse que cubrirá todas las fases de esa industria.

Julio 4

El doctor Oscar Rojas Boccalandro, directivo de la CVP, presenta ante la Comisión de Reversión un nuevo esquema para la organización de la industria nacionalizada. Según ese esquema, la organización petrolera nacional estaría constituida por una empresa estatal matriz y las empresas estatales subsidiarias en las siguientes áreas: operación (perforación, producción y transporte), refinación, gas y mercadeo nacional. El proyecto presentado es diferente del que se ha expuesto a nivel gubernamental, que contempla mantener unidades de empresas de las cuatro principales compañías (Creole, Shell, Mobil y Mene Grande) y fundar una quinta con todas las otras empresas.

Julio 11

Informa el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, que el Banco de Datos del despacho a su cargo reunirá informes sobre 30 mil pozos petroleros que existen en el país, de los cuales 12 mil son productores. Al referirse a la Comisión Presidencial de Reversión, el ministro Hernández Acosta declara que el trabajo que ella realiza es satisfactorio, cumpliendo dentro de un amplio consenso todas las metas trazadas.

Julio 12

En reunión sostenida entre el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, y los representantes de AGROPET, señores Gustavo Coronel, Tiberio Faría, Rubén Cirinos, Carlos Rengifo y Odoardo León Ponte, éstos plantean al Ejecutivo Nacional la forma en que esa agrupación puede contribuir al análisis de la materia petrolera, y señalan las principales preocupaciones del personal de esa industria ante el anuncio presidencial de nacionalización de la industria petrolera. El ministro Hernández Acosta les manifiesta que está en capacidad de asegurarles, en nombre del Ejecutivo Nacional, que el personal de la industria petrolera puede contar con la continuidad de sus condiciones y aspiraciones, incluyendo su estabilidad, remuneración y todos los demás beneficios y prestaciones económicas y sociales que perciben actualmente.

Julio 20

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández Acosta, informa que una proposición aprobada a nivel de la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera, en el sentido de intervenir las compañías petroleras mediante "observadores", ha sido aplazada por el Ejecutivo Nacional por no considerar conveniente la designación de tales observadores.

Julio 26

El doctor Carlos Canache Mata, de AD, en discurso pronunciado en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa del Estado Sucre con motivo del natalicio del Libertador expresa que nada ni nadie podrá revocar la decisión de adelantar la reversión petrolera. Expresa que toda Venezuela ha rechazado las amenazas contenidas en las declaraciones de un alto vocero norteamericano contra el manejo de nuestros recursos naturales, y agrega que para sortear victoriosamente estos retos sabemos que tendremos que enfrentar resistencias y limitaciones históricas.

Denuncia Pedro Pablo Aguilar que el gobierno de Carlos Andrés Pérez pretende distraer al país de los grandes problemas que vive, como el de la inflación y el desempleo, con la nacionalización del petróleo. Indica que informaciones publicadas recientemente por *The Wall Street Journal* dan a entender que las compañías transnacionales que explotan el recurso no parecen alarmadas por las iniciativas oficiales tendientes a la nacionalización. Dice que se confirma así la sospecha de que el gobierno puede estar en componendas sobre la materia.

Agosto 6

Los señores Marino Recio y Max Suárez, en carta que dirigen al Presidente de la República, plantean lo que consideran factores positivos y negativos de la

nacionalización petrolera. Estiman que debe eliminarse toda interferencia política en la selección y nombramiento del personal directivo de las futuras empresas estatales. Proponen como solución para mantener los canales tecnológicos, un ensayo empresarial que denominan "empresas tripartitas" y que consiste en la participación del Estado en una tercera parte de la propiedad de las empresas, de los pequeños y medianos inversionistas organizados a través del mercado abierto, y de las empresas internacionales de una última parte. Así la nación tendría la propiedad de un 66 por ciento y el resto para los pequeños y medianos inversionistas y la empresa internacional. Reiteran que debe evitarse la injerencia política que pueda perturbar las sanas normas administrativas.

Agosto 10

El director general de la CVP, general Carlos Carnevalli Rangel, anuncia que para el proceso de reversión de la industria petrolera se tiene en proyecto crear una empresa matriz estatal que se denominará "Petróleos Venezolanos", y serán estructuradas además cuatro empresas operativas subsidiarias. La matriz se encargará de la administración de la industria a alto nivel general, mientras que las otras operarán en sectores concretos como exploración, explotación, refinación, mercadeo interno y externo.

Agosto 14

El dirigente del PCV, Radamés Larrazábal, en acto celebrado por ese partido en San Cristóbal, declara que si la nacionalización es integral, como se presume por las tendencias mayoritarias de la Comisión de Reversión, se dará en el país el paso más importante desde la Independencia. Expresa que la posición del PCV es la de nacionalización sin injerencia del capital monopolista extranjero que presiona para controlar el suministro de petróleo a largo plazo.

Agosto 16

El Gobierno Nacional designa 16 observadores permanentes en las juntas directivas para igual número de empresas petroleras, según informa el ministro de Minas. Considera Hernández Acosta que es el primer acto de aproximación vinculado directamente con el proceso de reversión anticipada. Sobre la función de esos observadores el ministro señala que se trata de un diálogo directo entre el gobierno y las petroleras. Ellos deben coordinar labores y participar en la elaboración de presupuestos y programas y obtener información actualizada sobre los activos fijos que revertirán a la nación.

Agosto 20

Según versiones cablegráficas, el señor Krueger, abogado de la Agencia Federal de Energía de los Estados Unidos, habría venido a Venezuela con el propó-

sito de hacer un estudio sobre la actuación histórica de las compañías petroleras multinacionales, pero al parecer el embajador de Estados Unidos le ha impedido sostener ningún tipo de conversaciones con funcionarios venezolanos. Esta acción de la embajada, según informaciones registradas en la prensa capitalina, es producto de recomendaciones hechas directamente por el presidente de la Creole Petroleum Corporation.

La Comisión Presidencial de Reversión Petrolera inicia en su última reunión la discusión de un Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria y el Comercio de Hidrocarburos que redactara la Sub-Comisión Jurídica. El citado proyecto consta de 20 artículos, de los cuales se aprobó el título y el artículo primero con el voto salvado de Fedecámaras.

Agosto 21

Declara el ministro de Minas e Hidrocarburos y presidente de la Comisión Presidencial de Reversión que el anteproyecto de Ley de Nacionalización Petrolera publicado en la prensa corresponde efectivamente al presentado por la Sub-Comisión Jurídica de esa comisión. Hecho éste que le sorprende y extraña porque se había acordado dentro de la Comisión de Reversión que la única persona autorizada para dar declaraciones era él, y que en verdad, no tenía conocimiento de esa publicación. Además se publicaron las observaciones que hizo el representante de Fedecámaras en el seno de la comisión al citado proyecto.

En medios políticos causa extrañeza la publicación de un proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera. Godofredo González, de Copei, declara que es sorpresiva la publicación de ese texto ya que la comisión presidencial había adoptado cierta discreción en sus investigaciones. Dice desconocer quién entregó a la prensa ese proyecto. Por otro lado, el comando político del MEP se reúne con urgencia para considerar el proyecto publicado. El secretario general de ese partido, doctor Jesús A. Paz Galarraga, indica que se harán consideraciones sobre aquél y serán dadas a conocer en rueda de prensa, dice que las proposiciones del MEP se orientan a mejorar el proyecto y serán distintas a las aspiraciones de Fedecámaras y las petroleras. Carlos D'Ascoli, de AD, declara no conocer a fondo el texto del proyecto, pero observa que ligeramente se invaden atribuciones del Ejecutivo.

El directorio ejecutivo de Fedecámaras considera que el proyecto de Ley de Nacionalización es "primitivo" y en sus objetivos pretende reemplazar una parte importante de las funciones del Ministerio de Minas por una comisión de inter-

ventores "no familiarizados con las operaciones de la industria". Señala que las tendencias extremistas internas y externas están desviando un problema técnico hacia el campo de la demagogia y la controversia dañina. Reconoce la necesidad de establecer por anticipado un nuevo orden petrolero que garantice la operación eficiente de la industria.

Agosto 22

El presidente de Fedecámaras, doctor Alfredo Paúl Delfino, declara que se ha violado el compromiso de mantener bajo reserva la documentación presentada ante la Comisión de Reversión Petrolera. Señala que "algún infidente de obvias intenciones políticas" entregó a la prensa el texto de las observaciones presentadas por él en representación de Fedecámaras ante la comisión. Indica que la organización que preside no ha entregado documento alguno a la prensa, y advierte que se están violando las reglas aprobadas en la Comisión de Reversión.

Varios dirigentes políticos formulan críticas a Fedecámaras y algunos opinan que ese organismo representa los intereses de las compañías petroleras. El doctor D. F. Maza Zavala expresa que en el comunicado emitido por Fedecámaras se exponen las aspiraciones de las propias compañías petroleras, precisamente en el ramo de donde derivan las cuantiosas ganancias, es decir, la comercialización, y señala asimismo que existe una intensa campaña para hacer fracasar el proyecto de nacionalización petrolera. El doctor Carlos Canache Mata, de AD, califica de extemporáneas e inconvenientes las formulaciones hechas por Fedecámaras. Le parecería sin embargo lamentable que ese organismo se retirara de la Comisión Presidencial de Reversión, aunque ésta, de retirarse aquél, estará en el deber de cumplir su misión. Ramón Tenorio Sifontes, de URD, expresa que Fedecámaras a través de su comunicado hace una especie de chantaje al gobierno denunciando que en la comisión y fuera de ella se mueven corrientes extremistas. Señala además que sólo los intereses petroleros y quienes les sirven de agentes pueden oponerse a que el Estado asuma el control de la industria. Por último, Abdón Vivas Terán, de Copei, considera que Fedecámaras representa la posición de las empresas petroleras. En nombre de su partido rechaza los puntos de vista del organismo empresarial y ratifica que la nacionalización debe hacerse de inmediato.

El doctor Alvaro Silva Calderón, del MEP, entrega a los periodistas un extenso trabajo donde se analiza el Proyecto de Ley Orgánica de Nacionalización de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, redactado por la Subcomisión Jurídica de la Comisión Presidencial de Reversión. El doctor Silva Calderón estima que la comisión puede terminar el trabajo en 6 meses y en caso de apelación

la Corte Suprema podría decidir en plazo aún menor. Considera que la "ocupación previa" de las instalaciones petroleras debe hacerse en el momento de aprobarse la ley. En cuanto al margen de ganancias que obtendrían las empresas en ese transcurso se pronuncia por un 14 por ciento.

El Movimiento Electoral del Pueblo plantea la conveniencia de que Fedecámaras no concurra a las reuniones de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera, por cuanto ya ha manifestado su desacuerdo con la nacionalización. Así lo expone el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, presidente de ese partido, quien dice que no les ha extrañado la posición de Fedecámaras porque ésta actúa en defensa de una de sus afiliadas. Expresa el doctor Prieto que aquí se confunden los intereses de las petroleras con los de Fedecámaras, y comenta que esta organización habla de "tendencias extremistas", mientras impone un terrorismo económico para atemorizar al pueblo sobre los efectos de la nacionalización. A sus miembros, concluye el doctor Prieto, lo que les interesa es la ganancia, no el país.

Agosto 23

La CTV y Fedepetrol apoyan y respaldan ampliamente la política del Presidente de la República en el proceso de nacionalización petrolera y le invitan a no ceder "ante cualquier extraña presión o pretensión". Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, dice que esa central obrera rechaza las pretendidas observaciones que ha hecho Fedecámaras en defensa de las compañías petroleras. Por su parte, José Beltrán Vallejo, del Comité Ejecutivo de la CTV, declara que la Comisión de Reversión está trabajando aceleradamente, a pesar de ciertas especulaciones de Fedecámaras, que el sector laboral rechaza.

Ante la publicación del anteproyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, y de las observaciones que al mismo hiciera el representante de Fedecámaras, la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera realiza una reunión para considerar esa situación. En esta reunión se presenta un definido y evidente antagonismo entre dos posiciones: una sostenida por Fedecámaras, y la otra mantenida por Pro Venezuela, Fedepetrol, el MAS, URD y el PCV, mientras que AD y COPEI parecen mantener una posición neutral. La comisión, ante lo sucedido, acuerda publicar un documento donde fijará la posición de ese organismo ante la violación del acuerdo de no suministrar informaciones de manera unilateral.

Agosto 24

Informa Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, que esa central obrera está convocando a todos sus sindicatos afiliados en el país para salir en defensa

de la nacionalización inmediata de la industria petrolera, y agrega que solicitarán de la CTV que promueva entre los obreros y campesinos del país una movilización general para enfrentar a Fedecámaras en sus proposiciones respecto de la nacionalización.

Agosto 25

En conferencia dictada en el complejo petroquímico de Morón, el ingeniero Ramón Cornieles, gerente general de la refinería de Cardón, afirma que el "proceso de reversión petrolera es irreversible", aunque posterior a ésta los venezolanos que trabajan en la industria petrolera tendrán que vencer importantes y difíciles retos, entre ellos, la no posible continuidad administrativa y una ola de politización.

Agosto 30

La Comisión Presidencial de Reversión Petrolera hace público un comunicado, aprobado en la plenaria del 22 de agosto de este año, donde rechaza categóricamente el comunicado del directorio de Fedecámaras por la gravedad de las consideraciones que sobre un papel de trabajo de la comisión hiciera ese organismo empresarial. También acuerda mantener una razonable y discreta reserva sobre los papeles de trabajo y las deliberaciones internas e informaciones oficiales confidenciales.

Agosto 31

Propone AGROPET a la Comisión Presidencial de Reversión la creación de empresas verticalmente integradas para asegurar la eficacia y evitar la politización y burocracia. También señala la citada agrupación de empleados de las compañías petroleras que debe adoptarse el modelo de empresas mixtas (20 por ciento de participación externa, 10 por ciento de participación de los trabajadores y el 70 por ciento de participación del Estado) bajo el argumento de asegurar el suministro de tecnología.

Señala el doctor Luis Vallenilla, director de la revista *Petróleo Venezolano,* que la nacionalización petrolera no es sólo un acto formal, legislativo, publicitario, sino un paso de gran trascendencia con implicaciones económicas, políticas y administrativas. Agrega que en la elección del modelo definitivo de organización empresarial para la industria nacionalizada se debe tener cuidado de no dejarle a los consorcios internacionales lo mejor del negocio, a través de consideraciones para organizar el comercio internacional. Estima que Venezuela debe asumir el control completo y total del negocio petrolero en el mercado externo.

Septiembre 1

Las deliberaciones de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera sobre el proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera y el Comercio de los Hidrocarburos marchan excesivamente lentas. Así lo denuncia el dirigente del MAS, Freddy Muñoz, quien agrega que el hecho resulta más preocupante si se considera que en estos momentos las compañías petroleras y el gobierno norteamericano desencadenan una grave ofensiva contra la política de la OPEP. Finaliza diciendo Muñoz que ante tal circunstancia la mejor respuesta de Venezuela es acelerar el proceso de nacionalización de su industria petrolera.

La Unión Patronal de Comercio en nota oficial señala que aun cuando por nacionalización petrolera se ha entendido que el negocio pasará en su totalidad a manos del Estado, hay reservas en influyentes sectores de la vida nacional sobre las ventajas reales y efectivas que pueda tener la estatización de la totalidad de las fases de la industria. Por ello la Unión Patronal está consciente de que la decisión que tome el Ejecutivo, en base al informe oficial que presente la Comisión de Reversión, responda no al dogma del Estado empresario, sino que considere con objetividad los aspectos irrevocables de todo un cuadro de realidades económicas que son inminentes a la esencia del negocio petrolero. Ratifica ese organismo que la nacionalización no debe corresponder a una decisión enmarcada dentro del estatismo.

El representante del Partido Comunista ante la Comisión Presidencial de Reversión, señor Radamés Larrazábal, responde a la revista norteamericana *Business Week* en la cual se señala que en en esa comisión predominan sectores de izquierda. Expresa Larrazábal que esto no es cierto, como tampoco es cierto que se trabaje apresuradamente. Agrega que hay una queja por los términos de la indemnización, y en cuanto a esto se ve que las empresas se apresuran en valorizar sus activos para crear un conflicto en las negociaciones. Dice Larrazábal que el Partido Comunista es de la opinión de que son las compañías las que deben pagar indemnización al país.

Septiembre 3

El directorio de Fedecámaras presenta un amplio informe de la gestión cumplida por sus representantes en la Comisión de Reversión. Ratifica su posición en respaldo a la nacionalización petrolera, denuncia que ha tenido que enfrentarse a una orquestada manipulación de la opinión pública inducida por sectores marxistas, y señala la necesidad de un consenso total para cumplir satisfactoriamente con la reversión anticipada.

Septiembre 4

El diputado Freddy Muñoz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denuncia que Fedecámaras no está de acuerdo con la nacionalización de la industria que signifique el rescate pleno y el manejo soberano del país de su riqueza fundamental. Explica que, según se desprende de las proposiciones formuladas por ese organismo a la Comisión Presidencial de Reversión, se capta que ese organismo es partidario de la creación de empresas mixtas, y en general, de una injerencia de los capitales privados en la industria petrolera en su nueva etapa. Agrega que si las proposiciones de Fedecámaras son aceptadas se verá quebrantado entonces el principio esencial de la nacionalización, como es la plena soberanía del Estado sobre la industria.

Septiembre 5

La junta directiva de la Asociación Pro Venezuela emite una declaración oficial en la cual rechaza las imputaciones de que es objeto por parte de Fedecámaras. En la misma señala: 1) que su posición en materia petrolera se encuentra definida en el informe aprobado por unanimidad por la junta directiva, entregado en febrero al presidente electo Carlos Andrés Pérez, y donde se afirma, entre otras cosas, que debemos aprovechar la actual coyuntura económica para modificar nuestra condición de simples exportadores de petróleo crudo; 2) que su tesis sobre materia petrolera es consecuencia directa de sus análisis, convicciones y, fundamentalmente, de sus propias decisiones; 3) que el consenso que se requiere en temas vitales como el petróleo sólo podrá lograrse en torno a una tesis que en la práctica garantice el control del Estado sobre la industria petrolera; 4) que la nacionalización y estatización del petróleo es un objetivo nacional al cual no pueden renunciar; asimismo pretender que la actividad privada tenga participación en las áreas fundamentales que se reserva el Estado, resulta contradictorio con el espíritu de cualquier proyecto de ley que con el objetivo de una nacionalización pueda instrumentarse; 5) que, por tanto, Pro Venezuela considera aventurada la acusación de hacerse eco de manipulaciones publicitarias y políticas orientadas a confundir la opinión pública y no acepta presiones de ninguna naturaleza; además está dispuesta a sostener los enfrentamientos ideológicos y doctrinarios que fuesen necesarios por la seguridad que tienen en la veracidad y vigencia de sus planteamientos.

Septiembre 6

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, no cree que las diferencias entre Fedecámaras y la Comisión de Reversión puedan obstaculizar la marcha de los trabajos asignados por el Presidente de la República.

Considera lógico que se presenten diferencias por lo amplia y heterogénea que es la Comisión.

Septiembre 9

Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol y de la Sub-Comisión Laboral de Recursos Humanos de la Comisión de Reversión, señala que Fedecámaras es una institución respetable que agrupa a empresarios venezolanos que han aprovechado el momento para lograr una gran fortuna. Agrega que conoce la posición de esa agrupación empresarial frente a la reversión, pero afirma que está consciente de que los sectores económicos tendrán el buen juicio de admitir lo que la mayoría de los venezolanos quieren. Ello no podrá ser evitado por ese organismo, ya que la nacionalización deberá ser realizada antes de 1975. Al referirse a la posición de algunos sectores adversos a la aplicación de la Ley de Nacionalización cuando aducen que no tenemos los técnicos necesarios para asumir el control pleno de la industria petrolera, advierte que a pesar de que la alta tecnología no está en nuestras manos, los países que la poseen no tendrán problemas en realizar contratos con Venezuela, mientras se crea la tecnología nacional.

Septiembre 14

Al partir hacia Londres el presidente de la compañía Shell, Alberto Quirós Corradi, declara que es poco probable un aumento de los precios del petróleo por parte de la OPEP y que la tendencia más bien parece estar dirigida hacia una congelación de los mismos. Señala luego que la industria internacional del petróleo jugará un papel importante bajo cualquiera estructura derivada del proceso de reversión, y añade que la Shell está dispuesta a participar en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos una vez efectuada la reversión petrolera.

Septiembre 15

El presidente de la empresa Mito Juan, doctor Humberto Peñaloza, considera que se está en el mejor momento de hacer la nacionalización petrolera. Agrega que esa empresa se vería afectada por cuanto con aquel proceso termina el régimen de concesiones. Sin embargo, cree que la nacionalización es inevitable y además la coyuntura internacional es positiva para su realización.

Septiembre 21

Personalidades de diversas tendencias políticas se pronuncian por la discusión y sanción de la inmediata nacionalización de la industria petrolera incluyendo la fase de comercialización exterior. Es la opinión que priva en apoyo

solidario a la respuesta del presidente Pérez ante las amenazas de Gerald Ford. Coinciden en ella Gonzalo Barrios, Gonzalo Ramírez Cubillán, Pablo Salas Castillo, Siuberto Martínez y Reinaldo Cervini.

Septiembre 25

Declara el doctor Hugo Pérez La Salvia que se debe concluir pronto el proyecto de Ley de Nacionalización que adelanta la Comisión Presidencial de Reversión, para que junto con los dos que existen, uno elaborado por el MEP y otro por Copei, el Ejecutivo Nacional decida cuál habrá de ser adoptado para la nacionalización de la industria petrolera. Dice que tal decisión debe tomarse cuanto antes porque de lo contrario las compañías petroleras internacionales pueden sacar ventaja para defender sus intereses. Con respecto a las amenazas del presidente Ford señala que son un reflejo de la incapacidad de poder contener o enfrentar el proceso inflacionario que vive Estados Unidos y que afecta a la mayoría de los países del mundo.

Septiembre 26

El diputado Eduardo Fernández, jefe de la fracción parlamentaria de Copei, declara en Maiquetía, momentos antes de salir hacia Tokio para asistir a la sexagésima primera conferencia parlamentaria mundial, que en nuestro país está pendiente la nacionalización de la industria petrolera en todas sus fases, desde la exploración hasta la comercialización internacional. Agrega que ello sería la mejor respuesta de Venezuela al pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, señor Gerald Ford.

Septiembre 27

En comunicado emitido por las juventudes de todos los partidos políticos, COPEI, AD, MEP, MAS, PCV, URD, UPI, con excepción del MIR, que expondrá aparte su posición, se pide al gobierno la nacionalización inmediata e integral de la industria petrolera. Lo exigen no sólo como respuesta a las agresiones del Presidente Ford, sino además como el "justo ejercicio del derecho soberano de nuestro pueblo sobre su riqueza". Agregan que la coyuntura internacional es favorable al proceso de rescate definitivo de la industria de hidrocarburos.

Septiembre 28

Informa el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, que un importante grupo industrial japonés ha propuesto al gobierno de Venezuela la compra de 500.000 barriles diarios de petróleo, por un plazo mínimo de cinco años que puede elevarse a diez. El suministro de este petróleo se ini-

ciaría inmediatamente después que Venezuela nacionalice las empresas petroleras existentes en el país. Agrega que el gobierno ha visto con interés la proposición japonesa, y al efecto ha designado una comisión especial para que, a nivel técnico, analice el contenido global de la proposición y eleve a consideración del gobierno una recomendación. Dice asimismo el ministro que una de las condiciones que el gobierno venezolano pondrá sobre la mesa de negociaciones con los japoneses, será la de que, a cambio del convenio de suministro de ese medio millón de barriles diarios de petróleo por cinco o diez años, el Japón se comprometa a suministrarle a la industria petrolera venezolana (nacionalizada) la tecnología que razonablemente se requiera de ese país, y además pueda contar Venezuela con asistencia técnica y posiblemente la participación minoritaria de capital japonés en otros proyectos que el Estado se propone.

Septiembre 29

El doctor Arturo Uslar Pietri en entrevista que se le hiciera para un periódico capitalino declara que la nacionalización petrolera hay que hacerla, pero de una forma inteligente y eficaz. Dice que debemos tener cuidado en "no mersifricar" la industria petrolera. Una de las cosas más importantes, en su opinión, es asegurar la formación de nuestros recursos humanos.

Octubre 3

Siuberto Martínez, parlamentario del MEP, en el debate de la Cámara de Diputados solicita que la Comisión de Minas e Hidrocarburos proceda con urgencia al estudio y consideración de los proyectos de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera que reposan en dicha comisión. Pide también la convocatoria de una sesión del Congreso Nacional para conocer la situación petrolera internacional. Por su parte, el doctor Gustavo Machado, del PCV, manifiesta su apoyo a las proposiciones en mesa. Freddy Muñoz, del MAS, se solidariza con los términos de rechazo a las afirmaciones del presidente norteamericano, Gerald Ford, por parte de los partidos y la colectividad venezolana en general, y considera urgente hacer un pronunciamiento enérgico tendiente a fortalecer la OPEP. Asimismo, Américo Martín, del MIR, respalda las proposiciones del MEP y advierte cierta contradicción entre la respuesta del presidente Carlos Andrés Pérez y la actitud de algunos altos voceros del gobierno en materia económica.

Se informa que en las Primeras Jornadas Venezolanas de Refinación, organizadas por el Centro de Ingenieros del Estado Falcón, afiliado al Colegio de Ingenieros de Venezuela, a efectuarse entre el 14 y 16 de noviembre de 1974, se tratarán importantes temas sobre la materia, entre ellos, los recursos presentes y futuros de la industria: equipos humanos, coordinado por el ingeniero Jesús Gar-

cía Varona; instalación y su mantenimiento, coordinado por el ingeniero Leopoldo Aguerrevere; tecnología, estado actual e investigación, coordinado por los ingenieros Antonio Tepedino y Luis Hernández; control de contaminación ambiental, coordinado por los ingenieros Luis Monti y Antonio Pietri; procesamiento de crudos pesados, coordinado por el ingeniero Luis E. García Alvarado; aspectos económicos y administrativos, coordinado por el ingeniero Edmundo Cárdenas, y estrategia de la refinación, coordinado por los ingenieros Renato Urdaneta y Ramón Cornieles.

El doctor Godofredo González, de Copei, admite que han surgido dificultades en el funcionamiento de la Comisión Presidencial de Reversión, derivadas del alto número de sus miembros y de la heterogeneidad de los mismos. Se pronuncia asimismo por la implementación de un mecanismo de agilización del trabajo, bien sea realizando más reuniones o a través de la implementación del quórum reglamentario.

La Asociación Pro Venezuela convoca una asamblea para considerar la posición que debe adoptar el país frente a las manifestaciones del presidente norteamericano Gerald Ford, en relación a la situación petrolera internacional. Entre los asistentes se encontraban Arturo Uslar Pietri, Domingo Alberto Rangel, Luis Enrique Oberto, Joaquín Gabaldón Márquez, Leonardo Montiel Ortega, Jesús Angel Paz Galarraga, Héctor Soto Guédez, Godofredo González, Jesús María Bianco, Ramón Tenorio Sifontes, Freddy Muñoz, Germán Lairet, Félix Martínez Espino, Angel Cervini, contralmirante (r) Ricardo Sosa Ríos, Isabel Carmona, Luis A. Freites, Rómulo Henríquez, Eduardo Machado, José González Navarro y señora. María Teresa Castillo de Otero Silva. La asamblea considera un "acuerdo" que es presentado por el presidente de Pro Venezuela, doctor Reinaldo Cervini, quien expresa que la política de amenazas del presidente Ford ha logrado el consenso de todos los venezolanos, quienes en vez de intimidarse se han unido para rechazar las apreciaciones del mandatario norteamericano. Plantea el doctor Cervini que el acuerdo contempla tres puntos fundamentales: primero, el respaldo a la posición mantenida por el Estado y expresada por el presidente Pérez; segundo, rechazo a las declaraciones dadas por el presidente Ford; y tercero, la estrategia en sentido general que había que estudiar posteriormente. Luego de diferentes intervenciones se aprueba un acuerdo que condena en forma unánime las amenazas del presidente Ford, y se solicita a los poderes públicos la rápida aplicación de las siguientes medidas: la inmediata e integral nacionalización de la industria petrolera y del hierro; fortalecer la OPEP, como organismo fundamental para la defensa de una política petrolera soberana; utilizar el petróleo, el hierro y el Fondo de Inver-

siones como instrumentos de negociación; desarrollar en materia de producción petrolera lo que sea más conveniente para el país, y mantener la política de suministros de crudo a todos los países, de acuerdo con lo más apropiado al interés nacional.

Octubre 4

Informa el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández Acosta, que se han reactivado las labores de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera y que el informe de esta Comisión será presentado al jefe del Estado el 27 de noviembre del presente año.

Octubre 5

El doctor Fernando Báez Duarte, viceministro de Minas e Hidrocarburos, aborda en el XI Seminario de Periodistas Norteamericanos el problema de la indemnización a las empresas petroleras y advierte que ello será bien estudiado. Dice que la compensación se hará de acuerdo al valor neto registrado en los libros de las compañías. La forma de pago será mediante la entrega de bonos a un plazo aún no determinado. Con respecto a los mercados, considera que lo importante es no depender de uno sólo, pero respecto del mercado norteamericano existe un interés mutuo ya que Venezuela ha suministrado a ese país grandes volúmenes de petróleo.

Octubre 6

En rueda de prensa ofrecida por la dirección nacional del MAS, su secretario general, senador Pompeyo Márquez, declara que es importante destacar la oportuna respuesta del presidente Carlos Andrés Pérez a las amenazas del Presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, habiéndose logrado una coincidencia muy aprovechable para la nacionalización de la industria petrolera. Agrega Pompeyo Márquez que el país entero se ha sensibilizado, lo cual demuestra la enorme potencialidad de que se dispone para adelantar una nacionalización.

Octubre 8

Según informaciones extraoficiales, la Subcomisión Técnico-Operativa de la Comisión Presidencial de Reversión, que preside el doctor Humberto Peñaloza, contempla, según proyecto que elabora para la creación de la casa matriz o *holding* en la industria nacionalizada, además de ésta, la creación de empresas subsidiarias en las siguientes áreas: cuatro empresas para áreas en desarrollo; una para nuevos desarrollos petroleros; otra para refinación, una para mercado doméstico; otra para mercado internacional y la flota petrolera.

En el debate sobre petróleo en la Cámara de Diputados, informa el parlamentario Arturo Hernández Grisanti, de AD, que la Comisión Presidencial de Reversión termina esta semana sus estudios y los elevará a la consideración del Ejecutivo Nacional. Agrega que no hay que acelerar ni retardar la nacionalización porque el presidente norteamericano, Gerald Ford, haya formulado una amenaza, sino que se debe tomar el tiempo necesario para hacerla bien. Abdón Vivas Terán, de Copei, plantea la urgencia de nacionalizar la industria petrolera integralmente, sin crear empresas mixtas.

En un trabajo titulado "Explotación de Yacimientos Comunes y Reversión", los licenciados Darío Atencio Urdaneta y Alfredo Cepeda, ambos de la CVP y miembros de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, sugieren que la Comisión de Reversión realice un análisis a fondo del problema de la indemnización, ya que la nación no debe ser lesionada cuando se trate de establecer la posición oficial sobre esa materia. Según el análisis que elaboran, el monto de la indemnización que pagará la nación a las compañías petroleras no debe ser superior a 1.300 millones de bolívares. Esto lo señalan considerando que las empresas concesionarias han drenado petróleo de yacimientos comunes y vecinos equivalente a 1.000 millones de dólares (4.200 millones de bolívares) a precios de mercado.

Octubre 9

Según el informe presentado por la SubComisión Técnico-Operativa de la Comisión Presidencial de Reversión, se conoce que la estructura propuesta para el *holding* en la industria petrolera nacionalizada tendría cinco niveles: 1) nivel de tutela política; 2) nivel de dirección empresarial; 3) nivel de apoyo funcional; 4) nivel de coordinación y 5) nivel de operaciones.

Octubre 10

Ante el anuncio del Presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, de reducir las importaciones de petróleo en un millón de barriles diarios, el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, dice que Venezuela "no tiene problema de demanda" y que, por el contrario, la idea que existe en el gobierno es reducir "nuestra producción a fin de que los recursos petroleros lleguen hasta una tercera generación". Estima el ministro muy positivo que los países industrializados tomen conciencia del valor del petróleo y de su condición de materia prima no renovable e instrumenten medidas para reducir su consumo. Advierte, sin embargo, que la reducción alcanzaría a unos 300.000

barriles diarios en lo que a Venezuela se refiere, los cuales serán colocados en otros mercados como Japón y Cuba que han manifestado interés por el petróleo venezolano. Señala igualmente que las restricciones "no necesariamente" obligarían a bajar los precios, pues el petróleo se puede dejar de producir sin causar problema a los yacimientos y, al mismo tiempo, sin perjudicar directamente la economía del país, ni crear problemas de desempleo.

Octubre 11

Al cerrar el debate sobre la cuestión petrolera, la Cámara de Diputados aprueba tres acuerdos: uno, propuesto por Siuberto Martínez, del MEP, donde pide que se ordene a la Comisión de Minas elaborar un estudio sobre la cuestión petrolera; otro, de Ramón Tenorio Sifontes, de URD, solicitando que sea citado el ministro de Minas al Congreso Nacional; y el último, de Abdón Vivas Terán, de Copei, en el sentido de que la Comisión de Minas pida informe a la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera de lo que ha hecho para adelantar el proceso de reversión.

La Comisión Presidencial de Reversión aprueba los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 relativos al proceso expropiatorio y a las indemnizaciones, con el voto salvado del representante del Partido Comunista, señor Radamés Larrazábal, quien sostiene que el Estado no debe pagar a las compañías, sino que por el contrario debe cobrárseles los daños ocasionados a la ecología y a la naturaleza del país por los métodos irracionales que han empleado para la explotación del recurso. Otros artículos aprobados son el 12, 13 y 14. El artículo 15, referido a las prestaciones de los trabajadores, es objeto de gran discusión. Se espera sin embargo que en pocos días sea aprobado el proyecto de Ley de Nacionalización elaborado por la comisión y sea presentado luego al Ejecutivo Nacional.

Octubre 15

El presidente del MEP, doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, dice que si no se nacionaliza ahora la industria petrolera apareceremos como temerosos de obtener nuestra independencia económica. En sus declaraciones agrega que el Presidente de la República hizo un extraordinario papel en su respuesta al Presidente de Estados Unidos, señor Gerald Ford, en defensa de la autonomía del país y de los países subdesarrollados. Venezuela y el mundo pensaron que a esa carta seguiría inmediatamente la nacionalización, cuando todos los partidos y grupos económicos y sociales se pronunciaron en apoyo al Presidente y por la nacionalización integral. Expresa el doctor Prieto que el gobierno sin embargo "no arranca".

Octubre 17

El doctor Alvaro Silva Calderón, miembro de la Comisión Presidencial de Reversión en representación del MEP, hace un amplio comentario en torno al trabajo que realiza esa comisión y se muestra partidario de una nacionalización integral de la industria petrolera. Al referirse a la casa matriz o *holding* petrolero, el doctor Silva Calderón expresa que en la misma no estaría representada la empresa privada porque la nacionalización excluye la participación de capitales privados nacionales e internacionales, estando todas las actividades petroleras bajo el control del Estado, no presentándose, por consiguiente, la figura de las empresas mixtas.

Octubre 18

La Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera concluye la consideración del proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera con un consenso casi total. De acuerdo con informes oficiosos, se conoce que hubo dos votos salvados en forma específica y registrada. Uno de tipo general, del doctor Alfredo Paúl Delfino, representante de Fedecámaras, en varios artículos del proyecto; y el otro, el del representante del PCV, Radamés Larrazábal, en cuanto al artículo sobre el pago de indemnización a las compañías concesionarias.

El viceministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Fernando Báez Duarte, discute sobre nacionalización petrolera ante delegados de la Asamblea Anual de la SIP. Afirma que la estructura actual de la industria permanecerá inalterable, que las empresas operadoras continuarán sus actividades de la misma manera como lo han venido haciendo porque han demostrado eficacia. Indica que es posible que se reduzca el número de compañías, quedando sólo las más grandes como la Shell, Creole, Mene Grande, Mobil. Señala finalmente el doctor Báez Duarte que hay la decisión de impedir que la industria estatal se convierta en una fuente de burocracia.

La Comisión de Reversión aprueba el proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos con el voto salvado del representante de Fedecámaras, doctor Alfredo Paúl Delfino, quien intempestivamente abandona la comisión, mientras los otros miembros aplauden la aprobación del proyecto. A la salida de la reunión algunos miembros de la comisión declararon a los periodistas: Alfredo Paúl Delfino, representante de Fedecámaras, se abstiene de declarar en torno al proyecto. Freddy Muñoz, del MAS, señala que se encuentra satisfecho con el proyecto aprobado, pues dentro del Estado actual y del presente régimen es bastante cercano a lo que se quería aprobar. El

diputado socialista, al referirse a la posición del representante de los empresarios, dice que es una nueva prueba de que Fedecámaras no está de acuerdo con la nacionalización petrolera, pues el doctor Paúl Delfino en su voto salvado hizo referencia a aquellos artículos que impiden la participación de la empresa privada en la industria petrolera. El doctor Luis Enrique Oberto, de Copei, señala que su partido contribuyó al trabajo aprobado con el mejor deseo de que se abra el camino para que se realice en forma completa la nacionalización petrolera. Alvaro Silva Calderón, del MEP, manifiesta su complacencia por la aprobación del proyecto de ley y condena la actitud del representante de Fedecámaras. Por su parte, el presidente de Fetrahidrocarburos considera que la aprobación del proyecto de ley es un hecho de innegable trascendencia histórica.

Octubre 19

El proyecto de Ley de Nacionalización aprobado por la Comisión de Reversión contiene cuatro aspectos fundamentales que establecen cambios de importancia con respecto al anteproyecto último que venía analizando. Tales cambios son: 1) se establece claramente la participación del Estado venezolano en el comercio internacional de los hidrocarburos; 2) se establece el principio de ocupación inmediata de la industria en caso de que no haya acuerdo sobre el monto de las indemnizaciones que pagará la nación; 3) se elimina totalmente la posibilidad de crear empresas mixtas, y se crea una figura bastante flexible que permite al Estado establecer contratos de servicio operativos con empresas privadas; 4) se mejoran los derechos de los trabajadores, estableciéndose la estabilidad laboral con el voto salvado del representante de Fedecámaras.

En declaraciones suministradas por el doctor Reinaldo Cervini, la Asociación Pro Venezuela expresa públicamente su reconocimiento a la labor cumplida por la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera, la cual acaba de elaborar el proyecto de ley para nacionalizar la industria de hidrocarburos. Señala que la junta directiva de esa asociación, con antelación a las normas que forman parte del cuerpo del proyecto de la comisión, aprobó por unanimidad la opinión de que las medidas a tomar para el control pleno de la industria y la comercialización petrolera deben adelantarse mediante negociaciones directas de gobierno a gobierno, con total prescindencia de las compañías que explotan el ramo. Al referirse a la creación de complejos económicos con capitales de diverso origen, Pro Venezuela aclara que cuando habla de corporaciones mixtas estatales, de ningún modo se refiere a la producción del petróleo ni a su refinación y transporte, ya que esto corresponde esencialmente al Estado venezolano. Para finalizar esta declaración, la Asociación Pro Venezuela reitera que la nacionalización de la industria petrolera no es sólo una decisión a establecerse en la

letra de una ley, sino un vasto y definido proceso, mediante el cual la nación asuma con madurez y firmeza la dirección de su autonomía económica y de su plena soberanía política, a fin de que pueda responsabilizarse históricamente por la redistribución del ingreso y por el bienestar social de todos los venezolanos.

Declara la doctora Haydée Castillo, ex ministro de Fomento y dirigente copeyana, que los representantes oficiales y del partido Acción Democrática abandonaron la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera, pero a pesar de ello se logra aprobar el anteproyecto de nacionalización petrolera. Agrega, a manera de acusación, que el ministro de Hacienda en el estimado de ingresos para el presupuesto de 1975, ignoró totalmente la nacionalización del petróleo, surgiendo dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones sobre esta medida trascendental para el país.

Es instalado en Naiguatá el Seminario de Información Petrolera auspiciado por la CVP. El general Carlos Carnevalli Rangel, presidente de la empresa estatal, hace consideraciones en su discurso relacionadas con la nacionalización petrolera. Señala que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos prepara los juicios expropiatorios de cada una de las empresas que serán sometidos al Ejecutivo Nacional a fin de que el Procurador General los introduzca ante la Corte Suprema para su sentencia. Indica que la creación de la empresa matriz o *holding* será motivo de otro proyecto de ley que estará listo cuando culmine el plazo dado a la Comisión de Reversión que elabora el anteproyecto de ley nacionalizadora.

Los presidentes y principales directivos de todas las empresas petroleras que operan en el país asisten a dos reuniones con la Subcomisión Técnico-Operativa de la Comisión Presidencial de Reversión para conocer la nueva estructura que será recomendada para la industria una vez que sea nacionalizada. El doctor Humberto Peñaloza, quien preside la reunión, señala que el objeto de la misma es informar a las compañías el esquema que se ha propuesto y conocer al respecto sus opiniones.

Octubre 21

En la jornada final del Seminario de Información Petrolera que realiza la CVP en Naiguatá, se señala que esa empresa debe ser el *holding* que se establecerá al nacionalizar la industria. Así lo informa el ingeniero Oscar Rojas Boccalandro. La CVP no debe quedar como una empresa más entre las que van a integrarlo. Por otra parte, consideran los técnicos de la compañía estatal que con la nacionalización deben ser cambiados radicalmente los patrones de refi-

nación porque las grandes concesionarias no serán ya las que programen la industria.

Octubre 22

En un foro realizado en la Asociación Venezolana de Periodistas con los asistentes al Primer Encuentro Latinoamericano de Periodistas efectuado en Caracas, intervienen representantes de distintos partidos políticos. El diputado de AD, doctor Arturo Hernández Grisanti, señala que una vez nacionalizada la industria petrolera existe la posibilidad de que Venezuela utilice los canales tradicionales de mercadeo de las grandes empresas petroleras para un determinado porcentaje de su producción, sin que impida que al mismo tiempo se utilicen otras vías, como son las negociaciones Estado a Estado, y el aprovisionamiento directo a los clientes. Asimismo denuncia el parlamentario a una agencia internacional (AP) de difundir declaraciones atribuidas a él, las cuales no ha suministrado, como parte de una estrategia informativa orientada a dividir la OPEP. El dirigente de Copei, doctor Godofredo González, hace una síntesis histórica de la soberanía de Venezuela con respecto a los yacimientos mineros y de hidrocarburos, señalando que la industria petrolera requiere planes a largo plazo para conservar un proceso armónico de explotación y desarrollo. Freddy Muñoz, del MAS, advierte que existe una convergencia de fuerzas sociales y políticas distintas y no un consenso en torno a la nacionalización petrolera, en donde una fuerza importante y de elevado peso —Fedecámaras— mantiene una posición reticente y opuesta a ese proceso. Agrega que la nacionalización no proviene de fuerzas socialistas sino de un gobierno que se mueve en la órbita del capitalismo, donde la mayoría de los ingresos provienen del petróleo, lo cual constituye una ventaja para los países productores en tanto les permite tener un mayor poder de decisión para seguir conduciendo el proceso económico-social y político de esos países. Por último, el experto petrolero del MEP, doctor Alvaro Silva Calderón, denuncia que existen fuerzas que tratan de desviar el propósito nacionalista que anima a Venezuela en procura de su independencia económica. Señala que existen obstáculos en el proceso de nacionalización y que los adversarios son tanto externos como internos. Dice también el doctor Silva Calderón que con la nacionalización de la industria petrolera no sólo se persigue un aumento de los ingresos, sino darle un tratamiento social a esa industria, que será estatizada en su totalidad, y en la cual quedarán fuera los capitales privados.

En foro realizado en la AVP con motivo del Encuentro Latinoamericano de Periodistas, los miembros de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera Arturo Hernández Grisanti, Freddy Muñoz, Alvaro Silva Calderón y Go-

dofredo González coinciden en señalar que los sectores capitalistas externos e internos, no ven con buenos ojos la nacionalización petrolera y pretenden controlar parte del negocio de los hidrocarburos para satisfacer sus apetencias lucrativas.

El representante de URD ante la Comisión Presidencial de Reversión, doctor Leonardo Montiel Ortega, envía un memorándum al ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, presidente de esa comisión, y al presidente del comité coordinador de la misma, general Carlos Carnevalli, donde denuncia una serie de robos y desmantelamientos de instalaciones petroleras y pide la intervención del aparato militar para intensificar la vigilancia sobre esos equipos y la reposición inmediata de los equipos robados o desaparecidos en condiciones anormales.

Octubre 23

El secretario de relaciones internacionales de la CTV, señor José Vargas, denuncia que esa central obrera y la Comisión Presidencial de Reversión tienen evidencias concretas sobre una campaña de los sectores petroleros, tendiente a presentar la nacionalización de la industria de los hidrocarburos como perjudicial para los obreros y empleados de la misma. Destaca asimismo la conducta nacionalista de obreros y empleados petroleros para rechazar ese tipo de maniobras, considerando necesaria una acción de las tendencias político-sindicales para contrarrestar esa campaña antinacional.

Octubre 26

La Comisión Presidencial de Reversión Petrolera acuerda recomendar al Ejecutivo Nacional, según proposición formulada por el doctor Alvaro Silva Calderón, considerar una nueva carga impositiva a las compañías petroleras con el objetivo de reducir de esa manera las ganancias excesivas que obtienen aquellas empresas. Se hace tal recomendación incluyendo el año 1974 y la proposición es ampliamente discutida a nivel de la Comisión de Reversión.

El ex ministro de Hacienda y dirigente del partido Copei, doctor Luis Enrique Oberto, declara a los periodistas que resulta inconcebible que no se hayan tomado las previsiones necesarias en el nuevo presupuesto para la nacionalización de la industria petrolera que tendrá efecto en 1975.

Octubre 27

El presidente de Fedecámaras, doctor Alfredo Paúl Delfino, señala en Carúpano que están dadas las condiciones internas y externas para anticipar la

reversión petrolera. Agrega que en el orden interno hay un consenso nacional y nadie se opone a ese proceso. En el externo existe un mercado estable y firme para la colocación del petróleo. Afirma asimismo que toda expropiación lleva consigo el pago de una justa indemnización y que ello está establecido en la Constitución Nacional.

Octubre 29

El director de Bienes Afectos a Reversión, doctor Humberto Calderón Berti, señala que la nacionalización plantea tres grandes retos a Venezuela: evitar la politización partidista en la industria; abrir canales propios de comercialización, y romper la barrera de la dependencia tecnológica que se va a necesitar en las áreas de exploración, producción, compresión y cisternas. Expresa que el inventario de los bienes afectos a reversión se hace con celeridad y no se han presentado quejas del mantenimiento que dan a los mismos las empresas concesionarias.

Noviembre 1

El doctor Celestino Armas, vicepresidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados y representante en la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera del partido Acción Democrática, declara a los periodistas en torno a la figura de la ocupación previa de las empresas petroleras contemplada en el Proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Señala el parlamentario que el proyecto deja abierta, en primer lugar, la posibilidad de avenimiento con las compañías y se estima que éstas deben llegar a ese avenimiento puesto que la fórmula de indemnización es justa y equitativa. Pero que de todas formas, para cubrir la eventualidad de que no se alcance ese entendimiento con alguna o algunas de las empresas, el Estado debe disponer de los recursos legales pertinentes, y uno de ellos es la ocupación previa mientras el proceso expropiatorio termine.

Según comentarios del periodista José Gerbasi, ha surgido un punto polémico en el Proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos por el cuestionamiento que hace el doctor Julio César Arreaza, dirigente del partido Acción Democrática y representante de la Federación de Colegios de Abogados ante la Comisión de Reversión, al artículo que establece la ocupación previa de la industria en caso de que las compañías no acepten el monto de las indemnizaciones, solicitando el levantamiento de la sanción al citado artículo, el cual ha sido aprobado e incluido en el proyecto de ley sin él haber estado presente en la sesión.

Noviembre 2

El secretario general de Acción Democrática, doctor Octavio Lepage, después de concluir la reunión del CEN de su partido con el Presidente de la República, declara a los periodistas que la decisión de nacionalizar la industria petrolera es definitiva e irrevocable, pero que la misma no debe rodearse de sensacionalismo, sino, desenvolverse en un clima de seriedad. Agrega el declarante que no está planteada la ocupación militar de las instalaciones petroleras, pues el cuadro de negociaciones marcha en forma satisfactoria.

El informe final de la Subcomisión de Energía de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera plantea que Venezuela debe hacer el mayor esfuerzo en la industrialización de los hidrocarburos y que las nuevas bases de una política energética incluyen una notable reducción en la producción petrolera para fines conservacionistas, así como también un cambio radical en los patrones de refinación y en la estructura de las exportaciones.

Noviembre 3

En un trabajo presentado conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Minas e Hidrocarburos ante la Convención Nacional de Fiscalización, se expresa que la fiscalización de la industria petrolera tiene una fundamental importancia, pues de su resultado depende que se conozca la cuantía de los derechos fiscales que deberán deducirse en el momento de pagar la indemnización luego de nacionalizarse la industria. Se afirma que las labores de fiscalización no sólo sobre asuntos fiscales sino también de los costos de propiedad, plantas y equipos de las compañías, se han agilizado ante la inminencia de la nacionalización petrolera. La Oficina de Control Fiscal advierte que debe observarse cuidado por la costumbre que tienen las empresas de hacer resoluciones y reclasificaciones por su cuenta.

En las palabras de apertura de las Primeras Jornadas de Estudio de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la CVP, el economista Gonzalo Goudet, presidente de esa asociación, señala que los conocimientos adquiridos por los venezolanos en el manejo de la industria petrolera constituyen el punto de partida en la decisión de nacionalizar esa industria. Advierte que en el proceso de reversión no deben dejarse de lado la capacidad y eficiencia demostrada por el Estado a través de la CVP.

Noviembre 4

Los profesionales y técnicos de la CVP se pronuncian, en las Primeras Jornadas Nacionales de Estudio, por el inmediato rescate de los campos marginales

que se encuentran en poder de las empresas concesionarias. La información es suministrada por el ingeniero Heliodoro Quintero, quien pertenece a la gerencia de reversión de la CVP en Maracaibo y es autor de la ponencia al respecto, la cual es aprobada en las mencionadas jornadas. Agrega Quintero que las empresas retienen áreas marginales con la esperanza de obtener indemnización por la chatarra que en algunas de ellas existe.

El doctor Alvaro Silva Calderón, representante del MEP en la Comisión Presidencial de Reversión, declara en el foro que sobre el Anteproyecto de Ley de Nacionalización Petrolera se realizara en las Jornadas de Estudio de los Técnicos y Profesionales de la CVP, que éstos no deben ser marginados a la hora de estructurar el organismo central que manejará la industria petrolera nacionalizada. Antes, por el contrario, deben jugar papel especial en esa actividad, pues la misma no puede quedar sólo en manos de personas que han tenido una formación en la empresa privada y quienes tienen fundamentalmente una concepción mercantilista de la actividad petrolera. De suceder esto último, dice Silva Calderón, pueden presentarse graves desviaciones en los propósitos perseguidos por una verdadera nacionalización de la industria de los hidrocarburos, ya que ésta no debe tener como meta obtener sólo mayores ganancias o convertir la industria en un simple negocio, sino atender a propósitos económicos distintos de la mera ganancia y darle al petróleo un tratamiento social de acuerdo con los requerimientos de nuestra nación. Señala también que no existe un consenso en materia de nacionalización petrolera, pues a su juicio se mueven en dicho proceso dos corrientes: una verdaderamente nacionalista que se propone poner en manos del Estado todo el control y la administración de la industria; y otra que, aunque formalmente apoya el proceso de nacionalización, cada vez que surgen inconvenientes los toma como obstáculos para la realización del propósito de reversión al Estado de la industria de los hidrocarburos.

El presidente de la Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, en declaraciones dadas a la prensa capitalina señala que la verdadera nacionalización petrolera no se va a efectuar porque se estaticen las compañías petroleras y que eso no representa sino la "ilusión óptica" de la nacionalización, proceso que no puede ni debe empezar por el brazo ejecutor, sino comenzar por la nacionalización de la política petrolera. Luego advierte que es necesario que los partidos políticos planteen claramente sus objetivos para evitar que el resultado final sea la contaminación política de las empresas operadoras.

En la Convención Nacional de Fiscalización el licenciado Alejandro Rodríguez, en representación de los funcionarios fiscales del Ministerio de Hacienda,

declara que no debe admitirse la fatalidad de que somos incapaces de manejar el petróleo. Dice que la nacionalización romperá la dependencia económica y afianzará la consolidación de nuestra soberanía, y agrega que corresponde a los funcionarios fiscales de Hacienda participar en la creación de un nuevo sistema tributario.

El señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, declara que entre los trabajadores petroleros existe un respaldo unánime para la pronta nacionalización petrolera, anunciando además que esa organización se pronuncia por la convocatoria del Congreso Nacional a sesiones extraordinarias, tan pronto reciba el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, el proyecto de Ley de Nacionalización para su aprobación definitiva.

Noviembre 5

El doctor Alberto Quirós Corradi, Presidente de la Compañía Shell, advierte que la industria petrolera nacionalizada correrá el riesgo de la politización por cuanto las grandes decisiones que deberán tomarse tendrán una eminente y necesaria esencia política. Propone que la representación política en la Casa Matriz esté compuesta por tres ministerios —Minas, Hacienda y Planificación— que serán cambiados o removidos por el Presidente de la República, más los presidentes de las nueve empresas filiales que formarán parte de esa casa matriz, para evitar así que cada gobierno de turno cambie todos los miembros de la empresa cada vez que se inicie un nuevo período constitucional. Plantea también el doctor Quirós Corradi que el *holding* debe estar integrado por las siguientes áreas de operación: mercado interno, transporte marítimo, nuevas áreas, comercialización externa y refinación.

El Consejo Nacional de Fedecámaras es informado sobre el voto salvado del doctor Alfredo Paúl Delfino en la Comisión Presidencial de Reversión, en relación a los artículos que impiden cualquier tipo de participación del sector privado en la actividad petrolera, y a la disposición que consagra la inamovilidad a los trabajadores de la industria.

El doctor Julio César Arreaza solicita en la plenaria de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que se levante la sanción al artículo que establece la ocupación previa.

Ante la afirmación del presidente de la Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, de que la estatización de las empresas que operan la industria del petróleo

es una "ilusión óptica", opinan varios dirigentes políticos. Manuel Peñalver, de Fedepetrol, advierte que la nacionalización petrolera es todo un proceso que está a punto de culminar y por tanto no se puede calificar de ilusión óptica. José Manzo González, de AD, dice que la afirmación del presidente de la Shell es absurda, porque la nacionalización es un hecho evidente en numerosos países. Lo que sucede, agrega, es que las compañías petroleras empiezan a torpedear y maniobrar contra el proceso de nacionalización. Andrés Sosa Pietri, senador del MAS, señala que es un error pensar que pueda desvincularse el proceso de nacionalización petrolera de la política petrolera y la estatización de las empresas.

En el discurso pronunciado por el doctor Aníbal Martínez, delegado de Venezuela al Segundo Seminario Internacional sobre Petróleo y Recursos Naturales, realizado en Bagdad, aquél señala que la nacionalización petrolera es irrevocable e irreversible. Agrega que todas las actividades de la industria se reservarán al Estado o a compañías estatales. Sobre la indemnización dice que ésta no será mayor que el valor no depreciado de los activos, definidos como el valor de adquisición menos la depreciación y amortización acumulada. En su opinión el hecho más importante es la creación de una empresa matriz con plenos poderes que adelante la tarea de dirigir, programar y recibir las transferencias de las compañías operadoras, subsidiarias de las transnacionales, para constituir el organismo petrolero nacional.

Noviembre 6

El presidente de la compañía Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, señala que dentro de la respuesta que Venezuela debe dar al desafío tecnológico y organizacional en la nueva estructura industrial petrolera del país, después de la nacionalización, debe pensarse seriamente en la ventaja y conveniencia de instaurar una planificación asociada, en el campo de la programación petroquímica y de refinación petrolera, por cuanto la estrecha vinculación que existe entre una y otra de estas ramas aconseja su planificación conjunta, a objeto de aprovechar los elementos intrínsecos de la nacionalización. También sostiene el presidente de la Shell que desde el punto de vista práctico convendría adoptar el modelo de empresas mixtas de refinación, a objeto de asegurar la indispensable tecnología y el mercadeo.

Noviembre 7

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, señala que si las compañías dicen tener autorización de la Comisión de Reversión Petrolera para trasladar equipos debe ser cierto, ya que no puede ser un engaño

que en la realidad sería fácilmente demostrable. Agrega que el gobierno mantiene una estricta vigilancia para evitar el desmantelamiento de equipos, y que nunca antes la vigilancia había sido mayor.

Noviembre 8

En la ponencia presentada ante el Primer Congreso Venezolano de Economía Petrolera y Minera, denominada "Los Recursos Humanos para el Manejo de la Industria Petrolera Nacionalizada", se plantea la necesidad de replanificar los requerimientos de personal de esa industria después de la nacionalización. Se considera necesario tomar medidas que propicien la retención del personal con que cuenta hoy la industria. Asimismo se afirma que el número de trabajadores le permite a esa actividad continuar operando a nivel nacional, pero el mismo es insuficiente si se decide ampliar las actividades.

Noviembre 9

Según documentos presentados por la Sociedad de Economistas Petroleros a la consideración del Primer Congreso Venezolano de Economía Petrolera y Minera, se proponen para la organización operativa de la futura industria nacionalizada cinco aspectos que deben ser comunes a cualquier modelo de industria que se adopte. Ellos son: a) retención de personal existente en la industria; b) control de las decisiones en materia de política petrolera; c) acceso a la tecnología; d) acceso a los mercados y e) criterio de empresa privada.

Noviembre 10

Declara el doctor Pedro Pablo Aguilar que a Copei le preocupa la ausencia de una política petrolera en el proyecto del nuevo presupuesto nacional. Agrega que esto es indicador de que dentro de los propósitos reales del gobierno no está el hacer efectiva la nacionalización de la industria en 1975, hecho este que estima grave pues el país se encuentra en la coyuntura más favorable para adoptar esa medida.

Noviembre 11

El Primer Congreso de Economía Petrolera y Minera solicita una reforma sustancial del sistema tributario del país que se traduzca en una mejor distribución del ingreso nacional. Se advierte que esa reforma es necesaria ante la mayor significación que desde un punto de vista fiscal adquirirá el sector no petrolero de la economía una vez que se produzca la nacionalización de la industria de los hidrocarburos.

La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) acuerda en su

última reunión promover una movilización de todos sus cuadros a escala nacional para sensibilizar la opinión pública frente a la nacionalización petrolera, debido al estado de apatía y abulia en que se encuentra la nación ante tan importante proceso. Acuerda así elevar la conciencia nacional en contra de las maquinaciones de las compañías petroleras, Fedecámaras y el gobierno de los Estados Unidos. La movilización que proyecta el MAS se iniciará con una serie de actos públicos en Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Ciudad Guayana.

Noviembre 12

El ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, opina en torno a las declaraciones del señor Rafael Tudela en el sentido de que la reducción petrolera es un hecho y que como consecuencia de ello el presupuesto resultará afectado. El titular del mencionado despacho señala que una baja en la producción hasta el 10 por ciento no afectaría los ingresos fiscales de la nación, por cuanto el aumento de los precios estimados en un 10 por ciento cobrado por la OPEP en septiembre no está previsto en el presupuesto. En opinión del doctor Hurtado, para pensarse en torno a la reducción de ingresos tendría que llegarse a una producción petrolera inferior a los dos millones de barriles diarios.

El doctor Alberto Quirós Corradi, presidente de la compañía Shell, en charla dictada en el Banco Mercantil y Agrícola, advierte que no habrá nacionalización petrolera si únicamente se estatizan las empresas subsidiarias que operan en Venezuela, y mientras no se establezca en el país la infraestructura administrativa y técnica que tienen las casas matrices de esas empresas.

En el acto de preinauguración de la exposición de nuevas técnicas para aumentar la recuperación petrolera, que con motivo de sus 40 años de operaciones en Venezuela hiciera a los periodistas la compañía Mobil Oil Company, directivos de la empresa manifiestan que ésta se prepara para seguir colaborando con la nación venezolana dentro de las normas que se fijen de acuerdo con la reversión anticipada. Estiman que puede continuar participando en diversas áreas inclusive en el campo tecnológico, donde la empresa puede prestar su cooperación al desarrollo del país en esa nueva etapa.

Noviembre 13

El señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol y coordinador de la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos de la Comisión de Reversión, afirma que la estabilidad en el trabajo y la consolidación de las prestaciones

sociales serán consagradas definitivamente en la Ley de nacionalización petrolera, así como todas las conquistas laborales alcanzadas por los trabajadores de esa industria.

El doctor Godofredo González, de Copei, manifiesta en Ciudad Bolívar que el gobierno "tiene la conducta más rara" con respecto a la nacionalización de la industria petrolera. Después que el Ejecutivo inicia con mucho empuje esa nacionalización al designar la Comisión Presidencial de Reversión, en opinión del mencionado dirigente, "ahora parece estar dando marcha atrás". Agrega que en estos momentos el gobierno al igual que Fedecámaras —quienes salvaron su voto en la Comisión de Reversión— parecen discrepar con el articulado del anteproyecto de Ley.

El doctor Jesús García Coronado, en ponencia presentada ante las Primeras Jornadas Venezolanas de Refinación, señala que la industria de refinamiento entrará en una etapa mayor de expansión y requerirá de recursos humanos estimados en más de 2.000 técnicos de distintos niveles. Piensa que de no lograrse esto, puede plantearse una situación de crisis. Recomienda, junto con los doctores Guillermo Quintero y Cecilia de Hernández, quienes también participan en el trabajo, la creación de una Comisión Nacional de Recursos Humanos en el sector de hidrocarburos e instan al Consejo Nacional de Universidades a crear la especialización de refinación de petróleo.

Noviembre 14

La plenaria de la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera conocerá el informe de la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos, el cual contiene un esquema de conclusiones y otro de recomendaciones. Plantea esa subcomisión en su informe que es necesario asegurar la cooperación de todo el personal obrero, técnico y administrativo de la industria petrolera, a la vez que propone una estabilidad total que no sea afectada por intromisiones políticas, incluyendo a maestros, médicos y otros profesionales que prestan sus servicios en las empresas petroleras. Asimismo recomienda donar a los trabajadores las viviendas que han ocupado en alquiler durante muchos años y que son propiedad de las concesionarias. También propone una estrategia comunicacional para conformar entre los trabajadores una actitud favorable a la nacionalización.

Noviembre 17

En el acto de clausura de las Jornadas Venezolanas de Refinación, celebradas en Judibana, Estado Falcón, el señor Carlos Andrés Pérez, Presidente de la República, señala que se tiene todo preparado para proceder a dar el paso

trascendental y necesario de la nacionalización petrolera. Agrega que no existen pretextos ni razones para que no sea adoptada tal decisión. Hace un recuento de las iniciativas tomadas por el Estado a lo largo de 60 años en materia de refinación. Reconoce que el país necesita de aportes tecnológicos y de técnicos extranjeros no para sustituir a los venezolanos, sino para que contribuyan al desarrollo del recurso humano nacional.

El presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, afirma en Lagunillas que la compañía Shell de Venezuela ha solicitado la autorización del Ministerio de Minas e Hidrocarburos para trasladar del campo "La Cuarentona", inactivo desde 1968, a otros campos, algunos materiales que son requeridos por la empresa en otro sitio. Se descubre simultáneamente que se traslada chatarra petrolera hacia Colombia. Para esto —dice el Presidente— no hay autorización alguna.

El llamado "Manifiesto de Caracas", elaborado por el Primer Congreso Venezolano de Economía Petrolera y Minera, en sus recomendaciones contempla, entre otras cosas, la inconveniencia de indemnizar a empresas cuyo rendimiento en el corriente año triplica el valor de sus activos netos, según libros. Considera que la nacionalización integral de la industria exige que la comercialización internacional de los hidrocarburos sea sólo desarrollada por el Estado venezolano, sin injerencia, por tanto, de sectores privados. Estima que si el objetivo técnico de la nacionalización es el logro de la liberación económica, y tomando en cuenta el riesgo que implica la dependencia de un solo mercado, se recomienda propiciar una diversificación de los mismos.

Noviembre 18

La Comisión Presidencial de Reversión analiza el informe de la Subcomisión Técnico-Operativa, el cual contempla la creación de una casa matriz con diez compañías subsidiarias, incluyendo la flota petrolera. El informe de la Subcomisión Económico-Financiera, que preside Valentín Montaña M., presenta un esquema concreto para estimar las indemnizaciones de las concesionarias, junto con una tesis que considera las proyecciones que debe tener la industria petrolera una vez nacionalizada, refiriendo que desde entonces esta industria debe operar para financiar el desarrollo. También se conoce que uno de los puntos más polémicos que ha surgido en el seno de la Comisión es el de la figura de la "ocupación previa", pero ha quedado resuelto al final por consenso.

Se informa que la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera entregará el 22 de noviembre de 1974 al Presidente de la República, el informe general

sobre nacionalización de la industria petrolera, el cual consta de seis cuerpos: 1) el documento central con las conclusiones y recomendaciones de cada una de las subcomisiones y un recuento de todo el trabajo realizado por la comisión; 2) el informe de la Subcomisión de Energía; 3) el de la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos; 4) el de la Subcomisión Económica-Financiera; 5) el de la Subcomisión Operativa; y 6) el de la Subcomisión Jurídica-Organizativa que contempla el proyecto de Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

El diputado socialista Freddy Muñoz declara que la integración de países consumidores de petróleo parece significar un avance de los Estados Unidos en la realización de su plan para oponer ese conjunto de países a los miembros de la OPEP. Al respecto advierte que Venezuela puede enfrentar exitosamente las acciones de los países consumidores si aplica una política coherente, enérgica e imaginativa. Añade que Venezuela debe acelerar el proceso de nacionalización de la industria petrolera; promover las negociaciones de gobierno a gobierno a efectos de la venta de petróleo que permita resultados favorables a nuestro país; discutir con los países consumidores, que a la vez son vendedores de maquinarias e insumos industriales, nuevos esquemas de comercio que impliquen mejorar sustancialmente los términos de intercambio; iniciar de inmediato la preparación integral que permita en un futuro cambiar la composición de sus exportaciones de hidrocarburos, de manera que aumenten los valores de exportación; y realizar serios esfuerzos por conservar la unidad de la OPEP y lograr que ésta adopte políticas comunes en cuanto a reducción de la producción, utilización de los recursos petroleros en función del desarrollo y la ayuda a los países subdesarrollados.

Noviembre 19

El señor Kenneth Wetherell, presidente saliente de la compañía Shell, declara que ésta ejecuta todos sus programas y mantiene el mismo ritmo de trabajo como si el cese del sistema de concesiones con la nacionalización de la industria petrolera, no modificara en nada su *status* en el país.

El doctor Bernardo J. Díaz, presidente de la Mene Grande Oil Company, declara que la empresa está en capacidad de aportar recursos tecnológicos e instalaciones complementarias suficientes para iniciar en una primera etapa la explotación de crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco. Más adelante señala que los técnicos y trabajadores petroleros venezolanos se encuentran lo suficientemente preparados para enfrentar la importante tarea que en materia petrolera asumirá el país.

Ante la declaración del presidente de la compañía Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, quien señala que la nacionalización petrolera es una "ilusión óptica", el presidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, doctor Arturo Hernández Grisanti, comenta que esa declaración es un indicio de que esa concesionaria se ha trazado una determinada estrategia en relación con la nacionalización, y para realizarla aprovecha la circunstancia de que su actual máximo ejecutivo es de nacionalidad venezolana. Agrega el diputado Hernández Grisanti que da la impresión de que el cambio de presidente de la Shell tiene como objetivo poner allí una persona que no tenga inhibiciones para expresar su opinión debido a su nacionalidad.

Noviembre 21

La Liga Socialista fija su posición en torno al problema petrolero a través de sus dirigentes Agustín Calzadilla, Adelys Pérez y Jorge Rodríguez. Estos manifiestan en un documento que la crisis energética es solo real dentro del marco de la economía capitalista. Después de hacer un conjunto de consideraciones en relación al problema mundial y sus implicaciones en los hidrocarburos, se refieren a la nacionalización petrolera en Venezuela. Insisten en que los planes del gobierno no conducen a una nacionalización integral de la industria petrolera, donde se incluya la fase de comercialización. En tal sentido denuncian que este proceso es una "modificación" que sin afectar en su esencia la estructura de la economía venezolana ni las relaciones de dependencia, permite a la burguesía disfrutar de un mayor poder de decisión y obtener más elevadas ganancias.

Noviembre 22

La Comisión Presidencial de Reversión Petrolera concluye su trabajo a nivel de las plenarias al aprobar los últimos informes de las subcomisiones y dejar listo el informe que será presentado al Presidente de la República. El informe contiene el proyecto de Ley de Nacionalización de la industria petrolera.

La Agrupación de Orientación Petrolera (AGROPET) emite una declaración en la que formula observaciones a las conclusiones y recomendaciones del informe elaborado por la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos de la Comisión de Reversión por no reflejar las aspiraciones de los trabajadores, sino limitarse a sugerir las ideas de sus miembros. AGROPET plantea en sus observaciones que quienes trabajan en la industria petrolera aceptan la decisión política tomada por el Estado de nacionalizar la industria, pero tienen serias dudas en el proceso de implantación de esa decisión. Agrega la mencionada agrupación que tiene más mérito la creación de "Petróleos Venezolanos" como el primer paso en ese proceso y no la promulgación de la Ley de Nacionalización. También

señala que en una encuesta realizada entre el personal de la industria, la totalidad de los encuestados expresan su desconfianza con respecto al Estado como administrador, en general, y, en particular, como administrador de la industria básica nacional. Otra de las observaciones que hace AGROPET se refiere a que el trabajador petrolero en general sufre una situación de incertidumbre frente a los cambios radicales que se plantean, sus consecuencias en las prestaciones sociales y la suerte que pueda correr el país.

Noviembre 23

En el informe final de la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos de la Comisión de Reversión se plantean las cinco preocupaciones fundamentales de los trabajadores petroleros, que son: 1) la administración de la industria petrolera una vez nacionalizada; 2) la intromisión del ventajismo político en la industria petrolera; 3) la pérdida de los logros obtenidos en la trayectoria de sus carreras individuales dentro de las empresas; 4) que el Banco Central adolezca de mecanismos apropiados para agilizar las operaciones propias del Fondo de Prestaciones Sociales, previsto en el anteproyecto de Ley propuesto por la Comisión Presidencial, y 5) las condiciones de trabajo y de contratación colectiva e individual en la industria nacionalizada.

Los profesionales y técnicos de la CVP hacen un llamado para que en el proceso de nacionalización petrolera se tome en cuenta la experiencia y eficiencia demostrada por la citada empresa. El ingeniero Pedro A. Cova, miembro de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la CVP, expresa que esta asociación se muestra preocupada porque parece existir la intención de marginar la empresa estatal de las grandes decisiones y tareas vinculadas con la nacionalización. Afirma que esa empresa está preparada financiera, tecnológica y humanamente para asumir tal responsabilidad.

Noviembre 24

Por proposición del representante de la Asociación Pro Venezuela en la Comisión Presidencial de Reversión, doctor Reinaldo Cervini, se aprueba definitivamente la figura de la "ocupación previa", y una disposición adicional en la Ley que impide a las concesionarias demandar a la nación sobre posibles derechos que puedan argumentar sobre concesiones.

Noviembre 25

De acuerdo a las recomendaciones de la Subcomisión de Política Energética de la Comisión Presidencial de Reversión, se sugiere reducir la producción de crudos livianos y refinar una mayor proporción de crudos pesados. También se plantea la

diversificación de los mercados de exportación de hidrocarburos y el establecimiento de una política automotriz que prohíba o limite radicalmente el ensamblaje de automóviles de elevada potencia que exige un uso dispendioso del combustible.

Del informe preparado por "Marketing & Operation Research" (MORE) para la Comisión Presidencial de Reversión, sobre "actividades y opiniones del personal de la industria petrolera frente al proceso de nacionalización", se desprende una opinión sensiblemente mayoritaria de incertidumbre y pesimismo entre los 26.000 trabajadores del país incorporados a las empresas operadoras y las contratistas de éstas, por el temor a un posible estancamiento y semiparalización de la industria una vez nacionalizada; por lo difícil de evitar la participación de los políticos y la penetración de la política en el nuevo aparato petrolero nacional, lo cual, unido a la baja calidad administrativa del Estado, engendra esa incertidumbre.

Noviembre 26

La Comisión Presidencial de Reversión propone en su informe final la creación de una Autoridad Petrolera Nacional distinta y separada de la Administración Pública Venezolana, aunque sometida a las directrices de la Jefatura de Estado y adscrita a la presidencia de la República. Esa autoridad tendría un nivel político ejercido a través del Ejecutivo Nacional; un nivel de dirección empresarial ejercido a través de la casa matriz y un nivel de ejecución a cargo de las empresas.

Noviembre 27

En conferencia dictada ante directivos y expertos del Banco Central de Venezuela, el doctor Alberto Quirós, presidente de la compañía Shell, manifiesta que con la nacionalización petrolera deben asegurarse programas con los cuales se mantenga gran fluidez en el suministro de recursos financieros que necesitará la industria para futuros desarrollos. En su opinión, debe proyectarse un esquema que permita el aporte de grandes capitales a la industria para hacer programaciones a cinco o más años. Se pronuncia por una empresa mixta en el caso de la flota petrolera, sometida a la Ley de Marina Mercante, y plantea la necesidad de mantener y formar equipos humanos que sepan asimilar nuevas tecnologías.

Noviembre 28

El señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, declara que los trabajadores petroleros respaldan en su totalidad la nacionalización de la industria

petrolera, pero que les inquieta la posibilidad de que el ventajismo político interfiera las actividades de la industria. También dice el declarante que el cambio de patrono implícito en la nacionalización, exige un ajuste en la mentalidad del empleado petrolero, pues durante 30 años las concesionarias han venido gastando un promedio de 100 millones de bolívares al año en la creación de una imagen favorable a sus intereses, y esa imagen ha calado profundamente entre los propios trabajadores. Según Piñerúa, es necesario inducirle esa imagen en términos del Estado como patrono, a través de una campaña de orientación. Agrega finalmente que ofrece toda la capacidad organizativa de Fedepetrol para ponerla al servicio de esa campaña.

Noviembre 29

En el informe de la Comisión Presidencial de Reversión se señala que la próxima administración estatal de la industria petrolera deberá tomar ciertas medidas de alta política petrolera destinada a contrarrestar algunas tendencias negativas. Sin esa política, "la industria estaría expuesta a perder su vigor y hacerse incompetente para la difícil carrera de ascenso que impone la transformación económico-social del país".

Radamés Larrazábal, representante del Partido Comunista en la Comisión Presidencial de Reversión, entrega un documento en una reunión informal de dicha Comisión en el cual ese partido expone graves riesgos en cuanto al anteproyecto de Ley de Nacionalización, independientemente de los aspectos positivos del mismo. Señala que los artículos 21 y 24 reconocen importantes reivindicaciones de los trabajadores, como la estabilidad y valorización de las prestaciones contractuales como derecho adquirido, que de sancionarse definitivamente serán estimulante bandera de lucha para que el resto de la clase obrera logre parecidos beneficios. Además es significativa la recomendación contenida en el informe de la Subcomisión Laboral y de Recursos Humanos en el sentido de que los beneficios contenidos en ambos artículos sean extendidos a los trabajadores de contratistas y empresas de servicio. Advierte el PCV sobre los peligros que acechan al anteproyecto de Ley por parte de los monopolios internacionales y sus aliados internos, haciendo especial énfasis en torno al artículo 5º que descarta la posibilidad de creación de empresas mixtas o de participación del Estado con capitales internacionales o nacionales y sólo contempla la figura de los convenios operativos para dotar de flexibilidad técnica a la empresa nacional. En el documento presentado por el PCV éste rechaza el pago de indemnización, fundamentando su planteamiento en razones políticas, legales, históricas y técnicas, considerando que el Estado con base legal puede rescatar sus derechos sin

pago alguno, mediante la declaratoria de extinción de las concesiones a voluntad soberana del mismo Estado.

La Creole Petroleum Corporation presenta al Ministerio de Minas e Hidrocarburos un proyecto integral, con procedimientos tecnológicos, para desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco. La empresa estaría dispuesta a participar en ese programa dentro de las nuevas condiciones que surgirán con la nacionalización petrolera.

Informaciones suministradas por el diputado Celestino Armas, representante de Acción Democrática en la Comisión Presidencial de Reversión, revela que el Estado venezolano dará un tratamiento especial a las inversiones privadas que se hagan en las industrias de petróleo y hierro durante el lapso que va desde que se dicte el decreto o se promulgue la Ley de Nacionalización, hasta el momento en que el Estado asuma el manejo total e integral de dichas industrias.

Noviembre 30

El doctor Gustavo Coronel, directivo de la compañía Shell y representante del sector petrolero en el Directorio de Fedecámaras, expone en el Seminario de Funcionarios de Cámaras y Asociaciones de Comercio, Producción y Servicios que el gobierno nacional debe tomar algunas medidas administrativas y operativas para que la nacionalización petrolera pueda tener el éxito que los venezolanos esperan. Asimismo piensa que es necesario designar desde ya los miembros de la casa matriz para comenzar a hacer contacto con las empresas petroleras que serán revertidas anticipadamente. Insiste en la necesidad de que el gobierno establezca una cronología para la nacionalización. En síntesis expone seis puntos importantes vinculados con el proceso nacionalizador. Estos son: a) estabilidad a todos los niveles del personal de la industria; b) asegurar la optimización del ingreso petrolero por barril; c) mantener la eficiencia administrativa u operativa de las concesionarias; d) conservar los actuales recursos humanos de la industria; e) las inversiones que la industria requiere deben ser aprobadas de inmediato, sin presiones ni debates políticos, y f) tratar de desarrollar tecnologías venezolanas.

En el informe final que la Comisión Presidencial de Reversión presenta al jefe de Estado, se considera que una de las políticas fundamentales que debe adoptarse con la nacionalización petrolera es la relativa a los trabajadores, técnicos, profesionales y empleados que prestan servicios en esa industria, y no

permitir que la presión política o partidista se ejecute sobre quienes laboran en dicha industria una vez nacionalizada.

Diciembre 5

El doctor José Guillermo Andueza, ex procurador general de la República, declara que la sentencia de la Corte Suprema sobre el juicio que por insconstitucionalidad presentaron siete concesionarias contra la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, carece de trascendencia política, por cuanto el Estado anuncia la nacionalización de la industria petrolera. Sin embargo, la sentencia se debe tener en cuenta para el momento de fijar la indemnización que deba pagarse a las compañías del ramo, pues el Estado durante todo el tiempo ha consolidado un derecho de propiedad sobre los bienes sujetos a reversión, o sea, que el Estado es copropietario con las compañías de los bienes sujetos a reversión.

Diciembre 6

Antonio Ríos, secretario general de la Federación Unificada de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda, dice en el acto de instalación de la Décima Convención Regional de Trabajadores que la clase obrera organizada saluda de pie la nacionalización de las industrias del petróleo y el hierro, y le brinda todo su respaldo al Estado venezolano en esta empresa tendiente a la emancipación económica de nuestro pueblo. Asimismo alerta a los trabajadores al manifestar que "no podemos ocultar nuestros temores de que los intereses multinacionales, amalgamados con las actividades funestas de la CIA, traten de aprovechar ciertos problemas para sabotear la nacionalización y para sembrar dudas en los procesos emancipadores de los pueblos". Para concluir su intervención, propone que la Convención manifieste su respaldo público al Gobierno Nacional por su disposición de nacionalizar las industrias del petróleo y el hierro.

El ministro de Planificación, Gumersindo Rodríguez afirma en la reunión anual del Consejo de las Américas celebrada en Nueva York, que al nacionalizarse la industria petrolera de Venezuela, ésta continuará cumpliendo con normalidad sus compromisos de abastecimiento a sus mercados tradicionales. Declara que el programa nacionalizador contempla, entre sus aspectos esenciales, un plan conservacionista de los hidrocarburos para afrontar la industrialización del país.

Diciembre 7

El presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, doctor Carlos Gui-

llermo Rangel, declara en Tokio que dentro de los planes de la nacionalización de la industria petrolera. Venezuela mantendrá con seguridad y regularidad los suministros de crudo a sus mercados internacionales. Agrega el ministro de Estado que su país tratará de diversificar sus exportaciones petroleras y que Japón figura entre los países con los cuales Venezuela desea diversificar y ampliar sus relaciones comerciales.

Diciembre 8

Henry Kissinger declara en Washington que el gobierno de Estados Unidos no se opone a las nacionalizaciones propuestas en Venezuela. Dice que no habrá objeciones a ello si esas medidas incluyen las necesarias indemnizaciones a las empresas interesadas. Sostiene que las nacionalizaciones planteadas en Venezuela son fruto de las negociaciones con empresas norteamericanas, las cuales se han mostrado satisfechas con el resultado de esas discusiones.

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de la Asociación Pro Venezuela, declara en torno a la figura de la "ocupación previa" incorporada al anteproyecto de Ley de Nacionalización de la industria petrolera aprobado por la Comisión de Reversión, que aquélla es una figura jurídica contemplada en la Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social, y tiene por finalidad permitir que la entidad expropiante pueda entrar en posesión de los bienes, objeto del juicio antes de que recaiga sentencia definitiva. La ocupación previa implica el inicio de la acción judicial y no debe interpretarse como una medida extraña al procedimiento legal. Advierte asimismo que esa figura tiene la peculiaridad de que la materia litigiosa se refiere exclusivamente al monto de la indemnización, de tal manera que la expropiación de los bienes señalados no puede originar controversia ni discusión alguna en tanto dichos bienes deben pasar irreversiblemente al Estado venezolano. Señala además que al iniciarse el juicio de expropiación, una vez admitida la solicitud de la ocupación previa, en el orden práctico el Estado tiene que asumir el control absoluto de las actividades, operaciones y bienes de las empresas petroleras, pues de no hacerlo incurriría en un grave riesgo. Considera fundamental incluir esa figura en la Ley que se formule sobre la materia, ya que, en caso contrario, las demoras procesales perjudicarán en gran medida al Estado y beneficiarán a las concesionarias, las cuales podrían retrasar el procedimiento judicial. Menciona el doctor Cervini, a manera de ejemplo, algunas situaciones que pueden provocar dilaciones en el proceso de expropiación: a) recusación a los jueces de la Corte utilizando medios legales perfectamente viables; b) las empresas petroleras pueden utilizar el mecanismo de la recusación a los peritos designados; c) factibilidad legal de que las empresas, antes de iniciarse el proceso de expropiación, modifiquen su junta directi-

va por ante el Registro Mercantil, designando un representante legal de la compañía a un funcionario radicado en el exterior. Finaliza el presidente de Pro Venezuela afirmando que la ocupación previa da celeridad al proceso judicial y garantiza la autonomía administrativa del Estado.

La directiva nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP), presidida por Eleazar Díaz Rangel, emite la llamada "Declaración de Barquisimeto" en la cual fija posición sobre la nacionalización del petróleo y el hierro. Señala que el año 1975 tendrá especial significación en la economía nacional en tanto se cumplirán los procesos de nacionalización del hierro y el petróleo, aunque tales procesos están llenos de peligros y amenazas ya que significan (en especial el del petróleo) un duro golpe a las economías de las empresas multinacionales. Advierte que resulta inexplicable entonces que no exista una política estatal para crear conciencia nacional sobre la trascendencia de esos hechos. Sin esto se puede correr el riesgo de que el proyecto de nacionalización petrolera pueda ser reformado en beneficio de los sectores que han expresado su desacuerdo en favor de sus intereses y de las petroleras.

Diciembre 9

Entre los acuerdos tomados por la Décima Convención de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda figura un alerta a Venezuela entera desde las organizaciones sindicales hasta los partidos políticos, sectores empresariales y todas las esferas patrióticas, para que permanezcan atentos ante las maniobras de los intereses multinacionales y las actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos que intentarán sabotear la nacionalización de nuestras industrias petrolera y minera.

Diciembre 10

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, doctor Luis González Berti, declara en la ciudad de Bogotá que Venezuela tiene reservas probadas de petróleo para once o doce años, además de unos nuevos yacimientos calculados en 700.000 millones de barriles de crudo. Agrega que la Ley de Nacionalización no hace sino clarificar y ajustar principios que desde hace años "durmieron" dentro no sólo de la legislación minera, sino de la misma Constitución Nacional (artículo 103) y del artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos.

Diciembre 14

El presidente de Fetrazulia, señor Carlos Galué Navea, denuncia que, por su interés antipatriótico ante la nacionalización petrolera, las concesionarias es-

tán realizando un conjunto de actividades destinadas a desvirtuar el propósito, espíritu y razón de ese acto de soberanía nacional. Agrega en su advertencia que las petroleras no sólo movilizan materiales y bienes afectos a reversión, sino que también están desmantelando instalaciones, y cuando requieren reparar una máquina, motor o instalación no lo hacen adecuadamente, creando la sensación de que su interés es dejarle al país "chatarra" e instalaciones inservibles para la producción. Por estas razones —señala— se ha propuesto al Gobierno Nacional la designación de una comisión técnica que se encargue de evaluar las condiciones en que se encuentran las instalaciones y en base a ello calcular las indemnizaciones correspondientes.

El ex presidente de la CTV, señor José González Navarro, declara que las compañías petroleras y del hierro y sus socios son responsables de adelantar una serie de maniobras tendientes a enfrentar los trabajadores de esas industrias al Gobierno Nacional con miras a sabotear el proceso de nacionalización de esos recursos naturales. Ampliando su denuncia dice que las empresas y sus socios han querido crear disturbios e inclusive poner en duda la entrega de utilidades y demás prestaciones sociales de los trabajadores por parte del Estado, una vez que se nacionalicen esas actividades. Como muestra de su denuncia, González Navarro dice que los agentes de las empresas petroleras y del hierro proclaman en sus campañas la consigna de "prestaciones ya" cuando ello no está planteado perentoriamente.

El secretario general de Acción Democrática, doctor Octavio Lepage, declara a los periodistas que la decisión política sobre la nacionalización de la industria petrolera ya ha sido tomada. Agrega que sólo hay que esperar que estén listos los estudios previos indispensables para garantizar el paso de manos privadas al Estado sin ningún contratiempo.

Diciembre 15

El I Congreso de Valuación propone el establecimiento de un Catastro Minero y Petrolero, y señala la necesidad de que se realice un inventario nacional de los activos fijos de las empresas petroleras. Con respecto a la nacionalización se considera en ese Congreso que las experticias a realizarse no deben hacerlas sólo expertos contables sino también profesionales de valuación incorporados en las tareas de cuantificar las indemnizaciones a pagar.

Diciembre 16

El doctor José Herrera Oropeza denuncia en Londres las amenazas del presidente Gerald Ford contra Venezuela y los países productores del Medio Orien-

te. A su juicio, esas amenazas tienen como objetivo evitar que se cumpla el proceso de nacionalización petrolera en Venezuela. Así lo plantea en una conferencia dictada en el Latin American Front, en la Unión de Periodistas de Inglaterra y en el Imperial College de la Universidad de Londres. El doctor Herrera Oropeza afirma que Gerald Ford amenaza veladamente con una guerra petrolera para detener los procesos de nacionalización de los yacimientos, instalaciones y aun del transporte que cumplen algunos países árabes y que en Venezuela auspician las fuerzas políticas y obreras.

Diciembre 20

En el saludo de navidad y año nuevo a los oficiales, suboficiales y soldados de las guarniciones de Valencia y Maracay, el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, anuncia que para el mes de marzo de 1975 se someterá ante el Congreso Nacional la Ley mediante la cual los venezolanos tomarán en sus manos el control de la actividad petrolera. Señala asimismo que tiene que asumirse la responsabilidad de "administrar integralmente" la industria del petróleo. Dice además que se toman medidas que afectarán para siempre la vida del país y que crearán nuevas responsabilidades a las Fuerzas Armadas.

Diciembre 24

El viceministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Fernando Báez Duarte, en nombre de la Comisión de Reversión, entrega al presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, el informe sobre la nacionalización petrolera. El presidente agradece en nombre del gobierno y del pueblo a la Comisión la labor realizada y señala que a partir de ese informe podrá el Ministerio de Minas iniciar los preparativos para la trascendental decisión de nacionalizar la industria.

Diciembre 27

El diputado Virgilio Lovera, al referirse a la nacionalización petrolera, dice que las experiencias recogidas en otros países en esa materia tienen en común una reducción, en los primeros momentos, de los niveles de productividad. Esto, en su opinión, se debe a que por lo general se produce una evasión de personal técnico de la empresa nacionalizada y una explotación intensiva de recursos y bienes de capital antes de la aplicación de esa medida. Agrega que si se implantan niveles mínimos de eficiencia y niveles de productividad, la mano de obra puede ir alcanzando un óptimo nivel económico. Señala entonces que para lograr ese equilibrio deben crearse empresas mixtas.

Diciembre 30

El presidente de la compañía Shell, doctor Alberto Quirós Corradi, en su salutación de fin de año dirigida a los trabajadores de esa empresa, exhorta a éstos a mirar el futuro con gran optimismo, y a intensificar la labor cumplida de acuerdo con las exigencias de la nación. Agrega que quienes trabajan para la empresa Shell tienen el derecho a sentirse buenos ciudadanos, pues son miembros de una institución y de una organización de las cuales deben sentirse orgullosos ya que a través de la misma contribuyen al desarrollo del país.

1975

Enero 9

Directivos de la Creole Petroleum Corporation señalan que en 1975, y a pesar del anuncio del Presidente de la República de nacionalizar la industria petrolera, hará inversiones de aproximadamente 500 millones de bolívares. Agregan que serán las más altas de los últimos cinco años y las más elevadas en exploración en toda la historia de la empresa. Los señores R. N. Dolph y Guillermo Rodríguez Eraso, presidente y vicepresidente respectivamente, indican que sea cual fuere la decisión del Estado venezolano, para la empresa es deber mantener una capacidad productiva y asegurar el descubrimiento de nuevas reservas. Rodríguez Eraso señala que con la nacionalización la Creole aspira ser una empresa de servicios, aunque sólo sea para adquirir y negociar petróleo venezolano.

Enero 11

El diputado de AD, doctor Arturo Hernández Grisanti, declara que los problemas jurídicos de la nacionalización petrolera no son los de mayor entidad ni los más complejos, sino los organizativos y administrativos, es decir, los que se refieren a cómo operará la industria nacionalizada y cómo ha de realizarse el traspaso de numerosas y complicadas estructuras operativas al dominio de la nación. Agrega que una vez dada la nacionalización se constituirán tantas compañías como operadoras existan en la actualidad, bajo la coordinación de una empresa matriz, señalando finalmente que la nacionalización será integral y que las compañías operadoras no se quedarán en el país, aunque podríamos necesitarlas en el campo internacional.

Enero 12

Los ex ministros y dirigentes de Copei, doctores Hugo Pérez La Salvia, Luis Enrique Oberto y Haydée Castillo de López, manifiestan que el informe de la Comisión Presidencial de Reversión contiene un esquema muy completo en cuanto al proceso de nacionalización de la industria petrolera, a la vez que expresan su preocupación por el anuncio del dirigente de AD, doctor Arturo

Hernández Grisanti, en el sentido de que ese partido ha designado una Comisión Especial para abrir un proceso de consultas y estudio en relación con la nacionalización y sus alcances.

Enero 13

El jefe de la fracción parlamentaria de Copei, Eduardo Fernández, manifiesta que su partido considera que para la nacionalización de la industria petrolera el gobierno está en la obligación de buscar con sinceridad y con lealtad un consenso nacional y que sería muy grave que el partido oficial adoptara actitudes arrogantes en una materia de tanta trascendencia, con la pretensión de capitalizar dividendos políticos.

Se reúnen con el Presidente de la República 400 funcionarios de las empresas petroleras para darle a conocer sus opiniones sobre la industria petrolera. En la entrevista plantean la necesidad de mantener la unidad de la OPEP; la jerarquización de los recursos energéticos; la preparación de más personal técnico y profesional; la implementación de un plan de desarrollo para la energía adaptado a la nueva política de Venezuela; la creación de una flota petrolera, y mantener la política y los políticos fuera de la dirección de la industria petrolera. Los voceros de AGROPET fueron enfáticos en sus planteamientos de que ninguno de los miembros del directorio del holding debe ser "político de carrera", y de combatir severamente la ineficiencia y el burocratismo, considerando a la vez conveniente que se le dé participación a los sectores económicos privados en el período de transición de esa industria a objeto de alcanzar una cabal preparación del país para el manejo total de la industria. Estos sectores, en su opinión, podrían tener participación en la conducción de las empresas y en las utilidades, como medio de estimularlos para los fines de garantizar un proceso de dominio —gradual y sin interrupciones— de todas las áreas operativas.

El señor Humberto Vidal, uno de los ejecutivos que asistiera al Foro con el Presidente de la República, recomienda al Estado que se considere a las empresas multinacionales que operan en Venezuela como la "fuente primordial" para tecnología de apoyo ya que ellas disponen de comprobados recursos tecnológicos en el país. Agrega que, en cuanto a la forma de negociar, debe corresponder al Estado tomar la decisión más recomendable a los intereses del país. Expone además los posibles tipos de negociación de tecnología: compra simple, negociación de Estado a Estado y asociación con empresas poseedoras de tecnología. Defiende esta última alternativa y sugiere negociar con las multi-

nacionales la transferencia tecnológica en base a "paquetes" que involucren para esas empresas algo más que dinero.

El doctor D. F. Maza Zavala, al referirse al informe presentado al Presidente de la República por la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública que preside el doctor Pedro Tinoco, señala que se pretende entregar al control del sector privado la gestión de empresas de transformación y de servicio básicas en sectores esenciales de la economía como el petróleo, el hierro y la petroquímica, permitiendo la incorporación de capital privado, incluso extranjero. Dice el doctor Maza Zavala que esto constituye una fórmula peligrosa para la verdadera nacionalización petrolera, agregando que ese proyecto podría hasta frustrar el proceso nacionalizador. Similar opinión le merece el proyecto al dirigente del MAS, Teodoro Petkoff, quien indica además que aquél constituye el fundamento legal de un "verdadero atraco", al establecer que el Estado debe abrir áreas claves de la economía, entre otras hierro y petróleo, a la participación de la empresa privada.

Enero 14

El Secretario General del MAS, senador Pompeyo Márquez, declara que los documentos entregados por los técnicos petroleros al Presidente de la República entrañan un peligro para el proceso de nacionalización de la industria petrolera, pues los mismos contienen sustanciales diferencias con los planteamientos básicos del informe de la Comisión Presidencial de Reversión en la que estuvieron representadas todas las corrientes políticas y sociales del país.

El diputado socialista, doctor José Vicente Rangel, al comentar el llamado Informe Tinoco, señala que denunciará ante el Congreso Nacional que ese informe es una maniobra para revertir las empresas del Estado a manos del sector privado de la economía, y agrega que en el actual momento, precisamente cuando se expone en el país una política nacionalista con respecto al petróleo, la petroquímica y el hierro, se plantea por contradicción una política de desnacionalización de las empresas básicas del Estado.

A los planteamientos expuestos por los ejecutivos y técnicos de las empresas concesionarias sobre la no participación de los políticos en la industria nacionalizada, el doctor Jaime Lusinchi, de AD, critica duramente, señalando que esos planteamientos constituyen colonizadas observaciones acerca de los políticos y olvidan quizás que quien está nacionalizando el petróleo es un político precisamente.

Enero 15

El doctor Alvaro Silva Calderón declara que la Ley de Reversión no se cumple a cabalidad, y de haberse puesto en práctica la mayoría de las áreas ocupadas por concesiones estarían ya en poder del Estado. Señala también que nacionalizar consiste en transferir bienes y servicios en su conjunto a la nación, representada por el Estado, para que éste tome en sus manos todas las fases del negocio petrolero. Agrega que la nacionalización no sólo es un concepto jurídico, sino que además tiene un contenido económico en forma integral.

El Partido Comunista de Venezuela denuncia una escalada de presiones contra el contenido patriótico del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera que fuera redactado por la Comisión de Reversión. Los materiales presentados al presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, por dirigentes de AGROPET, así como la posición adversa de Fedecámaras, son las primeras manifestaciones de esa escalada. Asimismo es dirigido un telegrama al jefe del Estado firmado por Radamés Larrazábal, representante del PCV en la Comisión de Reversión, solicitándole ordene la publicación completa del proyecto de Ley de Nacionalización con los materiales que lo fundamentan.

El doctor Godofredo González, presidente encargado de Copei, declara que ese partido apoyará el proyecto de Ley de Nacionalización petrolera redactado por la Comisión de Reversión y se opondrá a cualquier modificación que pueda desnaturalizarlo. Agrega que su partido ha tenido algunas diferencias con el citado proyecto, pero decide apoyarlo porque en el seno de la mencionada Comisión se alcanzó un verdadero consenso entre sus integrantes quienes representaban a distintos sectores del país.

El doctor Arturo Hernández Grisanti, presidente de la Comisión Técnica de AD que evalúa el proyecto de Ley de Nacionalización, al comentar el Informe Tinoco en el cual se destaca la creación de empresas mixtas, expresa que con respecto a éstas el criterio de AD es claro, no siendo necesario en este momento constituirlas para ninguna de las fases de la industria petrolera. Expresa que el Estado venezolano operará todas las fases de la industria, y si a nivel del mercado mundial hubiera necesidad de celebrar algún acuerdo, se haría solamente como contratos de preventa de crudo y derivados de hidrocarburos. También señala el diputado de AD que su partido no tiene en este momento posición tomada en pro ni en contra del anteproyecto de Ley de Nacionalización elaborado por la Comisión de Reversión y ya entregado al Presidente de la República.

Enero 16

En carta enviada por el Secretario General del MEP, doctor J. A. Paz Galarraga, al Secretario General de Copei, doctor Pedro Pablo Aguilar, aquél propone que ambos partidos retiren sus respectivos proyectos de Ley de Nacionalización petrolera que reposan en el Congreso Nacional, y se acojan en cambio al proyecto presentado por la Comisión Presidencial de Reversión, el cual significa un patriótico esfuerzo colectivo que es necesario defender en forma activa, advirtiendo igualmente en el texto de la comunicación que la nacionalización petrolera no admite demoras, habida cuenta de que en la actualidad se ejercen fuertes presiones para desmejorar el proyecto de la Comisión de Reversión en beneficio de las empresas transnacionales.

En foro petrolero realizado en Miraflores, el señor Carlos Rengifo, miembro de AGROPET y ejecutivo petrolero, manifiesta que la industria de hidrocarburos nacionalizada debe ser manejada sin estorbos de índole partidista, sin burocracias inoperantes, sin rigideces en los estilos gerenciales y, en general, sin los vicios que lamentablemente aquejan a la administración pública, y reclama además el derecho de que los técnicos continúen manejando la industria. Odoardo León Ponte expresa por su parte la necesidad de un mayor grado de flexibilidad y no como aparece en el anteproyecto de Ley de Nacionalización que presentara la Comisión de Reversión, el cual comienza con una declaración rígida e inflexible al otorgar al Estado o a entes de su propiedad la exclusividad de toda la actividad petrolera; agrega que los desajustes pueden resultar sumamente costosos y las decisiones tomadas a la ligera podrían situar al país en el camino de la desconfianza a sus clases gobernantes; propone que el proceso de nacionalización se inicie con la creación por ley orgánica y de inmediato de la casa matriz, cuyo directorio debe estar constituido por venezolanos que presten sus servicios actualmente en esa industria, y que sean expertos petroleros o "empresarios del más alto nivel y no políticos de carrera". Héctor Riquezes hace consideraciones relacionadas con el personal que opera en la industria y señala que le preocupa los efectos que sobre el futuro personal pueda tener la politización en la industria. Pablo Reimpell se refiere en términos semejantes a quienes le anteceden, en especial sobre la "pesadilla burocrática". Rubén Chirinos aborda aspectos operativos de la industria petrolera. Gustavo Colonge habla en torno al *holding* petrolero a la vez que propone concretamente como un requisito el que no sean políticos de carrera los miembros de la casa matriz.

Enero 18

El secretario general de AD, doctor Octavio Lepage, señala que el informe y proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera presentado al presidente

Carlos Andrés Pérez por la Comisión de Reversión "es realmente un aporte de significación" para la nacionalización de esa industria. Añade, sin embargo, que el citado proyecto no es intangible y perfectamente puede ser modificado. Estas modificaciones tienden a perfeccionarlo, es decir, a mejorar su eficacia.

Enero 20

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, denuncia en México que las 14 empresas transnacionales petroleras que operan en Venezuela invierten 24 millones de dólares anualmente en el adoctrinamiento de obreros y empleados para crear una conciencia dependiente.

Enero 21

En declaraciones dadas a *El Universal* de México, el diputado socialista Freddy Muñoz, expresa, por una parte, que la nacionalización petrolera puede hacer fracasar la gestión del presidente Carlos Andrés Pérez, y, por otra, que los gerentes de las empresas concesionarias están presionando con fuerza para que fracase tal iniciativa. Finalmente el diputado advierte que AGROPET presiona para que tras la nacionalización puedan formarse empresas mixtas en las que quienes integran esa agrupación continúen siendo directivos.

Enero 22

Denuncia Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, que agentes de AGROPET que se reunieron con el Presidente de la República están difundiendo en varios campos petroleros la especie de que las prestaciones de los trabajadores las tomará el gobierno, sugiriéndoles a quienes laboran en la industria de los hidrocarburos que soliciten su orden de pago antes de que se opere la nacionalización, pues de lo contrario corren el peligro de perder dichas prestaciones. Agrega Piñerúa que la Federación que preside imparte orden a los sindicatos afiliados para que en sus asambleas rechacen enérgicamente y por todos los medios a los agentes de las compañías petroleras.

El consultor jurídico de Fedepetrol, doctor Dimas Novoa Montero, declara que los trabajadores petroleros aceptan plenamente que sus prestaciones sociales sean depositadas en el Banco Central de Venezuela para el momento de la nacionalización de la industria petrolera y que, por consiguiente, no irán a una huelga en demanda inmediata del pago de sus prestaciones.

Enero 23

En carta pública, que el Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, dirige al presidente de Fedepetrol, Carlos Piñerúa, se refiere a una decla-

ración de prensa donde éste denuncia una campaña antinacional sobre los trabajadores petroleros. Afirma el presidente en su carta que las prestaciones de los trabajadores constituyen no sólo garantía para sus años futuros y para sus familiares, sino que son también sagrado derecho protegido por la Constitución y las leyes. Advierte el Jefe de Estado que los trabajadores de la industria petrolera no deben caer en posiciones semejantes a las asumidas por quienes laboran en la industria del hierro haciéndole un serio daño a todo el proceso de asumir el control y conducción de todas las fases de la industria y el comercio de sus productos. Finalmente le cursa una invitación a esa central obrera, así como a Fetrahidrocarburos y la CTV, para un diálogo en Miraflores el 16 del próximo mes sobre la nacionalización petrolera y el papel que en ella deberán desempeñar los trabajadores.

En visita al Presidente de la República, el vicepresidente venezolano de la Exxon, doctor Siro Vásquez, anuncia que ese consorcio mantendrá una actitud positiva y flexible ante la reversión anticipada anunciada en Venezuela.

Enero 24

El doctor Rubén Sáder Pérez, ex director general de la CVP, considera conveniente una enmienda constitucional para llevar a cabo la nacionalización petrolera, como único medio de hacerla incuestionable e inobjetable. Ello además sería, en su opinión, una vía apropiada para recuperar los daños causados a la nación por el desacato de la Ley de Reversión. Insiste en que es necesario modificar la Constitución porque ésta en el artículo 126 establece el procedimiento para otorgar concesiones y con la nacionalización este régimen quedaría extinguido.

El doctor Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos, declara en la reunión de los países de la OPEP en Argel, que el gobierno venezolano tomará el control de todas las concesiones petroleras antes de septiembre de 1975. Agrega que está en cuenta de que se continuará requiriendo la ayuda de las compañías por cuanto se necesita mantener el nivel de eficiencia de la actual industria petrolera.

Enero 25

AGROPET dirige un telegrama urgente al presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, agradeciéndole los conceptos emitidos sobre esa agrupación en carta que envía al señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol. En

dicha carta el jefe de Estado asume la defensa de la citada agrupación de ejecutivos de las empresas petroleras ante las acusaciones hechas por el dirigente obrero.

El doctor Leonardo Montiel Ortega, de URD, señala que de llevarse a cabo la nacionalización petrolera dentro de los lineamientos básicos de la Comisión Presidencial de Reversión, se lograría un clima unitario en el país. De lo contrario las querellas debilitarían sustancialmente nuestra posición ante los adversarios internacionales. Asimismo agrega que el Ejecutivo, y en particular el presidente Carlos Andrés Pérez, tiene una posición más avanzada y nacionalista que algunos sectores del partido Acción Democrática.

Enero 27

El doctor J. A. Paz Galarraga, secretario General del MEP, señala que las declaraciones del Presidente Gerald Ford, relativas a no permitir un estrangulamiento de los Estados Unidos por un boicot petrolero en el cual participarían Ecuador y Venezuela, forman parte de una estrategia orientada a mediatizar, negociar y lograr una nacionalización incompleta de la industria y el comercio de los hidrocarburos.

Febrero 1

El dirigente del Partido Comunista de Venezuela y miembro de la Comisión de Reversión, señor Radamés Larrazábal, manifiesta que el senador norteamericano Church coincide con la mencionada Comisión al proponer que las negociaciones petroleras sean hechas de Estado a Estado, pero se equivoca el legislador de los Estados Unidos al creer que la gestión directa de compra por parte del gobierno derrumbará a la OPEP y hará bajar los precios del producto.

Febrero 8

Según declaraciones dadas a la prensa por el secretario general de AD, Carlos Canache Mata, las modificaciones que se le hagan al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera tendrán como objetivo perfeccionar ese instrumento legal. Advierte el mencionado dirigente que por razones políticas la oposición no presta su consenso para ese mejoramiento, pero era de todos modos una decisión sin retorno del gobierno presentarlo al Congreso Nacional. Reitera que su partido está convencido de que las modificaciones mejorarán la Ley, lo que quiere decir que, con consenso o sin él, AD modificará el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera elaborado por la Comisión Presidencial de Reversión.

Febrero 9

Arturo Hernández Grisanti, quien preside una comisión encargada de presentar al CEN de AD un estudio sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera, sostiene que el citado proyecto debe contener una norma relativa a la creación de la empresa matriz y otras relativas a la organización de lo que podría llamarse "el aparato petrolero del Estado", y agrega que tanto la empresa matriz como las operadoras no deben ser institutos autónomos sino empresas del Estado.

Febrero 13

Abdón Vivas Terán, de Copei, sostiene que cualquier modificación que desvirtúe el proceso de nacionalización integral de la industria de los hidrocarburos, tal como está contemplado, será definitivamente combatida, y se emplearía cualquier medio legal para impedir que AD mediatice la nacionalización petrolera.

Febrero 14

Fedecámaras, en comunicación firmada por su presidente, doctor Alfredo Paúl Delfino, envía al presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, su voto salvado en relación al anteproyecto de Ley de nacionalización de la industria petrolera elaborado por la Comisión de Reversión. Aparece en los diarios capitalinos y en uno de éstos con el título "La Nacionalización Petrolera no puede efectuarse como una aventura apresurada al calor de dogmatismos ideológicos". Comienza afirmando que el sector empresarial en reiteradas oportunidades ha respaldado la reversión anticipada de las concesiones petroleras por considerar que el actual momento es conveniente para tomar la decisión de que el Estado asuma el "pleno dominio" de las distintas fases de la industria. Señala que todo anteproyecto debe estar fundamentado en dos principios: a) consagrar procedimientos adecuados para que la transferencia de la industria a manos del Estado se haga de manera gradual; y b) que sea congruente con los principios y normas constitucionales vigentes. Pero el anteproyecto elaborado por la Comisión de Reversión, según Fedecámaras, no se ajusta a esos dos principios. Por el contrario, "contiene normas que crean vicios estructurales y jurídicos que traerían consecuencias perniciosas para la nación venezolana". Afirma que las normas que se establezcan deben prever que el Ejecutivo pueda tomar las medidas necesarias para mantener la industria dentro de iguales niveles de eficiencia y productividad, y que pueda lograr rápido acceso a la tecnología de esa industria. Asimismo indica que carece de un régimen transitorio que facilite y ordene la transferencia de los bienes afectos a las concesiones, en función de la capacidad de absorción que el Estado pueda crear para recibirlos sin provocar

interrupciones en el proceso productivo. Se opone al artículo que consagra la estabilidad absoluta de los trabajadores de la industria. Entre sus conclusiones señala que no pueden establecerse esquemas rígidos e inflexibles cuando el Estado no cuenta con ninguna experiencia en la materia; que la Ley propuesta es perjudicial porque en ella se establecen controles excesivos sobre las actividades del Ejecutivo. Se dice que debe evitarse un esquema autárquico que segregue a Venezuela de la interdependencia tecnológica, y critica la prohibición absoluta de participación de entes que no sean del Estado, ya que esto limita la capacidad de negociación del futuro complejo petrolero.

Febrero 15

A raíz de los planteamientos expuestos por Fedecámaras sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera son consultados algunos dirigentes políticos. Gonzalo Barrios, de Acción Democrática, desmiente al respecto que estén planteadas posibilidades de golpe de Estado en el país, señalando que la opinión de Fedecámaras es seria, procedente de un organismo serio, pero no por serias quiere decir que las aceptemos. José Manzo González, de AD, advierte que aun cuando no ha estudiado detenidamente el proyecto elaborado por la Comisión de Reversión, en principio le parece muy grave la calificación de inconstitucional que hace Fedecámaras sobre el mismo, y estima que es la misma presión que mantuvieron las compañías petroleras cuando se discutiera la Ley de Reversión. Germán Lairet, diputado del MAS, estima que los reparos que hace el organismo empresarial son de tal magnitud que de ser acogidos desvirtuarían totalmente el proyecto original de la Ley. Ramón Tenorio Sifontes, de URD, afirma que este partido rechaza la figura de la empresa mixta, que es lo que quiere Fedecámaras para que participe directa o indirectamente, el capital extranjero.

Reinaldo Cervini, presidente de Pro Venezuela, ratifica su respaldo pleno al proyecto de Ley de Nacionalización elaborado por la Comisión de Reversión. Considera que el mismo se ajusta a los preceptos constitucionales y en ningún momento puede generar vicios estructurales y jurídicos que acarreen consecuencias negativas al país. Dice que el negocio petrolero una vez nacionalizado no puede continuar en manos de las empresas petroleras. El manejo de la industria por parte del Estado implica un cambio esencial: de rentistas pasamos a país productor. Además la industria ha respondido a intereses particulares, y con la nacionalización pasará a manos del Estado.

El presidente del Congreso Nacional, doctor Gonzalo Barrios, señala con respecto al desacuerdo de Fedecámaras de que cuatro congresantes integren la

Comisión Suprema del proceso de nacionalización, que ello se debe a viejos prejuicios contra los políticos. Por su parte, el secretario general de la CTV, Augusto Malavé Villalba, expresa que en reunión que tendrán los trabajadores petroleros con el Presidente de la República mantendrán una posición de estabilidad laboral que contempla el anteproyecto de Ley de Nacionalización, y que esa es la respuesta a lo señalado por Fedecámaras sobre la materia.

Febrero 16

El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo declara que la nacionalización del hierro se la califica de "chucuta", y con respecto a la del petróleo no se sabe a ciencia cierta cómo ni cuándo será. Dice que se impone rematar la postergada operación para entrar cuanto antes en el "camino de la verdadera independencia económica" o por lo menos intentarlo. Advierte que con todas las fallas de la administración pública y de las empresas del Estado, debe entenderse que la empresa petrolera nacionalizada tendrá un espíritu distinto.

Febrero 17

Obreros y dirigentes sindicales de las distintas zonas petroleras del país, los comités directivos en pleno de Fedepetrol, Fetrahidrocarburos y la CTV acuden al Palacio de Miraflores y durante cuatro horas se reúnen con el Presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su opinión en relación a la nacionalización petrolera. El extenso documento de los trabajadores petroleros es leído por el señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol. Acompañan al Jefe de Estado los ministros de Fomento, Minas e Hidrocarburos, Trabajo, el jefe de Cordiplán y el secretario de la presidencia. Entre los puntos básicos del documento se advierten los siguientes: reserva integral por parte del Estado de la explotación, refinación y mercadeo de los hidrocarburos y sus derivados; búsqueda de nuevos yacimientos; posición de vanguardia del país ante el grupo de países exportadores de hidrocarburos; la carencia en Venezuela de una política energética integral; y necesidad de actuar en forma coordinada entre el gobierno y las centrales obreras para evitar que la nacionalización sea un engaño al país.

Ante trabajadores petroleros y dirigentes sindicales del país, el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, admite que la nacionalización puede crear muchas dificultades, pero no conviene refugiarse en éstas para negar el derecho de "tomar el manejo integral de la industria petrolera". Señala que hasta el momento Venezuela ha sido un país de rentistas que ha vivido de las divisas de procedencia extranjera, mientras que ahora debemos pasar a productores y destinar lo que se reciba en el afianzamiento de una economía propia.

Termina diciendo el Presidente que las prestaciones de los obreros están garantizadas, pues el depósito de ellas se hará antes de que se produzca la nacionalización.

Febrero 19

El doctor Ciro Añez Fonseca anuncia que Fedecámaras emitirá un nuevo documento más conciso en el cual explicará a la opinión pública su posición con respecto a la nacionalización, y en donde revelará puntos de plena coincidencia con la Comisión de Reversión. Señala asimismo que Fedecámaras actualizará su análisis en materia energética, no sólo en cuanto a petróleo y a la crisis mundial, sino en otros campos de energía incluyendo el carbón.

Febrero 22

El doctor Arturo Hernández Grisanti, de AD, califica de "primerizos" a algunos partidos que, en su opinión, nunca han hablado de petróleo y ahora critican las reformas propuestas por su partido al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera.

El presidente del Fondo para Investigación y Formación de Personal en Materia de Hidrocarburos (FONINVES), doctor José Martorano, señala en un curso gerencial de finanzas petroleras que en la industria de hidrocarburos tendrán que perfeccionarse 5.000 personas por año, tomando en cuenta que en estos momentos el país se prepara para asumir la dirección total de la industria.

El presidente de Fedecámaras, doctor Alfredo Paúl Delfino, señala que no hay nada oculto en el significado de las opiniones emitidas por esa organización con respecto a la nacionalización petrolera. Agrega que confundieron sus conceptos con "soterradas intenciones golpistas en una interpretación torcida por la mala fe". Reitera que en el voto salvado no hay nada oculto; sin embargo, hay personas que lo han tergiversado deliberadamente. Indica que Fedecámaras en su documento "ejerce un derecho y cumple con un deber".

Febrero 25

Según información oficial del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, ese despacho y la CVP están instrumentando un programa para que los concesionarios de estaciones de servicio puedan adquirir directamente de las compañías petroleras las estaciones que están operando, sin que antes sean transferidas a la empresa estatal. Una vez que el mercado esté bajo el control estatal, los propietarios de las estaciones pasarán a tener sus relaciones para suministro de gaso-

lina y derivados con la CVP. Se conoce que la decisión es tomada a nivel de Jefe de Estado.

Fedecámaras, en documento emitido para el boletín interno de esa organización, explica su posición con respecto a la nacionalización petrolera. Entre otros aspectos manifiesta su acuerdo con el anticipo de la reversión por considerar que es el momento más oportuno para asumir el control total de la industria. Estima que este paso debe darse de manera gradual acorde con la capacidad de la administración pública para absorberlo sin interrupciones. Presenta asimismo un resumen de las objeciones formuladas al proyecto de Ley de Nacionalización presentado por la Comisión de Reversión y considera que no debe atarse de manos al Estado. Propone que ese proyecto sea revisado por tratadistas de derecho constitucional y expertos petroleros con experiencia en la industria, y que deben incluirse disposiciones transitorias para facilitar el "paso ordenado" de los bienes afectos a reversión.

Marzo 2

El doctor Hugo Pérez La Salvia señala en Foro efectuado en la UCV que es más peligroso realizar una nacionalización mediatizada que permanecer como se está ahora, estimando que una nacionalización como aquélla nos ataría más a los intereses petroleros internacionales, como también ello nos ataría para proceder en el momento oportuno.

El señor Carlos Andrés Pérez, Presidente de la República, anuncia la nacionalización petrolera a las Comisiones del Congreso Nacional que le participan la instalación del segundo período de sesiones parlamentarias. Afirma que 1975 es el año de la "reivindicación suprema de la soberanía nacional", que en forma reflexiva y sin hostilidades contra nadie proclamaremos el derecho de manejar soberanamente nuestros recursos naturales. Pero la nacionalización, añade luego, no es sólo un acto de soberanía, sino además la voluntad nacional de trazar metas independientes garantizando mejores destinos al país.

Marzo 3

El doctor Gonzalo Barrios, al ser electo Presidente de la Cámara del Senado, se refiere en su discurso a la nacionalización de la industria petrolera, y señala que confía en los hombres del gobierno sin que les reconozca el derecho de defender intereses gubernamentales diferentes de los intereses nacionales y que en la consideración del problema petrolero no confundirán nación y gobierno.

Marzo 4

El presidente de AGROPET, doctor Gustavo Coronel, expresa en una reunión ampliada del Directorio de Fedecámaras, que según esa agrupación el sector privado de la economía debe participar ampliamente en las fases de transformación y manufactura del petróleo una vez que se produzca la nacionalización de la industria, aunque respalda plenamente el concepto de que la extracción del crudo debe quedar reservada al Estado venezolano.

Marzo 5

El sector privado de la economía estima que existen condiciones para lograr un consenso entre los partidos Copei y AD con respecto a la nacionalización petrolera. Considera importante Fedecámaras que Copei, sin abandonar su oposición frente a otras cuestiones del gobierno, discuta la posibilidad de llegar a un consenso en torno a esa trascendental materia y en relación al uso racional y eficiente de los grandes recursos con que cuenta el país.

Informa el Secretario General de AD, doctor Carlos Canache Mata, que su partido acuerda ampliar con todos los demás partidos las conversaciones que había iniciado con Copei para la aprobación de la Ley de Nacionalización de la industria petrolera. Agrega el mencionado dirigente que las modificaciones al proyecto original de la Ley han sido estudiadas en sus aspectos fundamentales por AD, estando este partido interesado en lograr el consenso nacional para la aprobación de tan importante instrumento.

Marzo 7

El Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV (FREUCV) emite una declaración de respaldo al proyecto de nacionalización petrolera elaborado por la Comisión de Reversión y advierte contra presiones para que el mismo sea desmejorado. En ella se dice que es necesario que el Estado asuma el manejo de todas las fases de la industria, incluida la del comercio internacional. Se considera que la nacionalización debe estar acompañada de toda una política de desarrollo, rechazando las aspiraciones de Fedecámaras y las multinacionales de participar en dichas gestiones, ya que es incongruente que quienes han actuado en contra de los intereses del país, continúen controlando la industria más importante y decisiva de Venezuela. El FREUCV exige una nacionalización total de la industria petrolera.

Marzo 9

Afirma el doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo que su mayor error en política petrolera fue el no haber hecho lo posible por nacionalizar la industria

de los hidrocarburos en 1945, ya que, en su opinión, todas las consecuencias que nos pudo traer esa medida jamás habrían resultado peores de lo que han sido.

El presidente de AGROPET, doctor Gustavo Coronel, señala que para lograr el objetivo encomiable de la nacionalización petrolera el Presidente de la República necesita un apoyo mayor de la opinión pública del que ha recibido hasta ahora. Apoyo que, según el declarante, deben dar los inmensos sectores que están calladamente de acuerdo con el jefe del Estado, pero que se inhiben de opinar en el debate petrolero dejándole el terreno libre a las voces minoritarias pero altisonantes de quienes abogan por soluciones de conflicto.

Marzo 11

De acuerdo con la nueva redacción dada por el Ejecutivo Nacional al proyecto de Ley de Nacionalización de la industria petrolera, se podrán establecer empresas mixtas. En torno a tan delicada materia se reunirán las direcciones de los partidos políticos para discernir sus respectivas posiciones frente al mencionado proyecto. Por su parte, la dirección nacional del MAS informa que iniciará de inmediato el estudio de las implicaciones y consecuencias de las reformas hechas por el Ejecutivo al proyecto de la Comisión Presidencial de Reversión y espera que el Presidente en su mensaje al Congreso explique al país la razón de esas modificaciones.

El presidente de Copei, doctor Godofredo González, declara que su partido propone una serie de consultas con el gobierno y los demás partidos de oposición, a fin de lograr el consenso que permita la aprobación por unanimidad de la Ley de Nacionalización petrolera en el Congreso Nacional. Por su parte, el Secretario General del MAS, senador Pompeyo Márquez, manifiesta que una comisión de su partido se entrevistó con el Presidente de la República y fue informada de las modificaciones hechas al anteproyecto de Ley de Nacionalización Petrolera elaborado por la Comisión Presidencial de Reversión. Agrega el senador Márquez que las reformas hechas por el Ejecutivo son negativas pues abren las posibilidades para todo tipo de asociación en cualquiera de las fases de la industria y el comercio de los hidrocarburos, lo cual parece indicar que el gobierno responde favorablemente a las presiones de Fedecámaras y las petroleras afectando el consenso logrado en la Comisión de Reversión.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, entrega el proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de

los Hidrocarburos, al presidente y vicepresidente del Congreso Nacional, doctores Gonzalo Barrios y Oswaldo Alvarez Paz, respectivamente. El proyecto pasa a la Comisión de Minas de Diputados y luego de estudiado por ésta se elevará a la Cámara para su discusión. El doctor Gonzalo Barrios cree que el artículo 5º es necesario por cuanto el país aún no posee la tecnología ni los medios de transporte requeridos, pero con toda su importancia es un artículo que pudiera "no llegar a utilizarse". Advierte que en la elaboración de ese proyecto presentado por el gobierno se toman en cuenta los puntos esenciales del anteproyecto elaborado por la Comisión de Reversión.

Marzo 12

En consulta realizada entre representantes de diversos sectores conocedores del tema petrolero, se recogen las siguientes opiniones. Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, señala que el proyecto de Ley de Nacionalización presentado por el Ejecutivo contiene importantes modificaciones respecto al que elaborara la Comisón de Reversión, con lo cual se cambian las reglas del juego que el propio gobierno estableciera cuando creó esa Comisión. Puntualiza Piñerúa sus consideraciones al referirse al artículo 1º del proyecto del Ejecutivo que contempla el diferimiento de la Ley en 120 días después del *ejecútese* presidencial. Con respecto al artículo 2º dice que se excluye la idea de que el comercio exterior de los hidrocarburos queda bajo la gestión y control exclusivo del Estado, al eliminarse la palabra "exclusivo". Añade que en el artículo 5º se hacen modificaciones que permiten al gobierno complacer el pedimento de empresas mixtas, resquebrajando el consenso sobre la materia alcanzado en la Comisión de Reversión. Concluye Piñerúa expresando que la posición de los trabajadores es de respaldo al proyecto inicial. Ramón Imery, consejero permanente de Fedecámaras, declara que coincide plenamente con lo expresado por dicha entidad en su voto salvado en la Comisión de Reversión. El doctor D. F. Maza Zavala, diputado socialista, expresa que el proyecto del Ejecutivo introduce modificaciones al presentado por la Comisión mencionada por cuanto ésta cerraba toda posibilidad de empresas mixtas, asociaciones o cualquier forma operativa similar en la actividad petrolera. Señala además que en el primero de los proyectos mencionados la figura de las concesiones no desaparece automáticamente sino que se prevé un plazo de cuatro meses dentro del cual las concesionarias seguirán operando. Igualmente se observa que en el procedimiento de expropiación se ofrece posibilidad de un convenimiento extrajudicial entre las explotadoras y el Estado. El doctor Gabriel Sarmiento Núñez manifiesta su opinión en el sentido de que se dé curso inmediato al estatuto legal que en forma definitiva declare la nacionalización, pero debe omitirse la creación de empresas mixtas, pues esto puede desvirtuar el fin que se persigue con ese

proceso: la erradicación de tutelas extrañas al interés del país. Radamés Larrazábal, del PCV, señala que el proyecto del Ejecutivo rompe el consenso logrado en la Comisión de Reversión al establecer modificaciones que contemplan el establecimiento de empresas mixtas. Américo Martín y Moisés Moleiro, del MIR, declaran también que el Ejecutivo ha roto el consenso en materia petrolera al acoger las exigencias públicas de Fedecámaras e introducir la figura de empresas mixtas en la industria nacionalizada.

A la salida de la reunión de Miraflores convocada por el presidente Carlos Andrés Pérez, los dirigentes del MEP, doctor J. A. Paz Galarraga, Alvaro Silva Calderón, Carlos Piñerúa y Siuberto Martínez, informan a los periodistas que expresaron su posición al Presidente con respecto a las modificaciones introducidas al artículo 5º, las cuales cambian sustancialmente la esencia de la nacionalización petrolera al abrir la posibilidad de empresas mixtas en todas las fases de la industria, tesis ésta que, sostenida por Fedecámaras en la Comisión de Reversión y derrotada por el resto de sus miembros, es hoy retomada por el Ejecutivo en las reformas que introduce al proyecto inicial.

El partido Social Cristiano Copei emite un comunicado donde fija posición en torno a algunas reformas introducidas por el Ejecutivo Nacional al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. En el mismo señala que algunas modificaciones sufridas por el proyecto presentado por la Comisión Presidencial de Reversión son sustanciales y lo afectan en lo fundamental. A la vez denuncia "la forma atropellante como el gobierno ha manejado una materia de tanta trascendencia nacional" e informa que Copei se reserva el derecho de fijar su criterio en el parlamento cuando se produzca la discusión correspondiente.

En su mensaje anual ante el Congreso de la República, el presidente Carlos Andrés Pérez informa que están tomadas todas las previsiones para ejercer el control integral de la industria petrolera. Afirma que el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso recoge los aspectos esenciales del anteproyecto de la Comisión de Reversión. Sólo una modificación de fondo contiene aquél, dice el Presidente, y se refiere al artículo 5º que establece la posibilidad de que entes estatales, con la previa autorización del Congreso, puedan asociarse con entes privados cuando convenga al interés público. Expresa que al aprobar el Congreso la Ley de Nacionalización, el gobierno asumirá sin titubeos la conducción de esa gran industria que "abrirá caminos a la independencia económica", y la empresa estatal mantendrá la continuidad en la operación de las compañías transnacionales, pero desde el comienzo determinará su independencia de factores extraños que puedan coartar su desarrollo.

El doctor Gonzalo Barrios, presidente del Congreso Nacional, declara el mismo día que el ministro de Minas e Hidrocarburos introduce en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Nacionalización, que está abierta la posibilidad de explotar la Faja Bituminosa del Orinoco con la ayuda de técnicos extranjeros, en tanto los venezolanos no sabemos cómo se podría explotar ese petróleo.

Señala Fedecámaras que con la modificación hecha al proyecto de Ley de Nacionalización, se sitúa ésta en posición más cónsona con las condiciones reales del país para operar con éxito esa actividad. Sin embargo, se advierte sobre la forma en que está concebida la indemnización que habrá de pagarse a las empresas concesionarias, y considera que la misma no es la más recomendable en tanto de esa manera (pagar el valor de costo original de los activos físicos, menos la amortización realizada hasta el momento de la determinación respectiva) no se toma en cuenta "la plusvalía ni tampoco los efectos de valorización por inflación".

Marzo 13

La Federación Médica Venezolana se pronuncia favorablemente con respecto a la nacionalización. Solicita que el proyecto de Ley que presente el Ejecutivo respete las ideas nacionalistas formuladas por la Comisión de Reversión. Demanda el derecho al trabajo y la estabilidad del personal profesional y auxiliar que labora en la industria.

Dirigentes de los partidos políticos de oposición opinan sobre el contenido del discurso del Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, ante el Congreso Nacional con motivo de su primer año de gobierno. El ex Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, se refiere a lo relativo a nacionalización de la industria petrolera afirmando que debe tomarse en cuenta que hay un consenso unánime en el país en que el petróleo sea nacionalizado. Pero en lo que pueden surgir graves contradicciones es en la reforma que el Ejecutivo hace del proyecto original. Esta materia, señala Caldera, debe estudiarse con mucho sentido de responsabilidad. El representante del MEP, diputado Siuberto Martínez, dice que lo lamentable del discurso presidencial es que se ratifica el tipo de nacionalización cuyo proyecto desnaturaliza la esencia misma de la nacionalización. El dirigente de AD, doctor Celestino Armas, afirma que el Presidente ha sido valiente, responsable y actúa acorde con la responsabilidad que tiene con su pueblo al hacer referencia a las modificaciones del artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera.

El Secretario General de Acción Democrática, doctor Carlos Canache Mata, afirma que el gobierno termina el ciclo de consultas con los partidos políticos de oposición en torno al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera y que las Direcciones Nacionales de esas agrupaciones políticas están estudiando dicho proyecto. Sostiene que ellos esperan que la oposición fije posición al respecto para poder opinar sobre la materia. Sin embargo, agrega que AD sigue aspirando a un amplio consenso sobre la materia en el parlamento.

La Facultad de Economía de la Universidad del Zulia declara, a través de su Decano Gastón Parra, ex miembro de la Comisión de Reversión, que rechaza el Proyecto de Ley introducido por el Ejecutivo ante el Congreso Nacional, alegando que desvirtúa de manera total el concepto de nacionalización petrolera. Indica el Decano que en la Exposición de Motivos de la Ley presentada por la Comisión de Reversión, se prohibía de manera radical la creación de empresas mixtas. Con el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional las transnacionales continuarán operando en la industria petrolera y seguirán como responsables directas del atraso económico del país. No se concibe —señala Parra— que el gobierno haya cedido ante las presiones de las petroleras las cuales proyectaron su acción a través de Fedecámaras y AGROPET.

Marzo 14

El senador Pompeyo Márquez, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), declara que Fedecámaras está "cufórica" porque, debido a sus presiones y en nombre de las compañías petroleras, ha logrado que se modifique el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Agrega que el principal objetivo de esa organización es garantizar la permanencia del capital privado en esa industria. Indica asimismo que el organismo aspira otras modificaciones vinculadas con las deducciones que la nación hará en el momento de cancelar la indemnización a las concesionarias.

La Comisión Política del Comando Nacional del MIR emite un documento donde señala que el gobierno rompe el consenso sobre nacionalización petrolera al abrir paso a las empresas mixtas y complacer a Fedecámaras, la única que en la Comisión de Reversión apoyara esa forma de asociación. Se considera asimismo que otra reforma significativa es la introducción del "avenimiento" entre el Estado y las concesionarias como fórmula para traspasar la propiedad de los activos de las compañías al Estado, relegándose a segundo término el principio constitucional de la expropiación, lo cual favorece a las empresas extranjeras del petróleo. Advierte además el MIR las modificaciones a

la representación del Congreso en la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la cual es disminuida de un 33 por ciento a un 22 por ciento, y la misma es seleccionada de una terna por el Presidente de la República y no escogida soberanamente por el Congreso. Finalmente dice el MIR en su declaración que se opone categóricamente a las reformas hechas por el Ejecutivo Nacional al proyecto de Ley elaborado por la Comisión de Reversión, y llama a una movilización y unidad nacional en contra de tales modificaciones y por la aprobación del proyecto original.

En un amplio documento, Unión Republicana Democrática propone fijar taxativamente las áreas específicas de asociación en la Ley de Nacionalización Petrolera, y agrega en tal sentido que a Venezuela le conviene: a) asociación de alguna forma, minoritaria o mayoritaria, en las refinerías de Aruba y Curazao; b) el Estado debe propiciar inversiones en complejos de refinación donde pueda programar un cambio en los patrones operativos a objeto de procesar crudo pesado venezolano o hidrocarburos de fuentes no convencionales; c) asociaciones en el transporte internacional de crudo y productos; d) asociaciones en el campo tecnológico donde la participación privada no pasa del 20 por ciento y su tiempo de duración máxima sea de 10 años; e) también son estudiables asociaciones operativas o vinculaciones en propiedad con países latinoamericanos o con países miembros de la OPEP. El documento de URD plantea también algunas objeciones en relación a los artículos 2, 5 y 9 del proyecto de Ley y cree igualmente discriminatorio que se considere sólo a Fedepetrol como representante de los trabajadores, y que se deje a los obreros el poder de escoger los bancos en los cuales deberán ser depositadas sus prestaciones.

Marzo 15

En charla dictada en el Centro de Estudios de postgrado de la UCV, Juan Pablo Pérez Alfonzo fija posición ante el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera, al cual califica de "inaceptable". Considera innecesario continuar "intervenidos por inversionistas extranjeros" cuando más bien disponemos de excedentes de divisas que no encontramos en qué gastar. Se recurre al mito de la tecnología y de la transferencia tecnológica como un "espejismo" que permita a sectores externos continuar explotándonos. El país cuenta con la tecnología suficiente para explotar el petróleo. Agrega que con los recursos que se tienen no sólo ha llegado el momento de nacionalizar la industria petrolera, sino todas las demás inversiones extranjeras que existen en el país. Dice que nada justifica que el Estado venezolano cree empresas mixtas para explotar la riqueza petrolera.

Marzo 16

El doctor Arturo Hernández Grisanti, dirigente de Acción Democrática, señala en un programa de TV que las reformas hechas por el Ejecutivo Nacional al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera son de diversa índole: unas técnica-jurídicas que probablemente no provocarán confrontaciones en el debate petrolero; otra referente a la creación del aparato petrolero del Estado. También hay modificaciones de tipo administrativo, por ejemplo la CVP queda convertida en sociedad mercantil, y en relación al artículo 5º el doctor Hernández Grisanti dice que corresponderá al Congreso y no al Ejecutivo aprobar las empresas mixtas.

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, acuerda la introducción ante el Congreso Nacional y la aprobación del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera elaborado por la Comisión Presidencial de Reversión. Asimismo se pronuncia en contra de las modificaciones hechas por el Ejecutivo Nacional al proyecto original y llama a una amplia movilización de masas en contra del artículo 5º, el cual rompe el consenso nacional al establecer las asociaciones con el capital privado.

Según informaciones dadas a la prensa por el senador Pompeyo Márquez, Secretario General del MAS, la dirección nacional de su movimiento político se reunirá de manera extraordinaria para considerar el mensaje presidencial y la reforma del proyecto de Ley de Nacionalización de la industria petrolera. Dice en sus declaraciones que el MAS tratará de alertar al país acerca de la intensidad que están adquiriendo las presiones de las compañías petroleras y organizaciones empresariales, quienes aspiran nuevas modificaciones en la Ley de Nacionalización Petrolera, en particular en los artículos que tienen que ver con las deducciones a la compensación y ocupación previa. Dice Pompeyo Márquez que en el primer caso se invoca "la salud financiera del país" para oponerse a la disposición contenida en el proyecto de Ley que estipula el no reconocimiento en las revaluaciones de los retiros en el plazo de los últimos 15 años. Agrega el dirigente masista que es grave la forma en que el presidente de la Creole se refiere al "estado de ánimo" de los trabajadores petroleros, calificándolo de "angustioso", "expectante", de "zozobra" ante el cambio de patrono.

Marzo 17

El dirigente de AD, doctor David Morales Bello, declara en Valera que el gobierno nacional no debe dar el paso de la nacionalización petrolera atán-

dose a una fórmula rígida de estatización que incluso no ha sido implementada en la URSS ni en otros países socialistas. Advierte que el gobierno cuando presenta el proyecto de Ley al Congreso, el cual contempla en su artículo 5º la formación de empresas mixtas en la industria nacionalizada, no fue objeto de presiones de Fedecámaras o de otros grupos, sino que sólo lo motivan los sagrados intereses del país. Agrega el diputado de AD que la circunstancia de establecer la previsibilidad en el artículo 5º de la Ley de Nacionalización no obliga a su aplicación.

El doctor Pedro Pablo Aguilar, de Copei, señala que importantes medios de opinión pública establecen supuestas vinculaciones entre el proyecto de asociar sectores privados a la explotación de la industria petrolera nacionalizada, con la tesis de que el gobierno "está promoviendo una nueva clase empresarial". Agrega que en la Comisión Presidencial de Reversión la opinión general fue contraria a las empresas mixtas, idea que ahora recoge el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional en su artículo 5º. Estas consideraciones las hace el dirigente del partido socialcristiano al comentar el discurso del Presidente de la República ante el parlamento venezolano.

Marzo 18

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de Pro Venezuela, expresa su criterio acerca del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Destaca que expresa su opinión como ex miembro de la Comisión de Reversión y con carácter personal. Entre otras cosas muestra su desacuerdo con el artículo 5º por considerar que las materias básicas deben estar bajo control absoluto del Estado ya que cualquier tipo de asociación entorpece la gestión de aquél en el dominio integral de la industria. El avenimiento entre el Estado y las concesionarias es procedente, pero debería pasar al Congreso para su aprobación definitiva. Considera que el Ejecutivo tiene facultad para modificar el Proyecto, pero debe hacerlo dentro de un espíritu de armonía, agotando las instancias para lograr un consenso de todos los partidos.

El partido URD da a conocer en remitido público su posición ante la nacionalización de la industria petrolera. En el mismo propone que cualquier diferencia de criterios sobre las empresas mixtas puede ser allanada "seleccionando y determinando taxativamente las áreas específicas, donde es inevitable o deseable una asociación en propiedad". Concretamente señala, entre otras áreas, la de refinación fuera del territorio nacional y el transporte internacional del crudo.

Marzo 19

Informa el presidente de AGROPET, doctor Gustavo Coronel, que esa agrupación ha venido sosteniendo conversaciones con partidos políticos y solicita ser recibida formalmente por el CEN de AD para exponerle cuál es su posición frente a la nacionalización petrolera. Agrega que lo contemplado en el artículo 5º —empresas mixtas— es algo que AGROPET ha venido sosteniendo hace meses. Asimismo señala su oposición a la creación de la Comisión Supervisora que establece el proyecto de Ley, como también advierte su preocupación porque en el citado proyecto no se habla de las prestaciones de los empleados de confianza. En esta rueda de prensa dada por el doctor Gustavo Coronel en sus oficinas del edificio de la Shell de Venezuela lo acompañan los ingenieros Raúl Miquilarena, Héctor V. Riquezes y el geólogo Francisco Moreno, directivos también de AGROPET.

Marzo 20

El presidente de la Compañía Shell de Venezuela, doctor Alberto Quirós Corradi, dicta una charla en la Asociación de Ejecutivos de Valencia. En la misma deja entrever que la nacionalización de la industria petrolera debe ser positiva, tomando en cuenta los factores profesionales importantes que pueden hacer de ese proceso lo que se desea. Señala asimismo que han habido dos tendencias aún no hechas públicas: una es la politización del *holding*, y la otra que sostiene que éste no debe tener representación política. Pero cree Quirós que el *holding* debe tener ese tipo de representación, no de cada sector partidista como si se tratase de un *pool*. Admite que el petróleo es política, y que pensar lo contrario es engañarse a sí mismo por cuanto las decisiones en materia petrolera tienen matices políticos. Afirma que la decisión de producir más o producir menos tiene un evidente cariz político.

Marzo 21

En documento público titulado "¿60 años de saqueo no bastan? Nacionalización sin empresas mixtas", el Movimiento al Socialismo (MAS) fija posición ante las modificaciones introducidas por el Ejecutivo al proyecto inicial elaborado por la Comisión de Reversión. Considera que el Presidente de la República exagera las dificultades que expone para justificar la modificación del artículo 5º. Estima más conveniente los contratos operativos en vez de las empresas mixtas, y es categórico al señalar que no contribuirá a aprobar disposiciones legales que faciliten "una sustancial reducción de los alcances de la nacionalización que hoy es posible".

El doctor Pedro Tinoco señala que el Proyecto de Reforma Administrativa

propuesto por la Comisión que preside, permitirá que el Estado mantenga el control sobre las empresas básicas existentes en el país y las nuevas por crearse. Señala que el Estado será quien defina la política sobre petroquímica, por ejemplo, establezca las plantas que se reservará por su condición de básicas y cuáles serán las de transformación posterior. Afirma que ese proyecto nada ha tenido que ver con los proyectos de Ley de Nacionalización de la industria del petróleo y el hierro.

El Presidente de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez, ratifica en México que el artículo 5º se mantendrá, y agrega que si existen fórmulas sustitutivas a lo planteado en ese artículo, ello es labor que corresponde al Congreso. Por otra parte, el Presidente de México, señor Luis Echeverría, reafirma su respaldo a la política de Venezuela de nacionalizar la industria petrolera.

Marzo 22

Declara el Presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, que esa central obrera ratifica su posición de apoyo a una nacionalización integral de la industria petrolera y confía en que los partidos mayoritarios en el Congreso aprueben el proyecto de Ley elaborado por la Comisión de Reversión sin desmejorarlo en su contenido, el cual además es expresión de un consenso nacional, excepción hecha de Fedecámaras. Agrega Piñerúa que todos los sindicatos petroleros manifiestan ante el Congreso Nacional su solicitud de aprobación de ese proyecto y rechazan a la vez cualquier enmienda que conlleve la presencia de las compañías multinacionales en la industria.

Leonardo Montiel Ortega, de URD, declara que el espíritu del artículo 5º no será eliminado, sino que se modificará para fijar áreas de asociación. Señala que la proposición urredista no choca con el espíritu del proyecto presentado por el Ejecutivo, ya que en el "ánimo del actual gobierno no ha privado jamás el criterio de una nacionalización disfrazada". Considera además que la fórmula propuesta por ellos no representa una atadura para el Estado ni una entrega del negocio petrolero a lo que temen los partidos de oposición.

No está planteada la eliminación del artículo 5º sino su modificación, dice Guido Grooscors, ministro de Estado para la Información. AD estudia la proposición de URD sobre determinación de áreas para la participación de empresas mixtas, señala Carlos Canache Mata. Agrega éste que el presidente Pérez en su discurso ante el Congreso Nacional señala que se abre la posibilidad para que en el curso del debate parlamentario se presenten fórmulas sus-

titutivas, por parte de los diversos partidos que intervendrán. Lo importante —dice Canache—, es que el Estado no quede con las manos atadas en relación al manejo de la industria nacionalizada.

El Partido Socialcristiano Copei presenta un documento en el cual razona su oposición a las modificaciones introducidas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Nacionalización redactado por la Comisión de Reversión. En el documento de siete razones Copei se opone a las empresas mixtas porque considera que contribuirían a la formación de una nueva oligarquía petrolera. Señala además que no tiene ninguna "animadversión" al capital extranjero, menos aún al nacional, pero por tratarse de una riqueza (el petróleo) que pertenece a todos los venezolanos, la gestión absoluta de la industria debe estar en manos del Estado. Se indica asimismo en el documento que si la administración directa del Estado no garantiza la "eliminación del sectarismo partidista" y el mejor alcance de eficiencia técnica, se corre el riesgo de trastocar incluso el "equilibrio democrático".

Marzo 24

Carlos Canache Mata, de AD, señala que los temores y reservas de Copei sobre las reformas introducidas al proyecto de Ley de Nacionalización son infundados. Se refiere a las reformas y advierte que se hicieron las "indispensables". Considera que la opinión de Copei y otros partidos de oposición al señalar que la asociación del Estado con la empresa privada desnaturaliza el proceso nacionalizador, no es cierta si ello se analiza a la luz de la misma Ley. Dice que esta contingencia está prevista en el artículo 1º donde se consagra de manera integral la nacionalización de la industria.

El dirigente de Copei, Edecio La Riva Araujo, declara que el fracaso de la nacionalización o el aprovechamiento ventajista del proceso por parte de grupos económicos vinculados a AD, puede plantear un "futuro trágico para la democracia y la liquidación de la administración civil" en Venezuela.

Marzo 26

La Unión Patronal Venezolana de Comercio, en vista del grado tan alto en que tanto el presente como el futuro del país dependen del petróleo, señala como conveniente que en el anteproyecto presentado se tomen las previsiones para que en un momento determinado y con la autorización del Congreso se permita la participación del sector socioeconómico que posee la experiencia en la operatividad de la industria. Indica, entre otras cosas, que no se debe limitar la gestión del Ejecutivo supeditándola a la acción directa del Poder Legislativo.

Se solidariza con la preocupación de Fedecámaras ya que más que la defensa de intereses parciales "su posición obedece a un sano nacionalismo".

Marzo 29

El presidente de la Creole Petroleum Corporation, R. N. Dolph, declara que 1974 fue un año difícil para esa compañía en tanto las utilidades sufrieron una baja y el nivel de operaciones declinó. Agrega asimismo que la nacionalización de la industria petrolera venezolana presenta un panorama incierto para la empresa. Sin embargo, advierte que los efectos que ella ocasione no pueden ser procesados hasta tanto no se promulgue la legislación respectiva. Estima que la experiencia de la Creole, sus recursos humanos especializados y su avanzada tecnología, pueden tener influencia en el futuro de la industria venezolana.

Abril 1

El presidente del Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV, Alexis Ortiz, declara que los estudiantes, dada la importancia de la materia, deben ser informados sobre la nacionalización petrolera. Expresa que los sectores interesados en sabotear ese proceso se aprovechan de la ignorancia de las masas acerca del problema para crear confusión y provocar temores infundados entre los trabajadores. Agrega asimismo que es un deber histórico de cada estudiante insurgir contra las empresas mixtas y luchar por una nacionalización integral.

El nuevo embajador de Estados Unidos en Caracas, Harry W. Shlaudeman, declara que la nacionalización petrolera en Venezuela no afectará el abastecimiento de petróleo a aquel país. Señala que las relaciones entre ambos países siguen siendo buenas con algunos "malentendidos normales entre aliados".

El Secretario Juvenil Nacional de AD, Héctor Alonzo López, justifica el artículo 5º que contempla la participación de compañías transnacionales en la actividad petrolera nacionalizada. Manifiesta que el país no está en capacidad de asumir el control total de la industria. Se apoya para afirmarlo en el elemento tecnológico. Señala que el presidente Carlos Andrés Pérez al introducir la modificación lo que hace es tomar una previsión que es fundamental en un negocio tan complejo y difícil.

Abril 2

Se informa que una delegación de parlamentarios por iniciativa del Presidente del Congreso, doctor Gonzalo Barrios, viajará a los países árabes en

busca de experiencias que puedan ser utilizadas en el proceso de nacionalización petrolera venezolana. La delegación está integrada por Abdón Vivas Terán, de Copei; Manuel Peñalver, de AD; Freddy Muñoz, del MAS; Ramón Tenorio Sifontes, de URD; Ovidio González, del MEP. Viajan además Andrés Sosa Pietri, senador del MAS y Fernando Báez Duarte, viceministro de Minas e Hidrocarburos.

La Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados inicia el estudio sobre la Ley de Nacionalización Petrolera. Las sesiones las preside el doctor Celestino Armas en ausencia de Arturo Hernández Grisanti. Reconoce el doctor Armas que una de las fórmulas que merece especial atención es la presentada por URD con la cual se fijan áreas para la constitución de empresas mixtas.

Abril 4

El doctor D. F. Maza Zavala, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, manifiesta su total rechazo a la creación de empresas mixtas. Maza Zavala señala además que el Consejo de la Facultad decide por unanimidad apoyar el proyecto de Ley elaborado por la Comisión de Reversión. Considera ese Consejo que las empresas mixtas constituyen la continuidad esencial de las características y los mecanismos de las concesiones y los contratos de servicio. Aquellas empresas conforman una nacionalización disfrazada dentro del orden de la dependencia estructural del país. Indica que la crisis energética, la categoría del petróleo como productor de la economía mundial, la necesidad que tienen los países más poderosos de petróleo, las facilidades de comercialización, los abundantes recursos financieros y económicos de que dispone el país, son factores que contribuyen a la decisión de nacionalizar integralmente la industria.

El Movimiento al Socialismo (MAS), en respuesta a las declaraciones dadas por Héctor Alonzo López, de la juventud de AD, señala, según declara Orlando Fernández Medina, que Venezuela sí está en capacidad de manejar su industria petrolera. Advierte que el 98 por ciento del personal incorporado a esa actividad es venezolano, y el 65 por ciento son técnicos. Además el Estado tiene facultades para contratar o adquirir toda la tecnología que requiera. Continúa señalando que la modificación del artículo 5º sólo sirve para enriquecer a unos pocos capitalistas criollos y para mantener la dependencia del país con respecto a las empresas multinacionales. Indica que para nadie es un secreto que la modificación de ese artículo ha sido una concesión de AD a Fedecá-

maras, a AGROPET y a las compañías petroleras debido a las presiones ejercidas por éstos.

Abril 5

El doctor Godofredo González, de Copei, señala que este partido no ha variado su posición frente a la modificación del artículo 5º. El representante de URD, Leonardo Montiel Ortega, anuncia que se iniciarán reuniones con Copei para lograr un acuerdo sobre la nacionalización, y señala que no aprobará la modificación del Ejecutivo si no queda establecido dónde estarán localizadas las áreas de asociación. Por su parte el doctor D. F. Maza Zavala considera que el proyecto debe introducirse al Congreso tal como lo aprobó la Comisión de Reversión. Se muestra en absoluto desacuerdo con el artículo 5º ya que el Estado debe poseer la reserva exclusiva de todas las fases de la industria y el comercio de los hidrocarburos.

Abril 6

En clase magistral dictada a estudiantes de la Escuela de Administración Pública, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo afirma que la próxima nacionalización petrolera, cualquiera sea su amplitud y efectividad, no determinará un mejor uso de esa riqueza nacional. Para alcanzar un cambio tiene que fundamentarse en la fijación de un "techo infranqueable de ingresos de esa fuente de liquidación del petróleo". Se refiere a la comercialización como uno de los problemas que se han planteado al considerarse la nacionalización petrolera. Indica que aquélla tal como es expuesta por los mercaderes culminando en las actividades de las trasnacionales, debe apartarse por completo de una industria nacional.

Abril 7

Es presentado en la Cámara de Diputados para su discusión, el proyecto original de Ley de Nacionalización Petrolera elaborado por la Comisión Presidencial de Reversión. Está firmado por 22 parlamentarios de los partidos MEP, FDP, PCV, MIR e independientes perezjimenistas, por ex miembros de la Comisión de Reversión entre los que figuran D. F. Maza Zavala, Alvaro Silva Calderón, Aníbal Martínez, Carlos Piñerúa, así como también José Vicente Rangel y Luis Beltrán Prieto Figueroa. El MAS sostiene que la presentación de ese proyecto retarda el debate sobre la nacionalización, por ello no suscribe la presentación del mismo.

Abril 8

Fedecámaras muestra confianza en que las decisiones sobre nacionalización se tomarán de acuerdo con criterios técnicos y en "defensa de los intereses na-

cionales". Considera que la proposición de que el sector privado participe en las actividades de la industria nacionalizada, es un "buen aporte" para lo que habrá de decidir el Congreso. Fedecámaras señala que a través de las Comisiones de Recursos Energéticos y de Consultoría Jurídica analiza el proyecto de Ley de Nacionalización.

El doctor Jesús A. Paz Galarraga, Secretario General del MEP, afirma que al modificar el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización, el Ejecutivo no hace más que complacer a las transnacionales. Explica que en carta que posee ese partido, proveniente de una compañía petrolera que opera en Venezuela, se prueba que desde hace tiempo las empresas plantean al gobierno su participación en las fases del negocio petrolero a través de empresas mixtas. Dice que en la carta se considera la indemnización por mutuo consentimiento, sin llegar al inicio de la expropiación, además de que la compañía espera intervenir en el Golfo de Venezuela, Lago de Maracaibo y en la Faja Petrolífera del Orinoco. Con respecto a mercadeo internacional se propone un contrato a largo plazo.

Con la asistencia del presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y representantes de todas las fracciones parlamentarias, se reúne la Comisión de Mesa del Congreso para decidir sobre el proyecto a discutir en relación a la nacionalización petrolera. Se acuerda considerar como base de discusión el proyecto introducido por el Ejecutivo Nacional. El trabajo se inicia con un conjunto de audiencias públicas para oír la opinión de instituciones y personalidades sobre la materia. No se discuten otros proyectos de Ley para evitar, según proposición del MAS, demoras en la aprobación.

Abril 9

Según el Movimiento Electoral del Pueblo, el gobierno negocia en secreto la nacionalización con las empresas petroleras. Esta afirmación se fundamenta con la publicación que hace el MEP de una carta de la Mobil, firmada por el presidente de esta compañía, señor R. A. Howe, dirigida al Ministerio de Minas e Hidrocarburos y donde se detallan programas de colaboración posterior a la nacionalización de la industria.

Abril 10

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos fija posición con respecto a la carta enviada a ese despacho por la empresa Mobil y publicada por el MEP. Señala que no existen conversaciones secretas entre ese Ministerio y las com-

pañías petroleras. Ese organismo ha recibido verbalmente o por escrito proposiciones y ofertas distintas de las concesionarias y de otros grupos para cooperar o asociarse con el Estado cuando la industria pase al control de éste. Tales propuestas son estudiadas por una comisión y presentadas oportunamente al Presidente de la República. Es obvio que esas ofertas no pueden hacerse públicas por cuanto su propia naturaleza y los procedimientos administrativos no lo aconsejan. Expresa que en su oportunidad se darán a conocer las proposiciones que acepte el gobierno, las cuales en todo caso estarán enmarcadas dentro de normas que dicte el Congreso Nacional.

Ante la natural expectativa que despierta en el país la carta enviada por la Mobil Oil Company de Venezuela al Ejecutivo Nacional, el gerente de Relaciones Públicas de esa empresa, señor Félix Barreto, en nota entregada a los medios de comunicación, declara que en efecto ha cursado una comunicación al organismo competente del gobierno, donde sugiere fórmulas preliminares para ofrecer su aporte y colaboración al futuro desarrollo petrolero del país. Se alega en la mencionada nota que su proceder es normal y no ocultan la aspiración de seguir prestando servicios, luego de que se produzca la nacionalización petrolera.

El doctor Pedro Tinoco declara en Punto Fijo que la nacionalización petrolera no significa un divorcio tecnológico con los países desarrollados ni tampoco una separación brusca con los mercados internacionales. Dice que la nacionalización no implica que el Estado venezolano no pueda celebrar acuerdos con los países dueños de tecnología que no existe en el territorio nacional.

El doctor Gonzalo Barrios considera que no existe "nada malo" en el documento dirigido por la Mobil al ministro de Minas e Hidrocarburos. En su opinión lo malo sería un documento comprometedor del Ministerio para la Mobil. Advierte finalmente que los gobiernos reciben muchos proyectos de particulares y de otros gobiernos.

Abril 11

La Asociación Bancaria de Venezuela señala que debido a la pérdida de impulso que confrontará la industria petrolera venezolana con la nacionalización, fundamentalmente por la reducción de la producción, al país se le plantea la necesidad inaplazable de iniciar un amplio proceso de industrialización. Con respecto al artículo 5º expresa que el Estado conserva el control de las decisiones que se adopten conforme al convenio en cuestión.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, informa que ese despacho efectúa reuniones de trabajo con las empresas Creole y Shell para determinar el monto de las inversiones que es necesario hacer en la industria nacionalizada para 1976. Las mismas se calculan en 2.000 millones de bolívares. Señala además que con esas revisiones puede conocerse los proyectos que las empresas tienen para los próximos años.

Francisco Mieres, profesor de la Universidad Central, declara que la nacionalización que conviene al país es aquella que se traduzca en beneficios para el pueblo y no para una minoría privilegiada. Sostiene que la nacionalización como la que se plantea ha "perdido su carga revolucionaria" porque se puede efectuar dentro de los marcos del subdesarrollo capitalista. De aprobarse la Ley con las modificaciones hechas por el Ejecutivo sería una nacionalización "pentacontaminada" al servicio de los grupos económicos nacionales y extranjeros. Se muestra partidario en que puedan celebrarse contratos o convenios operativos cuando así lo requiera la industria nacionalizada.

Abril 12

En el diario londinense *Financial Times* aparece un artículo sobre la nacionalización petrolera en Venezuela y en el cual se dice que el país cuenta con personal especializado que domina las técnicas de producción y refinación, pero le falta conocimiento técnico para explotar comercialmente la Faja del Orinoco. Se señala además que las compañías han aceptado de "buen grado" la nacionalización en Venezuela, aun cuando algunas de ellas dudan de la capacidad del Estado para administrar con eficiencia la industria nacionalizada.

Abril 13

El primer Ministro de Trinidad-Tobago, Eric Williams, declara en Puerto España que el Presidente de Venezuela cambia completamente de opinión sobre la nacionalización petrolera. Señala que el Congreso de Venezula recibe enmiendas de la Ley de Nacionalización que favorecen acuerdos de asociación con empresas privadas. Los venezolanos —dice Williams— conservarán las compañías bajo convenios.

Ante la afirmación del diario londinense *Financial Times* de que Venezuela no está preparada técnicamente para explotar la Faja del Orinoco, y la posibilidad de una intervención militar si la industria es nacionalizada, opinan algunos dirigentes políticos. Al respecto, Germán Lairet, del MAS, declara que

aquél es siempre el argumento esgrimido por quienes se oponen a la nacionalización, y en relación a la intervención militar considera que no es más que una amenaza encubierta. Similar opinión expresa Luis B. Prieto Figueroa, del MEP, cuando señala que es la "repetición histórica de un eterno alegato", y que se pretende con ello crear un sentimiento de inferioridad. Eduardo Fernández, de Copei, dice que ello es reflejo de una mentalidad colonialista. César Rondón Lovera, independiente, advierte que esas observaciones pueden comprender intento de subversión del orden constitucional, y los sectores monopolistas no descartan esa posibilidad. Angel Borregales, de la Comisión de Defensa del Senado, considera que la nación está consciente de que la nacionalización es un reto común del cual participan las Fuerzas Armadas, las cuales están claras de lo que establece la Constitución.

Abril 14

Cuba y Guyana emiten un comunicado conjunto y, entre otras cosas, expresan su respaldo a la medida de nacionalización petrolera que adelanta Venezuela. Ello se realiza en ocasión de la visita a Cuba del Primer Ministro de Guyana, Forbes Burham, por invitación de Fidel Castro.

Abril 16

La Asociación Pro Venezuela se presenta ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados para exponer su opinión sobre el proyecto de Ley de Nacionalización de la industria del petróleo. Reinaldo Cervini, Presidente de la Asociación, se pronuncia por la "ocupación previa" de los bienes que serán objeto de la expropiación, en caso de no llegarse a un acuerdo con respecto al monto de la indemnización. Pro Venezuela presenta modificaciones al proyecto de Ley del Ejecutivo. Propone un artículo 5º que contempla que las actividades sólo podrán ser ejercidas por el Estado o por entes de su propiedad; pero incorpora un artículo 6º que dice: "por vía de excepción podrá el Ejecutivo Nacional, o los mencionados entes estatales celebrar convenios de asociación con entes privados". Por su parte, Fedecámaras muestra su acuerdo con el artículo 5º presentado por el Ejecutivo, y expone elementos contrarios a la estabilidad de los trabajadores expresada en el artículo 24º. El pronunciamiento de ese organismo en favor de eliminar la estabilidad de los trabajadores es rechazada por todos los miembros de la Comisión. El presidente de Fedecámaras declara que el Ejecutivo modifica el artículo 5º "oyendo la mayoría silenciosa" del país.

En declaración emitida por Domingo Alberto Rangel, Pedro Duno y J. R. Núñez Tenorio señalan que la nacionalización va a ser colocada bajo el

signo de la farsa. Dicen que es evidente que el gobierno venía negociando a espaldas de la nación y de su partido, el orden que habrá de imperar cuando se produzca la nacionalización. Agregan que la reversión "chucuta" para nadie puede ser un misterio ya que responde a la estrategia que a nivel mundial se ha trazado el capitalismo y dentro de la cual se inserta la política del gobierno venezolano. Advierten finalmente que, dentro de la crisis actual del imperialismo, las fuerzas dirigentes de Europa y Norteamérica requieren de un orden petrolero que, aun cuando acepte la nacionalización de los yacimientos en países productores, permita que las grandes empresas mantengan los mecanismos de control.

Abril 17

El Contralor General de la República, doctor José Muci Abraham, presenta al Congreso Nacional un amplio informe sobre la nacionalización petrolera. Advierte que ésta alterará la fisonomía del Estado venezolano pasando éste de perceptor de tributos a generador de sus propios ingresos. Supone que quienes han analizado la nacionalización consideran que el Estado, sin asumir riesgos, tiene una participación en las utilidades petroleras cercana al 98 por ciento. Con respecto al artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización, expresa que es inconstitucional por cuanto no tiene cabida la empresa mixta en una industria reservada al Estado (artículo 1º).

Abril 18

El Presidente del Congreso, doctor Gonzalo Barrios, opina que el documento del Contralor es más una opinión personal que como Contralor. Godofredo González, de Copei, Siuberto Martínez, del MEP, y Pompeyo Márquez, del MAS, comparten las observaciones del Contralor sobre el artículo 5º en tanto se oponen a la creación de empresas mixtas, las que en el documento son consideradas inconstitucionales.

Abril 19

El doctor Raúl Prebish, Secretario General de la UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Comercio, declara que la nacionalización del petróleo en Venezuela es vista con mucho interés por toda América Latina. La afirmación la hace al finalizar una entrevista en compañía del doctor Felipe Herrera, asesor de la UNESCO, ambos invitados por el gobierno venezolano para conversar en relación al trabajo que se realiza en el SELA.

Diversas opiniones de los distintos partidos políticos se conocen a raíz del documento del Contralor General de la República, doctor Muci Abraham,

que contiene observaciones en torno a la nacionalización de la industria petrolera. Por URD opina Leonardo Montiel Ortega señalando que difiere de la posición del Contralor en lo que respecta al artículo 5º, alegando que la nación no debe establecer empresas mixtas en áreas de extracción petrolera normales por razones de interés nacional, y no por razones inconstitucionales, como señala el Contralor. Dice Montiel Ortega que las empresas mixtas no deben establecerse en las áreas internas, pero hay otras externas que escapan a nuestra soberanía como las de refinación en Aruba y Curazao. Los dirigentes nacionales del MIR, Américo Martín, Moisés Moleiro y Rómulo Henríquez se solidarizan con lo planteado por el contralor Muci Abraham mediante un telegrama que le envían. Por otra parte, Radamés Larrazábal, del PCV, considera que el documento está tan hábilmente redactado que a veces se producen dudas de si la excesiva fundamentación jurídica sobre la nacionalización corresponde exactamente al objetivo de ésta. Expresa que el PCV ha estado y estará siempre contra las empresas mixtas.

Abril 21

En las jornadas de análisis socialista de la actual gestión de gobierno que realiza el MAS la comisión de nacionalización de recursos minerales acuerda denunciar el proyecto del ministro de Estado para la Planificación, Gumersindo Rodríguez, en el sentido de estimarse una inversión de 26.000 millones de bolívares para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco por asociación del capital privado nacional con las compañías petroleras.

Abril 22

Ante la Subcomisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados se presentan directivos del Ministerio de Minas. Opinan sobre exploración, refinación y comercialización y concluyen señalando que el artículo 5º no sólo es necesario sino imprescindible. En cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Nacionalización, el directivo Guillermo Altuve Williams sostiene que ello es relativo y recuerda que cuando fue aprobada la Ley de Reversión demandaron porque no era constitucional y la Corte Suprema falló por todo lo contrario. El director general del despacho, doctor Hernán Anzola, expone sobre la posición de Venezuela en el área de refinación y justifica el artículo 5º.

Integrantes del Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV, acompañados del profesor Héctor Malavé Mata, exponen ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados su posición ante la nacionalización petrolera. Alexis Ortiz, presidente del FREUCV, declara que los estudiantes están contra las empresas mixtas, y continuarán estándolo con respecto a todas las proposiciones

que permitan a las empresas multinacionales seguir participando directa o solapadamente en la industria. El doctor Héctor Malavé Mata afirma que todas las fases de la actividad petrolera, incluida la de comercialización, deben ser asumidas plenamente por el Estado, a través de una nacionalización que garantice la posibilidad de utilizar el petróleo para el desarrollo independiente de Venezuela.

Abril 23

El señor B. R. Dorsey, presidente de la Gulf Oil Corporation, en su informe a la Asamblea Anual de Accionistas, cita una serie de problemas, entre los cuales hace mención a Venezuela y Kuwait, donde se desarrollan planes de nacionalización de la industria petrolera. Dice el presidente de la Gulf que la inminente nacionalización de las propiedades de esa empresa en Venezuela y otras medidas que afectan la compañía en otras partes del mundo presentan un panorama sombrío.

En Encuentro Nacional de Estudiantes de todas las universidades del país, convocado por el Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV, se acuerda rechazar de manera enfática las modificaciones hechas por el Ejecutivo Nacional al Proyecto de Ley de Nacionalización. Proponen insurgir contra las empresas mixtas por cuanto constituyen la negación de la nacionalización integral; exigir que todas las fases de la industria sean asumidas plenamente por la nación y alertar sobre los intentos de Fedecámaras contra la nacionalización petrolera.

El doctor Guillermo Altuve Williams, asesor especial del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, se presenta ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados y expone que es necesario que las empresas que en la actualidad procesan nuestro petróleo, sigan operando con el objeto de que se responsabilicen de los pagos de deudas y de la revisión de los bienes. En su opinión, las ventas de petróleo deben ser por contrato y a través de intermediarios que sepan colocar bien el crudo en los mercados internacionales.

Abril 24

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la CVP asiste a la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados para exponer sus planteamientos en torno a la nacionalización de la industria petrolera. Señala que no es absolutamente necesaria la creación de empresas mixtas para alcanzar el objetivo de una nacionalización integral de la industria; afirma que la tecnología se puede adquirir

sin necesidad de tales empresas por cuanto puede ser negociada, y considera que la CVP debe continuar como empresa integrada durante el mayor tiempo posible en la etapa de transición prevista en el proceso de nacionalización petrolera.

AGROPET presenta ante la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados un documento con un cuerpo de observaciones a la casi totalidad del articulado de la Ley de Nacionalización Petrolera. Una vez leídas las observaciones a 24 de los 27 artículos del proyecto de Ley, los diputados Angel Sánchez Bernal, de Copei; Antonio José Urbina, del MAS; Celestino Armas, de AD; Alcides Rodríguez, del PCV y Julio Fuentes Serrano, de URD, les preguntan a los directivos de esa asociación si creen sinceramente que con las proposiciones entregadas mejoran el proyecto de Ley, criticándoles que coincidan con Fedecámaras y defiendan a las empresas petroleras. Antonio José Urbina, del MAS, es el más categórico al expresar que AGROPET, desde su aparición, siempre ha defendido los intereses de las transnacionales, apoyándose, entre otras consideraciones, en que en el artículo primero AGROPET propone un plazo indefinido en vez de 120 días; en el artículo segundo tildan de "redundante" lo que el legislador quiere precisar en materia de comercialización; en el artículo cuarto insisten en mantener las compañías en vez de las negociaciones de Estado a Estado; en el artículo quinto insisten en las empresas mixtas apelando a la dependencia tecnológica. Por su parte, el doctor Celestino Armas, de AD, manifiesta que no queda muy convencido de los argumentos de AGROPET sobre la dependencia tecnológica. Ante las diversas intervenciones de los diputados, el presidente de AGROPET, Gustavo Coronel, niega la participación de Fedecámaras en sus argumentos.

El diputado Américo Martín, del MIR, señala que a la luz de las áreas donde serán establecidas las empresas mixtas, según las informaciones del Ministerio de Minas, se confirman plenamente las advertencias que hiciera su organización política en torno a la materia, señalando que las áreas de refinación y comercialización son las más rentables y desde las cuales se puede dirigir estratégicamente la política de la industria petrolera. Por ello se opone de manera categórica al artículo 5º presentado por el Ejecutivo Nacional ya que éste prevé la intervención en las áreas mencionadas por parte del capital privado. Considera, por otro lado, que la destitución de Fernando Báez Duarte de su cargo de viceministro de Minas e Hidrocarburos obedece a que éste declarara que la refinación del petróleo no se entregaría a la "voracidad de las empresas mixtas".

Abril 25

En la exposición que hace Leonardo Montiel Ortega, de URD, ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, señala que las asociaciones para colocar el crudo en los mercados internacionales y para lograr la tecnología capaz de explotar comercialmente la Faja del Orinoco no sólo son "necesarias, sino inevitables". Agrega que la desconfianza que crea la amplitud del artículo 5º queda obviada al aceptar el Presidente de la República la posibilidad de señalar específicamente los casos en que se establecerán las "asociaciones especiales".

El ingeniero Orlando J. Castillo, miembro de AGROPET, dirige una comunicación al director del diario *El Universal,* doctor Luis Teófilo Núñez, en la cual advierte que esa agrupación es optimista sobre el logro de una nacionalización petrolera sin traumas, pero tiene ciertas aprensiones con respecto a la manera en que se va a administrar la industria nacionalizada, en vista de los problemas que viene confrontando la Administración Pública.

Abril 26

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) presenta un manifiesto con motivo del primero de mayo, y plantea la necesidad de que los trabajadores venezolanos impulsen una clara estrategia para el enfrentamiento con las multinacionales, que no sólo continúan impunemente el pillaje y el saqueo de nuestras riquezas, sino que conspiran y manipulan internacionalmente contra el gobierno venezolano y otros países latinoamericanos.

El diputado Ramón Tenorio Sifontes, integrante de la Comisión de Diputados que viajó a los países petroleros árabes, declara que la coyuntura internacional es favorable para la nacionalización petrolera por cuanto ésta cuenta con la solidaridad de los países de la OPEP, los cuales ofrecen su experiencia y ayuda tecnológica. Considera asimismo que la fórmula que propone URD de delimitar las áreas es conveniente y justa.

El Colegio de Peritos y Técnicos Industriales de Venezuela, seccional Zona del Hierro, en comunicado enviado al Presidente de la República y al Congreso Nacional, señala que las empresas mixtas son lesivas a los intereses de la nación y constituyen una nueva forma de penetración de los capitales monopolistas saqueadores.

Abril 28

AGROPET analiza el texto del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera que se discute en el Congreso Nacional con la intención de que ese cuerpo legislativo estudie dichos planteamientos. En relación al artículo 1º considera que el plazo de 120 días para la extinción de las concesiones puede ser insuficiente para el paso normal de la industria a manos del Estado. En tal sentido recomienda facilitar al Estado el tiempo necesario para asumir esa responsabilidad. Cree además innecesaria la vigencia de las leyes sobre mercado interno y sobre la industria del gas natural, pues en el artículo 1º de la Ley de Nacionalización se reserva al Estado todas las actividades de la industria. El artículo 2º referido a la gestión y control del comercio exterior de los hidrocarburos por entes estatales creados o por crearse, lo estima innecesario o redundante pues el artículo 1º reserva al Estado todas las actividades de la industria. Pero advierte que este artículo debe dejar constancia de la facultad que tendría el Ejecutivo Nacional de celebrar convenios de asociación en esa área, pues de no ser así puede haber colisión entre este artículo y el quinto que establece la posibilidad de asociación en todas las áreas de la industria. En relación al artículo 4º señala que no es conveniente limitar las modalidades de negociación en los hidrocarburos, apoya, antes bien, lo anunciado en el artículo 5º. Considera que la Comisión Supervisora a la que se refiere los artículos 9, 10 y 11 es un organismo superfluo. Estima conveniente los plazos señalados en los artículos 12, 13 y 14, siendo en su opinión lo deseable que el período de transición pudiese ser afectado existiendo la posibilidad de advenimiento. En el artículo 15º hace referencia al literal 6 en torno a las deducciones, pues observa que lo contemplado allí puede ser insostenible desde un punto de vista técnico. Al comentar el artículo 18 advierte que el Estado debe subrogarse en las obligaciones que las concesionarias hayan contraído. Del artículo 19 dice que la existencia de dos bases de cálculo, una para el fondo de garantía y otra para el pago de indemnización, puede contrariar la deseable armonía que debe caracterizar el período de transición. Del artículo 20 opina que la verificación debe hacerse en base a grandes unidades y no en excesivo detalle. Con respecto al artículo 21 estima que las funciones en él descritas sean competencia de la Casa Matriz. Hace algunas recomendaciones con respecto a los artículos 23 y 24, como el de definir como derechos adquiridos aquellas prestaciones y beneficios derivadas de las normas de las respectivas empresas y otras en torno al fideicomiso, vivienda, jubilación. Con respecto a los artículos no comentados AGROPET manifiesta su apoyo.

Abril 29

En su intervención ante el VII Congreso de Trabajadores de Venezuela,

el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, afirma que el país no dispone de las facilidades necesarias en los países donde tradicionalmente se ha colocado su petróleo, para comercializarlo directamente. Advierte que como venezolano hubiera querido una nacionalización integral, pero hay áreas en las cuales no se tiene la totalidad de la tecnología, siendo las empresas mixtas el precio que el país tiene que pagar para contar con aquélla.

Una gran manifestación que se realiza en favor de la nacionalización integral de la industria petrolera recorre las calles de la ciudad de Caracas. Participan estudiantes, profesores y empleados de la Universidad Central de Venezuela y de algunos liceos de la capital. La manifestación es convocada por el Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV. En la plaza "El Venezolano" hablan Alexis Ortiz, presidente del FREUCV, en representación de los estudiantes; el doctor Héctor Malavé Mata en nombre del personal docente, y un representante de los empleados, señor José Gregorio Ibarra. Los tres oradores manifiestan su absoluto rechazo al debatido artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización, por cuanto en el mismo se prevé la creación de empresas mixtas, y se pronuncian por una nacionalización integral de la industria. Al concluir el acto una comisión de representantes estudiantiles se traslada al Congreso Nacional, en donde consignan un documento sobre la posición que mantienen con respecto al problema petrolero del país.

Directivos de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo garantizan ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados su capacidad para operar la industria. Pero sugieren establecer áreas de asistencia y, en casos muy especiales, entrar en asociación en actividades extraterritoriales, esencialmente en la fase de mercadeo. Las asociaciones que comprometen el patrimonio nacional deben ser aprobadas por el Congreso Nacional. Recomiendan que la Comisión Supervisora que contempla el proyecto de Ley para vigilar el período de transición, esté adscrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, doctor Miguel Angel Burelli Rivas, afirma que el proceso de nacionalización no afectará las relaciones entre Venezuela y aquel país. Señala que esa decisión es aceptada por los norteamericanos como parte de la madurez adquirida por los pueblos en desarrollo.

Abril 30

Los doctores Julio César Arreaza y Humberto Peñaloza, quienes presidieron las subcomisiones jurídicas y operativas de la Comisión de Reversión, manifies-

tan su apoyo al artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización presentado por el Ejecutivo. El doctor Julio César Arreaza señala que el Estado no debe limitar su soberanía para entrar en asociaciones cuando así convenga al interés del país, y agrega que la industria petrolera es riesgosa, que los riesgos pueden ser asumidos por las empresas mixtas y "cuando se obtengan ganancias se establecerán puntos de acción". El doctor Humberto Peñaloza se muestra partidario de la celebración de convenios de asociación cuando así lo demande el interés nacional, y considera que son necesarios en la fase de mercadeo por cuanto asegurarán mercados estables y diversificados. Sin embargo, estima que no se justifican en las actividades internas de la industria.

Mayo 2

Representantes de la Cámara Venezolana de la Industria Petrolera exponen sus planteamientos sobre la nacionalización ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados. El presidente de aquélla, doctor José Rafael Domínguez, señala que es necesaria la creación inmediata de un organismo capaz de decidir con urgencia y sin trabas burocráticas, a fin de que se tomen decisiones sobre inversiones y futuras adquisiciones para garantizar la continuidad de la industria petrolera. Estima que en ésta hay que decidir a largo plazo, que en la comercialización del petróleo debe buscarse alguna forma de contratación o asociación con las empresas privadas que permita al país el acceso a los canales integrados de mercadeo. De igual manera opinan esos representantes al referirse a la tecnología.

Mayo 3

El Secretario General de AD, doctor Carlos Canache Mata, informa que en caso de que el Estado decida establecer cualquier tipo de asociación para la explotación y el comercio de los hidrocarburos, ello estaría enmarcado dentro de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que el Estado tendrá una participación no menor del 80 por ciento del capital. Indica que el artículo 126 de la Constitución de 1961 abría puertas a nuevas concesiones y sin embargo ello no se hizo. Así puede suceder con el artículo 5º. Pero en su opinión es prudente que el legislador prevea soluciones a problemas que puedan presentarse sorpresivamente.

Mayo 6

El doctor Hernán Anzola, viceministro encargado del Ministerio de Minas, ante la primera plenaria de la XXXI Asamblea de Fedecámaras celebrada en Porlamar, señala que la nacionalización petrolera es ya un hecho, y reconoce, sin embargo, la necesidad de mantener las vinculaciones con los grandes centros

tecnológicos del mundo —en todas las instancias y variedades— pues entiende que abstenerse de tales vinculaciones significa tanto como desconocer la universalidad de esa industria y la necesidad fundamental de cooperación en el ámbito internacional. Expresa igualmente que los países productores de petróleo no pueden obtener un beneficio mayor de sus recursos de hidrocarburos sino en la medida en que esa actividad se integre en sus programas de desarrollo. Señala también que la subordinación de las actividades petroleras a los objetivos de desarrollo origina problemas específicos que se presentan menos en términos de precios que en términos de integración y planificación global.

La XXXI Asamblea Anual de Fedecámaras plantea que la planificación de recursos humanos constituirá factor decisivo para el futuro de la industria nacionalizada. Considera que ésta ganará en eficacia si acoge el modelo actual de planificación de esos recursos, y señala que debe crearse una unidad de Administración de Personal para garantizar la operación eficiente del complejo industrial petrolero. Advierte Fedecámaras que en país no hay personal suficiente para alcanzar la expansión de la industria. Para 1957 ésta tenía unos 45.652 trabajadores y para fines de 1974 sólo contaba con 22.039.

En el documento central de la Asamblea de Fedecámaras relativo al tema petrolero y la nacionalización se señala que puede haber una estabilización y a aún un descenso en los ingresos provenientes del petróleo, lo cual, frente a un necesario incremento de los egresos, va a originar un déficit fiscal a corto plazo que puede evitarse reduciendo el gasto corriente, eliminando los programas de inversión de menor rentabilidad y hasta obteniendo financiamiento extraordinario (endeudamiento). Sin embargo, por las presiones sociales a que está sometido el gobierno, va a ser difícil contrarrestar la tendencia. También plantea el organismo empresarial la necesidad de acelerar la instrumentación jurídica de la nacionalización, la cual debe ser un proceso gradual pero definido, y agrega que si no se actúa con cautela, puede tomarse el camino que conduzca "a un desastre que no tiene parecido alguno desde que nos consolidamos como República".

El doctor Manuel R. Egaña afirma que el momento escogido para nacionalizar la industria petrolera no es el mejor, mostrándose partidario en esperar el término de las concesiones. Propone asimismo una nueva redacción del artículo quinto y sostiene que al nacionalizarse esa industria se debe redactar otra Ley de Hidrocarburos por cuanto la vigente se basa en concesiones que se extinguirán en caso de darse aquel proceso.

En la XXXI Asamblea Anual de Fedecámaras, reunida en Porlamar, se plantea una estrategia racional para la comercialización internacional del petróleo. Se indica que el Estado debe tener cuidado con la nacionalización de "ventas políticas" toda vez que esa operación comporta muchos riesgos comerciales, estimándose que uno de los aspectos más complejos desde el punto económico y fiscal es el de la comercialización. Se exponen dos alternativas para ese proceso: a) directamente por las operadoras, como se hace en la actualidad; y b) por una empresa estatal especializada con buen asesoramiento.

Fedecámaras en su XXXI Asamblea Anual reitera su respaldo a la nacionalización petrolera y presenta un esquema para las operaciones de la industria una vez que pase al control del Estado. La declaración en este sentido abarca los siguientes elementos: financiamiento prioritario del sector petrolero; renovación planificada del personal; exploración y reserva (considera necesario iniciar programas exploratorios para encontrar nuevo petróleo); despolitización del comercio; mejoramiento de la eficiencia de la industria; utilización del gas natural; relaciones con países consumidores y productores.

El doctor José Muci Abraham, Contralor General de la República, sostiene ante la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados que el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera es inconstitucional. Expresa que hay contradicción entre el artículo 1 y el artículo 5. Se muestra de acuerdo con que los recursos básicos estén en manos del Estado, pero estima, sin embargo, que hay áreas que no puede controlar. El Estado —dice— puede operar con empresas mixtas en todas las áreas que no se reserve.

El ex ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, es interpelado por la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados. Señala que el gobierno anterior ya se venía preocupando por la nacionalización de la industria, indicando en tal sentido que para fines de 1973 ya las condiciones para dar ese paso estaban dadas, sólo que consideraron que un hecho de tanta trascendencia debía cumplirlo un gobierno al iniciarse con un Congreso también al comienzo de sus deliberaciones. Con respecto al artículo 5º expresa que el traslado de tecnología puede adquirirse con los contratos de operación. Con éstos —dice— es posible conseguir lo que se cree que sólo pueden proporcionar las empresas mixtas.

Mayo 7

Fedecámaras advierte que el gobierno tendrá que demostrar suficiente "sensatez" para establecer un proceso gradual en la ejecución de la transferencia

de la industria de manos del sector privado extranjero al Estado. De no hacerlo en forma gradual puede provocarse un "colapso" que sería perjudicial para el futuro del país. Señala, entre otras cosas, que la vida del país y de los programas de desarrollo dependen fundamentalmente de la capacidad que Venezuela tenga para mantener y acrecentar su actividad petrolera. Agrega que el desarrollo y la comercialización de los recursos petroleros requieren de grandes inversiones y de acceso a los mercados donde el sector privado dispone de tecnología. Por esto es necesario asegurarnos sus servicios en la forma más racional.

El doctor Godofredo González considera que el momento actual es favorable y conveniente para la nacionalización petrolera, mostrándose partidario con las negociaciones de Estado a Estado. Advierte que con el petróleo en sus manos el Estado venezolano no debe sustituir a las empresas en su solo "papel de mercaderes", sino que debe usar al petróleo como instrumento de desarrollo. Bajo el gobierno del presidente Caldera la industria no fue nacionalizada porque el Presidente no disponía de poderes extraordinarios para convocar el Congreso que estaba cesante en octubre-noviembre de 1973. Se ha dicho que sólo queríamos sacar dividendos electorales. Ya a fines de 1973, en su opinión, estaban dadas una serie de condiciones para nacionalizar la industria. No pudimos, pero dejamos todo listo al punto de que en marzo de 1974 presentamos un proyecto de nacionalización.

Sostiene el diputado Freddy Muñoz, del MAS, que nuevamente Fedecámaras defiende la participación del capital privado en la industria petrolera al exponer la misma argumentación falsa para defender su opinión señalando supuestas limitaciones del país para asumir plenamente el control de esa industria. Fedecámaras y AGROPET insisten en recomendar para el país el uso de una sola fuente tecnológica, la que proporcionan las compañías multinacionales. Para esto se apoyan en el falaz argumento de que con otras fuentes de suministro se corre el riesgo de politizar la actividad petrolera del Estado. Por su parte, Abdón Vivas Terán, de Copei, estima que la posición de Fedecámaras coincide con la que sostiene el Ejecutivo Nacional en el contenido esencial de la nacionalización petrolera y considera que los argumentos de ese organismo en relación a la necesidad de asociaciones entre el Estado y el capital privado en las áreas de transferencia tecnológica, comercialización y refinación son inadecuadas a la luz de un análisis político y técnico objetivo.

Mayo 8

En base a un documento presentado por la Cámara de Comercio de Maracaibo ante la XXXI Asamblea Anual de Fedecámaras, ese organismo reco-

mienda al gobierno la necesidad de limitar la estatización de la economía venezolana. Considera que quienes promueven la estatización deben tomar en cuenta las limitaciones burocráticas que pesan sobre la administración del Estado. Analiza las tendencias hacia aquel proceso y afirma que se confunde con nacionalismo. Esto, desde su punto de vista, "es estimular la economía privada para que produzca un máximo de desarrollo" y bienestar a la colectividad, mientras que la estatización es contrariamente considerada como negativa.

El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo comparece ante la Subcomisión de Minas de la Cámara de Diputados para exponer sus planteamientos sobre la nacionalización petrolera. Señala que en su caso falló al no darse cuenta de que no se alcanzaría la independencia económica mientras el sector petrolero estuviera controlado por intereses foráneos. Cuestiona el retardo que se ha producido para acometer la nacionalización de la industria, y dice que ni siquiera la brecha abierta por el artículo 5º y sus posibilidades de empresas mixtas, debe retardar el proceso, y que si se da paso para renovadas inversiones extranjeras, se las combata a "medida que intenten invadirnos, hasta desalentarlas definitivamente".

En interpretación de la tesis petrolera de Fedecámaras, el doctor José Giacopini Zárraga, en documento que presenta ante la XXXI Asamblea Anual de ese organismo, declara que una excesiva rigidez legislativa en materia petrolera puede traer "ingratas sorpresas". Afirma que el artículo 5º está concebido para evitar dar "un salto en el vacío". Según el doctor Giacopini, el avance tecnológico que se manifiesta en el mundo, la necesidad creciente de petróleo y la mejora de precios, son factores suficientes para que el país haga esfuerzos a fin de no quedar en la situación actual, sino que se convierta en un país, modelo de tecnología y progreso. Señala asimismo que el gobierno ha actuado con prudencia en el proceso que conduce a la nacionalización.

Mayo 9

Ante la Asamblea Anual de Accionistas de la Creole, su presidente en Venezuela, señor Robert N. Dolph, indica que es incierto el ambiente actual hasta que no se apruebe la Ley de Nacionalización Petrolera, la cual definirá el papel futuro de las empresas petroleras privadas que operan en el país, y aunque advierte que desconoce el impacto final que tendrá sobre la Creole el proyecto nacionalizador, dice que quedan "alentados por el hecho de que se está estudiando cuidadosamente la posibilidad de alguna relación que continuará con las empresas particulares dentro de un marco del petróleo nacionalizado".

Una alta representación de la Federación de Economistas señala ante la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que es necesario dejar "abiertas las puertas a las empresas mixtas", en tanto debe dotarse al Estado de suficiente flexibilidad para enfrentar los problemas que en materia tecnológica y en el mercadeo internacional se presenten a la industria nacionalizada. Justifica entonces la asociación con entes privados, dada la creciente tendencia de la producción hacia crudos de baja gravedad, en la futura explotación de la Faja del Orinoco. Ante la mencionada omisión se presentan los economistas Rafael Paiva, Rafael Pérez Marcano, Arturo Cedeño y Jorge Sánchez Meleán.

Una delegación de la Jefatura Nacional de la Cruzada Cívica Nacionalista entrega al Presidente del Congreso, doctor Gonzalo Barrios, un documento donde fija su posición sobre el proyecto de Ley de Nacionalización. La delegación la encabezan los doctores Oscar Hurtado Díaz y Pablo Salas Castillo. En ese documento apoyan el artículo 5º propuesto por el Ejecutivo Nacional y señalan que es una medida "prudente, de alivio en un momento dado, de recurso en una exigencia", para que en algunos casos y cuando sea de interés público, el Estado tenga la posibilidad de celebrar, a través de entes de su propiedad, convenios de asociación con entes privados.

Mayo 12

El diputado Oswaldo Alvarez Paz, de Copei, dice que no hay consenso en torno al artículo 5º, pero que éste debe ser modificado porque las empresas mixtas no son necesarias. Sin embargo, señala que deben estudiarse áreas operativas orientadas hacia contratos a tiempo fijo y aprobadas por una mayoría del Congreso, para lo cual se debe tomar como base la proposición urredista.

Mayo 13

En una rueda de prensa celebrada en The National Press Club de Washington, el Canciller venezolano, Ramón Escovar Salom, expresa que su país aspira mantener con los Estados Unidos relaciones de "cooperación sin sumisión", y afirma que "la justicia debe ser indivisible tanto para los países grandes como para los pequeños". Expresa el Canciller que los pasos dados por Venezuela en materia de nacionalización son de "irreprochable juridicidad", pero, el hecho de que nuestro país nacionalice la industria petrolera no le impedirá cumplir, como lo ha hecho permanentemente, con los compromisos de suministro a los mercados tradicionales. Agrega que los Estados Unidos han contado siempre, puntualmente, con estos suministros y ese aporte fue invalorable en los años de la segunda guerra mundial.

El diputado Freddy Muñoz, del MAS, señala que las declaraciones de Oswaldo Alvarez Paz (Copei) son contradictorias ya que habla, por un lado, de la conveniencia de celebrar contratos operativos, y por el otro que debe tomarse en cuenta la proposición de URD que contempla la creación de empresas mixtas en un campo muy amplio de la industria petrolera. Estima Muñoz que los contratos operativos nada tienen que ver con ese tipo de empresas mixtas.

El doctor Celestino Armas anuncia que para el 5 de julio deberá estar aprobado en primera discusión en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Señala que aún no existe acuerdo sobre el artículo 5º. Advierte que existe una iniciativa de URD y otra de Pro Venezuela orientadas a lograr un acuerdo tipo político con el objeto de lograr mayor consenso en torno al proyecto. Hay modificaciones viables, una de naturaleza técnico-jurídica, según la cual se pueden introducir conceptos que aclaren aspectos del articulado, o bien sustituciones de algunas cosas por otras. Se han presentado confusiones en cuanto a la atribución del Ministerio de Minas para designar las áreas a las empresas nacionalizadas y en lo concerniente al pago de prestaciones y otras reivindicaciones de los trabajadores.

Mayo 14

El ingeniero Eduardo Acosta Hermoso hace llegar a la Comisión de Minas un estudio en el cual fija posición con respecto a la nacionalización petrolera. En su opinión no es valedero el argumento de que son necesarias las empresas mixtas para continuar el desarrollo de la industria petrolera. Estima deleznable la razón esgrimida de que el país carece de tecnología propia. Los esfuerzos de Fedecámaras y AGROPET por ver modificado el artículo 5º, en su opinión, "no tendrán mayor éxito". Considera que el Ejecutivo debe mejorar la Ley Petrolera a menos que "quiera sufrir un grave descalabro político".

El economista Abdón Vivas Terán expone la posición definitiva de Copei al rechazar cualquier tipo de empresa mixta en la industria nacionalizada. Cree que no hay razones técnicas, económicas o políticas que lo justifiquen, y que la tecnología puede adquirirse mediante la forma de contratación. Denuncia que el gobierno en política petrolera le hace el juego a los intereses que pretenden crear dudas y desconfianza en las posibilidades de que el Estado pueda manejar eficazmente la industria. Agrega que el consenso ha sido roto por el propio gobierno, y dice que su partido no está dispuesto a aceptar la proposición de URD ni ninguna fórmula que propicie las empresas mixtas.

Mayo 15

El diputado del MAS, Freddy Muñoz, declara en la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que la proposición de URD en torno al artículo 5º no es exclusiva de ese partido, sino que es una especie de "llave" entre aquél y AD. Señala que el MAS está en desacuerdo con tal proposición porque, aun cuando de manera más restrictiva, permite igualmente la formación de empresas mixtas. Afirma que éstas son absolutamente innecesarias ya que la tecnología puede ser comprada o pueden realizarse convenios de operación. Declara también Muñoz que la proposición urredista permite a los capitales extranjeros continuar interviniendo en la explotación de nuestros hidrocarburos.

Carlos Canache Mata expone la posición oficial de AD ante el problema petrolero. Señala que el consenso no se ha roto puesto que aún se está buscando. Espera que la oposición no se deje ganar por un seudoizquierdismo que obvie la conveniencia del país. Considera asimismo que en determinadas áreas de la industria podrían participar las empresas mixtas, entre las cuales se pueden mencionar las de transporte y mercadeo.

La Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados inicia la discusión del informe preliminar redactado por el presidente de esa Comisión, diputado Celestino Armas. Los partidos de oposición se muestran en desacuerdo al sostener que aquél sólo expresa la posición de AD. Abdón Vivas Terán, de Copei, presenta reparos a los artículos 1, 2 y 12, y sobre el 5º señala que su partido considera definitivamente que se debe volver al presentado por la Comisión de Reversión. Freddy Muñoz, del MAS, advierte que son innecesarias las empresas mixtas y en caso de requerirse algún tipo de asociación ello puede hacerse sin necesidad del texto agregado por el Ejecutivo que abre el camino al sector privado a participar en áreas decisivas de la industria. Sólo URD presenta proposiciones modificando el artículo 5º y señalando que las empresas mixtas deben tener lugar fuera del ámbito del territorio nacional, y que el Estado sólo debe permitir asociaciones para el transporte del crudo desde puertos venezolanos de aguas profundas, así como para la creación o compra parcial o total de complejos de extracción o refinación localizados en territorios de otros países. Opina URD que tales convenios deben quedar sometidos a la previa autorización de las Cámaras.

Mayo 17

El ex ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez La Salvia, declara no estar de acuerdo con las empresas mixtas, aun cuando la participa-

ción de la nación sea mayor que la del capital privado, ni con los artículos 1º y 12º del proyecto del Ejecutivo. Con respecto al problema tecnológico señala que puede resolverse a través de convenios operativos, es decir, por vía de contratar el servicio de empresas dedicadas a ese ramo. Las cuentas de participación, según el doctor Pérez La Salvia, no añaden nada a los convenios operativos ya que éstos contemplan todas esas eventualidades. Dice que bajo el gobierno de Copei no fue nacionalizada la industria "por razones de tiempo y porque al atravesarse el año electoral nos hubieran acusado de ventajistas".

Radamés Larrazábal, del Partido Comunista, afirma que la nacionalización genera controversias inevitables que pueden ser esclarecedoras y que no tienen por qué dividir a los venezolanos a la hora de respaldar la Ley. Lo dogmático —dice— es la empresa mixta cuyo sistema ha fracasado en Venezuela. Advierte que si lo que se persigue es evitar eventuales asfixias tecnológicas como represalia a la nacionalización, el camino más seguro es que ésta se haga de manera total, pero lo que precisamente ata de manos al Estado son las asociaciones que no respetan la soberanía como se ha demostrado.

Acción Democrática admite la posibilidad de que la fórmula presentada por URD al artículo 5º pueda ser la base para lograr el consenso a fin de aprobar la Ley de Nacionalización. Señala el diputado Celestino Armas que para AD es más acertado plantear las asociaciones dentro de la misma Ley sin ningún subterfugio, pero considera que la empresa mixta será el último mecanismo de asociación que utilizará el gobierno en el proceso de nacionalización. Por su parte, Abdón Vivas Terán, de Copei, advierte que las empresas mixtas son innecesarias e inconvenientes, no sin añadir que el gobierno no ha dado un razonamiento convincente para justificar la creación de aquéllas. Similar posición plantea Freddy Muñoz, del MAS, al señalar que hasta el momento los partidarios de la asociación con entes privados, a través de cualquiera de las fórmulas propuestas, no han podido demostrar que tales asociaciones son convenientes.

Mayo 18

En discurso pronunciado ante la XXI Convención de AD en Caracas, el doctor Carlos Canache Mata declara que de no lograrse el consenso, ese partido aprobará con su mayoría la Ley de Nacionalización. Plantea la posibilidad de que las compañías petroleras se nieguen a vender en algún momento su tecnología, previéndose por ello las asociaciones. Agrega que en todo caso el Estado dispondrá de una mayoría absoluta del capital en las empresas mixtas que no podrá ser menor del 80 por ciento.

Mayo 19

El Consejo Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo acuerda rechazar el artículo 5º del proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, así como todas las modificaciones y alcances del mismo. La información la suministra el senador Orestes Di Giácomo. Señala que el MEP se opone categóricamente a las empresas mixtas en cualquier fase de la industria. Acuerda ese partido denunciar toda política que signifique tanto el incumplimiento de las promesas electorales del gobierno como las concesiones a Fedecámaras y al capitalismo monopólico internacional.

Mayo 20

El presidente de Pro Venezuela, doctor Reinaldo Cervini, declara que en la primera etapa de desarrollo de la industria petrolera nacionalizada no debe permitirse el establecimiento de empresas mixtas. Venezuela debe vender su petróleo de Estado a Estado, lo cual tendría por efecto un mejoramiento de las relaciones entre los países que participen en este tipo de operaciones. Sin embargo, considera que en caso de que el Estado no pueda obtener la tecnología necesaria, pudiera asociarse siempre y cuando el convenio cuente con el respaldo del 75 por ciento de las Cámaras en sesión conjunta. Indica el doctor Cervini que es posible establecer convenios con las empresas especializadas en tecnología sin necesidad de asociarnos con ellas en empresas mixtas.

El doctor Pedro Pablo Aguilar, Secretario General de Copei, declara que el hecho de tener AD mayoría en el Congreso Nacional no significa que tenga la razón en su empeño de aprobar las empresas mixtas, pues como se conoce la mayoría del país, a excepción de Fedecámaras, se ha mostrado contraria a tales empresas. Plantea como alternativa frente a éstas la de convenios operativos que garanticen la más avanzada tecnología. Esos convenios no significan de manera alguna una enajenación de nuestra soberanía sobre el petróleo.

El jefe de la Fracción Parlamentaria de AD, doctor Jaime Lusinchi, señala que sólo el dos por ciento de los venezolanos está en desacuerdo con la nacionalización de la industria petrolera. Agrega que el Estado no debe quedar atado de manos para manejar una industria tan compleja y exigente como esa. Según el doctor Lusinchi, sería una locura aferrarse a clisés seudonacionalistas si el país no cuenta en los actuales momentos con los recursos humanos, científicos y técnicos suficientes. Para justificar el artículo 5º señala que la URSS y Yugoeslavia han establecido empresas mixtas en el área de hidrocarburos.

El doctor Celestino Armas, presidente de la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, señala que seguirán procurando el consenso aun cuando AD tiene mayoría en el Congreso. Indica que nunca han rechazado las proposiciones de Copei, y algunos planteamientos del MAS les parecen interesantes y merecen tomarse en cuenta a la hora de aprobar la Ley, como asimismo lo señalado por Pro Venezuela que persigue iguales objetivos a lo planteado por URD. Estima que no puede considerarse como la misma cosa empresas mixtas y convenios de asociación. Las primeras significan participación en propiedad para cualquier tipo de negociación, mientras que los segundos no presuponen compartir la propiedad del Estado con la empresa que se asocie. Agrega, por otra parte, que el plazo de 120 días establecido en el artículo 1º es necesario para implementar el aparato administrativo y el personal que se encargará de manejar la industria.

Mayo 21

El director de los Cursos de Especialización de Ampliación de Administración de Postgrado de la UCV, profesor Ramón Losada Aldana, en documento que dirige a la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, manifiesta que una nacionalización petrolera que paute las empresas mixtas es una mixtificación. Agrega que desde la Segunda Guerra Mundial las empresas mixtas son la forma de neocolonialismo. Recomienda una nacionalización integral, reducción de la producción y que la tecnología se consiga por convenios operacionales.

El doctor Alvaro Silva Calderón, del MEP, considera innecesarias las empresas mixtas por cuanto han demostrado su ineficacia en los países donde se han establecido. Se muestra en desacuerdo con la fórmula que ha propuesto URD por considerar que la proposición de este partido implica el establecimiento de empresas mixtas para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco. Es categórico al estimar la conveniencia de controlar el comercio de los hidrocarburos mediante negociaciones de Estado a Estado. La proposición de establecer empresas mixtas, en su opinión, no es más que un "homenaje al miedo". Asimismo indica que fórmulas como las de "asociación" y "cuentas en participación" persiguen el mismo objetivo.

El Comité Nacional de Copei decide la elaboración de un documento en relación con el proceso de nacionalización petrolera y las observaciones al proyecto de Ley introducido por el Ejecutivo. El documento será presentado ante el Congreso Nacional en la oportunidad de iniciarse el debate sobre la Ley de

Nacionalización. Así lo informa el senador Godofredo González, quien agrega que Copei ha hecho algunas proposiciones a AD particularmente en lo que respecta a los artículos 1 y 12, el primero de los cuales se refiere al plazo de 120 días para la extinción de las concesiones. Copei propone que los bienes pasen al Estado, sólo que las actuales empresas pasarían a trabajar bajo la supervisión de aquél, de modo que las utilidades que produzcan sean del Estado y no de las compañías. Con respecto al artículo 12 propone que las actas de avenimiento que se suscriban con las compañías se lleven al Congreso para su consideración y no está de acuerdo con que pasen a la Procuraduría General. Señala el rechazo de ese partido al artículo 5º, por considerar que el Estado sólo debe contratar servicios, pero no se deben aprobar empresas mixtas.

Mayo 22

El dirigente nacional de URD, Leonardo Montiel Ortega, reacciona contra las declaraciones dadas por el doctor Alvaro Silva Calderón, del MEP, en torno a la posición de URD sobre la Faja Petrolífera del Orinoco. Montiel Ortega acusa al MEP de formar parte de los sectores que "quieren acabar con la democracia por razones ideológicas o personales". Señala que URD no acepta empresas mixtas en el territorio nacional y que las cuentas en participación no son compañías mixtas, porque no vinculan en propiedad al ente privado con el aparato petrolero nacional. URD se basa, según Montiel, en el artículo 359 del Código de Comercio para hacer esa proposición. Este dirigente califica la posición del MEP, en boca del doctor Silva Calderón, como demagógica.

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela denuncia ante la Comisión de Minas del Senado que las compañías petroleras tienen un pasivo oculto en favor de la nación que alcanza a los cinco mil millones de bolívares. Luis A. Lizardi señala que las empresas petroleras no tienen esa suma asentada en sus contabilidades, y añade que esas mismas compañías han drenado unos 120 millones de barriles de petróleo de reservas de la nación desde 1960 hasta esta fecha. Expresa que las multinacionales en 1974 ganaron 18.248 millones de bolívares libres de Impuesto sobre la Renta y de regalías, y entre los años 1962-74 obtuvieron una utilidad de 44.567 millones de bolívares que dan un rendimiento del 544 por ciento de su capital invertido de 8.200 millones. Señala además que el país pierde 50 millones por cada día que se retarde la nacionalización.

El Comité Ejecutivo del Movimiento al Socialismo (MAS) emite una declaración pública sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. En la

misma ratifica, entre otras cosas, su rechazo categórico al artículo 5º, considerando dañinas las empresas mixtas. La tecnología y otros servicios que requiere el Estado pueden ser logrados mediante contratos de operación sin necesidad de asociación con capitales privados. Afirma que el país no tiene planteada como necesidad vital el promover con urgencia la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, y menos aún buscar asociación con el capital extranjero. Propone incluir de nuevo en el artículo 2º la disposición que confiere al Estado la gestión y control exclusivos del comercio internacional de los hidrocarburos.

Mayo 23

En documento presentado por AGROPET al Congreso Nacional, esa agrupación plantea que la subestimación del papel que desempeña la tecnología en la industria petrolera puede conducir a costosos e irreparables errores. Considera que Venezuela no puede producir ninguno de los tres tipos de tecnología que requiere la industria de hidrocarburos: la fundamental, que son los conocimientos científicos y técnicos que se obtienen en la investigación de laboratorio; la patentada, que es el proceso de desarrollo de los conocimientos básicos que se obtienen en la fundamentación para adaptarlos a las necesidades de la industria; y la de apoyo, que son los conocimientos que incrementan la capacidad de los técnicos para prever y solucionar situaciones anormales sin tener que recurrir a improvisaciones costosas.

El doctor Pedro Pablo Aguilar, de Copei, declara que la insistencia de AD en imponer las empresas mixtas constituye un "obstáculo insalvable" para conformar un gran consenso nacional. Recuerda que, según expertos que trabajaron en la Comisión de Reversión, las compañías mixtas desnaturalizan la nacionalización. En el partido Copei no se entienden las razones que aduce el gobierno para constituir empresas mixtas. La utilización de las tecnologías requeridas y la seguridad del transporte y el mercadeo se pueden lograr con los convenios operativos sobre los cuales existe acuerdo general, no siendo por tanto necesarias las empresas mixtas con capital extranjero ni nacional. Estima que este último tipo de injerencia tendría una motivación política que beneficiaría a los amigos políticos del gobierno.

Dirigentes de URD y Copei se reúnen y llegan a acuerdos sobre los artículos 1º y 12º del Proyecto de Ley de Nacionalización. Seguirán las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el artículo 5º. La reunión se efectúa en la residencia del doctor Godofredo González. Señala éste que están en desacuerdo con las empresas mixtas en áreas básicas como lo autoriza el artículo 5º.

El diputado Siuberto Martínez y el doctor Alvaro Silva Calderón, ambos del MEP, señalan que las declaraciones de Leonardo Montiel Ortega forman parte de las amenazas con las cuales pretenden atemorizar los adversarios de la nacionalización. Afirman que no es precisamente a ellos a quienes debe acusarse de demagogos, y ratifican que la proposición de URD acepta expresamente la formación de empresas mixtas en operaciones fuera del territorio nacional, que difícilmente podrían organizarse "sin comprometer en alguna forma nuestra producción de hidrocarburos". Dicen que la proposición de URD admite la formación de "cuentas en participación" dentro del país que es una forma de asociación con algunas diferencias que las hacen más peligrosas. Concluyen que ello resulta más comprometedor cuando el campo para que aquéllas se establezcan, según URD, es la Faja Petrolífera del Orinoco.

Mayo 24

El Canciller de Venezuela, doctor Ramón Escovar Salom, declara que cuando un país nacionaliza una riqueza no debe entenderse que lo hace por agredir a otro. Venezuela, en su opinión, no dejará de cumplir compromisos internacionales ni con Estados Unidos ni con otro país después de nacionalizar la industria. Advierte el doctor Escovar que el interés permanente de un país es la defensa de su territorio y de todo lo que configura el principio de su soberanía.

El Comité Ejecutivo Nacional de AD designa una comisión integrada por los doctores David Morales Bello, Héctor Hurtado, Jaime Lusinchi, Celestino Armas y Armando Sánchez Bueno para que estudie el texto de la proposición del artículo 5º hecha por URD. El informe de esta Comisión —señala Celestino Armas— ha sido concluido, sólo se encuentran en suspenso algunos puntos que discuten los partidos de oposición. Advierte el mismo declarante que dada la trascendencia del asunto es justificado que los partidos se dediquen en los próximos días a buscar coincidencias en forma objetiva.

Mayo 25

En el desarrollo de un seminario sobre Venezuela que se celebra en Canning House, sede del organismo para las relaciones con España, Brasil, América Latina, se habla con dirigentes de la economía privada de Gran Bretaña. Al parecer no ha surgido inquietud por la nacionalización petrolera. Hay confianza en que el gobierno de Carlos Andrés Pérez —así lo señala un informe— tiene poder para conducir con "éxito" el proceso de nacionalización, a pesar de las posiciones más radicalizadas. El embajador de Venezuela en Londres, doctor Carlos Pérez de la Cova, expresa que las interrogantes que han

surgido es con respecto a cómo se va a instrumentar ese proceso. El presidente de la Shell en Venezuela, Alberto Quirós, dice que las empresas han entendido el cambio de relaciones y que ahora priva el interés nacional sobre el supranacional.

Mayo 26

En segunda reunión entre representantes de Copei y URD, asisten los doctores Hugo Pérez La Salvia, Abdón Vivas Terán y Godofredo González por Copei y los doctores Jóvito Villalba, Ramón Tenorio Sifontes y Leonardo Montiel Ortega por URD, y llegan a acuerdos sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Con respecto al artículo 1º señalan que se debe eliminar el plazo estimado de 120 días para que extingan las concesiones; dicen que tal disposición debe ser inmediata. Sobre el artículo 12 expresan que el avenimiento entre las empresas y el Estado debe ser aprobado por el Congreso Nacional y no por la Procuraduría de la República. Continúa la discusión en torno al artículo 5º que dividen en dos partes: una, la de aceptar empresas mixtas en territorio nacional, sobre la que ni Copei ni URD transigen. La otra es en base a la posibilidad de aceptar fórmulas asociativas. No obstante quedan los dos partidos a la espera de las respuestas a las proposiciones hechas a AD para arribar a conclusiones precisas.

Para el partido Vanguardia Comunista, según declara Eduardo Machado, el artículo 5º permitirá la manipulación de nuestro petróleo por los monopolios internacionales. Por otra parte, señala que el artículo 12º de la Ley abre las puertas a la corrupción administrativa. Ello no es necesario porque no se justifica la indemnización propuesta en ese artículo. Advierte que si la Ley es aprobada así todas las negociaciones y arreglos correspondientes deben ser de la sola competencia del Congreso y aprobados con las dos terceras partes.

Leonardo Montiel Ortega, de URD, declara que las compañías petroleras no persiguen fundamentalmente la constitución de empresas mixtas, sino la seguridad de suministro. Se muestra partidario de la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco por parte del Estado, siendo esto un reto que tiene planteada la nacionalización. Agrega que una vez nacionalizada la industria, el aparato estatal que tenga a su cargo la operación debe definir una política de reducción de la producción.

Mayo 27

El diputado de Copei, Abdón Vivas Terán, declara que ese partido mantiene de manera definitiva su oposición a las modificaciones propuestas por

el Ejecutivo Nacional al artículo 5º de la Ley de Nacionalización. Indica que Copei no ha encontrado razones técnicas, económicas y políticas que justifiquen la asociación con entes privados para ninguna fase de la industria, incluyendo la comercialización.

Carlos Canache Mata, Secretario General de AD, anuncia que el gobierno nacional y el partido Acción Democrática presentan una nueva redacción del artículo 5º para someterla a la consideración de los partidos de oposición. Se iniciarán conversaciones con las distintas organizaciones políticas porque una materia de tanta trascendencia como lo es la nacionalización de la industria petrolera, "debe aprobarse con el mayor consenso".

Mayo 28

El ministro de Estado que preside el Fondo de Inversiones, doctor Constantino Quero Morales, es recibido por el bloque de prensa. Afirma en esa reunión que en el país no existe una corriente clara sobre la nacionalización petrolera, sino que se advierte un clima no vinculado con lo que se piensa hacer. Señala asimismo que la nacionalización pudiera acarrear una pérdida de mercados. Refiere que las inversiones de Estados Unidos o Francia en participación en refinerías como las de Aruba y Curazao le ahorrarían al país la creación de una gran flota petrolera.

INVEPET concluye su primer diagnóstico sobre Transferencia de Tecnología de la Industria Petrolera en Venezuela. Una de las conclusiones de ese diagnóstico es que el país mantiene una dependencia tecnológica acentuada y se requiere modificar algunos patrones tradicionales para la obtención de tecnología en función de la nacionalización petrolera. Se considera en el informe que si bien en la tecnología para refinación y computación Venezuela debe continuar dependiendo del extranjero, en explotación y producción puede lograrse gran parte de la tecnología local. Se afirma que para asumir con eficiencia el reto tecnológico de la nacionalización petrolera, el país deberá disponer de 1.000 profesionales y 350 millones de bolívares anuales para investigación.

Acción Democrática somete a la consideración de los partidos de oposición un nuevo artículo 5º. En éste se mantiene la posibilidad de convenios operativos o asociaciones con entes privados para transporte internacional, aportes de tecnologías para el aprovechamiento comercial o refinación de crudos y complejos de extracción o refinación localizados en otros países. Miembros del CEN de AD encabezados por Gonzalo Barrios y Carlos Canache Mata se entre-

vistan con representantes de Copei y el MAS. Voceros de estos dos partidos se muestran pesimistas en cuanto al resultado de nuevas conversaciones. También se reúnen con representantes de URD y el MEP. El doctor Gonzalo Barrios señala que hay un consenso importante y se refiere a la conveniencia de nacionalizar. Sobre lo demás no se espera unanimidad y sólo habrá consensos parciales.

Mayo 29

La Federación Nacional de Ganaderos se dirigirá al Ministerio de Minas e Hidrocarburos y al Congreso para pedir una modificación de la Ley de Nacionalización a fin de que se reconozca la vigencia de los contratos de servidumbre que las empresas petroleras concesionarias han firmado con productores ganaderos y agrícolas. El doctor Julio de Armas, miembro del Directorio de la Federación, señala que los contratos de servidumbre deben ser reconocidos y tener vigencia al nacionalizar la industria.

Según estimaciones del presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, las prestaciones de unos 20.000 trabajadores de la industria petrolera y de quienes trabajan con las empresas contratistas y otras empresas de servicio (unos 6.000 trabajadores) alcanzan a una cifra del orden de los tres mil millones de bolívares. Declara Piñerúa que los trabajadores son partidarios del fideicomiso en el Banco Central por ser la institución más sólida. Agrega el dirigente sindical que Fedepetrol ha iniciado una serie de asambleas en todo el país, para ventilar el destino de esas prestaciones sociales y mantener informado a los trabajadores petroleros para que rechacen la acción de elementos extraños al sindicalismo, quienes, consciente o inconscientemente, sirven a los intereses de las trasnacionales y a los enemigos de la nacionalización petrolera.

Se reúnen los ex presidentes Rómulo Betancourt y Rafael Caldera para buscar consenso sobre la Ley de Nacionalización Petrolera. Los contactos a alto nivel no han tenido resultados positivos y se insiste en que la conversación no tiene carácter oficial sino privado.

Partidos de oposición (Copei, URD, MIR, MAS, MEP, PCV y Cruzada Cívica Nacionalista) rechazan unánimemente el artículo 5º propuesto por AD. Exponen varias razones, entre ellas la de que puedan establecerse empresas mixtas para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco y el que se puedan eternizar en el país las empresas multinacionales. Señalan además que el artículo está viciado por inconstitucional.

Mayo 30

Informa el doctor Celestino Armas, presidente de la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, que ésta se reunirá para conocer el informe sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera que será presentado ese mismo día al presidente de la Cámara de Diputados, para que lo anuncie en la Cámara y fije la fecha para el comienzo del debate parlamentario. Agrega el representante de AD que la proposición de su partido en relación con el artículo 5º es revolucionaria, pues es necesario conservar los petróleos livianos y explotar los pesados de la Faja del Orinoco, para lo cual se requiere de una tecnología que no se posee y que puede obtenerse con las empresas mixtas.

El consultor jurídico de Fedepetrol y miembro de la Junta Ejecutiva de la Corporación Venezolana de Petróleo, doctor Jesús R. Márquez, declara que se han tomado las previsiones necesarias para garantizar el destino de las prestaciones sociales de los trabajadores petroleros. Cuando se produzca la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, el monto de dichas prestaciones ya habrá sido depositado en planes de fideicomiso en acreditados bancos del país y no podrán ser retiradas mientras exista el vínculo de trabajo. Estos planes de fideicomiso beneficiarán alrededor de 30.000 trabajadores de las empresas matrices y más de 4.000 de las compañías contratistas, cuyas prestaciones en conjunto alcanzarían a un total de 4.000 millones de bolívares. Dice también el declarante que ocurrida la nacionalización deberá ser discutido un Contrato Colectivo único entre Fedepetrol y el *holding* de las empresas que habrá de constituirse.

El artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera "no mediatiza la nacionalización", por cuanto el punto crítico está, no en el artículo en sí, sino en la forma en que sea aplicado. Es esta la opinión del doctor Alejandro Zahlout Gómez, director de la Escuela de Ingeniería Química de la UCV y ex miembro de la Comisión Presidencial de Reversión. Indica además que si se definen áreas específicas para las empresas mixtas, el artículo 5º no afecta en nada la esencia de la nacionalización. Agrega que, por ejemplo, en refinación, donde hay que cambiar los patrones del proceso, es conveniente —bajo ciertos controles muy rigurosos— pensar en la posibilidad de empresas mixtas.

Los partidos de oposición rechazan la nueva redacción hecha por AD al artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización. Copei, dice Godofredo González, se opone a la aprobación de ese artículo que contempla la creación de

empresas mixtas y más aún si éstas se forman para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco. Ramón Tenorio Sifontes, de URD, declara que ese partido sostiene que no deben existir esas empresas dentro del territorio nacional, por cuanto no son necesarias para el funcionamiento eficaz de la industria nacionalizada; ello traería como consecuencia que se eternicen las multinacionales en el país y que no alcancemos una completa liberación. El MEP, a través de Siuberto Martínez, expresa que la nueva versión del artículo 5º se orienta a dar participación a los consorcios internacionales en la explotación de la Faja Petrolífera, empeorando la situación al ratificar que las asociaciones se efectuarán en la refinación y el transporte que son básicos para controlar el mercado de los hidrocarburos. Freddy Muñoz, del MAS, afirma que este partido ha definido su posición irrevocable de rechazo a las empresas mixtas en las áreas claves de la actividad petrolera, y estima que la nacionalización no debe ser mediatizada con la creación de esas empresas. La opinión del Partido Comunista la expone Radamés Larrazábal, quien señala que la nueva redacción del mencionado artículo establece las empresas mixtas para las áreas en que están más interesadas las compañías internacionales: mercado internacional, tecnologías para la explotación de la Faja Petrolífera y refinación. Declara que el PCV será irreductible contra la creación de tales empresas. Américo Martín y Héctor Pérez Marcano, del MIR, señalan que ese partido rechaza el artículo 5º porque hay un claro retroceso sobre la fórmula anterior, ya rechazada por la oposición. El MIR rebate cualquier forma de asociación donde sea enajenado el control del recurso. Cruzada Cívica Nacionalista, a través de Pablo Salas Castillo, se opone al artículo en cuestión porque carece de técnica legislativa, y por estar viciado constitucionalmente.

Mayo 31

El Secretario General de Acción Democrática, doctor Carlos Canache Mata, ratifica que ese partido continuará las gestiones para lograr un consenso en torno al artículo 5º de la Ley de Nacionalización. Señala que, a pesar del rechazo de la oposición, AD no pierde el optimismo. Dice que la aprobación del mencionado artículo no "significa que necesariamente serán creadas empresas mixtas", y asegura que el partido Copei se mostró partidario de ese tipo de asociación cuando estuvo en el gobierno. Con el artículo 5º se deja abierta la posibilidad de que el Estado celebre convenios de asociación con entes privados, estableciéndose que aquél tendrá una participación mayoritaria para garantizar el control de las decisiones.

Junio 1

Eduardo Fernández, de Copei, declara que no habrá nacionalización petrolera si es aprobado el artículo 5º propuesto por AD. Dice que son dogmá-

ticos quienes se enfrentan a la opinión mayoritaria del país, que el capital privado puede participar en otras áreas pero no en las industrias básicas, y que es absurdo fijar en una Ley la forma cómo se va a ceder a las futuras presiones. En declaración oficial la dirección nacional de Copei se muestra en desacuerdo con el fondo y los términos del artículo mencionado.

En reportaje firmado por el periodista César Messori se indica que en 1973 y hasta 1978 Venezuela se comprometió a crear empresas mixtas en acuerdo firmado con Rumania en Caracas el 10 de septiembre de 1973 por el ex canciller Calvani. Señala que tales empresas se acordaron para las áreas de producción y comercialización.

Tiberio Faría, vocal de AGROPET, y Raúl Miguelino, presidente de la sección metropolitana de esa agrupación, manifiestan que ésta cuestiona el artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera redactado por AD y en el cual establece una serie de restricciones y de detalles totalmente innecesarios que atan de manos al Ejecutivo Nacional. Además el mismo es casi un reglamento a una Ley en vez de conservar los términos conceptuales de un marco más amplio tal como lo pauta la redacción original de dicho artículo presentado por el Ejecutivo Nacional. Por consiguiente, expresan que AGROPET es partidaria de que la Ley de Nacionalización Petrolera sea aprobada con el artículo 5º presentado por el Gobierno Nacional. En torno a la denuncia del Colegio de Contadores Públicos de que las empresas petroleras deben casi cinco millones al país, señalan que AGROPET no ha estudiado el asunto.

Junio 2

Según análisis de AGROPET, al convertirse la nación venezolana en propietaria exclusiva de la industria petrolera debe cuidar y asegurar que las decisiones continúen tomándose rápidamente y que no se convierta la industria nacionalizada en una pesadilla burocrática de consultas e informaciones, porque de lo contrario aquélla puede confrontar situaciones técnicamente conflictivas. Es necesario, por tanto, establecer un sistema de planificación que asegure la eficiencia de la industria de los hidrocarburos.

La dirección nacional del MAS emite su declaración oficial en torno al informe presentado por la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados en el cual se presenta una nueva redacción del artículo 5º. Señala que rechaza esta redacción por cuanto se contempla la creación de empresas mixtas. Rebate asimismo las asociaciones para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco,

y considera que el gobierno miente cuando estima como indispensable la asociación con capitales foráneos.

El ex canciller Arístides Calvani responde, con respecto al acuerdo celebrado con Rumania, que éste no consagra empresas mixtas. En su opinión, la información de prensa firmada por César Messori es deliberadamente confusionista. Invita al ministro de Relaciones Exteriores a un debate público para clarificar los planteamientos en torno al problema.

Con el voto mayoritario de AD y la reserva de todos los partidos de oposición se aprueba en la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados el informe definitivo sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Dirigentes de oposición señalan que AD logra ahora el consenso pero en contra del artículo 5º. Freddy Muñoz declara que ese partido ha convertido en dogma el establecimiento de empresas mixtas. Por su parte, Celestino Armas considera que no se han presentado "discrepancias en el fondo de la materia".

Junio 3

El doctor Aníbal Martínez considera que con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco se debe rechazar cualquier tipo de asociación. Señala que si en el presente año se aprueba la Ley de Nacionalización Petrolera nos veremos obligados a continuar utilizando los canales actuales de comercialización con algunas variantes. En su opinión somos culpables de no haber promovido desde hace muchos años una organización de venta y distribución de nuestros crudos; era más fácil que las oficinas de las casas matrices se encargaran de ello. Agrega que algunos piensan que en muchos casos se trataba de imposiciones de las transnacionales para controlar esa importante fase del negocio petrolero.

José Manzo González, de AD, afirma que Copei ha sido el abanderado de las empresas mixtas en el país. Esto lo justifica el acuerdo suscrito con Rumania por el ex canciller Arístides Calvani para la comercialización y producción petroleras. Por ello —indica— resulta extraña la conducta de Copei en relación al artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera.

Junio 4

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, considera que el artículo 5º debe ser aprobado tal como lo presentara el Presidente de la República. La aprobación de aquél no significa que se vayan a crear empresas mixtas desde el primer momento. Es sólo una medida de previsión para

el futuro. Niega que el gobierno esté presionado por las empresas transnacionales, afirmando que en los mercados es importante la constitución de empresas mixtas y en la refinación también existe esa posibilidad.

Rómulo Henríquez, del MIR, señala que la nacionalización petrolera debe servir para alcanzar el desarrollo económico del país, y, por ende, la independencia económica. No hay que olvidar que las transnacionales son enemigas de esto. Por eso, el MIR se opone al artículo 5º en tanto abre la posibilidad de que intervengan tales corporaciones. Agrega que a las compañías no les interesa ya el régimen de concesiones. En cambio, las empresas mixtas les permiten seguir en el negocio petrolero que es el más rentable del mundo. Esas empresas, en opinión de Henríquez, apuntan ahora hacia la Faja Petrolífera del Orinoco.

El doctor Gonzalo Barrios declara que AD no es un partido "incondicional", ni siquiera de su gobierno cuando comenta que las empresas mixtas se aprobarán "sólo cuando se necesiten". Agrega que un gobierno no puede hacer lo que quiere porque su partido tenga mayoría. El proyecto de Ley no establece obligatoriedad de las empresas mixtas, sino las posibilita para cuando sea necesario. Considera que al Estado no debe atársele de manos, se debe prever una asociación con entes privados cuando sea conveniente.

Junio 5

En torno a las declaraciones del ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, referidas a que ese despacho considera preferible el artículo 5º enviado por el Ejecutivo, y las del doctor Gonzalo Barrios cuando señala que AD no es incondicional del gobierno, Celestino Armas declara que no hay divergencias entre AD y el propio gobierno. Considera que el criterio del ministro es unilateralmente técnico. Freddy Muñoz indica que aun cuando Gonzalo Barrios dice que AD no es incondicional del gobierno muestra, sin embargo, su acuerdo en determinados momentos, vota y decide de una sola manera como sucedió con el artículo 5º en la Comisión de Minas. Con respecto a lo dicho por el ministro de Minas, considera Freddy Muñoz que debe agradecérsele su franqueza por cuanto se ponen de manifiesto las contradicciones del gobierno. Ha expresado el ministro abiertamente que las empresas mixtas "son una necesidad" mientras algunos voceros de AD pretenden presentar su posición en forma complicada.

El doctor Jóvito Villalba declara que no está de acuerdo ni con una nacionalización mentirosa ni con el deterioro de la industria y la renta nacional.

Muestra sus reservas con respecto a las empresas mixtas y los contratos operativos por cuanto de ambas modalidades pueden derivar graves problemas para el país. Se muestra optimista frente a la nacionalización petrolera y piensa que puede conducirnos hacia la independencia económica.

Se inicia en la Cámara de Diputados el debate sobre la nacionalización petrolera. Carlos Canache Mata, entre otras cosas, hace un recuento de los países donde se cumplen procesos de nacionalización con la participación de empresas privadas. Eduardo Fernández, de Copei, señala que el consenso es imposible. Copei apoya decididamente la nacionalización integral de la industria. Freddy Muñoz, del MAS, estima que las mayores posibilidades que se presentan residen en que el debate concluya dentro de grandes divergencias, y se pronuncia también por la nacionalización integral.

Junio 6

El comando nacional del MEP anuncia que se reunirá con el doctor Rafael Caldera para analizar la nacionalización petrolera. El doctor Luis B. Prieto Figueroa señala que el gobierno modifica el artículo 5º para satisfacer compromisos electorales, ya que las compañías petroleras aportaron 300 millones de bolívares para financiar la campaña del candidato de ese partido en 1973.

El partido Copei alerta a la opinión pública y a su militancia sobre los graves riesgos y peligros que correrá Venezuela si se aprueba el artículo 5º. Apoya la idea de contratos operativos por considerarlos como la mejor garantía para evitar la creación de empresas mixtas o cualquier tipo de asociación propuesta por AD.

Junio 7

Declara en Maiquetía el Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, a donde asiste para despedir al Presidente de Rumania, que su gobierno está decidido a nacionalizar la industria petrolera. Al referirse al artículo 5º del proyecto de Ley que se discute en el Congreso, señala que no defiende las empresas mixtas, que el gobierno sólo las plantea como una posibilidad. Refiere que tanto el carbón como el oro y aluminio se explotaban por empresas mixtas y hoy son venezolanas por vía de la nacionalización.

Junio 9

URD propone nueva fórmula con respecto al artículo 5º. Se trata de dividirlo en cuatro numerales distintos con el objetivo de reducir las diferencias en torno al mismo. Los numerales se refieren: uno a la exclusividad en cuanto a

la propiedad de la empresa y la contratación operativa; otro relativo a las operaciones internacionales y las asociaciones que puedan realizarse; el tercero relacionado con las normas de una política energética, y el cuarto concerniente a las empresas mixtas. Esto lo anuncia Leonardo Montiel Ortega, quien añade que las empresas petroleras no tienen interés en participar en empresas mixtas donde lo harán como socios minoritarios, para señalar que los contratos operativos son más peligrosos y atraen el interés de las compañías para asegurar el abastecimiento.

En la segunda sesión de la Cámara de Diputados para la discusión de la Ley de Nacionalización Petrolera intervienen Siuberto Martínez, del MEP, Lorenzo Salazar, del FDP, y Ramón Tenorio Sifontes, de URD, quienes ratifican su oposición a las empresas mixtas. Pablo Salas Castillo, de Cruzada Cívica Nacionalista, apoya el proyecto de Ley que se discute, es decir, el presentado por el Ejecutivo Nacional.

Junio 10

Según declara el licenciado Luis Lizardi, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela muestra su rechazo a la constitución de empresas mixtas, considera que la nacionalización debe ser integral sin utilizar el disfraz de las empresas mixtas que sólo sirve para que éstas impriman su filosofía monopolista y manejen el negocio para obtener utilidades. Asimismo se muestra partidario de la indemnización siempre que ésta retribuya a la nación el valor de 120 millones de barriles de petróleo que las compañías en exceso han extraído de sus concesiones. La Federación sugiere que la negociación se haga soberanamente de gobierno a gobierno, y estima que con las empresas mixtas las grandes beneficiarias serán las compañías extranjeras.

Las declaraciones de Leonardo Montiel Ortega son comentadas por voceros de partidos políticos de izquierda. El diputado del MAS, Freddy Muñoz, considera que Montiel está equivocado cuando afirma que los contratos operativos son más peligrosos que las empresas mixtas. Estas son innecesarias y dañinas y los primeros pueden resolver dificultades que se presenten al Estado al operar la industria. Añade que la división del artículo 5º no modifica en absoluto la cuestión de fondo que en el mismo se plantea. Alcides Rodríguez, del PCV, estima también que las subdivisiones del artículo 5º que propone URD dejan exacto el problema. Rómulo Henríquez, del MIR, señala que las empresas petroleras en las condiciones actuales no van a dejar de participar aun en calidad de socios minoritarios, cuando no tienen otra posibilidad.

El Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) da su apoyo a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela señalando que la dirección de los intereses extranjeros no ha coincidido siempre con el interés nacional. El CIES examina la situación económica de Venezuela y señala que este país logró el más alto producto *per capita* de América Latina en 1974 gracias al aumento del precio del petróleo.

AGROPET, organismo portavoz de los empleados y técnicos de la industria petrolera, apoya al ministro de Minas e Hidrocarburos en su planteamiento sobre la conveniencia de respetar la redacción del artículo quinto propuesto originalmente por el Ejecutivo Nacional. Así lo manifiesta el vicepresidente de esa agrupación, doctor Rafael Pérez Alvarez, y agrega que el citado artículo se orienta específicamente hacia la obtención de tecnología. Desgraciadamente —dice— necesitamos también la experiencia gerencial y administrativa global del negocio y a mediado plazo necesitamos *capitales de riesgo* para la exploración de nuevas áreas.

Los dirigentes del MEP, doctores Luis B. Prieto Figueroa y Jesús A. Paz Galarraga, se reúnen en la casa del doctor Rafael Caldera para discutir un plan de acción contra la Ley de Nacionalización propuesta por el gobierno. Informa Prieto Figueroa que el presidente Caldera ratifica su oposición a la creación de empresas mixtas. Considera Paz Galarraga que la vía del Parlamento se ha agotado, y por ello proponen un plan de acción para movilizar los distintos sectores del país.

Junio 11

La Junta Directiva de la Sociedad de Economistas Petroleros, Petroquímicos y Mineros fija su posición sobre la nacionalización petrolera. Entre las conclusiones señalan que están dadas las condiciones necesarias para que el Estado asuma la conducción de todas las actividades de la industria, sin que las compañías petroleras continúen inmiscuidas en las decisiones sobre inversiones, niveles de explotación y comercialización de los hidrocarburos. Considera, por otra parte, que los recursos humanos, tecnológicos y financieros del país son suficientes para garantizar a corto y mediano plazo las actividades petroleras. Recomienda que el gobierno apruebe a la mayor brevedad la Ley de Nacionalización, rechazando la creación de empresas mixtas, y que el cese de las concesiones se materialice en el mismo instante en que sea sancionada la Ley.

Es instalada en la Universidad Central de Venezuela la Escuela de Petróleo cuyo objetivo es preparar los ingenieros que requiera la nacionalización petrolera. Al acto asisten el Decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Marcelo González, el Director de la Escuela de Química y Petróleo, profesor Rafael Martín y el Director del Departamento de Petróleo, profesor Eugenio Martínez. La Escuela se inicia con 300 alumnos y en tres años se habrá quintuplicado el número de estudiantes de petróleo.

El ex Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, propone una reunión de trabajo con todos los partidos políticos como intento definitivo para la búsqueda de un consenso nacional en torno a la Ley de Nacionalización. Los llamados a convocar esa reunión a la que asistirá AD son varios independientes encabezados por Reinaldo Cervini. El MEP había propuesto una reunión con los partidos que adversan al artículo 5º, pero Rafael Caldera la sugiere más amplia abriendo una nueva posibilidad para el consenso.

El ministro de Estado para la Planificación, Gumersindo Rodríguez, explica ante el Consejo Económico y Social de la OEA en Washington, la estrategia que seguirá Venezuela en la nacionalización petrolera. Señala, entre otras cosas, que el Estado asumirá el control integral de la industria, conservación de los recursos, incremento de la capacidad, cambio de los patrones de refinación y diversificación de los mercados; formación de técnicos y desarrollo de la investigación tecnológica. Se refiere a la venta internacional de los hidrocarburos y critica la concentración de la misma hacia un reducido número de mercados, especialmente el norteamericano y canadiense. Dice que esto es el resultado de las políticas establecidas por las compañías multinacionales que han venido operando en Venezuela.

Según declara Oswaldo Alvarez Paz, Copei no es enemigo del capital privado. Esto "lo demostramos en los cinco años que nos tocó gobernar". Dice que han apoyado la creación de empresas mixtas "porque las consideramos útiles". Pero Copei se opone a las empresas mixtas en petróleo en virtud de considerarlas un mal negocio para la nación. Estima que el verdadero debate sobre nacionalización no se ha dado y que la discusión en torno al artículo 5º es "absolutamente secundaria"; lo importante es garantizar la eficiencia de la industria. Considera un error que el gobierno trate de imponer su mayoría parlamentaria, pero afirma que Copei está dispuesto a asumir con el gobierno las consecuencias y riesgos de la nacionalización.

Junio 12

El doctor Francisco De Venanzi, ex Rector de la UCV, considera que la nacionalización petrolera crea una situación cualitativamente distinta para el país en tanto alcanzará mayor autonomía con respecto a la industria, y al mismo tiempo asume un gran compromiso, cual es el de mantener el desarrollo de aquélla a un nivel altamente productivo. Señala que debe prevalecer el criterio de eficacia de manera absoluta sobre los intereses partidistas o de grupos. Considera que en caso de no contar con los recursos técnicos suficientes en el país se puede acudir a la contratación de personal calificado para completar los cuadros de las empresas nacionales. Expresa el doctor De Venanzi que mientras Venezuela no produzca su propia tecnología no le queda otro camino que adquirirla en el exterior.

El doctor Godofredo González señala que las compañías petroleras pueden idear algunas amenazas contra el proceso de nacionalización, incluyendo una reducción hasta el 50 por ciento del petróleo venezolano que adquieran. Pero esto no debe influir en el proceso por cuanto de éste más importa el ejercicio soberano del Estado sobre esa actividad. Reitera que el gobierno le teme a la nacionalización integral y por ello trata de disfrazarla con las empresas mixtas.

En la continuación del debate en la Cámara de Diputados intervienen Alcides Rodríguez (PCV), quien señala que ese partido defiende una nacionalización integral para garantizar el desarrollo independiente del país, y justifica cómo aquélla puede realizarse sin empresas mixtas. Américo Martín (MIR), afirma que AD no está realizando una nacionalización "chucuta" sino una farsa. Señala asimismo los peligros que pueden presentarse en caso de que se establezcan empresas mixtas. Amado Cornieles (OPINA), considera que Venezuela ha dado un paso hacia atrás al no basarse para la nacionalización en el informe presentado por la Comisión de Reversión. Aquélla debe representar el consenso del país y no el de una minoría oligárquica que sirve de intermediaria para que las empresas petroleras sigan controlando esa actividad.

Los partidos políticos acogen la idea propuesta por el ex presidente Rafael Caldera de una reunión para buscar el consenso en torno a la Ley de Nacionalización y asistirán así a la reunión convocada en Pro Venezuela. Luis Beltrán Prieto Figueroa (MEP) considera, sin embargo, que la reunión es inútil por cuanto el partido de gobierno tiene ya una posición tomada con respecto a la nacionalización. Pompeyo Márquez (MAS), señala que ese partido no se niega a asistir a reuniones de este tipo pero advierte que cualquier acuerdo tiene

un límite, y en lo que respecta al artículo 5º es el de negar toda posibilidad a la participación del capital foráneo. Gonzalo Barrios (AD), y Simón Antoni Paván (URD) consideran positiva una reunión como la propuesta.

Celestino Armas, de Acción Democrática y presidente de la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, interviene en el debate sobre nacionalización petrolera. Señala que los partidos que quedaron "maltrechos en las elecciones" intentan recuperarse ahora con los planteamientos en torno a aquélla. Agrega que ninguna administración debe avergonzarse por la posibilidad de que se creen empresas mixtas. Dice que AD no se dejará arrinconar por las minorías. Interviene además Abdón Vivas Terán, de Copei, para señalar que ese partido se identifica con la nacionalización integral. Indica asimismo que es AD quien ha puesto en duda la capacidad del Estado para manejar la industria petrolera al proponer la creación de empresas mixtas.

Junio 13

En la Junta del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) reunida en Washington, el economista venezolano y funcionario de Cordiplán, Carmelo Salom, señala que la nacionalización de la industria petrolera será el factor dinámico que impulsará la industrialización de Venezuela y la independencia de elementos foráneos. Asimismo expresa que el Estado orienta sus esfuerzos en la formación de técnicos para evitar el peligro de la dependencia tecnológica externa.

El señor Antonio J. Díaz Martínez, presidente de Fedecámaras, señala que no obstante el desarrollo del debate sobre nacionalización en el Congreso, surge un clima más favorable para que los partidos puedan conversar sobre la posibilidad de lograr el consenso. Se refiere a la invitación que hace Pro Venezuela para una reunión con todos los partidos a la cual ha sido invitada Fedecámaras.

Alexis Ortiz, presidente del FREUCV, propone ante el Comité Ejecutivo del Frente de Reorganización Estudiantil de la Universidad Central convocar a un II Encuentro Nacional de Estudiantes con el objetivo de definir una nueva etapa en la lucha contra la mediatización de la nacionalización petrolera.

La Unión Patronal de Comercio, organismo económico privado, fija posición ante la nacionalización petrolera. Tras dar su apoyo al derecho que tiene cada

país de decidir sobre sus recursos naturales de la manera que estime más conveniente, expresa sus temores por el predominio de la política tal como se conduce el debate. Se pretenden adoptar posturas interesadas que quieren negar al Estado el derecho que le asiste de disponer de todas las alternativas operativas para lograr un manejo integral y eficiente de las complejas instalaciones petroleras. Señala que tal pudiera ser el caso del aprovechamiento oportuno de la experiencia de la empresa privada como se contempla en el artículo 5º del proyecto de Ley.

El historiador Augusto Mijares se muestra en desacuerdo con la estatización de la industria petrolera. Agrega que la política "ha contaminado" todas las actividades del país. Afirma que no estamos preparados para emprender la nacionalización con éxito. Si se repiten los fracasos ya "crónicos" en la administración del Estado no habrá fuente de ingresos para "seguir esa vida de cuentas alegres".

Junio 14

El economista Héctor Santaella considera que el propósito de crear empresas mixtas no está reñido con el concepto de nacionalismo; lo único que está reñido con éste es la mala administración. Estima como más conveniente las empresas mixtas antes que la contratación. Es mejor asociarse para captar la tecnología y para participar no sólo de las ganancias, sino también de los "riesgos en igual proporción". Afirma que la OPEP es en cierto modo una empresa mixta porque aun cuando no existe una inversión de capital ni una administración conjunta, hay compromisos muy definidos para operar en forma mancomunada y añade, Venezuela no ha sacrificado su soberanía dentro de la OPEP.

Fernando Báez Duarte, ex viceministro de Minas e Hidrocarburos, considera que el artículo 5º no lesiona la soberanía nacional por cuanto se trata de asegurar que la industria opere con eficacia especialmente en campos que no se dominan como son la tecnología y la comercialización. Con respecto a la primera considera que la poseen las compañías petroleras y no la venden sino que la negocian. En relación a la comercialización dice que los mercados no se pueden nacionalizar.

El jefe de la fracción parlamentaria del MEP, Siuberto Martínez, considera que los convenios operativos propuestos por la Comisión Presidencial de Reversión en caso de ser necesarios son suficientes para que el país maneje con eficiencia la industria nacionalizada. El empecinamiento del gobierno de crear

empresas mixtas obedece sólo al cumplimiento de compromisos electorales de algunos sectores de aquél con las compañías petroleras.

El diputado socialista Freddy Muñoz declara que en el partido de gobierno se advierte una cierta desesperación con respecto a la cuestión petrolera que se manifiesta en el tono adoptado por quienes defienden la posición de AD. Considera el discurso pronunciado por Celestino Armas en el Congreso como insolente, agresivo y gratuitamente alevoso en contra de quienes mantienen una posición adversa. Dice Celestino Armas, entre otras cosas, que AD "no se dejará arrinconar por minorías" como no se dejó arrinconar por dictaduras.

Junio 15

El doctor Godofredo González, de Copei, declara en Cumaná que el gobierno le tiene miedo a la nacionalización petrolera. Se siente incapaz por sí mismo de manejar la industria. Recuerda que la primera proposición que surge para la creación de empresas mixtas la hace el Presidente de la República contemplando que la asociación puede ser con capital nacional o extranjero. Proposición que luego es modificada por AD que restringe la asociación sólo a capitales foráneos.

Para el Partido Comunista, señala Radamés Larrazábal, no existen suficientes reservas técnicas ni económicas que avalen las empresas mixtas o convenios de asociación con las transnacionales. Le preocupa que la Faja Petrolífera del Orinoco pueda ser negociada y sostiene que intereses de seguridad nacional y militar obligan a conservar la Faja.

Junio 16

En reunión convocada por la Asociación Pro Venezuela en su intento de lograr un consenso de todos los partidos para aprobar la Ley de Nacionalización no se llega a ningún acuerdo. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que AD y Copei apoyen la iniciativa de aquella institución en el sentido de permitir los convenios de asociación con entes privados con la aprobación previa de una mayoría calificada del Congreso. Los partidos MAS, MIR, MEP, PCV y URD se oponen a la proposición. El último de éstos insiste en su tesis de asociación sólo fuera del territorio nacional.

Declara el señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, que el Comité Ejecutivo de esa organización acuerda reiterar su respaldo al artículo 5º original aprobado por la Comisión Presidencial de Reversión como ratificación del do-

cumento que habían entregado al Presidente de la República en febrero de 1975, documento que en aquella ocasión fue también firmado por Fetrahidrocarburos y la CTV.

En la continuación del debate sobre la Ley de Nacionalización Petrolera en la Cámara de Diputados interviene el doctor Simón Antoni Paván, de URD, quien explica los convenios de cuenta en asociación que ha propuesto ese partido. El doctor Pedro Tinoco interviene para señalar que al país no puede negársele la libertad de asociarse con quien más le convenga. D. F. Maza Zavala, independiente, comienza reivindicando la memoria de Salvador de la Plaza quien clamó siempre por la nacionalización de la industria petrolera. Agrega Maza Zavala, entre otras cosas, que el criterio de la nacionalización debe ser esencialmente liberador. Rafael Tudela, independiente del FDP, señala con respecto al artículo 5º que no le gustaría ver al Estado en inferioridad de condiciones.

Junio 17

El directorio de Fedecámaras anuncia que convocará "una cita inicial con el país". El llamado se hará a colegios profesionales, organizaciones económicas e instituciones nacionales para discutir la Ley de Nacionalización y los efectos previsibles que ésta pueda tener en cuanto a organización operativa y la capacidad del Estado para asumir el control de la industria.

Una comisión integrada por representantes del MIR y de independientes constituida para luchar contra la corrupción administrativa solicita se descuente la cantidad de Bs. 395.021.846 de la indemnización que le corresponde a la compañía Texaco según la Ley de Nacionalización, por evasión de impuestos y multa al comprar a "The Superior Oil Company" todas sus acciones y activos así como sus pasivos.

El señor Eugenio Mendoza declara sobre la nacionalización petrolera y dice que el Estado debe mantener el máximo control de las operaciones, pero es necesario evitar disposiciones legales que le coarten sus opciones de negociación. Afirma que para resolver el problema del mercadeo y el transporte del petróleo el Estado debe contar con la colaboración de las grandes empresas, las cuales tienen experiencia en esas áreas. A las empresas que forman el complejo petrolero debe dárseles, en su opinión, una estructura similar a la de las privadas a la vez que liberarlas al máximo de las presiones políticas.

En mensaje especial televisado el presidente de Copei, senador Godofredo González, ratifica su convicción de que la nacionalización es un hecho inevitable, necesario y conveniente para los intereses de la nación. Respalda el que aquélla se realice de manera integral rechazando las empresas mixtas. En su opinión el gobierno aún tiene tiempo para rectificar su posición sobre la cuestión petrolera. Acusa a aquél de mantener una política soberbia y sectaria sobre la nacionalización que en vez de unificar divide a los venezolanos.

Junio 18

En el debate parlamentario interviene el doctor Rafael Tudela y expresa que es imprescindible una versión del artículo 5º que le permita al Estado negociar en igualdad de condiciones con otros Estados competidores. Señala que los partidos de oposición creen que podemos dominar todas las áreas de la industria "sin preparación y sin cooperación". Una asociación nos garantiza la tecnología, por ejemplo de refinación, con la cual no contamos en el país. Tampoco debilita el concepto de nacionalización la asociación en el uso de flotas petroleras mientras se desarrolle en base a experiencias de otros nuestra capacidad en ese ramo. En el mercadeo la propia CVP participa en forma asociada con empresas extranjeras.

El ex presidente de la Mene Grande, doctor Jesús Alcalá Sucre, estima que el posible consenso sobre el artículo 5º es mucho menos importante que el consenso que debe buscarse para estudiar cómo va a operar la industria una vez nacionalizada. Considera el debate sobre el artículo 5º como innecesario y lo atribuye a posiciones políticas. Explica que es conveniente aquél porque al Ejecutivo debe dársele flexibilidad. Ahora bien, ello no indica que luego de nacionalizada la industria se establezcan de inmediato los contratos de asociación que en verdad, según refiere, no son empresas mixtas. Agrega asimismo que tales contratos serán aprobados por el Congreso Nacional.

El ex Rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor Jesús María Bianco, considera que las empresas mixtas servirán para mediatizar el proceso de nacionalización de la industria petrolera. A través de ellas las corporaciones transnacionales continuarán usufructuando el excedente económico generado en el país, y extrayendo altos beneficios económicos de la comercialización del petróleo. Esto lo harán sin incurrir en riesgos y sin aportar recursos para la producción. En su opinión la tecnología puede ser contratada tal como lo hacen las concesionarias, según informe del INVEPET.

El senador Hermógenes López se identifica plenamente con las empresas mixtas. Considera que sería un error del Congreso nacionalizar sin empresas integradas con capital privado y estatal para llegar a una efectiva tecnificación. Afirma que es por culpa de los partidos de corte comunista quienes por demagogia han hecho que "se encrespen las pasiones" en torno al debate sobre nacionalización. Señala que esos partidos son URD, MAS, MEP, MIR.

El diputado socialista D. F. Maza Zavala en su intervención en la Cámara de Diputados afirma que en 50 años de explotación la única eficacia de las petroleras ha sido latrocinar al Fisco. Además han acabado con los recursos naturales, con la fauna, la ecología. No han creado en 50 años tecnologías independientes para explotar y refinar el petróleo; ni han diversificado los mercados sino que han concentrado la demanda en el mercado norteamericano. De esto, según el doctor Maza Zavala, deriva la coyuntura crítica, con más del 50 por ciento de nuestra producción, y por lo cual pueden maniobrar. De allí que se tenga la convicción de que la nacionalización "debe nacer apoyada en las muletas de las empresas mixtas". El criterio fundamental de aquélla debe ser liberador. Es evidente que existe un "complejo tecnológico", es decir, que sin las compañías no podemos operar. Considera que para explorar, explotar, bastan las empresas de servicio. Estima que el gran reto planteado es ir al mercado internacional directamente. Recuerda que no estamos solos en tanto pertenecemos a la OPEP que es eficaz en el mercado internacional. La solidaridad de la OPEP es el mejor respaldo a la nacionalización integral de la industria.

El ingeniero Humberto Peñaloza expresa que las asociaciones son recomendables en la comercialización del petróleo para garantizar el poder de penetración en el mercado internacional. Considera que la nacionalización tal como está planteada en Venezuela es integral, pero afirma que tenemos limitaciones en varias áreas. Piensa que la Faja Petrolífera del Orinoco debe reservarse al mercado interno y no estar sujeta a ningún tipo de asociación. Apoya las asociaciones a nivel internacional y las rechaza en el territorio nacional.

En declaraciones del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se señala que la propuesta de Pro Venezuela no resuelve lo esencial de la nacionalización que es saber si el artículo 5º contemplará la posibilidad de convenios de asociación o si por el contrario les cerrará las puertas. Considera que Pro Venezuela se pronuncia por lo primero a pesar de que introduce la variante de que sea aprobado por una mayoría calificada del Congreso. La iniciativa de

Pro Venezuela, en opinión del MIR, ha fracasado porque los puntos de vista son excluyentes. Se trata de escoger entre el criterio nacional y el petrolero-empresarial, entre independencia y subordinación.

El diputado de AD David Morales Bello, en el debate parlamentario sobre la nacionalización, señala que si no se logra el consenso ese partido impondrá su mayoría parlamentaria para la aprobación de la Ley. "No nos dejaremos gobernar por minorías y nos asiste la fuerza política para nacionalizar". Por su parte, Salom Meza Espinoza expresa que el MEP desea una nacionalización integral, indicando que ese partido espera que el petróleo sea administrado de tal manera que haga desaparecer los "traficantes que provocan un daño moral y económico al país".

Junio 19

En opinión del doctor Carlos Lander Márquez no se ha expuesto ningún criterio realmente técnico por parte de los partidos que rechazan el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización. Considera que aquéllos se han dejado arrastrar por un debate que "no tiene sentido". Acusa que es criminal nacionalizar la industria atando de manos al gobierno. Lo que en buena lógica persiguen los partidos de izquierda —dice— es que la nacionalización fracase. La proporción de empresas mixtas es una fórmula previsiva que garantizaría que la industria opere sobre bases de eficiencia.

El presidente del Congreso Nacional, doctor Gonzalo Barrios, declara que sólo AD tiene una posición susceptible de ganar el consenso, ya que toma en cuenta tanto la opinión de los que consideran innecesarias las empresas mixtas y la de quienes no quieren arriesgar la abundancia fiscal actual sin tomar precauciones. Considera que la posición de Copei, según el documento emitido por este partido, es una de las más vulnerables que ha presentado la oposición sobre nacionalización petrolera. Estima que los resultados inmediatos de ésta se traducirán en una reducción transitoria de la renta petrolera por los desajustes inevitables que ocurrirán especialmente en la comercialización internacional.

Denuncia Freddy Muñoz, diputado por el MAS, que el gobierno hace uso en forma ventajista de los medios de comunicación para desvirtuar los planteamientos de la oposición con respecto al debate petrolero. Asimismo señala que AD busca un consenso basado en la aceptación obstinada de su dogma: las empresas mixtas. AD, según Muñoz, es el factor determinante en la ruptura del consenso.

Gustavo Machado, del PCV, interviene en el debate petrolero en la Cámara de Diputados para ratificar la oposición de ese partido a las empresas mixtas y el pago de indemnización a las petroleras. Américo Martín, del MIR, señala que el objetivo debe ser romper la dependencia externa para lo cual se requiere una política energética y unidad de mando sin interferencias del capital privado que entorpecerá la línea directiva que emane del Estado. El diputado independiente por AD, Numa Márquez, señala que debe aligerarse la nacionalización "por cuanto el discurso de cada diputado le cuesta al país 29 millones de bolívares". Dice además que la Ley no plantea empresas mixtas sino cuando el Estado no pueda resolver de otra manera alguna situación que se presente.

Junio 20

El doctor José Giacopini Zárraga, directivo de Pro Venezuela y asesor permanente de Fedecámaras, considera que el artículo 5º es una medida de prudencia porque en la industria petrolera son muchas las contingencias que pueden presentarse. Además existen varias formas de asociaciones operativas sin que el Estado pierda el control directo o total de la industria. Considera que en caso de que el Ejecutivo Nacional aplique el artículo 5º, lo hará respondiendo a los altos intereses nacionales.

En un almuerzo de la "Sociedad para el Desarrollo Internacional" celebrada en Washington, el diplomático venezolano Félix Rossi Guerrero manifiesta que las grandes empresas petroleras, en su mayoría norteamericanas, continuarán desempeñando un importante papel en el mercadeo y desarrollo técnico del petróleo venezolano después de la nacionalización de la industria petrolera.

En una declaración hecha pública por los dirigentes sindicales de AD y miembros del Comité Ejecutivo de Fedepetrol, señores Manuel Peñalver, Raúl Henríquez y Arístides Bermúdez, desmienten al presidente de Fedepetrol, Carlos Piñerúa, quien declara que en una nueva reunión del Comité Ejecutivo de esa Central obrera se había acordado una ratificación del documento que entregaran en febrero de este año al Presidente de la República. Agregan que esa declaración carece de fundamento, por cuanto no tienen noticias de que se haya efectuado la mencionada reunión para considerar la materia relativa a la nacionalización petrolera. Asimismo manifiestan su respaldo al artículo 5º.

Los sindicalistas de Acción Democrática y directivos de Fetrazulia, señores Juan Avila y Luis Pirela, declaran que la nacionalización de la industria petro-

lera debe hacerse de manera progresiva, por etapas, pues de realizarse en forma absoluta tendrían que utilizarse recursos tanto humanos como técnicos que Venezuela no está en condiciones de aportar. Señalan además que los sindicatos dominados por AD no asistirán al pleno de directivos que ha sido convocado para tratar el problema de la nacionalización petrolera.

El director del IVIC, doctor Luis Carbonell Parra, afirma que la nacionalización petrolera es una cuestión esencialmente económica y no política. Por ello considera que tanto en el debate como en la estructura que asuma el control total de la empresa estatizada debe privar un criterio técnico. Contamos con personal para la fase operacional, pero para refinación no disponemos de todo el personal que se requiere. Señala que la compra de tecnología puede hacerse tanto en los países capitalistas como en los socialistas.

Junio 21

El doctor Enrique Tejera París declara que prevé un "desastre" en caso de que los políticos penetren en la estructura de la industria nacionalizada. Es categórico cuando señala que "no estamos capacitados" para manejar una empresa tan compleja. El artículo 5º es producto de la "razón y la prudencia", se trata de la vida económica del país. Indica que aún se necesita la asociación para que nos aporten técnica y asesoramiento. Las compañías manejan secretos que se desconocen y que reposan en sus casas matrices.

Es conveniente para el país dejar prevista la alternativa de las empresas mixtas, así lo expresa el ingeniero Juan Jones Parra, director del Instituto de Petróleo de la Universidad Simón Bolívar. Considera aquellas empresas como imprescindibles, especialmente cuando se intercambian intereses de productos por tecnología, por mercado y por capital de riesgo. Señala que en la diferencia planteada por el artículo 5º una de las dos partes tiene la razón y es Acción Democrática.

El doctor Rafael Tudela considera que el debate petrolero generado en el Congreso Nacional ha sido positivo porque todas las fracciones políticas han emitido su opinión. Lamenta que las gestiones para lograr el consenso sobre el artículo 5º hayan sido infructuosas. No le teme a la nacionalización sólo que si no se toman las previsiones necesarias y se olvidan las limitaciones que tiene el país, aquélla puede convertirse en una reversión a la inversa. Propone que después del plazo de 120 días para la extinción de las concesiones se abra un período de transición durante el cual las anteriores compañías seguirán operando la industria "a nombre y en beneficio de la nación".

Señala el ministro de Relaciones Interiores, doctor Octavio Lepage, que el gran reto de la nacionalización es manejar el petróleo con la misma eficacia de las multinacionales. Agrega que tiene conciencia del riesgo que se asume, pero con la colaboración del país harán todo lo necesario para defender esa decisión soberana. Considera que lo importante es nacionalizar y lo demás, incluido el artículo 5º, es secundario al lado de esa gran decisión.

Junio 22

Según diagnóstico de INVEPET sobre "Transferencia Tecnológica de la Industria Petrolera", estudio entregado al ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, Venezuela tendrá que destinar alrededor de 1.000 profesionales y 350 millones de bolívares a las actividades de investigación y desarrollo de su industria nacionalizada. Se establecen diferencias con respecto a la dependencia tecnológica de acuerdo con las distintas fases de la industria. En la de exploración es más importante la de las empresas de servicio que las de las casas matrices; en producción son comparables los canales de transferencia tecnológica de ambas, y en la refinación desempeñan mejor función las casas matrices que las empresas de servicio.

En el Pleno de Economistas de Acción Democrática se decide un total respaldo al artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización presentado por el Ejecutivo Nacional. Estima ese pleno que no debe coartarse el poder de negociación del Estado y se muestra partidario, sin embargo, de continuar buscando el mayor consenso. De no alcanzarse éste debe hacerse uso de la mayoría parlamentaria.

En remitido hecho público el presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, plantea que en el actual momento es inconveniente a los intereses de los trabajadores venezolanos polemizar con los dirigentes obreros de AD integrantes del Comité Ejecutivo de Fedepetrol, porque con ello se haría el juego a las multinacionales tanto dentro como fuera del país. En el remitido el presidente de Fedepetrol hace referencia al documento aprobado el 14 de febrero de 1975 por el Consejo Directivo Nacional de esa organización, el cual además fue firmado por los dirigentes de Fetrahidrocarburos y por miembros de la CTV, y que fuera entregado al Presidente de la República el 16 de febrero, donde expresan su satisfacción por los favorables resultados que se obtuvieran del trabajo realizado por la Comisión de Reversión. Resultados que reflejan el amplio consenso sobre la materia, pues recogen la voluntad colectiva para la toma de decisiones sobre aspectos vitales de la economía y del destino de la

nación al plantear la nacionalización verdadera, inmediata e integral de la industria petrolera. Advierte asimismo que el Consejo Directivo de Fedepetrol no se ha vuelto a reunir desde entonces, quedando por consiguinte lo aprobado ese día como la línea de esa central obrera.

El doctor José Vicente Rangel declara en Maracay que las empresas mixtas comprometen el poder de decisión del Estado venezolano y permiten una injerencia peligrosa de las compañías transnacionales en las actividades de la industria nacionalizada. Agrega que la intención de nacionalizar la industria petrolera en la forma como se plantea se ha visto como algo superficial y considera que ello puede comprometer seriamente el futuro inmediato del país. No nos planteamos —indica— la nacionalización en términos rentísticos de un mayor incremento de los ingresos, sino como algo que tiene que ver con el desarrollo integral del país. Considera el doctor Rangel asimismo que quienes rompieron el consenso no tienen autoridad moral para reclamarlo.

El profesor Humberto Bártoli, de URD, al clausurar un pleno de campesinos de ese partido manifiesta que el artículo 5º propuesto por el Ejecutivo no favorece los intereses de la patria. Advierte que todos los dirigentes de URD han defendido la nacionalización integral y total de la industria petrolera. Hemos propiciado como fórmula flexible las negociaciones fuera del territorio nacional, pero rechazamos definitivamente la instalación de empresas mixtas dentro de él.

Junio 23

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, asiste al acto central del primer Aniversario de la Corporación de la Pequeña y Mediana Industria (Corpoindustria). En su discurso se refiere a la nacionalización petrolera y expresa que antes de finalizar el año el "petróleo será venezolano y para los venezolanos". La nacionalización no es sólo un hecho económico, sino que está vinculado con la decisión y voluntad de los venezolanos de ser totalmente independientes. El gobierno propone que en la Ley se abran al Estado todas las posibilidades para asegurar el éxito del proceso. Por esta razón indica que cuando sea necesario la asociación de capital extranjero, sin perder el país el control de ese petróleo, no vacilaremos en realizar la asociación.

El economista socialista Antonio Paiva Reinoso califica de antidemocrática y atentatoria contra los intereses nacionales la posición de los economistas del partido de gobierno que dan su apoyo a la nacionalización con empresas mixtas. Señala que el documento publicado por la Federación es el mismo que una

comisión de economistas presentara a la Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados alterando la redacción original donde se apoyaba la nacionalización integral de la industria petrolera.

Según declara Celestino Armas, Acción Democrática decide acoger la versión dada por el Ejecutivo Nacional al artículo 5º de la Ley de Nacionalización. Considera que los partidos de oposición han promovido una campaña bastante negativa cuando señalan incluso que desde muy pronto se constituirán empresas mixtas. No estima posible que la Ley se sancione el 5 de julio por cuanto el debate de las Cámaras se ha desviado hacia aspectos eminentemente políticos.

Declara el doctor Carlos Canache Mata, de AD, que hay posibilidades de acuerdo con algunas fuerzas políticas para aprobar la Ley de Nacionalización. Señala que hay un consenso esencial sobre la necesidad de que el Estado venezolano se reserve la industria y el comercio de los hidrocarburos. En su opinión, las discrepancias surgidas son secundarias. Manifiesta que la actitud asumida por Copei no lo ayuda a mantenerse como alternativa de poder, ya que el país mayoritariamente apoya la nacionalización, y ésta debe hacerse con cautela.

Es aprobado el artículo 1º de la Ley de Nacionalización con los votos de AD, URD y CCN. Los diputados de Copei, MAS, MEP, MIR y PCV salvan su voto por estar en desacuerdo con el plazo de 120 días para la extinción de las concesiones.

Freddy Muñoz, diputado del MAS, declara en la Cámara de Diputados que cuando AD plantea sus defensas al artículo 5º del proyecto del Ejecutivo pareciera dejar la impresión de que en el artículo elaborado por la Comisión de Reversión no hubiera tenido participación el partido de gobierno, cuando incluso la redacción definitiva correspondió a Celestino Armas, representante de AD. Lo que ha sucedido, según Muñoz, es que el partido de gobierno acepta las sugerencias de Fedecámaras y no las de organizaciones políticas con las cuales ha coincidido. Denuncia asimismo que AD siembra temores con respecto a la nacionalización petrolera.

Junio 24

Se informa que en la Escuela de Química de la Universidad Central de Venezuela trabajan profesores y estudiantes bajo la dirección de los doctores Luis Tugues, Nereida Carrión y Marcos Rosas Brusin, en el desarrollo de métodos analíticos que conducen a la obtención de tecnología para el tratamiento del petróleo

pesado que es el que tiene el país en mayor cantidad. Dice el doctor Tugues que la amenaza derivada de la falta de tecnología es el argumento que esgrimen quienes defienden las empresas mixtas. Considera que Venezuela "no debe caer en ese chantaje" ya que existen pequeñas empresas privadas altamente especializadas que también desarrollan tecnología y que a veces es más avanzada que la de las transnacionales.

La Exxon Corporation se convierte en accionista única de la Creole Petroleum Corporation de Venezuela. Las acciones de la Creole serán pagadas a $11,50 aunque estaban siendo cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York a 8,75 dólares. La Exxon señala igualmente que aunque el Congreso venezolano estudia un proyecto de Ley de Nacionalización petrolera, "puede haber un papel futuro para la Creole en el aporte de servicios, ayuda tecnológica y otra asistencia para la industria nacionalizada".

El Director de la Oficina Técnica de Minas e Hidrocarburos, doctor Arévalo Guzmán Reyes, señala que se toman las previsiones a corto y largo plazo para que la industria petrolera no sufra interrupciones debido a la nacionalización. Aquéllas se toman basándose en dos elementos: a) la presión exterior, es decir, la demanda; y b) el nivel de ingresos que requiere el gobierno. Agrega que después de la nacionalización, para los próximos cinco años se prevén inversiones del orden de los 9.000 millones de bolívares excluyéndose de esa cantidad las inversiones para la Faja del Orinoco y para el cambio de los patrones de refinación.

El doctor Rafael Pizani se muestra en desacuerdo con el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización. Señala que las empresas mixtas en la industria nacionalizada no son necesarias. En su opinión tanto la tecnología como el mercadeo pueden ser abordados a través de contratos de servicio y éstos pueden ser celebrados por el Ejecutivo Nacional sin necesidad del artículo 5º. Sustenta la opinión de aprobar una nacionalización integral que nos compense de los 50 y tantos años de explotación a que se nos ha sometido. Dice que la tecnología no tiene fronteras ni ideologías, que hay varios países como Italia, Francia, Rusia y Japón que cuentan con elementos técnológicos importantes, y afirma que es falso que aquélla sea dominio exclusivo y absoluto de las compañías.

Junio 25

El dirigente de AD y secretario de Relaciones Internacionales de la CTV,

Manuel Peñalver, declara que si sectores políticos, por razones de oposición en los escasos sindicatos o federaciones que dominan, fijan posición sobre el artículo 5º en nombre de cualquier organización obrera, los dirigentes sindicales de AD se considerarán en el legítimo derecho de auspiciar una reunión del Consejo General de la CTV para exponer, en nombre de la máxima central obrera y con la mayoría absoluta que detenta ese partido, su posición que no es otra sino el pensamiento de la inmensa mayoría del proletariado nacional. Señala además que en la Cámara de Diputados sólo se han esgrimido razones políticas y no técnicas para adversar el artículo 5º.

La compra de acciones a los socios minoritarios de la Creole por parte de la Exxon tiene como finalidad principal agilizar y facilitar el proceso de nacionalización petrolera en Venezuela. Es esta la opinión del doctor Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation en Venezuela, quien agrega que, una vez nacionalizada la industria petrolera, las concesionarias cuentan con una serie de atributos que pueden ser de interés para ser utilizados por el Estado y entre ellos menciona el apoyo tecnológico y la comercialización del petróleo.

El doctor Julio César Arreaza señala que algunas personas suponen que inmediatamente después de promulgada la Ley de Nacionalización se constituirán empresas mixtas, como asimismo se cree que las compañías petroleras se irán del país. Agrega que ninguna de esas cosas son ciertas. Las empresas mixtas se tienen como una previsión y las compañías Shell, Creole, Mobil, Mene Grande, entre otras, se quedarán para atender al cumplimiento de compromisos de otro tipo derivados de la nacionalización. Estima como más factible que se celebren convenios de asociación, que es también necesario cambiar el patrón de refinación, pero el Estado no puede hacerlo con sus propios medios, por lo cual es posible realizarlo a través de convenios de asociación con empresas que tengan la tecnología necesaria.

El comandante de Elementos Orgánicos del Ejército, general de Brigada Luis Ramos Martínez, señala en un discurso en el Fuerte Tiuna que los militares no pueden permanecer indiferentes ante la controversia que se produce a raíz del debate sobre nacionalización petrolera. Previene contra cualquier fisura en la integridad de las Fuerzas Armadas que pueda incidir negativamente en el respaldo que se debe dar a toda disposición que tienda a la prosperidad y soberanía del país.

Abdón Vivas Terán, de Copei, declara que el gobierno no debe temer a una nacionalización integral ya que Venezuela está en capacidad de superar cualquier obstáculo que se presente como consecuencia de la realización de aquélla. Antonio Armas Camero, diputado del mismo partido, señala que de aprobarse la Ley propuesta por el Ejecutivo el país pasará de dueño de su riqueza a socio de las empresas transnacionales.

En la continuación del debate parlamentario sobre la nacionalización petrolera interviene Ramón Tenorio Sifontes, diputado por URD. Con respecto al artículo 2º se muestra partidario de que el Estado venezolano debe negociar su petróleo directamente con otros gobiernos. Propone que se añada al final de ese artículo que los contratos de suministro que realice el Estado o entes estatales que lo representen con los particulares, deben tener una duración no mayor de tres años, señalándose además en tales contratos que el Estado o los entes estatales fijarán los precios reales de venta y participarán en todas las etapas de comercialización. Germán Lairet, del MAS, y Abdón Vivas Terán, de Copei, apoyan la proposición de URD la cual es rechazada por AD. Se presenta el artículo 5º propuesto por el Ejecutivo Nacional y tanto el MEP como el MAS ratifican su oposición al mismo.

La fracción parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) deja constancia escrita del voto salvado emitido en la aprobación del artículo 1º del proyecto de Ley de Nacionalización que contempla el plazo de 120 días para la extinción de las concesiones. Ratifica asimismo su posición sobre una nacionalización integral de la industria y el comercio de los hidrocarburos. Señala que AD tiene toda responsabilidad en la ruptura del consenso no sólo con respecto al debatido artículo 5º sino también en la aprobación del artículo 1º. Por la fracción parlamentaria firman el documento Germán Lairet, José Vicente Rangel, D. F. Maza Zavala, Freddy Muñoz, Juvencio Pulgar, Alonso Palacios, Argelia Laya, Rafael E. Martínez y Orlando Fernández.

Junio 26

El sector privado, según declaraciones de Fedecámaras, muestra preocupación por el giro que ha tomado en el Congreso la discusión sobre el proyecto de Ley de Nacionalización. Se señala que ese organismo instrumentará una estrategia para orientar a la colectividad sobre la decisión que se va a tomar, ya que "está en juego el futuro económico de todos los venezolanos, así como la estabilidad y continuidad del sistema democrático".

El doctor Edmund Gullion, Decano de la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, declara, antes de regresar a Estados Unidos, que las nacionalizaciones en Venezuela del petróleo y el hierro se están realizando sin hostilidades contra las firmas norteamericanas. Dice que las empresas serán compensadas y ayudarán en la distribución y otros campos de esas industrias. Señala que Venezuela merece el respaldo y trato especial por parte de Estados Unidos, y no puede olvidarse que aquel país nunca ha suspendido el suministro de petróleo a Norteamérica.

Alberto Quirós Corradi, presidente de la Compañía Shell de Venezuela, opina que las empresas mixtas no son necesarias para el arranque de la industria petrolera nacionalizada; cree además que pensar *a priori* en ellas es caer en el mecanismo sin analizar los objetivos.

El partido Copei hace un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento a suscribir un "pacto nacional" que permita unificar las opiniones sobre la nacionalización petrolera. El planteamiento lo hace el doctor Godofredo González, quien señala además que una nacionalización fundada sobre un voto de simple mayoría tiende a fracasar. El senador González emplaza al gobierno a aclarar los grandes riesgos de que ha hablado el presidente Carlos Andrés Pérez y a definir la forma en que operará la industria ya nacionalizada.

El doctor Aníbal Martínez cuestiona las razones expuestas por la Creole para la absorción que de sus acciones hará la Exxon. La Creole argumenta que ello se realiza para aligerar el proceso de nacionalización petrolera. Considera Martínez que en el país se emprende una nacionalización de las empresas privadas y sería una incongruencia que las compañías efectúen acciones normales del Estado.

Junio 27

El Consejo Nacional de Economía se pronuncia favorablemente respecto al artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización, señalando que tiene pleno fundamento jurídico en la Constitución. Esta faculta al Ejecutivo (Art. 190, numeral 15) para celebrar contratos que interesen a la nación. Ese Consejo considera que cualquiera de los mecanismos que se adopten (empresas mixtas, contratos de servicio u otra fórmula asociativa) constituye una solución adecuada que no vulnera los intereses del país y su justificación se apoya en elementos técnicos y económicos.

El señor Carlos Luna, secretario de prensa y propaganda de la CTV y dirigente del partido Acción Democrática, declara que la creación de empresas mixtas en la industria petrolera confiere al Estado la facilidad necesaria para desarrollar en el país las técnicas y los métodos en los cuales somos deficientes. Agrega que el período de transición entre el sistema vigente de concesiones y la nueva estructura de la industria nacionalizada ha sido excesivamente largo y ello puede acelerar el éxodo del personal más calificado.

El doctor J. J. González Gorrondona, presidente del Banco Nacional de Descuento, declara que sea cualquiera la fórmula que en definitiva se adopte para la nacionalización es probable que se produzca un período de transición donde tengan lugar ciertos desajustes que afecten temporalmente la economía. Añade que dada las características de la comercialización del petróleo y tomando en cuenta la experiencia de otros países productores, debe adoptarse una política que confiera al Estado suficiente capacidad de negociación.

El doctor David Morales Bello, secretario general de Profesionales y Técnicos de AD, opina que si ese partido y el gobierno cometen errores en la nacionalización petrolera la "vida institucional del país puede zozobrar". Con respecto a las críticas que se formulan al plazo establecido de 120 días para hacer efectiva la nacionalización, señala que no existe ningún principio jurídico que consagre el que se haga efectiva en el momento mismo en que se promulgue la Ley. Ratifica que el artículo 5º no es violatorio de la Ley porque no es cierto que en Venezuela la reserva que involucra nacionalización conduzca a la estatización.

El diputado Abdón Vivas Terán, del partido socialcristiano Copei, propone a nombre de esa organización un nuevo artículo 5º para ser discutido en el Congreso Nacional. Recoge en su primera parte el texto redactado por la Comisión Presidencial de Reversión y admite luego los convenios de asociación cuando convenga al interés público con entes privados, con una duración determinada y con autorización de las Cámaras en sesión conjunta, sin que tales convenios puedan firmarse para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco. En su intervención Vivas Terán justifica la posición del partido Copei contra las empresas mixtas.

Junio 28

El doctor José Rafael Domínguez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Petróleo y Director de Exploración y Producción de la Shell,

señala que la preocupación de los venezolanos que manejan la industria petrolera, próxima a ser nacionalizada, se manifiesta en el hecho de que hasta el momento no se ve ninguna actividad orientada hacia la creación de una infraestructura que absorba a las transnacionales; no hay siquiera un *holding*. Agrega, sin embargo, que esa industria es manejada por venezolanos, y está "venezolanizada hace tiempo", que los 405 extranjeros que en ella trabajan cumplen funciones de asesores. Señala que las inversiones históricas totales en la actividad petrolera alcanzan a 26 mil millones de bolívares, pero de esa inversión la parte no depreciada alcanza apenas a 5 mil millones y este total es objeto de una depreciación constante, por lo que la indemnización a pagar está por debajo de esa cantidad en tanto deben deducirse las rebajas que prevé el artículo 15 de la ley en discusión.

Fedecámaras plantea la necesidad de que se inicie un amplio movimiento de opinión a fin de discutir la cuestión petrolera. Ratifica su respaldo al anticipo de la reversión; pero este hecho trascendental debe contar con el apoyo de toda la comunidad nacional. Sin embargo, en vez de presenciarse esa unidad, existe, en su opinión, una marcada confusión en la mayoría de los objetivos y alternativas de ese proceso. Ese organismo considera además que el debate petrolero no debe limitarse al ámbito político.

En la culminación de los actos de celebración de los 81 años de la Cámara de Comercio de Valencia, el presidente de este organismo doctor Angel Reinaldo Ortega, señala que entre los aspectos más importantes a considerar está la nacionalización petrolera. En su opinión la nacionalización señala el comienzo de la soberanía económica del país, de su independencia frente a las grandes naciones desarrolladas y su autonomía de decisión frente a las pretensiones de las empresas transnacionales. Indica además que la ley pone fin a la riqueza fácil. No habrá más imperialismo ni colonialismo para "excusar nuestra inercia", ni habrán empresas a quienes pechar con cargas impositivas cuando la administración pública consuma el ingreso petrolero.

Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, en remitido público ratifica su posición contra las empresas mixtas. Señala que el proyecto presentado por la Comisión Presidencial de Reversión cuenta con el respaldo de los trabajadores petroleros y constituye a juicio de éstos un instrumento adecuado y conveniente para la nacionalización integral, verdadera e inmediata de la industria petrolera.

Junio 29

La Compañía Shell de Venezuela, con motivo del Día del Periodista, invita a un grupo de profesionales a visitar sus instalaciones en Anaco. En esa oportunidad algunos trabajadores de ese campo manifiestan su expectativa por la pronta aprobación de la nacionalización de la industria petrolera, pero no en forma abrupta, sino bien orientada. Al parecer existe entre la masa laboral cierto temor por el pago de sus prestaciones sociales, ya que la experiencia del hierro les es algo confusa. Por su parte, el Gerente de Relaciones de la Mobil en Anaco, ingeniero Elio Rojas, sostiene que la Mobil Oil Company de Venezuela desea quedarse en el país para aportar su experiencia en el manejo de la industria petrolera nacionalizada. El Supervisor de Operaciones de esa compañía señala que en cuanto a las áreas de exploración, perforación y explotación no son imprescindibles empresas mixtas, por cuanto el personal técnico y obrero venezolano está capacitado para desempeñarse en esas actividades, pero advierte que no sucede lo mismo en el aspecto tecnológico, ya que el país es totalmente dependiente en esta área.

Grupos de izquierda (MEP, PCV, MIR, Vanguardia y Liga Socialista) planifican una movilización contra el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. En próxima reunión se incorporará el MAS. Elaboran un documento y un programa concreto de movilización contra ese artículo tal como ha sido redactado por el Ejecutivo. Así lo manifiesta Alcides Rodríguez del PCV. El representante de Vanguardia Comunista, Carlos del Vecchio, señala que todas las fuerzas socialistas se oponen al proyecto gubernamental y que invitarán incluso a sectores honestos de AD para la lucha contra las empresas mixtas.

Acción Democrática y Copei acuerdan suspender el debate parlamentario sobre el artículo 5º mientras se logra una nueva redacción del mismo. Así la Cámara de Diputados se declara en Comisión General hasta que concluyan las conversaciones en busca del consenso sobre la Ley en discusión.

Freddy Muñoz, diputado del MAS, declara en su intervención en la Cámara de Diputados sobre el debate petrolero que las empresas mixtas o cualquier fórmula equivalente son innecesarias, inconvenientes y por tanto injustificadas. Afirma Muñoz que no son necesarias para el comercio internacional ni para el logro eficiente de la transferencia tecnológica ni para el transporte internacional de los hidrocarburos.

Junio 30

Los doctores Denzil Romero y Tulio Colmenares, miembros de la Comisión de Acción Popular contra la corrupción administrativa, sostienen la necesidad de que se instrumente una fórmula de consulta popular —prevista en el artículo 4º de la Constitución— para debatir sobre la nacionalización petrolera. Rechazan las opiniones de algunos abogados en relación con el artículo 5º de la Ley y consideran que: a) no puede afirmarse que el ordinal 15 del artículo 190 de la Constitución justifica de alguna manera la creación de empresas mixtas, ya que cuando esto se argumenta se olvida que el Poder Público sólo puede hacer lo que la Constitución le faculte; b) están con la tesis del Contralor Muci Abraham con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 5º, pero se oponen radicalmente a la intención oculta de aquél sobre la eficacia y conveniencia de la nacionalización. Consideran que es la tesis más peligrosa dada hasta ahora en el debate petrolero; c) estiman como falso el supuesto de que son necesarias las empresas mixtas para procurar tecnología, ya que éstas tienen un valor de mercado y Venezuela cuenta con parte de ella y con recursos para adquirir soberanamente lo que puede necesitar.

El doctor Luis Enrique Oberto, quien participa por Copei en las conversaciones que mantiene ese partido con AD en la búsqueda de un acuerdo que permita que la nacionalización de la industria cuente con el mayor apoyo de todos los sectores políticos, declara que con el establecimiento de un diálogo sincero se puede lograr lo que se dificulta muchas veces en el debate parlamentario. Expresa el doctor Oberto que las conversaciones se originan a raíz de la proposición de Copei de modificar el artículo 5º de la Ley de Nacionalización, y anuncia que pronto se iniciarán los contactos con otros partidos para discutir el problema.

El doctor Jóvito Villalba hace un llamado al diálogo y a la unidad de los venezolanos para evitar la mediatización de la nacionalización y el fracaso del Estado en el manejo de la industria ya nacionalizada. De fracasar ésta puede suceder lo mismo con el orden democrático y la estabilidad del país. Señala que URD ha contemplado la situación de que el Estado venezolano no pueda adquirir por sí mismo o desarrollar la teconología necesaria para la explotación del petróleo. En este caso, señala el doctor Villalba, la proposición del partido es la asociación con entes privados de una duración no mayor de 10 años y con una participación de los socios que no debe sobrepasar el 20 por ciento. Advierte igualmente que los peligros de la nacionalización no deben ser subestimados ni tampoco sobreestimados.

El Secretario General del Movimiento Electoral del Pueblo, doctor Jesús A. Paz Galarraga, declara que se observa una campaña intensa de la oligarquía venezolana destinada a lograr un acuerdo entre los partidos AD y Copei a favor de una nacionalización mediatizada, pero considera que Copei ha mantenido una "auténtica posición nacionalista" en torno a esa materia y es de esperar que la conserve. Señala que el MEP expondrá su posición oficial sobre el artículo 5º en los próximos días, sin embargo es necesario que Copei precise algunos aspectos ambiguos del texto que propone por cuanto no se entiende cuáles serán los convenios de asociación que no sean empresas mixtas.

Julio 1

El Comité Ejecutivo del Movimiento al Socialismo (MAS) acoge la proposición de Copei en torno al artículo 5º por cuanto considera que la misma constituye base importante para discutir sobre ese artículo y lograr un acuerdo. Sin embargo, estima que las asociaciones previstas por Copei están planteadas de manera general y deben, por tanto, ser precisadas.

Reaparece el doctor Arturo Hernández Grisanti en el trabajo parlamentario y declara que sobre la nacionalización de la industria petrolera no puede tener una opinión personal. Así una vez que el CEN fije la línea de partido, ésta debe ser "obligante" para todos los dirigentes y militantes de Acción Democrática. Se muestra confiado en que el personal de la industria petrolera a todos los niveles se pondrá al servicio de la nacionalización.

La Cámara de Diputados, por proposición del diputado urredista Ramón Tenorio Sifontes, se declara en Comisión General para estudiar el artículo 5º y buscar una fórmula de entendimiento entre los distintos partidos políticos.

El ex embajador de los Estados Unidos en Caracas, señor Robert McClintock, recomienda que el gobierno de ese país tenga papel principal en las negociaciones directas con Venezuela en materia petrolera, en vez de dejarlo en manos de las compañías privadas norteamericanas. Tales negociaciones se refieren a precios, niveles de producción, y a la participación que puede canalizarse a través de compañías estadounidenses. Considera McClintock que a menos que los Estados Unidos tenga una actuación más activa, Venezuela "pondría a cada compañía petrolera norteamericana contra otra". La preocupación del ex embajador está dirigida a la situación que se pueda presentar después de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.

En opinión del doctor Aníbal Martínez la esencia del proceso independentista no está en el artículo 5º. Ese proceso debe comenzar con la instrumentación de una política energética integral. Considera que la discusión de la Ley de Nacionalización en el Congreso ha sido una demostración de "politiquería". Las empresas mixtas no necesariamente son buenas o malas, todo depende del objetivo que se consiga, la forma en que se va a realizar la asociación y el control que puede haber por parte del Estado sobre las operaciones. Duda Martínez en la efectividad de cumplir con el plazo de 120 días estipulado para la extinción de las concesiones.

Julio 2

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de Pro Venezuela, declara que las gestiones de esa institución en base a la fórmula propuesta por Copei, con ligeras modificaciones, ha alcanzado buenos resultados. La nueva proposición eliminaría de la redacción hecha por Copei la Ley Especial para las asociaciones, y sometería éstas a la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. Según Cervini, las cosas han tenido un cambio favorable en los últimos días.

Gustavo Coronel, de AGROPET, al referirse al artículo 5º señala que el Estado no debe cerrar ninguna vía que pueda ser necesitada en el futuro para que la nación negocie con quien sea y cuando sea, con tal de que esa negociación redunde en los mejores beneficios del país. Agrega a manera de ejemplo que en Indonesia se permitió el regreso de las empresas multinacionales que disfrutaron de concesiones durante muchos años en ese país, bajo el sistema de asociaciones con la empresa nacional de petróleo, y en Argelia la empresa nacional Sonatrach posee varias empresas mixtas donde tiene el 51 por ciento de las acciones. También señala que el venezolano común ante la inminente nacionalización petrolera debe atender fundamentalmente a la opinión de los técnicos petroleros, ya que éstos están en capacidad de informar con mayor objetividad sobre la realidad petrolera nacional.

El gobierno nacional inicia una etapa de información a representantes de los partidos políticos en relación a las medidas diseñadas para el traspaso de la industria petrolera de manos privadas al control del Estado. Primeramente se reúne con dirigentes de AD, Copei y URD, y asisten el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández; el ministro de Estado para Asuntos Económicos Internacionales, doctor Manuel Pérez Guerrero, y el general (r) Rafael Alfonzo Ravard a quien se menciona para presidir el *holding* de empresas nacionalizadas.

Arévalo Guzmán Reyes, funcionario del Ministerio de Minas, afirma que ninguna compañía petrolera de las que operan en Venezuela ha planteado la constitución de empresas mixtas para la explotación del petróleo posterior a la nacionalización. Señala, a mayor abundamiento, que muchas no tienen interés en ello por cuanto se les presentan algunos inconvenientes, y el Estado no puede estar ansioso de crear empresas de ese tipo con alguien que no le asegure eficiencia y asistencia técnica.

El Gobernador de Venezuela en la OPEP, doctor Alberto Flores Ortega, expresa que los países que han nacionalizado su industria han creado empresas mixtas para cubrir los riesgos que pudiesen surgir en el manejo del complejo comercio petrolero. Sostiene que el mercado ofrece dificultades y es necesario enfrentarlas con tecnología y conocimientos amplios. Se justifican los convenios de asociación con quienes conocen y tienen bajo su control las tareas de traslado y venta del petróleo.

Julio 3

El ingeniero Rafael Martín, Director de la Escuela de Ingeniería Química de la UCV, declara que para 1985 Venezuela debe tener en pleno funcionamiento un gran centro de investigaciones petroleras, con la participación de un mínimo de 500 ingenieros y técnicos para afianzar tecnológicamente la industria nacionalizada. Señala que en investigación petrolera prácticamente no se ha hecho nada en el país, que todo se ha realizado en los centros de investigación de las casas matrices. El Centro de Investigaciones —dice— podría tener una inversión de unos 1.500 millones de bolívares, un gasto operacional del orden de unos 100 millones de bolívares anuales.

Acción Democrática rechaza la proposición de Copei en relación al artículo 5º en tanto aquélla contiene puntos que difieren de los sostenidos por el gobierno. Especialmente se refieren a la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en lo que respecta a la Ley Especial para aprobar los convenios de asociación y sobre las limitaciones en el área de refinación.

La Cámara de Diputados reanuda el debate sobre la Ley de Nacionalización Petrolera, luego del fracaso de las conversaciones entre los partidos políticos. Interviene Pablo Salas Castillo, de CCN, y ratifica su apoyo al artículo 5º. Celestino Armas insiste en que el Ejecutivo debe tener todos los instrumentos para proceder con eficacia. Antonio Armas Camero, independiente, señala que se

insiste en aprobar una nacionalización mediatizada. Alcides Rodríguez, del PCV, muestra reservas a las proposiciones de URD y Copei por cuanto estima que cualquier asociación es perjudicial. Américo Chacón, del FDP, dice que el fracaso de la Comisión General en busca de consenso ha frustrado una vez más al pueblo de Venezuela.

Arturo Hernández Grisanti, de AD, cuestiona la idoneidad de algunos técnicos para opinar sobre ciertas actividades de la industria. Señala que aquéllos deben intervenir en materias vinculadas con su especialidad. La decisión de nacionalizar es esencialmente política y considera que quienes están capacitados para evaluar muchos de los factores que se conjuguen en esa decisión son los políticos. Refuta asimismo la tesis derrotista según la cual se avecinan situaciones económicas caóticas para el país.

El Presidente de la República recibe el proyecto de estatutos del *holding* según lo anuncia el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, quien dice que aspira el gobierno que la directiva del *holding*, cuyos miembros serán designados por el Presidente de la República, esté integrada por personas vinculadas a la industria y con grandes conocimientos técnicos.

Julio 4

El señor Esteban Zarikian, en carta que dirige al Presidente de la República, señala que la nacionalización de la industria petrolera no puede ser "parroquializada" por pugnas políticas, y agrega que mientras no se asegure el control total en materia de tecnología y mercadeo se debe dejar "la puerta abierta para asociaciones".

Los partidos políticos niegan ya cualquier posibilidad de acuerdo en torno al artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera. Celestino Armas, de AD, expresa que no comparte la proposición de Copei al negar la posibilidad de asociaciones para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco. Eduardo Fernández, de Copei, señala que el comportamiento intransigente de AD revela el compromiso que tiene sobre la Faja del Orinoco. Por su parte, Germán Lairet, del MAS, considera igualmente intransigente la posición del partido de gobierno y señala que ello niega toda posibilidad de acuerdo para una nueva redacción del artículo 5º.

El doctor Godofredo González, de Copei, defiende la nueva redacción que del artículo 5º presenta ese partido, señalando que la misma da más flexibilidad

al Ejecutivo por cuanto permite los convenios de asociación siempre que ello no implique la creación de empresas mixtas. Dice que la proposición de su partido niega los convenios en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco ya que esta área debe mantenerse como reserva.

El ex Procurador General de la República, doctor José Guillermo Andueza, considera que la nacionalización por medio de empresas mixtas no es inconstitucional, expone así un criterio adverso al del Contralor de la República, doctor José Muci Abraham. Señala el doctor Andueza que la nacionalización es una decisión política y por ello puede adoptar diferentes formas jurídicas. Refiere luego que el artículo 97 de la Constitución permite que los monopolios estatales puedan ser confiados a los particulares mediante una concesión, por lo que con mayor razón debe admitirse la empresa mixta.

Julio 5

El doctor Eduardo Acosta Hermoso se muestra en desacuerdo con las empresas mixtas o cualquier tipo de asociación dentro de la industria nacionalizada. Considera que no se han expuesto razones para justificarlas, ya que las esgrimidas son perfectamente objetables. Dice que los convenios de asociación constituirán un retroceso en el proceso que se cumple para controlar la industria.

El Estado debe disponer de una instrumentación adecuada para que esté en capacidad de manejar la industria petrolera. Así lo expresa Andrés Boulton, quien considera que la nacionalización es una decisión política y ello se discute en el Congreso, pero debe evitarse toda interferencia con ese contenido en la industria. En su opinión, la cuestión tecnológica debe ser abordada con grandes inversiones. Con respecto a la comercialización dice que ese es un negocio internacional y que los mercados están en el exterior. Por tanto, una penetración autóctona no cree que pueda ser "obra de un día para otro".

El parlamentario de Acción Democrática, Manuel Peñalver, en su intervención en la Cámara de Diputados cuando se discute la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, dice que los trabajadores venezolanos siempre han sido vanguardia de la nacionalización petrolera, y agrega que la mayoría de aquéllos, a nombre de los cuales él habla, no consideran que el artículo 5º disminuya la importancia de la nacionalización petrolera.

Ante la opinión del diputado Arturo Hernández Grisanti de que ningún técnico petrolero, ni al más alto nivel, posee los suficientes conocimientos sobre la

problemática de la industria como para emitir opiniones calificadas sobre cómo debe llevarse a cabo la nacionalización, AGROPET se dirige al mencionado diputado reconociendo las limitaciones que en materia de política petrolera y la falta de sensibilidad histórica tiene la agrupación como para comprender que sus esfuerzos diarios van más allá del objetivo operacional, pero no acepta que se les niegue autoridad para considerar cómo debe realizarse la nacionalización de la industria.

En conferencia dictada en el Seminario sobre Transferencia Tecnológica, el ingeniero Carlos Añez Di Prisco propone la formación de empresas de servicios nacionales que puedan prestar ayuda efectiva a las empresas petroleras nacionalizadas. Explica que las compañías concesionarias nos transfieren la tecnología "empaquetada junto con los equipos y herramientas desde las casas matrices, y sólo permiten que se conozcan en el país los aspectos operativos". Por ello es necesaria esa formación de empresas nacionales. Por su parte, el doctor Humberto Calderón Berti coincide con el ingeniero Carlos Añez al referirse a la cuestión tecnológica. Agrega que en cinco años el país puede contar con el 40 por ciento de tecnología venezolana para refinar crudos. Oscar Rojas Boccalandro, directivo de la CVP, explica los contratos realizados por esa empresa, señala cómo se ha efectuado la compra de tecnología, y considera necesario cambiar los patrones de refinación para aprovechar mejor los crudos pesados.

La proposición de Copei de modificar el artículo 5º es rechazada por AD. Abdón Vivas Terán señala al respecto que está claro que para Acción Democrática las empresas mixtas y la apertura de la Faja Petrolífera del Orinoco a intereses foráneos son "puntos de honor", agregando que AD se empeña en hacer imposible cualquier arreglo y en llevar adelante la Ley de Nacionalización de manera lesiva para el país.

El ex ministro de Hacienda, doctor Luis Oberto, plantea la necesidad de que el gobierno adopte una política fiscal más razonable especialmente para la estimación del ingreso. Señala que si se produce una disminución en los ingresos debe tomarse en cuenta que tiene que destinarse una parte de ellos para el funcionamiento de la industria petrolera nacionalizada ya que ésta originará la demanda de importantes recursos fiscales.

El doctor Arévalo Guzmán Reyes, Director de la Oficina Técnica de Hidrocarburos, afirma que el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización presentado por el Ejecutivo ante el Congreso tiene un fin precautelativo y evi-

tará riesgos al Estado a la hora de emprender grandes proyectos de inversión. Ratifica que ese artículo se justifica para darle al Estado la flexibilidad necesaria a los fines de establecimiento de convenios de asociación, los cuales considera ventajosos.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en su mensaje del día aniversario de la firma del Acta de Independencia, se refiere a la nacionalización de la industria petrolera, defiende las empresas mixtas, señala que los convenios de asociación nos librarán de los riesgos que no convenga correr solos, y advierte que el Estado no puede atarse de manos en la nacionalización de esa industria. Esta, en su opinión, "cambia el curso de la historia". Considera la nacionalización un acto soberano, se compromete con la nación asumiendo de manera directa la responsabilidad de que la industria no será mediatizada, y manifiesta que no puede ocultar que ello conlleva inmensos riesgos. Sin embargo, esos riesgos se constituyen en el desafío histórico de los venezolanos. Asimismo dice que se compromete la madurez del país porque la nacionalización no puede fundarse en "antojos, caprichos o intemperancias, ni estrategias que respondan a intereses extranacionales".

Julio 7

En opinión del doctor José Martorano Batisti la nacionalización es positiva para lograr el desarrollo económico de Venezuela. El instrumento legal que se discute en el Congreso —dice— contiene todos los elementos para que se produzca una nacionalización "sin traumas". Es decir, permitirá realizar las operaciones que se desarrollan actualmente sin interrupción. El artículo 5º contiene la flexibilidad suficiente para que las empresas estatales puedan "ejercer sin ninguna dificultad" los actos necesarios para que la industria marche con normalidad.

El Movimiento Electoral del Pueblo propone un referéndum para que el pueblo emita su veredicto final en relación al artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera. Considera el MEP que ese artículo es anticonstitucional. La información es suministrada por el dirigente Jesús Angel Paz Galarraga.

En el debate en la Cámara de Diputados en torno al artículo 5º interviene José Angel Ciliberto y entre otras cosas, señala que nadie cambiará la decisión de AD de aprobar ese artículo. Expresa que no debe acusarse al Ejecutivo de haberle dado la espalda a la Comisión de Reversión por cuanto no era su obligación acoger todas las recomendaciones de ésta. Por su parte Abdón Vivas Terán

dice que el objetivo de Copei es que el país logre tomar en sus manos el control y todas las decisiones de la industria nacionalizada.

Julio 8

El Consejo Nacional de Fedecámaras revela preocupación ante la situación surgida en las esferas políticas al no lograrse un consenso en torno al proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Señala que el Directorio de esa organización se dedica al perfeccionamiento de una estrategia destinada a "contribuir a que el proceso de nacionalización se realice en forma que garantice al país la continuidad de un ingreso petrolero suficiente para impulsar el desarrollo". De lo expresado por el organismo se desprende que las conversaciones mantenidas con los partidos en busca del consenso han fracasado.

Los partidos de izquierda MEP, MIR, FDP, PCV, Vanguardia Comunista, Liga Socialista, la Organización Primero de Mayo y Ruptura emiten una declaración conjunta en la cual se oponen categóricamente a las empresas mixtas, por cuanto éstas permiten la continuidad de la relación neocolonial. Hacen un llamado a todas las fuerzas políticas para luchar contra aquéllas.

Favorable reacción causa el anuncio del Presidente de la República al definir los alcances de la empresa matriz venezolana que se denominará PETROVEN. Según opinión del doctor Bernardo Díaz Lyon, presidente de la Mene Grande, es sensata la forma cómo el señor Carlos Andrés Pérez encara el problema de la constitución de esa empresa, lo cual hace prever que no habrá perturbaciones dentro de la industria. A nombre de Fedecámaras, su presidente, doctor Antonio Díaz Martínez, señala que el discurso del Jefe de Estado da gran confianza porque existía la expectativa de cómo iba a formarse la casa matriz. Aníbal Martínez, asesor de Pro Venezuela, considera que lo importante es que ya ha comenzado a formarse la casa matriz de la empresa nacionalizada. Estima que el capital inicial de dos mil millones de bolívares asignados a PETROVEN será modificado a medida que vaya recibiendo el patrimonio que a los 120 días pasará a manos de ella.

Representantes de 17 organismos sindicales petroleros del Estado Zulia entregan un documento de 10 puntos al Presidente del Congreso Nacional. En el mismo, a nombre de los trabajadores afiliados a Fetrazulia, Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, exponen las aspiraciones de los trabajadores con motivo de la discusión de la Ley de Nacionalización Petrolera, tal como acordaran hacerlo en un pleno celebrado el 2 de julio de 1975. Los trabajadores plantean: apoyo a la

promulgación de una Ley de Nacionalización nacionalista e integral; condonación de las deudas y compromisos económicos que tengan los obreros para el momento de la nacionalización; adelanto del 50 por ciento de las prestaciones sociales; designación de una comisión integrada por representantes del Estado, de las empresas y de los trabajadores para calcular lo relacionado con las prestaciones, teniendo clara la definición de salario establecida en el nuevo reglamento de la Ley del Trabajo (art. 106); devolución del dinero que hasta ahora tienen los trabajadores acumulado en el plan de jubilación contributorio correspondiente a la empresa Creole. De acuerdo al decreto presidencial que consagra las prestaciones sociales legales y contractuales como derecho adquirido, no se justifica que ese dinero sirva para autofinanciar la jubilación, y piden por tanto que le sea entregado al trabajador el 100 por ciento de sus prestaciones en el momento de la jubilación. Exigen además la remodelación de las urbanizaciones obreras; la entrega a los trabajadores, con título de propiedad, las viviendas que ocupan y el pago compensatorio a los que no viven en campos petroleros; la revisión a fondo de todas las instalaciones petroleras que revertirán a la nación, y obligar a las compañías a descontaminar el Lago de Maracaibo.

El ministro de Minas realiza conversaciones con las compañías petroleras sobre tres áreas fundamentales: el pago de indemnizaciones, la asistencia tecnológica y la comercialización. Valentín Hernández, titular del mencionado despacho, declara que las empresas tienen una respuesta bastante receptiva a las proposiciones del gobierno y se espera que para la fecha de la nacionalización habrá un total acuerdo sobre esos puntos. Al referirse a la tecnología dice que el Estado quiere asegurarse aquélla durante un período determinado por medio del suministro directo de las empresas que dejan de operar en el país. Asimismo se estudian fórmulas para garantizar márgenes de comercialización y evitarle así al Estado posibles desajustes.

Los doctores Oscar Rojas Boccalandro y Humberto Calderón Berti asisten al Seminario sobre Transferencia Tecnológica. En sus opiniones coinciden en que la continuidad de las operaciones petroleras a su ritmo actual están garantizadas. Para ello se hace necesario el concurso de técnicos y profesionales que trabajan en la industria nacional con la colaboración de firmas de ingeniería, compañías de servicio, centros de investigación de las universidades y de las empresas petroleras estatales y privadas. Con respecto a la tecnología señala Calderón Berti que por estar la industria petrolera controlada por personal foráneo se ha ido acostumbrando al facilismo que implica el uso de la tecnología extranjera sin aprovechar los recursos propios. De las conclusiones se desprende que

no es necesario importar tecnología pues los recursos humanos con que cuenta el país garantizan que la industria sea manejada por venezolanos.

Julio 9

El doctor Carmelo Lauría considera positivo el hecho de que la nacionalización se lleve a cabo en momentos en que la economía venezolana mantiene un ritmo de crecimiento acelerado, independiente de la bonanza fiscal que ha creado el extraordinario ingreso petrolero. Estima que el proceso de nacionalización se cumplirá dentro de la mayor normalidad, y se establecerán las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad sin ocasionar dificultades a la economía.

El señor John Phelps afirma que la empresa *holding* será eficiente si sus directivos gozan de plena autonomía y autoridad, considera necesario el artículo 5º y espera que éste se vote favorablemente en el Congreso tal como lo ha presentado el Ejecutivo, ya que el gobierno no puede carecer de flexibilidad. Agrega que la mayoría de los países que han nacionalizado la industria han celebrado acuerdos con las compañías concesionarias. En el área de mercadeo es, en su opinión, donde puede presentarse problemas porque se debe competir con otros países productores y las compañías optarán por adquirir el petróleo donde más les convenga.

El doctor Alberto Quirós Corradi, presidente de la compañía Shell, declara en un acto de reconocimiento público a 857 trabajadores por sus años de servicio, que en los momentos en que Venezuela se apresta a la nacionalización de la industria petrolera, todos los trabajadores le pueden garantizar a la nación venezolana el grado de eficiencia y competencia profesional y técnica que han alcanzado, y que es comparable al más aquilatado en el plano gerencial mundial y al más alto nivel petrolero internacional.

Con los votos de AD y la CCN se aprueba en la Cámara de Diputados el controversial artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera. José Vicente Rangel, IND-MAS, manifiesta que no acusa a los adecos de traidores por respaldar el artículo 5º por cuanto ellos creen en ese tipo de desarrollo para el país. Sin embargo, juzga que están equivocados. Asegura que ese artículo limita el poder de decisión del Estado y a través de esa fórmula Venezuela va hacia un proceso de nacionalización compartido. Eduardo Fernández, de Copei, indica que en esa materia AD prefiere la división y el sectarismo, que además la nacionalización no será gratuita, que el país pagará algún precio fiscal por aquélla, que

le corresponde al gobierno presentar un presupuesto para el próximo año inferior al actual. Ramón Tenorio Sifontes, de URD, ratifica la oposición de ese partido al artículo 5º del proyecto en discusión y sostiene la fórmula urredista como la alternativa para un entendimiento nacional.

Asegura el doctor Julio César Arreaza, miembro de la Comisión Presidencial de alto nivel para conversar con las concesionarias, que la nacionalización petrolera en Venezuela será un proceso más completo que el que se ha visto en países del Medio Oriente. Destaca además que los convenios de asociación previstos se aplican tanto en países capitalistas como socialistas.

Julio 10

El doctor Eduardo Fernández declara que AD sólo desea negociar la Faja Petrolífera del Orinoco con las transnacionales y Copei se opone a esa negociación. De allí que esta sea la diferencia básica entre ambos partidos. Señala que entiende que hay riesgos en la nacionalización, pero es falso que los mismos sean salvados con las empresas mixtas.

Dirigentes sindicales opinan en torno a problemas vinculados con la nacionalización petrolera. Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol y militante del MEP, señala que los trabajadores petroleros deben más de 400 millones de bolívares a usureros que cobran el 5 y el 10 por ciento de interés mensual; agrega que para los días 30 y 31 de julio, fecha en que se reunirá el Comité Directivo Nacional de esa Federación, tendrá el monto de las prestaciones y así podrá decirse lo que debe pedirse, bien sea el total o la mitad de dichas prestaciones. Manuel Peñalver, del Comité Ejecutivo de la CTV y miembro de la directiva de Fedepetrol, expresa que esa organización siempre ha recomendado a los trabajadores manejar con acierto sus prestaciones, y cree que pueden retirarlas total o parcialmente cuando requieran educar a sus hijos, solventar problemas de salud o adquirir vivienda. Jesús Urbieta, del MAS, declara que es partidario de que en todos los procesos de nacionalización el movimiento sindical sea informado con suficiente antelación de todos los problemas, y alerta sobre las confusiones en torno a las prestaciones ya que no se tiene claro el monto y la forma de pago de las mismas. Rafael León, secreario general de la CTV y dirigente de Copei, afirma que se debe lograr un acuerdo entre todos los sectores sindicales para aplicar en el caso del petróleo el mismo procedimiento que se siguió en el conflicto del hierro.

El doctor Omar Baralt, Gobernador del Estado Zulia, al referirse al paro convocado por Fetrazulia señala que el mismo es inconveniente para un proceso

de nacionalización como el que discute el Congreso Nacional. Dice además que se aplicarán los procedimientos legales contra paros injustificados y en el caso de los trabajadores públicos el gobierno será muy severo. Por su parte Fetrazulia, según declara su Secretario de Organización, señor Ildefonso Medina, continúa sus preparativos para el paro en protesta por el artículo 5º que modificado contempla la creación de empresas mixtas.

Desde el artículo 6º hasta el 11º de la Ley de Nacionalización son aprobados en la Cámara de Diputados. El artículo 6º que establece cómo será administrada la industria nacionalizada ocasiona 15 intervenciones. Por Copei interviene Abdón Vivas Terán, quien señala que ese problema tiene dos caras: la capacidad del país en lo técnico y la responsabilidad política. Expresa que aún se desconoce cómo será la estructura de la casa matriz. Por su parte, Celestino Armas, de AD, explica que el reglamento establecerá la creación de tantas unidades como concesionarias hay actualmente; dice que al dársele estructura mercantil a la CVP, ésta rendirá igual o más que las empresas que hoy operan. Freddy Muñoz, del MAS, señala que la fracción socialista apoya el artículo 6º; manifiesta, sin embargo, su preocupación porque quienes vayan a integrar la casa matriz sean altos personeros de las petroleras. Rómulo Henríquez, del MIR, advierte que le preocupa el que los entes a crearse se rijan por el Código de Comercio, manejados como sociedades mercantiles sujetas a embargo. El PCV, según indica Alcides Rodríguez, vota por el artículo 6º. Los perezjimenistas proponen que se designe a altos oficiales en cargos ejecutivos de las empresas, proposición que es rechazada por la mayoría.

Dirigentes sindicales de AD encabezados por José Vargas y Augusto Malavé Villalba desmienten al sindicalista Carlos Luna, quien asoma la posibilidad de una ruptura en el seno del movimiento sindical venezolano por la toma de posiciones frente a la Ley de Nacionalización Petrolera. Agregan que lo que ha sido cuestionado por la mayoría de la CTV es el procedimiento que se ha seguido para convocar a un paro en el Estado Zulia.

Al salir de la reunión privada de la Comisión de Minas e Hidrocarburos del Senado, a la cual comparece el titular de Minas, doctor Valentín Hernández, el senador Pompeyo Márquez declara que el avenimiento que discute el gobierno nacional con las compañías petroleras es parecido a las Actas Convenios firmadas en la oportunidad de la nacionalización del hierro, y agrega que, aparte del importante debate que se efectúa en la Cámara de Diputados, las grandes decisiones en materia petrolera están siendo adoptadas en las conversaciones que

se realizan entre las compañías y los representantes del gobierno. Según el ministro de Minas, el avenimiento con las empresas petroleras está listo y las mismas seguirán funcionando con la totalidad de sus directivos actuales; luego agrega el doctor Hernández que la Creole y la Shell comercializarán el 70 por ciento del petróleo nacionalizado mediante contratos de suministro. Al final el senador socialista Pompeyo Márquez dice que no proponen un salto en el vacío ni son tremendistas en materia de nacionalización, pero que es posible rescatar nuestra riqueza petrolera sin empresas mixtas y sin mantener la dependencia con respecto a los monopolios.

Fedecámaras considera un deber, en momentos en que se discute el proyecto de Ley de Nacionalización, mostrar su respaldo a ese proyecto. Señala que cualquier desajuste que pueda ocurrir en el manejo de la industria nacionalizada y en la colocación de los productos en el exterior, puede ocasionar un "colapso" que incidirá tanto en los aspectos socioeconómicos como en el destino institucional del país.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, señala en la Comisión de Minas del Senado, según informa Godofredo González, que se estima que en la Faja del Orinoco hay unos 700 millones de barriles de petróleo y en la misma se pondrán a prueba unos cuatro tipos de tecnología. Indica además que el ministro se muestra optimista en cuanto a asistencia tecnológica para la industria nacionalizada.

El doctor Oscar Machado Zuloaga manifiesta su preocupación por el hecho de que sean organismos del Estado los encargados de manejar la industria petrolera nacionalizada, ya que "los precedentes de su acción empresarial son negativos". Considera que para dirigir con éxito una industria tan compleja como la petrolera, el gobierno debe disponer de todos los elementos que le permitan negociar con flexibilidad. Señala que es necesario proceder con absoluta precisión jurídica, pues de lo contrario surgirán inconvenientes. Si es indispensable —dice— serán celebradas asociaciones para garantizar el suministro de tecnología, de transporte y el eficiente mercadeo.

Julio 11

El doctor J. J. González Gorrondona opina que al pasar la industria petrolera al control del Estado se debe entrar en una etapa de desarrollo no sólo para que la nación aumente las reservas petrolíferas, sino para que se inicien procesos de industrialización del recurso. Debemos prepararnos para entrar en

una etapa donde el Estado deberá emplear la más moderna tecnología con la demanda de grandes recursos financieros. Ante ello, el Estado no puede estar atado a fórmulas inflexibles, sino que debe tener capacidad de acción, amplias posibilidades de asociaciones a fin de obtener la tecnología y la seguridad de mercados.

La PTJ investiga la desaparición de un cuantioso lote de equipos petroleros, propiedad de la Mobil Oil Company, que está sujeto a la Ley de Reversión. La pérdida o el robo de ese material se registra en la región del Estado Anzoátegui y su monto —según un funcionario vinculado con la averiguación— se puede estimar en un costo superior a los 100 millones de bolívares. El equipo era sacado de los depósitos de la empresa como chatarra mediante comprobantes o recibos aparentemente legales. Se conoce que el ex vicepresidente de la Mobil, junto con Juan Eduardo Hernández Rausseo, Johnny Hernández, Reinaldo José Figarella y Gustavo Alberto Vilera del Corral, ex funcionario de alto rango de esa empresa, están siendo investigados por los cuerpos policiales por la desaparición de esos bienes afectos a reversión, así como también propietarios de algunas conocidas empresas transportistas de Anaco y San José de Guanipa. La venta de material que alcanza a 132 operaciones sin el previo permiso del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y que ha sido autorizado por la gerencia de la Mobil puede significar una multa a la empresa de 132 millones de bolívares. En esas operaciones, utilizando un solo serial de recibo, se extrajo en gandolas, como chatarra, material de alto valor durante 17 meses a un promedio de cinco viajes por semana, habiéndose cancelado legalmente por esa mercancía sólo bolívares 2.110. Se sabe igualmente que en varios hatos propiedad de ex funcionarios de la Mobil ha sido localizado material de uso petrolero y que los mismos son sometidos a investigación.

Una declaración de Fetrahidrocarburos, firmada por Ramón Petit, Secretario de Trabajo y Reclamos de esa central obrera, señala que el paro convocado por Fetrazulia obedece a una actitud política del MEP y Copei con fines electoreros y antipatrióticos. Advierte igualmente que el artículo 5º en nada afecta las aspiraciones reivindicativas de los trabajadores y su discusión es competencia directa de los partidos políticos, no siendo por consiguiente el citado artículo motivo de una huelga a menos de que los partidos políticos quieran obligar a sus dirigentes sindicales a una aventura antidemocrática.

Fetrazulia desconoce el llamado de la CTV de suspender el paro y decide movilizar sus cuadros dirigentes para supervisar la realización del mismo. Carlos

Galué Navea y Alí Moncayo, presidente y secretario general de la central obrera zuliana, señalan que el paro se cumplirá en todo el Estado tal como fue convocado acatando la resolución de 36 sindicatos que en el mes de junio, en pleno extraordinario de juntas directivas, acordaron dar a Fetrazulia plenos poderes para organizar un paro simbólico en todas las actividades laborales del Estado en protesta contra el artículo 5º del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera, presentado por el Ejecutivo Nacional y aprobado en el Congreso de la República. También informan que han recibido el respaldo de la liga de confraternidad, organización de 6.000 choferes del transporte urbano de Maracaibo; el respaldo de la FCU, de los empleados y obreros de LUZ; de 17 sindicatos petroleros del Zulia; de los trabajadores del transporte de los distritos Bolívar, Baralt y Sucre; de los trabajadores de las empresas de cervecerías, plantas pasteurizadoras, de haciendas y fincas agropecuarias; de los gremios profesionles de médicos, odontólogos, ingenieros, maestros, economistas y bioanalistas, y de la Federación de organizaciones populares juveniles del Zulia, que dicen agrupar a 160 organizaciones juveniles de todo el Estado.

Dirigentes sindicales de Puerto La Cruz y Guanta opinan sobre la nacionalización petrolera. Víctor Vargas, Secretario General del Sindicato Petrolero de Puerto La Cruz, señala que el artículo 5º es una entrega de nuestro petróleo a las empresas multinacionales y que el proyecto de nacionalización petrolera en la forma en que lo presentara el Ejecutivo Nacional constituye una traición. Jesús Núñez, Secretario General del Sindicato Unico de Trabajadores de Institutos Educacionales, considera que la nacionalización petrolera abrirá más fuentes de trabajo en todo el país, pero que al lado de ofrecerle ese gremio todo el respaldo a la nacionalización de la industria, rechazan el artículo 5º por la oportunidad que le da a las empresas para seguir explotando al país. Pedro Montaño, Secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Portuario de Guanta, dice que como venezolano y gremialista está de acuerdo con la nacionalización petrolera, pero está en desacuerdo con el tono que le han dado los políticos a esa materia.

El Comité Ejecutivo de la CTV en sesión extraordinaria aprueba por mayoría condenar la huelga convocada por Fetrazulia. En esta reunión —la primera de la CTV para fijar posición sobre la nacionalización petrolera votan a favor del comunicado presentado por su presidente, señor José Vargas, los ocho representantes de AD en el Comité Ejecutivo y el de URD, José Beltrán Vallejo. Mientras que los representantes del MEP y Copei salvan su voto. El suplente del Comité Ejecutivo, del MAS, señor Jesús Urbieta, por tener sólo voz en ese organismo, manifiesta su desacuerdo con el comunicado, y a nombre del Movimiento al Socialismo ratifica su respaldo a la huelga organizada por Fetrazulia.

Al referirse al paro general convocado por Fetrazulia, el Director General del Ministerio del Trabajo, doctor Wenceslao Mantilla, dice que existen móviles políticos en esa agitación laboral a la vez que advierte que el paro es ilegal. Por su parte el Secretario de Trabajo y Reclamos de Fetrahidrocarburos, Ramón Petit, auncia a nombre de su organización, que la presunta huelga convocada por Fetrazulia obedece a intereses electoreros y antipatrióticos de Copei y el MEP.

El doctor Omar Baralt, Gobernador del Estado Zulia, después de la reunión que sostiene con los máximos dirigentes de los partidos políticos de ese Estado, declara que le preocupa la desunión que existe entre los venezolanos con respecto a la nacionalización de la industria petrolera, a la vez que reitera su negativa a la autorización del paro general convocado por Fetrazulia.

El Buró Sindical del MEP ratifica su pleno respaldo al paro simbólico convocado por Fetrazulia y expresa su apoyo a todas las acciones de masas o actos de protesta "en resguardo de los supremos intereses de la soberanía nacional en favor de los esepecíficos intereses de la clase trabajadora". Añade que en febrero de 1975 la CTV, Fedepetrol y Fetrahidrocarburos se comprometieron a luchar por la nacionalización integral de la industria petrolera.

El senador Pompeyo Márquez, del MAS, denuncia que el avenimiento entre el gobierno y las compañías petroleras es parecido a las actas-convenios del hierro. Afirma que en la integración de la directiva que dirigirá a PETROVEN estarán altos ejecutivos de las empresas concesionarias que hoy operan en el país. Ello significa que los mismos continuarán funcionando en su totalidad, salvo algunos directivos. Dice que además se estudian contratos de suministro. La Creole y la Shell seguirán comercializando 1.200.000 y 571.000 barriles diarios, respectivamente.

En declaraciones suministradas por el Secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud de AD, Ramón Rangel Mantilla, se condena en los términos más duros el paro general convocado por Fetrazulia como rechazo al artículo 5º que contempla la figura de las empresas mixtas. Dice el declarante que la juventud de ese partido no vacila en calificar de traidores a aquellos que asumen el papel de incitadores de la clase obrera para acciones que atentan no contra Acción Democrática sino contra toda la nación venezolana.

Declara el doctor Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos, que el proyecto de Ley de Nacionalización tendrá que ser reformado en algunas de sus partes y se incorporarán modificaciones que proceden de las observaciones hechas por el Contralor y el Procurador de la República. Al referirse al debatido artículo 5º señala que las compañías transnacionales no estaban interesadas en ese tipo de empresas mixtas. Esto es "más bien una protección contra las transnacionales". Agrega que los venezolanos que ocupan cargos directivos en las empresas concesionarias continuarán en ellos como, por ejemplo, Alberto Quirós y Guillermo Rodríguez Eraso. En relación al personal extranjero refiere que se busca la fórmula para establecer contratos de asistencia tecnológica. Considera que lo más importante es la estructuración del *holding*, es decir, conocer cómo va a operar la industria.

Julio 12

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, señala que la Creole ha formulado reparos en las conversaciones que sobre indemnización se realizan, pero el gobierno debe asegurar un acuerdo dentro del más estricto cumplimiento de las normas que pauta el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera que discute el Congreso Nacional. También se conoce en el Ministerio que la Creole está dispuesta a ir a la Corte Suprema de Justicia por considerar que el literal "E" del artículo 15º de la Ley es inconstitucional. El citado artículo se refiere al pago de indemnizaciones. La empresa petrolera plantea que se le pague el valor no amortizado de las concesiones que expirarán con la vigencia de la Ley, siendo este el punto de divergencia entre el gobierno venezolano y la concesionaria.

En conferencia dictada por el presidente de la Shell de Venezuela, doctor Alberto Quirós Corradi, sobre el tema "Los retos de la nacionalización del petróleo", en la reunión mensual de la Asociación Nacional de Relaciones Industriales, señala que "la nacionalización tiene justificaciones de tipo social, de tipo político y de tipo histórico, que llevan a la conclusión de que una de sus grandes justificaciones es el control, en forma decidida, de los recursos primarios del país, entre los cuales ocupa, por supuesto, lugar prominente el petróleo". Respondiendo algunas preguntas manifiesta que el proceso de nacionalización no puede ni debe justificarse exclusivamente en términos de rentabilidad, ya que nunca ha creído que la problemática petrolera pueda divorciarse de la problemática política y que ha criticado ciertas posiciones del sector técnico que pretende ser "químicamente puro" en lo que a responsabilidad política se refiere.

El dirigente sindical de AD, José Vargas, afirma que el paro convocado por Fetrazulia contra el artículo 5º ha sido un fracaso rotundo. Máximo Acuña, sindicalista del MEP, señala que están previstas otras acciones en respaldo a la nacionalización integral, y Casto Gil Rivera, también del MEP, declara que aun con deficiencias el paro se ha realizado en la capital zuliana y que Fetrazulia decide que todos sus miembros enarbolen una bandera negra el día que el Presidente de la República firme la Ley de Nacionalización Petrolera, en protesta por el artículo 5º. El Secretario sindical de Vanguardia Comunista, Laureano Torrealba, dice que su partido se solidariza con el paso dado por Fetrazulia. Carlos Arturo Pardo, sindicalista del MAS, declara que los militantes de ese partido se acogen al principio "de la democracia sindical, respetan esa mayoría adeca en la CTV, pero igualmente consideran que tiene que respetarse el derecho de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fetrazulia al tener una posición y asumir la responsabilidad que esa posición les aconseja".

El Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela manifiesta en comunicado público su rechazo a la huelga general convocada en el Zulia. Ratifica su apoyo al artículo 5º del proyecto de nacionalización petrolera, pues están conscientes de que los intereses imperialistas de las compañías petroleras son poderosos y capaces de maquinar toda una trama de aventuras e intrigas que atenten contra la soberanía económica y política de Venezuela. Hace un llamado a los trabajadores y en especial a los del sector eléctrico para mantenerse en estado de alerta y unidos para aplastar cualquier intento dirigido a torcer el rumbo democrático y soberano de Venezuela.

El Centro de Ingenieros del Zulia considera que las modificaciones propuestas por el Ministerio de Minas al artículo 15º del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera impedirá a la nación percibir 4 mil millones de bolívares de las empresas petroleras. Ese artículo se refiere a la indemnización que la nación debe pagar a los compañías en base a los activos fijos. El CIDEZ elabora un estudio para una nueva redacción del artículo 15º para que la nación pueda recuperar el valor en dinero de las reservas drenadas que se estima en más de 4 mil millones de bolívares.

Declara Juvencio Pulgar (MAS), que lo revelado en torno al desmantelamiento de equipos que hiciera la Mobil en Anzoátegui viene ocurriendo desde que fue aprobada la Ley de Reversión. Informa que el MAS propondrá la interpelación del ministro de Minas ante la Comisión de Contraloría del Congreso.

En su opinión debe hacerse una investigación a los más altos niveles de la Mobil.

El industrial Angel Cervini considera que el momento es oportuno para nacionalizar y afirmar que las ex concesionarias no deben ser transformadas en condueñas; pueden sí celebrarse acuerdos pero en ningún caso asociar, aunque sea una pequeña parte, la propiedad del más importante patrimonio de la nación. No le ve ninguna conveniencia a las empresas mixtas con las transnacionales porque "sea quien sea el que prive en la asociación, nunca será favorable". Sin embargo, advierte que entiende la intención del Ejecutivo con respecto al artículo 5º como forma de obtener cooperación en las áreas más complicadas de la industria. "Tengo fe —dice— de que por la mente de nadie haya pasado concretar empresas mixtas".

El presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, doctor Constantino Quero Morales, anuncia que se han reservado 8 mil millones de bolívares para la industria petrolera nacionalizada, 3 mil millones para cambiar los patrones de refinación y mil millones para la flota petrolera nacional. Dice que corresponde al Fondo de Inversiones financiar los grandes proyectos que fundamentarán el proceso de incorporación tecnológica para aumentar el potencial productivo del país.

Julio 13

Se plantea ante el Primer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología la creación de una empresa única y de exclusiva propiedad del Estado para la comercialización externa de los hidrocarburos. La proposición la hace la mesa de trabajo sobre "Recursos Energéticos y Petroquímica". Hubo consenso además en lo que respecta a reducir la producción petrolera, mantener los precios y la necesidad de conservar el poder adquisitivo del petróleo. Se recomienda asimismo la elaboración de un plan de formación de recursos humanos para la comercialización y el transporte de los hidrocarburos.

El Directorio Nacional del MAS se reúne y analiza, entre otros aspectos de la vida nacional, el problema de la nacionalización petrolera. Señala que serán críticos para que aquélla no sea una acción partidista ni sectaria a nivel administrativo. Hace críticas al Plan de la Nación y estima que se recurre al expediente de acentuar la dependencia en vez de acentuar el proceso nacionalizador. Advierte que elevar la producción petrolera, en contradicción con la política conservacionista, es atentar contra la nacionalización.

El doctor Carlos Guillermo Rangel, ex presidente de Fedecámaras, declara sobre nacionalización petrolera, y afirma que una vez terminado el debate trascendental sobre aquélla, en especial con respecto al artículo 5º, el país debe unirse alrededor de la empresa nacionalizada. Esto se requiere, entre otras cosas, para las negociaciones con las multinacionales. Considera que el problema fundamental de la nacionalización lo constituye la eficacia del modelo que se escoja para sustituir a las concesionarias. En la industria nacionalizada tanto las decisiones como el manejo de personal deben estar al margen de lo que en el país se entiende por administración pública.

Se dicta prohibición de salida del país a presuntos indiciados en venta de equipos petroleros de la Mobil. Se revela que el caso irá a tribunales, produciéndose probablemente las primeras detenciones en las próximas 48 horas. Entre las personas sometidas a investigación se mencionan a quienes fueron dos altos funcionarios de la empresa, señores Reinaldo Figarella y Gustavo Vilera, así como también al ex vicepresidente de la Mobil, señor Johnny Hernández. Se conoce que la auditoría interna ordenada por la compañía, lo cual presumiblemente permite esclarecer la situación irregular, duró unos tres meses. Este trabajo fue dirigido personalmente por el señor Eliseo Delgado, gerente de contabilidad de la empresa.

Adolfo París, Tesorero de AGROPET, al referirse al artículo 23º de la Ley de Nacionalización Petrolera declara que esa agrupación insiste en que el mencionado artículo debe ser modificado. Esta norma permanece igual a pesar de los pronunciamientos hechos ante el Congreso Nacional y los partidos políticos, los cuales siempre han prometido que en la redacción final serán tomados en cuenta los planteamientos de AGROPET. El artículo 23º se refiere a las prestaciones sociales de los trabajadores señaladas en la legislación laboral y en la contratación colectiva, dejando fuera como derechos adquiridos aquellas prestaciones y otros beneficios derivados de "las normas respectivas de las empresas". Esto, según el directivo de AGROPET, crea confusión e incertidumbre por lo discriminatorio que se torna. Asimismo dice que el mencionado artículo debe consagrar la incorporación del remanente de las indemnizaciones en fondos fiduciarios ya establecidos, y fijar la obligación por parte de las empresas de actualizar anualmente los fondos fiduciarios individuales con los montos que corresponden. Destaca además la contradicción entre el artículo de la Ley y el Decreto Presidencial Nº 859 que no menciona expresamente al Banco Central como depositario de las prestaciones de los trabajadores, quedando éstos en libertad de escoger el banco para el fideicomiso.

Julio 14

La Cámara de Diputados aprueba los artículos 12, 13 y 14 del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. La posición de los partidos de oposición con respecto al artículo 12 se divide. Las fracciones del MIR y el PCV rechazan el pago de indemnización alegando que los bienes han sido amortizados durante los años de explotación en que han operado las empresas en el país, en tanto el MEP, MAS, FDP y URD estiman que la indemnización es algo constitucional y por ello no se oponen aun cuando en el fondo se considere ese pago como una injusticia.

Según declara el doctor Ciro Añez Fonseca, Director de Fedecámaras, la posición de esta institución ya hecha pública es producto de un detenido examen del debate realizado en el Congreso Nacional. Estima que en el artículo 6º y no en el 5º es donde ha debido producirse la gran discusión por cuanto es necesario que el Ejecutivo explique cómo va a operar la industria, cómo va a sustituir los actuales mecanismos en manos de las transnacionales, asegurando al mismo tiempo la eficacia y el rendimiento de la industria. Destaca la conveniencia de alejar la política del manejo de la industria y de lograr el acceso permanente de la tecnología.

El Gerente General de la Refinería Shell de Cardón, ingeniero Ramón Cornieles, dice, en un acto de entrega de diplomas y emblemas a un grupo de trabajadores de esa empresa, que en el proceso de nacionalización petrolera, Venezuela reclama una mayor responsabilidad de sus técnicos y trabajadores, exigencia que será satisfecha plenamente si se respetan las normas que han regido hasta el momento el manejo de la industria. También señala que los trabajadores han aceptado la nacionalización petrolera como algo necesario e inevitable, pero que la misma ha creado un clima de relativa inseguridad ante la nueva situación que eventualmente pueda presentarse si se da cabida a la política dentro del manejo de la industria. Agrega que el período de postnacionalización será de intensa observación por parte del personal y, especialmente, donde cualquier tensión que estremezca la forma tradicional de operar la industria puede tener incalculables consecuencias, pues existe un conjunto de prácticas administrativas y actitudes personales derivadas de la experiencia que podríamos llamar la "cultura del petróleo".

Julio 15

Declara el doctor Celestino Armas, de AD, que de no haber un acuerdo en relación al pago de indemnización a las compañías petroleras, estimado en 5 mil

millones de bolívares, se iniciará el juicio de expropiación acompañado de la ocupación previa de la industria. Indica que la fórmula para definir el monto de indemnización se basa en el valor neto de los activos según los libros utilizados por las compañías para el Impuesto sobre la Renta. De esa cantidad se deducirán las partidas de depreciación y amortización.

El Comité Ejecutivo de Fetrazulia informa en comunicado público que pese a la intensa campaña desatada a través de los medios de comunicación de masas y a las represalias nacionales y regionales que se instrumentarán contra la primera acción pacífica convocada por la central obrera del Zulia contra la nacionalización "chucuta" y las empresas mixtas, ha sido exitoso el respaldo dado por el pueblo zuliano a esa acción. Reconoce la importante participación de la Universidad del Zulia, de los colegios profesionales, de sectores culturales, estudiantiles y laborales que los acompañaron en el paro. Hace asimismo un conjunto de consideraciones críticas sobre los dirigentes y seudodirigentes sindicales que no sólo se opusieron al paro sino que lo atacaron utilizando argumentos sin ningún peso, tratando con ello de colocarse en posición de obtener la confianza de sus "nuevos caporales" mediante acusaciones irresponsables. Finalmente advierte que esa acción tuvo lugar en cumplimiento del octavo acuerdo de la Declaración de Principios de la CTV.

Los equipos petroleros sujetos a reversión y extraídos como chatarra mediante 132 operaciones de venta aprobadas irregularmente por la Mobil, tienen un valor estimado de varios millones de bolívares y la empresa sólo recibió 200 mil. El doctor Henry Allais, Inspector de Reversión de Anzoátegui, no descarta la posibilidad de que otro material haya sido extraído ilegalmente. Por oficio se solicita ante el Ministerio de Minas multas a la citada empresa.

El titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, anuncia que están listas las reformas finales al proyecto de Ley de Nacionalización que serán presentadas al Congreso por parte de ese despacho. Tales reformas se refieren especialmente a omisiones del proyecto y con las cuales se pretende hacer más operativa la casa matriz. Señala además que de acuerdo con el jefe del Estado se resuelve designar una comisión de alto nivel para que asesore al Ministerio en los cálculos de las indemnizaciones que se pagarán a las compañías concesionarias.

Julio 16

El abogado del Departamento Legal de la Mobil, doctor José Rafael Pacheco, quien realiza una gira por diferentes centros de trabajo para explicar al per-

sonal las condiciones y ventajas que a sus prestaciones sociales les ofrece la banca privada, informa que más de 600 trabajadores de esa empresa se han acogido al sistema de fideicomiso para el resguardo de sus prestaciones, y han depositado en sus cuentas bancarias cerca de 70 millones de bolívares.

La Cámara de Diputados aprueba en primera discusión la Ley de Nacionalización Petrolera, la envía a la Comisión de Minas para su revisión y luego será remitida nuevamente a la Cámara donde se aprobará. Se presentan proposiciones con respecto al artículo 15º que se refiere a la forma de cobrar lo que las compañías petroleras adeudan. Interviene Rómulo Henríquez (MIR), quien argumenta sus planteamientos con lo señalado por la Federación de Contadores Públicos en relación con el pago de indemnización a las empresas concesionarias, y considera que no hay ningún tipo de razones para indemnizar a esas empresas. Freddy Muñoz (MAS), señala que su partido apoya el artículo 15º en el entendido de que se harán los descuentos necesarios; dice que la Constitución contempla el pago por cuanto prohíbe las confiscaciones, y advierte que el actual régimen no saltará lo estipulado por la Constitución en un "arranque revolucionario". Pablo Salas Castillo (CCN), apoya el artículo 15º y hace un reconocimiento al trabajo de la Federación de Contadores. Tanto ese artículo como el artículo 23º que se refiere a las prestaciones sociales de los trabajadores, y el artículo 24º, pasan a la Comisión de Minas para su consiguiente revisión.

El doctor Marcel Roche expresa que una nacionalización que permita asociaciones no puede considerarse como integral. Sin embargo, muestra acuerdo con la nacionalización planteada si en cualquier asociación se establecen previamente las condiciones que la hagan posible, como por ejemplo, los términos de la sociedad: tiempo de duración y otras garantías que permitan en un futuro el dominio total de la industria. En fin, "una asociación para asegurar la independencia y no para perpetuar la dependencia". Considera que el país no puede emprender solo y sin ayuda la nacionalización petrolera. La asociación, en su criterio, nos dará derecho a lo que se desconoce y no se domina actualmente.

El doctor Henry Allais, Inspector de Reversión para las zonas de Anzoátegui y Guárico, estima en 1.000 millones de bolívares las instalaciones petroleras sometidas a inventario en los dos Estados. Se refiere al "valor libro" en relación al costo contabilizado, porque el "valor real" es mucho mayor. Asimismo indica que el 70 por ciento de las propiedades corresponden a la Mene Grande; el resto corresponde a la Mobil, Texaco, Creole y Phillips. Manifiesta que el mantenimiento de las propiedades es bueno y que entre otros bienes funcionan tres refi-

nerías, 330 estaciones recolectoras de petróleo, 24 plantas de inyección de gas, la más grande red de oleoductos de Oriente y terminales de embarque de gran capacidad, todos sujetos a reversión.

Julio 17

Los doctores Denzil Romero y Tulio Colmenares introducen ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Federal y Estado Miranda una denuncia penal contra las compañías concesionarias, funcionarios de la CVP y del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Presentan como prueba la carta pública de la Federación de Colegios de Contadores Públicos sobre pasivo oculto. Los delitos serían el de hurto (art. 453 del Código Penal), estafa calificada (art. 464, ordinal 2°) y apropiación indebida (art. 468). Señalan en el documento presentado los nombres de 19 compañías. Además podría ser configurado el delito de corrupción de funcionarios de personal de la CVP y del Ministerio de Minas. Considera Denzil Romero que de comprobarse explotación clandestina de 120 millones de barriles por parte de las empresas, éstas no deben ser indemnizadas.

Julio 18

La Cámara de la Industria del Petróleo califica como información errada y conceptos que no se ajustan a la realidad, lo que la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela ha revelado en varios avisos publicados en la prensa nacional.

El doctor Carlos Mendoza Goiticoa, tras mostrar preocupación por lo que pueda ocurrir con la nacionalización, considera que el Estado no tiene por qué enajenar su propiedad en caso de que necesite asociarse en cualquier área de la industria nacionalizada. Debe tomarse en cuenta la experiencia de las compañías especialmente en la comercialización internacional. Estima que las negociaciones de gobierno a gobierno son difíciles por cuanto se rigen por tratados muy rígidos, y las operaciones en materia petrolera deben ser flexibles. Lo mismo afirma tanto en la teconología como en el mercado, que son áreas donde es seguro que se presente la necesidad de asociación.

El doctor Carlos Rafael Silva, Primer Vicepresidente - Gerente del Banco Central de Venezuela, señala que la tendencia que hay en el instituto emisor es que las empresas petroleras nacionalizadas sigan gozando del mismo trato monetario que las compañías concesionarias con un dólar de Bs. 4,20 para efectuar los pagos al Fisco Nacional. Explica que la tesis del gobierno es de que

las compañías nacionalizadas deben operar como entes privados en cuanto a sus compromisos con el Fisco.

Julio 19

FEDEAGRO manifiesta su respaldo al proyecto de Ley de Nacionalización, afirmando que los ingresos petroleros deben utilizarse en ampliar la infraestructura del agro venezolano. Señala, entre otras cosas, que el estatuto que ha de regir la nacionalización del petróleo debe asegurar la superación definitiva de la situación de subdesarrollo que caracteriza la economía nacional.

En foro realizado en los cursos de postgrado de la Facultad de Economía de la UCV, el presidente de la Shell, Alberto Quirós Corradi, señala que la nacionalización se producirá cuando se efectúe el reemplazo de los centros de decisión foráneos, para lo cual PETROVEN deberá tener un gran concepto gerencial. Considera que esa empresa no puede aislarse a tomar decisiones sin el "insumo que se requiere de las otras grandes actividades de la política nacional". El geólogo Pedro Márquez se refiere a la imprevisión del gobierno señalando que aún no se sabe nada de PETROVEN, no se conoce cuál va a ser su funcionamiento ni las medidas pertinentes sobre las cuales habrá de desarrollarse la nacionalización. El doctor Andrés Sosa Pietri expone que las empresas mixtas, en su opinión, harán nugatoria la nacionalización, y agrega que existe un vacío sobre la forma cómo va a operar la empresa matriz por falta de previsión del gobierno.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en su discurso ante la XX Convención de Acción Democrática, afirma que el 90 por ciento de los venezolanos apoyan el proceso de nacionalización de la industria petrolera. Critica el principal partido de oposición por "confundirse con los marxistas" al actuar frente a dicho proceso. La decisión de nacionalizar la industria no es sólo el acto soberano de extinción de las concesionarias, sino que se trata de cumplir una acción internacional donde habrá "confrontación al desafiar a las grandes potencias" que requieren del petróleo, y los poderes económicos representados en las empresas transnacionales.

Julio 20

Petrolera Mito Juan C.A., como casa matriz del grupo, cambia su denominación social por Empresa Mito Juan C.A., según resolución aprobada por la 9ª Asamblea Ordinaria, para evitar confusiones en cuanto a la naturaleza de la compañía ante los efectos de la nacionalización petrolera sobre una de las empresas del grupo, Mito Juan Concesionaria de Hidrocarburos. Ante la decisión

política de nacionalizar la industria de los hidrocarburos, la compañía aspira mantenerse en el cuadro petrolero como empresa sólida, eficiente y confiable al servicio de la nación venezolana en el manejo de campos productores de petróleo, por la vía de simples contratos operativos.

El doctor Félix Morreo, jefe de la División de Mantenimiento en la Dirección de Reversión del Ministerio de Minas, informa que las concesiones petroleras de más de 2 millones 200 mil hectáreas en este momento tienen, según inventario de propiedades, plantas y equipos, un valor bruto aproximado a los 22 mil millones de bolívares.

En la clausura del VI Congreso Interamericano de Ingeniería Química, el doctor Hernán Anzola, Director General del Ministerio de Minas, señala que la industria de la refinación en manos del Estado constituye un reto para los ingenieros químicos. Dice que se requiere de la incorporación de 40 ingenieros por año en la actividad petrolera, y agrega que esa especialidad enfrenta un reto con el futuro desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, la cual contiene las reservas más importantes del hemisferio occidental con características fisicoquímicas que impiden su procesamiento por los métodos tradicionales.

Julio 21

Laureano Torrealba, vicepresidente de la CUTV y secretario sindical de Vanguardia Comunista, en declaraciones suministradas a la prensa formula severas críticas a la actitud asumida por los dirigentes sindicales de AD ante la protesta de algunos sectores por la aprobación del artículo 5º, donde los sindicalistas adecos en el Zulia actuaron como "rompehuelgas". También denuncia el dirigente sindical que "de acuerdo a la política de gobierno, se tiene prevista la entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco", existiendo demandas concretas para tal fin, por lo menos de la Mobil Oil Company.

Un sistema novedoso de desmetalización para crudos pesados que permite obtener mejores precios en el exterior es creado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la UCV. El trabajo es presentado por los profesores Gonzalo Sepúlveda, Pedro Roa, Marcos Rosas Brussin, Nereida Carrión y G. Kapo, y los estudiantes J. García Delgado, R. Wix y N. Tesorero. Mediante ese proceso se elimina de nuestros petróleos pesados hasta un 90 por ciento del vanadio y un 40 por ciento de azufre, la tecnología creada es absolutamente nacional y el invento será patentado mundialmente.

El doctor Julio Sosa Rodríguez considera que la empresa mixta es una forma de asociación que plantea problemas para las operaciones dentro del territorio nacional. Dice que ese tipo de empresa, aun cuando el capital privado sea minoritario, participa a nivel directo donde se definen acciones y estrategias, siendo probable entonces que con frecuencia se convierta en fuente de conflictos de intereses, pudiendo incluso mediatizar de una forma u otra el poder de decisión del Estado. Estima, por otro lado, que la nacionalización es una aspiración colectiva, por ello es necesario para su éxito que se lleve a cabo dentro de un verdadero consenso. Este puede y debe lograrse. En su opinión al artículo 5º podrían incorporársele algunos criterios esenciales, siendo convenientes además salvaguardar para Venezuela en toda su integridad la Faja del Orinoco.

El doctor José Antonio Mayobre, ex ministro de Minas e Hidrocarburos, señala que después de la nacionalización el Estado venezolano a través de PETROVEN tendrá la responsabilidad de prever grandes inversiones en nueva tecnología, así como descubrir y asegurar nuevas reservas. Considera que los errores que se cometan en el proceso de nacionalización incidirán en todos los aspectos económicos y sociales del país. Agrega que al sector oficial le corresponde planificar a nivel de alta gerencia para mantener en el futuro esa actividad en términos satisfactorios.

Julio 22

El doctor Juan Chacín, presidente de la Gulf de Ecuador, declara que Venezuela puede abordar los problemas del mercadeo y/o de transferencia tecnológica sin tener que crear empresas mixtas. Sin embargo, es recomendable que los administradores de la industria estatizada gocen de la flexibilidad que requiere un asunto tan complejo como el petrolero. En relación a la casa matriz señala que es necesaria su organización lo más pronto posible para que puedan trazarse planes de acción que permitan su funcionamiento a partir del 1º de enero de 1976. Afirma que los políticos profesionales deben estar fuera de la dirección de la empresa nacionalizada, y manifiesta estar dispuesto a regresar a Venezuela cuando el país así se lo exija.

Rafael Lugo, trabajador de la concesionaria Mobil de Barinas, declara que es necesario desechar la política de la industria petrolera una vez nacionalizada, ya que este proceso es un acto soberano de la nación y de los venezolanos, y afirma que los trabajadores aspiran se le paguen las mismas prestaciones que pagan las empresas concesionarias. Aquiles D. Villarroel, Secretario de Organización del Sindicato Petrolero de Barinas, dice que la industria petrolera nacionalizada para

que tenga éxito debe utilizar los mismos recursos de administración y tecnología eficientes que han puesto en práctica las concesionarias. Al referirse al artículo 5º señala que con el mismo se trata de dotar al gobierno de facultades para que en un momento dado participen las empresas extranjeras en tareas enmarcadas dentro de la nacionalización. En su opinión el citado artículo debe ser reglamentado para que el Ejecutivo antes de aplicarlo cuente con la aprobación previa del Congreso Nacional.

Julio 23

El doctor D.F. Maza Zavala considera que no debe pagarse indemnización a las petroleras puesto que los capitales invertidos por las compañías han sido recuperados varias veces durante más de 50 años de explotación. Dice que si se estableciera un balance entre las acreencias de la nación y los activos de las compañías, el saldo será favorable al Estado venezolano, o sea que aquéllas tendrían que indemnizar a este último. Considera que los artificios fiscales practicados por las empresas durante muchos años, tanto por precios inferiores a los que regían en los mercados, como por costos superiores a los incurridos, el despilfarro de petróleo y gas ocasionado por prácticas irracionales de explotación, entre otros, son elementos que deben tomarse en cuenta para pensar en pago de indemnización. Con respecto a la sustracción indebida de 120 millones de barriles señalados por la Federación de Colegios de Contadores, Maza Zavala indica que el Estado siempre ha adolecido de ineficacia en cuanto a fiscalización petrolera. Expresa su desacuerdo con el plazo de los 120 días que se dará a las compañías petroleras luego de aprobarse la Ley, lo cual indica que continuarán ejerciendo los derechos de explotación, refinación y venta y seguirán devengando las utilidades correspondientes. Señala asimismo que respalda la fórmula presentada por la Comisión de Reversión para hacer realidad una nacionalización integral.

El doctor Valentín Hernández, titular de Minas e Hidrocarburos, señala que aspectos como la indemnización a las empresas petroleras y la ayuda tecnológica que éstas puedan prestarle al Estado venezolano se están negociando simultáneamente. Se espera asimismo que la comisión de alto nivel que él preside tenga todo listo para el día en que se ponga el "Ejecútese" a la Ley. Dice que se busca asistencia tecnológica, lo cual no implica que se esté cercando el hecho mismo de la nacionalización. Anuncia que desde el punto de vista tecnológico se piensa en la creación de un Instituto Venezolano del Petróleo para centralizar las actividades de la nacionalización. Muestra optimismo ante la posibilidad de obtener asistencia tecnológica por el lapso que sea necesario.

El presidente de Fetrahidrocarburos, Antonio Machado, declara que la central obrera que preside prepara un documento que será entregado al Presidente de la República en el que fijan su posición frente al proceso de nacionalización petrolera. En ese documento solicitan que el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores se haga en base al artículo 106 del nuevo reglamento del trabajo. Esas prestaciones ascienden a más de 2 mil millones de bolívares, pero según una circular emitida por las empresas petroleras, el 80 por ciento de los trabajadores tienen depositadas sus prestaciones con un cálculo empresarial equivalente a mil millones de bolívares llegando el depósito real a 400 millones. Dice Machado que los trabajadores petroleros aspiran que al producirse la nacionalización de la industria se les cancele el 50 por ciento de sus prestaciones; también solicitarán del Presidente que se les entregue en propiedad las viviendas que habitan los trabajadores petroleros. Para concluir, expresa el dirigente petrolero, que Fetrahidrocarburos se prepara y estudia las estrategias a seguir con el Estado como patrono para depositar en marzo de 1976 el proyecto de Contrato Colectivo que contendrá mayores reivindicaciones, afirmando que las compañías concesionarias que operan en el país están incurriendo en violaciones del Contrato Colectivo, creando situaciones conflictivas que luego tendrá que afrontar el Estado nacionalizador.

Julio 24

Ante la denuncia hecha por el Directorio Nacional de la Federación de Contadores Públicos de que el Fisco Nacional registró una pérdida de casi 11 mil millones de bolívares para el período 1957-70, ocasionada por las compañías petroleras que operan en el país, una Comisión de Directivos de la Cámara de la Industria del Petróleo, integrada por Luis Alvarez Olavarría, presidente; Gustavo Aristiguieta, Raúl Canard, Fernando Mendoza, Emilio Spósito Jiménez y Nelson Vásquez, se entrevista con el doctor Gonzalo Barrios, presidente del Congreso Nacional, para entregarle un documento donde desmienten la afirmación de los Contadores Públicos.

El doctor Valentín Hernández Acosta, ministro de Minas e Hidrocarburos, anuncia que Petróleos Venezolanos (PETROVEN) comenzará con un capital inicial de 2.500 millones de bolívares. Sin embargo, señala que esa empresa debe tener un financiamiento seguro y por ello propone añadir una nueva base al artículo 6º del proyecto de Ley en discusión, en la que se establezca que mensualmente el 10 por ciento del ingreso de las empresas operativas pasaría como aporte a PETROVEN, calculándose en unos 3.000 millones de bolívares dicho aporte. Se estima que según los planes de financiamiento estudiados en el Ministerio

para los próximos cinco años, la inversión podría alcanzar los 25.000 millones de bolívares.

El presidente de la CTV, señor José Vargas, declara que "la industria nacionalizada no se puede mantener pura en una sociedad corrompida. La sociedad capitalista es la generadora de la corrupción... Dentro del nuevo esquema para el país, creo que podremos organizar una sociedad en la que pervivan —transitoriamente— las empresas capitalistas y las del Estado, sin los vicios originados por la competencia de la libre empresa". Al referirse a aspectos relacionados con la nacionalización petrolera, expresa, entre otras cosas, que le parece absurdo el planteamiento que pretende desvincular el petróleo de la política, cuando se trata de una industria de tanta transcendencia política en el mundo. Al abordar el punto de la burocratización señala que las petroleras están burocratizadas y que el gobierno tendrá que resolver ese problema, pues la consigna de que las concesionarias son eficientes y no burocratizadas es totalmente falsa, siendo que la denominada eficiencia de las petroleras se mide por la cantidad de dinero que producen, por las utilidades que generan. También advierte los posibles peligros una vez nacionalizada la industria de crudo, atizando conflictos sociales en forma artificial (huelga, paros, etc.). Asimismo sostiene el presidente de la CTV que se puede observar cómo en los últimos días se están aumentando los salarios en forma exorbitante y, al mismo tiempo, se hayan despedido de sus trabajos a importantes contingentes de personas que laboran en la industria petrolera, sumándose a ello el que no se hayan resuelto problemas vitales como vivienda, empleo, educación, salud, recreación, etc.

El doctor Alberto Quirós Corradi, presidente de la compañía Shell, asiste al foro "Cómo ha de funcionar Petrovén" que se realiza en el Curso de Especialización en Economía y Administración de Hidrocarburos de la Facultad de Economía de la UCV. Señala el presidente de la Shell en su intervención que a PETROVEN debe asignársele como objetivo prioritario el preservar para la industria nacionalizada una estructura multiempresarial. Se muestra partidario asimismo de la conveniencia de que en el Directorio de la casa matriz figuren temporalmente directivos de las empresas operadoras, con lo cual se aseguraría un flujo de comunicaciones en sentido amplio, y daría a PETROVEN los insumos que va a necesitar para iniciarse y estructurarse.

Los ministros de Minas e Hidrocarburos y Hacienda, doctores Valentín Hernández y Héctor Hurtado, respectivamente, se presentan ante la Comisión de Minas del Congreso para exponer las modificaciones a los artículos 6, 12, 14 y 23 del

proyecto de Ley de Nacionalización aprobado en primera discusión en la Cámara de Diputados. La del artículo 6 consiste en que las empresas petroleras entreguen a PETROVEN el 10 por ciento mensual de sus ingresos netos provenientes del petróleo exportado para que esta empresa matriz cuente con suficiente capital para explotar y desarrollar la búsqueda de nuevas reservas. Esas cantidades entregadas a PETROVEN quedarán exentas de pago de impuestos. El doctor Héctor Hurtado sugiere modificaciones en cuanto al pago de prestaciones (art. 23). Se aspira a que se deposite en el Banco Central el monto de aquéllas que no hayan sido consignadas por vía de fideicomiso en otro instituto de crédito. Con respecto al artículo 12 agregan que las personas que celebren convenios de operación o de participación con empresas concesionarias quedan sujetas a todas las disposiciones de la Ley y con los mismos derechos y obligaciones que las concesionarias. El agregado al artículo 14 se refiere a la ocupación previa y proponen que dictada ésta por la Corte Suprema dejarán de surtir efecto las concesiones en el momento en que el juez comisionado por la Corte para realizar la ocupación ponga en posesión a la empresa petrolera venezolana.

Julio 25

El doctor Bernardo J. Díaz, presidente de la Mene Grande Oil, afirma que las empresas transnacionales, por su experiencia y eficiencia, continuarán jugando un importantísimo papel luego de la nacionalización de la industria petrolera.

Julio 27

El doctor Humberto Peñaloza advierte sobre la inevitabilidad de cambios especialmente políticos, como consecuencia de la nacionalización petrolera, pues ésta modificará el rumbo político económico del país. El Estado dejará de ser un recaudador de rentas petroleras para convertirse en generador de sus propios recursos. Se debe, entre otras cosas, fortalecer la independencia política del país; pasar de una economía de base extractiva a otra de base productiva; llevar al máximo el ritmo de crecimiento del ingreso nacional y la capacidad de absorción de tecnología; llevar el bienestar a la creciente población y convertir a Venezuela en una sociedad industrial y productiva.

Julio 28

La Cámara de Diputados aprueba en segunda discusión la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. El artículo 1º es votado por AD, CCN y URD. Los partidos Copei, MAS, PCV, MEP, y OPINA salvan su voto. Los artículos 2, 3, y 4 se aprueban sin discusión. Asimismo estos últimos partidos votan contra los artículos 5, 6, 12 y 23. Con respecto al resto del articulado no se presentan problemas por parte de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Según informa Ramón Tenorio Sifontes el partido URD propondrá en la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados que las empresas depositen las prestaciones de los trabajadores petroleros 10 días después de promulgada la Ley. Considera que el plazo de 29 días establecido por el gobierno es sumamente largo y puede ocasionar incertidumbre en la masa laboral.

Julio 29

Leonardo Montiel Ortega (URD), entrega a los doctores Gonzalo Barrios y Rafael Caldera un documento donde expone que hay condiciones para llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas acerca de la nacionalización petrolera. Explica los puntos de divergencia entre tales fuerzas y señala que puede llegarse a una nueva redacción del artículo 5º para unificar los criterios divergentes.

El doctor Juan B. Fuenmayor, Vicerrector de la Universidad Santa María, señala que Venezuela debe impedir que las compañías concesionarias se queden con la parte más importante del negocio petrolero, la comercialización, el transporte y la transformación final del producto. Considera asimismo que el objetivo de la nacionalización es el logro total y definitivo de la independencia política y económica del país, pues la nacionalización debe ser integrada. Con respecto a la tecnología afirma que no es cierto cuando se dice que debemos plegarnos a las transnacionales para que nos la suministre, por cuanto hay muchos empresas que la venden incluso a las mismas transnacionales. Dice que a éstas hay que "echarlas e impedir que sigan mandando".

Los presidentes de 19 empresas petroleras serán citados por el Juez Quinto de Instrucción, doctor Ricardo Vera Delgado, para que rindan declaraciones en torno a la denuncia de los doctores Denzil Romero y Tulio Colmenares sobre supuesta apropiación indebida, estafa y hurto. El Tribunal espera respuesta del doctor Gonzalo Barrios, referente a un oficio que le fuera remitido por la Cámara de la Industria del Petróleo desmintiendo las acusaciones de la Federación de Colegios de Contadores al señalar que la nación dejó de percibir 5 mil millones de bolívares durante el período 1957-1970.

El viceministro de Minas, Hernán Anzola, plantea la necesidad de cambiar los patrones de refinación petrolera para adecuarlos a las exigencias del desarrollo. Considera que el futuro de la industria petrolera descansará sobre la explotación y procesamiento de los crudos pesados. Esa industria ha crecido de tal manera que actualmente la capacidad instalada de refinación alcanza al mi-

llón y medio de barriles diarios, capaz de procesar el 70 por ciento del crudo que se produce en el país. Advierte conocer que el problema de refinación no es sólo técnico, sino también de mercado y muy vinculado a las políticas de importación de los grandes países consumidores.

Los Presidentes de Venezuela y Colombia, señores Carlos Andrés Pérez y Alfonzo López Michelsen, respectivamente, y el jefe de Estado de Panamá, general Omar Torrijos, firman en Santa Marta (Colombia) un documento tripartito en el cual dan su más decidido apoyo a la aspiración del pueblo de Venezuela de nacionalizar la industria petrolera.

Julio 30

Trece sindicatos y uniones de trabajadores petroleros afiliados a Fedepetrol emiten un manifiesto de apoyo a la Ley de Nacionalización Petrolera que se discute en el Congreso Nacional. Así lo dan a conocer los señores Raúl Henríquez y Arístides Bermúdez, miembros de la fracción sindical de AD. En el citado documento se señala que ratifican el planteamiento de una nacionalización integral de la industria petrolera así como las previsiones y flexibilidad que se le debe otorgar al Estado para que administre con eficacia y éxito la industria nacionalizada. Repudian cualquier intento de huelga o paro en los campos de producción y advierten que se mantendrán alertas y en contacto permanente con sus dirigentes y la CTV para entrar en acción cuando lo requiera la defensa de los intereses económicos del país. Se refieren igualmente al problema de las prestaciones sociales de los trabajadores petroleros de las cuales dicen que están plenamente garantizadas en el artículo 23 de la Ley, así como también la estabilidad absoluta.

Julio 31

En conferencia dictada en Coro en la sede del Centro de Ingenieros del Estado Falcón, el presidente de la compañía Shell de Venezuela, doctor Alberto Quirós Corradi, afirma que lo más conveniente para el Estado venezolano es mantener los actuales mecanismos impositivos una vez nacionalizada la industria petrolera. Dice también que el personal actual de la industria petrolera tendrá que adaptarse a nuevas actitudes después de la nacionalización, pues no debe hacerse ilusiones de que las cosas no van a cambiar, pues sí habrá cambio tanto en el estilo como en la filosofía; pero ese personal mantendrá la misma eficiencia operativa después de la nacionalización. En otra parte de su exposición manifiesta su desacuerdo con un Ministerio Contralor de la empresa matriz, pues una institución contralora sería un estorbo en el camino de las decisiones y estructuras políticas fundamentales de esa empresa matriz. Al referirse a las empresas mixtas sostiene que la ausencia de las mismas no pone en peligro la soberanía del

país, y añade que sería irresponsable afirmar o negar que el arranque de la industria petrolera nacionalizada necesita de las empresas mixtas.

Denuncian los abogados Denzil Romero y Tulio Colmenares que las empresas petroleras que operan en el país están violando el artículo 217 del Código de Comercio vigente, el cual contempla que las Juntas Directivas de las compañías deben estar registradas con sus nombres propios. También señalan que las concesionarias en ningún momento han consignado en sus respectivos expedientes los balances correspondientes a sus ejercicios fiscales, en flagrante violación a lo dispuesto en el artículo 308 del citado Código, sumándose a la gravedad de lo denunciado la circunstancia insólita de que tampoco en los medics directivos del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, encargados del control administrativo de dichas concesionarias, se conocen los nombres de los directivos. En virtud de la gravedad de esos hechos, los doctores Romero y Colmenares han introducido su denuncia ante el Juzgado Quinto de Instrucción.

La Federación de Colegios de Contadores Públicos emite una nueva declaración en respuesta a la Cámara de la Industria del Petróleo, en la cual ratifica la denuncia presentada ante el Congreso Nacional en torno al pasivo oculto de 5 mil millones de bolívares por parte de las concesionarias. La Federación considera inaceptables los argumentos de la Cámara y propone que el Estado debe obtener la compensación en especie para recuperar los 120 millones de barriles. De no ser así debe incautar lo que las empresas tengan en depósito para el momento de la nacionalización.

El presidente de Fedecámaras, Antonio Díaz Martínez, expresa que la nacionalización petrolera obliga a aumentar las fuerzas productivas y distribuir con equidad el ingreso. Señala que el país vive momentos de intenso nacionalismo y que la nacionalización representa el primer paso firme hacia la reorganización de la economía bajo la "inspiración de un firme propósito de independización".

Agosto 1

En la segunda discusión de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera, el parlamentario de URD, Ramón Tenorio Sifontes, expone la posición de su partido de apoyo a la nacionalización integral de la industria petrolera como acto de soberanía plena por el Estado y, por ende, rechaza el artículo 5º que establece la posibilidad de creación de empresas mixtas dentro y fuera del país. Asimismo hace tres proposiciones modificatorias de los artículos 23 y 24 del proyecto de Ley para reforzar los derechos, intereses y con-

quistas de los trabajadores petroleros en materia de prestaciones sociales, estabilidad, goce de reivindicaciones económicas, sociales, asistenciales y planes de beneficio.

El Movimiento al Socialismo (MAS) propone nueva redacción del artículo 5º en el cual condiciona la celebración de contratos de asociación con entes privados para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. El documento es entregado por los dirigentes Pompeyo Márquez, Freddy Muñoz, Jesús Valedón y Antonio J. Urbina.

El ministro encargado del Trabajo, doctor Wenceslao Mantilla, anuncia que las condiciones contractuales existentes para los trabajadores y empleados de la industria petrolera privada no serán modificadas con la nacionalización. Señala que lo laboral en materia petrolera está regulado por contratos colectivos que se vienen suscribiendo desde hace años entre los sindicalistas agrupados en Fedepetrol y las distintas compañías por norma de la Ley del Trabajo. Así que la nacionalización no cambia la situación existente. Con respecto a las prestaciones sociales de los trabajadores, el doctor Emilio Ramos, Consultor Jurídico del Ministerio, advierte que aquéllas se depositarán en el Banco Central, y los fideicomisos se refieren a las cantidades que adeudan las empresas concesionarias por concepto de prestaciones sociales.

El ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, y el Director de Reversión, doctor Humberto Calderón Berti, reconocen ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados que ha habido fraude en los bienes afectos a reversión, pero no puede determinarse quiénes son los responsables. El doctor Calderón Berti denuncia que entre 1972 y 1974 se han registrado 132 sustracciones de bienes. Señala que no se ha autorizado la venta de bienes inmuebles y sólo se han permitido dos donaciones a entidades sin fines de lucro. Sobre el material descubierto en Anaco, Calderón Berti expresa que no se ha procedido contra la Mobil por cuanto no se conoce quiénes son los que han cometido el fraude. Se anuncia sin embargo que el Presidente de la Mobil comparecerá ante la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados.

Agosto 2

Entre los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo Nacional de Fedepetrol figuran los siguientes: 1) Rechazo a las empresas mixtas en el negocio petrolero, acuerdo en el que salvan su voto Raúl Henríquez y Arístides Bermúdez de AD; 2) Respaldo a Fetrazulia, especialmente a su presidente Carlos Galué Na-

vea por su insobornable posición nacionalista y su posición en contra de la mediatización del proceso de nacionalización que significan las empresas mixtas, acuerdo en el que salvan su voto Henríquez y Bermúdez de AD; 3) Que el Ejecutivo Nacional entregue en propiedad las casas que habitan los trabajadores y jubilados de la industria petrolera y que aquellos obreros que no ocupan vivienda se les dé un bono especial equivalente a la vivienda que tuviere derecho; 4) El pago del 50 por ciento de las prestaciones sociales a los trabajadores; 5) Solicitar del Ejecutivo Nacional la condonación de las deudas de los trabajadores; 6) Pedir al gobierno que evite la politización de los cuadros trabajadores de la industria nacionalizada.

Agosto 4

El presidente del Congreso, doctor Gonzalo Barrios, del partido Acción Democrática, interviene en el debate sobre la Ley de Nacionalización, afirmando que la historia del petróleo en Venezuela conduce a la nacionalización. Señala que "la concesión es un acto de soberanía y como tal puede terminar por otro acto de soberanía". Considera que la opinión pública, por lo menos la que se conoce a través de los partidos, está de acuerdo con que se debe nacionalizar. "No hay nadie que vaya a votar contra ese hecho". Advierte que la Ley encierra la ventaja de presentar el proceso como un acto equilibrado democráticamente, un "acto de justicia nacional", sin excesos ni "arrebatos confiscatorios"; indica que AD no reclama la gloria de la nacionalización, sólo reclama el derecho de que se le haga más fácil la tarea, por cuanto si fracasa Acción Democrática probablemente sea el fracaso de Venezuela. Con respecto al artículo 5º dice que en él se habla de casos en que serán posibles asociaciones, pero no menciona la palabra empresas mixtas, en tanto pueden haber otras asociaciones que no sean justamente esas empresas. La nacionalización, según Barrios, no es un "acto revolucionario que tiende a situar al país en estado de ruptura con todos los vínculos económicos que tienen con países capitalistas ni es tampoco una empresa fatalmente capitalista que trate de conseguir mejores provechos económicos". La nacionalización es el "cumplimiento de un designio histórico".

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Puerto Cabello, Arnaldo Acosta, denuncia que la Shell maniobra contra la nacionalización petrolera, cuando en la Refinería de Punta de Cardón aumenta los sueldos de su personal de confianza en un 10, 11 y 12 por ciento. Al explicar el sentido de la decisión de los aumentos de sueldos señala que la misma se orienta a que una vez nacionalizada la industria, si el Estado se viera en la imposibilidad de pagar tales remuneraciones, la empresa estaría dispuesta a transferir ese personal a

otros países donde opera, con lo cual sustraería técnicos y profesionales especializados que tanto necesita el país. Finaliza el dirigente sindical afirmando que no existe posibilidad de politizar los cargos de la industria petrolera.

El doctor Rafael Caldera, ex presidente de Venezuela, en su condición de Senador vitalicio, inicia el debate sobre el proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera en la Cámara del Senado. El discurso constituye un análisis bastante amplio de casi toda la historia petrolera venezolana. Establece una comparción entre el papel desempeñado por la Compañía Guipuzcoana en la época colonial y el de las compañías petroleras en la Venezuela contemporánea. Vincula la realidad nacional con hechos importantes sucedidos a nivel mundial. En materia petrolera destaca momentos determinantes de esa explotación en Venezuela, considerando, entre otras cosas, el papel del país dentro de la OPEP. Señala asimismo que el desarrollo de los grandes países se ha hecho a costa de nuestras riquezas. Con respecto a la nacionalización petrolera estima que es la oportunidad para realizarla, recordando que en 1973 bajo su gobierno, el ministro de Minas, doctor Hugo Pérez La Salvia, ya había anunciado que estaban dadas las condiciones para hacerlo. No se puede esperar el 83 por lo que es inaplazable entonces la nacionalización. Sin embargo, afirma que entre 1974-75 "lejos de avanzar se ha retrocedido en el camino", en tanto se expresa una creciente angustia y temor por la nacionalización. Dice el doctor Caldera que el país debe saber que van a presentarse dificultades, pero que las mismas no serán consecuencia de la nacionalización, sino que ésta la necesita el Estado para hacer frente a esas dificultades. Al referirse al artículo 5º señala que abre la posibilidad a las empresas mixtas y éstas no van a ayudar sino a entorpecer el proceso. Hace un llamado a la reflexión sobre el tema pidiendo se examine nuevamente el artículo 5º en tanto considera que de presentarse peligros éstos "se harán más graves en caso de que sucumbamos a la tentación de crear esas empresas mixtas".

El Consultor de la Caracas Petroleum, ingeniero Faría, expresa que si bien la nacionalización es un reto para quienes trabajan en geología, ingeniería, economía, entre otras actividades, definitivamente están dispuestos a aceptar ese reto para lograr que el proceso culmine siendo un buen negocio para Venezuela. Añade que la forma como se ha redactado la Ley de Nacionalización Petrolera, donde se le da el Ejecutivo la facultad de negociar "lo que mejor sea para el país", permite que Venezuela pueda salir bien de este paso histórico, siempre y cuando el manejo integral de la industria se deje en manos de los técnicos y no sea infiltrada por la politización y la burocracia que desafortunadamente existen en otras empresas del Estado.

Agosto 5

El senador del MAS, Pompeyo Márquez, expone en la Cámara del Senado la opinión de ese partido en torno a la Ley de Nacionalización Petrolera. Señala que ese movimiento político respalda el proceso nacionalizador que de inicio al desarrollo de una economía independiente, donde la industria de los hidrocarburos pase —con todas sus limitaciones— de manos de los grandes intereses a manos del Estado. Pero, por ser este un proceso nacionalizador de limitados alcances, concebido dentro de un orden capitalista y promovido por un gobierno cuya misión, según lo ha confesado, es consolidar el crecimiento capitalista del país, el debate sobre la materia no concluye con la sola aprobación de la Ley, sino que continúa en otros terrenos con el objetivo de lograr una industria nacionalizada que sirva para estructurar una economía independiente y una sociedad que rompa con la dependencia externa. Al referirse a las modificaciones que el Ejecutivo hiciera al proyecto elaborado por la Comisión de Reversión advierte que el MAS se opone a aquéllas y lo hace en función de que no fracase la nacionalización, porque las brechas que abre el artículo 5º pueden permitir la incorporación de los monopolios internacionales. Agrega que toda la oposición, junto con científicos, técnicos y profesionales, ha demostrado que no son indispensables las empresas mixtas, por tanto no era necesario ceder ante las presiones de Fedecámaras. Por otra parte, señala que no se oponen a conversaciones entre el gobierno y las compañías, pero el problema no radica en ellas sino en sus resultados, y de acuerdo a informaciones dadas por el ministro de Minas a la Comisión de Minas del Senado, los arreglos van por vía de la compensación, de los contratos de asistencia tecnológica, contratos de suministro y de la Faja del Orinoco. Presenta su absoluto desacuerdo en torno a las negociaciones para la explotación de la Faja. En relación a la denuncia del ex presidente Caldera en el Senado, sobre el manejo de las transnacionales y del gobierno norteamericano de presiones ejercidas durante su mandato, dice que son experiencias que no deben haber cesado y que el presidente Pérez debe estar sometido a iguales presiones, estimando importante que el país conozca esa situación porque ello generaría un movimiento de opinión pública, que puede ser el camino para derrotar esas presiones.

El presidente de la Compañía Shell de Venezuela, doctor Alberto Quirós Corradi, señala que entre los expertos y dirigentes petroleros venezolanos existe preocupación por varios factores que se encuentran presentes en la cuestión petrolera a propósito de la nacionalización. Uno de ellos es el que se refiere a la sospecha de que existe la posibilidad de politización dentro de la organización petrolera en su conjunto; y en segundo término, preocupa el hecho de que se intente dar al *holding* una estructura en donde se designe al ministro de Minas como presidente, quien es el funcionario gubernamental encargado de controlar y fiscalizar

el desarrollo de la actividad petrolera nacional, convirtiéndolo por consiguiente en juez y parte a la vez.

AGROPET no está de acuerdo con los artículos 23 y 24 del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Así lo señala Rafael Pérez Alvarez, vicepresidente de esa agrupación, quien dice que, en cuanto al artículo 23, el trabajador petrolero quiere y debe tener libertad para escoger el Banco donde se depositarán sus prestaciones en fideicomiso, pero que la Comisión de Minas insiste en que los fideicomisos deben ir al Banco Central, oponiéndose al decreto presidencial 859. En relación al artículo 24 la objeción de AGROPET deriva de la redacción que se le dio, pues algunos agropetistas creen que sus sugerencias sobre planes de jubilación y la garantía de los incentivos otorgados por las "normas internas" de las empresas fueron debidamente interpretados por la Comisión de Minas de Diputados, pero otros piensan que no está suficientemente claro.

El Consejo Nacional de Fedecámaras señala que, a pesar de la forma como queda estructurada la Ley de Nacionalización, le preocupa la implementación que deberá darse al proceso después de promulgada. Considera que es conveniente tomar medidas para mantener un clima que favorezca la propensión a invertir en el resto de los sectores económicos. El documento presentado por ese Consejo contiene varios puntos que, entre otras cosas, consideran la necesidad de instrumentar un modelo operativo que mantenga y mejore la industria nacionalizada en niveles de productividad, competividad, aprovechamiento tecnológico e inversiones deseables para el país.

Agosto 6

El ex presidente de la República, Rómulo Betancourt en su carácter de Senador vitalicio interviene en la Cámara cuando se discute el proyecto de Ley de Nacionalización petrolera. Comienza por hacer un recuento histórico de la explotación del petróleo en Venezuela en el cual esboza fundamentalmente la política de entrega de concesiones en el país, y la lucha de las compañías por obtenerlas. Hace consideraciones además sobre la legislación petrolera venezolana. Destaca asimismo la importancia de la OPEP para los países productores y la fijación unilateral de los precios. Al referirse a las concesionarias dice que éstas han expoliado al país porque han encontrado "gobiernos venales que no han sabido defender los intereses de Venezuela". Betancourt concluye el análisis del proceso petrolero con la Ley de Nacionalización que se discute en el Congreso, centrando su atención en el polémico artículo 5º. De éste dice que establece sólo dos posibilidades: la de contratos operacionales de la casa matriz o *holding* que va a

administrar la industria, o de contratos de asociación, que no podría hacerlos el Ejecutivo sin la autorización del Congreso reunido en sesión conjunta de ambas Cámaras. Afirma que son posibilidades de asociación ya que en el "artículo 5º no se habla en ningún momento de empresas mixtas". Refiere también sobre el pago de indemnización y señala que comisiones calificadas del Ministerio de Minas e Hidrocarburos han llegado a un acuerdo con los consorcios que explotan el subsuelo acerca del valor de las indemnizaciones, "un valor que debe pagarse porque aquí no se trata de confiscación".

El doctor Denzil Romero presentará un escrito contentivo de indicios sobre la doble contabilidad que asegura llevan las empresas petroleras. Señala que aquéllas acostumbran evadir el pago de Impuesto sobre la Renta a través de una serie de manipulaciones contables y el mantenimiento de una doble contabilidad, una en Venezuela y otra llevada por sus matrices en el país de origen. Manifiesta que aporta nuevos elementos sobre lo que denomina "el truco de los sobreprecios", hace observaciones sobre las ganancias estimadas de las matrices para el año 1974 y la actitud "farsante" de las filiales que operan en el país, las cuales se quejaban de las disminuciones habidas en sus ganancias respecto al año anterior a pesar del incremento de beneficios obtenidos en el año de referencia.

A pesar del plazo de 48 horas que el Juez Quinto de Instrucción, doctor Ricardo Vera Delgado, dio a las compañías concesionarias para la presentación de los recaudos sobre la materia que investiga ese Tribunal después de la denuncia por presunto pasivo oculto de 5 mil millones de bolívares, ninguna de las empresas han presentado los recaudos ni los informes sobre la constitución de las juntas directivas ante el Juez. Señala éste que se han enviado a las empresas las comunicaciones pidiéndoles los recaudos de acta constitutiva y nómina de integrantes de las juntas, y las concesionarias no las han remitido, razón por la cual no han podido ser citados los representantes de las empresas.

El ex presidente Rómulo Betancourt declara que no debe existir temor en que se nos engañe con respecto a las negociaciones para indemnizar a las empresas petroleras. Defiende el derecho que le asiste al Estado venezolano en prever la creación de empresas mixtas, destacando la importancia de la tecnología extranjera a la que seguramente deberá recurrirse.

Agosto 7

El ingeniero químico Gonzalo Sepúlveda (MAS), considera que se exageran las dificultades tecnológicas para justificar las empresas mixtas especialmente

para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Argumenta incluso su afirmación con algunos de los planteamientos expuestos por INVEPET en uno de sus informes, cuando señala que en el caso de la tecnología interna las empresas no han empleado un conjunto de recursos tecnológicos existentes en el país, aun cuando es INVEPET quien magnifica muchos de los problemas tecnológicos.

El presidente de la Compañía Shell de Venezuela, Alberto Quirós Corradi, advierte que la nacionalización de la industria petrolera implica asimilar con urgencia el reto tecnológico y administrativo que ella plantea. Al ahondar en estos dos aspectos, el alto ejecutivo de la empresa apunta que si se interrumpe el ritmo de alimentación tecnológica de la industria petrolera, sería tanto como apresurar la "menopausia" de la misma y añade que al producirse la nacionalización petrolera ya habrá sido extraído todo el petróleo fácil y sólo quedaría el difícil, para el cual se requiere de una tecnología que no se posee. Al referirse al segundo aspecto planteado dice que la industria de hidrocarburos una vez nacionalizada necesitará de muchos gerentes y directores que aún no están formados, pues se necesitan 15 años para los primeros y 20 para los segundos.

En la *Carta Semanal* del Ministerio de Minas e Hidrocarburos se señala que la transferencia tecnológica es un reto inminente que tiene planteado Venezuela ante la nacionalización de la industria petrolera. Se añade que la creación del Banco de Datos de Información y su óptima transferencia es la base para resolver el grave problema que tienen muchos países en materia tecnológica, y Venezuela cuenta con características favorables para ser sede de ese Banco.

Los doctores Godofredo González y José Manzo González, de Copei y AD, respectivamente, participan en el debate petrolero del Senado. El primero señala que tendremos que hacer una segunda nacionalización para las empresas mixtas; considera que reversión y nacionalización son sinónimos y por ello se plantea hoy el adelantar aquélla. Manzo González, por su parte, afirma que la nacionalización que se discute en Venezuela es la más completa y efectiva que se haya hecho en un país capitalista. Sostiene en defensa del artículo 5º que todos los países árabes han creado empresas mixtas, y que AD ha estado al frente en todos los adelantos que en materia petrolera se han hecho en Venezuela.

Acción Democrática, a través de su Secretario General, Luis Piñerúa Ordaz, señala que no harán modificaciones en el Senado al proyecto de Ley de Nacio-

nalización Petrolera sancionado en la Cámara de Diputados. Advierte asimismo que la industria nacionalizada no será politizada y en caso de que algún miembro de AD participe en el *holding* lo hará en calidad de técnico y no como militante.

Agosto 8

Interviene en la Cámara del Senado el doctor Luis B. Prieto Figueroa rechazando categóricamente las empresas mixtas y anunciando que el MEP luchará contra ellas donde quiera que lleguen a crearse. Comenta lo señalado por Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y José Manzo González de que el artículo 5º no se va a usar y pregunta por qué entonces lo incluye en el proyecto de Ley de Nacionalización. Dice Prieto Figueroa que las empresas mixtas son "peores que las concesiones", que la disolución o transformación de esas empresas sólo puede hacerse según los principios de la Ley común, en tanto son institutos jurídicos de derecho privado. Considera que la intervención de las transnacionales no se elimina con las empresas mixtas, sino que con éstas "la soberanía nacional seguirá intervenida, mediatizada". Señala que el propósito de la nacionalización por encima de garantizar mayores proventos para el país, persigue la liberación nacional. Es categórico al considerar que la tecnología sí justifica los contratos operativos para comprar o arrendar servicios; no justifica, sin embargo, las empresas mixtas.

El órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética, *Pravda,* señala que por primera vez Venezuela se convertirá en directora de su principal riqueza natural. Agrega que sin duda ese paso consolidará la soberanía nacional del país, y lo moviliza para profundizar la lucha por la consolidación de la independencia económica.

Agosto 9

Informa el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández Acosta, que una vez promulgada la Ley de Nacionalización Petrolera el Ministerio dispone de un plazo de 45 días para hacer la oferta formal sobre el monto de las indemnizaciones a las compañías concesionarias. Por su parte las empresas tienen un lapso de 15 días para responder a esas ofertas.

El presidente de Fedecámaras, señor Antonio Díaz Martínez, afirma que la nacionalización del petróleo y del hierro otorga un poder económico al Estado que modifica el equilibrio tradicional. Señala que para mantener la fisonomía mixta de la economía venezolana es necesario que junto con el sector público crezca y se vigorice el sector privado.

Agosto 10

El doctor Jesús A. Paz Galarraga, del MEP, considera grave el hecho de que antes de aprobarse la Ley de Nacionalización exista un convenio entre los personeros del gobierno y las empresas transnacionales en cuanto al monto de las indemnizaciones que deben pagarse. Así declara refiriéndose al anuncio hecho por el ex presidente Rómulo Betancourt en su discurso en el Senado. Dice que a pesar de que ese monto se va a discutir en el Congreso, no se necesita ser muy sagaz para pensar que el gobierno ha ofrecido a las empresas utilizar la mayoría oficialista que tiene en el parlamento para respaldar la suma correspondiente por indemnización.

Los 33 miembros del Consejo Nacional de Representantes y los Directivos de las 15 seccionales de AGROPET realizan la tercera reunión nacional de esa organización para analizar los aspectos del proceso de nacionalización de la industria petrolera cuyo proyecto discute la Cámara del Senado. Hacen énfasis en los Arts. 6, 23 y 24 para lo cual esa agrupación acuerda dirigir una comunicación al Congreso Nacional. Gustavo Coronel, presidente de AGROPET, dice que el objetivo de la reunión es evaluar su participación en el proceso nacionalizador y que muchas de sus sugerencias al Congreso han sido acogidas. Adolfo R. París, Tesorero Nacional, señala que han insistido ante el Congreso en la tesis de que sean modificados los Arts. 23 y 24 del proyecto. El doctor Tiberio Faría, vocal de AGROPET, afirma que la industria petrolera no puede burocratizarse con la nacionalización ni debe generar empleos políticos.

Agosto 11

El doctor Arístides Beaujon, senador de Copei, en su intervención en la Cámara manifiesta que su partido ofrece apoyo a la nacionalización para que sea más integral, pese a las diferencias que ha manifestado en relación al artículo 5º. Con respecto a lo señalado por el senador José Manzo González (AD), de que Copei siempre ha apoyado las empresas mixtas, dice Beaujon que si lo han hecho para algunos sectores de la economía, se muestra sin embargo en desacuerdo para la actividad petrolera por cuanto debe cerrárseles el paso a las transnacionales que tan ardorosamente defiende Manzo González.

El senador Andrés Sosa Pietri (MAS), interviene en la Cámara y señala que las decisiones más importantes en materia petrolera no se siguen tomando en el país sino en las sedes del capitalismo. Expresa que las empresas mixtas no son sino la nueva relación con las transnacionales que debilita más al país para negociar, y por ello son inconvenientes. En su exposición hace un análisis de las

nacionalizaciones en los países árabes, planteada incluso por las compañías petroleras. Al término de su intervención la Cámara aprueba los artículos 1, 2, 3 y 4 del proyecto de Ley.

El Colegio de Economistas del Estado Zulia, en remitido público, manifiesta su total apoyo a la inmediata nacionalización integral de la industria petrolera; es decir, de todas las fases de la misma. Muestra, por tanto, su desacuerdo con las reformas introducidas por el gobierno al proyecto elaborado por la Comisión de Reversión, por cuanto esas reformas "desnaturalizan los objetivos fundamentales de la nacionalización". Considera que debe reservarse el manejo exclusivo de todas las fases de la industria sin compartir con particulares nacionales o extranjeros la soberanía nacional.

En la Cámara del Senado se aprueba por unanimidad el Art. 1º del proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera. Se vota por partes por proposición del senador Andrés Sosa Pietri (MAS). Son aprobados además los artículos 2, 3 y 4. Las discrepancias se presentan con respecto al plazo de los 120 días para la extinción de las concesiones que es votado sólo por los representantes de AD. El doctor Arístides Beaujon (Copei) señala que los copeyanos estarán a favor de la empresa nacionalizadora a pesar de las empresas mixtas. El doctor José Manzo González (AD) dice que el tomar ciertas medidas preventivas no debe verse como expresión de miedo, sino como un acto de prudencia que asume el gobierno ante tal empresa. Andrés Sosa Pietri denuncia que ninguno de nuestros gobiernos ha hecho nada por la nacionalización.

Agosto 12

El partido Copei, según informa el doctor Godofredo González, no votará por el nuevo plazo que se propone para la extinción de las concesiones por cuanto en ese lapso las empresas obtendrán ganancias por más de 700 millones de bolívares. Copei considera conveniente que las concesiones se extingan en el momento de ser promulgada la Ley. Señala que la razón técnica esgrimida por el gobierno para fijar como fecha de extinción el 31 de diciembre no convence a ese partido.

El *Diario de Oriente* que se edita en Barcelona, Estado Anzoátegui, informa que el escritorio jurídico que dirige el diputado y dirigente nacional del partido AD, doctor David Morales Bello, se encargará de la defensa de Johnny Hernández, ex vicepresidente de la Mobil y demás inculpados de la empresa a quienes se investiga por el presunto fraude en la venta ilícita de equipos petro-

leros afectos a reversión, negociados en Anaco. Ante la gravedad de esta información, el diputado Juvencio Pulgar (MAS) señala que le parece grave esa noticia y se dispone a solicitar una entrevista con el director de la PTJ, doctor Martín Echeverría, porque considera irregular que no se hayan practicado las detenciones de las personas que aparecen presuntamente implicadas en la venta ilegal del material afecto a reversión de la concesionaria Mobil.

La fracción de trabajadores copeyanos de la industria petrolera emite un documento donde fijan posición en torno a la nacionalización petrolera. Manifiestan su respaldo sin reservas a la nacionalización integral y auténtica de los hidrocarburos y rechazan categóricamente la posibilidad de creación de empresas mixtas contempladas por el Ejecutivo en el artículo 5º pues la intervención extranjera desnaturaliza los fines de la nacionalización petrolera. Luego hacen consideraciones de tipo laboral como el de las prestaciones de los trabajadores y la negligencia de las autoridades del trabajo por no asistir a una reunión de Fedepetrol. Advierten el peligro que implica la politización o partidización de la industria del petróleo una vez nacionalizada.

Representantes de distintos partidos políticos rechazan la tesis de AGROPET según la cual los políticos no deben dirigir la industria petrolera nacionalizada. Carlos Canache Mata (AD) señala que la confrontación entre lo político y lo técnico está superada en el país y cada uno tiene su área de acción específica. José Curiel (Copei) considera que lo uno y lo otro se complementan. José Vicente Rangel, líder socialista, advierte que una división entre el político y el técnico es absurda, puesto que el primero debe tener una visión global de los problemas y el segundo una preparación que le permita vincular sus conocimientos con una realidad más amplia. Germán Lairet (MAS) estima que esa oposición entre ambos campos es una actitud reaccionaria, advirtiendo que la nacionalización del petróleo es una decisión política. Ramón Tenorio Sifontes (URD) sostiene que la formulación de una política petrolera no puede ser elaborada por técnicos.

Agosto 13

Fedepetrol se niega a participar conjuntamente con Fetrahidrocarburos en una reunión que deben sostener con dirigentes de la CTV. Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, declara que esta central de obreros petroleros rehusa reunirse con dirigentes desleales. El señor Antonio Machado señala que la Federación que preside tiene algunos planteamientos que hacer relacionados con el hecho de que las empresas petroleras han colocado dinero de las prestaciones en plan de fideicomisos en diferentes bancos y no en el Banco Central como lo

establece la Ley de Nacionalización. Asimismo dice que Fetrahidrocarburos insistirá en la entrega de hasta el 50 por ciento de las prestaciones a los trabajadores que así lo soliciten y plantea los despidos masivos que están realizando empresas subsidiarias de grandes compañías petroleras asentadas en Oriente.

El secretario general de Acción Democrática, Luis Piñerúa Ordaz, advierte al referirse a la carta del Contralor General de la República, que "no parece muy inclinado a la materia de fondo que se persigue con la Ley de Reforma Administrativa, cual es la nacionalización de la industria petrolera". Agrega que el Contralor está opinando sobre una materia que no es de su competencia.

En la continuación del debate petrolero en la Cámara del Senado, Orestes Di Giácomo (MEP) señala que las empresas mixtas no son una posibilidad remota tal como lo asegura AD. Angel Brito Villarroel (URD) duda de que en el debate se produzcan modificaciones al artículo 5º, y plantea que la disyuntiva está en si se acepta o no la participación del capital extranjero. Jesús Bernardoni (Copei) considera que debe formarse un Mercado Común del Petróleo para contrarrestar las nacionalizaciones bloqueadas. Godofredo González (Copei) señala que ese partido censura el artículo 5º por conveniencia nacional y no por dogmatismo; advierte que la nacionalización con empresas mixtas puede ser un mal negocio porque el Estado asume el 80 por ciento de los riesgos y las demás el 20 por ciento, cuando la nacionalización no se hace sólo por negocio sino también por razones de estrategia. Andrés Sosa Pietri (MAS) presenta un nuevo artículo 5º y propone que en primera discusión se vote por separado. En esa nueva redacción acepta el MAS la celebración de contratos de asociación que requieran la aprobación del Congreso Nacional y que en ningún caso conlleven a la creación de empresas mixtas.

La Comisión de Mesa del Congreso Nacional aprueba la proposición que hace el senador Andrés Sosa Pietri (MAS) de redactar nuevamente el artículo 27º que establece como fecha definitiva el 31 de diciembre para la extinción de las concesiones, que es cuando finaliza el año fiscal. Esto es para evitar los problemas que puedan presentarse por cuanto la extinción de las concesiones no coincidiría en caso de que unas empresas acepten los avenimientos y otras no.

El doctor Denzil Romero, quien junto con el doctor Tulio Colmenares introdujera una demanda contra 19 empresas petroleras, declara que éstas no podían recibir indemnización por concepto de activos fijos en libros por cuanto existe una excepción de perjudicialidad. Señala que mientras no concluya la averigua-

ción penal en forma definitiva, el Estado debe abstenerse de pagar y hasta de negociar la indemnización.

El Embajador de la Unión Soviética en Venezuela, Vladimir Kazimirov, informa que ese país está dispuesto a cooperar con Venezuela en el desarrollo de su industria petrolera nacionalizada. Señala que ello puede hacerse en distintas maneras: o bien remitiendo un equipo humano a especializarse en la URSS, o creando un instituto especializado con profesores traídos de ese país.

Agosto 14

En primera discusión aprueba el Senado de Ley de Nacionalización Petrolera. El discutido artículo 5º se divide en dos partes. La primera es aprobada por unanimidad por todos los partidos y la segunda sólo con el voto de AD y la CCN. Interviene, entre otros, el senador Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien señala que las empresas mixtas son más peligrosas que las concesiones porque éstas son instituciones de Derecho Público y pueden ser cambiadas por el Estado, mientras las empresas mixtas son de Derecho Privado, cuya disolución sólo puede hacerse según los términos de la Ley común.

Radamés Larrazábal (PCV) considera inaceptable que la Comisión Delegada del Congreso de la República sea autorizada para aprobar los convenios de asociación. Advierte que la Constitución Nacional es categórica cuando remite al Congreso el conocimiento y sanción de materias que como en los convenios de asociación está implicada la soberanía nacional.

Leonardo Montiel Ortega, de URD, insiste en señalar que tanto el Ejecutivo como AD se equivocaron al incluir la frase "alternativas de empresas mixtas", ya que las compañías petroleras que operan en el país "no tienen interés en ese sistema de negociación". Dice que ello no afecta el proceso nacionalizador y considera que en cuanto a los puntos que provocan las divergencias es sabido que "todos están de acuerdo en la necesidad de asociarse con entes privados" para obtener la tecnología; la diferencia —dice— radica en el tipo de asociación.

El doctor Eloy Anzola Montaubán, al analizar el Proyecto de la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública (CRIAP), señala que concentrar todo el poder financiero y productivo del Estado en un solo organismo es propio de un totalitarismo económico, lo cual es incompatible con el régimen democrático.

El presidente de la empresa Mobil Oil Company de Venezuela, señor Richard A. Howe, quien postergara una semana su comparecencia ante la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, se hace acompañar ante el Parlamento por el doctor Emilio Spósito Jiménez, vicepresidente de asuntos legales de esa compañía, y del gerente de contabilidad, Eliseo Delgado. El señor Howe admite en esa comisión que la empresa hizo 132 ventas de material que calificó de desecho, pero que tan pronto como detectaron que en esos lotes iba material no usado, informaron el hecho al Ministerio de Minas y denunciaron lo sucedido ante la PTJ para que estableciera las responsabilidades correspondientes. El diputado del MAS, Juvencio Pulgar, quien solicitó que la Comisión de Contraloría investigara el caso, y Siuberto Martínez, del MEP son los que formulan el mayor número de preguntas a los ejecutivos de la Mobil. En la interpelación éstos informan que los funcionarios de la Mobil a cuyo cargo estaba el material en Anaco eran Johnny Hernández, vicepresidente de administración; Gustavo Varela, gerente de finanzas y servicios; y Reinaldo Figarella, supervisor de almacenes y comisariatos, quienes en el curso de la averiguación renunciaron a sus cargos. Agregan que un tribunal de Barcelona sigue la averiguación para establecer responsabilidades. Al final el presidente de la Comisión de Contraloría, Leonardo Ferrer, manifiesta que no ha quedado bien impresionado con las respuestas de los empleados de la Mobil, pues no respondieron en forma clara y terminante como lo requiere la investigación que se adelanta.

El presidente del Consejo de Puerto La Cruz, señor Tirso Arteaga, anuncia que antes de que se produzca la nacionalización obligará a las empresas establecidas en esa ciudad, y a otra que vende gas para su distribución local y concesiones industriales, a cancelar más de un millón y medio de bolívares que adeudan por concepto de impuestos municipales. Acusa a esas empresas de evasión de impuestos y dice que estudian medidas legales contra ellas. Concretamente la Mene Grande, Vengref y Sinclair se niegan a reconocer los impuestos de patente de industria y comercio que les reclama el municipio desde 1971.

Agosto 15

En la reunión de la Comisión de Minas del Senado se presentan tres proyectos de redacción del artículo 5º correspondientes al MAS, Copei y AD. Este último mantiene su decisión de aprobar el artículo 5º tal como fue presentado por el Ejecutivo Nacional. Copei y el MAS salvan su voto. Señala Godofredo González que se modifica el Art. 1 para fijar como fecha de extinción de las concesiones el 31 de diciembre. En cuanto al Art. 12 la Comisión decide mantener la palabra "avenimiento" en vez de "arreglo amistoso" con las empresas

petroleras. Se decide asimismo incorporar un nuevo artículo, el 27, donde se prohíbe deducir los costos no amortizados de las concesiones para los efectos de Impuesto sobre la Renta.

El canciller Ramón Escobar Salom, ante el carácter inminente de la nacionalización, considera necesario "petrolizar" la cancillería que ha estado ausente de esa materia. Dice que la cancillería intervendrá en los aspectos políticos del petróleo, y agrega que ha invitado al Colegio de Estudios Internacionales para que se especialice en el negocio petrolero.

Agosto 16

El Colegio de Ingenieros de Venezuela aprueba un acuerdo de respaldo a la Ley de Nacionalización Petrolera tal como es aprobada en primera discusión por las Cámaras Legislativas, y especialmente de apoyo al artículo 5º que prevé la posibilidad de crear empresas mixtas. Este artículo —dice— es altamente válido para adquirir tecnología, mercados y capital de riesgos. Hace además un llamado a todas las agrupaciones y colegios profesionales para que actúen con responsabilidad ante la nacionalización petrolera.

Luis Piñerúa Ordaz, secretario general de Acción Democrática, refuta uno de los planteamientos contenidos en la carta enviada por el Contralor al presidente de la República, y afirma que la desorganización administrativa del Estado no puede reflejarse en el manejo y administración de la industria petrolera nacionalizada. Recuerda que el propio presidente ha señalado que esa industria tendrá una dirección administrativa autónoma y estará libre de cualquier interferencia política.

Agosto 17

El gerente de relaciones públicas y técnicas de la compañía Shell de Venezuela, doctor Luis Mantellini, rechaza en nombre de la empresa las versiones sobre supuestas violaciones de la Ley de Reversión y aclara que los equipos movilizados habían sido vendidos en 1969 a una empresa de Texas, pero ésta aún no los ha retirado. Señala también el doctor Mantellini que en el traslado de dichos equipos se cumplieron todos los trámites legales —realizados tanto por la Shell, empresa vendedora, como la Water Equipment Company, empresa compradora— para obtener los permisos correspondientes.

Según *The Petroleum Economist* de Londres, la depresión de la demanda mundial de crudo que ha conducido al descenso de la producción, está obligan-

do a varios países exportadores a revisar su política respecto a la absorción total de las compañías petroleras. Se dice en tal sentido que incluso Venezuela se "está dando cuenta de que el país no se encuentra en posición de asumir la responsabilidad inmediata de la venta de su petróleo", especialmente en las circunstancias actuales. Los países de la OPEP, se ven en la necesidad de revisar sus políticas petroleras —dice la información—, y han reanudado sus conversaciones con las compañías.

El presidente de la empresa "Mito Juan", doctor Humberto Peñaloza, afirma en Valencia que la administración petrolera tendrá su eficacia garantizada si se mantiene al margen de la política. Llama la atención sobre la eficiencia que debe existir a nivel de todo el equipo que va a operar las casas matrices. Considera necesario para lograr esa eficiencia el mantenimiento del flujo tecnológico a través de los mecanismos contemplados en el artículo 5º.

Agosto 18

La Cámara del Senado aprueba en segunda discusión la Ley de Nacionalización Petrolera. El artículo 5º se vota nuevamente por separado negándose las proposiciones de que fuese modificado. Los partidos de oposición salvan su voto. Se agrega un nuevo artículo, el 27, que excluye de exoneración del Impuesto sobre la Renta a los bienes que no hayan sido amortizados. Intervienen representantes de los partidos políticos de oposición y aunque discrepan de algunos artículos se solidarizan con la nacionalización petrolera.

El doctor Florencio Contreras Quintero, ex magistrado del Consejo de la Judicatura, manifiesta que la discusión del proyecto de Ley de Nacionalización, presenta evidentes deficiencias de técnica jurídica y legislativa. Señala, por ejemplo, que es de primordial importancia que la Ley defina la naturaleza jurídica de los yacimientos, entendiendo, por otra parte, que la nacionalización era total a pesar de los "convenios de asociación" que se han identificado con las empresas mixtas. En una nacionalización éstas constituyen un concepto jurídico equívoco, pues los convenios de asociación que autoriza el artículo 5º conforman una categoría de contratos innominados, cuya comprensión y extensión no se conocen. Si esos convenios son por conveniencia deben aparecer como "disposición transitoria" y no como normas permanente.

Agosto 19

Un estudio sobre las necesidades tecnológicas del país revela, según diagnóstico de INVEPET, la existencia de un vacío en el área básica de exploración. El déficit de técnicos para esta especialidad es significativo y es necesario

realizar esfuerzos para disminuir la dependencia tecnológica en la exploración de hidrocarburos. El esquema exploratorio actual es inadecuado y no se tiene definición de una política al respecto. Sobre los canales de transferencia deben considerarse tres fuentes importantes: a) centros de investigación de las casas matrices de las concesionarias que existen en el país; b) empresas de servicio internacionales establecidas en el país; y c) universidades y centros de investigación y servicios de consultoría localizados en el exterior.

En opinión del ingeniero Pedro Márquez, las compañías petroleras han engañado al Ministerio de Minas y a los políticos venezolanos exagerando las dificultades para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Márquez quiere alertar a los futuros directivos de la empresa nacional de petróleo que controlará la industria después de la nacionalización, en el sentido de que no crean en las exageraciones de las empresas ya que la tecnología es conocida por los venezolanos y no se necesita crear empresas mixtas cuando el país requiera realmente explotar la Faja del Orinoco.

El presidente de AGROPET, geólogo Gustavo Coronel, en carta dirigida al periodista César Messori, reconoce que ha sido bastante duro en el artículo publicado anteriormente en la revista *Resumen* sobre el discurso del ex presidente Caldera, pero agrega el ejecutivo petrolero que no tenía la intención de "herir al hombre", sino el propósito de adversar algunos conceptos allí emitidos por considerarlos honestamente equivocados y que mucho de lo dicho por el doctor Caldera no corresponde a una visión integral del problema de la nacionalización.

Agosto 20

Se conoce que el presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados citará para una entrevista privada al presidente de la Mobil, señor Howe, y sus asesores, con el propósito de obtener en privado mayor información en torno a la investigación parlamentaria, provocada por una denuncia según la cual funcionarios de esa empresa han vendido ilegalmente material que por reversión debía pasar a propiedad de la nación. Además de esta investigación en el Congreso, cursa un juicio en los tribunales de Barcelona contra la citada empresa por el mismo motivo.

El valor de los activos de las empresas petroleras ha sido estimado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos en 5.500 millones de bolívares. Este valor será incorporado al activo de la empresa estatal PETROVEN a la cual el Ejecutivo hará un aporte adicional de 2.500 millones de bolívares.

Agosto 21

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, señala que la nacionalización de la industria petrolera no va a modificar la estructura operativa de las empresas, en virtud de que la decisión del Ejecutivo es mantener el esquema de empresas integradas tal como actualmente existen. Sólo habrá cambio en la dirección superior del negocio ya que la gerencia estará en manos de PETROVEN. Se firmarán contratos de asistencia tecnológica con la Exxon, Royal Dutch Shell y otras casas matrices por dos años prorrogables. PETROVEN firmará contratos de venta de petróleo para la exportación de 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo a partir de enero de 1976. El modelo de organización, según el ministro, es de gran simplicidad, pues trata de mantener la continuidad operativa de la industria como hasta ahora.

La Cámara de Diputados sanciona la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, después de aprobar las modificaciones hechas al proyecto de Ley en la Cámara del Senado. Representantes de diversos partidos políticos intervienen para expresar su solidaridad con la nacionalización petrolera a pesar de las reservas que muestra la oposición con respecto al discutido artículo 5º La Ley es enviada al Ejecutivo para su oportuna promulgación.

El doctor Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos, anuncia que a las empresas operadoras se les van a asignar los equipos y bienes de las compañías nacionalizadas. Sobre el pago de impuestos por parte de la industria nacionalizada señala que será igual como ha sido hasta ahora. Pagará regalía e Impuesto sobre la Renta como un complemento del ingreso fiscal, y en ese impuesto se mantendrán como base de cálculo los precios de referencia. La CVP pasa a ser una compañía operadora como Maraven y Lagoven.

Agosto 22

El doctor Pedro Tinoco considera que la empresa del Estado no puede estar guiada exclusivamente por el propósito de obtener la mayor rentabilidad económica, sino que debe contribuir "al logro de los fines económicos y sociales generales del Estado". Señala que el proyecto elaborado para la reforma administrativa propone un Sistema Nacional de Empresas del Estado, y parte de la premisa de que éste persigue utilizar sus empresas para acelerar el proceso de desarrollo económico. El Estado, según el doctor Tinoco, actuaría a través de empresas estatales en la industria extractiva del petróleo y hierro y en algunos servicios esenciales. Con respecto a PETROVEN opina que el esquema previsto para esa empresa procura conservar la eficiencia de la industria de los hidrocar-

buros nacionalizada. Estima que la directiva nombrada crea la confianza de que va a haber seriedad y capacidad en el manejo de la industria.

El jefe de la oficina técnica de Hidrocarburos, doctor Arévalo Guzmán Reyes, informa que en el Estado Zulia están las dos terceras partes de las propiedades, bienes y equipos de las compañías petroleras que pasarán a la nación. Las tres cuartas partes están en el Zulia, Barinas y Falcón y una cuarta parte se encuentra en el Oriente del país, donde la mayor concentración corresponde al Estado Anzoátegui. Agrega que se han tomado las previsiones para adelantar los estudios sobre la indemnización que ha de pagarse a las concesionarias. Dice asimismo que el monto de las propiedades, plantas y equipos para el 31 de diciembre de 1974 es estimado en 5.500 millones de bolívares, y añade que a efectos de los pagos deben aún hacerse las deducciones previstas en el artículo 15 de la Ley en sus literales *b*, *c* y *d*, así como también la depreciación correspondiente a 1975.

El Consejo Nacional de Fedecámaras acuerda solicitar al Presidente de la República que, conjuntamente con el *Ejecútese* de la Ley de Nacionalización, se dicten decretos para emprender obras de infraestructura en la región zuliana, específicamente en los Distritos Bolívar, Baralt y Miranda. Considera aquel organismo que ello constituye una justa retribución de la nación a la región que aporta gran parte de los recursos al país.

Agosto 23

El doctor Luis Vallenilla Meneses considera que se debe crear una administración responsable para la industria nacionalizada, y evitar así la contaminación del negocio por parte de la corrupción administrativa. Afirma, por otra parte, que el mercado del petróleo es un mundo complicado, en el cual ni el gobierno ni la mayoría de los venezolanos tienen experiencia, motivo por el cual esa técnica de la que hoy se carece debe ser alcanzada con la mayor rapidez.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, anuncia en la reunión semanal con el CEN de Acción Democrática que el día 29 de agosto será promulgada en acto solemne la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

Anuncia Radamés Larrazábal que el Partido Comunista de Venezuela defenderá la Ley de Nacionalización Petrolera a pesar de las reservas de ese partido

ya manifestadas en el Parlamento. Hace un llamado a la unidad para luchar contra las presiones y maniobras que ejerzan las transnacionales para impedir el proceso de nacionalización.

El doctor Humberto Calderón Berti, Director de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, declara que la nacionalización inmediata de la industria petrolera impone la necesidad de crear una estructura de investigación de alto rango para responder a las exigencias de esa actividad en manos del Estado. Las estimaciones hechas por expertos sitúan en 1.000 el número de profesionales técnicos que deberán emplearse en actividades de investigación, con un presupuesto anual superior a los 350 millones de bolívares. La Exxon, por ejemplo, invierte anualmente 1.183 millones de bolívares en investigación y emplea 2.657 profesionales, además de 2.473 técnicos y equipos que valen 1.740 millones de bolívares.

Agosto 24

El doctor Rafael Caldera, ex presidente de la República, considera que con respecto a la nacionalización petrolera el gobierno debe dar buen ejemplo evitando hacer política partidista y desistiendo de toda demagogia para que no suceda lo mismo que con la nacionalización del hierro. Recomienda el doctor Caldera que el pueblo y el gobierno deben adoptar una actitud muy responsable para llevar adelante la gran empresa nacionalizadora.

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, señala que el capital básico de PETROVEN será de 8 mil millones de bolívares que comprende un aporte del Ejecutivo de 2.500 millones y alrededor de 5.500 millones en que se ha estimado el valor de los activos de las concesionarias.

El doctor Octavio Lepage, ministro de Relaciones Interiores, señala que el gobierno mantiene una normal vigilancia de las instalaciones petroleras y que ello se realizará durante todo el período de transición de la propiedad privada a la del Estado. Sin embargo, el gobierno estima, en su opinión, que no es necesario arbitrar ningún mecanismo especial de vigilancia como consecuencia de la nacionalización petrolera.

Agosto 25

En la II Asamblea Nacional de Trabajadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Distrito Federal, realizada en Caracas, se resuelve defender la nacionalización de la industria petrolera, sobre la base de fomentar las luchas

para que no sean implementadas las empresas mixtas en el manejo del negocio en sus distintas fases de explotación, comercialización y transporte.

Informan Moisés Moleiro y Héctor Pérez Marcano que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) promoverá reuniones y acuerdos entre las fuerzas políticas del país para impedir que, conforme a la Ley de Nacionalización, sean indemnizadas las compañías petroleras. Tal decisión del MIR obedece al hecho de que actualmente se cursa ante tribunales de la República una demanda contra las concesionarias.

Se informa que la Dirección de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos mantiene vigilancia y mantenimiento sobre los bienes que forman parte del activo que se transferirá a la nación venezolana después de promulgada la Ley de Nacionalización Petrolera. Según inventario elaborado por esa Dirección, el monto del valor de los equipos es de Bs. 20.762.017.000, la cantidad por depreciación, amortización y agotamiento acumulado es de Bs. 15.545.387.000, y el saldo por depreciar es de Bs. 5.216.630.000.

Agosto 26

En opinión del doctor Manuel Vicente Ledezma, ex Contralor General de la República, personeros de las compañías petroleras, con el propósito de atemotizar y confundir a la opinión nacional, han difundido la especie de que las fallas y defectos de la Administración Pública pueden reflejarse en la industria petrolera nacionalizada. Señala el doctor Ledezma que no hay motivos para pensar en esto, a pesar de que nadie tiene duda de la conveniencia de una reforma administrativa.

En el diario francés *Le Monde* se afirma que la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela "no trastorna la situación de las compañías petroleras". El articulista señala que según el informe del Contralor de la República, doctor José Muci Abraham, el Estado tiene fama de ser mal administrador. Agrega que lo expresado por el Contralor y la campaña de prensa "inspirada por el todopoderoso patronato" reunido en Fedecámaras logró alarmar a la opinión pública. *Le Monde* indica que el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, confirma su apreciación de que la nacionalización no modifica la situación de las empresas cuando dice que éstas continuarán operando con otro nombre.

Agosto 27

El secretario general de la Presidencia de la República, doctor Efraín Schacht Aristiguieta, informa que en reunión de Consejo de Ministros se aprueba el aporte gubernamental de 2.000 millones de bolívares a la empresa matriz PETROVEN.

El presidente de Fedecámaras, Antonio Díaz Martínez, afirma ante la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria que Venezuela es un amplio campo para el capital extranjero si éste se ajusta a los elementales requisitos que implican la soberanía y el respeto a la política de desarrollo del país. Agrega asimismo que con la nacionalización petrolera y del hierro se ha producido una alteración en la composición de la inversión foránea que "queda reducida en un margen muy grande", así como también la participación del capital privado dentro de la economía. Expresa que la regulación de las inversiones extranjeras en América Latina forman parte del nuevo orden de las relaciones internacionales, en donde predomine la interdependencia y el respeto mutuo entre las naciones.

El director-tesorero de Fedecámaras, Carlos Pietri Martínez, señala que la tarea más importante que nos toca cumplir es la de evitar que los factores negativos de la actual administración pública, vayan a influir negativamente en el manejo de la industria nacionalizada, de la cual se aspira que sea administrada con eficiencia. Pietri Martínez considera necesaria una reforma de la administración pública por cuanto ésta tiene multitud de vicios y defectos.

El doctor Guillermo Altuve Williams, asesor especial del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, declara que existe el mejor ambiente para llegar a un avenimiento con las empresas petroleras en cuanto a la indemnización que el Estado habrá de pagarles. Explica el doctor Altuve los pasos que a partir de la promulgación de la Ley se deberán cumplir hasta el 31 de diciembre de 1975, fecha en que vencen definitivamente las concesiones. El primer paso es la designación de la Comisión Supervisora de la Industria y Comercio de los Hidrocarburos y luego la creación de PETROVEN. En los 45 días que siguen a la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial, el Ejecutivo Nacional formula a las compañías concesionarias las ofertas de indemnización estimadas aproximadamente en 5 mil millones de bolívares. A los 60 días de promulgada la Ley se obliga a las concesionarias a depositar en el Fondo de Garantía una suma que alcance al 10 por ciento de la inversión bruta acumulada por cada una de ellas. Luego se realizará el traspaso de los bienes de la industria al Estado venezolano.

Agosto 28

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, anuncia que los trabajadores del país van a defender en forma patriótica el contenido de la Ley de Nacionalización Petrolera. También señala que en la Comisión de Reversión plantearon los trabajadores por su intermedio la conveniencia de que se lograra allí un consenso popular para que se alcance una nacionalización integral, entendida ésta como el control absoluto del petróleo por parte del Estado y sin mediatización, mostrándose en contra de la posibilidad de empresas mixtas, por comportar esta opción una dependencia de las transnacionales. Informa que una vez que se coloque el *Ejecútese* a la Ley, Fedepetrol convocará un consejo directivo o irá directamente a los sindicatos para realizar asambleas y explicar a los trabajadores la trascendencia de la decisión nacionalizadora y el comportamiento que se debe asumir frente a ella. Destaca asimismo su preocupación porque la industria petrolera pueda convertirse en un feudo partidista pensando en los daños que ello causará a la nación. Luego informa que los trabajadores han solicitado que de acuerdo con el mandato de la Ley, antes de que sean depositadas sus prestaciones en fideicomiso se le entregue el 50 por ciento de las mismas.

Agosto 29

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, pone el *Ejecútese* a la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Dice en su discurso que la misma es el "fruto de un consenso resultante de un largo proceso de afirmación nacionalista". El actual nacionalismo, señala el presidente, constituye el modo de concebir y de realizar una política del país y para los venezolanos. Agrega que no hay divergencias entre éstos en que es la oportunidad de tomar el "control integral" de la industria. Los inevitables desacuerdos se explican en los diversos criterios en cuanto a la forma o medios para alcanzar el "objetivo supremo" de la nacionalización. Señala que la Ley no contiene "ninguna norma o concepto que contradiga o mediatice principios nacionalistas ni fundamentales intereses de Venezuela". Se desprende de ello una nacionalización sin aventuras, reflejo de un país maduro, sin "sujetarnos a dogmas políticos ni a intereses estratégicos de potencias continentales o extracontinentales". Expresa que es la oportunidad de Venezuela para consolidarse como nación libre y justa. Anuncia asimismo que se dictará el decreto de creación de Petróleos de Venezuela (PETROVEN), que tendrá a su cargo coordinar, supervisar y controlar las actividades de las empresas operadoras. Además se designarán los integrantes de la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, para fiscalizar las actividades de los consorcios desde ahora hasta el 31 de diciembre del

presente año. El petróleo es nuestro, agrega el presidente, y está en nuestras manos la posibilidad de manejarlo. Será "instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica".

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos da a conocer los nombres de las ocho personas que integran la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PETROVEN), cuyo decreto de creación será emitido por la Presidencia de la República inmediatamente después de promulgada la Ley de Nacionalización Petrolera. El presidente de esa empresa será el general de brigada Rafael Alfonzo Ravard, y el vicepresidente el doctor Julio César Arreaza. Otros miembros son los doctores Alirio Parra y Benito Raúl Losada, el señor Carlos Guillermo Rangel, el dirigente sindical Manuel Peñalver, el ingeniero Julio Sosa Rodríguez y Edgar A. Leal.

Representantes de diversos partidos políticos opinan sobre la Ley de Nacionalización. Celestino Armas (AD) señala que a partir de esta fecha en que es promulgada la Ley los venezolanos nos convertimos definitivamente en únicos responsables de nuestro propio destino. Eduardo Fernández (Copei) considera que se abre una nueva etapa en la historia venezolana y reitera a nombre del partido el apoyo al gobierno en todo lo que contribuya al manejo eficiente de la industria nacionalizada. Germán Lairet (MAS) advierte que corresponde al Estado la gran responsabilidad de acometer todos los pasos necesarios para que se cumpla el traspaso definitivo de la industria a manos del Estado. Ramón Tenorio Sifontes (URD) expresa que comienza a correr una etapa definitiva para que Venezuela alcance su liberación política, económica y social.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela se dirige en comunicado público al presidente Carlos Andrés Pérez para manifestarle el júbilo y la satisfacción por la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, a la vez que alerta al gobierno del permanente peligro de mediatización que amenaza la nacionalización petrolera por parte de las empresas transnacionales

---

El señor Vladimir Kasimirov, Embajador de la Unión Soviética en Venezuela, entiende que el principio de la soberanía de los Estados prevé el pleno respeto del derecho que tienen los países de dominar libremente sus recursos naturales. En este sentido reconoce el paso trascendental que ha dado Venezuela con la promulgación de la Ley de Nacionalización Petrolera.

El Encargado de Negocios de Arabia Saudita en Caracas, señor Abdulla A. Altobachi, considera que con la nacionalización petrolera Venezuela aumenta su poder en la OPEP. Señala que en el país hay hombres preparados para desarrollar la actividad petrolera, y cualquier cooperación de las compañías va a ser para el comercio y todo lo relacionado con esta área de la industria.

En un editorial del *New York Times* se elogia la Ley de Nacionalización Petrolera. Se dice allí que el gobierno ha sido prudente al concebirla en tanto permite "la continuación del papel, por contrato, que juegan las empresas petroleras extranjeras" que operan en Venezuela, las cuales son mayoritariamente estadounidenses. Destaca la opinión del principal partido de la oposición en el país que exigirá una medida enérgica que descarta totalmente la participación de extranjeros en la industria nacionalizada. Por su parte las compañías han manifestado su disposición de cooperar en áreas que, según el presidente Carlos Andrés Pérez, se requiere de ellas especialmente en el mercadeo y la tecnología.

Cuatro representantes de la economía privada señalan que a raíz de la nacionalización petrolera no habrá cambios ni efectos inmediatos en la economía venezolana. El presidente de Fedecámaras, señor Antonio J. Díaz Martínez, destaca la necesidad que tiene el país de unificar sus "fuerzas sociales" para respaldar con sentido de nacionalidad el proceso que se llevará a cabo en la industria petrolera. Para el presidente del Consejo Bancario Nacional y del Banco de Venezuela, doctor Carmelo Lauría, la nacionalización no producirá efectos inmediatos reales en la economía, pues las decisiones fundamentales están tomadas y ellas se refieren al "aseguramiento de la continuidad en el modus operandi de las empresas petroleras, en las cuales no habrá cambios de significación". El doctor Reinaldo Cervini, presidente de Pro Venezuela, opina que la nacionalización tiene un alcance extraordinario y marca el inicio de una nueva etapa que modifica sustancialmente la estructura del Estado, que pasa de rentista a productor. A nivel internacional la medida, en su opinión, implica un cambio profundo de las relaciones entre Venezuela y los países industrializados. Gustavo Coronel, ejecutivo de la Shell, considera que a corto plazo no puede producirse ninguna reacción negativa. Quizás una baja en los ingresos fiscales provenientes del petróleo que respondería a una reducción de la producción ya programada.

El señor Félix Barreto, gerente de relaciones públicas de la empresa Mobil, ante la inminente promulgación de la Ley de Nacionalización Petrolera, señala

que esa concesionaria tiene una actitud de confianza en el futuro petrolero del país, confianza que tiene su fundamento en el conocimiento que tiene la empresa del excelente potencial humano con que cuenta la industria, a cuya formación ha contribuido esa compañía durante más de 40 años de operaciones en Venezuela. Luego agrega que ellos piensan que dentro de un sano entendimiento y un ambiente de franca colaboración a escala global, pueden surgir fórmulas y mecanismos que permitan a esa concesionaria continuar aportando experiencia y tecnología al desarrollo futuro de la industria. Además están dispuestos a prestar todo su concurso para que la transición de la industria básica se cumpla "sin traumas o cuellos de botellas".

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, declara que las centrales sindicales de los trabajadores de la industria petrolera y la CTV presentarán en un documento al Presidente de la República las aspiraciones de los trabajadores de la industria de los hidrocarburos antes de que se ponga en vigencia plena la Ley de Nacionalización Petrolera. Agrega que el documento contiene las siguientes peticiones: entrega a los obreros del 50 por ciento de sus prestaciones en forma optativa para desendeudarse; continuidad en el funcionamiento de los comisariatos, organismos de prestaciones de salud y escuelas en los campos petroleros; posibilidad de que se instrumente para la próxima contratación colectiva un nuevo plan de jubilación; entrega de las viviendas que actualmente ocupan los trabajadores petroleros y préstamos para adquirir casas en las ciudades donde se encuentren estudiando sus hijos.

Según declaración de la CTV, la nacionalización petrolera es una medida de rescate y emancipación económica que implica un profundo cambio en la vida nacional. Declara ese organismo que fundamentalmente la decisión nacionalizadora de los hidrocarburos debe propender a un nuevo y equitativo reparto de las riquezas nacionales, que ponga fin a la tremenda desigualdad social que fue generado la deformante realidad del petróleo en manos de intereses económicos extranjeros. La CTV y su base sindical respaldan inequívocamente el rescate de la industria petrolera y aspiran que el petróleo nacionalizado sea factor de progreso y desarrollo para los países del Tercer Mundo.

Agosto 30

En reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada por el presidente de la República, es aprobado el decreto por el cual se designan las personas que integran la directiva de Petróleos de Venezuela (PETROVEN), casa matriz de la industria petrolera nacionalizada. Se realiza el acto de juramentación de la directiva al cual asisten los miembros principales y suplentes de

la empresa. En el acto participan los ministros del Gabinete Ejecutivo, el Procurador General de la República y otras personalidades vinculadas a las esferas económicas del país.

El Embajador de México en Venezuela, doctor Jorge E. Navarrete, dirige una comunicación al Canciller venezolano, Ramón Escovar Salom, en la cual manifiesta la solidaridad del gobierno mexicano ante la trascendental decisión de nacionalizar la industria petrolera. Expresa el Embajador Navarrete que México conoce que la única garantía de que los recursos petroleros se coloquen realmente al servicio del desarrollo es a través del control nacional de los mismos.

Los diputados del MIR, Moisés Moleiro y Rómulo Henríquez, declaran que aún continuará el enfrentamiento con respecto a la nacionalización petrolera entre quienes se afincan a sus aspectos positivos para hacer que aquélla sea integral, y entre quienes apoyándose en el artículo 5º buscarán perpetuar la presencia de la influencia extranjera a través de las empresas mixtas. Advierten elementos contradictorios en la Ley por cuanto la parte inicial es de espíritu nacionalista y los artículos 5º y 12º constituyen concesiones importantes a las compañías trasnacionales. Sostienen la necesidad de que los obreros y técnicos de las empresas nacionalizadas demuestren que los venezolanos estamos en capacidad de dirigir la industria petrolera.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, envía un mensaje a los jefes de Estado de los países miembros de la OPEP informándoles la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, estatuto legal que "nacionaliza en forma integral nuestra industria petrolera".

Agosto 31

La agencia de noticias Tass, de Moscú, comenta la medida del gobierno venezolano de nacionalizar la industria, señalando que ello es muestra del "creciente sentimiento antiimperialista" de América Latina. Otra información de Tass señala que aquel hecho "marca una nueva etapa en la lucha de los pueblos por su genuina independencia económica".

El administrador federal de la energía de los Estados Unidos, señor Frank Zarb, afirma que la nacionalización petrolera venezolana no tendrá repercusiones para los consumidores norteamericanos. Prevé la continuidad de buenas relaciones entre su país y Venezuela, que es "amigo y aliado confiable para nuestro aprovisionamiento energético".

El secretario general de Copei, doctor Pedro Pablo Aguilar, declara en Punto Fijo que el pueblo venezolano espera que AD no convierta el proceso de nacionalización de la industria petrolera en un instrumento de proselitismo político, porque ello "trastocaría las sentidas aspiraciones del mismo". Dice que debemos demostrar que los venezolanos sí estamos en capacidad de operar y administrar la industria.

El señor José Alejandro Hernández, en discurso que pronuncia al entregar el cargo de presidente de la Unión Patronal Venezolana de Comercio, afirma que la nacionalización petrolera es un hecho que envuelve un principio de transformación obligada para el país. Hernández defiende la iniciativa privada y hace un llamado de unidad como obligante desafío que los empresarios deben aceptar y una realidad que deben construir.

Septiembre 2

Comienza sus actividades en el edificio que fue de la Creole Petroleum Corporation, la empresa matriz Petróleos de Venezuela (PETROVEN), cuyos funcionarios trabajan en la elaboración de un documento para hacer el registro de la empresa. El ministro de Minas e Hidrocarburos confirma que quienes están en cargos directivos de las concesionarias, tendrán posiciones similares en las empresas nacionalizadas. Por ejemplo, el doctor Guillermo Rodríguez Eraso será el presidente de Lagoven y Alberto Quirós Corradi de Maraven.

El diputado y dirigente socialista, doctor José Vicente Rangel, declara que el gobierno a través de la propaganda pretende "galvanizar" al país en torno a un acto —el de la nacionalización— que pudo haberse efectuado de mejor manera. Agrega que si bien ha reconocido la importancia de rescatar la industria petrolera, se muestra, sin embargo, en desacuerdo con el artículo 5º de la Ley y con otras medidas mediatizadoras de la voluntad de nacionalizar. Indica que el esquema de nacionalización no se reduce a la promulgación de la Ley, sino que exige una estrecha relación con la reorganización de la sociedad y la economía venezolana. Un paso importante es la manera cómo se va a distribuir el ingreso petrolero y se muestra convencido de que el actual gobierno no hará nada en ese sentido. "Es ahora —señala— cuando empieza la lucha por nuestro petróleo vinculada a la lucha por una sociedad mejor".

El Emir de Kuwait, Jeque Sabah Al Salem Al-Labah, envía un telegrama al presidente de Venezuela, en el cual expresa su total apoyo a la nacionaliza-

ción de la industria petrolera. El ministro del Interior de Irán, Yamshid Amouzegan, declara en Puerto Rico que su país apoya la nacionalización petrolera realizada por Venezuela, y asimismo se muestra solidario con la posición venezolana respecto a un alza del precio del petróleo.

En acto simbólico de instalación de PETROVEN el ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, declara que Petróleos de Venezuela, empresa matriz de la industria nacionalizada, procurará colocar de manera directa el crudo y derivados en otros mercados, además de los que ha tenido tradicionalmente a través de las compañías internacionales. Indica que con éstas se firmarán contratos de venta por dos años, con otros dos de prórroga. Se informa además que se creará una empresa con personal venezolano que se llamará Lagoven, antigua Creole, bajo la presidencia del doctor Guillermo Rodríguez Eraso, y otra que se llamará Maraven, antigua Shell, presidida por Alberto Quirós.

Se aprueba el decreto por el cual se convierte a la CVP en sociedad mercantil, para contribuir así a la sustitución de las actuales concesionarias de hidrocarburos en el ejercicio de las actividades petroleras a partir del 1º de enero de 1976.

Septiembre 3

El gerente de relaciones industriales de la compañía Shell de Venezuela, señor Carlos T. Irwin, dice que siempre han mantenido en las negociaciones colectivas el argumento de que una estabilidad laboral absoluta en una industria tan dinámica como la petrolera, no es lo más conveniente para mantener la mayor flexibilidad de sus recursos humanos y, por consiguiente, la mayor eficiencia en sus operaciones. Aun cuando la recién promulgada Ley de Nacionalización Petrolera contempla esa estabilidad absoluta, ya ésta ha sido asegurada por el trabajador petrolero a base de mística, lealtad, eficiencia y esfuerzo creador, condiciones que deben fortalecerse ahora que las empresas pasan a manos del Estado venezolano.

Organizaciones Internacionales de Trabajadores, la ORIT, la Confederación de Trabajadores de Honduras y el XV Congreso Latinoamericano de Trabajadores (CLAT) emiten pronunciamientos de respaldo y apoyo a la nacionalización petrolera venezolana.

Septiembre 4

El Gobierno de Venezuela no reconoce las inversiones que las petroleras efectuaron para adquirir las concesiones que vencen el 31 de diciembre de 1975.

Así lo señala el doctor Arévalo Guzmán Reyes, jefe de la Oficina Técnica de Hidrocarburos, quien considera aquéllo como una de las previsiones más importantes de la Ley de Nacionalización. Explica que esas inversiones las iban deduciendo las compañías con la producción de petróleo, pero hay concesiones que han estado inactivas. Indica que las empresas tenían la obligación de desarrollarlas y ponerlas a producir para ir amortizando su valor con esa producción, pero no cumplieron con ello.

El Ministro de Relaciones Interiores, doctor Octavio Lepage, señala que tanto la nacionalización del hierro como la del petróleo tienen pleno respaldo civil y militar. Expresa que las Fuerzas Armadas no apoyan la nacionalización por cuestiones de tipo político, sino por razones patrióticas. Asimismo indica que el proceso de transferencia de la industria petrolera de manos privadas a manos del Estado se cumple normalmente y, por lo tanto, no plantea una situación de emergencia que imponga la adopción de medidas de seguridad.

El Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, anuncia que PETROVEN ha designado al doctor Andrés Aguilar y al señor Aquiles Marcano como Consultor Jurídico y Comisario respectivamente.

Por mayoría de la Comisión Delegada del Congreso de la República se aprueba un crédito adicional de 1.000 millones de bolívares para PETROVEN. Copei, a través de su representante Abdón Vivas Terán, afirma que los trámites necesarios para esa solicitud no fueron llenados y propone el diferimiento de la solicitud, el cual es negado después de ser sometido a votación. El diputado del MAS, Germán Lairet, expresa críticas a los procedimientos utilizados en la presentación de solicitud del crédito y anuncia el voto favorable aun cuando expone sus reservas. En cuanto al nombramiento de los doctores Corrie, Jones Parra y Colina, propuestos por AD para la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, el MAS y AD votan favorablemente y se oponen COPEI, MEP, FDP y PCV.

Septiembre 5

El doctor Iván Pulido Mora, Director General del Ministerio de Hacienda, informa que el crédito adicional de 1.000 millones de bolívares para PETROVEN, aprobado por la Comisión Delegada del Congreso, se confirma cuando las existencias del Tesoro Nacional alcanzan la cifra de 2.848 millones de bolívares. El crédito lo depositará el Ejecutivo Nacional en una cuenta corriente bloqueada en un instituto bancario.

El ingeniero Juan Jones Parra afirma que hay escasez de personal para operar la industria petrolera. Se puede cubrir la parte operacional, pero con ciertos esfuerzos. Sin embargo, se muestra optimista en cuanto a la provisión de los técnicos necesarios y considera que el personal que labora en la Universidad Central de Venezuela y en la Simón Bolívar tiene años dedicados a investigaciones sobre cuestiones petroleras y, según dice, se "están educando en forma práctica y no teórica".

Miembros de los Comités Ejecutivos de la CTV, Fedepetrol y Fetrahidrocarburos presentarán al presidente de la República un documento que contiene las peticiones de los obreros referidas a sus prestaciones sociales, viviendas y jubilaciones, así como la entrega optativa del 50 por ciento de esas prestaciones a los trabajadores. Asimismo el Comité Ejecutivo de la CTV en su anterior reunión seleccionó los nombres de los cinco sindicalistas que serán propuestos al presidente de la República de los cuales serán escogidos los dos representantes laborales que se incorporarán a la Comisión Supervisora de Minas. La quinaria la forman los sindicalistas Antonio Machado, Ismael Ordaz, Cruz José Bucot, Luis Martínez R. y Miguel Martínez.

Septiembre 6

Según estudio titulado "Los Campos Petroleros como Objetivos Militares-Un Estudio de Factibilidad", preparado para el Congreso de Estados Unidos, Venezuela y Nigeria, los principales miembros de la OPEP no árabes, serían "fácil presa" para una invasión militar de sus campos petroleros. Esos países no ofrecerán la más mínima resistencia. Señala sin embargo que todas las naciones de América Latina condenarían una acción como esa. Con respecto a Venezuela destaca el estudio que el país "acaba de decidir la nacionalización de su industria petrolera", que es la principal fuente del recurso en América Latina. Incluso en el estudio se traza la estrategia a seguir en caso de invasión, pero de fracasar la acción las consecuencias para Estados Unidos serían de muy largo alcance.

Según declaraciones suministradas por los dirigentes sindicales José Vargas y Carlos Piñerúa, el presidente de la República y el ministro del Trabajo aceptan en principio los planteamientos hechos por la CTV, Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, quedando en responder por escrito los puntos legales y contractuales contenidos en el documento entregado por las citadas centrales obreras. Al ampliar sus declaraciones señalan que tanto el ministro del Trabajo como el presidente de la República estuvieron de acuerdo especialmente en que los

trabajadores, en forma opcional, pudieran retirar hasta el 50 por ciento de sus prestaciones sociales.

El Director de Economía Petrolera del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y Gobernador de Venezuela ante la OPEP, doctor Alberto Flores, declara que Venezuela pondrá condiciones uniformes para todo comprador de su petróleo sean gobiernos o empresas. Afirma que no habrán discriminaciones por cuanto ésto puede ser el camino hacia un deterioro de los precios, lo cual no le interesa a ningún miembro de la OPEP. Señala que la nacionalización no afecta los valores de exportación del petróleo porque ésto constituye un elemento del sistema fiscal.

Septiembre 7

Según investigación realizada en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, un año antes de la nacionalización fueron retirados de las compañías petroleras más de 2.000 trabajadores y empleados. El estudio también revela que en materia de personal la empresa estatal (CVP) se ha manejado en forma diferente que las principales compañías concesionarias.

El doctor Humberto Calderón Berti, Director de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, señala que el monto de la indemnización que el gobierno ofrecerá a las petroleras no podrá ser objeto de discusión. Dice que extraoficialmente las cifras por empresas son: Creole, 2.474 millones; Shell, 1.368 millones; Mene Grande, 442 millones; Internacional, que no es operadora, 220 millones, y el grupo Texas, 320 millones. Se están calculando además las deducciones sobre una suma tope de 5.479 millones y en las que se incluyen la depreciación y la amortización ocurridas en 1975. Con respecto a los campos abandonados expresa que unos han sido cerrados por motivos mecánicos, otros por razones de mercado y otros por antieconómicos. Pero el Estado va a contar con 2.500 millones de bolívares que depositarán las empresas en el Fondo de Garantía, para reacondicionar, remodelar o reemplazar los bienes que estén en buenas condiciones.

Septiembre 8

Informa el viceministro de Minas, ingeniero Hernán Anzola, que las compañías petroleras han formulado proposiciones concretas al gobierno en relación con los contratos de suministro de crudos y productos por los que se regirá el mercado exterior del petróleo venezolano desde el 1º de enero de 1976. Una comisión interna del ministerio estudia tales proposiciones. Se discute también

el mecanismo de los precios que se van a fijar, pero por ser Venezuela miembro de la OPEP, sustentan la posición de que es ésta quien fija los precios. Dice que es probable que PETROVEN forme una empresa destinada sólo a comercialización, y se creen la Flota Petrolera Nacional y el Instituto Tecnológico de Investigación.

El senador del MEP, doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, al conocer los nombres de los integrantes de la casa matriz, declara que PETROVEN ha sido partidizada. Dice que el representante obrero fue escogido en una forma que no se ajusta a los lineamientos que pauta al respecto la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y fue seleccionado un miembro de Acción Democrática cuando, según expresa, ese partido es minoría en Fedepetrol.

El líder libio Muammar Al Kadafi califica la nacionalización petrolera de Venezuela como una "victoria de los pueblos del Tercer Mundo" para poner fin a la explotación imperialista. Es esta la respuesta de Kadafi al mensaje del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en el cual le informa la promulgación de la Ley de Nacionalización Petrolera.

Septiembre 9

El dirigente del MIR, Moisés Moleiro, presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción Administrativa, al comentar las declaraciones del doctor Humberto Calderón Berti sobre el pago de indemnización, afirma que el gobierno no puede fijar el monto o llegar a un acuerdo con las compañías petroleras en relación al pago de indemnización hasta tanto no se produzca la sentencia en el juicio planteado contra ellas por tener un pasivo oculto estimado en 5 mil millones de bolívares.

El doctor Julio César Arreaza, miembro de la directiva de PETROVEN, declara que para asegurar una correcta inversión de los ingresos petroleros es necesaria una reforma de la administración pública. Considera que la nacionalización constituye un paso de tanta trascendencia que impone un cambio sustancial en la mentalidad de los venezolanos. Afirma que ya no podemos atribuir nuevos errores a gente extraña, ni habrá excusa para los gobernantes que despilfarren los cuantiosos ingresos generados por los hidrocarburos. Agrega que el trabajo de PETROVEN comienza realmente en enero de 1976 con la adquisición de las empresas operadoras.

El señor Andrem McClellan, representante interamericano de la organización sindical de Estados Unidos (AFL-CIO), declara que los trabajadores de su país no están de acuerdo con la política petrolera del presidente Gerald Ford, y se solidarizan con los obreros venezolanos por la nacionalización de la industria. Con respecto a ésta agrega que cada país soberano tiene pleno derecho a manejar sus materias primas.

El Director General de Formación del INCE, ingeniero Luis Guillermo Suárez, afirma que ese instituto está seguro de poder manejar eficientemente el desarrollo de los recursos humanos en la industria petrolera. Señala que en el INCE existe una dirección, creada recientemente, al frente del ingeniero Jesús Sanabria, para la realización de cursos tendientes a aquel fin.

El canciller de Vienam del Sur, señora Nzugen Thi Binh, tras hablar de los esfuerzos que hacen para borrar las consecuencias de la guerra y construir un régimen progresista y democrático en Vietnam, agrega que aplauden la medida de nacionalización petrolera de Venezuela y que quieren estudiar las "experiencias en la batalla para ser dueños de los recursos naturales".

El general Carlos Carnevalli Rangel, director general de la CVP, informa que en los próximos días se determinará el monto del capital de la nueva CVP, convertida en sociedad mercantil, según lo contempla el artículo 6º de la Ley de Nacionalización. Estima que en la empresa estatal se producirán pocos cambios por cuanto la sociedad mercantil continuará las gestiones que tiene la CVP, y sólo tendrá que ajustar su junta directiva para adaptarla a lo establecido por el Código de Comercio.

El doctor Valentín Hernández, ministro de Minas, anuncia en Miraflores la designación de la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Está integrada ésta por los señores José Martorano, Luis Plaz Bruzual, Arévalo Guzmán Reyes, Francisco Gutiérrez, Humberto Calderón Berti, Juan Jones Parra, Ricardo Corrie, Ismael Ordaz y Antonio Machado.

Septiembre 10

Es aprobado en Consejo de Ministros el crédito adicional de 1.000 millones de bolívares como contribución inicial para el capital de PETROVEN con autorización concedida por la Comisión Delegada del Congreso Nacional.

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de Pro Venezuela, declara que frente al proceso de nacionalización iniciado en Venezuela continuarán las presiones externas. Expresa que las recientes amenazas norteamericanas, según informe preparado para un Subcomité de Relaciones de la Cámara de Representantes, vienen a sumarse a la gran cantidad de maniobras que tienden a quebrantar la voluntad nacionalista de los países que quieren alcanzar su soberanía plena. Apelar a una ocupación militar, añade el doctor Cervini, es un acto deplorable de un gobierno que quiere revivir "una etapa histórica signada por la usurpación y la tropelía".

Septiembre 11

El Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, declara que el monto a pagar por indemnizaciones a las compañías concesionarias está en el orden de más de 4 mil millones de bolívares. Las conversaciones con las petroleras las realiza una comisión de alto nivel integrada por el ministro, el general Alfonzo Ravard, presidente de PETROVEN y el doctor Julio César Arreaza, vicepresidente de esta empresa. Señala el doctor Hernández que las empresas operadoras se llamaran LAGOVEN (Creole), MARAVEN, (Shell), MENEVEN (Mene Grande), LLANOVEN (Mobil), entre otras.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, juramenta en actos separados a los doctores Julio Sosa Rodríguez y José Domingo Casanovas como directivos de PETROVEN, y a los integrantes de la Comisión Supervisora de las Instalaciones Petroleras. Esta última queda constituida por José Martorano, Luis Plaz Bruzual, Arévalo Guzmán Reyes, Humberto Calderón Berti, Francisco Gutiérrez, Juan Jones Parra, Ricardo Corrie, Ismael Ordaz y Antonio Machado, a quienes corresponde velar por el buen mantenimiento de las instalaciones de la industria hasta que pasen a manos del Estado.

Se informa en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos que es posible que la CVP no tenga el monopolio del mercado interno de productos petroleros. Varias empresas nacionales, subsidiarias de PETROVEN operarán ese mercado.

Septiembre 12

El profesor Franklin Tugwell, de la Universidad de Stanford, en su libro titulado *La Política del Petróleo en Venezuela,* señala que este país inicia el período más difícil y desafiante en la historia de su política petrolera al decidir la nacionalización de la industria. Agrega que ésta impone cambios administrativos que pueden ser complicados y que para mantener su capacidad de produ-

cir, Venezuela tiene que actuar con rapidez en la exploración y perforación de nuevos pozos, puesto que las compañías extranjeras han hecho poco al respecto en los últimos años.

Septiembre 13

El doctor Luis Lizardi, secretario de doctrina de la Federación de Colegios de Contadores, en declaración que rinde ante el Juzgado XII de Instrucción de Primera Instancia en lo Penal, informa que las compañías petroleras explotan indebidamente una superficie de 1.000 millones de metros cuadrados. Se conoció asimismo que el doctor Vera Delgado fue separado intempestivamente como Juez Superior que debía estudiar la demanda intentada contra las compañías petroleras. Esto, según comentarios, es una maniobra política de las empresas concesionarias y una imposición del partido de gobierno. Así para continuar las investigaciones, se designa ahora al doctor Noel Pantoja.

Septiembre 14

El geólogo Gustavo Coronel, ejecutivo de una empresa petrolera y directivo suplente de PETROVEN, declara que quizás haya diferencias entre las compañías concesionarias y el gobierno con respecto al monto final de la indemnización, pero se muestra seguro de que habrá un avenimiento porque no está en el interés del Estado ni en el de las empresas petroleras desembocar en una situación conflictiva. También sostiene que los nombres de las concesionarias no desaparecerán de la escena local, porque éstas darán asistencia tecnológica a las empresas del Estado.

Septiembre 15

Es inscrita la empresa matriz PETROVEN en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. El acto se efectúa en el despacho del Procurador General de la República, doctor Eduardo Ramírez López. La empresa funcionará bajo la forma de sociedad anónima, cumplirá y ejecutará la política que dicte el Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos por órgano del ministerio de Minas, y deberá planificar, coordinar y supervisar la acción de las sociedades de su propiedad. Podrá adquirir, vender, enajenar y traspasar, por cuenta propia o de terceros, bienes muebles e inmuebles; promover como accionistas o no otras sociedades civiles y mercantiles y asociarse con personas naturales o jurídicas. Además de otras atribuciones como otorgar créditos, fianzas, avales o garantías de cualquier tipo. Los directivos de PETROVEN durarán cuatro años en sus funciones. El presidente y los demás directivos no podrán desarrollar actividades como dirigentes de organizaciones políticas mientras estén en el ejercicio de sus funciones.

Septiembre 16

El presidente de Fetrahidrocarburos, señor Antonio Machado, declara que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Nacionalización Petrolera, la compañía Shell de Venezuela depositó 538 millones 200 mil bolívares en el Banco Central de Venezuela por concepto de prestaciones sociales de los trabajadores calculadas hasta el 31 de diciembre de 1975.

El doctor Reinaldo Cervini, presidente de la Asociación Pro Venezuela, afirma que la nacionalización petrolera impone instrumentar una nueva política monetaria. Estima que se debe procurar una mayor producción en el país para favorecer a sectores que antes no se han beneficiado con la renta petrolera. En su opinión el país debe establecer una clara política petrolera con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco ya que constituye ésta un recurso valioso para futuras generaciones. Añade que el proceso de nacionalizaciones estará sometido a presiones diversas del área internacional.

El ingeniero Félix Morreo, hijo, jefe de la División de Mantenimiento de Bienes del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, declara que la entrega de los equipos e instalaciones a las nuevas empresas petroleras venezolanas se cumplirá en un período estimado de un año, a partir del 1º de enero de 1976, luego de que haya sido suficientemente verificado y comprobado el estado en que se encuentran. La Ley prevé 3 años para ese traspaso, pero se estima que podrá hacerse antes. Señala que el estado general de los equipos que recibirá la nación es bueno y el mantenimiento que se les ha dado es adecuado para que la industria continúe produciendo igual.

Septiembre 17

Las nuevas empresas operadoras de la industria petrolera podrán ser creadas por el Estado o por las concesionarias, según sea el resultado a que se llegue en las negociaciones a alto nivel que se realizan para el pago de las indemnizaciones. Algunos directivos de PETROVEN han declarado que corresponde a las concesionarias crear las nuevas empresas que operarán la industria. El Procurador General de la República, doctor Eduardo Ramírez López, señala que hay dos vías posibles para la fórmula definitiva que se adoptará. Esas dos vías son: "las empresas operadoras o las crea el Estado o el Estado las hace constituir". Pero debe esperarse el resultado de las proposiciones sobre indemnización que haga la nación a las compañías expropiadas.

El presidente del Banco Unión, doctor Rodolfo Belloso, informa que los trabajadores de la compañía Shell de Venezuela tienen 410 millones de bolívares en fideicomiso en ese Banco por concepto de prestaciones sociales.

El presidente de Fedecámaras, Antonio Díaz Martínez, declara ante profesionales de la economía, que la nacionalización no sólo plantea el reto de mantener plena eficiencia productiva de la industria, sino que además deben explorarse nuevas áreas y pensarse en nuevos procesos industriales. Considera necesario planificar una eficaz industria petroquímica que "dispute los mercados mundiales a los grandes consorcios". Agrega que no es labor cómoda participar en el mundo de los grandes negocios internacionales, competir en los mercados con empresas que tienen sistemas muy desarrollados y eficaces mecanismos de distribución.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en carta dirigida a la CTV responde a los planteamientos que le hiciera días antes esa central obrera sobre la situación de los trabajadores. El presidente ofrece estudiar la forma cómo se entregará el 50 por ciento de las prestaciones a quienes así lo requieran. Ofrece asimismo un amplio plan de viviendas, mantener los planes de jubilación y las conquistas contractuales alcanzadas hasta ahora por la gestión de los sindicatos.

Las prestaciones de los trabajadores petroleros, incluyendo las que acaban de ser depositadas en el Banco Central, alcanzan a unos 1.600 millones, según estimaciones hechas por este Banco. La Comisión de Reversión había estimado unos 2.000 millones, pero un sector de los trabajadores no se acoge al plan de Fideicomiso. En el Banco Unión hay unos 410 millones, en el Banco Venezuela unos 250 millones y hay depósitos también en el Banco Mercantil y Agrícola.

Es citado a declarar ante el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Federal, el ex vicepresidente de la Mobil Oil Company de Venezuela, Johnny Hernández, en torno a las averiguaciones que por los presuntos delitos de hurto y venta ilícita de equipos petroleros afectos a reversión, fueron realizados en Anaco, los cuales, según la PTJ, están valorados en más de 100 millones de bolívares y fueron negociados a un precio ínfimo como chatarra, sin observar las normas que al respecto fija la Ley de Reversión.

Septiembre 18

El secretario de la OPEP, Jeque M. O. Feyide, dirige un mensaje al ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, felicitando al gobierno venezolano por el paso trascendental que ha dado el país con la nacionalización de la industria petrolera.

Informa el señor Ramón Ruiz Polanco, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos y Similares del Estado Falcón, que Fedepetrol ha solicitado una audiencia al presidente de la República para hacerle entrega de un documento contentivo de las aspiraciones de los trabajadores petroleros. Agrega que éstos aspiran a que se les adjudiquen las casas habitadas por ellos en los campamentos petroleros de las concesionarias, luego de la ejecución de la nacionalización de la industria.

En acto realizado en Fedecámaras el ingeniero Humberto Peñaloza señala que la administración petrolera nacional debe ser ejercida por PETROVEN, evitando la injerencia de todo elemento político y manteniéndose separada de la administración pública. Debe lograr el mismo nivel de eficiencia y productividad de las empresas concesionarias. Dice el ingeniero Peñaloza que el punto más difícil de la nacionalización es la venta de petróleo en el exterior, ya que el Estado no tiene clientes y la experiencia de la CVP en esa área es nula. Considera que el petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco se debe destinar al consumo nacional.

Durante más de tres horas se reúnen en el Palacio de Miraflores el Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez; el Ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado; el Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández; el Ministro de Planificación, Gumersindo Rodríguez; el presidente y el vicepresidente de PETROVEN, general Rafael Alfonzo Ravard y Julio César Arreaza, respectivamente; el señor Rómulo Betancourt y Luis Piñerúa Ordaz. En la reunión se consideran diversos aspectos vinculados con la nacionalización petrolera como son, entre otros, la indemnización a las empresas concesionarias, el pago de Impuesto sobre la Renta por parte de las compañías. El ministro de Minas señala que las conversaciones con las concesionarias para el pago de indemnizaciones están muy avanzadas.

El Embajador de Venezuela en Estados Unidos, doctor Miguel Angel Burelli Rivas, declara al llegar a Venezuela que en Norteamérica hay una expectativa tranquila con respecto a la nacionalización petrolera, y que las opiniones sobre nuestro país son bastante satisfactorias.

Septiembre 19

En el Ministerio de Minas e Hidrocarburos se informa que venció el plazo establecido por la Ley de Nacionalización Petrolera para que las empresas nacionalizadas depositen en el Banco Central de Venezuela las prestaciones sociales de los trabajadores, ya que aquélla contempla 15 días hábiles después de haber sido puesto el *Ejecútese* por el presidente de la República. El doctor Carmelo Lauría, presidente del Concejo Bancario Nacional, calcula que los derechos adquiridos en prestaciones sociales en toda la economía nacional llegarán a 8.000 millones de bolívares.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23º de la Ley de Nacionalización Petrolera, se conoce que los fideicomisos de prestaciones sociales de 13.600 trabajadores de la Creole y la Shell —7.500 de la primera y 6.100 de la segunda— ascienden a 1.023 millones de bolívares, de los cuales 538 millones corresponden a fideicomisos de trabajadores de la Creole y 485 millones a los de la Shell. Hay además 174 millones de bolívares que ambas compañías depositaron en el Banco Central de Venezuela —122 la Creole y 52 la Shell— por concepto de prestaciones de trabajadores de esas empresas que no se acogen al sistema de fideicomisos.

En las primeras Jornadas Venezolanas de Geología, Minería y Petróleo, que se celebran en Maracaibo, los geólogos recomiendan reexplorar las concesiones renunciadas en los últimos treinta años. El doctor José Pantin Herrera, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, señala en su discurso que la planificación de la exploración petrolera debe efectuarse en función del volumen requerido por la nación. Dice que es necesario buscar la manera de disponer de la tecnología indispensable, sólo que tiene que evitarse el que ese apoyo tecnológico que buscamos de los países industrializados no se transforme en un elemento que entrabe nuestra libertad de acción.

El ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, hace circular entre los 23 mil empleados de la industria petrolera una carta en la cual reconoce la tarea cumplida por ellos como personal de la industria. En el mismo documento señala que luego de que ésta sea nacionalizada tendrán que realizarse esfuerzos para vencer las dificultades. Dice que se conversa con las empresas internacionales para establecer convenios de suministro de petróleo y adquisición de la tecnología que se necesita. Con respecto al pago de indemnización expresa que tiene esperanzas de que el entendimiento amistoso prevalecerá y no será necesario llegar a juicios de expropiación. La carta, además de ser explicativa de

los pasos que se cumplen para la nacionalización petrolera, es en esencia un llamado a todo el personal de la industria a colaborar en esa tarea.

Septiembre 20

En las Primeras Jornadas de Geología, Minería y Petróleo, el doctor Francisco Gutiérrez afirma que, en su opinión, a muy corto plazo escaseará la gasolina en Venezuela. Añade que los venezolanos estamos en capacidad de poner en producción cualquier yacimiento, mostrándose partidario con reducir en un 40 ó 50 por ciento la producción petrolera venezolana, dentro de un proceso racional de planificación. Por su parte el doctor Gastón Parra, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, al referirse a la posible escasez del combustible advierte que las refinerías establecidas en Venezuela se crearon con el objetivo de satisfacer la demanda de los Estados Unidos; debe pensarse, por tanto, en un cambio de los patrones de refinación que reflejen la base del mercado nacional e internacional. Con respecto a las empresas mixtas afirma el doctor Gastón Parra que no provienen por voluntad propia del país, sino de una decisión de las transnacionales. Asimismo afirma que la tecnología se ha convertido en la nueva forma de actuar del capitalismo monopolista para seguir explotando y dominando a estos países.

Los ingenieros Gustavo Nieto Gil y Ramón Mantellini, directivos de AGROPET, afirman que la estabilidad del personal de las empresas petroleras en particular a niveles gerenciales, administrativos y técnicos se ha mantenido como consecuencia del clima de confianza que existe en el sector petrolero después de colocado el *Ejecútese* a la Ley de Nacionalización Petrolera, cuyo texto final, según expresan, responde a muchos de los planteamientos formulados por AGROPET.

En un trabajo presentado ante las Primeras Jornadas de Geología, Minería y Petróleo por los doctores J. G. Méndez y José Rafael Domínguez, se asegura que la exploración petrolera nacionalizada no alcanzará los mismos niveles logrados por la industria privada. Se señala que la explotación futura puede tener características de altos riesgos y ser costosa, ya que se han explorado las cuencas más favorables y permanecen por descubrir acumulaciones difíciles de localizar y muy profundas. Se recomienda compilar y evaluar las informaciones que las compañías petroleras guardan como confidenciales sobre resultados de perforaciones exploratorias.

Las empresas petroleras completan la entrega de los fondos correspondientes a las prestaciones de sus trabajadores en el Banco Central. El monto supera

los 228 millones de bolívares. Las cantidades son recibidas en concepto de depósito de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos. Se espera ahora la reglamentación que se dicte sobre el tipo de inversiones que con ese dinero se harán. Esa reglamentación puede dar origen a la formación de fideicomisos.

Septiembre 21

El presidente de Fedecámaras, Antonio Díaz Martínez, declara que cualquiera que sea el signo ideológico bajo el cual se oriente el desarrollo de la economía, es evidente que el país estará comprometido en el uso de grandes recursos básicos. Dentro de esta posibilidad es un compromiso obligante el uso apropiado de la moderna tecnología. Afirma que el Estado debe promover la actividad para obtener formulaciones tecnológicas y reducir la "irritante dependencia" que hasta ahora ha existido en el campo industrial.

El doctor Francisco Santamaría, secretario Ejecutivo de FONINVES, señala en las Primeras Jornadas de Geología, Minería y Petróleo, que las actividades de investigación están desvinculadas de los requerimientos de la industria petrolera. Afirma que en Venezuela no existe ni siquiera una primera planta piloto en ningún centro de investigación y que para renovar los cuadros técnicos en materia de refinación harán falta —en los próximos ocho años— 7.000 trabajadores calificados.

Septiembre 22

Augusto Malavé Villalba, vicepresidente de la CTV y presidente del Banco de los Trabajadores, sostiene que ya es hora que los trabajadores creen fuentes de trabajo y participen activamente en la economía nacional a través de la creación de empresas mixtas con el Estado. Agrega que el Banco que preside está dispuesto a financiar proyectos como los propuestos por la CTV.

El Comandante General del Ejército, General Manuel Ignacio Bereciartu Partidas, hace cambio de mando del General de Brigada Pedro José Chalbaud Troconis al General de Brigada Bernardo Antonio Rigores de la II División de Infantería en el Cuartel El Libertador de Maracaibo. El General Chalbaud en su discurso señala que las Fuerzas Armadas no deben ser sólo defensoras de la integridad territorial y la soberanía, sino también los guardianes de la voluntad del pueblo, y agrega que debemos unirnos a la nacionalización petrolera para "estructurar las bases de un país próspero y libre" que responda a las exigencias del desarrollo.

Septiembre 23

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, doctor Luis Matos Azócar, durante una intervención en Yugoslavia sobre transferencia de tecnología, señala la posibilidad de ampliar las fuentes de suministro de tecnología, y que en este sentido ya se están considerando algunos convenios de cooperación científica y técnica con países desarrollados. Venezuela propone la creación de un Banco de Tecnología para países del Tercer Mundo. Matos Azócar se refiere a la nacionalización en Venezuela y plantea que no implicará gastos violentos.

De inmediato no se eliminarán las compañías extranjeras, pero se tiende a suprimirlas como intermediarias. Añade que está prevista la expropiación inmediata de las empresas que rechacen la indemnización ofrecida por el Estado venezolano para evitar la dilación del proceso. Otra de las afirmaciones que hace se refiere a que el país no está dispuesto a realizar ningún pago a las concesionarias por algunos campos antieconómicos, terrenos inexplotados y equipos desafectos.

Septiembre 24

Varios jefes de Estado envían mensajes de congratulación al Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, con motivo de la nacionalización de la industria petrolera. En nombre de los Emiratos Arabes Unidos, su presidente Zayed Bin Sultán Al Nahyac hace llegar la felicitación. Por su parte el Presidente de Iraq, Ahmed Hassam Albakar, expresa su complacencia por la nacionalización. Asimismo lo hacen el Sha de Irán, Mohamed Reza Pahlevi, y el Premer de Antigua, George H. Walter.

Septiembre 25

El dirigente sindical de AD y directivo de PETROVEN, señor Manuel Peñalver, declara que nadie puede negar a los trabajadores petroleros el derecho a reclamar hasta el 50 por ciento de sus prestaciones, aun cuando ello pueda repercutir negativamente en el proceso inflacionario del país. Advierte que es necesario instrumentar con sumo cuidado los mecanismos para que esas prestaciones sean utilizadas en viviendas, educación, salud, es decir, que tengan positiva repercusión en el grupo familiar de los trabajadores.

Septiembre 26

El Ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, anuncia que aún no se ha decidido cuál será la forma en que se pagará la indemnización a las compa-

ñías concesionarias. Sin embargo, se había informado que se les pagaría con bonos de compensación de Bs. 4,30 por dólar, a un plazo de 10 años y exentos del pago de Impuesto sobre la Renta. Esta información es desmentida por el ministro Hurtado.

En declaración de la Cámara de Comercio de Caracas se hace un llamado para que la industria petrolera nacionalizada sea administrada con eficiencia. Se expresa en ella que el nuevo reto será una carga pesada para las estructuras administrativas nacionales, notoriamente afectadas, y se considera que la nacionalización es un acto de "afirmación" de nuestra soberanía y el punto de partida de una nueva etapa en el "desarrollo integral" del país.

Septiembre 27

Fedecámaras considera que como consecuencia de la nacionalización deben esperarse reajustes iniciales de la industria petrolera, con una modificación en los ingresos fiscales. Así lo expone el presidente de ese organismo, señor Antonio J. Díaz Martínez, en el acto de inauguración de la nueva sede de la Asociación Venezolana de Exportadores. Estamos conscientes —dice— que la nacionalización estimulará un cambio profundo en el modo de vivir de los venezolanos, y modificará la "mentalidad derrochadora" y la tendencia al facilismo. Agrega que los empresarios venezolanos respaldan la nacionalización en virtud de que la misma conviene al interés nacional, pero persiste el compromiso de saber invertir esa riqueza.

El ingeniero Rubén Chirinos, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y encargado de la presidencia de AGROPET, declara que los profesionales venezolanos necesitan mantener conexión con el exterior para adquirir los conocimientos de otros países en materia tecnológica, a través de los convenios con las empresas trasnacionales, pero se ha advertido sobre la necesidad de que esas negociaciones cuenten con el asesoramiento de personal venezolano especializado. Señala que en el país se puede modificar, adoptar y optimizar la tecnología externa de acuerdo a nuestros requerimientos.

Septiembre 28

En comunicado oficial de la XLV Reunión Extraordinaria de la Conferencia de la OPEP efectuada en Viena entre el 24 y el 27 de septiembre, se acuerda felicitar al gobierno de Venezuela por la nacionalización de la industria petrolera, y apoyar las medidas que adopta para implementar efectivamente el control completo de la industria.

Septiembre 29

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, informa que el 50 por ciento de las prestaciones sociales de los trabajadores petroleros, estimadas en 1.000 millones de bolívares y que serán pagadas opcionalmente, y las utilidades anuales de las empresas que alcanzan a unos 300 millones de bolívares, serán pagadas en noviembre próximo. Agrega que esa cifra tan alta puede ocasionar un aumento en el nivel del proceso inflacionario si no se toman medidas para evitarlo. Dice que Fedepetrol se ha movilizado para convencer a los trabajadores de que esa enorme masa de dinero debe ir a formar parte de empresas reproductivas y generar bienes de consumo que sean estables. Advierte que los trabajadores han pedido en asamblea la entrega del 50 por ciento de sus prestaciones en forma inmediata, pero en una reunión realizada en el SOEP en Cabimas, después de la exposición de los dirigentes sindicales, los trabajadores comprendieron la imposibilidad del presidente de tomar una decisión sin consultar al Congreso. Se aprueba entonces una prórroga hasta el 31 de octubre, fecha en la cual procederán a ejecutar medidas de presión para lograr en noviembre el pago de esas prestaciones junto con las utilidades.

El General (r) Carlos Carnevalli, Director General de la CVP, informa que el gobierno mantiene discusiones técnicas con la Mobil-Maracaibo y la Occidental para lograr un avenimiento en relación con el monto de sus indemnizaciones. Expresa que para esto es preciso demostrar que los bloques asignados a esas empresas bajo contratos de servicio son comerciales. La inversión realizada en ellos es de unos 300 millones de bolívares. Encontraron petróleo en el cretáceo, pero no han logrado demostrarlo claramente.

Septiembre 30

Se conoce en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos que las empresas concesionarias que operan en Venezuela han expresado a ese despacho su deseo de mantener, a partir de 1976, el mismo volumen de compras petroleras. Se señala igualmente en la información que sobre la materia de fondo —la indemnización legal por la nacionalización—, el gobierno venezolano, a través del ministro Valentín Hernández, hizo ofertas definitivas hace dos semanas.

El doctor Jesús Angel Paz Galarraga (MEP) señala que ese partido hará denuncias en cuanto a una especie de actas-convenios sobre la industria petrolera nacionalizada, en el sentido de que las trasnacionales mantendrán en sus manos durante varios años toda la tecnología y el mercado internacional. Afirma que esa negociación es peor que las empresas mixtas, por cuanto se trata de

una especie de "contrabando". En tal sentido, con los nuevos contratos que se van a realizar, a las trasnacionales no les interesan las empresas mixtas.

Los doctores Denzil Romero y Tulio Colmenares notifican al Procurador General de la República sobre el pasivo oculto de las compañías petroleras estimado en 5.000 millones de bolívares por la extracción indebida de petróleo en áreas de la CVP. Señalan en el documento consignado que, en caso de reclamo a las empresas, el reembolso debe hacerse en especie y no en dinero, pues se trata de reposeción de petróleo tomado indebidamente.

Octubre 1

El señor Antonio Machado, presidente de Fetrahidrocarburos, declara que esa central obrera espera que el presidente de la República dicte en fecha próxima el decreto que norme y rija la entrega opcional de hasta un 50 por ciento de sus prestaciones a los trabajadores de la industria del petróleo. Fetrahidrocarburos insiste además en que el Estado entregue en propiedad a los obreros las viviendas que ocupan desde hace años, sin perjuicio de que ejecute a la mayor brevedad un plan de construcción de viviendas para satisfacer la demanda de los trabajadores en general. También anuncia que en el Comité Ejecutivo de Fetrahidrocarburos se planteó el punto referente a la discusión del próximo contrato colectivo, ya que el vigente vence el 20 de julio de 1976.

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos somete a consulta del Banco Central de Venezuela un reglamento para administrar en fideicomiso las prestaciones sociales de los trabajadores petroleros de acuerdo con la Ley de Nacionalización. Se indica que esta Ley necesita varios reglamentos que dictará el Ejecutivo, y se ha iniciado con el de las prestaciones por cuanto se considera materia de urgencia.

Octubre 2

El doctor Carlos Guillermo Rangel, miembro del directorio de PETROVEN, sostiene que la nacionalización tendrá éxito si se mantiene al margen de la controversia política. Con respecto a las asociaciones señala que pueden ser beneficiosas para el país sin exclusivimos ni preferencias hacia grupos nacionales o internacionales que vayan a intervenir en los diferentes procesos. Señala que PETROVEN trata de determinar el margen de libertad de acción que va a tener cada una de las empresas nacionalizadas, ya que se han designado diversos comités encargados de organizar las compañías nacionales de petróleo.

Octubre 3

El presidente de Pro Venezuela, doctor Reinaldo Cervini, señala que la nacionalización coloca a Venezuela en un plano de relevancia dentro de las realidades internacionales. Al adoptarla el país contribuye a debilitar a potencias que utilizan el petróleo como instrumento de dominación. Venezuela, en su opinión, puede confrontar dificultades por la reacción de países que sienten perder el petróleo venezolano como factor de poder internacional. La nacionalización es un paso en el "rescate de la autonomía nacional".

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en declaraciones suministradas a la revista *Business Week,* señala que Venezuela espera que las principales compañías petroleras después de la nacionalización contribuyan en este proceso con aporte de tecnología, dirección y mercadeo. Agrega que nunca ha considerado a las corporaciones internacionales como "malignas". Dice que el país está interesado en diversificar sus mercados no sólo para sus exportaciones, sino también para obtener tecnología. Expresa que no hay peligro de que la conducta de Venezuela "aleje a la inversión extranjera", particularmente en el momento actual, por cuanto no hay hostilidad hacia ella.

Octubre 4

El doctor José Giacopini Zárraga, en foro realizado para discutir si el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparado para presentar ante el mundo la imagen de la Venezuela de postnacionalización petrolera, declara que la Cancillería debe diseñar una política petrolera internacional a fin de proyectar la nacionalización de esa industria. Agrega que se le exigirá a la industria nacionalizada el ingreso requerido para mantener el nivel de vida y una economía sana en el país. Venezuela, según el doctor Giacopini, se fortalecerá ante la comunidad internacional con el fortalecimiento de su capacidad de negociación e intercambio.

Octubre 5

El doctor Cruz Aguilera, presidente de la Asociación Venezolana de Economistas Petroleros, Petroquímicos y Mineros, afirma ante la II Asamblea Nacional de Colegios de Contadores Públicos celebrada en Porlamar, que Venezuela no debe continuar dependiendo exclusivamente de los canales de comercialización de las empresas petroleras trasnacionales, toda vez que existe la posibilidad de vender nuestro petróleo a mercados no vinculados con esas empresas. Es necesario —dice— diversificar los mercados. Con respecto a la tecnología, expresa que es también conveniente diversificar las fuentes de suministro, a fin

de escoger la tecnología necesaria para maximizar el valor agregado derivado de la explotación. Cree que no es procedente restringir ese suministro a las transnacionales.

Octubre 6

El doctor Alberto Quirós Corradi, presidente de la compañía Shell de Venezuela, afirma que la nacionalización de la industria petrolera plantea al directivo y al técnico de las empresas operadoras como perentoria su integral incorporación a la vida del país, para lo cual debe proceder a derribar "las cercas mentales de la relación" que durante décadas le han mantenido fuera de la realidad. Al comentar el artículo "La Política de la Envidia", publicado en la revista *Time*, señala que debe ponerse en ejecución una política de nivelación hacia arriba en la industria petrolera nacionalizada.

Octubre 7

El presidente de PETROVEN, general Rafael Alfonzo Ravard, en clase dictada en la Academia Militar señala, entre otras cosas, que un 10 por ciento del producto neto del petróleo exportado será invertido en la industria petrolera. PETROVEN recibirá ese 10 por ciento y lo reinvertirá a través de empresas operadoras en refinerías, tuberías, etc. Considera que es preciso administrar la industria con el grado máximo de economía, tecnificación y eficacia. Recuerda que el petróleo, que ha creado en Venezuela una exagerada dependencia, es un producto que se vende en un mercado con cambios y alternativas que pueden estar fuera de nuestro control.

El titular de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, hace una exposición ante la Cámara de Diputados para presentar el presupuesto de 1976 que alcanza a la suma de 33.176 millones de bolívares. Se muestra confiado en cuanto a los efectos que va a tener la nacionalización petrolera en los ingresos fiscales. Señala la necesidad de un reordenamiento radical de la economía. Al nacionalizar la industria, la dependencia tradicional de esta fuente de ingresos se acentúa y obliga al Estado a tomar medidas que atenúen esos efectos. La nacionalización exige destinar recursos financieros a actividades que el Estado emprende hoy en pequeña escala. Se deben realizar grandes inversiones en la exploración, explotación y en modificar el patrón de refinación del petróleo para adaptarlo a los requerimientos del mercado mundial. En este sentido refiere que las compañías concesionarias se han limitado últimamente al mantenimiento de la capacidad instalada, produciéndose el fenómeno de "desinversión en la industria".

Octubre 8

El fondo destinado a la investigación en materia de hidrocarburos y formación de personal técnico para la industria de dichas sustancias (FONINVES), aporta Bs. 2.925.195 al INVEPET para contribuir a su desarrollo como centro de investigaciones científicas en materia de hidrocarburos y petroquímica. En el acto de donación estuvieron presentes el presidente de FONINVES, doctor José Martorano Batisti, y el presidente del INVEPET, doctor Humberto Calderón Berti.

El doctor Humberto Calderón Berti, Director de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, al referirse al papel que debe desempeñar ese despacho en el proceso de nacionalización señala que debe continuar ejerciendo el control y la fiscalización de la industria petrolera, y debe también definir la política que afectará a esa industria. Plantea como interrogante las relaciones con PETROVEN y las empresas operadoras nacionalizadas. Cree que las actividades de la empresa matriz no deben ir más allá de la formulación de las políticas empresariales, y al Ministerio de Minas le corresponde fijar las responsabilidades de PETROVEN cada año en relación a ingresos fiscales y volúmenes de petróleo. PETROVEN y las empresas operadoras deben establecer los programas a cumplir. El doctor Julio César Arreaza, vicepresidente de Petróleos de Venezuela considera que no es fácil definir la interrelación de las funciones del ministerio y PETROVEN, estimando que el primero debe ocuparse más de las cuestiones mineras que las de hidrocarburos.

Informa el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, que en pocos días será presentado ante las compañías petroleras el monto de las indemnizaciones que ofrecerá el gobierno, las cuales alcanzan a 4.300 millones de bolívares. La comisión de alto nivel realiza las últimas conversaciones con las empresas concesionarias.

El ingeniero Martín Morales, adjunto al jefe de la División de Inspección y Fiscalización de la Dirección de Reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, anuncia que la verificación e inspección del estado y conservación de las instalaciones y equipos la realizará el propio personal de la industria. Señala que se hará una nueva inspección del estado de mantenimiento de todas las plantas y equipos. El ministerio de Minas —dice— posee un inventario codificado de toda la industria.

Octubre 9

El secretario general del MAS, senador Pompeyo Márquez, declara que la

cifra convenida por el ministro de Minas e Hidrocarburos sobre el monto de la indemnización a pagar las compañías petroleras es "escandalosa". Agrega que el artículo 15º de la Ley de Nacionalización es bastante explícito en cuanto a las deducciones. Dice que los socialistas estuvieron de acuerdo por razones políticas y no morales con el pago de indemnización; pero de allí a aceptar una cifra tan exagerada hay una gran distancia. Por su parte Freddy Muñoz considera que se debe ser extremadamente celoso en el cálculo del monto verdadero de los activos de las compañías y en las deducciones contempladas en el artículo 15º. Le parece dudosa la cifra que señala el ministro de Minas, y estima conveniente que éste proporcione con antelación al Congreso todas las informaciones relativas a las deducciones que deben hacer con arreglo al mencionado artículo de la Ley.

Octubre 10

El presidente de la República ordena al ministro de Minas e Hidrocarburos paralizar las conversaciones que se realizan con la Occidental Petroleum para el pago de indemnización, hasta tanto no se aclare la situación planteada por la denuncia de presunto soborno que hiciera un ex empleado de la mencionada empresa ante tribunales norteamericanos. En la denuncia se plantea que el presidente de la Occidental, señor Armando Hammer, sobornó por más de tres millones de dólares a miembros del Congreso venezolano y a funcionarios del gobierno para obtener los contratos de servicio.

Según declara Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, los trabajadores no están satisfechos con la carta del presidente de la República en respuestas a los planteamientos de los obreros sobre las prestaciones y garantías derivadas de la nacionalización de la industria petrolera. Agrega que hasta el presente el Reglamento de la Ley del Trabajo que dictó el ex presidente Rafael Caldera no ha sido interpretado ni por su gobierno ni por el actual en lo que se refiere al cálculo de las prestaciones.

El diputado socialista José Vicente Rangel, en declaraciones respecto del proyecto presentado por la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública presidida por Pedro Tinoco, afirma que con ese proyecto la institución presidencial se hará extremadamente débil, y de aprobarse se produciría un "golpe de Estado silencioso". El plan, en su opinión, contempla la entrega de las empresas del Estado a los capitalistas. Indica que lo ocurrido con el petróleo y el hierro es en cierta forma el desarrollo del plan que Tinoco esbozara al ministro Gumersindo Rodríguez en 1974: a) el Estado actuará a través de empresas estatales en los campos de la industria petrolera, en la del hierro y en algunos servicios esenciales; b) el Estado propicia la creación de empresas mixtas o la acción

privada directa en las etapas sucesivas de manufactura de las materias primas básicas y estimula la iniciativa privada en los demás sectores de la producción.

Octubre 11

El Ministro de Minas e Hidrocarburos doctor Valentín Hernández Acosta, declara que Venezuela colocará todo el crudo que producirá dentro del programa establecido por el Ejecutivo Nacional para 1976, el cual se ha fijado para fines presupuestarios en 2.200.000 barriles diarios. También señala el titular de Minas que el gobierno tiene plena confianza en que las empresas concesionarias darán una respuesta positiva a las proposiciones que ha hecho Venezuela sobre el monto de indemnización por concepto de nacionalización de la industria petrolera.

El doctor Reinaldo Cervini declara a título personal que es conveniente la medida de suspender el pago de indemnización a la Occidental Petroleum hasta tanto no se aclare la denuncia sobre el presunto soborno. Considera que éste, realizado por muchas empresas trasnacionales, contribuye a la corrupción de funcionarios. Por otra parte señala que conviene estudiar otras denuncias formuladas en el país contra empresas que se dice han extraído petróleo sin cancelar los impuestos correspondientes. Además estima que las empresas deben indemnizar al Estado por los daños ecológicos ocasionados.

El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, según anuncia el doctor Arturo Hernández Grisanti, respalda plenamente la decisión del presidente de la República de suspender cualquier tipo de pago a la Occidental Petroleum por el supuesto soborno hecho a funcionarios venezolanos por el presidente de la empresa.

Octubre 13

El Ministro de Minas e Hidrocarburos presenta a 29 empresas concesionarias las ofertas de indemnización. El pago se hará mediante dos sistemas, uno en efectivo cancelándose el material existente para el 31 de diciembre, y otro para el pago por concepto de equipos e instalaciones que se efectuará en bonos de la Deuda Pública. Si alguna empresa no acepta la oferta oficial debe recurrir a la Corte Suprema de Justicia, y si ésta no ha decidido antes del 31 de diciembre el Estado asume entonces el control de las instalaciones. Las empresas tienen plazo hasta el 28 de octubre para responder al gobierno sobre las ofertas. El monto total de las indemnizaciones es de 4.316 millones de bolívares.

Octubre 15

Los abogados Denzil Romero y Tulio Colmenares, denunciantes del pasivo oculto que presuntamente mantienen las concesionarias, se dirigen al presidente

de la República solicitando sea congelado el pago de indemnización a las petroleras investigadas por el doctor Noel Pantoja, Juez XII de Primera Instancia en lo Penal.

Octubre 16

El Juez Dudécimo de Primera Instancia en lo Penal, doctor Noel Pantoja, dictamina que las compañías petroleras no han incurrido en acción alguna que pueda ser penada por la justicia venezolana. Declara el doctor Pantoja que no fue posible probar que existieran pasivos ocultos ni evasión de Impuesto sobre la Renta.

Octubre 17

El General (r) Carlos Carnevalli Rangel, Director General de la CVP, considera que ésta ha cumplido su "cometido histórico" y continuará cumpliéndolo. Agrega que la determinación de las áreas futuras de acción de esa empresa constituye una decisión de PETROVEN, en tanto le corresponde a esta empresa matriz delinear el nuevo esquema que va a regir la industria petrolera. En su opinión, la CVP tiene experiencia en el mercado exterior, aun cuando reconoce que se presentan algunas dificultades porque se requiere de una serie de infraestructuras de las cuales se carece en la actualidad.

Los doctorse Denzil Romero y Tulio Colmenares solicitan ante el Fiscal General de la República, doctor José Ramón Medina, el recurso de apelación ante la decisión del Juez Noel Pantoja en cuanto a que las empresas petroleras no han delinquido contra la nación.

Octubre 18

El juez Noel Pantoja manifiesta que no corresponde al Tribunal XII de Primera Instancia en lo Penal estudiar la obligación de las petroleras con el Estado, ni lo referente a obligaciones con el Impuesto sobre la Renta. Una vez conocida la decisión del juez quedan dos alternativas: que el expediente suba a consulta legal ante el Juzgado Superior Penal, o que el Fiscal del Ministerio Público apele de la decisión.

El doctor Valentín Hernández Acosta, Ministro de Minas e Hidrocarburos, declara que las relaciones petroleras de Venezuela con Washington, que llegaron a un bajo nivel cuando la Casa Blanca desató una ofensiva contra las decisiones de la OPEP, se han normalizado. Revela igualmente que los países industriali-

zados ven con receptividad la nacionalización del petróleo y el hierro en Venezuela.

El Gobierno Nacional hace otra oferta de indemnización a las llamadas empresas participantes que tienen las dos terceras partes de las instalaciones, plantas y equipos en el Estado Zulia. La oferta es de 82 millones de bolívares.

Octubre 19

Declara Abdón Vivas Terán que la CVP en la estructura nacionalizada quedará adscrita, con áreas específicas de acción, a una de las grandes compañías nucleantes. Reconoce que, al margen de la rentabilidad, la CVP durante 15 años ha tenido un funcionamiento positivo. El programa de desarrollo tecnológico de esa empresa dentro del intento de encontrar una salida para el reto que tenemos en la Faja Petrolífera del Orinoco, es también un desarrollo importante de lo que era la única empresa petrolera del Estado venezolano.

Se descarta por decisión oficial que la CVP tenga el monopolio del mercado interno para la distribución de gasolina y otros productos. Con la nacionalización se mantendrán varios emblemas en las estaciones de servicio con operaciones de competividad para asegurar un mejor servicio en escala nacional. Según se explica en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, con esa nueva política se desea mantener las operaciones comerciales de las empresas subsidiarias de PETROVEN.

Octubre 21

Informa el *Wall Street Journal,* de Nueva York, que el gobierno venezolano ofrece a la Exxon Corporation el equivalente de 512 millones de dólares (? mil millones de bolívares) como indemnización por las propiedades de la compañía. De acuerdo con el diario mencionado, esa suma se pagaría en efectivo y otra parte en bonos con interés y amortizables en período de cinco años.

Octubre 23

El Fiscal General de la República, doctor José Ramón Medina, apela ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal de la decisión de ese Tribunal que declaró terminada la averiguación sobre presuntas actividades ilícitas de varias empresas petroleras. El doctor Medina formula la apelación en su carácter de máximo representante del Ministerio Público y de conformidad con el artículo 53º del Código de Enjuiciamiento Criminal. La investigación fue iniciada ante la denuncia de los doctores Denzil Romero y Tulio Colmenares contra algunas concesionarias por supuesto pasivo oculto y otros hechos.

El ministro de Minas e Hidrocarburos comparece ante la Comisión de Minas de la Cámara del Senado. En sus declaraciones dadas después de la reunión, expresa que son justas las ofertas de indemnización hechas por el gobierno a las empresas concesionarias. Hasta el momento todas éstas han recibido las ofertas, y solamente una, la Mercedes Petroleum, ha contestado afirmativamente. Al referirse al control del mercado interno señala que todas las compañías nacionalizadas tendrán iguales oportunidades y, por tanto, la CVP no tendrá entonces la exclusividad de ese mercado.

El ministro de Minas e Hidrocarburos informa que las empresas petroleras que cesan sus actividades el 31 de diciembre de 1975 dejarán listos para PETROVEN y sus afiliadas programas para realizar en 1976. Ello permitirá que la industria continúe a un ritmo normal. Expresa que es probable que la empresa matriz haga algunos ajustes en esos planes, pero en todo caso no serán decisiones excepcionales.

El doctor Jesús Bernardoni (Copei) sostiene que la nacionalización está bloqueada en tanto el negocio petrolero sigue dependiendo de los factores de comercialización que han desarrollado las organizaciones transnacionales. Una de las consecuencias de ello —señala Bernardoni— ha sido la aplicación de criterios irracionales para la explotación de los hidrocarburos. El negocio petrolero —dice— está planificado y estructurado conforme al criterio y las conveniencias de las distintas casas matrices del exterior.

Octubre 24

El presidente de la República, en entrevista publicada en el diario *Pravda*, órgano del Partido Comunista soviético, predice que no se producirán enfrentamientos con las empresas internacionales como consecuencia de la nacionalización petrolera. Señala que al nacionalizar el petróleo el país pasa a depender más de él dado que no se puede contar con los ingresos fijos recibidos antes por las empresas internacionales. Agrega que el gobierno se responsabiliza por lo que denomina "riesgo calculado" de la nacionalización, y manifiesta que Venezuela continuará vinculada con las empresas internacionales durante algún tiempo, pero sobre una base diferente.

El doctor Humberto Peñaloza afirma que el Estado venezolano no tendrá "excusa ante la historia si fracasa" en la dirección de la industria petrolera. Considera que la nacionalización en tanto se cumpla a plenitud introducirá cam-

bios radicales en todo el organismo nacional. Manifiesta asimismo que la industria petrolera debe estructurarse bajo control del Estado, preparada para ajustar sus decisiones a los designios de la planificación del país, y para proporcionar mejores rendimientos a la nación comprometida como debe estar con la transformación socioeconómica de Venezuela.

El directorio de PETROVEN asiste a la Comisión Permanente de Minas del Senado que preside el doctor Godofredo González, para informar sobre el proceso de organización, los programas y trabajo que adelanta la empresa. Anuncian que están en la elaboración final de los estatutos de las compañías que deberán constituirse de acuerdo a la base 4º del artículo 6 de la Ley de Nacionalización. Señala que han mantenido conversaciones con el personal directivo de las empresas concesionarias para acelerar el proceso de nacionalización. Los senadores Godofredo González y Andrés Sosa Pietri se muestran preocupados porque aún no se han designado las directivas de las petroleras ya próximo a que pasen a manos del Estado. El general Rafael Alfonzo Ravard informa que no se han designado porque los ejecutivos de ellas se ocupan de estudiar las ofertas que se hacen a las transnacionales.

El doctor José Martorano Batisti, coordinador general de la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos que actuará hasta el 31 de diciembre, declara que ésta mantiene un control absoluto de todo el movimiento de las compañías concesionarias. Informa que a la Comisión corresponde también otorgar las autorizaciones sobre contratos de compra y venta de hidrocarburos e intercambio de crudos y productos derivados entre las compañías. Puede asimismo autorizar la designación, remoción y transferencia de personal de las concesionarias.

La empresa Mito Juan acepta la oferta de indemnización que le ofrece el Gobierno Nacional. El presidente de la misma, Humberto Peñaloza, señala que Mito Juan ha cumplido un papel importante en la venezolanización de la industria al incorporar capital y técnicos venezolanos en la actividad petrolera. Considera además que la nacionalización es oportuna tomando en cuenta factores externos, así como también condiciones internas.

El presidente de la Exxon, señor C. C. Garvin, declara en Nueva York que esa empresa estudia la oferta del gobierno de Venezuela sobre el pago de indemnización. Asimismo indica que se discute con el gobierno venezolano el papel futuro que desempeñará la Exxon y sus filiales en ese país.

El doctor Félix Morreo, jefe de la División de Mantenimiento e Inspección del Ministerio de Minas, declara que hay equipos petroleros de los que pasan a la propiedad del Estado que están llegando al final de su vida útil, como también existen algunos que su valor neto es de cero. Es probable que el mantenimiento sea costoso y es preferible entonces reemplazarlos. Señala que desde hace año y medio se realizan inspecciones oculares en todas las instalaciones, equipos y sistemas necesarios para la producción, transportación y refinación de petróleo y gas.

Octubre 26

El ministro de Minas e Hidrocarburos anuncia que cinco empresas concesionarias han aceptado las ofertas de indemnización. Entre ellas están la Phillips, Mito Juan, Venezuelan Atlantic y Petrolera Las Mercedes. Se muestra optimista con respecto a la aceptación que puedan hacer las concesionarias como la Creole, Shell y Mene Grande.

Octubre 27

Se reúne el titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, acompañado por el presidente y directivos de PETROVEN, con las concesionarias para las consultas finales acerca de las propuestas de indemnización. La reunión más larga es sostenida con la compañía Creole (Exxon). El día 28 de octubre se vence el plazo en que las compañías deben responder a las ofertas que hiciera el gobierno nacional.

Octubre 28

El ex director de la CVP, doctor Rubén Sáder Pérez, envía un telegrama al diputado Siuberto Martínez y demás miembros de la comisión especial que estudia la denuncia del soborno de la empresa Occidental Petroleum. En la comunicación el doctor Sáder Pérez pide retirar la oferta de indemnización a la mencionada empresa por considerar que la declaración de comercialidad del Bloque "E" que explota la Occidental bajo Contrato de Servicio es violatoria de las atribuciones del consejo directivo de la CVP, y ello implica la entrega de no menos de 120 millones de bolívares a la citada empresa.

El Ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, anuncia ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados que hay que hacer grandes inversiones en la industria petrolera. Sobre las empresas nacionalizadas señala que se les da el tratamiento que establece la Ley, y se ha dado a cada empresa otro nombre para que el control fiscal sea estricto. Afirma que PETROVEN recibirá el 10

por ciento del ingreso neto de las exportaciones para poder hacer las inversiones que la industria requiera. Si llegaran a producirse excedentes más allá de lo requerido, ese dinero será transferido al Fondo de Inversiones.

Octubre 29

El general (r) Carlos Carnevalli Rangel, director general de la CVP, explica que su posible salida de esta empresa no está relacionada con supuesta divergencia con el consejo directivo sobre la declaración de comercialidad del Bloque "E" de los Contratos de Servicio que mantiene la Occidental Petroleum, cuyo director ha sido denunciado como presunto sobornador de funcionarios en Venezuela. Señala Carnevalli que por mandato de la Ley de Nacionalización, la CVP se convierte en empresa mercantil, lo cual implica un cambio en la estructura jurídica a nivel directivo, y es posible que se realicen nuevos nombramientos.

Las principales compañías concesionarias aceptan las ofertas de indemnización que les hiciera el gobierno venezolano. El monto es de 4.316.937.805 bolívares. De esa suma será depositada en el Banco Central para la constitución del Fondo de Garantía la cantidad de 2.400 millones de bolívares. Esto indica que el 31 de diciembre de 1975 se entregará a las compañías la suma de 1.916 millones de bolívares. El ministro de Minas indica que los pagos se harán en bonos, se pagarán en esta forma unos 3.876 millones, y en efectivo otros 440 millones que corresponden a equipos no utilizados por la industria.

Se ratifica que, según decisión del consejo directivo de la CVP, es declarada la comercialidad del Bloque "E" del Lago de Maracaibo cedida a la Occidental Petroleum bajo contrato de servicio. El ministro de Minas señala que para los estudios de ese hecho se designó una comisión que ha reconocido la comercialidad del Bloque. La comunicación del ministerio se refiere en esencia al telegrama enviado por el doctor Rubén Sáder Pérez. Considera el Gobierno Nacional que en momentos en que está en juego la dignidad del país, resulta dañino hacer imputaciones que pongan en tela de juicio la honestidad de quienes tienen en sus manos las decisiones técnicas del problema petrolero.

Las principales compañías petroleras concesionarias informan a sus empleados y trabajadores que aceptaron las ofertas de indemnización que les hiciera el gobierno venezolano. Se explica que el informe al personal de la industria significa la declaración oficial y definitiva de las empresas de haber aceptado tales ofertas. Entran así en el proceso final de liquidación de sus actividades como compañías explotadoras en Venezuela.

Octubre 30

El ministro de Minas e Hidrocarburos anuncia que la ocupación de todos los bienes de las empresas petroleras se efectuará el 1º de enero de 1976 ya que las concesiones vencen el 31 de diciembre del presente año. Señala que se han cumplido pasos importantes, como es la aceptación de las empresas de las ofertas de indemnización. Explica que las acciones de las compañías las mantendrán éstas hasta el 31 de diciembre y luego pasarán a manos de PETROVEN. Agrega que se consulta al Congreso de la República si las actas de avenimiento se pueden enviar a medida que se produzcan o si se envían conjuntamente.

Octubre 31

Se informa que directivos de las casas matrices de las concesionarias han venido a Venezuela para ocuparse personalmente de los trámites de indemnización. Mantienen constantes reuniones con los ejecutivos de las filiales en el país y con el ministro de Minas e Hidrocarburos. La única empresa que no se avino con la indemnización es El Paso, que no es concesionaria sino participante.

El ministro de Minas e Hidrocarburos anuncia que el próximo año será creado el Instituto Venezolano del Petróleo, para cuyo financiamiento está previsto un aporte de cien millones de bolívares. El titular de ese despacho explica además ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados la forma en que será utilizado el presupuesto de 232 millones 882 mil bolívares que solicita el ministerio de Minas para el ejercicio fiscal de 1976.

El Ministro Consejero para Asuntos Petroleros de la Embajada de Venezuela en Washington, el ingeniero Félix Rossi Guerrero, señala que Venezuela continuará siendo fuente estable y segura de petróleo para Estados Unidos. Las compañías foráneas que operan en el país, después de la nacionalización continuarán funcionando al igual que hoy día. Así la Creole será convertida en la LAGOVEN. Dice Rossi Guerrero que el gobierno venezolano ha interpretado el "deseo de los venezolanos", no sólo de que se produzca un cambio, sino de que se realice en forma bien planificada.

Noviembre 2

El ministro de Minas e Hidrocarburos anuncia que los contratos para suministro de tecnología y los convenios para la comercialización serán concertados por PETROVEN los primeros, y por sus empresas subsidiarias los segundos. Asimismo informa que ya hay estudios sobre el monto y tipo de tecnología que se requiere para operar la industria.

Los economistas Odoardo León Ponte, Rafael Montero y Héctor Riquezes llegan a la conclusión de que, en las actuales circunstancias y hasta que no se produzca la preparación del personal suficiente, la industria petrolera no podrá operar más allá de los niveles en que hoy lo hace, ni desarrollar un amplio programa de exploración. Para alcanzar cambios en los resultados, la industria nacionalizada requiere variar la composición y el número del personal.

Noviembre 4

El ministro de Minas e Hidrocarburos, acompañado del Consejo Directivo de la CVP, así como de los asesores y técnicos que manifestaron su opinión sobre la comercialidad del Bloque "E" adjudicado a la Occidental, comparece ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el presunto soborno por parte de aquella compañía. Señala que en ningún momento se ha ofrecido indemnización a esa empresa por el Bloque "E", pues, por el contrario, se han suspendido las conversaciones con ella hasta tanto no quede resuelto el problema por la Corte Suprema de Justicia. Agrega el ministro que no quiere entrar en polémica con el doctor Rubén Sáder Pérez, porque lo que está en juego es la idoneidad de funcionarios técnicos del ministerio. El doctor Aníbal Martínez, quien salvó su voto en el Consejo Directivo de la CVP mostrándose contrario a declarar la comercialidad del Bloque, señala que de acuerdo con las reglas de los Contratos de Servicio la contratista no llegó a demostrar que aquél es comercial.

El ministro de Minas e Hidrocarburos concluye la redacción de las actas de avenimiento con las empresas petroleras concesionarias y participantes. En los próximos días serán enviadas al Procurador General de la República a los efectos de la firma. Luego serán devueltas al ministerio, de donde serán remitidas al Congreso Nacional. Según la Ley de Nacionalización, éste tiene un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción de las actas, para pronunciarse al respecto. Una sola empresa —El Paso— no aceptó la oferta por considerarse compañía participante, de modo que se le aplicará el artículo 13 de la Ley en el sentido que de no llegarse a un acuerdo en un plazo de 30 días se decida la expropiación de todos los derechos afectos a las concesiones. El rechazo de la empresa se debe a que retiró hace mucho tiempo sus representantes legales de Venezuela e ignora todo lo concerniente al proceso de nacionalización.

Noviembre 5

El Director de Hidrocarburos, doctor Arévalo Guzmán Reyes, durante su intervención en el Décimo Segundo Seminario de Periodistas Norteamericanos,

declara que el gobierno definirá cuáles son las industrias básicas y cuáles las empresas mixtas, en una proporción de por lo menos un 51 por ciento de participación para el Estado.

El General (r) Carlos Carnevalli Rangel, Director General de la CVP, declara estar de acuerdo con la decisión de considerar comercial el Bloque "E" explotado por la Occidental Petroleum. Así lo señala al salir de una reunión con la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el presunto soborno. Asiste con los miembros de la junta directiva de la CVP y asesores, técnicos y miembros de la firma Essenfeld y Guevara, Essis y Pieri, Consultores, C.A. Esta firma en enero hizo un trabajo por encargo de la junta ejecutiva de la CVP y determinó que el Bloque no es comercial. Pero en septiembre hizo otro estudio a solicitud del Consejo Directivo de la CVP que preside el ministro de Minas y concluyó que el Boque sí es comercial, estimando que el Estado debía pagar unos 118 millones de bolívares a la Occidental.

El doctor Héctor Hurtado, Ministro de Hacienda, responde al dirigente de Copei, Luis Herrera Campíns, quien declarara que el gobierno no prevé en el presupuesto público la nacionalización de la industria petrolera. Estima el ministro que en Copei se ve la nacionalización como un "pecado sometido a la penitencia" de que deben bajar los ingresos petroleros. Agrega que si se mantiene igual régimen fiscal a las empresas nacionalizadas no hay por qué pensar en la disminución de ingresos, salvo la que se prevé en el propio presupuesto como consecuencia de una disminución del 10 por ciento en la producción petrolera nacional.

El doctor José Giacopini Zárraga, en conferencia que dicta ante periodistas norteamericanos, señala que con la nacionalización se reanudarán las actividades exploratorias y aumentará el número de empleados petroleros. Agrega que a quienes dirijan la industria nacionalizada se les exigirá mantener el ingreso petrolero y manejarla con eficiencia. Expresa que la nacionalización se ha realizado sin violencia, en forma tranquila. Habla además del avance tecnológico que permitirá un mayor aprovechamiento de los yacimientos, lo que posibilitará ir pasando de las reservas probables a las probadas.

El ministro de Minas e Hidrocarburos aclara que es venezolana la firma Essenfeld y Guevara que asesoró al ministerio en el análisis técnico de los Contratos de Servicio. Informa además que el doctor Miguel Rodríguez Molina no es funcionario del ministerio. Con respecto a la comercialidad del Bloque

"E", señala que cuando el doctor Maurice Valery fue director general de la CVP se habían perforado tres pozos y uno solo resultó productor. Los otros dos pozos se perforaron en este período, después que el doctor Valery dejó la dirección de la CVP.

Noviembre 6

El Ministro de Estado para la Planificación, Gumersindo Rodríguez, afirma que para que la nacionalización sea factor de cambio social deben implementarse al mismo tiempo cambios importantes en la orientación del gasto, es decir, en la aseguración del excedente petrolero. La industria nacionalizada no debe ser instrumento de expansión de la gran industria nacional o extranjera, ni de la consolidación de grupos privilegiados. El excedente que quede en el país debe ser elemento dinámico para el proceso de desarrollo.

Noviembre 8

El doctor Rubén Sáder Pérez asiste a una reunión de la Comisión Bicameral que, presidida por Siuberto Martínez, investiga lo del presunto soborno petrolero. Considera el doctor Sáder que la Contraloría General de la República y los organismos del Estado deben abrir una averiguación para determinar si es correcta la declaratoria de comercialidad del Boque "E" de la Occidental Petroleum al Sur del Lago de Maracaibo. La sola declaratoria de comercialidad de ese bloque le produce a la Occidental una indemnización de 120 millones de bolívares, lo que quiere decir que de no producirse esta decisión del ministerio, esa empresa no tiene que cobrar nada al Estado. El presidente de la Comisión señala que el ministerio no ha ofrecido indemnización a la Occidental, sólo se hicieron estimaciones. Considera Sáder Pérez que la empresa no puede ser indemnizada porque dejó de perforar dos pozos. La Occidental debió pagar a la nación Bs. 25.231.971. La CVP reclamaba Bs. 32.700.000 porque de siete pozos sólo perforó cinco.

En el XII Seminario de Periodistas norteamericanos, el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández Acosta, declara que se está haciendo una nacionalización planificada, cuidadosa y pragmática. No obstante —dice—, estamos conscientes de las limitaciones, especialmente en el campo tecnológico. Se refiere a las reservas petroleras con que cuenta el país y advierte que en tal sentido Venezuela, que puede mantenerse durante muchos años como uno de los principales productores de petróleo, ha tomado medidas conservacionistas. Informa que se está programando una evaluación del desarrollo de la Faja Bituminosa del Orinoco.

Noviembre 11

El señor David R. Martín, presidente de la Occidental Petroleum, al rendir declaración informativa ante el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal, señala que la demanda de Ryan sólo persigue perturbar las buenas relaciones entre el gobierno venezolano y la empresa. Agrega que los cargos formulados son falsos y maliciosos, y el mayor deseo de la Occidental es que la verdad quede bien aclarada. Indica además que la empresa acata la decisión del gobierno de suspender el pago de indemnización hasta tanto no se aclare el presunto soborno.

El diputado Rafael Tudela afirma que Venezuela se ha visto obligada a reducir la producción de petróleo ante el debilitamiento del mercado de combustibles con bajo y alto contenido de azufre que son los que el país exporta en mayor cantidad. Junto a ello se ha acordado una reducción de precios de 85 centavos de dolar por barril. En el caso de Venezuela, por hallarse la industria en proceso de nacionalización, se plantea al Estado la necesidad de enfrentar directamente la realidad del mercado. La alternativa que se presenta es la de obtener ingresos muy inferiores a los programados. Dice Tudela que se sabe que el mercado continuará debilitándose por el resto del año: Venezuela está perdiendo mercados, por ejemplo el de Canadá, donde el petróleo venezolano ha sido desplazado por los crudos del Golfo Pérsico. En su opinión, igual ha sucedido con las islas del Caribe, cuyas refinerías han sido penetradas por el Medio Oriente.

El Tercer Consejo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), reunido en Caracas, expresa su pleno respaldo al Estado venezolano por la nacionalización de la industria petrolera. Decide apoyar a los pueblos latinoamericanos contra las interferencias de las transnacionales en la economía y la política de esos países. Respaldan además la posición del partido Copei, de contenido nacionalista, en los debates del parlamento y en la acción por la nacionalización de la industria petrolera.

El parlamentario copeyano Jesús Bernardoni acude a la comisión que preside el diputado Siuberto Martínez para el estudio del presunto soborno de la empresa Occidental Petroleum, y ratifica que la decisión de declarar comercial el Bloque "E" que explota la Occidental es incorrecta, ligera y viciada. Objeta esa comercialidad cuya indemnización ha sido calculada en unos 118 millones de bolívares, según estudio realizado por la firma Essenfeld y Guevara.

El ingeniero Ramón Cornieles declara que la segunda independencia de Venezuela no la constituye la nacionalización de la industria petrolera, sino el desarrollo tecnológico. En su opinión, el tema del desarrollo tecnológico requiere una amplia discusión tal como se hizo con la nacionalización. Considera asimismo una serie de elementos que se deben contemplar para elaborar una estrategia que persiga una autonomía científica y tecnológica del país.

Noviembre 12

El Ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, opina en torno a las declaraciones del señor Rafael Tudela en el sentido de que la reducción petrolera es un hecho y que como consecuencia de ello el presupuesto se verá afectado. El titular de ese despacho señala que una baja en la producción hasta el 10 por ciento no afectaría los ingresos fiscales de la nación, por cuanto el aumento de precios estimados en un 10 por ciento por la OPEP en septiembre no está previsto en el presupuesto. Para pensar en una reducción de ingresos, según el ministro, tendrá que llegarse a una producción petrolera inferior a los dos millones de barriles diarios.

La principal empresa petrolera que opera en el país, la Creole Petroleum Corporation, firma ante el Procurador General de la República el acta de avenimiento de 4 mil folios por la cual acepta el pago de indemnización ofrecido por el Gobierno Nacional. El monto de aquélla asciende a la suma de 2.000 millones de bolívares.

Con respecto a las declaraciones del señor Rafael Tudela, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, advierte que no es que Venezuela esté perdiendo los mercados del área del Caribe, sino que el país no está en capacidad de abastecerlos en su totalidad. Venezuela tiene una producción de dos millones de barriles y el consumo del Caribe es muy superior. Asimismo señala que la debilidad de los mercados se debe, por una parte, a que los países industrializados, previendo un aumento de los precios, compraron una cantidad considerable de petróleo para su abastecimiento. Por la otra, se inicia la temporada de invierno que es la de mayor consumo. Pero cree que a finales de diciembre y comienzo de enero la situación del mercado se haya corregido.

Noviembre 13

El doctor Alirio Parra, quien preside la comisión de negociaciones de la industria nacionalizada, señala que la solicitud de volúmenes de petróleo que se

ha presentado para ser vendido por PETROVEN a partir de 1976, permite asegurar la colocación total de la producción venezolana. Por su parte el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, informa que estas gestiones están en su fase final, indicando que los contratos deben firmarse para entrar en vigencia en enero de 1976 de acuerdo al proceso de nacionalización. Se han producido —dice— ciertas presiones en las negociaciones debido a la flojedad de la demanda, pero esto es transitorio. Señala que hasta que no concluyan los convenios de venta no pueden cuantificarse el monto de barriles colocado en esas negociaciones.

Se informa que directivos de PETROVEN se trasladan al Estado Zulia con el objetivo de inspeccionar y observar las instalaciones petroleras de la Creole. Señalan esos directivos que la visita a Cabimas, Lagunillas y la Salina ha sido satisfactoria.

Noviembre 14

El dirigente del Partido Comunista, Radamés Larrazábal, afirma que la cuestión petrolera es asunto muy importante para dejarlo solo en manos del gobierno. Así lo señala al denunciar que existe el riesgo de que las compañías transnacionales utilicen sus posiciones monopólicas en tecnología y mercadeo para intentar una operación de desnacionalización de la industria petrolera. Es peligroso —agrega— que el Estado se ate de manos ignorando y concertando convenios sólo con las trasnacionales. Declara que el criterio del PCV es la diversificación de las fuentes de tecnología y de procedimientos de ventas del petróleo.

Noviembre 15

La directiva de PETROVEN informa ante la Subcomisión de Industrias del Estado de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados que, de acuerdo con las programaciones de las empresas operadoras, la inversión de la industria petrolera en 1976 será de 2.360 millones de bolívares. Las empresas operadoras filiales de PETROVEN aportarán a esta matriz el 10 por ciento de los ingresos netos provenientes del petróleo exportado por esas empresas, lo cual representaría un aporte a la casa matriz de unos 2.000 millones de bolívares para 1976.

La Occidental Petroleum notifica al Ministerio de Minas e Hidrocarburos que, en vista de haberse roto las negociaciones, llevará su caso de la indemnización a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Nacionalización. El ministro Hernández Acosta informa que por decisión adoptada, según instrucciones del jefe de Estado, la nación no negociará ya con esa empresa.

El Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, se reúne con el CEN de Acción Democrática para discutir sobre el *modus operandi* de la discusión y aprobación por parte del Congreso de las actas de avenimiento sobre las indemnizaciones que recibirán las empresas petroleras.

El Procurador General de la República, doctor Eduardo Ramírez López, firma con la compañía Shell el acta de avenimiento para el pago de indemnización que contempla una suma de casi 1.050 millones de bolívares. A la Shell se le pagará en 8 cuotas, las 3 primeras en efectivo y las otras 5 en títulos de la deuda pública redimibles hasta 1981.

Noviembre 16

El titular de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández Acosta, declara que, además de los contratos de ventas con las empresas petroleras, PETROVEN se reservará una cantidad de petróleo que se comience a producir con la nacionalización para venderlo directamente. Se muestra satisfecho por los pasos que se han dado para la nacionalización, y advierte que está consciente de las limitaciones. Dice que la industria requiere de tecnologías avanzadas y el gobierno está dispuesto a buscarlas. Agrega además que no se tiene mucha experiencia en la fase del mercadeo y que de ésta tiene el control las grandes compañías transnacionales. Señala que los contratos de asistencia tecnológica y de venta aún no han sido firmados, y sólo se han realizado conversaciones al respecto. Los de venta serán firmados por PETROVEN y los de tecnología por las empresas nacionales subsidiarias. Indica que en pocos días serán enviadas al Congreso las actas-convenios que han sido firmadas por las empresas concesionarias. Las indemnizaciones se pagarán con bonos; éstos tienen un interés comercial y están exentos de Impuesto sobre la Renta. Asimismo afirma que en Venezuela se pueden producir hasta tres millones y medio de barriles en los actuales momentos.

El doctor Rubén Sáder Pérez, declara que no es la Corte Suprema de Justicia sino el Ejecutivo Nacional quien decide ahora sobre el pago de indemnización a la Occidental. Considera que sería un error irreparable solicitar la expropiación de la empresa mientras está pendiente la investigación del Congreso. Manifiesta que en las actuaciones cumplidas en los últimos días han quedado en evidencia las circunstancias irregulares por las cuales se pretende reconocer a la Occidental un pago no menor de 117.902.117,61 por concepto de indemnización que "en manera alguna se le adeuda a una empresa convicta y confesa de su incumplimiento en el Bloque E del Sur del Lago".

Noviembre 17

El doctor Reinaldo Leandro Mora considera sospechoso que sea precisamente en el actual momento cuando se hagan denuncias en torno a empresas vinculadas con el proceso de nacionalización. Se refiere a la denuncia de soborno formulada por ex-directivos de la Occidental Petroleum. Debemos estar preparados —dice— para tratar de establecer los juicios que se merezcan en caso de que ese tipo de denuncias tenga alguna intención perturbadora del proceso de nacionalización petrolera.

Ante las declaraciones del doctor Rubén Sáder Pérez, publicadas en la prensa, el ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, señala que no hará ningún tipo de comentarios. Sáder Pérez cuestiona el procedimiento de que el caso de la Occidental Petroleum vaya a la Corte Suprema de Justicia en vista de que el gobierno considera definitivamente rotas las negociaciones para indemnización. Hernández Acosta considera que no debe polemizar en virtud de la responsabilidad que tiene en la conducción de las gestiones relativas a la nacionalización.

El diputado Siuberto Martínez, (MEP), quien preside la Comisión Bicameral investigadora del presunto soborno de la Occidental, declara que esta empresa está inhabilitada de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en demanda de la indemnización que pueda corresponderle según la Ley de Nacionalización hasta tanto no concluyan las investigaciones sobre el supuesto soborno a funcionarios venezolanos. Expresa que el problema surgido sobre la cuestionada comercialidad del Bloque "E", cuya solución es lo único que puede permitir el pago de esa indemnización, es un hecho que también se discute.

Noviembre 19

Los técnicos asesores que declararon la comercialidad del Bloque "E" en área de Contratos de Servicio de la Occidental Petroleum, y por la cual se procedería al pago de indemnización estimada en más de 117 millones de bolívares, explican sus actuaciones. Llama la atención el hecho de que el informe elaborado para la CVP por Essenfeld y Guevara Consultores, C. A., sus asesores permanentes, aparece con fecha de enero de 1975, y es, no obstante, en septiembre cuando lo recibe el Consejo Directivo de la CVP presidido por el Ministerio de Minas. Entre las versiones que han hecho dudar al respecto está la de que esa firma primero niega la comercialidad, luego, tras otro estudio, da respuesta afirmativa. Esto lo explican los técnicos de la firma mencionada señalando que al darse cuenta de que elementos en los cuales se apoyó la investi-

gación inicial no se ajustaban a las normas técnicas y legales, el Consejo Directivo de la CVP pidió a la Junta Ejecutiva de la misma empresa estatal que ordenara una revisión del asunto sobre la base de nuevos parámetros. Así la misma firma Essenfeld y Guevara hizo un nuevo estudio en el cual declararon la comercialidad. Ello es aprobado por el Consejo Directivo de la CVP, con excepción del voto de Aníbal Martínez, quien se opone a la decisión por estar en desacuerdo con la interpretación geológica de la Occidental.

La Carta de la Revista *Visión* hace consideraciones sobre la nacionalización petrolera en Venezuela. En las mismas se afirma que será una de las "más grandes nacionalizaciones jamás realizadas" por la magnitud de la industria, la cantidad de personas que emplea y los ingresos que produce. Se considera que el proceso entra en su fase final al aceptar las compañías la oferta de indemnización que hace el gobierno. Agrega que Venezuela "ha sido razonable con las compañías, y que sus motivos no son enteramente egoístas". Asimismo destaca que el país proyecta usar su petróleo para el desarrollo regional y la unidad latinoamericana.

El señor Antonio Machado, presidente de Fetrahidrocarburos e integrante de una comisión especial designada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos para analizar los aspectos de índole laboral derivados de la nacionalización petrolera, anuncia que aquella central obrera plantea la necesidad de que se dicte una Ley especial que permita y reglamente la entrega del 50 por ciento de las prestaciones que corresponden a los obreros con motivo de la nacionalización de la industria. Expresa Machado que esto mismo lo ha expuesto la mencionada comisión ante el ministro del Trabajo.

Noviembre 20

El doctor Valentín Hernández, Ministro de Minas e Hidrocarburos, declara que el gobierno ha conducido con "absoluto respeto y acatamiento" el proceso de nacionalización. Manifiesta además que las negociaciones hechas con las empresas concesionarias se han ajustado en todo momento a la defensa de los intereses nacionales, y al respecto no existe nada oculto ni malicioso.

El ministro de Minas e Hidrocarburos declara que los contratos de asistencia tecnológica que está en proceso de negociación con las distintas firmas petroleras que aún operan en el país, no serán onerosos para la industria nacionalizada, porque el margen de compensación que recibirán las empresas respectivas estará en un máximo de un 1,7 por ciento del valor de la producción

petrolera obtenido en 1976 y años siguientes. Afirma que dentro de las condiciones que se han establecido se ha logrado que cada una de las empresas que prestan asistencia tecnológica envíen cinco técnicos de alto nivel para que asesoren tanto en el diseño como en el funcionamiento y adiestramiento. Anuncia que se está llegando a acuerdos importantes para manejar la comercialización internacional bajo la dirección y supervisión de PETROVEN. Esta empresa se reservará una cantidad de petróleo para venderla directamente. Señala además que en términos absolutos el costo de la asistencia para 1976 posiblemente no sobrepase los 700 millones de bolívares.

Noviembre 21

El presidente de Petróleos de Venezuela (PETROVEN), general (r) Rafael Alfonzo Ravard, en discurso pronunciado en la Asociación de Relaciones Públicas de Venezuela, señala que la nacionalización petrolera tiene como función mantener en niveles satisfactorios el ingreso petrolero. Asegura, entre otras cosas, que los empleados y técnicos extranjeros seguirán actuando en la industria nacionalizada mediante acuerdos y contratos de asistencia técnica que se firmarán oportunamente con las antiguas concesionarias y con las compañías de servicio que aquéllas creen. La transferencia tecnológica es posible en Venezuela porque los técnicos venezolanos están en capacidad de recibirla y administrarla. En su opinión, los mercados tradicionales son un valioso activo que es necesario cuidar, sin que se descuide la diversificación y búsqueda de nuevos clientes. Agrega que a través de las relaciones públicas desean mantener la imagen de confiabilidad del personal que trabaja en la industria.

En asamblea del partido Acción Democrática, Carlos Canache Mata señala que todos los partidos políticos participarán el 1º de enero en la proclamación de la nacionalización petrolera. Considera que AD ha tenido el "coraje" de realizar en 1974 y 1975 lo que el gobierno de Copei no hizo en 1973 cuando ya estaban dadas las condiciones nacionales e internacionales para transferir la responsabilidad del negocio petrolero de manos de las transnacionales al Estado venezolano.

Noviembre 22

En el Seminario de la City de Londres realizado en el Banco Central, el ministro encargado de Hacienda, doctor Iván Pulido Mora, expone los efectos que con la actividad petrolera venezolana van a producirse en el primer año de la nacionalización. Señala el alto funcionario que se prevé que para 1976 las exportaciones petroleras, valoradas a precios fiscales, se sitúen aproximadamente en 9.500 millones de dólares. Este monto se logrará a pesar de que los

valores medios de exportación de los hidrocarburos se estima que estarán en un 8 por ciento por encima de los que han regido para 1975, y que, por otra parte, las exportaciones serán inferiores en un 10 por ciento al volumen exportado en el año 1975. Observa asimismo que esa reducción de las exportaciones —diez por ciento— es la meta que permitirá armonizar esa variable con los menores niveles de producción programados para el año 1976, lo cual obedece a la política conservacionista del gobierno en materia de recursos naturales no renovables.

Los señores Martín Essenfeld, Rafael M. Guevara y Alfredo Essis, de la firma Essenfeld y Guevara Consultores, C. A., que hiciera el estudio sobre la comercialidad del Bloque "E" que explota la empresa Occidental Petroleum bajo la modalidad de contratos de servicio, declaran que, por haberse ordenado inicialmente la CVP una investigación sobre parámetros incorrectos, aquella firma estimó la no comercialidad del mencionado Bloque. Luego se les pidió un nuevo estudio basado en otros parámetros de donde aquélla resultó positiva. Afirman que emitirán una declaración técnica para informar de esa manera todo lo que al respecto sea necesario.

Según declara el doctor Rubén Sáder Pérez, el ministerio de Minas no tiene facultades para hacer oferta de indemnización a la Occidental Petroleum. Señala que, como ésta es concesionaria y su relación contractual con CVP debe concluir por vía del juicio expropitario exigido en el artículo 25 de la Ley de Nacionalización, cualquier promesa de indemnización, en conversaciones interrumpidas por instrucción del presidente de la República, estaría fuera del marco de legalidad administrativo y había que tenerla por nula. Dice Sáder Pérez que el ministro de Minas no tiene legitimidad para actuar en nombre de la CVP y cita el artículo 16 de los estatutos de la empresa.

El diputado Celestino Armas (AD), presidente encargado de la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, anuncia que las actas de avenimiento para el pago de indemnizaciones que el Estado debe hacer a las empresas petroleras comenzarán a discutirse en el Congreso Nacional el día miércoles 26 de noviembre.

La junta ejecutiva de la CVP ratifica su solidaridad con la decisión de comercialidad en el Bloque "E" de los contratos de servicios, lo cual implica el pago de indemnización a la Occidental Petroleum. Expresa la convicción de que los técnicos y directivos de la CVP y del ministerio de Minas, así como

representantes del Congreso y del Consejo Nacional de Energía, intervinieron en el proceso de elaboración de las bases de contratación, y lo hicieron con idoneidad y responsabilidad.

Noviembre 25

El ministro de Minas e Hidrocarburos afirma que como resultado de la nacionalización petrolera se crea el Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo. El mencionado instituto debe formar en 10 años unos mil profesionales en investigación y tecnologías petroleras.

La Corte Suprema de Justicia no admite una demanda contra la Superior Oil Company, la cual habría incurrido en acciones de tipo comercial en perjuicio de la nación venezolana. La decisión de la Corte Suprema tiene como ponente al doctor Martín Pérez Guevara, presidente del supremo tribunal. La demanda fue presentada por Américo Martín, Rómulo Henríquez y Moisés Moleiro, quienes pedirán la nulidad de la cesión hecha por la Superior Oil Company a la Texaco de las acciones emitidas y en circulación, así como de los activos y pasivos que poseía la Superior.

Noviembre 26

Nelson González Almarza, presidente de Fenegas, denuncia una serie de irregularidades por parte del Ministerio de Minas y las empresas petroleras contra los propietarios de las estaciones de servicio. Señala que se les ha informado que el motivo de haber paralizado el control del mercado interno por la CVP es el de crear nuevamente una competencia entre otras marcas y colores. Agrega además que las petroleras no cumplen órdenes del presidente Pérez de vender las estaciones de servicio a expendedores. Sólo lo hacen la CVP y la Shell. La Mobil señala que eso es propiedad privada y, por tanto, hará lo que más le convenga.

Las áreas geográficas que actualmente son concesiones fueron asignadas a las empresas petroleras nacionalizadas, como resultado de la evaluación realizada por técnicos del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Las nuevas áreas son asignadas por PETROVEN. Por su parte, la oficina de enlace que dirige el coronel José Rodríguez Subero se ocupa de todo lo relativo a vigilancia, control y supervisión de la contaminación, tarea encomendada a las FAC, a la vez que implementa la vigilancia de las instalaciones petroleras nacionalizadas. También se analizó en el Consejo Técnico de Hidrocarburos la programación de las inversiones de la industria nacionalizada a partir de 1976 hasta 1980. El Ministerio de la Defensa, por su parte, está elaborando los planes que pondrá en práctica

en cada una de las regiones petroleras del país a partir del 1º de enero de 1976, tanto en lo relativo al aspecto humano como al aspecto legal y material.

Noviembre 27

Anuncia el presidente de PETROVEN, general Rafael Alfonzo Ravard, que la casa matriz de la industria petrolera nacionalizada prepara un programa de coordinación de abastecimiento del mercado interno de combustibles y el mejoramiento en el servicio que ofrece a los consumidores, especialmente a través de las estaciones de servicio y bombas de gasolina. Estos planteamientos son hechos por el presidente de PETROVEN en una cena organizada por editores de medios impresos, donde además informa sobre la estructura organizativa de Petróleos de Venezuela. Señala igualmente la importancia del aspecto financiero de la industria nacionalizada, así como la conversión en sociedad mercantil de la CVP, la cual se incorporará al complejo operativo de la industria petrolera. En relación a los activos fijos de las concesionarias y su indemnización, el presidente de PETROVEN explica que el valor de la misma se calcula conforme el valor neto en libros de los activos menos el monto de las deducciones estipuladas en el artículo 15: un valor real que vendría dado por el valor bruto en libros de esos activos, y un valor de reposición de los precios actuales del mercado, de las propiedades, plantas y equipos de la industria petrolera. Advierte que, sin embargo, el activo más importante de la industria petrolera es su personal.

El ministro de Minas e Hidrocarburos declara en Miraflores que no se concederán nuevas áreas para la explotación de hidrocarburos sin que a las compañías que ahora pasan a ser subsidiarias de PETROVEN se les asignen las que anteriormente tenían las concesionarias.

Noviembre 28

El inspector técnico de Minas e Hidrocarburos, ingeniero Enrique Daboín, declara en Barcelona que se deberá establecer una drástica reducción de cien mil barriles diarios en la producción petrolera en el Estado Anzoátegui, entre el mes de noviembre y finales de diciembre de 1975, por reajuste de los volúmenes de almacenamiento, los cuales deberán descender a su más bajo nivel por razones de estrategia petrolera del Estado. Estas declaraciones las formula el funcionario de Minas durante el acto de recepción que ofrece la Mene Grande Oil Company a los directivos de PETROVEN. Advierte el declarante que el ministerio de Minas está por ordenar una baja en la producción, sin que se interrumpan de manera alguna los compromisos de entrega de crudos y refinados por parte de las empresas que van a operar las concesiones en ese Estado hasta el 31 de diciembre de 1975. Esta política de reducción en los almacenamientos

obedece a la circunstancia de que cuando expiren las concesiones deberá contabilizarse como activo de las concesionarias la cantidad de petróleo que existe en almacenamiento.

El doctor Julio César Arreaza, vicepresidente de PETROVEN, declara en el Estado Anzoátegui que la producción petrolera venezolana para 1976, de mantenerse en los niveles calculados inicialmente en 2.200.000 barriles diarios, no tendrá mayores problemas de comercialización en el exterior, y agrega que se está conversando con las compañías concesionarias y no hay inconvenientes para mantener una atmósfera de optimismo.

Concluye la firma de las actas de avenimiento entre la Procuraduría General de la República y las empresas concesionarias. La última de las actas es firmada con la Mobil. La única empresa que no se avino a la oferta de indemnización fue El Paso, en razón de que carece de representantes legales en el país e ignora las modalidades que caracterizan la Ley de Nacionalización. El Paso será demandada y debe contestar en un plazo no mayor de tres días. Si acepta el monto de la indemnización el procedimiento exploratorio se dará por concluido.

Noviembre 29

El señor Carlos Piñerúa, presidente de Fedepetrol, anuncia que los aspectos económicos, sociales y culturales prevalecerán como elementos primordiales en el nuevo contrato colectivo de la industria petrolera nacionalizada.

El señor Gustavo Cisneros, alto ejecutivo venezolano, declara que en el país no existe un capitalismo de la dimensión moderna y actualizada que reclama la presente coyuntura social. Estima, por otra parte, que al hablar de nacionalización de industrias básicas es necesario tomar en cuenta dos elementos: la producción y el mercadeo. Al asumir una mayor responsabilidad en el campo de la economía nacional, el Estado está asumiendo mayores riesgos. Lo importante es no mezclar el factor político o partidista con criterios que sólo deben ser los de una gestión impersonal.

Diciembre 1

El doctor Ricardo Corrie, miembro de la Comisión Supervisora de la industria petrolera nacionalizada, declara que aproximadamente el 90 por ciento de la producción petrolera venezolana tiene asegurado un mercado a precio fijo. Agrega que apenas un 10 por ciento se negocia en mercado libre y que está sujeto por tanto a los rigores de la oferta y la demanda. Sobre la Comisión señala que fue

incluida en la Ley como prevención y lo que básicamente ha hecho es autorizar cierto movimiento de personal gerencial. Han autorizado además las ventas ocasionales de crudo y productos llamados ventas *sport*. Asimismo, ha circulado oficio a las empresas concesionarias solicitando información sobre sus políticas en materia de formación de personal, estructura organizativa, prácticas de administración, políticas comerciales y relaciones entre concesionarias y sus casas matrices.

Anuncia en Puerto Ordaz el doctor Celestino Armas que la Comisión Bicameral de Minas e Hidrocarburos del Congreso ha iniciado el análisis de las principales actas de avenimiento de las empresas Creole y Shell, así como de otras concesionarias. Agrega que la Comisión Bicameral se entrevistará con la Comisión de Alto Nivel designada por la Presidencia de la República e integrada por el doctor Valentín Hernández, Julio César Arreaza y el Procurador General de la República. Declara que se efectuará un debate interno sobre la materia en la Comisión de Minas para que luego el Congreso en sesión conjunta de ambas cámaras se pronuncie sobre el avenimiento del Ejecutivo con las compañías petroleras.

Diciembre 2

Entre el ministro de Minas e Hidrocarburos y la Comisión Bicameral de Minas del Congreso surgen discrepancias en cuanto a los alcances de las actas de avenimiento suscritas entre el Estado y las empresas petroleras. Los problemas se presentan por el cuestionamiento al monto de 25 millones de bolívares que se les deducirá a las empresas por el crudo extraído fuera de los límites de sus concesiones. La cifra es considerada en medios parlamentarios muy por debajo de su volumen real. El diputado Ramón Tenorio Sifontes, de URD, señala que ello es como legalizar una impunidad fiscal o económica. El ministro dice, entre otras cosas, que el monto definitivo de las indemnizaciones será de 4.600 millones de bolívares, de los cuales se deducirán 2.400 millones que pasan al Fondo de Garantía. El doctor Godofredo González considera que no debe pagarse a las petroleras en dólares. El diputado Freddy Muñoz considera que las informaciones dadas por el ministro han sido incompletas e insatisfactorias, especialmente en lo referente a las deducciones que se hacen del monto de la indemnización de acuerdo a lo dispuesto en el literal *b* del artículo 15. Agrega Muñoz que según la CVP el monto a deducir debiera ser mucho mayor, lo cual indica que hay divergencias entre el ministerio y la empresa estatal.

Por decreto del Presidente de la República, de fecha 2 de septiembre de 1975, se convierte a la CVP en Sociedad Mercantil Anónima y con el nombre de

Corporación Venezolana del Petróleo. Las acciones de esa sociedad se asignan a Petróleos de Venezuela.

Diciembre 3

El gerente de la Mene Grande, ingeniero Francisco Guédez, declara que esa empresa está dispuesta a reconocer los daños que por contaminación petrolera se han registrado en el río Urupia y otras zonas del sur de Anzoátegui, en las cuales mantienen operaciones de producción. Pagará además bienhechurías y se designa para ello una comisión integrada por el IAN, Mene Grande y la Federación Campesina, con el objeto de hacer el avalúo en relación a las pérdidas. La empresa pagará los daños debidamente comprobados.

Diciembre 4

Afirma el doctor Godofredo González que en las actas de avenimiento presentadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional se contempla un "aguinaldo" de 100 millones de bolívares para las compañías petroleras. Ello se realiza cuando se calcula en 4,20 el precio de los dólares para la indemnización y no Bs. 4,30 por dólar como lo pagan todos los venezolanos. Considera que debe pagarse en bolívares, por cuanto se están emitiendo bonos para cancelar obligaciones que son consecuencia de un acto de soberanía de la nación. Señala que ésta va a pagar 4.350 millones de bolívares y si lo hace con el llamado cambio preferencial pierde 100 millones de bolívares.

La Cámara Venezolana de la Industria Petrolera ha sido declarada en estado de liquidación y sus principales directivos han notificado esta decisión a Fedecámaras a objeto de desafiliarla del organismo central. La determinación obedece al hecho de que, nacionalizada como ha sido la industria petrolera, no tiene sentido que la mencionada cámara exista, pues ésta representaba los intereses de la industria petrolera en tanto era ésta actividad de empresas privadas.

El licenciado Luis Alberto Lizardi, directivo de la Federación de Contadores Públicos, es recibido por senadores y diputados que estudian las actas de avenimiento con las petroleras. Señala que de pagarse sólo dos dólares por cada barril de petróleo que las compañías han sacado de las áreas marginales, más allá de sus concesiones, tendrían que cancelarle a Venezuela 1.000 millones de bolívares. Si se le pagan 4 dólares por barril tendrían que dar a la nación 2.000 millones de bolívares. Así por indemnización sólo se pagarían 2.000 millones de los 4.319 millones previstos.

En un documento presentado al Congreso Nacional a través de la Cámara del Senado, la Asociación Pro Venezuela plantea la necesidad de que las compañías petroleras paguen a la nación los daños causados a la naturaleza, especialmente por los derrames petroleros y entre éstos cita los ocasionados al Lago de Maracaibo. El doctor Reinaldo Cervini, quien explica el sentido de los planteamientos contenidos en el documento, señala que esos daños deben ser estimados en su justo monto a los fines de compensación en el momento que se decida el pago de indemnizaciones a las empresas concesionarias. Basa sus argumentos en la legislación venezolana (Constitución, Código Civil y Ley de Hidrocarburos), propone la creación de una Comisión Especial *ad hoc* que realice una investigación exhaustiva de acuerdo con los artículos 160 y 161 de la Constitución, y agrega que deben tomarse medidas preventivas que garanticen el efectivo resarcimiento de los perjuicios causados a la nación.

Diciembre 5

Según análisis del Banco Nacional de Descuento, la industria petrolera nacionalizada tendrá serias dificultades a partir de enero de 1976, cuando el Estado asuma el control, dirección y manejo directo de la actividad petrolera, por la falta de disponibilidad de personal técnico, a nivel medio y superior, para las exigencias inmediatas y mediatas de la industria ya nacionalizada. De acuerdo a las estimaciones de FONINVES, las necesidades de técnicos serán de 3.800 profesionales y la oferta nacional disponible para 1976 será de sólo 800; el problema será mayor si a ello se agrega el hecho de que no será fácil para la industria nacionalizada resistir con éxito las presiones —y las tentaciones— políticas para incorporar nuevos empleados y obreros. Asimismo, se advierte en el análisis del BND que por lo general no se enfoca adecuadamente el problema fundamental que puede crear dificultades a la industria petrolera venezolana y se plantean situaciones de orden financiero, por ejemplo, una posible disminución de las ventas por la competencia o una declinación de la productividad con consecuencias directas en el volumen de ingresos. Pero no sólo están ahí las verdaderas dificultades, sino en la necesidad de cambiar los patrones de refinación y en la demanda de recursos humanos a mediano plazo.

Informa el dirigente sindical Manuel Peñalver que en el mes de abril de 1976 le será presentado a PETROVEN el proyecto de contrato colectivo de la industria petrolera, ya que el vigente vence en julio de 1975. Señala además que el proyecto de contrato contempla: un plan de vivienda, colonias vacacionales para los trabajadores petroleros, plan de jubilaciones, establecimiento de cooperativas de consumo. Finalmente advierte el declarante que los 23 mil trabajadores de las 18 compañías existentes se reducirán a 14 mil.

El doctor Andrés Sosa Pietri, senador por el MAS, señala que las actas convenio, 38 en total, van al Congreso a llenar una formalidad porque a los parlamentarios no se les ofrece toda la información —salvo la que piden—, y agrega que serán aprobadas tal como llegaron del Ministerio de Minas. Considera que el Ejecutivo ha sido demasiado benigno a la hora de hacer las cuentas con respecto a los petróleos extraídos fuera de las áreas de concesiones.

El ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, responde las declaraciones del doctor Godofredo González, presidente encargado de Copei, y señala que con el sistema de cálculo de la tasa cambiaria para valorar las inversiones petroleras, el "aguinaldo" a las compañías de que habla el doctor González es más bien para la nación en un monto de 115 millones de dólares. La apreciación del presidente de Copei se debe a la adopción de la tasa de cambio de Bs. 4,20 por dólar a efectos del pago de las indemnizaciones previstas en la Ley de Nacionalización Petrolera. Agrega Hurtado que haciendo los diferentes cálculos por cada una de las tasas de cambio vigentes y para cada período, resulta que la nación tendría que pagar a las empresas una cantidad aproximada a los 1.031 millones de dólares. Esta cifra, comparada con la que resulta de convertir el valor neto de la inversión a Bs. 4,20 por dólar, o sea, 916 millones de dólares, arroja a favor del Fisco una diferencia de 115 millones de dólares.

Diciembre 6

Venezuela, según se explica en *Petroleum Intelligence Weekly,* pagará un precio promedio de 20 centavos de dólar por barril de petróleo a las compañías extranjeras bajo los convenios de tecnología una vez que la industria pase a manos del Estado. Para los acuerdos de tecnología se incluye el pago de una tarifa estipulada por el gobierno para cada barril de petróleo producido. Dice la revista que hasta la fecha los convenios por "servicios técnicos" y sus tarifas han sido concluidos con la Creole y la Shell; las demás compañías productoras aún no han aceptado y las negociaciones continúan. Las tarifas ofrecidas por Venezuela a las empresas por cada barril de petróleo oscilan entre un máximo de 15 centavos y un mínimo de 8. No es posible calcular la tarifa promedio real por compañía hasta que no se estimen los niveles de refinación y producción.

Diciembre 8

El Presidente de la República se dirige a las guarniciones militares de Zulia y Falcón en su alocución de fin de año, desde el Cuartel Libertador, sede de la Segunda División de Infantería. Entre otras cosas expresa que la decisión de nacionalizar la industria petrolera es voluntad de la nación, y con esa decisión Ve-

nezuela desafía tradiciones y poderes económicos que han venido manipulando y conduciendo la economía del mundo. Al propio tiempo es un reto a la capacidad de los venezolanos para asumir la tarea que compromete de manera tan "honda e integral el destino de nuestro país". Añade en su discurso el Presidente Pérez que no debemos ocultarle a la nación, y dentro de ella a las Fuerzas Armadas, que ese paso transcendental conlleva riesgos y peligros.

El Presidente de la República, al responder a la pregunta de si el gobierno teme a represalias cuando se inicie el proceso de nacionalización de la industria petrolera en enero de 1976, señala que "el gobierno no tiene por qué temer absolutamente nada, cuando todo lo está haciendo dentro de las normas del derecho, pero desde luego está preparado para todo".

El doctor Carlos Guillermo Rangel, directivo de PETROVEN, afirma que la industria petrolera mantendrá los mismos niveles de eficiencia de las actuales concesionarias, las mismas prestaciones e igual calificación técnica. Declara que las tareas emprendidas por los directivos de PETROVEN han sido eficientes en cuanto a diseños para el control en la producción, refinación y mercadeo del crudo.

Con la mayoría de los votos de Acción Democrática y el voto negativo de todos los partidos de oposición, se aprueban en la Comisión Bicameral de Minas las actas de avenimiento para el pago de indemnización a las compañías petroleras. Arturo Hernández Grisanti defiende la posición de AD, mientras los que intervienen en nombre de los partidos de oposición coinciden en señalar que se han debido hacer mayores deducciones.

Diciembre 9

En un mensaje dirigido a la nación venezolana con motivo del octavo aniversario de la fundación del Movimiento Electoral del Pueblo MEP, esta agrupación política señala que "la utilidad diaria de las empresas transnacionales ascenderá a 500 mil dólares que serán pagados por el Estado venezolano por concepto de tecnología y comercialización del petróleo nacionalizado". El mensaje del MEP fue entregado a la prensa por los doctores Prieto Figueroa y Paz Galarraga, presidente y secretario general respectivamente de esa agrupación política. Anuncian que el MEP se opondrá en el Congreso Nacional a la aprobación de las actas de avenimiento suscritas por el gobierno nacional y las concesionarias de la industria petrolera, pues en el monto de las indemnizaciones no se han tomado en cuenta las deducciones por concepto del petróleo drenado irregular-

mente por las transnacionales de las áreas correspondientes a la CVP y a la nación. La cantidad de petróleo drenado que reconocen las compañías va a ser pagado a 70 centavos de dólar por barril, y el Estado va a pagar por los campos marginales, los cuales según la Ley de Reversión deben pasar a la nación sin indemnización alguna. Tampoco se descuentan los daños ocasionados por las compañías en el Lago de Maracaibo y en la atmósfera.

Diciembre 10

Se inicia en las Cámaras del Congreso el debate sobre las actas convenio. Interviene el doctor Arturo Hernández Grisanti, de AD, quien luego de hacer consideraciones sobre el pago a las petroleras, señala que ese partido las apoyará tal como las presentó el Ejecutivo. El doctor Godofredo González, de Copei, explica las razones fundamentales de por qué ese partido se abstendrá de aprobar esas actas. Su intervención gira en torno al petróleo extraído de yacimientos unificados.

El ministro de Fomento, José Ignacio Casal, considera inapropiado decir que la inversión extranjera crea formas de colonialismo político y económico. Señala que esa inversión será más beneficiosa para el país que la recibe, en tanto más racional y equilibrada sea la fusión con el capital nacional. Establece diferenciaciones entre la inversión extranjera realizada en países desarrollados y subdesarrollados. Agrega que ahora, cuando numerosos países socialistas han aceptado inversiones extranjeras, resulta fuera de lugar la calificación de "inversión colonizadora".

El semanario estadounidense *Petroleum Intelligence Weekly* señala que el gobierno venezolano ha comenzado las negociaciones con compañías extranjeras sobre precios de venta del petróleo nacionalizado. El semanario dice que, a juzgar por las propuestas de precios, la mayor parte de las compañías responderán probablemente con contraofertas de 20 centavos a un dólar por barril o más por debajo de los niveles de precios del gobierno. Agrega que según el gobierno sus propuestas están definidas y no cederán en materia de precios. Estos van desde unos 9,50 dólares por barril de crudos pesados hasta entre 11 y 12,50 dólares por crudos de gravedad mediana y unos 13 dólares por crudos más livianos de alta gravedad.

El Presidente de la República asiste a la base aérea "Mariscal Sucre" para la salutación de navidad y año nuevo a las Fuerzas Armadas de Maracay y Valencia. En su discurso hace consideraciones sobre las nacionalizaciones del hie-

rro y el petróleo. Señala que esta última obedece fundamentalmente a una decisión de soberanía económica. Una industria tan importante controlada por intereses extranjeros, siempre conlleva el peligro de mediatización de la soberanía. Manifiesta que a las Fuerzas Armadas no sólo les corresponde garantizarla, sino que también deben inclinarse a compartir más las responsabilidades en las tareas del desarrollo nacional.

El ministro para la Planificación, doctor Gumersindo Rodríguez, declara que el gobierno ha completado el trazado de los objetivos y estrategias básicas para el ejercicio del control directo y del manejo integral de la industria petrolera por parte del Estado a partir del 1º de enero de 1976 cuando se inicia también la vigencia del V Plan de la Nación. Habrá un incremento de la eficiencia operativa, defensa de los precios, utilización del gas en la industria petroquímica y conservación física de los yacimientos.

Diciembre 11

El Secretario General del MAS, senador Pompeyo Márquez, al comentar las declaraciones del Presidente de la República en el sentido de que "se le ha dejado solo en la decisión política de nacionalizar la industria petrolera", dice que aquél no tiene razón. Los socialistas estuvieron en contra de las empresas mixtas y ahora manifiestan su total desacuerdo con el monto de la indemnización que la comisión negociadora estableció con las concesionarias, pues el gobierno y el partido AD han desestimado las opiniones de calificados técnicos de la CVP y de otras áreas de la industria. Dice que los socialistas igualmente están en contra de la negociación global que incluye tanto el monto de la indemnización como los contratos de suministros y de asistencia tecnológica. En este sentido hay razones expuestas por numerosos técnicos señalando que no es necesario firmar contratos de asistencia tecnológica en exploración y explotación, pues Venezuela tiene suficiente experiencia en estas esferas de la actividad petrolera. Finalmente expresa Pompeyo Márquez que el Presidente de la República podría no sentirse solo en la decisión política de nacionalizar la industria si la misma no tuviese las mediatizaciones ya señaladas, y manifiesta su temor por la ubicación que se le dé a los ingresos petroleros dentro de la concepción despilfarradora que orienta el gasto público.

Según declaraciones de los Secretarios Generales de los Partidos MEP y MAS, Jesús Angel Paz Galarraga y Pompeyo Márquez respectivamente, es el propio Presidente de la República el culpable de que la oposición no acompañe al gobierno en su política de nacionalización petrolera, por las mediatizaciones del proceso que benefician a las empresas transnacionales.

El ministro de Minas, doctor Valentín Hernández, afirma que Venezuela no alterará los niveles vigentes de precios del petróleo como consecuencia de las negociaciones que finalmente se realicen con algunas compañías a los efectos de la comercialización internacional del crudo y los derivados. Así que las respuestas que las empresas den al gobierno se referirán sólo a volúmenes y no a precios.

En el debate parlamentario sobre la indemnización a las compañías petroleras, interviene Freddy Muñoz, diputado del MAS, y afirma que lo que sucede con las actas convenios y las negociaciones que hace el gobierno con las petroleras es una muestra de lo que ocurrirá en el país. Señala que aun cuando el MAS estuvo de acuerdo con el pago a las concesionarias, aspiraba que fuese una indemnización justa y no caprichosa como la que se ha estimado. Siuberto Martínez, del MEP, indica que esta es una nacionalización donde las petroleras seguirán ganando 500 mil dólares diarios. Dice que no se debe ser tan generoso al punto de que se estime en 207 millones los barriles que deben las petroleras a la CVP y que sólo se haga una deducción de 43 millones. Américo Martín, del MIR, afirma que el gobierno ha hecho suyo el criterio de la Cámara de la Industria del Petróleo que representa a las empresas transnacionales. Alcides Rodríguez, del PCV, señala que las actas son expresión de la política de conciliación del partido AD y del gobierno.

El doctor Félix Rossi Guerrero, ministro Consejero en Asuntos Petroleros de la Embajada de Venezuela en Washington, declara que en Estados Unidos han tomado en forma constructiva y realista la nacionalización petrolera venezolana. Agrega que para ese país es cuestión fundamental garantizarse el abastecimiento estable y seguro de una fuente tan importante como la de Venezuela.

Diciembre 12

Los doctores Manuel Simón Egaña, Florencio Contreras Quintero y Francisco Alvarez Peraza, cuestionan desde un punto de vista técnico el artículo 15 de la Ley de Nacionalización Petrolera referido a las deducciones aplicables a la indemnización de las concesionarias a causa del petróleo extraído fuera de sus concesiones. Consideran que la norma rechaza toda interpretación gramatical, pues conduce a lo absurdo y a lo injusto. En opinión de ellos, el problema presenta un doble carácter: uno técnico en lo que respecta a los conceptos de petróleo extraído en determinados sitios, de acuerdo o no con ciertos volúmenes, y otro jurídico, como todo proceso de interpretación para aplicar una norma de esa índole. Estiman por ello que para su razonable y justa solución se requiere el concurso de técnicos y juristas de la industria.

En la sesión del Congreso Nacional donde se debate el informe sobre las actas de avenimiento con las compañías petroleras presentado por la Comisión Bicameral de Minas e Hidrocarburos, interviene Freddy Muñoz, diputado del MAS, quien hace un balance técnico y político de la contradictoria actuación del gobierno representado ante la Comisión Bicameral por Arturo Hernández Grisanti y el ministro de Minas e Hidrocarburos, y de las causas que guían a AD a obviar la sólida argumentación de la CVP, optando en cambio por criterios francamente perjudiciales para la nación. Luego denuncia el parlamentario del MAS que el gobierno ha hecho una interpretación débil y timorata de la Ley de Nacionalización en perjuicio del país, añadiendo que si su partido estuvo de acuerdo con el pago de indemnización a las concesionarias por considerarlo lo menos inconveniente, eso no implica que se desentienda en absoluto del monto. Después de hacer consideraciones en torno a las estimaciones hechas por la CVP, que por lo demás fueron desechadas por el gobierno, concluye el diputado del MAS señalando que su fracción votará en contra de las actas de avenimiento por las razones ya expuestas.

El ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, declara que el gobierno redujo la estimación de ingresos petroleros para 1976 en 1.323 millones de bolívares, en vista de la tendencia declinante en el mercado petrolero internacional. La producción se calcula por debajo de los dos millones de barriles diarios. Los ingresos petroleros fueron estimados en 24.613 millones de bolívares en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 1976, pero según estimación actualizada se calculan en 23.290 millones de bolívares.

El general (r) Rafael Alfonzo Ravard, presidente de PETROVEN, declara que surgirán posibles dificultades por el problema mundial del mercado que está creando la recesión económica en Europa, pero la industria nacionalizada estará en condiciones de enfrentar con éxito esas dificultades. Señala que los técnicos extranjeros con los cuales hoy se cuenta han manifestado su deseo de quedarse en el país. Esto lo considera como gran aporte para consolidar las decisiones que está adoptando Venezuela en materia petrolera.

El Presidente de la República, en alocución de fin de año que dirige a la oficialidad de las guarniciones de Oriente, elogia la nacionalización petrolera considerándola como el hecho de mayor trascendencia histórica después de la independencia, por cuanto significa el inicio de la "liberación económica". Agrega que la nacionalización no se hace contra nadie. "No se quieren cobrar ofensas, no que-

remos vengar hechos del pasado". Dice que sólo se pretende asumir plenamente la "conducción de nuestro propio destino". Señala asimismo que el país tendrá que alejarse del despilfarro petrolero.

Diciembre 13

El ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, convoca por primera vez en 15 años al Consejo Técnico de Hidrocarburos para que se encargue de elaborar un documento con el cual se responderán los planteamientos hechos por un grupo de ingenieros petroleros zulianos y por la Federación de Colegios de Contadores Públicos con respecto al supuesto drenaje de petróleo mediante la unificación de pozos. Dice que se han formulado críticas en torno a volúmenes de petróleo considerados en la deducción de acuerdo al artículo 15º, literal *b* de la Ley de Nacionalización. Los técnicos zulianos sostienen que no son 37 millones de barriles lo extraído de yacimientos unificados, sino 207 millones. Similares observaciones hace la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

El ministro de Minas anuncia la creación inmediata del Instituto Tecnológico del Petróleo. Estará ubicado al lado de la Universidad Simón Bolívar. Su primera etapa estará lista en 1980 y la segunda en 1985. Al final de ésta habrá más de 1.000 científicos y profesionales trabajando en el mismo. El organismo se dedicará a la investigación científica y a la experimentación tecnológica. No tendrá carácter docente y, por tanto, no será para la formación de científicos y técnicos.

Se informa en la Dirección Técnica de Hidrocarburos, cuyo jefe es el doctor Arévalo Guzmán Reyes, que la tasa de producción petrolera del año 1976 dependerá de lo que se defina a través de los convenios de comercialización que actualmente se discuten. El programa de inversiones para las empresas operadoras nacionalizadas se estima en 1.300 millones de bolívares. Esta suma contempla lo necesario para mantener una producción de 2 millones 200 mil barriles diarios, la perforación de más de 370 pozos, de los cuales aproximadamente 70 serán pozos en nuevas áreas; se impulsará la recuperación secundaria de crudo con una inversión de más de 240 millones de bolívares.

El Pleno Sindical Nacional Petrolero de Acción Democrática acuerda su total respaldo a la nacionalización petrolera. Proclama que ese hecho constituye la liquidación de la etapa de la mediatización económica. Al evento asiste el

presidente de la Comisión de Minas de la Cámara de Diputados, doctor Arturo Hernández Grisanti, quien hace una exposición sobre la nacionalización petrolera.

Diciembre 14

En consulta que hiciera el ministro de Minas e Hidrocarburos a los doctores José Antonio Mayobre, Edgar Pardo Stolk y Carlos Sosa Rodríguez sobre el aparte *b* del artículo 15 de la Ley de Nacionalización, ellos consideran que la deducción aplicable a la indemnización por concepto de la parte que corresponde al Estado a causa del petróleo extraído de yacimientos unificados situados en áreas colindantes con concesiones, sólo podrá ser estimada para la fecha en que extinguen las concesiones y no dentro de los 45 días después de promulgada la Ley.

El doctor Alvaro Silva Calderón, experto petrolero del MEP, califica la nacionalización petrolera de "negociada" y no el producto de un acto unilateral de soberanía. Hace particular referencia a la interpretación que se ha dado al aparte *b* del artículo 15 de la Ley de Nacionalización Petrolera. Señala que en las actas de avenimiento se olvidan de más de 130 millones de barriles de petróleo drenado por las compañías de las reservas nacionales, y de las facultades que la Ley otorga al Ejecutivo Nacional para determinar las cantidades de petróleo sustraído a la nación, aunque no se hubieran firmado convenios de "unificación". Manifiesta que por esto posiblemente se "echó mano" a la llamada teoría de "factor de recobro", que el gobierno tratara de llevar al texto de la Ley pero que afortunadamente llegó tarde al Congreso, y según la cual las concesionarias no han sacado petróleo en exceso del que les corresponde, tesis absurda cuya admisión puede traer graves consecuencias a la nación. Afirma el doctor Silva Calderón que el gobierno, en busca del avenimiento, menosprecia los campos marginales o antieconómicos, tan mencionados antes de la Ley de Nacionalización, y se olvida de los bienes desafectados de las concesiones, los cuales, según la Ley de Reversión, deben ingresar al patrimonio del Estado sin pago de indemnización y ser descontados de la compensación ofrecida a las empresas.

El historiador británico Hugh Thomas declara sobre la nacionalización petrolera en Venezuela y dice no creer que la misma pueda cambiar mucho la situación existente, ya que se trata de una extensión de la política iniciada después del gobierno de Rómulo Betancourt. Considera que Venezuela se beneficia al asumir el control de su recurso más importante, pero ello no va a significar un cambio estructural.

Diciembre 16

El Embajador de la República Dominicana en Caracas, doctor Pedro L. Padilla Jones, anuncia que la República Dominicana comprará a Venezuela todo el petróleo que requiere, cuyo valor asciende a 180 millones de bolívares anuales.

Se informa que los elementos para el desarrollo de la industria petrolera nacionalizada son contemplados en el V Plan de la Nación. Ellos son: mantener una producción de 2,2 millones de barriles diarios como volumen inalterable; ampliar la actividad exploratoria mediante la perforación de 1.500 nuevos pozos y un volumen de inversiones en activos fijos en el orden de los 13.800 millones de bolívares entre 1976 y 1980. Se proyecta un programa de desarrollo que estima inicialmente una producción de 100 a 150 mil barriles diarios en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El Congreso de la República aprueba las actas de avenimiento firmadas entre el Ejecutivo Nacional, representado por el Procurador General de la República, y las empresas petroleras, por un monto de Bs. 4.237.835.604, según el informe presentado por la Comisión Bicameral de Finanzas. Son aprobadas con los votos de AD y la Cruzada Cívica Nacionalista, mientras que Copei, URD, MAS, MIR, MEP, FDP y OPINA salvan su voto.

Diciembre 17

El doctor José Muci Abraham, Contralor General de la República, anuncia que la Contraloría establecerá una Oficina de Unidad Permanente de Fiscalización en PETROVEN, a través de la cual el Contralor estará informado de las actividades de esa empresa matriz. Agrega que no se prevé fiscalizar las compañías operativas porque se quiere respetar la idea de que la industria petrolera funcione como lo hacía anteriormente. Indica que el organismo contralor cumplirá un papel de control, vigilancia y fiscalización frente a la industria nacionalizada.

El doctor Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos, señala que las ofertas hechas de manera voluntaria por las compañías petroleras al gobierno para la adquisición de petróleo crudo y productos refinados alcanza originalmente a 2.340 millones de barriles diarios. Pero el gobierno considerará ofertas sólo hasta por 2 millones de barriles. Las ofertas mayores que se han recibido corresponden a la Shell y la Creole. Esta propone comprar hasta 900.000 barriles diarios y la Shell hasta 500.000.

Según afirma el titular de Minas, doctor Valentín Hernández, Venezuela venderá su petróleo nacionalizado en base a las orientaciones de la OPEP. Agrega que se analizan las ofertas de las compañías y se están comparando con los precios ya fijados. Por otra parte, señala que el Instituto Tecnológico del Petróleo no está previsto para la formación profesional, sino que a él vendrán individualidades calificadas que estudiarán los problemas de tecnología que se presenten a la industria nacionalizada.

Diciembre 18

Queda constituida Lagovén, la mayor de las nuevas empresas nacionalizadas. Se crea como subsidiaria de la Creole hasta el 31 de diciembre, cuando todas las acciones pasan a PETROVEN. Presidente de Lagovén es el doctor Guillermo Rodríguez Eraso, quien antes desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Creole; Vicepresidente, el doctor Ernesto Sugar, y como directores Nicanor García, J. A. Tarbes Llanos y Renato Urdaneta.

El presidente de Fedepetrol, señor Carlos Piñerúa, declara que los trabajadores están dispuestos a defender la nacionalización de las amenazas de la oligarquía y del imperialismo, en unión con los demás países de la OPEP y todos los del Tercer Mundo. Por otra parte, señala que los trabajadores aspiran la entrega hasta de un 50 por ciento de las prestaciones que les corresponden, así como la fijación de la fecha en que puedan hacer uso de las mismas. Anuncia asimismo que el proyecto de nueva contratación será presentado a las compañías operadoras el 20 de abril de 1976.

El ministro de Minas ratifica que las ventas de petróleo dentro de la industria nacionalizada serán inferiores a la producción estimada para 1975. Explica que las petroleras hicieron ofertas globales por 2.360.000 barriles diarios condicionadas a que la nación venezolana hiciera ajustes de precios, pero el país no acepta tal proposición por respetar los acuerdos tomados en tal sentido por la OPEP.

Diciembre 19

Informa el doctor Humberto Calderón Berti, Director de Reversión, que el Ministerio de Minas ha perfeccionado la creación de un dispositivo humano integrado por técnicos de alta calidad para recibir el 31 de diciembre los bienes de las compañías petroleras. Su misión será la de identificar, inspeccionar y calificar cada uno de los elementos constitutivos de las propiedades, plantas y equipos

que han sido nacionalizados. Las compañías dejan en el Banco Central la cantidad de 2.400 millones de bolívares en Fondo de Garantía, para avalar el buen estado de los bienes. Si todo está en buenas condiciones se la devolverán al cabo de tres años.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, saluda las nacionalizaciones del hierro y del petróleo en Venezuela. Señala que cualesquiera sean las limitaciones que tengan, es un hecho que marca un rumbo distinto en la política venezolana sometida durante tantos años al predominio de los consorcios petroleros.

Diciembre 20

El Comité Ejecutivo de Fedepetrol se reúne para decidir la forma en que participará en los actos del 1º de enero en el Zumaque Uno. La información es suministrada por su presidente Carlos Piñerúa. Señala éste que aun cuando la nacionalización aprobada sea "chucuta", Fedepetrol le da su respaldo y espera que en el curso de su desarrollo se profundice y llegue a ser como la programó la Comisión de Reversión.

Diciembre 21

El Presidente del Senado, doctor Gonzalo Barrios, al clausurar las sesiones de las Cámaras durante el año 1975, señala que tanto la decisión nacionalizadora como la manera en que se legisló para determinar el pago de indemnizaciones, no han sido bien vistas en el extranjero por parte de los intereses que giran en torno a las compañías transnacionales. Dice tener la seguridad de que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento estarán unidas en defensa del interés nacional. El doctor Oswaldo Alvarez Paz, presidente de la Cámara de Diputados, advierte que el triunfo o el fracaso de la nacionalización no será solamente de un partido o de un gobierno y hace un llamado para un acuerdo nacional a fin de que el país pueda aprovechar todos sus talentos.

El Presidente de la República, ante las comisiones de ambas Cámaras que acuden a Miraflores a participar que concluye el período de sesiones del Congreso, señala que 1976 será un año muy difícil, "tal vez uno de los más difíciles de la historia venezolana". Afirma que las negociaciones para lograr la nacionalización petrolera no han sido fáciles, pero se ha negociado para dar el ejemplo de que sí es posible nacionalizar sin llegar a la confrontación. Indica que las negociaciones han chocado con la posición de los gobiernos que en alguna forma responden a los intereses de las transnacionales y no aceptan la decisión de Ve-

nezuela de indemnizar exclusivamente el valor en libros de los activos no depreciados. Advierte que se requiere de apoyos incondicionales para actuar frente a las dificultades que se avecinan.

Diciembre 22

El senador Virgilio Tosta, en el acto de participación al Presidente de la República de haber concluido las sesiones ordinarias del Congreso, expresa que es un deber de todos los venezolanos mantener la nacionalización. Agrega que es indispensable el apoyo irrestricto de todas las instituciones para el buen éxito de aquélla.

El doctor Celestino Armas, diputado de AD, interviene como comisionado de la Cámara Baja para participar al Jefe del Estado la conclusión del período de sesiones del Congreso en el presente año. Al hacer un recuento del trabajo parlamentario señala que la nacionalización petrolera y el instrumento legal correspondiente se han elaborado ideando procedimientos ajustados a nuestra realidad. Agrega que la nacionalización y su instrumento legal están en armonía con preceptos jurídicos internacionales, sin crear "traumas" a la economía y sin perturbar las relaciones con otros países. En su opinión, toda acción futura debe estar enmarcada dentro de la nueva política energética que el país debe instrumentar.

La declaración del Rector de la Universidad del Zulia, doctor Régulo Pachano Añez, de que aspira que ésta sea la sede del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo que el Ministerio de Minas ha anunciado que instalará en el centro del país, es reiterada por el Decano de la Facultad de Ingeniería, doctor José Ferrer; el Director de la Escuela de Petróleo, doctor José Colina; el Director de la Escuela de Geodesia, doctor Rafael Avila; el del Instituto de Investigaciones Petroleras, doctor Rolando López, y los propios estudiantes. Consideran que es más conveniente que funcione en el Zulia, ya que el mayor porcentaje de la producción se realiza allí, y en ese estado se localizan la mayoría de las instalaciones y gran parte del personal técnico. Estiman los estudiantes de LUZ que es injusto que se vaya a crear un organismo con un presupuesto de 1.300 millones de bolívares mientras el Instituto de Investigaciones de esa Universidad se le mantenga con un escaso presupuesto.

El doctor José Rafael Domínguez presenta un informe a PETROVEN en el cual se afirma que el 90 por ciento de las instalaciones de la industria petrolera, cuya administración asumirá el Estado venezolano el 1º de enero de 1976, opera actualmente en óptimas condiciones de servicio. El informe es presentado luego de una inspección a las zonas petroleras.

Diciembre 23

Se constituye la empresa Deltaven, la cual será subsidiaria de la Texas Petroleum Company hasta el 31 de diciembre de 1976. A partir de esta fecha Deltaven sustituirá a la Texas y sus acciones pasarán a PETROVEN. El presidente de la empresa es el señor Francisco Prieto; Carlos Alberto García, Vicepresidente; Angel Francisco Luján, José Díaz Hernández y Nelson Olmedillo, directores.

El doctor Julio César Arreaza, Vicepresidente de PETROVEN, en exposición que hace en Maracaibo con motivo de la I Jornada de Comunicación Social de la región zuliana, expresa que la nacionalización a realizarse el 1º de enero de 1976 crea una gran expectativa. Advierte que en PETROVEN están conscientes del estado actual de la industria y de que existen graves problemas que afrontar. Dice que la nacionalización se ha conducido por un camino de seriedad y realismo, que Venezuela ha hecho arreglos para la asistencia tecnológica y para mantener los contratos de venta a los clientes tradicionales. Señala que esto se hará en contratos por dos años con otros dos de prórroga.

Se designa la Junta Directiva de la empresa Llanoven, la cual sustituirá a la Mobil Oil Company. Queda integrada por Rómulo Quintero, presidente; Enrique Sandino, Vicepresidente; y Eliseo Delgado, Eduardo López Quevedo y Reynaldo Méndez Díaz, directores. En cumplimiento de la Ley de Nacionalización, Llanoven inicia sus actividades el 1º de enero de 1976.

Diciembre 24

En salutación de año nuevo emitida por el CEN de Acción Democrática, se considera que la decisión de nacionalizar la industria petrolera justifica por sí sola la gestión gubernamental. El mensaje entregado por Luis Piñerúa Ordaz, Secretario General de ese partido, llama la atención sobre las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso de nacionalización y exige de los venezolanos una seria disciplina de trabajo, impedir el derroche y hacer esfuerzos para la importante tarea del nuevo desarrollo.

El Secretario General de la Presidencia de la República, doctor Efraín Schacht Aristeguieta, informa que el Consejo de Ministros autoriza la emisión de bonos de la deuda pública nacional hasta por la cantidad de 917 millones de bolívares destinados a cancelar la indemnización que corresponde a las compañías petroleras.

Diciembre 25

Queda constituida la nueva empresa Maravén que sustituye a la Shell, de acuerdo con la Ley de Nacionalización Petrolera. El presidente de esa compañía es el doctor Alberto Quirós Corradi, y directores los señores José Lourdes Carrillo, Carlos E. Castillo, Ramón Cornieles, José Rafael Domínguez, Hugo José Finol, Ricardo Irving Jahn, Rafael Pardo y el licenciado Pablo Reimpell D'Empaire.

Diciembre 26

A partir del 1º de enero de 1976 las acciones de la Phillips Petroleum Company son absorbidas por la empresa Roqueven. Se designa presidente de ésta al doctor Mariano J. Uzcátegui; Luis Alvarez Olavarría, vicepresidente, y directores los señores Vicente A. Marcano, Elves A. Marrón y Aquiles Fernández.

Queda registrada la compañía anónima Vistaven, filial de Mito Juan Concesionaria de Hidrocarburos, que adquiere PETROVEN. La Junta Directiva de Vistaven queda integrada por los ingenieros Lindolfo León, presidente; Luis Ramón Serrano, vicepresidente; Víctor Carvajal, director principal; y Néstor Arteaga, director suplente.

La Superintendencia de Seguros del Ministerio de Fomento aprueba una resolución por la cual autoriza provisionalmente a PETROVEN y sus filiales a contratar los seguros requeridos para la debida protección de los bienes e instalaciones de la nación a cargo de ellas con empresas de reconocida solvencia, debidamente autorizadas para operar en el exterior.

Dentro del V Plan de la Nación el Estado prevé que en los próximos 5 años la industria nacionalizada producirá alrededor de 4.120 millones de barriles de petróleo crudo, a razón de 803 millones de barriles durante los tres primeros años y 805,2 millones durante los dos últimos años del quinquenio. Se estima que la exportación ascenderá a 3.640 millones de barriles durante los 5 años y que las ventas totales, incluyendo el consumo interno, ascenderán a 797 millones de barriles en el mismo lapso.

Se constituye la empresa Amoven que se hará cargo de las acciones que pertenecen a la Anaco Venezuelan Oil Company. La Junta Directiva la preside Floyd W. Boyd Lepage; Aldo J. Boccardo, vicepresidente; y Peteris A. Vanags, director y gerente de operaciones.

Diciembre 27

El presidente de la Creole, señor Robert N. Dolph, en mensaje de navidad a los trabajadores de la empresa, señala que al acatar la decisión soberana de Venezuela de nacionalizar la industria petrolera, la compañía ha dado una demostración del más absoluto respeto por las leyes del país. Agrega que Lagovén mantendrá una continuidad administrativa, conservando la organización, normas, procedimientos y estructuras básicas de la Creole, hecho que considera como un reconocimiento a la eficiencia con que se ha desempeñado esta empresa. Espera que de las conversaciones saldrán acuerdos que permitirán a la Exxon prestar sus servicios a la industria nacionalizada en materia de tecnología y participar en la comercialización internacional del petróleo venezolano.

Según el doctor J. J. González Gorrondona, una de las respuestas que debe dar la comunidad nacional al proceso de nacionalización es emprender un viraje en la estrategia de desarrollo y crear hábitos para fortalecer el ahorro interno contra el despilfarro. En su opinión es necesario hacernos menos dependientes del sector extractivo, y estima que el progreso material del país depende más de los esfuerzos propios que de la ayuda extranjera. Dice que la tecnología externa es indispensable para el desarrollo, pero el aprovechamiento de ella no puede realizarse si no es asimilada adecuadamente por el equipo humano.

Diciembre 28

El Embajador de Cuba en Venezuela, señor Norberto Hernández Curbelo, declara en el aeropuerto internacional de Maiquetía que no existe por el momento ningún tipo de negociaciones entre Cuba y Venezuela para un posible suministro de petróleo venezolano a la isla antillana, señalando que su país tiene negociado el suministro de sus necesidades con la Unión Soviética de acuerdo con un convenio suscrito entre ambos países.

Diciembre 29

Queda constituida la empresa MENEVEN que sustituye a la Mene Grande Oil Company. Esta traspasa sus acciones a PETROVEN el 1º de enero de 1976. La Junta Directiva la preside el doctor Bernardo Díaz; Carlos Romero Zuloaga, vicepresidente; seis directores: Luis Guillermo Arcay, Antonio Franchi, Francisco Guédez, Lorenzo Monti, Néstor Ramírez y Héctor Rivero, y tres suplentes: Valenzio Cataldo, Francisco Pradas y Luis Zerpa.

Diciembre 30

El Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, que es presidido por el diputado José Vargas, emite un mensaje de año

nuevo. Entre otras consideraciones señala que la nacionalización del petróleo debe lograrse no para que aumenten sus ganancias unos pocos inversionistas criollos, sino para hacer realidad la emancipación social y económica de Venezuela. Considera que el proceso nacionalizador trae un cambio profundo no sólo en la estructura de los ingresos fiscales sino en toda la economía del país y ratifica su posición de que ese cambio debe realizarse dentro del concepto y la práctica de democracia política.

El Buró Político del Comité Central del PCV emite una declaración en la cual alerta al país en torno a los peligros que acechan al proceso de nacionalización petrolera, y hace un llamado a la clase obrera y a los sectores antiimperialistas a continuar la lucha por una Venezuela que controle soberanamente su industria. Advierte que las compañías continuarán manipulando mercados y precios para el petróleo nacionalizado, así como el monopolio del transporte de alta rentabilidad. Además expresa que los empleados de confianza de las compañías son mantenidos en sus cargos o ascendidos por PETROVEN y que igualmente queda intacto el monopolio que tienen esas empresas de la tecnología.

Las operaciones efectuadas por las empresas Venezuelan Atlantic Refining Company y Sinclair Venezuelan Oil Company serán asumidas a partir del 1º de enero de 1976 por la empresa Bariven. La Junta Directiva de esta nueva compañía queda constituida por el doctor Domingo Noriega S., presidente; ingeniero Z. A. Sancevic, vicepresidente; señor Miguel A. Santana G., director principal; ingeniero Samuel A. Messulam y José A. Gómez, directores suplentes.

El doctor Bernardo Díaz, presidente de la Mene Grande, declara que el mercado internacional del petróleo ha tenido fluctuaciones muy variables con tendencia a la baja en la demanda y en los precios, de tal suerte que parece difícil que Venezuela pueda colocar 2.200.000 barriles diarios a partir del 1º de enero. La Mene Grande (Meneven) tradicionalmente ha movilizado unos 160.000 barriles diarios y aspira continuar movilizando una cantidad similar. El doctor Alberto Quirós Corradi señala que la Shell (Maraven) mantendrá sus estructuras comerciales para asegurar que los mecanismos de comercialización no se interrumpan y agrega que la cuestión no es buscar nuevos mercados, sino decidir en términos globales cuál es la política comercial que más conviene al país: optimizar el volumen de producción o los precios. La Shell continuará movilizando 500.000 barriles diarios como lo ha hecho hasta ahora.

El mensaje de año nuevo que presenta el presidente de la Shell, Alberto Quirós Corradi, a obreros, empleados y gerentes de esa empresa, señala que la

nacionalización debe verse como un proceso social conveniente e inevitable y no con criterio "alegre y bochinchero del folklorismo". Agrega que debe reconocerse el grado de profesionalismo que tiene una empresa como la Shell al entregar un negocio tan complejo como el del petróleo, con 6 mil obreros, empleados y gerentes.

El Presidente de la República inicia conferencias con los partidos políticos sobre la nacionalización de la industria petrolera. Se tratan aspectos como el de las conversaciones que se adelantan con las compañías petroleras para cubrir necesidades en fases operativas importantes de la industria nacionalizada. También se abordan problemas presupuestarios y el diferendo colombo-venezolano.

El doctor Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos, informa que están listos para ser firmados los acuerdos de comercialización petrolera con varias compañías concesionarias sobre un volumen de 1.500.000 barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados y a los precios de realización existentes en el mercado sin ningún descuento. Estos acuerdos cubrirán las ventas del primer trimestre de 1976. Agrega el ministro que Venezuela había recibido ofertas de las compañías petroleras para comprar hasta 2.360.000 barriles diarios de crudo y productos refinados, pero a condición de que el gobierno les concediera un descuento cuyo promedio por barril podría ser del orden de los 25 centavos de dólar. Sin embargo, el gobierno se negó rotundamente a hacer semejante concesión y mantuvo la posición de que los volúmenes a negociarse con las petroleras sobre la base de un máximo de 2 millones de barriles diarios tendrían que ser a precios de realización. Anuncia además que están listos para ser firmados los convenios de asistencia tecnológica, basados en el reconocimiento del gobierno de una compensación económica equivalente al 1,7 por ciento del valor de realización de cada barril de crudo o derivado del petróleo exportado.

Admitieron las autoridades de Minas e Hidrocarburos que los contratos de venta de crudo que se han concluido con las empresas transnacionales serán firmados antes del 1º de enero de 1976 y los mismos permitirán a Venezuela colocar por lo menos 1.500.000 barriles diarios de petróleo.

Según informe elaborado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el 45 por ciento de las exportaciones de Venezuela de crudos y productos petroleros será destinado al mercado norteamericano. Se señala además que Canadá absorbe el 18,9 por ciento del total de crudos exportados por Venezuela; las Antillas

importan un 34,7 por ciento del crudo; Europa importa un 10,6 por ciento, dentro del cual el Reino Unido representa un 3,6 por ciento y Alemania Occidental un 1,2 por ciento; hacia América Central se exporta el 4,7 por ciento; hacia América del Sur un 3,8 por ciento, y finalmente con destino a Asia un 0,4 por ciento del total de crudo exportado. De acuerdo a este análisis de Minas, es esa la situación al iniciarse la nacionalización de la industria petrolera.

La compañía Shell deposita en el Banco Central de Venezuela la cantidad de 43.679.243,00 bolívares por concepto de ajuste final de las prestaciones sociales de los trabajadores, calculadas hasta el 31 de diciembre del año en curso. Con ese depósito, la cantidad consignada en el Banco Central asciende a 96 millones 448.862,89 bolívares. Además, la Shell en la misma fecha deposita la cantidad de 42.728.994,87 millones de bolívares en diversas instituciones bancarias de Caracas y del interior, calculadas hasta el 31 de diciembre para los trabajadores en planes de fideicomiso. Así la suma depositada por esa empresa asciende a 625 millones 945.140,87 bolívares.

El presidente Carlos Andrés Pérez decreta el Reglamento Nº 2 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, referido a las indemnizaciones.

Diciembre 31

Informa el señor Ramón Petit, Secretario de Trabajo y Reclamos de Fetrahidrocarburos, que los trabajadores petroleros afiliados a esa federación realizarán en el Zumaque Uno un acto cívico de masas para ratificar su respaldo absoluto al proceso de nacionalización. Agrega que quiere alertar al gobierno sobre la estrategia trazada por AGROPET, la cual se ha creado para mantenerse como organismo de presión ante cualquier exigencia o decisión del Estado. Fetrahidrocarburos acepta que AGROPET actúe como cuerpo asesor en la administración empresarial pero no como órgano de presión.

El doctor Pedro Pablo Aguilar, de Copei, declara en Trujillo que como partido de oposición asumirán el compromiso de contribuir con todo aquello que garantice el éxito de la industria petrolera nacionalizada, si es que Venezuela, como consecuencia de esta medida, se viera amenazada por intereses internacionales. Manifiesta que la industria nacionalizada debe estar a salvo además de cualquier apetencia burocrática, agregando que un fracaso de la nacionalización acarrearía graves daños al país y a todos los venezolanos.

El Comité Nacional de Copei emite un amplio documento en el cual ratifica su adhesión a la nacionalización integral, formulando críticas al proceso de nacionalización tal como se ha cumplido. En el mismo documento prohíbe a su militancia asistir a los actos de celebración el 1º de enero. Estima ese partido que tales festejos serán una reproducción de la "romería blanca" realizada en los actos de la nacionalización del hierro y que con ellos se pretende aclamar a la persona del Presidente.

La Dirección Nacional del MIR emite una declaración en la cual señala que la nacionalización de la industria petrolera tiene modestos alcances, y hace un llamado para luchar por la realización de una verdaderamente integral. En el documento denuncia que los consorcios petroleros están chantajeando a Venezuela y ofrecen comprar la producción pero a precios envilecidos, precio cercano a los siete dólares por barril. Agrega en tal sentido que la industria petrolera puede estar en trance de ser nuevamente subastada. Por ello considera carente de sentido todas las celebraciones que se proyectan para el 1º de enero de 1976.

El general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en telegrama dirigido al Presidente de Venezuela, manifiesta su adhesión y aplaude la nacionalización petrolera y del hierro, consideradas por Torres como importantes medidas económicas que orientan el camino a seguir en la lucha por la liberación de las naciones del continente.

Es designada la nueva Directiva de la CVP, quedando presidida por el geólogo Juan Chacín Guzmán; como vicepresidente el doctor Juan José Navarrete, y directores los ingenieros Luis A. Olivares, Rafael S. Macía y Félix Morreo.

Fedecámaras, en documento entregado a la prensa señala que, con la nacionalización petrolera, Venezuela se enfrenta a un desafío, compromiso y disyuntiva, lo cual reclama el aporte responsable de toda la comunidad nacional. Declara el presidente de ese organismo, Antonio Díaz Martínez, que el paso del petróleo a manos del Estado se realiza con franco nacionalismo dentro de un proceso que no lesiona el ordenamiento jurídico y que sortea situaciones difíciles, abriendo una etapa distinta en la vida nacional.

El doctor Jesús A. Paz Galarraga anuncia que oficialmente el MEP en reunión celebrada el 16 de diciembre acuerda que su militancia no asista a los ac-

tos relacionados con la nacionalización petrolera. Por otra parte, el MAS, según declara el diputado Freddy Muñoz, acuerda que su partido como tal no se hará representar en los actos, pero deja en libertad a sus dirigentes que ocupen cargos de representación popular, en organismos oficiales o en instituciones estudiantiles o gremiales, para que asistan en su carácter de representantes de tales organizaciones.

El ex presidente Rómulo Betancourt considera que con la nacionalización petrolera se ha dado un paso histórico y explica que en el curso de las conversaciones sostenidas entre el Ministerio de Minas y los consorcios que operan en el país para el pago de indemnización, se descartó la cancelación por lucro cesante y no se habló de contratos de asociación sino de cooperación técnica durante tres años por contratos que podrán ser renovados. Asegura que Venezuela cuenta con los técnicos capacitados tanto venezolanos como extranjeros que serán transferidos de la actividad privada a la pública.

La Comisión Política Nacional de URD acuerda declinar la invitación formulada por el gobierno nacional para asistir a los actos oficiales con motivo de la nacionalización petrolera. Considera que los actos de Mene Grande aparecen no como la culminación de un proceso unitario y nacionalista, sino como la expresión de una política partidista que persigue promover sus propios intereses electorales.

Monseñor José Alí Lebrún, Arzobispo Coadjutor de Caracas, manifiesta con respecto a la nacionalización petrolera que todo lo que signifique progreso y desarrollo del país tiene que llenar de satisfacción a la Iglesia.

El ministro de Hacienda, doctor Héctor Hurtado, anuncia que las empresas petroleras pagaron la última regalía de la historia petrolera venezolana, correspondiente al mes de diciembre y su monto alcanzó a 502 millones de bolívares. Antes habían cancelado las regalías del mes de noviembre, que sumadas a las de diciembre dan un total de 1.042 millones de bolívares. Estos pagos se adelantaron motivado al acto de nacionalización a partir del 1º de enero de 1976.

El doctor Hernán Anzola, Director General del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, declara que la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela se inicia en momentos en que se aclara la situación de los mercados petroleros y se robustece la posición de los miembros de la OPEP dentro de un nuevo orden económico internacional que beneficiará igualmente al Tercer Mundo.

El ingeniero Jesús Fornerino, Inspector de Hidrocarburos, informa que, por razones de política conservacionista, el Estado Monagas tiene la más baja producción petrolera de su historia para la fecha de la nacionalización el 1º de enero. La producción es de 90 mil barriles diarios, con una merma de unos 45.000 barriles.

Se informa que el Presupuesto Nacional de 1976 alcanza la cifra de 33.167 millones de bolívares, representando una reducción de 8.359 millones de bolívares en relación con el presupuesto de 1975. El presupuesto de 1976 queda afectado por la baja en los ingresos petroleros, los cuales se colocarán en 24.613 millones de bolívares.

1976

Enero 1

A las 7,30 a.m. llega a Mene Grande, Estado Zulia, el Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. Allí iza la bandera nacional en el Zumaque 1 y devela una placa conmemorativa de la nacionalización de la industria petrolera.

En su alocución con motivo del acto de la nacionalización de la industria petrolera, en el Centro Cívico de Cabimas, el Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, señala que "el riesgo histórico lo asumimos con la misma responsabilidad con que decidimos ser libres en el comienzo de nuestra historia". Agrega que el petróleo no es un arma para amenazar o destruir; es una conciencia para corregir desequilibrios e injusticias. Advierte también que Venezuela está abierta al diálogo y dispuesta al cumplimiento de compromisos internacionales, pero que "no quebrantará su deber de defender a todo trance el interés nacional, sin concesiones ni humillaciones a la dignidad del país".

INDICE DE NOMBRES

Acción Democrática (AD) 24, 25, 26, 28, 33, 39, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 58, 65, 89, 92, 123, 124, 125, 130, 142, 143, 144, 151, 158, 160, 161, 166, 170, 171, 193, 198, 240, 246, 255, 256, 257, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 301, 305, 307, 308, 313, 317, 319, 320, 321, 322, 325, 328, 333, 349, 359, 365, 366, 371, 380, 382, 385, 420, 429, 431, 432, 433, 434, 436, 440.
Acedo Toro, Carlos 91.
Acosta, Arnaldo 354.
Acosta Hermoso, Eduardo 118, 144, 278, 323.
Acuña, Máximo 336.
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 224, 226.
AGROPET 33, 175, 194, 219, 234, 236, 238, 246, 251, 255, 268, 269, 270, 275, 284, 291, 296, 324, 338, 357, 361, 363, 445.
Aguerrevere, Leopoldo 200.
Aguilar, Andrés 382.
Aguilar, Pedro Pablo 59, 143, 152, 156, 189, 214, 237, 254, 281, 284, 380, 445.
Aguilera, Cruz Rafael 183, 399.
Akins, James 67.
Al Nahyac, Zayed Bin Sultán 395.
Al Sabah, Salem 81, 380.
Alcalá Ermini, Carlos 85.
Alcalá Sucre, Jesús 303.
Alcock, Frank 134, 135.
Alemania Occidental 445.
Alfonzo Ravard (Gral.), Rafael 320, 376, 387, 391, 400, 407, 420, 423, 433.
Alonzo López, Héctor 258, 259.
Altobachi, Abdulla A. 377.
Altuve Williams, Guillermo 266, 267, 374.
Alvarez Olavarría, Luis 347, 441.
Alvarez Paz, Oswaldo 248, 277, 278, 297, 438.
Alvarez Peñaloza, Rafael 60.
Alvarez Peraza, Francisco 432.
Allais, Henry 340, 341.
América Central 445.
América Latina 57, 91, 94, 142, 150, 171, 265, 285, 296, 374, 379, 383.
Amouzegan, Yamshid 381.
Amoven 441.
Anaco Venezuelan Oil Company 441.
Anderson, William R. 91.
Andueza, José Guillermo 51, 52, 68, 72, 86, 104, 224, 323.
Antoni Paván, Simón 299, 302.
Anzola, Hernán 266, 272, 344, 350, 384, 447.
Anzola Montaubán, Eloy 365.
Añez Di Prisco, Carlos 324.
Añez Fonseca, Ciro 24, 60, 92, 187, 244, 339.
Arabia Saudita 115.
Arcay, Luis Guillermo 49, 442.
Argel 239.
Argelia 126, 320.
Aristiguieta, Gustavo 347.
Armas, Celestino 172, 209, 223, 250, 259, 268, 278, 279, 280, 282, 285, 289, 292, 293, 299, 301, 310, 321, 322, 330, 339, 376, 421, 425, 439.
Armas Camero, Antonio 313, 321.
Arreaza, Julio César 172, 209, 212, 271, 272, 312, 329, 376, 385, 387, 391, 401, 424, 425, 440.
Arteaga, Néstor 441.
Arteaga, Tirso 366.

Aruba 252, 266, 287.
Asia 445.
Asociación Bancaria de Venezuela 262.
Asociación de Profesores UCV 376.
Asociación Pro Venezuela 32, 139, 140, 165, 168, 171, 173, 193, 196, 200, 205, 264, 278, 282, 298, 299, 301, 304, 427.
Asociación Venezolana de Periodistas 60, 103, 207, 226.
Atencio Urdaneta, Darío 202.
Ateneo de Caracas 40, 41.
Auvert, Mario 49.
Avila, Juan 306.
Avila, Rafael 439.
Avila, Rodulfo 99.
Azpúrua, Armando 172.
Azpúrua, Manuel 66.
Azpúrua Ayala, Enrique 59.

Báez Duarte, Fernando 185, 188, 201, 204, 228, 259, 268, 300.
Bagdad 213.
Balaguer, José 181.
Banco Agrícola y Pecuario 109, 128.
Banco Central de Venezuela 103, 108, 109, 160, 220, 221, 238, 288, 338, 349. 353, 357, 363, 389, 390, 392, 398, 409, 438, 445.
Banco de Desarrollo Agropecuario 109, 128, 138.
Banco de Venezuela 390.
Banco Industrial de Venezuela 112.
Banco Mercantil y Agrícola 215, 390.
Banco Nacional de Descuento 427.
Banco Obrero 112.
Banco Unión 390.
Baptista, Federico 154.
Baralt, Omar 329, 334.
Bariven 443.
Barquín, Marcelino 171.
Barreto, Félix 262, 377.
Barrios, Gonzalo 42, 45, 47, 56, 160, 198, 242, 245, 248, 258, 262, 265, 277, 287, 288, 293, 299, 305, 347, 350, 354, 360, 438.
Bártoli, Humberto 309.
Batistini, Pedro 79.
Beaujón, Arístides 45, 56, 62, 361, 362.
Been, Malta 87.
Beirut 106.
Bello, Carlos Manuel 78.
Belloso, Rodolfo 390.
Bereciartu Partidas (Gral.), Manuel J. 394.
Bermúdez, Arístides 306, 351, 353, 354.
Bernardoni, Jesús 39, 43, 64, 65, 77, 132, 364, 406, 414.
Betancourt, Rómulo 16, 25, 26, 101, 107, 288, 357, 358, 360, 361, 391, 435, 447.
Betancourt Vásquez, Julio 91, 169.
Bianco, Jesús María 200, 303.
Blanco, Germán 118, 132.
Blasini, Félix 60.
Boccardo, Aldo 441.
Boesner, Demetrio 50.
Borjas, Argimiro 169.
Borregales, Angel 264.
Borregales, Germán 66, 78.
Boscán, Romer 73.
Boston 171.
Boulton, Andrés 323.
Boyd Lepage, Floyd W. 441.
Brasil 285.
Briceño Salas, Hugo 51.
Brisco, M. M. 93.
Bucot, Cruz José 383
Burelli Rivas, Miguel Angel 73, 132, 271, 391.
Burham, Forbes 264.
Business Week 195.

Caldera, Rafael 23, 28, 45, 50, 62, 69, 83, 84, 100, 101, 102, 109, 112, 113, 115, 125, 128, 139, 142, 143, 145, 150, 151, 153, 154, 158, 167, 250, 275, 288, 294, 296, 297, 298, 350, 355, 356, 369, 372, 402.
Calderón Berti, Humberto 123, 129, 139, 152, 154, 159, 171, 178, 209, 324, 327, 353, 372, 384, 385, 386, 387, 401, 437.
Calvani, Arístides 69, 157, 291, 292.
Calzadilla, Agustín 219.
Cámara de Comercio de Caracas 396.
Cámara de Comercio de Maracaibo 275.

Cámara de Diputados 29, 30, 39, 40, 42, 43, 44, 55, 56, 58, 62, 65, 67, 69, 77, 78, 79, 94, 105, 111, 160, 162, 164, 176, 250, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 282, 289, 291, 292, 294, 295, 298, 312, 317, 319, 325, 328, 330, 339, 341, 349, 370, 400, 408, 410, 416, 421.
Cámara de la Industria del Petróleo, 40, 45, 66, 70, 76, 276, 342, 350, 352, 426.
Cámara del Senado 29, 79, 80, 82, 160, 335, 361, 362, 368, 370, 406.
Canache Mata, Carlos 171, 189, 192, 240, 246, 251, 256, 257, 272, 279, 280, 287, 290, 294, 310, 363, 420.
Canadá 414, 444.
Canard, Raúl 347.
Carbonell Parra, Luis 307.
Cárdenas, Edmundo 200.
Cardozo, Hilarión 45, 87, 127.
Carmona, Isabel 200.
Carnevalli Rangel (Gral), Carlos 172. 174, 180, 190, 206, 386, 397, 404, 409, 412, 415.
Carrasquero, Gilberto 60.
Carrillo, José Lourdes 441.
Carrillo Batalla, Francisco 58, 63.
Carrión, Nereida 310, 344.
Carvajal, Víctor 441.
Carvallo, Georg, Oscar 164.
Casal, José Ignacio 430.
Casanovas, José Domingo 387.
Casas Rincón, César 48, 60.
Castillo, Orlando J. 269.
Castillo de López, Haydeé 172, 206, 233.
Castillo de Otero Silva, María T. 200.
Castro, Fidel 264, 438.
Cataldo, Valenzio 442.
CAVENDES 64.
Cedeño, Arturo 277.
Cepeda, Alfredo 202.
Cervantes del Río, Hugo 163.
Cervini, Angel 200, 337.
Cervini, Reinaldo 89, 135, 167, 171, 172, 173, 198, 200, 205, 220, 225, 242, 254, 264, 281, 297, 320, 377, 387, 389, 399, 403, 427.
CICYP 67.
CIDEZ 336.
Ciliberto, José Angel 325.
Cisneros, Gustavo 424.
CLAT 381.
Colegio de Estudios Internacionales 367.
Colegio de Ingenieros de Venezuela 171, 199, 367.
Colegio de Peritos y Técnicos Industriales de Venezuela 269.
Colina, José 439.
Colmenares, Tulio 318, 342, 350, 352, 364, 398, 403, 404, 405.
Colombia 87, 217.
Colonge, Gustavo 237.
Comisión Presidencial de Reversión Petrolera 30, 31, 164, 171, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 203, 204, 205, 216, 219, 233, 237, 245, 247, 249, 251, 253, 256, 300, 301, 308, 316, 325, 346, 356.
Compañía Shell de Venezuela 39, 41, 55, 64, 71, 74, 75, 76, 85, 99, 104, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 135, 137, 143, 163, 169, 173, 188, 197, 204, 217, 263, 312, 317, 331, 334, 335, 354, 356, 367, 384, 387, 389, 390, 392, 408, 422, 425, 428, 436, 441, 443, 444, 445.
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 33, 51, 167, 171, 193, 194, 239, 243, 269, 302, 308, 312, 315, 330, 332, 333, 334, 336, 340, 351, 363, 378, 383, 385, 390, 394, 442.
Congreso Nacional 16, 21, 28, 29, 33, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 62, 67, 68, 69, 71, 75, 85, 86, 99, 100, 104, 105, 107, 110, 114, 130, 151, 152, 159, 161, 162, 170, 199, 228, 235, 240, 256, 261, 262, 265, 269, 270, 271, 275, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 294, 303, 330, 333, 335, 338, 339, 351, 361, 366, 382, 410, 411, 417, 421, 436.
CONICIT 93, 171, 172.
Consejo Bancario Nacional 171.
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) 296, 299.
Consejo Nacional de Economía 69, 314.

Consejo Nacional de Energía 422.
Consejo Nacional de Universidades 171.
Constitución Nacional 19, 20, 42, 48, 53, 57, 58, 66, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 104, 108, 114, 117, 127, 128, 132, 133, 157, 169, 264, 272, 314, 341, 427.
Contraloría General de la República 413.
Contreras Quintero, Florencio 368, 432.
COPEI 27, 29, 32, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 62, 65, 102, 114, 115, 116, 118, 124, 125, 142, 143, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 198, 236, 246, 249, 257, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 297, 301, 305, 317, 320, 321, 322, 333, 334, 349, 361, 362, 366, 382, 412, 414, 420, 436, 446.
CORDIPLAN 143, 172.
Córdova, Armando 21.
Cornieles, Amado 298.
Cornieles, Ramón 194, 200, 339, 415, 441.
Coronel, Gustavo 177, 181, 184, 189, 223, 246, 247, 255, 268, 320, 361, 369, 377, 388.
Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) 15, 16, 25, 57, 61, 83, 92, 111, 112, 114, 115, 118, 123, 124, 143, 149, 150, 157, 172, 174, 178, 179, 183, 188, 206, 210, 220, 244, 253, 267, 268, 303, 330, 342, 370, 381, 384, 386, 387, 391, 398, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 412, 413, 418, 419, 421, 422, 423, 425, 426, 430, 431, 432, 433.
Corrie, Ricardo 382, 386, 387, 424.
Corte Suprema de Justicia 20, 51, 52, 69, 85, 86, 91, 104, 110, 114, 117, 128, 149, 169, 206, 266, 335, 349, 403, 411, 416, 417, 418, 422.
Cova, Pedro A. 220
Cox, Donald M. 180.
Creole Petroleum Corporation 41, 53, 54, 55, 57, 63, 66, 67, 68, 70, 85, 90, 94, 99, 104, 110, 123, 126, 127, 128, 135, 143, 149, 151, 155, 164, 169, 173, 176, 180, 188, 191, 204, 223, 233, 253, 258, 263, 276, 311, 312, 314, 327, 331, 334, 335, 341, 384, 387, 392, 408, 410, 415, 416, 425, 428, 436, 442.
Cruzada Cívica Nacionalista (CCN) 171, 277, 288, 310, 349, 365, 436.
Cuba 142, 203, 264, 442.
Curazao 252, 266, 287.
Curiel, José 363.
CUTV 149.

Chacín, Juan 345, 446.
Chacón, Américo 322.
Chalbaud Troconis (Gral), Pedro J. 394.
Charlita Muñoz, Rubén 54.
Chirinos, Rubén 189, 237, 396.

D'Ascoli, Carlos 191.
Daboín, Enrique 423.
Dáger, Douglas 58, 59.
Dáger, Jorge 113.
De Armas, Julio 288.
De Liefde, J. J. 55, 74, 76, 115.
De Venanzi, Francisco 298.
De la Plaza, Salvador 17, 21, 302.
De la Souchere, Elena 150.
Del Vecchio, Carlos 317.
Delgado, Eliseo 338, 366, 440.
Deltaven 440.
Departamento de Estado 78, 88, 109, 150, 151.
Di Giácomo, Orestes 281, 364.
Díaz, Bernardo J. 218, 326, 349, 442, 443.
Díaz Martínez, Antonio J. 299, 326, 352, 360, 374, 377, 390, 394, 396, 446.
Díaz Rangel, Eleazar 226.
Diuguid, Lewis H. 101, 102.
Dolph, Robert N. 64, 66, 68, 110, 137, 138, 144, 149, 155, 165, 180, 233, 258, 276, 442.
Domínguez, José Rafael 272, 315, 439, 441.
Dorsey, B. R. 267.
Duno, Pedro 264.

Eberle, Williams 169.
Ecuador 240.
Echeverría, Luis 256.

Echeverría, Martín 363.
Egaña, Manuel R. 17, 40, 49, 69, 77, 84, 116, 273.
Egaña, Manuel Simón 432.
Empresa Mito Juan C. A. 343, 405.
Empresa Nacional Sonatrach 320.
Enmanuelli Llamozas, Carlos 49.
Escovar Salom, Ramón 47, 48, 52, 277, 285, 367, 379.
España 285.
Essenfeld, Martín 421.
Essenfeld y Guevara, Consultores, C. A. 412, 414, 418, 419.
Essis, Alfredo 421.
Estado Anzoátegui 332, 341, 362, 371, 423, 424, 426.
Estado Aragua 63, 67.
Estado Barinas 371.
Estado Bolívar 186.
Estado Falcón 133, 138, 371.
Estado Guárico 341.
Estado Lara 138.
Estado Miranda 63.
Estado Monagas 149.
Estado Zulia 34, 45, 87, 88, 127, 133, 138, 186, 326, 330, 333, 371, 451.
Estados Unidos 58, 68, 69, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 102, 103, 109, 126, 127, 137, 142, 157, 158, 169, 171, 173, 191, 198, 240, 277, 285, 287, 314, 383, 410, 432.
Europa 91, 127, 265, 445.
Exxon 151, 154, 180, 311, 312, 314, 370, 372, 405, 442.

Faraco, Francisco 43, 44, 59, 60, 76, 77, 144.
Faría, Tiberio 189, 291, 361.
FEDEAGRO 343.
Fedecámaras 20, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 57, 59, 70, 73, 76, 78, 80, 92, 105, 111, 151, 152, 167, 171, 173, 187, 191, 192, 193, 194, 196, 205, 207, 236, 241, 242, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 256, 260, 261, 264, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 299, 302, 313, 316, 326, 352, 357, 371, 373, 396, 426, 446.
Fedepetrol 32, 39, 40, 117, 165, 167, 171, 193, 243, 252, 288, 289, 308, 326, 334, 351, 363, 375, 383, 391, 397, 438.
Federación Campesina 426.
Federación de Centros Universitarios 53, 333.
Federación de Colegios de Abogados 171.
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 182, 283, 291, 295, 341, 342, 346, 347, 352, 434.
Federación de Colegios de Economistas 171, 277.
Federación Médica Venezolana 250.
Federación Nacional de Ganaderos 288.
Fernández, Aquiles 441.
Fernández, Eduardo 164, 198, 234, 264, 290, 294, 322, 328, 329, 376.
Fernández, Lorenzo 110, 113, 116, 125, 127, 128, 140, 141, 145.
Fernández M., Orlando 259, 313.
Ferreira, Luis 127.
Ferrer, José 439.
Ferrer, Leonardo 366.
Fetrahidrocarburos 32, 68, 88, 166, 180, 239, 243, 302, 308, 326, 332, 334, 347, 363, 364, 383, 398.
Fetrazulia 326, 329, 330, 332, 333, 334, 340, 353.
Feyide, M. O. 391.
Figarella, Reinaldo J. 332, 338, 366.
Fillingin, Erskin Paul 87, 88, 89.
Financial Times 263.
Fiscalía General de la República 88, 114.
Flores Ortega, Alberto 181, 321, 384.
Fondo de Inversiones 200, 201, 287, 337.
FONINVES 187, 244, 401, 427.
Ford, Gerald 198, 200, 201, 202, 203, 227, 228, 240, 386.
Fornerino, Jesús 448.
Francia 287, 311.
Franchi, Antonio 442.
Freites, Luis A. 200.
Frente de Reorganización Estudiantil de la UCV (FREUCV) 32, 246, 258, 266, 267, 271, 299.
Frente Nacional Democrático (FND) 48, 51.
Frías Calderón, Héctor 78.
Fuenmayor, Juan B. 350.

Fuentes Serrano, Julio 268.
Fuerza Democrática Popular (FDP) 49, 51, 65, 163, 171, 260, 339, 382, 436.
Fuerzas Armadas de Cooperación (FAC) 422.
Fuerzas Armadas Nacionales 264, 382, 394, 429, 431.

Gabaldón Márquez, Joaquín 123, 200.
Galué Navea, Carlos 226, 332, 333, 353, 354.
García, Carlos Alberto 440.
García, Nicanor 437.
García Alvarado, Luis E. 200.
García Coronado, Jesús 216.
García Delgado, J. 344.
García Varona, Jesús 199, 200.
Garriga, Jorge 74.
Garvin, Clifton C. 180, 407.
Gerbasi, José 209.
Giacopini Zárraga, José 184, 187, 276, 306, 399, 412.
Gil Rivera, Casto 336.
Golfo Pérsico 116, 117, 414.
Gómez, José A. 443.
Gómez, Juan Vicente 46.
Gómez Narváez, Pedro 172.
González, Adelso 50.
González, Carlos Julio 118.
González, Dagoberto 59.
González, Godofredo 105, 116, 128, 157, 160, 172, 191, 200, 207, 216, 236, 247, 260, 265, 275, 283, 284, 286, 289, 298, 301, 314, 331, 359, 362, 364, 366, 407, 425, 426, 428, 430.
González, Marcelo 297.
González, Ovidio 259.
González Almarza, Nelson 422.
González Berti, Luis 226.
González Gorrondona, J. J. 69, 315, 331, 442.
González Navarro, José 134, 200, 227.
Goudet, Gonzalo 210.
Gran Bretaña 116, 285.
Graterol Marín, Alejandro 169.
Grooscors, Guido 256.
Guédez, Francisco 426, 442.
Guevara Rafael M. 421.
Gulf Oil Co. 173.
Gullion, Edmund 314.
Guruceaga, Oscar 46, 47, 57, 59.
Gutiérrez, Francisco 177, 386, 387, 393.
Gutiérrez, Pedro 132.
Guyana 264.
Guzmán Reyes, Arévalo 73, 311, 321, 324, 371, 382, 386, 387, 411, 434.

Hammer, Armando 402.
Hassam Albakar, Ahmed 395.
Henríquez, Raúl 306, 351, 353.
Henríquez, Rómulo 156, 200, 266, 293, 295, 330, 341, 379, 422.
Hernández, Cecilia 216.
Hernández, Johnny 332, 338, 362, 366, 390.
Hernández, José Alejandro 380.
Hernández, Luis 200.
Hernández Acosta, Valentín 166, 170, 172, 176, 178, 188, 189, 196, 198, 201, 202, 213, 239, 247, 263, 271, 292, 293, 308, 320, 327, 330, 331, 335, 340, 346, 347, 348, 353, 360, 370, 372, 373, 381, 382, 386, 387, 391, 392, 397, 401, 403, 404, 408, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 425, 432, 434, 436, 437, 444.
Hernández Curbelo, Norberto 442.
Hernández Grisanti, Arturo 39, 42, 44, 45, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 92, 94, 100, 105, 143, 144, 162, 164, 168, 171, 172, 175, 180, 184, 185, 202, 207, 219, 233, 236, 241, 253, 259, 319, 322, 323, 403, 429, 430, 433, 435.
Hernández Rausseo, Juan E. 332.
Herrera, Felipe 265.
Herrera Campins, Luis 56, 412.
Herrera Oropeza, José 66, 227, 228.
Houtha Kker, Handrick S. 91.
Howe, Richard A. 261, 366, 369.
Hurtado, Héctor 172, 215, 285, 348, 349, 391, 395, 396, 400, 408, 412, 415, 428, 433, 447.
Hurtado Díaz, Oscar 277.

Ibarra, José Gregorio 271.
IESA 136.

Illaramendy Ramón 81.
Imery, Ramón 60, 76, 248.
INCE 386.
Indonesia 39, 91, 320.
Instituto Agrario Nacional (IAN) 426.
Instituto Venezolano del Consumidor 67, 71.
International Petroleum 126, 384.
INVEPET 153, 287, 308, 359, 368, 401.
Irán 79, 128.
Irving Jahn, Ricardo 441.
Irwin, Carlos T. 381.
Irwin, John 109.
Italia 311.

Japón 91, 127, 203, 311.
Jobert, Michel 163.
Jones Parra, Juan 78, 307, 382, 383, 386, 387.

Kadafi, Muammar 385.
Kapo, G. 344.
Kasimirov, Vladimir 365, 376.
Key N., Carlos E. 170
Kissinger, Henry 225.
Kuwait 81, 267

La Riva Araujo, Edecio 81, 257.
Lachman, J. A. 175.
Lagoven 370, 380, 381, 387, 410, 437.
Lairet, Germán 200, 242, 263, 313, 322, 363, 376, 382.
Lamberti, Blas 82.
Lander Márquez, Carlos 53, 55, 85, 305.
Lares Martínez, Eloy 47, 48, 80.
Larrazábal, Radamés 59, 162, 172, 174. 190, 195, 203, 204, 222, 236, 240, 249, 266, 280, 290, 301, 365, 371, 416.
Lauría, Carmelo 172, 328, 377, 392.
Laya, Argelia 313.
Layrisse, Miguel 131, 172.
Le Monde 373.
Leal, Edgard A. 376.
Leandro Mora, Reinaldo 418.
Lebrún, Monseñor José Alí 447.
Ledezma, Manuel Vicente 373.
Lee, James 174.
Lefcovich, Juan 83.
Léidenz, Antonio 45, 50, 65.
León, Lindolfo 441.
León, Pastor 99.
León, Rafael 329.
León Ponte, Odoardo 189, 237, 411.
Leoni, Raúl 55.
Lepage, Octavio 124, 125, 130, 161, 210, 227, 237, 308, 372, 382.
Ley de Hidrocarburos 18, 19, 20, 42, 43, 46, 48, 54, 57, 58, 66, 71, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 104, 119, 165, 169, 273, 427.
Ley de Impuesto sobre la Renta 54.
Ley de Mercado de Capitales 71.
Ley del Trabajo 327, 353, 402.
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos 34, 209, 247, 323, 349, 370, 371, 375, 376, 379, 394, 445.
Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos 18, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 75, 77, 78, 82, 84, 85, 100, 102, 107, 108, 114, 116, 117, 124, 224, 430, 435.
Libia 91, 126.
Liga Socialista 219, 317, 326.
Lizardi, Luis A. 138, 283, 295, 388, 426.
Londres 55, 197.
López, Hermógenes 81, 304.
López, Rolando 439.
López Michelsen, Alfonso 351.
López Quevedo, Eduardo 440.
Losada, Benito Raúl 376.
Losada Aldana, Ramón 187, 282.
Lovera, Virgilio 228.
Ludovich Durand, Luis 91, 169.
Lugo, Rafael 345.
Luján, Angel F. 440.
Lumpkin, Thomas 174.
Luna, Carlos 315, 330.
Lusinchi, Jaime 164, 235, 281, 285.
Luzardo, Olga 104.
Llanoven 387, 440.

McClellan, Andrem 386.

McClintock, Robert 319.
Macía, Rafael S. 446.
Machado, Antonio 68, 88, 347, 363, 383, 386, 387, 389, 398, 419.
Machado, Eduardo 200, 286.
Machado, Gustavo 199, 306.
Machado Gómez, Alfredo 58.
Machado Zuloaga, Oscar 80, 331.
Malavé Mata, Héctor 21, 22, 29n, 84, 136, 163, 169, 266, 267, 271.
Malavé Villalba, Augusto 172, 180, 243, 330, 394.
Mantellini, Luis 367.
Mantellini, Pedro J. 45, 63, 64, 66, 76, 90.
Mantellini, Ramón 393.
Mantilla, Wenceslao 334, 353.
Manzo González, José 213, 242, 292, 359, 360, 361, 362.
Maraven 370, 380, 381, 387, 441, 443.
Marcano, Aquiles 382.
Marcano, Vicente A. 441.
Márquez, Abdelkader 105.
Márquez, Jesús R. 289.
Márquez, Numa 306.
Márquez, Pedro 137, 141, 153, 184, 343, 369.
Márquez, Pompeyo 31, 113, 125, 129, 136, 137, 151, 159, 165, 166, 172, 182, 201, 235, 247, 251, 253, 265, 298, 330, 331, 334, 353, 356, 401, 431.
Marrón, Elves A. 441.
Martí, Rafael 297, 321.
Martín, Américo 163, 166, 199, 249, 266, 268, 290, 298, 306, 422, 432.
Martín, David R. 414.
Martínez, Aníbal 93, 104, 143, 144, 172, 178, 213, 260, 292, 314, 320, 411, 419.
Martínez, Eugenio 297.
Martínez, Marcías 103.
Martínez, Miguel 99, 383.
Martínez, Rafael Eloy 313.
Martínez, Siuberto 39, 40, 41, 55, 59, 64, 65, 73, 160, 165, 198, 199, 203, 249, 250, 265, 285, 290, 295, 300, 366, 408, 413, 414, 418, 432.
Martínez Espino, Félix 200.
Martínez R., Luis 383.
Martorano B., José 131, 244, 325, 386, 387, 401, 407.
Matos Azócar, Luis 395.
Mayobre, José Antonio 345, 435.
Mayz Vallenilla, Ernesto 104.
Maza Zavala, D. F. 21, 22, 30, 94, 130, 158, 169, 172, 187, 192, 235, 248, 259, 260, 302, 304, 313, 346.
Medina, José Ramón 404, 405.
Mejía Alarcón, Pedro E. 21.
Méndez, J. 393.
Méndez Arocha, Alberto 179.
Méndez Díaz, Reinaldo 440.
Mendoza, Eugenio 302.
Mendoza, Fernando 347.
Mendoza, Luis Ignacio 169.
Mendoza Goiticoa, Carlos 342.
Mene Grande Oil Co. 39, 65, 85, 99, 104, 111, 127, 128, 169, 188, 204, 218, 312, 341, 366, 384, 387, 408, 423, 426, 442, 443, 447.
Meneven 387, 442, 443.
Messori, César 291, 292, 369.
Messulam, Samuel A. 443.
México 39, 163, 238, 256, 379.
Meyer, Charles A. 87, 89, 90.
Meza Espinosa, Salom 305.
Michelena, Ramsey 135.
Michelena, Santos 169.
Mieres, Francisco 263.
Miguelino, Raúl 291.
Mijares, Augusto 300.
Ministerio de Estado para la Planificación 212.
Ministerio de Fomento 172.
Ministerio de Hacienda 93, 107, 128, 172, 210, 212.
Ministerio de la Defensa 172, 422.
Ministerio de Minas e Hidrocarburos 54, 72, 88, 89, 90, 94, 99, 105, 112, 126, 129, 143, 149, 150, 172, 175, 176, 179, 206, 210, 212, 244, 261, 262, 268, 271, 278, 288, 332, 342, 352, 359, 369, 375, 376, 384, 387, 392, 397, 398, 401, 405, 410, 416, 419, 422, 423, 428, 447.
Ministerio de Relaciones Exteriores 399.
Ministerio del Trabajo 88.
Miquilarena, Raúl 255.
Miralles, Félix 172.

Mirs, H. 127.
Mito Juan, Concesionaria de Hidrocarburos 50, 65, 72, 118, 126, 408, 441.
Moanack, Said 60.
Mobil Oil Company 104, 106, 111, 128, 135, 169, 173, 176, 188, 204, 215, 261, 262, 312, 317, 332, 337, 338, 340, 341, 344, 363, 366, 387, 397, 422, 424, 440.
Moleiro, Moisés, 249, 266, 373, 379, 385, 422.
Molina, Oscar, 181.
Moncayo, Alí 333.
Monsalve Casado, Ezequiel, 172, 180.
Montaña Madrid (Gral.), Valentín 172. 217.
Montaño, Pedro 333.
Montero, Rafael 411.
Monterola, Andrés 114.
Monti, Lorenzo 442.
Monti, Luis 200.
Montiel Ortega, Leonardo 74, 80, 101, 104, 107, 126, 153, 164, 172, 173, 180, 200, 208, 240, 256, 260, 266, 269, 283, 285, 286, 295, 350, 365.
Montinos Monró, Eduardo 169.
Morales, Martín 401.
Morales Bello, David 253, 285, 305, 315, 362.
Moreno, Francisco 255.
Morón, Guillermo 106.
Morreo, Félix 181, 344, 389, 408, 446.
Moscú 57, 176.
Movimiento Al Socialismo (MAS) 31, 32, 53, 61, 113, 125, 134, 135, 151, 159, 162, 165, 166, 171, 193, 198, 214, 247, 253, 255, 259, 261, 266, 279, 282, 283, 288, 291, 301, 304, 310, 313, 317, 319, 333, 336, 337, 339, 349, 353, 356, 364, 366, 372, 382, 432, 436, 447.
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 32, 156, 166, 198, 251, 252, 260, 288, 290, 293, 301, 302, 304, 310, 317, 326, 339, 373, 436, 446.
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) 29, 32, 34, 39, 41, 44, 49, 50, 51, 54, 65, 73, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 193, 198, 260, 261, 281, 283, 288, 294, 297, 301, 304, 305, 310, 313, 317, 318, 325, 326, 332, 333, 334, 339, 349, 382, 429, 436.
Muci Abraham, José 265, 274, 318, 323, 373, 436.
Mujica, Héctor 90.
Muñoz, Freddy 162, 167, 172, 178, 184, 195, 196, 199, 200, 204, 207, 218, 238, 259, 275, 278, 279, 280, 290, 292, 293, 294, 295, 301, 305, 310, 313, 317, 330, 341, 353, 402, 425, 432, 433, 447.
Muñoz, Guillermo 68.

Naranjo, Osty, César 87.
Navarrete, Jorge E. 379.
Navarrete Senior, Juan J. 49, 57, 66, 446.
Neri, José Rafael 187.
Neri, Nerio 66.
Nieto Gil, Gustavo 393.
Nigeria, 65, 91, 383.
Nixon, Richard 67, 91, 142, 169.
Noriega, Domingo 66, 443.
Novoa Montero, Dimas 238.
Nueva York 55, 113, 155, 158, 164, 224.
Núñez, Jesús 333.
Núñez, Luis Teófilo 269.
Núñez Tenorio, J. R. 264
Nzugen Thi Binh 386.

Oberto, Luis Enrique 111, 128, 129, 134, 172, 200, 205, 208, 233, 318, 324.
Occidental Petroleum 397, 402, 403, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 421.
Off Shore 127.
Olavarría, Jorge 64, 66.
Olivares, Luis A. 446.
Olivo, Francisco 167, 168.
Olmedillo, Nelson 440.
ONU 171.
OPINA 349, 436.
Ordaz, Ismael 383, 386, 387.
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 25, 29, 79, 86, 104, 106, 115, 117, 181, 197, 199, 200, 207, 215, 218, 234, 239, 240, 252, 269, 300, 304, 355, 357, 368, 377, 379, 383, 384, 385, 396, 415, 437, 447.

Organización Primero de Mayo 326.
Orinoco Mines Co. 64.
ORIT 381.
Ortega, Angel Reinaldo 316.
Ortiz, Alexis 258, 266, 271, 299.

Pachano, Añez, Régulo 439.
Pacheco, José Rafael 340.
Padilla Jones, Pedro L. 436.
Paiva, Rafael 277.
Paiva Reinoso, Antonio 309.
Palacios, Alonso 313.
Palacios Blanco, Esteban 169
Pantín Herrera, José 392.
Pantoja, Noel 388, 404.
Pardo, Carlos Arturo 336.
Pardo, Rafael 441.
Pardo Stolk, Edgar 435.
Pareles, Pedro Miguel 112.
París, Adolfo 338, 361.
Parra, Alirio 172, 376, 415.
Parra Aranguren, Gonzalo 91, 169.
Parra Luzardo, Gastón 172, 251, 393.
Partido Comunista de Venezuela (PCV) 32, 41, 49, 51, 65, 104, 162, 163, 193, 195, 198, 222, 253, 260, 266, 288, 290, 301, 310, 317, 326, 339, 349, 371, 382, 416, 433.
Paúl Delfino, Alfredo 167, 172, 178, 192, 204, 205, 208, 212, 241, 244.
Paz Galarraga, Jesús A. 34n, 50, 73, 79, 81, 114, 123, 124, 125, 130, 139, 159, 170, 171, 172, 179, 191, 200, 237, 240, 249, 261, 296, 319, 325, 361, 397, 429, 431, 446.
Pelzi, Feltri, Mario 169.
Peñaloza, Humberto 93, 118, 172, 184, 197, 201, 206, 271, 272, 304, 349, 368, 391, 406, 407.
Peñalver, Manuel 213, 259, 306, 312, 323, 329, 376, 395, 427.
Pérez, Adelys 219.
Pérez, Carlos Andrés 24, 25, 28, 34, 58, 63, 89, 92, 125, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 151, 152, 155, 157, 158, 163, 171, 172, 173, 174, 177, 184, 196, 199, 201, 212, 216, 217, 228, 236, 238, 240, 241, 243, 245, 249, 250, 256, 258, 285, 294, 309, 314, 325, 326, 343, 351, 371, 375, 376, 377, 379, 385, 387, 390, 391, 395, 399, 417, 422, 429, 445, 451.
Pérez Alfonzo, Juan Pablo 49, 50, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 79, 116, 144, 150, 165, 243, 246, 252, 260, 276.
Pérez Alvarez, Rafael 296, 357.
Pérez de la Cova, Carlos 285.
Pérez Díaz, José A. 67.
Pérez Dupuy, Enrique 19, 70.
Pérez Guerrero, Manuel 320.
Pérez Guevara, Martín 422.
Pérez Jiménez, Marcos 25, 139.
Pérez La Salvia, Hugo 23, 28, 40, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 62, 67, 69, 79, 82, 83, 86, 89, 92, 93, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 114, 115, 117, 119, 123, 124, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 149, 150, 152, 155, 156, 165, 166, 170, 172, 174, 198, 233, 245, 274, 279, 280, 286, 355.
Pérez Marcano, Héctor 162, 290, 373.
Pérez Marcano, Rafael 277.
Petit, Ramón 88, 332, 334, 445.
Petkoff, Teodoro 235.
Petróleos de Venezuela (PETROVEN) 34, 326, 334, 343, 345, 347, 348, 349, 369, 370, 372, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 398, 400, 401, 404, 405, 406, 408, 410, 416, 417, 420, 422, 423, 426, 427, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443.
Petrolera Las Mercedes 406, 408.
Petrolera Mito Juan, C. A. 343.
Petroleum Intelligence Weekly 428, 430.
Petzall, Wolf 66.
Phelps, John 67, 328.
Phillips Petroleum Company 88, 341, 408, 441.
Picón Rodríguez, Magdalena 78.
Piere, César 130.
Pietri, Antonio 200.
Pietri Martínez, Carlos 374.
Piñerúa, Carlos A. 39, 90, 99, 116, 118, 123, 167, 172, 175, 193, 197, 212, 215, 221, 238, 243, 248, 249, 256, 260, 288,

301, 306, 308, 316, 329, 363, 375, 378, 383, 391, 397, 402, 424, 437, 438.
Piñerúa Ordaz, Luis 359, 364, 367, 440.
Pirela, Luis 306.
Pizani, Rafael 311.
Plaz Bruzual, Luis 386, 387.
Policía Técnica Judicial (PTJ) 40, 87, 111, 332, 366, 390.
Porras, Julio 118.
Pradas, Francisco, 442.
Pravda 57, 176, 360.
Prebisch, Raúl 265.
Prieto, Francisco 440.
Prieto Figueroa, Luis Beltrán 50, 160, 193, 203, 260, 264, 294, 296, 298, 360, 365, 385, 429.
Procuraduría General de la República 117, 286, 424.
Pulgar, Juvencio 313, 336, 363, 366.
Pulido Mora, Iván 382, 420.

Quero Morales, Constantino 287, 337.
Quintero, Guillermo 216.
Quintero, Heliodoro 211.
Quintero, Rodolfo 142.
Quintero, Rómulo 440.
Quirós Corradi, Alberto 138, 156, 176, 197, 211, 212, 213, 215, 219, 221, 229, 255, 286, 314, 328, 335, 343, 348, 351, 356, 359, 380, 381, 400, 441, 443.

Rachadel, Juan José 85.
Ramírez, Néstor 442.
Ramírez Cubillán, Gonzalo 90, 198.
Ramírez López, Eduardo 388, 389, 417.
Ramírez Torres, Alfredo 47.
Ramos, Emilio 353.
Ramos Martínez (Gral.), Luis 312.
Ramsey, Lewis A. 174.
Rangel, Arístides 49.
Rangel, Carlos Guillermo 105, 224, 225, 338, 376, 398, 429.
Rangel, Domingo Alberto 108, 200, 264.
Rangel, José Vicente 87, 113, 133, 235, 260, 309, 313, 328, 363, 380, 402.
Rangel Mantilla, Ramón 334.
Rangel Romberg, Arístides 169.
Recio, Marino 71, 189.
Reimpell, Pablo 237, 441.
Reino Unido 445.
Rengifo, Carlos, 189, 237.
Reza Pahlevi, Mohamed 395.
Rigores (Gral.), Bernardo Antonio 394.
Rincón, Alfredo 118.
Rincón, Luis Alberto 51.
Ríos, Antonio 224.
Riquezes, Héctor 237, 255, 411.
Rivero, Héctor 442.
Roa, Pedro 344.
Roche, Marcel 341.
Rodríguez, Alcides 163, 268, 295, 298, 317, 322, 330, 432.
Rodríguez, Alejandro 211.
Rodríguez, Gumersindo 172, 224, 266, 297, 391, 413, 431.
Rodríguez, Jorge 219.
Rodríguez Eraso, Guillermo 41, 66, 70, 153, 155, 180, 233, 312, 335, 380, 381, 437.
Rodríguez Molina, Miguel 412.
Rodríguez Subero (Cnel.), José 422.
Rodríguez Viso, Miguel 138.
Rojas, Elio 317.
Rojas Boccalandro, Oscar 184, 188, 206, 327.
Romero, Denzil 168, 318, 342, 350, 352, 358, 364, 398, 403, 404, 405.
Romero Zuloaga, Carlos 442.
Rondón Lovera, César 264.
Roqueven 441.
Rosas Brussin, Marcos 310, 344.
Rossi Guerrero, Félix 306, 410, 432.
Royal Dutch Shell 55, 163, 370.
Ruiz Polanco, Ramón 391.
Rumania 291, 292.
Rumbos, Omar 50, 56, 59, 90.
Ruptura 326.
Rusia 311.

Sáder Pérez, Rubén 21, 40, 41, 49, 61, 239, 408, 409, 411, 413, 417, 418, 421.
Sáez Mérida, Simón 156.
Salas, Guillermo J. 182.
Salas Castillo, Pablo 198, 277, 290, 295, 321, 341.
Salazar Zamora, Lorenzo 163, 295.
Salom, Carmelo 299.
Sancevic, Z. A. 443.

Sánchez, Enrique 50.
Sánchez Bernal, Angel, 42, 58, 64, 268.
Sánchez Bueno, Armando 56, 90, 285.
Sánchez Melián, Jorge 277.
Sandino, Enrique 440.
Sandrea, Rafael 93, 153, 169, 181.
Santaella, Héctor 300.
Santamaría, Francisco 394.
Santana, Miguel A. 443.
Santiago, Alberto 183.
Sarmiento Núñez, Gabriel 248.
Schacht Aristiguieta, Efraín 374, 440.
Segnini La Cruz, Pedro 48, 74, 112, 131, 133.
SELA 265.
Sepúlveda, Gonzalo, 344, 358.
Serrano, Luis Ramón 441.
Shlaudeman, Harry W. 258.
Silva, Carlos Rafael 172, 342.
Silva Calderón, Alvaro 44, 49, 54, 59, 60, 66, 75, 76, 86, 109, 110, 144, 165, 178, 184, 185, 192, 204, 205, 207, 208, 211, 236, 249, 260, 282, 283, 285, 435.
Sinclair Venezuelan Oil 86, 91, 104, 169, 366, 443.
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 73, 74, 169, 271.
Soriano, Hernán 132.
Sosa Pietri, Andrés 213, 259, 343, 361, 362, 364, 407, 428.
Sosa Ríos, Ricardo 200.
Sosa Rodríguez, Carlos 435.
Sosa Rodríguez, Julio 69, 84, 91, 94, 102, 103, 345, 376, 387.
Soto Guédez, Héctor 200.
Soto Tamayo (Gral.), Carlos 39.
Spósito Jiménez, Emilio 347, 366.
Standard Oil Company 55, 93.
Suárez, Luis Guillermo 386.
Suárez, Max 71, 189.
Subero Sosa, Armando 169.
Sucre Trías, Juan M. 177.
Sugar, Ernesto 54, 437.
Superior Oil Company 302, 422.

Tarbes Llanos, J. A. 437.
Tejera París, Enrique 142, 143, 144, 172, 307.
Tenorio Sifontes, Ramón 151, 164, 192, 200, 203, 242, 259, 269, 286, 290, 295, 313, 319, 329, 350, 352, 363, 376, 425.
Tepedino, Antonio 200.
Tercer Mundo 29n, 378, 385, 395, 437, 447.
Tesorero, N. 344.
Texaco 127, 302, 341, 422.
Texas Petroleum 85, 88, 169, 384, 440.
The Daily Journal 61.
The New York Times 68, 377.
The Wall Street Journal 94, 186, 189, 405.
The Washington Post 101, 102, 142.
Thomas, Hugh 435.
Time 400.
Tinoco, Pedro 33, 61, 76, 140, 235, 255, 262, 302, 370, 402.
Tokio 198, 225.
Toro Hardy, José 106.
Torrealba, Laureano 336, 344.
Torrealba Alvarez, Raúl 162.
Torres, Juan José 446.
Torrijos, Omar 351.
Tosta, Virgilio 439.
Tovar, Luis 72, 154, 172.
Travieso Paúl, Armando 169.
Tudela, Rafael 33, 172, 186, 187, 215, 302, 303, 307, 414, 415.
Tugues, Luis 310, 311.
Tugwell, Franklin 387.

Unión Patronal Venezolana de Comercio 72, 195, 257, 299.
Unión Republicana Democrática (URD) 32, 39, 41, 44, 49, 50, 51, 94, 101, 151, 164, 171, 180, 193, 198, 252, 254, 259, 269, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 294, 301, 304, 309, 310, 313, 320, 322, 339, 349, 350, 436, 447.
Unión Soviética (URSS) 91, 254, 281, 365, 442.
Universidad Central de Venezuela 130, 187, 245, 252, 259, 271, 297, 383.
Universidad de Carabobo 137.
Universidad de Los Andes 226.

Universidad del Zulia 103, 251, 333, 340, 439.
Universidad Simón Bolívar 104, 130, 131, 383.
Urbieta, Jesús 329, 333.
Urbina, Antonio José 268, 353.
Urbina, Julio 90.
Urdaneta, Renato 200, 437.
Uslar Pietri, Arturo 80, 82, 199, 200.
Uzcátegui, Mariano J. 441.

Valedón, Jesús 353.
Valery, Maurice 118, 124, 413.
Vallejo, José Beltrán 193, 333.
Vallenilla, Luis 52, 62, 64, 66, 78, 194, 371.
Vanags, Peteris A. 441.
Vanguardia Comunista 286, 317, 326.
Varela, Gustavo 366.
Vargas, José 208, 330, 336, 348, 383, 442.
Vargas, Víctor 333.
Vásquez, Enrique 175.
Vásquez, Nelson 347.
Vásquez, Siro 151, 180, 239.
Venezuela 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 39, 40, 46, 47, 50, 51, 53, 56, 57, 61, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 106, 107, 110, 115, 117, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 137, 140, 142, 157, 158, 163, 171, 173, 181, 186, 196, 199, 203, 207, 218, 225, 240, 256, 258, 261, 264, 265, 266, 267, 271, 275, 277, 280, 281, 284, 285, 287, 291, 294, 296, 297, 298, 307, 336, 350, 368, 373, 377, 381, 386, 393, 399, 403, 410, 419, 426, 431, 438, 440, 442, 443, 444.
Venezuelan Atlantic Refining Co. 91, 128, 169, 408, 443.
Vengref 366.
Vera Delgado, Ricardo 350, 358, 388.
Vidal, Humberto 234.
Viena 79.
Vietnam 386.
Vilera del Corral, Gustavo A. 332, 338.
Villalba, Jóvito 50, 53, 62, 63, 83, 100, 139, 141, 286, 293, 318.
Villarroel, Aquiles D. 345.
Villegas, Juan A. 68.
Visión 419.
Vistaven 441.
Vivas Terán, Abdón 118, 132, 160, 167, 175, 176, 177, 192, 202, 203, 241, 259, 275, 278, 279, 280, 286, 299, 313, 315, 324, 325, 330, 382, 405.

Wagner, Gerrit A. 163.
Walter, George H. 395.
Washington 69, 81, 84, 91, 94, 129, 142, 150, 404.
Wetherell, Kenneth 71, 137, 144, 153, 218.
Williams, Eric 263.
Wix, R. 344.

Yugoslavia 281, 395.

Zahlout Gómez, Alejandro 172, 289.
Zambrano, Angel 59.
Zambrano, Aureo E. 179.
Zarb, Frank 379.
Zarikian, Esteban 322.
Zerpa, Luis 442.

INDICE

Pág.

PREÁMBULO

Héctor Malavé Mata 5

Proceso de la nacionalización petrolera en Venezuela

Irene Rodríguez Gallad 11

1971 37

1972 97

1973 121

1974 147

1975 231

1976 449

INDICE DE NOMBRES 453

IMPRESO DURANTE DICIEMBRE DE 1977
EN LA IMPRENTA UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

El debate en torno al rescate estatal del petróleo en Venezuela, desde el proyecto de ley de reversión petrolera (1971) hasta la sanción de la Ley que reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (1975), incluyó las más diversas opiniones emitidas por voceros gubernamentales, partidos políticos, compañías concesionarias extranjeras, confederaciones de trabajadores, organismos patronales, gremios profesionales, movimiento estudiantil y destacadas personalidades del país, además de algunas opiniones e informaciones internacionales que reflejaron en gran parte la posición que sobre la materia mantuvieron las grandes corporaciones transnacionales involucradas en el proceso de nacionalización de aquella actividad. Los juicios, criterios e informaciones expresados al respecto confirman el carácter controversial de ese proceso. De allí el amplio espectro de argumentos y razones compilados y dispuestos en este libro conforme a un ordenamiento cronológico que muestra la secuencia registrada en las fuentes hemerográficas básicamente consultadas.

Se advertirá en este libro una abundancia de opiniones y predicamentos, muchos expresados en tono polémico y a veces en sucesión de réplicas y críticas, según fuese la concepción o militancia ideológica de sus emisores, aunque, por responsabilidad sólo imputable a la conveniencia editorial de los principales órganos del periodismo impreso consultados, las opiniones acerca de ese proceso lucen siempre repartidas sin equidad entre los planteamientos gubernamentales y los argumentos esgrimidos por los partidos políticos de oposición. Por ejercicio de una ética de imparcialidad, los autores, la profesora Irene Rodríguez Gallad y el técnico de investigación Francisco Yánez, ambos adscritos al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, son los primeros en lamentar esta injusticia informativa, no sin señalar su imposibilidad de superar este escollo encontrado en las páginas de los propios medios comunicacionales.

imprenta universitaria

Carátula: MAURO BELLO